BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VII LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY | **21 de octubre de 2002** | **Núm. 104-9**

ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

121/000104 Orgánica de Calidad de la Educación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (núm. expte. 121/000104).

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2002.—P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, **Piedad García-Escudero Márquez.**

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda de totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2002.—**Joan Puigcercós i Boixassa,** Diputado.—**Francisco Rodríguez Sánchez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan Puigcercós i Boixassa
Grupo Parlamentario Mixto

JUSTIFICACIÓN

Esquerra Republicana de Catalunya presenta una enmienda a la totalidad al presente Proyecto de Ley por considerar que no detecta una parte significativa de los problemas que hoy se plantean en el sistema educativo, ni plantea soluciones nuevas a aquellos detectados. «Por ello consideramos que es necesario un debate sereno con el conjunto de la comunidad educativa para llegar a un pacto social para la educación, con el objetivo de mejorar el sistema educativo sobre la base de una educación pública de calidad.

Así, las razones por las cuales pedimos la devolución de este texto son de diferente naturaleza y pueden ser agrupadas y resumidas en las siguientes:

Por razones políticas:

1. Porque la política social y económica del PP, de concepción radicalmente neoliberal, está desmantelando el incipiente Estado de bienestar construido con esfuerzo durante la década de los ochenta y principios

de los noventa. Y es en esta línea privatizadora y desmanteladora de servicios públicos esenciales que hay que situar el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

2. Porque los Consells Escolars de Catalunya i de les Illes Balears, la FAPAC, sindicatos de alumnado, la mayoría de sindicatos del profesorado y los MRP, así como también la mayoría de partidos políticos y Consejos Escolares del Estado español, se han manifestado claramente en contra.

Por razones nacionales:

1. Porque invade numerosas competencias y constituye para Catalunya un gran retroceso de la capacidad para llevar a cabo una política educativa propia, cuando lo que Catalunya reclama y necesita es ir más allá del actual marco estatutario para disponer de las competencias exclusivas en educación y poder adecuar el sistema educativo a las necesidades específicas de la ciudadanía catalana.

2. Porque la lengua catalana, incluida como materia obligatoria en los currícula de la LOGSE, ahora se queda como una simple opcionalidad complementaria, mientras introduce un artículo específico para garantizar el derecho del alumnado a recibir la enseñanza en lengua castellana.

Por razones sociales:

1. Porque consolida y profundiza aún más en la división cada vez más clasista de nuestro sistema educativo de la triple red educativa: centros públicos, privados concertados y privados.

2. Porque sitúa la red pública en una posición todavía más vulnerable y desfavorable, con el peligro de convertirse definitivamente en un modelo educativo de carácter asistencial, con altas concentraciones de alumnado con NEE.

3. Porque buscando como objetivo fundamental de calidad la excelencia, abandona la función educativa compensatoria de las desigualdades sociales.

4. Porque concierta de forma generalizada la educación infantil 3-6, sin ninguna contrapartida a cambio.

5. Porque convierte la Formación Profesional en la alternativa al fracaso escolar, cosa que comportará regresión a la FP devaluada de la prerreforma.

6. Porque si la institución escolar constituye en sí misma un modelo educativo de funcionamiento social para el alumnado, el nuevo modelo que se nos propone está muy lejos del carácter democrático, responsable, participativo y cooperativo que tendría que regir.

7. Porque introduce la religión como materia escolar, hecho contradictorio con los principios de un Estado aconfesional.

8. Porque puede significar la liquidación de la educación pública de personas adultas y la consagración de un modelo concertado y especializado en la atención del fracaso escolar.

9. Porque pretende establecer criterios de mercado para la educación, que son contradictorios e incompatibles con las políticas sociales universalistas y de justicia social propia de un Estado del Bienestar europeo.

Por razones educativas:

1. Porque no se ha llevado a cabo una evaluación con garantía científica y seria del actual sistema educativo que haya permitido la detección objetiva de los déficit o las disfunciones del sistema educativo.

2. Porque no se han detectado todos los problemas fundamentales ni se, a los que se manifiesta haber detectado, les han dado soluciones efectivas que hagan prever su superación, sino que contrariamente, en muchos casos, supone un riesgo evidente de agravarlos.

3. Porque no aumenta el presupuesto para enseñanza ni aporta nuevos recursos.

4. Porque no establece una política educativa adecuada a la atención y acogida del alumnado inmigrante.

5. Porque desaparece el carácter educativo del primer ciclo de educación infantil 0-3.

6. Porque se olvida de la educación primaria y no prevé mecanismos para garantizar que, al finalizar esta etapa, el alumnado tenga los conocimientos básicos suficientes que le permitan continuar en la ESO con aprovechamiento.

7. Porque la propuesta de los llamados itinerarios a la ESO, por sí mismos, no constituyen ninguna solución a la actual problemática de esta etapa educativa. Las agrupaciones rígidas de alumnado según su nivel de rendimiento y de conflictividad, además de una medida segregadora, puede agravar la conflictividad de determinados grupos de «bajo rendimiento».

8. Porque la nueva propuesta de evaluación del alumnado y su promoción no parecen comportar, por sí misma, ninguna novedad importante, ni creemos que motive especialmente a los niños y niñas ya por ellos mismos desmotivados.

9. Porque, aunque el proyecto proclama la voluntad de mantener la autonomía organizativa y curricular de los centros, en la práctica se está procediendo a su restricción.

10. Porque la impotencia y el desconcierto que vive un sector importante del profesorado de esta etapa y la desmotivación, conflictividad y bajo rendimiento de una parte significativa del alumnado de la ESO, no se solucionarán con meros cambios estructurales, como propone la LOCE.

Por todos estos motivos, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (CHA), presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (121/000104).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2002.—**José Antonio Labordeta Subías,** Diputado.—**Francisco Rodríguez Sánchez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

Entendemos que el Proyecto de Ley de Calidad tendría que debatirse en las Cortes, después de un período de diagnóstico del Sistema Educativo Español que cuente con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, que cuente con una Memoria económica y que suscite un mayor grado de consenso en la Comunidad Educativa.

Una Ley de esta envergadura debería contar con un mayor grado de consenso en la Comunidad Educativa, porque, de otro modo, va a suponer una apertura de un período de confrontación que no conviene a nadie y posiblemente va a agrandar las ya preocupantes diferencias entre los colegios públicos y concertados.

Todas las Comunidades Autónomas, regidas por Gobiernos que no son del Partido Popular, han manifestado su rechazo, así como buena parte de los agentes sociales, padres, alumnos y profesores. Pensamos que la LOGSE debe adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad pero esos cambios deben ir en dirección opuesta a las planteadas en esta Ley. La Administración Educativa debería garantizar mejores oportunidades a los sectores más desfavorecidos y no como va a ocurrir ahora, de aprobarse esta Ley, que supondrá una «gran factura social».

Además, se insiste en esta Ley en determinados elementos que no compartimos, como: la situación que se impone con la segregación en itinerarios, el procedimiento de los nombramientos de los directores de los centros, la permanencia de la religión en horario escolar, la falta de apoyo a la inclusión de conocimientos, a nuestro juicio básicos, como el conocimiento y valoración del entorno social y cultural...

Finalmente, consideramos que hay dos aspectos que nos gustaría remarcar por su especial importancia:

En primer lugar, la cuestión de la Memoria económica, más allá de su existencia o no, lo cierto es que en el informe emitido por el Consejo de Estado se incluye una cita en la que se indica: «la preocupación así manifestada», en relación a la falta de informe sobre el coste económico, «se estima razonable, toda vez que la financiación constituye un aspecto transcendente para el éxito de cualquier reforma, siempre, obviamente, que la misma implique gastos adicionales».

«En todo caso, en el supuesto de que no implicara costes adicionales, convendría introducir en la propia Memoria justificativa alguna consideración relativa a ello». En esta cuestión también inciden sendos votos particulares emitidos por algunos de los miembros del Consejo Escolar del Estado al informe preceptivo sobre este Proyecto de Ley

Esta cuestión es clave, a juicio de Chunta Aragonesista, porque sin financiación nuevamente nos quedaremos en meras intenciones y no en realidades.

La segunda cuestión es la dispersión normativa que traería consigo esta Ley, de aprobarse en estas condiciones. De hecho, tal y como han recomendado el Consejo de Estado y el Consejo Escolar del Estado, sería necesario que esta futura Ley recogiera en su articulado y derogara las anteriores: LODE, LOGSE y LOPEGCE, para simplificar la compleja legislación existente en varias normas.

El problema es de tal magnitud que en el informe del Consejo de Estado se llega a recomendar, como una de las posibles soluciones para solventar el problema que se crearía, que se redacte un nuevo texto, a pesar de que el propio Consejo se muestra consciente del problema que supondría el retraso que supondría la aplicación de esta medida, lo que demuestra la gravedad de esta cuestión.

Ante esta situación en la que no existe consenso con la comunidad educativa —más bien todo lo contrario—, la financiación se desconoce, el problema normativo se agrava y no se mejora el proceso educativo para los alumnos/as, pedimos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (núm. de expte. 121/000104).

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2002.—**José Antonio Labordeta Subías,** Diputado.—**Francisco Rodríguez Sánchez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

En el artículo 3.1.c) se sustituye el texto propuesto por el siguiente:

«A que reciban la educación cívica y moral acorde con los valores democráticos y de tolerancia.»

MOTIVACIÓN

No se puede garantizar el derecho a que los hijos reciban una educación religiosa y moral acorde con las convicciones de los padres. Los planteamientos integristas, xenófobos, violentos e intolerantes no solamente no se deben garantizar sino que se deben combatir desde la escuela. La formación religiosa debe sacarse de la escuela y llevarse a un contexto extraescolar.

ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

En el artículo 10, punto 2, se propone añadir el siguiente texto:

«Solamente los centros que cumplan las condiciones fijadas por la administración educativa, podrán ofertar plazas gratuitas de educación infantil. Cuando una determinada zona no pueda ser atendida por la escuela pública, se podrán establecer convenios con centros privados concertados siempre y cuando atiendan solidariamente la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en parecida proporción a los centros públicos de dicha zona.»

MOTIVACIÓN

El hecho de tener conciertos en niveles superiores no justifica un «cheque en blanco» para organizar la infantil.

ENMIENDA NÚM. 5

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

En el artículo 14.2.punto «1», sustituir el texto propuesto por lo siguiente:

«Conocer y valorar el entorno natural, social, económico y cultural, así como observar comportamientos y actitudes que favorezcan su cuidado.»

MOTIVACIÓN

Quedarnos solamente en el entorno natural, con ser muy importante, constituye una visión muy reducida del entorno.

ENMIENDA NÚM. 6

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

En el artículo 24.1 añadir, tras la palabra «segundo», lo siguiente:

«tercero y cuarto...»

MOTIVACIÓN

Si aspiramos a una enseñanza de calidad, tal como se recoge en las reflexiones iniciales, hay que prolongar los apoyos, en los casos en los que así se considere, durante el segundo ciclo. Los diferentes grados de evolución psicopedagógica que presentan los alumnos, así lo aconseja, si queremos que calidad sea más que una expresión.

ENMIENDA NÚM. 7

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.

Suprimir el artículo 25.1.

MOTIVACIÓN

Al finalizar segundo de ESO es una edad demasiado temprana para encauzarla ya por un itinerario u otro. Creemos que hay que seguir durante tercero de ESO extendiendo los apoyos puntuales a los alumnos necesitados, apostando por las vías de los programas de diversificación curricular, e incluso, revisando las edades de incorporación a los mismos. Debemos tener presente que en los países avanzados, la tendencia viene a retrasar el momento de la separación en itinerarios, no a adelantarla como se pretende aquí.

ENMIENDA NÚM. 8

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.

Suprimir el artículo 25.2.

MOTIVACIÓN

Al finalizar segundo de ESO es una edad demasiado temprana para encauzarla ya por un itinerario u otro. Creemos que hay que seguir durante tercero de ESO extendiendo los apoyos puntuales a los alumnos necesitados, apostando por las vías de los programas de diversificación curricular, e incluso revisando las edades de incorporación a los mismos. Debemos tener presente que en los países avanzados, la tendencia viene a retrasar el momento de la separación en itinerarios, no a adelantarla como se pretende aquí.

ENMIENDA NÚM. 9

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.

Suprimir el artículo 25.3.

MOTIVACIÓN

Al finalizar segundo de ESO es una edad demasiado temprana para encauzarla ya por un itinerario u otro. Creemos que hay que seguir durante tercero de ESO extendiendo los apoyos puntuales a los alumnos necesitados, apostando por las vías de los programas de diversificación curricular, e incluso revisando las edades de incorporación a los mismos. Debemos tener presente que en los países avanzados la tendencia viene a retrasar el momento de la separación en itinerarios, no a adelantarla como se pretende aquí.

ENMIENDA NÚM. 10

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

En el artículo 33.L, sustituir el texto propuesto por el siguiente:

«Conocer y valorar las humanidades como motor que ha impulsado el comportamiento civilizado y solidario en el colectivo humano. Conocer y valorar la ciencia y la tecnología como impulsores de la salud, desarrollo económico y mejora del bienestar humano.»

MOTIVACIÓN

No podemos olvidar la aportación de la evolución del pensamiento, pues los avances científicos, sin una evolución del pensamiento y de la concepción de las relaciones humanas, pueden tener efectos perversos. Quedarnos solamente en el entorno natural, con ser

muy importante, constituye una visión muy reducida del entorno.

ENMIENDA NÚM. 11

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

En el artículo 39.3, añadir el siguiente texto, tras la expresión «Programas de Iniciación Profesional»:

«o a los programas de diversificación curricular».

MOTIVACIÓN

A esta edad la posibilidad de iniciación profesional no debe ser la única alternativa.

ENMIENDA NÚM. 12

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

En el artículo 42.2, sustituir el texto propuesto por el siguiente:

«La evaluación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos se realizará por parte de los Servicios de Orientación (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria y Departamentos de Orientación en Educación Secundaria, Educación Especial, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas Especiales).»

MOTIVACIÓN

Actualmente existe en las Comunidades Autónomas una red de Servicios de Orientación cuya finalidad es precisamente la que aparece en este artículo. Si no concretan los profesionales encargados de esta tarea puede ocurrir que en cada Comunidad esta importante función se aborde de forma diferente.

ENMIENDA NÚM. 13

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.

Suprimir el artículo 42.3.

MOTIVACIÓN

Las funciones de los Servicios de Orientación ya están determinadas en los Decretos y Órdenes de desarrollo. Una Ley tan generalista no puede trascender en las funciones de los distintos profesionales.

ENMIENDA NÚM. 14

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

Añadir en el artículo 44.1, al final del texto, lo siguiente:

«En cualquier caso, y como criterio específico, se tenderá al equilibrio del número de alumnos con necesidades educativas especiales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos y de forma específica con aquellos alumnos que presentan déficit de socialización.»

MOTIVACIÓN

La no aplicación de esta medida conduce a la formación de guetos que, no por casualidad, siempre se dan en la enseñanza pública con el consiguiente efecto disuasorio que favorece a la privada.

ENMIENDA NÚM. 15

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

En el artículo 68.1, añadir el siguiente texto:

«Los centros privados concertados lo seguirán siendo en la medida que los centros públicos no puedan atender la demanda de puestos escolares de una zona determinada. De no ser así, los presupuestos asignados para concierto o convenios deberán tener como criterio prioritario el seguir manteniendo la oferta pública.»

MOTIVACIÓN

La Ley debe desarrollarse de forma que garantice la red pública, la única que, hoy por hoy, da garantías de contribuir a los procesos de socialización y no discriminación de alumnos.

ENMIENDA NÚM. 16

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

En el artículo 84.1 se sustituye el texto propuesto por el siguiente:

«La selección y nombramiento de Directores de lo centros públicos se hará dando prioridad a aquellos profesores del propio Centro que lideren equipos con programas de trabajo para el Centro. El nombramiento lo hará la Administración educativa autonómica propuesta del Consejo Escolar. En el caso de que no haya candidatos será la Administración autonómica quien establezca los criterios a seguir.»

MOTIVACIÓN

Con este modelo se potencia la labor de trabajo en equipo más acorde con criterios de modelos de funcionamiento versátiles y competitivos.

ENMIENDA NÚM. 17

PRIMER FIRMANTE:
Don José Antonio Labordeta Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.

Suprimir el artículo 86.

MOTIVACIÓN

Es una consecuencia de la enmienda propuesta para el 84.1.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad, con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (122/000104).

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.—**Francisco Rodríguez Sánchez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 18

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

Una vez más, el Gobierno recurre a pretextos con una base parcialmente cierta para justificar medidas destinadas a la consecución de objetivos político-ideológicos partidistas que nada tienen que ver con la solución de los problemas. En este caso, el sistema educativo no universitario es el objeto de una reforma que se dice guiada por preocupaciones compartidas por la comunidad escolar, si bien manejadas con una cierta dosis de manipulación. Así, el Gobierno argumenta con el excesivo fracaso escolar en el sistema educativo español. La constatación de que uno de cada cuatro alumnos no obtiene el certificado de graduado escolar es el *leit motiv* propagandístico fundamental. Pero se le añaden otros argumentos que

resultan en sí mismos apreciaciones de evidente intención demagógica. No de otra manera se puede calificar la alusión a una generalizada atmósfera de violencia en las aulas, con la consecuencia del miedo en los docentes, por parte del Presidente del Gobierno en su discurso en el Seminario de la OCDE sobre educación celebrado en Madrid del 6 al 9 de mayo de 2002. La Ley estaría destinada a la dignificación y reforzamiento de la autoridad en el desempeño de la función docente, una forma muy poco sutil de aprovechar la frustración que, sin duda, existe en el profesorado. La estrategia demagógica y descalificadora con el actual modelo conduce a manipulaciones como la de querer hacernos creer que no se puede repetir curso y que, por lo tanto, todo el mundo aprueba, lo que, evidentemente, contradiría la tesis del fracaso escolar. Finalmente, se utiliza la obsesión comparativa para alertarnos preocupadamente, de que nuestros escolares están por debajo de la media de los países industrializados en matemáticas y capacidad de comprensión. A partir del catastrofismo, de las generalizaciones abusivas y de las medias verdades, el Gobierno justifica la necesidad de una reforma educativa que estaría guiada supuestamente por el objetivo de la calidad.

Analizado detalladamente el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, se descubre que los objetivos son realmente muy otros. Y, concretamente:

a) Formalizar el fracaso escolar, asumiéndolo como natural y lógico por parte del sistema educativo, las familias y los alumnos afectados, por lo que conviene contar con alternativas para canalizarlo.

b) Justificar, desde edades muy tempranas, la selección, la discriminación y la segregación de los alumnos, como si fuese producto de una neutra y necesaria labor de clasificación intelectual, elemento considerado clave en un sistema educativo de calidad.

c) Institucionalizar un sistema más jerarquizado dentro de la enseñanza no universitaria, con la creación de cuerpos docentes, funciones específicas con *status* especial y consolidado, como la directiva, para provocar la ilusión de una virtual promoción que estaría sometida a evaluaciones, observaciones y controles de diferente origen sobre el profesorado, con el establecimiento de recompensas monetarias más diversificadas que las actuales.

d) Recentralizar competencias, introduciendo el control del Gobierno central en el sistema educativo gestionado por las Comunidades Autónomas. La participación en la gestión y la observación y control, con fines homogeneizadores, de todo el sistema por parte de organismos e instituciones centrales anulan la consideración de la educación como una materia de plena competencia de las Comunidades Autónomas. El sistema queda con una dependencia orgánica dual, de forma que la idea de conjunto estatal está presente en todos los niveles, funciones y temáticas de la enseñanza, desde la formación del profesorado hasta las becas y ayudas, pasando por la inspección y las pruebas de evaluación tanto de los centros como del alumnado y del profesorado, por no hablar del rígido control de los contenidos curriculares.

e) Fortalecer los procesos de privatización de este servicio público, como parte esencial de una concepción de la sociedad basada en la desigualdad, el elitismo y el control ideológico del sistema educativo por parte de los grupos privados favorables a las tesis neoliberales, que paradójicamente se convierten en los grandes beneficiados del dinero público, con el progresivo aumento de la enseñanza privada concertada.

El Proyecto de Ley conjuga, pues, un diseño regresivo socialmente, de claras limitaciones democráticas en el funcionamiento del sistema, con el afán homogeneizador. No es difícil detectar su inspiración contraria a las tesis nacionalistas que defienden la adaptación del sistema educativo al medio cultural, lingüístico y socio-económico específico de cada una de las nacionalidades integradas en el Estado español. Tampoco es difícil de constatar que, con la aplicación rigurosa de esta Ley, las Comunidades Autónomas se convertirán en meras delegaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en materia educativa.

Veamos, de forma concreta, los artículos de la Ley dirigidos a aplicar un diseño educativo regresivo socialmente y de carácter antidemocrático y jerarquizador. Comenzaremos por la obsesión del Proyecto con la aplicación de controles, pruebas y selecciones en edades tan tempranas y peligrosas como la infancia y la pubertad:

- Introducción del carácter académico en la escuela infantil, con el inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura, las habilidades numéricas básicas, una lengua extranjera y las tecnologías de la información y de las comunicaciones (artículo 11).
- Prueba general de evaluación de la enseñanza primaria y secundaria obligatoria, con carácter informativo y orientador para centros, profesorado, familias y alumnos (artículos 17 y 29, respectivamente).
- Establecimiento de itinerarios desde tercero de ESO (Tecnológico y Científico-Humanístico). En cuarto, Tecnológico, Científico y Humanístico. En segundo será obligatorio un informe de orientación escolar para cada alumno, emitido por la junta de evaluación y el equipo de orientación del centro, que predeterminará el acceso a uno u otro itinerario (artículo 25).
- Programas de iniciación profesional para alumnos de quince años que no deseen cursar los itinerarios

de la ESO, aceptando así su exclusión del sistema y con la única posibilidad de la enseñanza de adultos o a distancia (artículo 26).

• Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria con constancia de la nota media en esta etapa e informe de orientación escolar para su futuro académico y profesional que tendrá carácter confidencial (artículo 30).

• Prueba General de Bachillerato, con condiciones básicas fijadas por el Gobierno, para obtener el Título de Bachiller, después de aprobar los dos cursos académicos de esta etapa (artículo 36).

• Preocupación por los denominados alumnos superdotados intelectualmente con propuesta de escolarización en centros adecuados (artículo 40) y establecimiento de centros docentes con especialización curricular (artículo 73).

No nos detendremos en el Título V de la Ley. Solamente en lo que se refiere a los órganos de gobierno y participación de los centros docentes públicos queremos señalar que se consolida la figura del director como categoría administrativa, con percepción de la retribución correspondiente, mientras se permanezca en activo, al margen de que se desempeñe o no esta función. Por otra parte, los centros privados concertados quedan homologados a todos los efectos con los públicos, con un pormenorizado modelo de subvención del cien por cien de los gastos, y protegidos en el derecho a su ideario propio. En este beneficio de lo privado y sectario, tenemos que anotar la instauración de una área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, con dos opciones, una de carácter confesional y otra de carácter no confesional.

Ésta es la forma de darle definitivamente carta de naturaleza académica a la Religión Católica, cuyo currículo y las decisiones sobres libros de texto y material didáctico, así como la contratación de profesorado, seguirán siendo competencia de las correspondientes autoridades religiosas (Disposición Adicional Segunda). No hace falta decir que se da un paso atrás respecto de la situación anterior, que ya era en sí misma impresentable desde el punto de vista de una democracia aconfesional o laica.

En cuanto a lo que denominamos obsesión recentralizadora y homogeneizadora del Proyecto de Ley, tenemos que destacar los siguientes aspectos:

• Establecimiento de Planes Generales de formación permanente del profesorado (artículo 56).

• Evaluación voluntaria del profesorado, a tener en cuenta para la promoción dentro de la carrera docente, con efectos en todo el territorio del Estado, con cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que establezca el Gobierno (artículo 58).

• Oferta periódica de planes de formación que promuevan la calidad de la función directiva por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (artículo 90).

• Evaluación general del sistema por el Ministerio a través del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (artículo 94) con criterios de homogeneidad (artículo 95).

• Elaboración periódica por el Ministerio a través del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad de un Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (artículo 96) para contribuir a la toma de decisiones en la enseñanza.

• Elaboración de un plan de evaluación general del sistema (artículo 97) y publicación de los resultados de las evaluaciones por el Ministerio (artículo 98).

• Control del sistema educativo en cada Comunidad Autónoma por la Alta Inspección del Estado, órgano del Ministerio que se convierte en auténtica policía de lo que se considera normativa básica en desarrollo del artículo 27 de la Constitución española, lo que a juzgar por este Proyecto de Ley es prácticamente todo, desde los contenidos de los libros de texto hasta la lengua utilizada en las aulas, en clara defensa de la lengua oficial del Estado (artículo 102).

• Implantación de la Prueba General de Bachillerato, con condiciones básicas fijadas por el Gobierno, para obtener el título de bachiller (artículo 36).

Este control desde el Gobierno central de todo el sistema y la aplicación de un diseño tan homogeneizador nos lleva a la conclusión de que no es real la preocupación por conseguir una enseñanza de calidad, sino por lograr un modelo educativo acorde con la concepción de un modelo de Estado que no acepta la diversidad lingüística, cultural y socio-económica de las naciones que lo integran con todas las consecuencias. No quiere, por eso, reconocerles competencias políticamente relevantes en esta materia, para que puedan articular sistemas educativos adaptados a su realidad.

Por otra parte, la cantinela oficial a favor de la recuperación del valor del esfuerzo como pieza angular de la educación no va destinada más que a ocultar la apuesta por la segregación, la discriminación y la selección en el sistema educativo desde la infancia, como forma de legitimación de una sociedad clasista. Este Proyecto de Ley se incardina así en la ola neoliberal de origen norteamericano que, en nombre de la competitividad y la libertad, arrasa los principios de equidad, integración y pluralismo. No es una apuesta por mejorar el sistema educativo. Lo va a burocratizar y jerarquizar más. Se creará más tensión entre los alumnos, entre los profesores y entre ambos. Habrá más desigualdades en el conjunto del sistema.

Para una fuerza política de Galicia, como el Bloque Nacionalista Galego, el Proyecto de Ley no viene más

que a inviabilizar o dificultar los cambios que el sistema educativo gallego necesita. Entre ellos, la adecuación de los contenidos curriculares a nuestra realidad nacional y el avance en el uso de nuestro idioma como lengua vehicular de la enseñanza. Es un paso atrás en una situación ya bastante lamentable.

Por todo lo expuesto, pedimos la devolución de este Proyecto de Ley al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta enmienda a la totalidad, de devolución, al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (121/000104), a instancia del Diputado don Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.—**Joan Saura Laporta,** Diputado.—**Francisco Rodríguez Sánchez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 19

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación y lo ha hecho en un período de sesiones marcado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades y de la Ley Orgánica de la Formación Profesional y de las Calificaciones.

En el marco de este contexto, Iniciativa per Catalunya-Verds cree que un debate sobre la educación debe realizarse partiendo de las siguientes premisas:

- La educación debe ser un instrumento decisivo para la emancipación individual y la transformación social, para la construcción de la sociedad del conocimiento, factor básico en la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y clave en la calidad de vida y la sostenibilidad.
- Debemos hacer de la educación un derecho universal en condiciones de calidad para toda la población y a lo largo de toda la vida, para afrontar los nuevos retos sociales, laborales, tecnológicos y culturales y constituir un elemento imprescindible para evitar la fractura social.
- Creemos en el papel estratégico de la educación pública, en la construcción de la igualdad y la justicia social.
- Es urgente realizar planteamientos rigurosos de atención a la diversidad en el marco de una escuela comprensiva, con los recursos necesarios de tipo técnico, económico y de formación de los y las profesionales de la educación. La equidad en educación es difícil, pero esto no la desligitima como objetivo.

El actual Gobierno lleva seis años gestando su alternativa educativa obedeciendo a una estrategia: el desprestigio de los centros públicos, de la Universidad, de la Formación Profesional y de la LOGSE. Seis años sin tomar ni una sola medida para atender las nuevas necesidades educativas desde un planteamiento positivo, culpabilizando a la ESO y a la LOGSE de provocar un bajo rendimiento académico, escasísimos conocimientos, fracaso escolar, indisciplina, violencia, desprestigio de los y las docentes y desincentivación del esfuerzo.

Este Proyecto de Ley Orgánica de Calidad cierra la trilogía del modelo educativo del Gobierno —después de la LOU y la Ley de FP—, que se está caracterizando por la repetición de unos denominadores claramente regresivos. Promueve una educación selectiva y segregadora, arremete contra la democracia escolar, recortando autonomía, puesto que disminuye la participación de los claustros y de los consejos escolares, que pasan a ser meramente consultivos. Para completar este modelo retrógrado, cabe señalar que no tiene en cuenta las competencias educativas de las comunidades autónomas.

Estos son algunos detalles sobre las aportaciones del Proyecto que lustran el rechazo de Iniciativa per Catalunya-Verds:

- La renuncia a la educación como elemento fundamental de cohesión social parte de un diagnóstico poco riguroso de la actual situación. Se describe un panorama en el que se mezclan medias verdades con visiones sesgadas y partidistas, utilizando una terminología engañosa (calidad, oportunidades, flexibilidad, excelencia...) que esconden su verdadero propósito elitista y jerárquico. No se proponen medidas para combatir el fracaso escolar, sino que se intenta encubrirlo, dejando fuera del sistema educativo a aquellos alumnos y aquellas alumnas que por razones diversas (muchas veces relacionadas con su origen social y económico) necesitan de más recursos y apoyos. A su vez, plantea un currículum absolutamente cerrado y academicista del que se excluyen todos los apartados de procedimiento y de valores.
- Las medidas expuestas responden a modelos educativos de tiempos pasados y no ofrecen respuesta

alguna a las necesidades sociales de hoy y de futuro. El sistema de itinerarios propuesto para la secundaria obligatoria no garantiza el alcance de las competencias básicas por parte de toda la población.

• Es un retroceso histórico sin precedentes recuperar el concepto «asistencial» para calificar la educación infantil (0-3 años), superado en la práctica por la evolución de los sistemas sociales y por el reconocimiento legal de su carácter educativo por la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia de 1989.

• Por otra parte, la religión se considera una asignatura, con una nota que será comparable con el resto. Esto no puede ser posible, puesto que el contenido de la citada asignatura es confesional, su programa no está definido por las autoridades educativas, como sí pasa en el resto, y su profesorado no es seleccionado con los mismos procedimientos que se aplican al resto de profesores y profesoras. En un Estado no confesional, como es el caso del Estado español (a pesar de muchas de las políticas del Gobierno), la doctrina católica o cualquier otra doctrina religiosa debe ser impartida fuera del horario escolar.

• Financiación: no se tiene en cuenta que, en gasto para la enseñanza, el Estado español está en la cola de Estado de la Unión Europea. Ésta ha sido una de las causas que ha impedido el correcto desarrollo de la LOGSE y ha propiciado el deterioro del sistema educativo. Ya cuando se presentó la Iniciativa Legislativa Popular para la financiación de la LOGSE, desde ICV ya realizamos advertencias acerca de esta situación.

Las bajas proporciones respecto al PIB existentes en los presupuestos de gobiernos anteriores al 1996 han ido disminuyendo aún más con la actual mayoría parlamentaria. Con este proyecto se pretende que el incremento del gasto público sirva para satisfacer las demandas del sector privado en educación infantil cuando éste carece del legitimo control social y sin modificar la actual normativa de admisión del alumnado.

Por estos motivos, consideramos que este Proyecto de ley no es el adecuado. Supone una inversión hacia un modelo de sociedad más elitista y segregacionista, que rompe con los avances de cohesión social conseguidos hasta el momento, fruto del esfuerzo y de la implicación de la comunidad educativa.

Nos aventuramos a pronosticar que esta reforma, mediante la introducción de modificaciones en los procesos de admisión del alumnado, camina hacia la consolidación de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, condenados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y, otra, la integrada por los centros privados concertados cuyo peso e influencia será cada vez mayor.

Pero hay un sector importante del profesorado, del alumnado, de las familias y de la ciudadanía en general que está firmemente convencido de que ésta no es la fórmula adecuada para avanzar hacia una verdadera educación de calidad para todos, de que ésta no es la manera correcta de proyectar un futuro socialmente justo para el Estado español. Así se han manifestado y, por ello, han pedido la retirada de este proyecto. Nadie renuncia, como se ha señalado repetidamente durante estos últimos meses en diversos documentos elaborados y difundidos por organizaciones de los diferentes sectores de la comunidad educativa, colectivos de profesionales, partidos políticos y sindicatos, a realizar un diagnóstico serio de los principales problemas de nuestro sistema educativo y organizar un debate amplio y honesto que ayude a definir las medidas necesarias para poder resolverlos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2002.—**Marisa Castro Fonseca,** Diputada.—**Felipe Alcaraz Masats,** Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

ENMIENDA NÚM. 20

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

LEY DE CALIDAD EDUCATIVA PARA LA IGUALDAD Y SU FINANCIACIÓN

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, junto con la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), han concretado aspectos básicos para el ejercicio del derecho fundamental a la educación, reconocido como tal en la Constitución española, y entre los que cabe destacar, por un lado, el sistema de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el control e intervención en la gestión de los centros y, por

otro, la extensión de las enseñanzas obligatorias comunes hasta los 16 años.

Por otra parte, la LOGSE, en sus Títulos IV y V, «De la calidad de la enseñanza» y «De la compensación de las desigualdades en la educación», plantea la necesidad de que los poderes públicos presten una atención prioritaria a los factores que inciden en la calidad y mejora de la enseñanza (artículo 55) y encomienda a dichos poderes la misión de proveer recursos económicos suficientes para llevar a cabo acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones de desventaja. Todo ello con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación (artículo 63).

Los doce años transcurridos desde la aprobación de la LOGSE vienen a coincidir con la generalización casi completa del sistema educativo en ella establecido, dado que ha sido en el curso 2001-2002 cuando se ha completado la implantación del último curso del nuevo Bachillerato, quedando aún pendiente la puesta en marcha de determinados ciclos de Formación Profesional Específica de grado superior. El tiempo transcurrido no permite, por tanto, hacer un balance completo de las nuevas enseñanzas, ni mucho menos aconseja plantear modificaciones sustanciales de las mismas sin hacer previamente una evaluación rigurosa y coordinada por parte de las administraciones educativas, y proporcionar a la sociedad un diagnóstico fiable de la situación de nuestro sistema educativo.

No obstante, en el proceso seguido se han constatado algunos problemas asociados a la implantación de la mencionada Ley que conviene identificar y subsanar cuanto antes. Tanto los sucesivos retrasos en el calendario inicial de aplicación de la LOGSE, como una implantación deficiente y muy desigual de la misma, especialmente de la Educación Secundaria Obligatoria, se han debido principalmente a la ausencia de una financiación adecuada, sobre todo para la educación pública, que se ha ido agudizando en los últimos años con la disminución progresiva del gasto público educativo, justo en el momento en que las reformas en marcha exigían un esfuerzo económico considerable para poder atenderlas adecuadamente.

La insuficiente cobertura financiera no ha permitido realizar las requeridas actuaciones de formación del profesorado; de dotación de recursos materiales a los centros; de disminuciones de ratios en zonas, centros o grupos de especiales circunstancias; de aplicación de las medidas de atención a la diversidad previstas; de extensión y mejora de la red pública para atender la demanda de plazas escolares, especialmente en Educación Infantil y en Formación Profesional de grado superior; o de fomento de la participación democrática en los centros y consejos escolares. Actuaciones que hubieran sido imprescindibles para mejorar nuestra enseñanza pública y para permitir a la sociedad tener una visión más optimista sobre el funcionamiento del servicio educativo.

El incumplimiento global de lo previsto en la Adicional Tercera de la LOGSE sobre equiparación del gasto público educativo a la media de la UE, así como la desigual distribución de dicho gasto entre las diferentes Comunidades Autónomas, vienen a constatar que habría sido necesaria una Ley de financiación de la educación pública, que asegurase recursos suficientes para la misma y compensase desigualdades dentro y entre las distintas Comunidades Autónomas del Estado. En este sentido, hay que lamentar la negativa de las sucesivas mayorías parlamentarias a tramitar y aprobar dicha Ley, promovida en su día como Iniciativa Legislativa Popular por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.

Por otra parte, las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en la última década y la situación derivada de la propia ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años, plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta para mejorar la calidad de la educación pública.

Avanzar en la calidad supone apostar por una educación cuyo principal objetivo consista en asegurar, a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática. Se trata, pues, de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque, en lo que concierne a la educación obligatoria, una educación de calidad o sirve para que el conjunto de la población escolar logre las capacidades básicas requeridas o no es de calidad.

En la actualidad, el sistema educativo español sigue presentando carencias importantes en cuanto a su capacidad para responder a las diversas necesidades educativas que presentan los alumnos y alumnas a lo largo de su escolaridad. Siguen siendo demasiados los que no progresan en sus aprendizajes lo suficiente para alcanzar los objetivos previstos en las etapas obligatorias; siguen siendo excesivas las cifras de estudiantes que finalizan su escolaridad obligatoria sin lograr la titulación correspondiente. En definitiva, nuestro sistema educativo sigue siendo manifiestamente mejorable en cuanto a su capacidad para responder de forma adecuada a las diferentes necesidades educativas del alumnado

En consecuencia, el problema de cómo mejorar la calidad de nuestra educación escolar se centra hoy en definir las acciones y medidas que se deben emprender para que la escuela pública logre asegurar unos aprendizajes comunes o, lo que es lo mismo, el desarrollo de unas capacidades básicas a todos los alumnos y

alumnas sin excepción a lo largo de su escolaridad obligatoria.

Para ello se plantea esta Ley articulada que, manteniendo la estructura del sistema educativo establecido por la LOGSE, recoge en un mismo *corpus* legislativo las principales necesidades constatadas desde la promulgación de dicha Ley. Por un lado, se desarrollan líneas de actuación, apuntadas en los Título IV y V de dicha Ley, sobre calidad de la enseñanza y compensación de las desigualdades y, por otro, se atiende a la necesidad de financiar adecuadamente las correspondientes actuaciones, en condiciones de igualdad, en los distintos territorios del Estado.

La presentación en una misma Ley de los aspectos señalados facilita la imbricación necesaria entre cada una de las acciones de calidad que se regulan y la definición de su soporte financiero. Se pretende evitar así lo que ha ocurrido en la aplicación de la LOGSE, que muchas de sus intenciones más acertadas y más ajustadas a las necesidades educativas de los colectivos con más dificultades han quedado desvirtuadas por la ausencia de los correspondientes recursos.

Poner en marcha actuaciones efectivas para la mejora de la calidad educativa exige previamente contar con un diagnóstico compartido y ajustado a las características y necesidades de cada ámbito territorial. Ello requiere a su vez promover el debate social pertinente en cada Comunidad Autónoma, con vistas a detectar e identificar con precisión tanto las dificultades como los avances que se vienen produciendo en los distintos territorios desde que se inició la implantación generalizada del sistema educativo establecido en la LOGSE. Por ello, la condición previa para desarrollar las líneas de intervención que se recogen en esta Ley consiste en elaborar sendos Libros Blancos que aporten datos contrastados, basados en estudios actuales y de evolución, sobre la situación del servicio público educativo en las diferentes Comunidades Autónomas.

La culminación del proceso democrático que abre esta Ley debe ser la aprobación, en cada Comunidad Autónoma, de su propia Ley de Calidad de la Educación Pública, en la que se concreten las correspondientes actuaciones, el calendario de aplicación y el compromiso financiero para asegurar su puesta en práctica.

Así pues, la finalidad de la presente Ley de Calidad Educativa para la Igualdad y su Financiación es determinar, por una parte, líneas básicas de intervención para una mejora efectiva de la enseñanza pública en condiciones de igualdad y, por otra, establecer mecanismos y compromisos de cofinanciación, a través de los Presupuestos Generales del Estado y en un calendario de cuatro ejercicios presupuestarios, para asegurar los recursos suficientes.

El articulado de la Ley se estructura en un Título único que especifica los principales factores de calidad educativa junto a las actuaciones que se han de llevar a cabo para desarrollarlos. Se incorporan, asimismo, una serie de disposiciones adicionales que establecen el procedimiento y el sistema de financiación para completar las acciones previstas en el plazo de seis años. Por último, las disposiciones transitorias regulan, hasta tanto se modifique la legislación correspondiente, lo relativo a las condiciones de impartición de la enseñanza religiosa, así como los requisitos y circunstancias para la posible aplicación del contenido de esta Ley a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

TÍTULO I

De los factores de calidad

Artículo 1. Factores de Calidad.

Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza, en especial a:

a) La enseñanza básica común para todo el alumnado.
b) La suficiencia de la oferta educativa en la red pública de centros.
c) La atención a la diversidad para garantizar la igualdad de oportunidades a lo largo de todo el proceso educativo.
d) Las acciones de carácter compensatorio.
e) La capacitación del alumnado para acceder y aprovechar la información utilizando las fuentes clásicas y las nuevas tecnologías.
f) La formación, reconocimiento social y condiciones de trabajo del profesorado.
g) La autonomía, participación democrática y apertura al entorno de los centros educativos.
h) La evaluación y control del sistema educativo.

Artículo 2. De la enseñanza básica común.

1. A lo largo de la enseñanza básica se garantizará una educación común para todo el alumnado, sin perjuicio de una opcionalidad creciente de contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria. Dicha opcionalidad, que se introducirá gradualmente a lo largo de la etapa, deberá servir para dar respuesta a las diversas motivaciones, expectativas e intereses del alumnado. En ningún caso supondrá la configuración de itinerarios predeterminados ni condicionará estudios posteriores, siendo única la titulación al término de la etapa.

2. La gratuidad de la enseñanza básica comprenderá la de los libros y materiales didácticos que deba utilizar el alumnado de los centros públicos. Para ello, las Administraciones educativas podrán crear bibliote-

cas o centros de recursos de aula, así como arbitrar fórmulas de cesión temporal de libros de texto y material a los alumnos.

3. Los alumnos tendrán derecho a permanecer en los centros ordinarios, cursando la enseñanza básica, hasta los 18 años de edad.

Artículo 3. De la suficiencia de la oferta educativa.

1. Las Administraciones educativas llevarán a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la suficiencia de la red pública de centros, en su extensión y oferta educativa, para satisfacer el derecho a la educación en todas las etapas educativas, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial.

2. Para favorecer la escolarización temprana, en su doble función de contribuir al mejor progreso escolar en etapas educativas posteriores y como factor compensador de desigualdades, las Administraciones educativas ampliarán la oferta de plazas públicas para garantizar la generalización del segundo ciclo de Educación Infantil a toda la población y para atender toda la demanda del primer ciclo.

3. Las Administraciones educativas crearán, en el período de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para llevar a cabo, en los centros públicos que impartan la Educación Primaria o la Educación Secundaria, las acciones previstas en los artículos 4 y 5 de esta Ley.

4. Las Administraciones educativas garantizarán una oferta pública suficiente y diversificada para que las personas adultas puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria, preparar las pruebas de acceso a las enseñanzas de Bachillerato, Formación Profesional Específica o estudios universitarios, así como seguir programas formativos de enseñanzas no regladas acordes con los intereses y demandas de este alumnado.

5. Las Administraciones educativas crearán, en el período de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para satisfacer la demanda de ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional específica. El perfil de ciclos tendrá en cuenta las demandas del alumnado junto a las necesidades de formación derivadas del correspondiente análisis de las expectativas de empleo.

6. Las Administraciones educativas crearán, en el período de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para atender la demanda de enseñanzas de régimen especial.

7. Para la distribución geográfica de la creación de plazas en los supuestos de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6, y con el fin de rentabilizar los recursos educativos, las Administraciones competentes podrán crear distritos escolares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58, punto 5, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo.

Artículo 4. De la atención a la diversidad del alumnado.

1. Las Administraciones educativas, al objeto de garantizar una educación común para todo el alumnado en condiciones de igualdad, proporcionarán recursos suficientes para que todo alumno, a lo largo de la enseñanza básica, reciba los apoyos necesarios y las adaptaciones curriculares pertinentes para progresar de acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje. A tal fin, dichas administraciones establecerán las disposiciones y recursos para garantizar que el alumnado de la enseñanza básica reciba los refuerzos necesarios en las capacidades instrumentales de cara a su adecuado progreso, así como el apoyo específico a aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje

2. Para la mejor atención educativa al alumnado de zonas o centros donde se constate una mayor incidencia de fracaso escolar o una mayor necesidad de compensación, las Administraciones educativas establecerán reducciones sobre el número máximo de alumnos por aula previsto en la Disposición Adicional Tercera, punto 3, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo. Esa reducción será, asimismo, aplicable a aquellos grupos de cualquier centro que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales.

3. Las Administraciones educativas garantizarán que en todos los centros que impartan enseñanza secundaria se ofrezcan programas de diversificación curricular, así como programas específicos de garantía social a que hace referencia el artículo 23, puntos 1 y 2, de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

4. Para el alumnado con más de quince años que haya permanecido un año más en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y que, a juicio de su equipo educativo, no esté en condiciones de cursar con aprovechamiento los contenidos de la mayor parte de las áreas del siguiente curso, se podrán organizar programas específicos de diversificación curricular, de dos años de duración, orientados a que dicho alumnado pueda alcanzar los objetivos de la etapa y el título correspondiente, mediante una atención más individualizada y una adaptación de los contenidos y métodos en las áreas comunes. Excepcionalmente se podrán beneficiar de estos programas otros alumnos con más de 15 años, siempre que se formule la correspondiente propuesta por la mayoría del equipo educativo, asesorado por el Departamento de Orientación, y se cuente con el visto bueno de sus padres o tutores.

Artículo 5. De las acciones de carácter compensatorio.

1. Las Administraciones educativas desarrollarán las acciones de carácter compensatorio, dirigidas a per-

sonas, colectivos o ámbitos territoriales, que se encuentren en situaciones desfavorables, de cara a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación.

2. Con el fin de atender a las nuevas demandas sociales de las familias y disponer del espacio y medios para ejercer la función compensadora, las Administraciones educativas establecerán disposiciones para garantizar la apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y asignarán los recursos necesarios para ofrecer un programa de servicios y actividades. Este programa, que concretará el Consejo Escolar de cada centro, comprenderá, al menos, servicio de biblioteca y aulas de estudio asistido, servicio de apertura temprana, servicio de comedor, actividades deportivas, lúdicas y de ocio, así como actividades formativas y culturales.

3. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios con los Ayuntamientos respectivos para la financiación, organización y puesta en marcha de tales servicios y actividades. Asimismo, dichas Administraciones podrán establecer convenios con las Universidades públicas de su ámbito competencial a fin de que su alumnado pueda colaborar en las actividades de estudio asistido, con el consiguiente reconocimiento de la dedicación horaria como créditos de libre configuración, además de la asignación de una beca para gastos derivados de la prestación del servicio.

4. Las Administraciones competentes establecerán planes de acogida e inmersión lingüística para atender al alumnado inmigrante que pueda presentar, previa evaluación de su competencia curricular, problemas de adaptación a nuestro sistema educativo, ya sea por desconocimiento o dificultades en el manejo de la lengua en que se desarrolle la actividad escolar, o bien por presentar necesidades específicas de refuerzo en determinadas áreas del currículo. Tal atención se llevará a cabo en los propios centros de enseñanza, por profesorado con la formación adecuada y de manera simultánea a su escolarización en grupos ordinarios. Entre los recursos humanos destinados a estos planes podrá contarse, además, con trabajadores sociales, que actúen como mediadores interculturales y, en su caso, con profesorado nativo de apoyo.

5. Para reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar en zonas con condiciones socioeconómicas desfavorables, las Administraciones competentes las declararán áreas de atención educativa preferente, estableciendo planes específicos de compensación que incluirán mayor dotación de profesorado de apoyo, disminución de ratios, una mayor asignación de recursos materiales y un programa de colaboración con los servicios sociales de la zona.

6. Las Administraciones educativas elaborarán planes específicos de compensación para aquellos centros que escolaricen alumnado de minorías étnicas, estableciendo cauces de colaboración con las familias y los servicios de asistencia social. Asimismo, establecerán planes para garantizar la continuidad de la escolarización en la enseñanza básica de alumnos cuyas familias tengan trabajo con domicilio itinerante. Por último, atenderán, mediante la apertura de aulas específicas hospitalarias y la dotación de profesores de apoyo domiciliario, a aquellos alumnos de la enseñanza básica que, por procesos de larga enfermedad, se vean o hayan visto privados de asistir a las aulas ordinarias.

7. Además de las acciones contempladas en los puntos anteriores, las Administraciones educativas establecerán un sistema de becas y ayudas al estudio que contribuyan a compensar condiciones socioeconómicas desfavorables. El sistema deberá garantizar la extensión y suficiencia de recursos para que, en el período de la enseñanza obligatoria, toda la población escolar que cumpla los requisitos establecidos se beneficie de estas prestaciones. En las enseñanzas postobligatorias se seguirán percibiendo dichas becas y ayudas, siempre que se mantenga un rendimiento escolar satisfactorio.

Artículo 6. De la capacitación del alumnado para acceder y utilizar la información.

1. Las Administraciones educativas pondrán a disposición de los centros los recursos necesarios para potenciar en el alumnado el aprendizaje de las habilidades básicas de búsqueda, utilización y comunicación de la información. En particular, estimularán programas de fomento de la lectura y programas de utilización de las bibliotecas de aula y Biblioteca de centro, dotándolas de los fondos y apoyos técnicos y humanos necesarios para su uso en el trabajo de aula.

2. Las Administraciones educativas establecerán, en el período de aplicación de la presente Ley, los planes necesarios para generalizar, y mantener actualizados en los centros, los avances que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen a la sociedad. Dichos planes contemplarán, asimismo, la realización de actividades de formación del profesorado con el fin de asegurar su capacitación para el uso didáctico de tales tecnologías.

Artículo 7. De la formación y condiciones laborales del profesorado.

1. Las administraciones educativas garantizarán una formación inicial del profesorado acorde con las exigencias y requerimientos que conlleva la función docente en sus distintas etapas y modalidades. Dicha formación deberá incluir, además de los conocimientos específicos para impartir los currículos de unas u otras etapas educativas, capacitación psicopedagógica y

didáctica adecuadas, conocimientos sobre el uso didáctico de las nuevas tecnologías, sobre el trabajo en equipo, sobre procesos de innovación e investigación educativa, y una implicación en el trabajo de aula y centro mediante la realización de prácticas tutorizadas en los centros educativos durante un período no inferior a un curso académico.

2. La formación permanente de los profesores en ejercicio se realizará preferentemente en los centros educativos, dentro de la jornada laboral del profesorado, mediante proyectos propuestos por los mismos profesores o por las administraciones educativas. Las instituciones de formación podrán intervenir para asesorar, hacer el seguimiento y proporcionar las ayudas necesarias.

3. Las administraciones competentes organizarán programas específicos de formación del profesorado dirigidos a capacitar a los docentes que deban atender al alumnado con necesidades educativas especiales, ya sea por sus condiciones personales o por su pertenencia a otras culturas o a grupos socialmente desfavorecidos. En el marco de tales programas se contemplarán acciones formativas de educación intercultural, especialmente dirigidas a proporcionarle al profesorado conocimientos y recursos didácticos que contribuyan a la integración del alumnado inmigrante en el aula y en el centro.

4. Las administraciones educativas, previo acuerdo con los representantes sindicales del profesorado, regularán el marco de condiciones laborales de los docentes que incluirá, al menos, un sistema de incentivos profesionales en función de las actividades desarrolladas; la limitación del número máximo de alumnos y grupos a los que un profesor puede impartir clases en cada curso académico; un sistema que establezca los mecanismos de promoción entre los cuerpos docentes de todos los niveles educativos, incluida la Universidad; el disfrute de períodos sabáticos de formación para todo el profesorado, a lo largo de su vida profesional, de una duración global no inferior a un curso académico; medidas para el rejuvenecimiento de las plantillas que contemplen la reducción horaria lectiva sin merma salarial para los mayores de 55 años, y la jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la LOGSE.

5. Las Administraciones educativas desarrollarán actuaciones para conseguir un mayor reconocimiento social de la función del profesorado. En el diseño y aplicación de las mismas intervendrán los distintos sectores de la comunidad educativa del ámbito correspondiente.

Artículo 8. De la autonomía de los centros educativos.

1. Las administraciones educativas, sin menoscabo del cumplimiento de lo establecido con carácter general, deberán reconocer a los centros autonomía para organizar sus enseñanzas, en cada año académico, de modo que su oferta educativa se pueda ajustar al máximo a las demandas, características y necesidades de su alumnado. Dicha autonomía se podrá concretar, entre otras posibilidades que los centros planteen, en la organización de agrupamientos flexibles, en la reducción de la ratio o en la ampliación horaria de algunas áreas de conocimiento para determinados alumnos.

2. Asimismo se reconocerá la autonomía de los centros para adoptar medidas organizativas tendentes a mejorar la coordinación didáctica del profesorado de un mismo grupo y, en general, cuantas contribuyan a una mayor adecuación de la organización escolar al proyecto educativo del centro.

3. La normativa que, en cada Comunidad Autónoma, regule los aspectos de gestión económica de los centros educativos deberá reconocer la autonomía de los mismos para administrar sus recursos en función de sus necesidades y prioridades, que serán establecidas por el Consejo Escolar, de acuerdo con la programación general anual.

4. Las administraciones competentes promoverán el asociacionismo y la participación democrática de toda la comunidad educativa en la gestión de los centros, en particular del alumnado y de padres y madres. Para ello se potenciarán los Consejos escolares de centro, municipales y autonómicos, dotándolos de competencias ejecutivas y no meramente consultivas.

5. A fin de hacer efectiva la necesaria corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación integral de sus hijos, se adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela. A tal fin se organizarán actividades de formación para madres y padres y, a efectos laborales, se reconocerá su asistencia a las reuniones o entrevistas programadas por los centros educativos como deber público de carácter inexcusable, incluida la asistencia a las reuniones del Consejo Escolar de los representantes de los padres y madres.

Artículo 9. De la evaluación y el control del sistema educativo.

1. Con el fin de mantener el sistema educativo en las mejores condiciones para responder a las demandas que le hace la sociedad, se procederá a evaluar periódicamente su funcionamiento a través de las instituciones y servicios creados con tal finalidad.

2. Cada centro docente realizará, asimismo, una autoevaluación periódica de su funcionamiento general que incluya el funcionamiento específico de sus órganos de gobierno y departamentos, así como la efectividad de sus diferentes planes de centro y proyectos

curriculares de etapa. Para ello podrá solicitar apoyos externos, que le serán facilitados por la Administración educativa.

3. Las Administraciones educativas diseñarán, contando con sus organismos de evaluación y en todo caso con los Servicios de Inspección Educativa, un plan de evaluación externa de los centros docentes, que periódicamente se aplicará a una muestra de ellos y, en su caso, a determinados centros cuyas circunstancias aconsejen hacer las correspondientes comprobaciones sobre el grado de adecuación de sus enseñanzas a los fines previstos para el sistema educativo en el artículo 1 de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo. El plan de evaluación y los resultados obtenidos se pondrán a disposición de los órganos de participación de la comunidad educativa para su conocimiento y debate.

4. Con el objeto de comprobar el grado de adquisición por el alumnado de las competencias básicas a lo largo de la enseñanza obligatoria, las Administraciones educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, realizarán periódicamente pruebas diagnóstico a muestras significativas de alumnos escolarizados en el último curso de la educación primaria y en el último curso de la educación secundaria obligatoria. Los resultados de tales pruebas proporcionarán información indispensable para evaluar el funcionamiento del sistema y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes.

5. Las Administraciones educativas garantizarán, a través de los órganos y servicios correspondientes, que todos los centros sostenidos con fondos públicos desarrollan su actividad en condiciones de igualdad, especialmente en lo relativo a escolarización del alumnado, gestión democrática, control social de los fondos públicos y condiciones laborales y de acceso del profesorado.

6. Los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a los centros docentes, al profesorado y al alumnado y sus familias, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación. Asimismo, ejercerán labores de supervisión y control de los centros educativos en sus diferentes ámbitos de actuación. Para su propio funcionamiento tales servicios podrán contar, además de con los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación, con funcionarios docentes adscritos temporalmente a la función inspectora y que accederán a ella previo concurso de méritos y superación de un curso específico de formación teórico-práctica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Lo establecido en la presente Ley se aplicará progresivamente a lo largo de seis años a partir de su entrada en vigor.

Segunda. En el plazo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno de cada Comunidad Autónoma presentará un Libro Blanco sobre la situación educativa en su ámbito competencial. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación deberá colaborar con las correspondientes administraciones educativas, a petición de éstas, para la elaboración de los respectivos Libros Blancos.

Tercera. En cada Comunidad Autónoma, a partir de los datos y análisis de su Libro Blanco y del debate social que en torno al mismo se promueva, el Gobierno respectivo elevará a la Cámara Legislativa de su Comunidad un Proyecto de Ley de Calidad para su ámbito competencial.

Cuarta. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá aprobarse en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Contendrá las actuaciones de calidad previstas, junto con un calendario de aplicación en cuatro años y una memoria económica que detalle el incremento de gasto educativo necesario para cada año de aplicación y la consolidación, en su caso, al final del proceso.

Quinta. La financiación de las actuaciones contenidas en la Ley de Calidad de cada Comunidad Autónoma será asumida parcialmente desde los Presupuestos Generales del Estado con carácter finalista, en una cantidad comprendida entre uno y dos tercios del total. Para la determinación de la financiación exacta, desde los Presupuestos Generales del Estado, que corresponda a cada Comunidad Autónoma, se estará a lo dispuesto en el Convenio que firmará el Gobierno de cada Comunidad con el Ministerio de Educación , Cultura y Deporte, previo estudio en la Conferencia Sectorial de Educación y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, atendiendo con mayor proporción a aquellas Comunidades que presenten mayores déficit educativos en lo que se refiere a factores de calidad y mayores tasas de fracaso escolar.

Sexta. La financiación acordada en cada Convenio se realizará en cuatro anualidades consecutivas, a partir de la aprobación de las respectivas Leyes de Calidad autonómicas, y quedará consolidada a excepción de las partidas que correspondan a inversión nueva. La cantidad que se destinará a estos fines desde los Presupuestos Generales del Estado supondrá un incremento anual en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cada uno de los cuatro ejercicios previstos, como máximo, de una décima del PIB correspondiente a ese año.

Séptima. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluirá en sus Presupuestos las partidas necesarias para llevar a cabo las actuaciones previstas en la presente Ley en Ceuta y Melilla y en los demás centros educativos que sigan bajo su dependencia administrativa.

Octava. En el plazo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno encargará al Con-

sejo de Coordinación Universitaria la elaboración de un Informe, según lo previsto en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Universidades, a los efectos de transformar las enseñanzas correspondientes a los diferentes títulos de Maestro en una titulación con nivel de licenciatura.

Novena. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluirá un apartado específico sobre la aplicación de la presente Ley en el preceptivo informe anual ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y ante la Comisión de Educación, Universidades, Investigación y Cultura del Senado, según establece la Disposición Adicional Tercera, punto cuatro, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. En tanto se mantenga vigente el actual régimen de conciertos educativos, las medidas para favorecer la calidad de la enseñanza contenidas en esta Ley podrán ser extensivas a los centros privados sostenidos con fondos públicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 48 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, así como las condiciones que se recogen en el artículo 9, apartado 5, de la presente Ley.

Segunda. Mientras no se revise el actual Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español, así como los suscritos con otras confesiones religiosas, las enseñanzas de religión en los distintos niveles educativos se impartirán fuera del horario escolar y, en salvaguarda del artículo 16, punto 2, de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas cursado o no.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza (121/000104) de devolución al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.—**Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga,** Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

ENMIENDA NÚM. 21

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Enmienda a la totalidad, de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza

Se propone con la presente enmienda de totalidad la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto legislativo tramitado al Congreso acomete una reforma profunda del sistema educativo vigente, afectando, sustancialmente, a tres leyes orgánicas: Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG).

La razón aducida por el Gobierno del Estado para justificar la necesidad de dicha reforma es el elevado índice de fracaso escolar de los alumnos, cuyos conocimientos estarían por debajo de la media europea.

La modificación legislativa proyectada trataría, según declara su exposición de motivos, de corregir las deficiencias observadas y de lograr una educación de calidad para todos. Esa calidad se alcanzaría por medio de las siguientes medidas:

1. Fomentando la llamada «cultura del esfuerzo», como garantía del progreso personal, «porque sin esfuerzo no hay aprendizaje». De ahí que en la ESO se elimine el sistema de promoción automática, por considerar que a esa edad (doce años) es cuando se consolidan los hábitos de autoaprendizaje y disciplina.
2. Orientando el sistema educativo hacia los resultados e intensificando los procesos de evaluación. Por ello, se establece una Prueba General de Bachillerato,

de ámbito estatal, objetiva y externa, en paralelo con la práctica habitual en los países de la Unión Europea, prueba que, junto al expediente académico, dará lugar a la obtención del título de Bachillerato, necesario para acceder a los estudios universitarios.

3. Reforzando el sistema de oportunidades. Ésta es la razón apuntada para el desarrollo de los itinerarios educativos a partir del 3.º curso de ESO, entendiendo que los itinerarios son un modo de conseguir un sistema educativo más inclusivo, dando solución al modelo de la escuela comprensiva, donde todos/as los/as alumnos/as deben estudiar un programa común, matizado con medidas de atención a la diversidad.

4. Elevando la consideración social del profesorado, reforzando su formación, su prestigio social y articulando una carrera docente.

5. Desarrollando la autonomía de los centros educativos.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) considera que son muchos los aspectos criticables del proyecto de ley que justifican su devolución al Gobierno.

a) En primer lugar, porque el proyecto de ley no es conforme con el bloque de constitucionalidad, al inmiscuirse en ámbitos reservados a la competencia de las CCAA.

La futura Ley Orgánica de Calidad de la Educación comporta la apelación por el Estado a varios títulos competenciales recogidos en la disposición final octava del proyecto (artículo 149.1.1, 18 y 30 de la Constitución).

El título de la norma y una mera lectura de su articulado, evidencian que el proyecto de ley se inscribe, al menos, en dos ámbitos materiales: La enseñanza y el régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes.

En materia de enseñanza, el artículo 16 del EAPV ha atribuido a la CAPV la competencia plena para la regulación de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 CE y las Leyes orgánicas que lo desarrollen, así como de las facultades que el artículo 149.1.30 CE reserva al Estado y de la alta inspección.

Las competencias que el artículo 149.1.30 de la CE atribuye al Estado se refieren, de un lado, a «la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales», competencia que atribuye al Estado la facultad para determinar los contenidos mínimos o comunes de los programas y planes de estudios, los niveles, ciclos y cursos en que se ordenen los estudios y los requisitos para cursarlos. Sin embargo, dicha competencia normativa no excluye la intervención normativa autonómica en el concreto aspecto de cumplimentación de los programas de enseñanza conducentes a la obtención de un título académico oficial (STC 87 y 88/1993, de 27 de octubre).

De otro, al dictado de las «normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en la materia», esto es, las líneas o principios generales y los mínimos en las decisiones fundamentales para el desarrollo «directo» del 27 CE, que la normativa autonómica deberá respetar.

De una interpretación integrada de ambos preceptos puede afirmarse que en materia de enseñanza la CAPV ha asumido todas las competencias no reservadas al Estado por el artículo 149.1.30 de la CE.

Además, la CAPV ostenta competencia exclusiva en materia de ordenación de su función pública, en virtud del artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía, competencia que, sin embargo, está limitada por la que el artículo 149.1.18 de la CE reserva al Estado para el dictado de las bases de régimen estatutario de los funcionarios.

En el ejercicio de sus competencias, la CAPV ha establecido su modelo de escuela pública vasca y ha ordenado sus cuerpos docentes no universitarios, mediante las leyes autonómicas 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, y la Ley 2/1993, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma Vasca.

Ocurre, sin embargo, que el proyecto de ley desarrolla el derecho fundamental a la educación, pero la utilización de la reserva orgánica se extrema de tal manera, hasta el punto de convertir en orgánica la mayoría del proyecto, aun cuando su conexión con el derecho fundamental sea remota.

Desde esta perspectiva, entendemos, tal y como lo ha declarado de manera reiterada el Tribunal Constitucional, que únicamente deben incluirse en el ámbito de reserva de la Ley Orgánica la determinación de los elementos esenciales relativos a la titularidad del derecho a la educación, y que dicha reserva de Ley Orgánica no debe impedir que los legisladores no orgánicos, tanto el estatal como el autonómico, puedan concretar o extender esa titularidad, respetando, obviamente, lo establecido por el legislador orgánico. En definitiva, únicamente las disposiciones contenidas en el proyecto de ley orgánica que encierren «normas básicas para el desarrollo del artículo 27» son las que marcan el límite infranqueable para las disposiciones autonómicas.

En este caso, sin embargo, es fácil detectar en la norma preceptos declarados como orgánicos, que en modo alguno pueden pensarse que formen parte intrínseca del núcleo básico del derecho fundamental a la educación.

A juicio del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), son muchas las previsiones del proyecto de ley

que vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. En concreto, la regulación proyectada en materia de becas y ayudas al estudio, premios y reconocimientos, programas de cooperación, educación preescolar; evaluación general de diagnóstico en Educación Primaria y Secundaria, formación del profesorado, alta inspección, libros de texto, plantillas de los Cuerpos de Catedráticos y temarios de las pruebas de acceso a dichos cuerpos, entre otras.

b) En segundo lugar, la opción normativa que se plasma en el proyecto de ley orgánica vulnera, también la Constitución no sólo desde la óptica de distribución de competencias, sino también, por desconocimiento o infracción del núcleo esencial del artículo 27 de la CE.

La futura Ley, pese a su denominación, parece perseguir más la segregación que la calidad, salvo que entienda que la segregación mejora el rendimiento de los alumnos y, en definitiva, la calidad.

Así, de acuerdo con la regulación proyectada, los alumnos de la ESO, al final, no van a poder elegir de acuerdo con sus preferencias, y se les va a separar en función de su rendimiento.

También se advierte el carácter segregador de la reforma en el tratamiento que la Ley da al alumnado extranjero, alumnado superdotado intelectualmente y alumnado con necesidades educativas especiales. Los primeros son tratados en la Ley como un obstáculo para conseguir la óptima calidad del sistema educativo, y, por ello, se les excluye del mismo. Los superdotados podrán acabar escolarizados en centros especiales al igual que alumnos con necesidades educativas especiales, dando así la Ley un giro a las posturas anteriores a la LOGSE, que se caracteriza, precisamente, por su carácter integrador y de respeto a la diversidad.

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entiende, por lo expuesto, que dicha regulación podría vulnerar el derecho a la educación, en condiciones de igualdad, reconocido a todos en el artículo 27.1 de la CE, dado que el sistema educativo debe de ofrecer una educación de calidad para todos.

Por otro lado, el proyecto de ley incorpora como criterio para la admisión de alumnos en las enseñanzas no obligatorias el criterio del «expediente académico», y prevé también la posibilidad de que los centros de especialización curricular puedan incluir criterios complementarios acordes con las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas competentes. De este modo se eleva a la categoría de Ley la posibilidad de excluir por medio del expediente a los estudiantes que no sean todo lo brillantes que se desea.

Con este nuevo criterio, en el fondo, se está negando la elección de centro, y en definitiva, la elección del tipo de educación. Si estamos ante criterios que se establecen para la selección de alumnos por carencia de plazas, los mismos deben ser objetivos y no pueden suponer, como es el caso, una traba para la elección inicial del centro. Por ello, entendemos que dicha previsión puede reputarse inconstitucional por infracción del 27.1, en relación con el 53.1 de la CE, interpretado de conformidad con el artículo 14 CE, en cuanto que no se respeta el contenido esencial del derecho a la libre elección de centro, al imponer unas prioridades carentes de justificación objetiva y razonable.

c) En tercer lugar, el proyecto de ley orgánica atribuye al Gobierno del Estado amplias potestades normativas para desarrollar y ejecutar sus mandatos.

Ese excesivo afán reglamentista, que busca, básicamente, la uniformidad, sólo constituirá una opción legítima si posibilita un desarrollo real por las CCAA al objeto de que éstas puedan configurar, mediante un marco normativo propio, el modelo educativo que responda mejor a sus peculiaridades. El sistema educativo debe ser homologable pero no homogéneo.

d) En cuarto lugar, es fácil, también, detectar que la idea que impregna la reforma educativa consiste en una visión del Estado español, que atiende a su integración en la Unión Europea, pero que olvida el obligado respeto y conocimiento de su diversidad interna, y el marcado carácter pluricultural y plurilingüe de su sistema educativo.

Llama poderosamente la atención que la Ley no reconozca como derecho básico de los alumnos el derecho a ser educado en la lengua propia de la CA, ni que la capacitación plurilingüe de los alumnos figure como factor de calidad del sistema educativo.

En este sentido, conviene recordar que la cooficialidad del euskera y castellano implica, en palabras del TC (STC 88/1983), que todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas, y ello supone que las dos lenguas han ser enseñadas en los centros escolares de la Comunidad con la intensidad que permita alcanzar ese objetivo, deber que deriva no sólo del EAPV (artículo 6.1), sino también de la CE (artículo 3.2).

Interesa, igualmente, señalar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la potestad autonómica tanto para establecer la obligatoriedad de la enseñanza de su lengua propia en todos los centros de la Comunidad Autónoma como para regular la exclusión de dicha obligación (STC 134/1997), así como también la legitimidad para que la lengua propia de una CA se utilice como vehículo «normal» de expresión (que no como lengua única) en las actividades internas y en las de proyección exterior en los centros docentes radicados en aquella CA (STC 337/1994).

e) En quinto lugar, no se advierten medidas específicas para acabar con el fracaso escolar.

f) En sexto lugar, no parece que con la Ley proyectada se cumplan los principios de calidad que esta Ley proclama.

El proyecto legislativo enuncia como uno de los principios de calidad el refuerzo de la autonomía de los centros docentes.

Sin embargo, dicho principio no parece que se cumpla con la modificación legislativa proyectada, que recorta las competencias del Órgano máximo de representación del centro (Consejo Escolar), despojándole de muchas de las decisiones fundamentales que tiene atribuidas, para atribuírselas, en muchos casos, al Director, que refuerza, así, su autoridad.

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) considera que para garantizar la necesaria autonomía de los centros docentes resulta necesaria la participación de todos los sectores de la comunidad escolar en la toma de decisiones más importantes del centro.

Además, del texto del proyecto nada indica que la autonomía de los centros, en su vertiente de gestión económica, se vea reforzada, limitándose el proyecto de ley a realizar una remisión a la normativa vigente.

g) En último lugar, se desconoce el coste de la reforma, su incidencia en la enseñanza pública y en la concertada, y su financiación, cuyo conocimiento resulta necesario de cara a valorar el interés público de la medida legislativa proyectada.

En conclusión con lo expuesto, y aun cuando consideramos que la reforma educativa puede ser necesaria, entendemos que la opción normativa que se plasma en el proyecto de ley orgánica debe ser rechazada. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) aboga por una Ley negociada con todos los sectores implicados, que busque el mayor consenso posible en la comunidad educativa y en el conjunto de la sociedad (al objeto de que el modelo educativo que se implante pueda perdurar), que respete la diversidad y reconozca la realidad cultural y sociolingüística de las CCAA, así como sus competencias, para poner en vigor una Ley de Calidad de la Enseñanza no universitaria asentada en bases y principios de calidad significativamente distintos a los que se definen en este proyecto de ley del Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (núm. de expte. 121/000104).

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.—**Begoña Lasagabaster Olazábal,** Diputada.—**Francisco Rodríguez Sánchez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 22

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

Perspectiva competencial

La Constitución atribuye al Estado «la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia».

Por su parte, el artículo 16 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece que, «en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía».

Éste es el marco competencial en el que se debe incardinar el proyecto de ley que ahora se discute. De él se infiere con claridad que la competencia del Estado en materia educativa tiene carácter de mera ordenación básica (excepto en el apartado de títulos académicos y profesionales), a pesar de lo cual el texto presentado por el Gobierno incurre en una permanente extralimitación de las competencias estatales.

La doctrina consolidada del Tribunal Constitucional es clara a la hora de entender que la definición de lo básico no puede quedar a la libre disposición del Estado, y que al contenido de estas normas sólo le corresponde la función de «definir los principios normativos generales», siendo su desarrollo y concreción competencia de las Comunidades Autónomas.

Dicho de otra forma, el Estado está obligado, a la hora de ejercer sus competencias normativas básicas, a establecer un marco lo suficientemente flexible como para que las CCAA con competencias de desarrollo tengan margen suficiente como para adoptar políticas propias, en función de sus necesidades sociales y económicas concretas y de acuerdo a criterios políticos propios. En esto se basa, precisamente, el principio de autonomía política consagrado en la Constitución.

Lo cierto es que, en el proyecto de ley que nos ocupa, son múltiples los aspectos en los que se produce

un desbordamiento de las atribuciones del Estado en materia de regulación básica, al descenderse a normativizar cada materia con un nivel de detalle tal que se deja sin espacio a la regulación autonómica. Podemos citar, a estos efectos, materias tan relevantes en el diseño de las políticas educativas como el régimen de becas, la organización y dirección de los centros docentes, la función docente, la inspección educativa, el calendario escolar, etc.

En otros muchos aspectos se recurre a remisiones en blanco o a habilitaciones genéricas o indeterminadas en favor de posteriores desarrollos reglamentarios por parte del Gobierno español. Así, en el Título I del proyecto, «De la estructura del sistema educativo», son diversos los artículos que atribuyen al Gobierno Central el desarrollo de determinada normativa en materias como la educación preescolar (artículo 9.2), los itinerarios (artículo 25.5), los programas de iniciación profesional (artículo 26), el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (artículo 30.2), la organización del Bachillerato (artículo 34.4), el título de bachiller (artículo 36.1), la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (artículo 37.5), etc.

A nuestro entender, el texto que ahora se presenta es otro claro ejemplo de la voluntad de involución autonómica que el Gobierno español viene demostrando en todas aquellas materias en las que va teniendo ocasión de incidir, tanto mediante su actividad de proposición legislativa como a través de su potestad de desarrollo reglamentario. El objetivo parece ser, en todo momento, la limitación, más allá incluso de los mandatos constitucionales, de las competencias que vienen ejerciendo las instituciones vascas, en un afán centralizador propio de tiempos que creíamos ya superados.

Perspectiva educativa

Desde Eusko Alkartasuna consideramos que el Proyecto de Ley de Calidad de la Educación nos presenta una ley reduccionista que equipara la calidad con los resultados, cuando el sistema educativo debería recoger también los procesos, y que no se basa en una evaluación seria y rigurosa del sistema educativo actual, apoyándose en juicios de valor que no tienen fundamento ni están contrastados en ningún tipo de estudio.

Siempre es conveniente hacer balance del sistema educativo para planificar actuaciones futuras, pero en ese análisis deben figurar no sólo los aspectos negativos, sino también los logros, para reforzarlos. En este sentido, debemos señalar que en el proyecto de ley predomina un enfoque puramente negativista, que incide únicamente en los aspectos negativos del sistema educativo para justificar los cambios que se pretenden introducir, y obvia lo que de positivo pudiera tener el sistema vigente.

En lo que a la Comunidad Autónoma Vasca respecta, hemos de resaltar que nuestras instituciones llevan ya más de diez años realizando un gran esfuerzo humano y presupuestario en la totalidad de las materias que el Proyecto de Ley de la Calidad de la Enseñanza pretende abordar, tales como el mapa escolar, la adecuación de las instalaciones, el desarrollo de la normativa y el currículum, la atención a la diversidad, la atención a las necesidades educativas especiales, la euskaldunización o la formación del profesorado. Podemos afirmar, por tanto, que el proyecto de ley que ahora se presenta no responde, de ningún modo, a la realidad ni a las necesidades de Euskadi, puesto que parte de un análisis y está llamada a servir de respuesta a situaciones muy distintas a la nuestra.

Fracaso escolar

El proyecto, cuyo rechazo se solicita, parte de la consideración de una serie de elementos entre los que destaca la tasa de fracaso escolar (en torno al 26 por 100), un dato que coloca a los alumnos del Estado por debajo de la media de los países europeos más avanzados. En este sentido, es conveniente señalar que, a la hora de establecer los marcos normativos y las políticas concretas, es imprescindible tener en cuenta las diferencias que, en cuanto al índice de fracaso escolar, se dan entre las diferentes nacionalidades y Comunidades Autónomas, y con respecto al conjunto del Estado español, para extraer así las conclusiones pertinentes.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra la tasa de fracaso escolar es muy inferior a la media estatal (19 por 100 en la Comunidad Autónoma Vasca e incluso inferior en la Comunidad Foral de Navarra), debiéndose, en todo caso, señalar que el hecho de no estar a la cabeza no califica ni descalifica por sí mismo a un país o comunidad. Cuando nos referimos al sistema educativo, lo que hay que valorar es la situación de partida, el progreso que experimenta esta situación inicial, y el esfuerzo implicado en ese progreso. En tan sólo veinte años de autonomía, el sistema educativo vasco ha experimentado un enorme avance en este como en otros aspectos, hasta colocarse por delante de la media estatal.

Si bien es cierto que no cabe aceptar que la tasa de fracaso supere el 25 por 100 de la población, aunque esa tasa fuera inferior, la situación seguiría siendo grave. Además, la comparación de los resultados escolares a nivel estatal y los resultados de otros países europeos debería hacerse no en términos absolutos, sino incluyendo otras variables como, por ejemplo, el tanto por ciento del Producto Interior Bruto que esos países destinan a educación, y su comparación con los datos del Estado español. Lo contrario supone abordar los problemas del sistema educativo con una superficialidad casi irresponsable.

Así, a modo de ejemplo, se puede indicar que en la actualidad el porcentaje del Producto Interior Bruto que se destina a la educación en el Estado español es del 4,4 por 100, mientras que en el Reino Unido es del 5,6 por 100, con un incremento del 50 por 100 de la inversión por alumno en ocho años.

Desde nuestro punto de vista, si se hacen comparaciones, habría que hacerlas en función de todas las variables que influyen en el resultado del fracaso escolar, y no únicamente en el resultado.

Deterioro del clima de convivencia

Otro de los aspectos que pretendidamente justifican el proyecto es el deterioro de la convivencia, algo que conviene matizar. En la Comunidad Autónoma del País Vasco el clima de convivencia en los centros goza de normalidad, especialmente en Infantil y Primaria, y en Formación Profesional. Conviene señalar que en la CAPV se está desarrollando un programa específico de Educación para la Convivencia y la Paz que incluye un estudio riguroso sobre la convivencia en los centros escolares de nuestra comunidad.

Debe corresponder a cada Administración educativa promover planes y programas en este campo, de forma que los centros escolares puedan planificar de forma sistemática caminos que favorezcan la creación de un clima de convivencia positivo en toda la comunidad educativa. A convivir se aprende conviviendo, por lo que la solución debería venir a través del fomento de los mecanismos de participación en la toma de decisiones, el reparto de poderes, sistemas de resolución de conflictos, normas de convivencia, etc... La experiencia confirma que el aumento en la participación del alumnado disminuye la conflictividad, dado que cuando más se involucran en la vida del centro, más responsabilidad individual y colectiva desarrollan.

Desprestigio de la figura del profesor

El que la figura del profesor se haya relativizado, al igual que otras figuras sociales de autoridad, debido a diversos factores que no dependen exclusivamente del marco escolar, no equivale a que de forma general la figura del profesor se haya desprestigiado. De hecho, no se ofrecen datos sobre este fenómeno, ni justificación o explicación científica y, en todo caso, mostramos nuestras dudas de que se pueda elevar el prestigio del profesorado reforzando mecanismos de autoridad.

Director

Es probable que haya que revisar sus funciones, pero no en la dirección que apunta el texto, que quiere profesionalizar la labor del Director y convertirlo principalmente en un representante de la Administración en el centro. Se pretende reforzar el liderazgo y autoridad del director, lo cual es difícil si no se cuenta con la colaboración de quienes tienen que llevar a efecto las funciones encomendadas. No cabe confundir autoridad con disciplina impuesta.

En cuanto a la elección del Director, consideramos que tiene que seguir siendo el Consejo Escolar, y no una comisión mixta Administración-Consejo, quien proceda a su elección. La intervención de la Administración no garantiza, por sí misma, un mayor acierto en la elección y, por el contrario, establece un vínculo de dependencia con la Administración que contradice el principio de autonomía del centro.

Falta de esfuerzo del Alumnado consecuencia de la promoción automática

El esfuerzo es necesario en cualquier empeño humano, también en el aprendizaje, pero no se puede afirmar que sea su única o principal fuente. Esto supondría negar el valor educativo y de aprendizaje del juego o de la participación en la vida familiar y social. En todo caso, consideramos que es un simplismo derivar la falta de esfuerzo del alumnado sólo de la promoción automática. La repetición de curso no es ni el único medio, ni el mejor para conseguirlo.

Es esencial que el paso de curso se establezca con criterios personalizados, y no con relación a un estándar de conocimientos y destrezas. La evaluación continua debe ayudar a que en cada curso el alumno supere todos los controles de conocimientos y pueda pasar al curso siguiente. Es necesario aportar más y mejores medios para evitar que los alumnos lleguen al final de cualquier curso sin haber logrado los objetivos previstos.

El texto contempla la eliminación de la «promoción automática», justificando como imprescindible la Prueba General de Bachillerato (PGB). Se pretende que la escuela asuma los valores individualistas que imperan en la sociedad, proponiendo de soslayo una escuela exclusivamente competitiva, lo cual atentaría contra los principios generales de la educación. La concepción del sistema educativo que subyace en el texto es el de la selección, lo cual supone, a nuestro entender, una vuelta hacia atrás hacia planteamientos escolares y sociales de un pasado que creíamos ya felizmente superado.

Itinerarios

En el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria se proponen dos itinerarios, y en el cuarto, tres. A nuestro entender, los itinerarios constituyen una medida simplista que atenta contra la autonomía de los centros. En nuestro caso concreto, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, es inviable la implantación de dos-tres itinerarios en un sistema con tres modelos linguísticos, por el alto coste, sobre todo en centros

pequeños. A esta razón de inviabilidad práctica se une otra razón de carácter educativo, ya que los grupos que surgirían serían tan pequeños que se empobrecerían enormemente las relaciones interpersonales en el alumnado y la capacidad de socialización y aprendizaje del grupo.

La elección de itinerarios se adelanta a los catorce años cuando aún no se está en condiciones de tomar una decisión tan importante. Muchos alumnos precisan más tiempo para llegar al grado de madurez necesario, por lo que podrían verse abocados a optar por itinerarios de segundo orden en un momento prematuro. Esto sucede sobre todo en quienes provienen de entornos familiares socialmente desfavorecidos, que serán, en consecuencia, los más perjudicados por esta medida. El resultado será una educación más elitista que, a la larga, redundará en perjuicio de todos.

Tampoco encontramos justificación al hecho de adelantar a los quince años los programas de iniciación profesional, ya que con ello se perfila un nuevo itinerario sin nombrarlo como tal, destinado al alumno fracasado o con poca motivación, lo que contradice el derecho y deber de los menores de dieciséis años a seguir las enseñanzas básicas. De nuevo se lanza el mensaje de que a los ciclos formativos en grado medio van los alumnos menos capaces, con lo que la Formación Profesional se verá perjudicada.

En otro orden de cosas, con este proyecto se vuelve a la evaluación centrada en los conocimientos propios de cada asignatura y se pierde la referencia al desarrollo de capacidades y de las habilidades básicas. No resulta congruente que, en una enseñanza con objetivos de desarrollo de capacidades y habilidades básicas, más que de conocimientos concretos, si no se han superado los objetivos durante el curso, éstos puedan superarse en una prueba o examen extraordinario tras un breve tiempo, generalmente poco aprovechado.

Prueba General de Bachillerato

No es congruente una evaluación continua y diferenciada con el establecimiento de una Prueba General de Bachillerato (PGB) que viene planteada como mero mecanismo de control, y no como herramienta de mejora. Se ha demostrado que las pruebas generales son de poca ayuda para conocer el nivel real de conocimientos de los alumnos, con el riesgo añadido de que los dos años de Bachillerato se conviertan en una preparación de la prueba y se olviden sus objetivos específicos. Con este proyecto quedan en entredicho, en consecuencia, tanto la evaluación continua como la autonomía curricular de cada claustro y de cada Comunidad Autónoma.

Admisión de Alumnos/as

En cuanto a la admisión de alumnos y la posibilidad de tomar en consideración el expediente académico, supone aumentar la dualidad del sistema educativo y esconde una visión segregadora de la educación que puede empujar a los alumnos con necesidades educativas especiales y a la mayor parte del alumnado inmigrante a unos determinados centros públicos, mientras que los centros privados se poblarían de un alumnado perfectamente seleccionado.

Consideraciones finales

Desde un punto de vista competencial, nos encontramos ante un texto que excede de lo «básico» y rebasa, en consecuencia, las competencias que la Constitución atribuye al Estado en esta materia. En el proyecto de ley se recurre para ello a dos mecanismos diferentes: Por un lado, se regulan al detalle numerosas materias, en un ejercicio de extralimitación inadmisible que no deja margen alguno para el establecimiento de un marco normativo propio en las Comunidades Autónomas; por otro lado, se incluyen continuas remisiones en blanco y habilitaciones genéricas o indeterminadas en favor de la Administración Central para su posterior regulación reglamentaria.

Desde la óptica educativa, nos encontramos ante un texto tremendamente reduccionista, que limita su visión sobre la educación a la enseñanza de aspectos cognitivos, marginando la concepción del desarrollo integral del alumnado. La interpretación del acto educativo como una actividad instructiva reduce la figura del profesorado a desempeñar un papel de mero instructor, y al alumno a la posición de aprendiz, en la que el profesor ya no es facilitador de aprendizajes, sino mero transmisor de conocimientos. No se apela al desarrollo de destrezas y habilidades o a la realización como persona.

Por otro lado, el texto esconde una visión segregadora de la educación, educación que acentúa su función de selección social o clasificación, creando las condiciones para la dualización de la enseñanza.

La pretensión de conseguir elevar la calidad educativa endureciendo los niveles de exigencia en los estudios y potenciando los exámenes y sistemas de control puede conducir a un resultado opuesto al pretendidamente buscado, dado que puede conducir a la desmotivación y al abandono, incrementando el fracaso escolar.

En este sentido es muy acertada la expresión que se recoge en el informe del Consejo Escolar de Euskadi sobre el documento de bases para una Ley de Calidad de la Educación, que muy gráficamente expone que «la preparación de nuestros jóvenes no se soluciona poniendo vallas más altas en la carrera, sino enseñando a saltar». No saben más los que más se examinan, sino los que estudian más y en mejores condiciones, siendo necesario, en consecuencia, un aumento del gasto destinado a educación.

Por todo ello, las presentes consideraciones justifican la interposición de la presente enmienda a la totalidad con solicitud de devolución del Proyecto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado Andalucista don José Núñez Castain, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente enmienda de totalidad por la que se propone la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (núm. expte. 121/000104).

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.—**José Núñez Castain,** Diputado.—**Francisco Rodríguez Sánchez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 23

PRIMER FIRMANTE:
Don José Núñez Castain
(Grupo Parlamentario Mixto)

Exposición de motivos

Era necesario que el Gobierno presentara un Proyecto de reforma en la educación habida cuenta de los numerosos cambios sobrevenidos en la sociedad tras la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990 y el elevado índice de fracaso escolar, sin embargo, el grado de contestación que ha lanzado la comunidad escolar y los agentes sociales implicados no es el mejor augurio para la implantación de esta Ley. Cualquier mejora del sistema educativo demanda una gran apuesta económica. Es imprescindible la reforma pero desde la calidad real y desde los medios e infraestructuras necesarios.

Los itinerarios a edad temprana propuestos por el Proyecto pueden generar cierta discriminación y generar diversos tipos de centros según las zonas y su alumnado por itinerarios. Por otro lado, la variación en el estatuto de la asignatura de Religión pasándola a rango de materia evaluable y computable a efectos de cálculo de nota media es un retroceso claro en un Estado no confesional.

El Gobierno pretende reformar el actual sistema educativo sin haber obtenido el máximo consenso y apoyo previo para que pueda desarrollarse con la mayor garantía de éxito y estabilidad política posible. El Gobierno ha obviado las ideas y las propuestas de las Comunidades Autónomas. Es una Ley de retroceso y contrarreforma que desprecia la opinión de los ciudadanos.

El Proyecto deja en el aire la financiación de un pilar básico de desarrollo de nuestra sociedad, como es el sistema educativo, al no establecer un mecanismo que concrete la financiación, como sería la obligatoriedad de todas las Comunidades Autónomas de invertir un porcentaje mínimo del Producto Interior Bruto para que todos los alumnos del Estado tengan las mismas oportunidades y permita un equilibrio educativo interterritorial. Así, el Estado compensaría económicamente a las Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra Andalucía, que han partido con desventaja respecto a otras en el proceso de transferencias educativas.

También se echa en falta en el Proyecto la valoración y el refuerzo del prestigio, dentro de la carrera profesional docente, de la figura «imprescindible» del maestro/profesor tutor, que debería ser reconocido como mérito y llevar implícito mayores complementos económicos, así como la regulación en la carrera profesional docente de la posibilidad de acceso a impartir la docencia en las Universidades. Tampoco se refuerza el papel de la inspección educativa como órgano de control de las distintas Administraciones educativas, garantizando su independencia de los órganos políticos y como garante de las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación de calidad.

Por todo ello, el Partido Andalucista presenta esta enmienda de totalidad a este Proyecto de Ley Orgánica, solicitando su devolución al Gobierno.

A la Mesa de la comisión de Educación, Cultura y Deporte

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, acompañado de la correspondiente memoria económica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.—**María Teresa Fernández de la Vega Sanz,** Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

ENMIENDA NÚM. 24

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS

Preámbulo

Conseguir que el conjunto de la población pudiera acceder a la escuela ha sido, durante muchos años, el objetivo prioritario de amplios sectores de nuestra sociedad. Lo que hace tan sólo cincuenta años era una ilusión comenzó a hacerse realidad con la Ley General de Educación (LGE) de 1970. Más tarde, con la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, se amplió a diez cursos la escolarización básica y obligatoria. Hoy, en los inicios del siglo XXI, se puede afirmar que la vieja aspiración se ha hecho realidad: El conjunto de la población en edad escolar accede a la escuela desde una edad temprana; la mayoría, además, prosigue su formación durante, al menos, diez cursos.

La Constitución de 1978 incorporó, en su artículo 27, un conjunto de principios referidos al sistema educativo que los distintos Gobiernos democráticos han desarrollado desde entonces. En particular, se regularon el derecho a la educación, la participación de padres, profesores y alumnos en nuestro sistema educativo y el régimen de conciertos para los centros privados. En esos años se llevó a cabo la expansión más importante de la educación en nuestro país, que alcanzó tasas de escolarización desconocidas hasta entonces en el Bachillerato, la Formación Profesional y la Universidad, de la mano de una ambiciosa política de creación de puestos escolares y de un creciente número de becas. Esta política ha permitido el acceso a los niveles postobligatorios de la educación de sectores sociales tradicionalmente marginados de ellos.

No podemos, sin embargo, considerar el acceso a la educación y la extensión de la educación básica como un fin en sí mismo. No podemos declararnos satisfechos con que la práctica totalidad de los niños y niñas y de los jóvenes de nuestro país estén escolarizados al menos durante diez cursos. Alcanzado este objetivo, es preciso avanzar en la dirección de ofrecerles una educación de mayor calidad, una educación que ayude a todos los alumnos y a todas las alumnas, sin restricciones ni discriminaciones de ningún tipo, a aprender y desarrollarse, a formarse como personas y como ciudadanos, a construir y desplegar su propio proyecto de vida en el marco de una sociedad democrática. Más educación, pero también mejor educación para todos y todas sin excepciones; porque, en lo que concierne a la educación básica, podremos decir que el sistema educativo ofrece una educación de calidad sólo si ésta se garantiza a todo el alumnado.

Pero, hoy, cuando hablamos de garantizar una educación de calidad, debemos ser conscientes de la transformación que ha sufrido nuestra sociedad, cuya fisonomía pero también cuyas demandas y expectativas se ven sometidas a continuos cambios. Es por ello por lo que debemos revisar las directrices que, tradicionalmente, han guiado nuestro sistema educativo, que ha estado dirigido, fundamentalmente, hacia el aprender a hacer, al desarrollo de conocimientos, aptitudes y habilidades útiles para el ámbito profesional. Con ser importante esta dimensión, una apuesta de futuro pasa por ampliar el concepto y comenzar a hablar de aprender a conocer. Superando, pues, los límites de la enseñanza para toda la vida, nuestro sistema educativo debe propiciar, desde las edades más tempranas, una enseñanza durante toda la vida. La tercera dimensión de la educación, aprender a ser, también exige una revisión. Nuestros niños y jóvenes viven, porque así lo ha querido nuestra Constitución, en diferentes Comunidades Autónomas, dentro de un Estado común, que es España, que forma parte de la Unión Europea. Su formación integral no puede olvidar esos tres ámbitos, ni los valores de tolerancia y respeto mutuo que permiten la convivencia en la sociedad plural en la que crecen.

Los ciudadanos han de ser educados para el cambio. Debemos pensar en la formación para crear ciudadanos activos y no meros espectadores. Así estaremos anticipando los desequilibrios con los que a menudo nos sorprende el mercado y la sociedad en su conjunto. Si no estamos preparados para el cambio, si no tenemos la capacidad previa para adaptarnos a él, el sistema educativo estará siempre instalado en una crisis permanente y las respuestas que pueda ofrecer serán tardías cuando no anacrónicas. Por ello, habrá que formar individuos creativos, capaces de crear su propio empleo y desarrollar su propia carrera profesional. Ciudadanos cuya aportación suponga siempre un valor añadido. Se trata de educar no sólo para aprender, sino también para aprender a emprender. Ésta es la mejor educación que hoy podemos y debemos facilitar a nuestros niños y niñas, la educación de calidad para todos que espera la sociedad española.

Los nuevos problemas que se detectan en los centros, derivados de una situación educativa cada vez más compleja y cambiante, requieren un análisis profundo para acertar en el tipo de soluciones más adecuadas. Estamos ante un debate acerca de la justicia social de las políticas educativas, sobre los límites de la igualdad de oportunidades, sobre la distribución de los recursos y, en definitiva, sobre las mayores o menores posibilidades de una gran parte de la población de acceder a más y mejor educación.

Dadas las condiciones en que actualmente se desarrolla la vida de la mayoría de los ciudadanos, la educación en general y los centros educativos en particular cubren un campo cada vez más amplio de necesidades que las familias, o bien no pueden o bien no saben atender. La existencia de estas necesidades es percibida por casi todos, independientemente de cuál sea nuestra posición política, religión, raza, sexo, nivel cultural, económico o social. Son necesidades que vienen inducidas, en buena medida, por el desarrollo en nuestro país de la denominada sociedad del conocimiento y son mayores cuanto menores son las capacidades económicas o culturales de los ciudadanos. Por eso, la sociedad tiene puestas muchas esperanzas en la educación.

Precisamente porque las necesidades son mayores, mayor es la exigencia hacia la escuela, que encuentra dificultades para adaptarse a esta nueva situación. Es por ello por lo que cuando el acceso universal a la educación es un hecho en nuestra sociedad, cuando más niños y niñas, cuando más jóvenes que en ninguna otra época van a las escuelas y a los institutos y durante más tiempo permanecen en ellos, se detecta en algunos sectores sociales, y, especialmente, entre el profesorado, una seria y fundamentada preocupación por la salud de nuestro sistema educativo y por su capacidad para garantizar una educación de calidad. Varias son las razones que explican esta situación.

A la escuela de hoy acude todo tipo de alumnos y alumnas, de muy distinta cultura y condición social, con actitudes y aptitudes diferentes, con intereses diversos. Nunca como hoy habían coincidido en las aulas colectivos tan diversos. Y todo eso es así porque esas diferencias existen también fuera de la escuela y la escuela es sólo una parte de la vida del alumnado. Los inconvenientes de atender a un alumnado tan plural, tan diverso, de procedencia tan dispar, con vivencias tan distintas, son evidentes. Sobre todo, si se trata de descartar medidas segregadoras y de favorecer la adaptación e integración de todos.

Pero ese alumnado no lo crean las leyes ni las escuelas. Ése es el alumnado propio de una sociedad como la nuestra. El mismo que tiene el derecho a ser educado y el deber de educarse. Ése es el alumnado que, más allá de sus ricas y múltiples diferencias, debe aprender aquello que en esta sociedad nos es común, nos incluye a todos y nos afecta a todos. Y no cabe duda de que tal pretensión provoca resistencias, conflictos y desinterés. Por ello, debemos ser conscientes de que estamos ante un problema que va más allá de las relaciones entre profesores y alumnos, un problema social y no solamente escolar.

Los alumnos pasan en los centros escolares sólo una parte de su tiempo. En la escuela reciben sólo una parte de la formación y desarrollan sólo una parte del aprendizaje. Aunque, en parte, siempre ha sido así, lo novedoso es la enorme influencia que ejerce la televisión o la información a la que se accede a través de Internet, que son también instrumentos educadores que escapan absolutamente al control de la escuela. En muchos casos, los alumnos pasan gran número de horas con estos otros educadores y les dan más importancia que a la propia escuela. Los valores e ideales que transmite la escuela no coinciden, a menudo, con esas otras experiencias de nuestros jóvenes. Por eso, muchos alumnos se sitúan ante la educación escolar como si se tratara de una actividad ajena a sus intereses y preocupaciones, mostrando, en consecuencia, falta de motivación por aprender e, incluso, en ocasiones, una actitud de abierto rechazo.

Para comprender esta situación en toda su amplitud y complejidad no basta con pensar sólo en lo que ocurre en el tiempo escolar. Es necesario un mayor compromiso social con la educación, que se debe extender a todos los agentes e instituciones que, de una u otra forma, intervienen en la formación de nuestros jóvenes. La educación es, cada vez más, una tarea compartida y su mejora requiere el esfuerzo de todos.

Es importante recordar, por otra parte, que hace treinta años estudiaba en este país la tercera parte de quienes lo hacen ahora. Según los datos de la OCDE, los alumnos más brillantes de hoy saben mucho más que los mejores de entonces y la formación recibida por los alumnos que hoy tienen más dificultades es muy superior a la que recibieron sus homólogos hace treinta años, entre otras cosas porque a los diez o doce años dejaban de estudiar. Por último, resulta evidente que el nivel de formación medio de la población es sensiblemente mejor que el de hace varias décadas.

También es importante tener en cuenta que el clima de los centros escolares ha cambiado mucho en los últimos años. En demasiados casos se sufren situaciones de tensión y de dificultades de convivencia notables y, aunque los factores que aminoren o eliminen estas situaciones conflictivas puedan ser diversos, la eficacia de una u otras medidas dependerá más de la legitimidad que consigan los miembros de la comunidad escolar, en su conjunto, que de cualquier otra posibilidad. En cualquier caso hay que poner los medios para que el alumnado sea formado para convivir en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad. La corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la puesta en marcha de un modelo de dirección escolar apoyado por todos los miembros del centro, reconocido e incentivado, la ampliación decidida de los márgenes de autonomía de los centros, el desarrollo de programas de mediación de conflictos, parecen algunas de las líneas más adecuadas de avance en este sentido.

No cabe duda de que en este contexto social y educativo se incrementan de un modo significativo las tareas y nuevas responsabilidades del profesorado. Las administraciones educativas deben reconocer las dificultades a las que han de enfrentarse día a día, contri-

buyendo a identificar adecuadamente los problemas y las nuevas situaciones y proporcionando los recursos y apoyos necesarios para resolverlos, consiguiendo, de este modo, una mejor motivación de los principales agentes de una buena educación.

Asi mismo, es necesario evitar la concentración excesiva del alumnado con mayores dificultades para aprender en unos determinados centros, ya que esta concentración hace más compleja la acción educativa. Hay que avanzar en la consecución del objetivo de que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan iguales derechos e iguales obligaciones, superando viejos debates entre distintos tipos de centros, en la perspectiva de que todos aquellos que sean sostenidos con fondos públicos cooperen y contribuyan al objetivo de educar a todos entre todos.

Como ya se ha señalado, el reto que se nos plantea, similar por lo demás al que afrontan todos los países de nuestro entorno, es cómo garantizar una educación de calidad para todos los alumnos sin excepción, que fomente el desarrollo y la adquisición de las capacidades básicas, que permita a los alumnos progresar de acuerdo con sus aptitudes y sus intereses, y que les ayude a formarse como personas y como ciudadanos en el marco de una sociedad democrática, plural y compleja como la nuestra.

Pero la mejora de la calidad de la enseñanza exige el compromiso y apoyo de los poderes públicos con el cambio educativo, especialmente en la enseñanza pública. La consideración de ésta como eje vertebrador del sistema educativo y, al mismo tiempo, responsable de hacer efectiva la universalización del derecho a la educación exige que las administraciones educativas le otorguen una atención prioritaria que le permita ofrecer una enseñanza de calidad contrastada.

El incremento presupuestario para hacer frente a las transformaciones que se plantean es indispensable. De esta forma será posible ampliar la oferta de educación infantil, intervenir a tiempo de superar las dificultades de aprendizaje, mediante la adopción de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad en las distintas etapas educativas, establecer planes de intervención para compensar las desigualdades,reforzar los sistemas de apoyo y orientación, ampliar la oferta de formación profesional y los programas de garantía social, extender la oferta educativa a todas las personas adultas, incrementar la autonomía de los centros y reforzar la función directiva, dar un impulso a la participación y corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de los centros, mejorar sus instalaciones, y establecer un nuevo estatuto de la función docente en el que se recojan los derechos y los deberes del profesorado, en el que se establezcan incentivos retributivos y profesionales vinculados al desarrollo de su práctica docente.

Junto con estas medidas es preciso reforzar aquellas otras que permitan el acceso de todos los alumnos a los diferentes niveles educativos en condiciones equitativas: La igualdad en el acceso de los alumnos a todos los centros sostenidos con fondos públicos, la necesidad de que todos ellos escolaricen por igual a los alumnos con necesidades educativas especiales o que pertenecen a minorías étnicas o culturales, el incremento de los programas de educación compensatoria y la especial atención a los centros que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales o que están situados en zonas socialmente desfavorecidas.

A lo largo de estos años de aplicación de la reforma educativa se ha manifestado la necesidad de plantear otras innovaciones para facilitar que los cambios propuestos se lleven a la práctica con plena garantía. Hoy se trata de poder aplicar y profundizar los cambios que la LOGSE propugnaba y no se han podido llevar adelante en su totalidad, de abordar los problemas educativos derivados de cambios en la sociedad española que no se pudieron prever en el momento de la discusión de la Ley y de modificar aquellos aspectos de la LOGSE que la experiencia acumulada en estos años de aplicación aconseja.

Como se ha señalado, el cumplimiento de los objetivos contemplados en la LOGSE, junto con las innovaciones que surgen de la experiencia adquirida, necesitan un compromiso presupuestario que asegure la viabilidad de las propuestas establecidas. Es necesario, por tanto, establecer un amplio acuerdo parlamentario para los próximos cinco años en torno a la financiación de la educación que cree un clima de seguridad en el conjunto de la sociedad y en todos los miembros que forman la comunidad educativa y que genere una mayor confianza en la capacidad de las medidas propuestas para mejorar la calidad y la igualdad de la educación. Un acuerdo parlamentario sobre la financiación de la reforma que permitirá aportar a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema educativo y la permanente mejora de la calidad.

Todo ello para seguir avanzando en la configuración de un modelo que permita dar satisfacción a las demandas de los profesores y a las exigencias de calidad de los alumnos y sus familias, basado en la cooperación entre centros, entre padres y profesores, entre escuela pública, concertada y privada. Un modelo que apueste por la prevención de los problemas y, en consecuencia, por el apoyo a la educación infantil y primaria, por la autonomía de los centros, especialmente en la educación secundaria, para adaptar las escuelas e institutos a la diversidad del alumnado. Un modelo que, tal y como se acaba de aprobar recientemente en la Cumbre de Barcelona, se incline por hacer más atractiva la enseñanza y por la cohesión social, que, de acuerdo con lo que se está decidiendo en otros países de la Unión Europea, aspire a alcanzar tasas de escola-

rización del 80 por 100 en el Bachillerato y del 50 por 100 en la Universidad. Un modelo que refuerce la educación en valores, la tolerancia y la solidaridad, con un profundo compromiso humanista. Un modelo que suponga un incremento del profesorado y de los recursos de nuestro sistema educativo para alcanzar la media europea de gasto público en educación. Un modelo, en fin, que busque el consenso, la participación, el diálogo y el trabajo conjunto de todos los sectores de la comunidad educativa.

Sólo así será posible seguir avanzando en la mejora de la calidad de la educación, que cuente con el mayor apoyo posible, que respete y que, por tanto, comprometa a las Administraciones Educativas y otras instancias y agentes sociales, y que pueda devolver la ilusión y la motivación a los profesores, a los alumnos y a sus familias.

Desde estos principios y orientaciones se formula el texto articulado de la Ley.

En su Título Preliminar se establecen los principios generales que debe contemplar el conjunto del sistema educativo para prevenir el fracaso escolar y mejorar la calidad de nuestra educación.

En el Título I, «De la mejora del rendimiento escolar de los alumnos», se establecen una serie de medidas que se deben desarrollar en las diferentes etapas educativas para intervenir a tiempo de superar las dificultades. Hay que actuar para prevenir las dificultades de aprendizaje del alumnado, para resolverlas cuando se presentan y para desarrollar al máximo posible las capacidades potenciales de todo el alumnado.

En el Título II, «De la compensación de desigualdades», se recogen una serie de medidas de discriminación positiva que se tienen que desarrollar para aminorar las tasas de fracaso escolar en aquellas zonas con una elevada concentración de alumnado con dificultades, las zonas de atención preferente, así como en las zonas rurales que requieren una serie de medidas específicas por parte de las Administraciones educativas. En este Título se contempla también la atención educativa al alumnado inmigrante. La educación de los alumnos procedentes de familias inmigrantes no puede limitarse a la oferta de una plaza escolar en un centro sostenido con fondos públicos. Es preciso desarrollar un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar la integración real de estos alumnos en el sistema educativo español y a compensar sus deficiencias educativas que no permiten, en muchos casos, una escolarización en función exclusivamente de su edad.

En el Título III, el relativo al profesorado, se establecen una serie de medidas relativas a la formación inicial y permanente del profesorado y en torno a alguno de los aspectos que deben configurar un nuevo estatuto de la función docente. Las nuevas exigencias y expectativas de la sociedad española en relación con su sistema educativo han incrementado las tareas y responsabilidades del profesorado. Es preciso, por tanto, mejorar las condiciones en las que los profesores desarrollan su trabajo, revisar su estatus profesional, ampliar las plantillas docentes y reformar la formación inicial de maestros y profesores de secundaria. Todo ello, bajo la premisa de que el éxito de la educación personalizada exige autonomía pedagógica y, consecuentemente, confianza en nuestros docentes. Una confianza que debe traducirse en una alta valoración social de la importante tarea que desarrollan en una sociedad como la nuestra.

En el Título IV, «De la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos», se señala fundamentalmente la necesidad de alcanzar un compromiso con las familias para mejorar la calidad de la educación. El sistema educativo diseñado en la Constitución es, ante todo, un sistema participativo. La educación ha pasado a ser en nuestro país una tarea compartida que afecta a las diferentes Administraciones, a los profesores, a las familias y a los propios estudiantes. El papel que en la sociedad del conocimiento tiene reservado la educación enfatiza este carácter compartido de la tarea educativa: La convivencia en los centros y la educación en valores son temas que afectan a los alumnos, a los profesores y a las madres y padres. Para ello, se establecen una serie de medidas que deberán adoptar los poderes públicos para avanzar de una forma decidida en la colaboración entre familia y escuela, con especial mención a los programas específicos cuyo objetivo es que las familias con hijos con dificultades significativas de aprendizaje puedan colaborar con los centros en la mejora del proceso educativo de sus hijos.

En el Título V, «De la organización y funcionamiento de los centros», se establecen una serie de medidas bajo el principio de avanzar hacia una mayor autonomía para conseguir una educación más personalizada. En la educación obligatoria, los centros no deben tener ninguna autonomía para seleccionar a su alumnado en función de su rendimiento escolar, pero sí tienen que disponer de más autonomía para organizar la mejor respuesta educativa al alumnado que tienen escolarizado. Autonomía curricular, organizativa y en la gestión económica y de personal. Todo ello requiere potenciar la dirección de los centros y disponer de equipos directivos bien formados, con mayor capacidad de decisión y un apoyo más decidido por parte de la Administración.

En el Título VI, «De las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento», se indican las medidas que deben adoptar las diferentes Administraciones para que el sistema educativo sea capaz de dar respuesta a los nuevos retos derivados de la revolución de las comunicaciones y de las propias tecnologías de la información, así como a la necesidad de conocer con mayor profundidad idiomas extranjeros, cada vez más necesarios en el mundo actual. Para ello, se recogen en este título medidas como la revisión y actualización de

los contenidos básicos de las distintas etapas educativas, la informatización de los centros, el desarrollo de planes específicos de formación del profesorado, la experimentación de modelos de centros vinculados total o parcialmente con la enseñanza de los idiomas extranjeros y el establecimiento de convenios con otros países para que determinados centros puedan ofrecer enseñanzas que conduzcan a la obtención de la titulación básica en los países participantes.

En el Título VII, «Del servicio público de educación», se recogen los principios necesarios para avanzar hacia un nuevo modelo de servicio público educativo, basado en el principio de corresponsabilidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos a la hora de educar a todo tipo de alumnado. Si este principio, recogido en la LODE, la LOGSE y la LOPEGCE, se fundamenta por sí mismo, cabe reseñarlo con mayor énfasis en un momento en el que la incorporación al sistema educativo de nuevos alumnos procedentes de la inmigración obliga a un mayor control y exigencia de los servicios públicos ante el fenomenal reto educativo y social que esta realidad implica.

En el Título VIII, «Del sistema educativo del Estado de las Autonomías», se parte de que, una vez finalizado el proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, es necesario redefinir el papel de las distintas instituciones educativas de ámbito estatal para garantizar la coordinación y la cooperación en el sistema educativo español. En ese sentido, se fortalece la Conferencia Sectorial, se dota de mayor contenido a los institutos dependientes del Ministerio de Educación, al tiempo que se apuesta con claridad por un mayor compromiso y unas mayores competencias de los municipios en el ámbito de la educación y, todo ello, desde el enfoque de que una adecuada articulación y cooperación entre las diferentes Administraciones públicas favorece una mejora de la calidad y la equidad en la educación.

En el Título IX, «De la evaluación del sistema educativo», se establece la necesidad de evaluar los aprendizajes del alumnado, los procesos educativos, la tarea del profesorado, la inspección de educación y la propia Administración educativa. Una evaluación científica e independiente que será desarrollada por el Instituto Nacional de Evaluación, cuyos planes de actuación serán aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. A partir de los resultados de la evaluación se deberán introducir las medidas necesarias para la mejora permanente de los indicadores de calidad de los centros.

Por último, en las disposiciones adicionales, además de otros importantes aspectos, se aborda la financiación del sistema educativo. Se establece la necesidad de que el gasto público destinado a la educación no universitaria de nuestro país alcance la inversión media del PIB de la Unión Europea. Los estudios publicados por diferentes organismos internacionales siguen destacando la fuerte correlación existente entre el nivel sociocultural y económico de las familias y los resultados educativos de sus hijos. Asimismo, se definen los objetivos para el sistema educativo español durante el período comprendido entre los años 2003 al 2007, señalando que las Administraciones educativas adoptarán las previsiones oportunas para alcanzar estos objetivos en sus respectivos territorios. Especial mención requiere la disposición adicional que recoge los derechos laborales y de seguridad social de los padres que tengan hijos con dificultades significativas de aprendizaje, como forma de concretar una apuesta decidida por poner los medios necesarios para facilitar la colaboración de las familias en la mejora del proceso de aprendizaje de sus hijos.

En suma, con la presente Ley, se pretende dar un nuevo impulso al desarrollo de aquellos factores que más pueden contribuir en este momento a prevenir el fracaso escolar y a mejorar la calidad de la educación en nuestro sistema educativo de modo que nuestro país afronte los retos de este nuevo siglo en buenas condiciones. Lograr una educación de calidad para todos requiere el esfuerzo del alumnado, de las familias, del profesorado, de las Administraciones públicas y de otros agentes educativos; en definitiva, un esfuerzo de la sociedad que se debe plasmar en una mayor y mejor inversión en educación, es decir, en la formación del conjunto de la población.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objetivos de la Ley.

1. En la presente Ley se establecen un conjunto de medidas para aumentar el rendimiento escolar del alumnado y mejorar la calidad de la educación en los distintos niveles y etapas educativas.

Artículo 2. Calidad de la educación.

1. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y la mejora de la enseñanza y, en particular, adoptarán las medidas oportunas para:

a) Mejorar el rendimiento escolar del alumnado y prevenir el fracaso escolar mediante la corrección de los problemas y las dificultades de aprendizaje desde las edades más tempranas.

b) Incentivar el trabajo del profesorado prestando una especial atención a la valoración de su práctica docente, a la formación inicial y permanente y a su promoción profesional.

c) Facilitar la participación de padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

d) Asegurar una educación de calidad para todos los alumnos mediante la compensación de las desigualdades sociales, territoriales, económicas y culturales de origen.

e) Profundizar en la autonomía curricular, pedagógica y de gestión de los centros para facilitar una educación más personalizada.

f) Preparar el sistema educativo para adecuarlo a las demandas de la sociedad del conocimiento.

g) Garantizar la participación de los centros sostenidos con fondos públicos en la escolarización de todo el alumnado sin ningún tipo de discriminaciones.

h) Evaluar el sistema educativo e introducir las actuaciones de mejora que se deriven de sus resultados.

i) Adaptar la Administración educativa del Estado a la nueva realidad autonómica y profundizar en la descentralización municipal de las competencias educativas.

Artículo 3. Financiación.

Los poderes públicos facilitarán al sistema educativo los recursos necesarios para la implantación de las medidas recogidas en la presente Ley.

TÍTULO I

De la mejora del rendimiento escolar de los alumnos

CAPÍTULO I

De la Educación Infantil

Artículo 4. Oferta de Educación Infantil.

1. Con el fin de favorecer el desarrollo personal de todos los niños y niñas y sus posibilidades de aprendizaje en la educación obligatoria, se reforzará el carácter educativo del primer ciclo de educación infantil en el marco de los objetivos pedagógicos de esta etapa educativa.

2. Cuando la etapa de educación infantil se imparta en centros diferentes, las Administraciones educativas establecerán los mecanismos necesarios para facilitar la coordinación del trabajo del profesorado de ambos ciclos.

3. La educación infantil será de oferta obligada por parte de los poderes públicos y de asistencia voluntaria para las familias.

4. Los poderes públicos garantizarán la oferta suficiente de plazas de educación infantil para asegurar la escolarización de los hijos de todas las familias que lo soliciten, promoverán el apoyo psicopedagógico preciso para la detección temprana de las dificultades de aprendizaje de los niños y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la atención educativa a los sectores sociales más desfavorecidos.

Artículo 5. Atención educativa y otros servicios complementarios.

1. Las Administraciones educativas establecerán convenios con las Administraciones locales, así como con otras Administraciones e instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, para asegurar una adecuada oferta de Educación Infantil en todos los municipios, en la que se garantice la atención educativa e higiénico-sanitaria del alumnado de estas edades.

2. Las Administraciones educativas promoverán la realización de programas, en colaboración con los Ayuntamientos, que faciliten la oferta de otros servicios educativos adecuados a los niños y niñas de estas edades, así como la ampliación del horario de apertura de los centros para cubrir las necesidades de las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres.

CAPÍTULO II

De la Educación Obligatoria

Artículo 6. Actividades formativas complementarias.

1. Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos de Educación Primaria ofrezcan una hora diaria de actividades educativas complementarias que estarán dirigidas a:

a) Reforzar el dominio de los aprendizajes instrumentales básicos, tales como la lectura, la escritura y el cálculo.

b) Adquirir las destrezas y las habilidades básicas de trabajo y estudio.

c) Realizar actividades relacionadas con las capacidades expresivas y creativas de los niños y niñas.

2. Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos que imparten la Educación Secundaria Obligatoria ofrezcan tres horas semanales de clase complementarias con el fin de realizar actividades que faciliten, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, la superación de las mismas y, para el alumnado con mayor motivación y capacidad para aprender, la ampliación y profundización de sus conocimientos.

Artículo 7. Medidas para el fomento de la lectura.

1. El Gobierno, en la definición de las enseñanzas mínimas, establecerá una hora diaria de lectura para todos los alumnos de la Educación Primaria.

2. Las Administraciones educativas elaborarán las orientaciones pedagógicas oportunas, facilitarán a los centros los materiales de apoyo y dotarán a los centros públicos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria de las bibliotecas escolares necesarias para que los equipos docentes integren en sus programaciones las actividades relacionadas con la lectura.

3. Los centros incentivarán la colaboración con las familias de forma que los alumnos también realicen actividades de lectura en sus casas.

Artículo 8. Objetivos de la permanencia un año más en el mismo ciclo o curso.

1. Cuando el profesorado de Educación Primaria, como resultado del proceso de evaluación continua, decida que un alumno debe permanecer un año más en el mismo ciclo, éste tendrá como objetivo preferente la adquisición de los conocimientos básicos de la lecto-escritura y del cálculo, así como el desarrollo de los hábitos de trabajo y de estudio.

2. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, cuando el profesorado, como resultado del proceso de evaluación continua, decida que un alumno debe permanecer un año más en el mismo curso, se desarrollará un plan de actividades específicas en el que figurarán las áreas que éste debe cursar y las actividades de recuperación que tiene que desarrollar para superar las dificultades observadas en el curso anterior.

Artículo 9. Desdoblamientos de grupos en la Educación Secundaria Obligatoria.

Las Administraciones educativas garantizarán el desdoblamiento de los grupos ordinarios en las áreas instrumentales, lenguas propias, idioma extranjero y matemáticas, con el objetivo de crear grupos de alumnos más reducidos que permitan una atención más individualizada.

Artículo 10. La organización del currículo.

1. Las Administraciones educativas revisarán la organización del currículo de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria con el fin de reagrupar las áreas y concentrar los horarios para disminuir así el número de profesores distintos que imparten clase a un mismo grupo de alumnos.

2. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, reorganizará el currículo de los cursos tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, incrementando el número de horas destinadas a materias optativas, para favorecer tanto la consolidación de los aprendizajes básicos de todo el alumnado como la elección de algunas áreas o materias que puedan responder a los diferentes intereses, motivaciones y capacidades del alumnado.

3. Las Administraciones educativas determinarán las materias optativas a cursar durante la Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, los centros tendrán autonomía para organizar esta oferta e informarán al alumnado y a sus familias sobre la elección que puede resultar más adecuada.

Artículo 11. Los Programas de Diversificación Curricular.

1. En la definición de las enseñanzas mínimas el Gobierno fijará las condiciones en que, para determinados alumnos al comienzo del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, previa su oportuna evaluación, puedan establecerse diversificaciones del currículo en los centros ordinarios. En este supuesto, los objetivos de esta etapa y, por tanto, el título de Graduado, se alcanzarán con una metodología específica, a través de contenidos e, incluso, de áreas diferentes a las establecidas con carácter general. En cualquier caso, las enseñanzas mínimas determinarán la parte común del currículo que los alumnos cursarán con su grupo ordinario, así como las actividades específicas de estos programas de diversificación.

2. La duración de los programas de diversificación curricular será de un curso para los alumnos que se incorporen en cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria y de dos cursos en los demás casos.

3. Todos los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria deberán ofrecer, al menos, un programa de diversificación curricular. El número de los programas impartidos se incrementará en función del número de alumnos y del contexto social en el que el centro esté situado. Los centros contarán con los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar tales programas.

Artículo 12. Los Programas de Garantía Social.

1. Para los alumnos mayores de diez y seis años que no obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria ni a través del currículo ordinario ni cursando un programa de diversificación curricular, se organizarán programas específicos de garantía social, tal y como se regula en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo.

2. Los alumnos, al finalizar los Programas de Garantía Social, podrán presentarse a las pruebas a que se refiere el artículo 52.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

3. En todo caso, los alumnos recibirán, al finalizar los Programas de Garantía Social, una acreditación en la que consten los años, las áreas y las materias cursadas, así como una orientación sobre el futuro académico y profesional del alumno.

Artículo 13. Los Programas de servicio a la comunidad para alumnos.

Los alumnos, a partir de los catorce años, podrán realizar, con carácter voluntario, actividades de servicio a la comunidad con el fin de desarrollar sus valores sociales. Dichas actividades serán planificadas por los centros educativos y se orientarán al apoyo a grupos o personas necesitadas, al cuidado del medio ambiente y a la participación en programas de cooperación y solidaridad. El tiempo anual que cada alumno dedique a estas actividades se recogerá en su expediente académico. Las Administraciones educativas facilitarán la realización de este tipo de actividades de servicio a la comunidad y dotarán a los centros de los profesores y otros profesionales necesarios para asegurar su adecuada puesta en práctica.

CAPÍTULO III

Recursos

Artículo 14. Profesorado y materiales de apoyo.

1. Las Administraciones educativas, en la configuración de las plantillas de los centros, incorporarán el profesorado necesario para desarrollar las medidas de prevención del fracaso escolar recogidas en el presente título; en particular, las que se refieren a las horas formativas complementarias, los desdoblamientos de grupos de alumnos, los programas de diversificación curricular y de garantía social, así como la ampliación de las materias optativas.

2. Asimismo, las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa y la elaboración de materiales de desarrollo curricular con el fin de facilitar al profesorado los recursos necesarios para atender a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado y, de esta forma, prevenir el fracaso escolar.

TÍTULO II

De la compensación de las desigualdades

CAPÍTULO I

Zonas y centros de atención preferente

Artículo 15. Principios generales.

Las Administraciones educativas adoptarán medidas especificas, complementarias a las establecidas en el Título V de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en aquellos centros y zonas en los que exista una concentración importante de población cuyas condiciones socioeconómicas dificulten un adecuado progreso escolar de los alumnos. En particular, se dotará a estos centros y zonas con medios materiales y apoyos específicos, facilitándose, asimismo, mediante los oportunos incentivos profesionales, la incorporación de profesores con la formación y experiencia necesaria para la atención a estos alumnos, así como la estabilidad de los correspondientes equipos pedagógicos.

Artículo 16. Programas integrales sociocomunitarios para reducir el fracaso escolar.

1. Los poderes públicos determinarán los centros y las zonas de atención preferente en los que resulte necesario ampliar los recursos materiales y humanos en los términos referidos en el artículo anterior.

2. Las Administraciones educativas establecerán un plan específico de actuación para apoyar a los centros y a las zonas de atención preferente en el que figurarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) La reducción de la ratio a 15 alumnos por aula.

b) El incremento de los recursos económicos para gastos de organización y funcionamiento de los centros.

c) La ampliación de la dotación de profesores y el establecimiento de acuerdos con los Ayuntamientos para que los trabajadores sociales, mediadores culturales y otros profesionales puedan trabajar tanto con el alumnado que lo requiera como con sus familias.

d) El fomento de la estabilidad de los equipos de profesores mediante el establecimiento de planes de actuación plurianuales. Dichos planes incluirán la garantía de estabilidad de los equipos docentes, así como los oportunos incentivos salariales y el reconocimiento de los méritos que procedan, a los efectos de facilitar la movilidad de aquellos profesores que lo deseen una vez finalizados los mencionados planes.

CAPÍTULO II

De la atención educativa al alumnado inmigrante

Artículo 17. Principios generales.

Los poderes públicos desarrollarán las actuaciones precisas para garantizar la integración de los alumnos procedentes de familias inmigrantes en el sistema educativo español y la compensación, cuando fuera preciso, de sus deficiencias educativas.

Artículo 18. Centros de recursos.

Las Administraciones educativas crearán centros de recursos y constituirán equipos de acogida para estu-

diar la situación educativa, personal, familiar y social del alumnado inmigrante y decidir las mejores condiciones de escolarización, el centro y el curso adecuados, así como los recursos precisos.

Artículo 19. Programas de inmersión lingüística.

1. Las Administraciones educativas organizarán programas de inmersión lingüística para el alumnado que lo necesite y formarán al profesorado para la impartición de los mismos. Estos programas se organizarán por zonas o por centros según el alumnado implicado.

2. En función de las características del alumnado, de los centros y de las zonas correspondientes, las Administraciones educativas, a partir del informe de los equipos de acogida señalados en el artículo anterior, determinarán las modalidades en las que se desarrollan estos programas.

Artículo 20. Programas de prevención del fracaso escolar.

Las Administraciones educativas dotarán a los centros que escolaricen alumnado inmigrante, cuya incorporación al sistema educativo español se haya producido con retraso, de los medios personales y económicos necesarios para que organicen las intervenciones especificas necesarias tendentes a recuperar dicho retraso y obtener, así, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 21. Escolarización.

Las Administraciones educativas impulsarán la elaboración de programas de integración del alumnado inmigrante en los centros sostenidos con fondos públicos que lo necesiten y asegurarán que su escolarización se produce sin ningún tipo de discriminación en el centro al que deseen acudir. Las Comisiones de escolarización a las que se refiere el artículo 59 de la presente Ley velarán porque exista una distribución equitativa del alumnado inmigrante entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Artículo 22. Recursos y formación.

Las Administraciones educativas fomentarán:

a) La elaboración de programas y diseños curriculares específicos que sirvan de guía y orientación, fundamentalmente para los casos de incorporación tardía al sistema escolar, de proyectos de acción tutorial específica y la distribución a los centros de las experiencias educativas desarrolladas en otros países y en las distintas Comunidades Autónomas.

b) El desarrollo de planes específicos de formación del profesorado que tengan en cuenta los contenidos de la educación intercultural, así como los aspectos curriculares, metodológicos y organizativos que se derivan de las dificultades educativas asociadas a la incorporación tardía del alumnado inmigrante.

c) La creación de un «banco de buenas prácticas», con la colaboración de otros países con experiencia en este ámbito.

d) La realización de proyectos de innovación e investigación educativa, en colaboración con las Universidades y la formación en éstas de los especialistas necesarios para educar a los alumnos procedentes de familias inmigrantes.

Artículo 23. Convenios.

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, firmará convenios de colaboración con aquellos países de los que procede más comúnmente el alumnado inmigrante para, entre otras cuestiones, incorporar a los centros o zonas que se determine profesores nativos de apoyo.

2. Las Administraciones educativas podrán firmar convenios con las Administraciones locales y otras instituciones para garantizar la intervención de trabajadores sociales y mediadores culturales en las tareas de coordinación educativa del centro con las familias.

TÍTULO III

Del profesorado

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 24. Principios generales.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para mejorar las condiciones en las que los profesores desarrollan su trabajo para incrementar su valoración social, así como para facilitar la incorporación de nuevos docentes y reformar la formación inicial.

Artículo 25. Formación inicial.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, para impartir las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria, la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial será

necesario estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica.

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las características de los estudios necesarios para obtener el título profesional de especialización didáctica. Dicho título, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se obtendrá tras la superación de un curso de cualificación pedagógica, cuyos contenidos, duración y organización se establecerán por el Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, este curso tendrá una duración mínima de un curso académico e incluirá materias teóricas y prácticas docentes.

3. Las Comunidades Autónomas organizarán la impartición de los estudios conducentes a dicho título, pudiendo establecer, a estos efectos, los oportunos convenios de colaboración con las Universidades. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer el número máximo de plazas existentes para la obtención del Título Profesional de Especialización Didáctica en función tanto de las necesidades del sistema educativo como de las posibilidades de impartición de las correspondientes enseñanzas.

4. El profesorado que imparta estas enseñanzas, tanto en su vertiente teórica como práctica, procederá, prioritariamente y, al menos, en un porcentaje del 50 por 100, del Cuerpo de Profesores de Secundaria. A tal fin, se establecerán los oportunos mecanismos de promoción interna dentro de la carrera profesional.

5. El profesorado que ingrese en los cuerpos docentes a que se refiere la adicional novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, deberá realizar una fase práctica antes de adquirir la condición definitiva de funcionario. Para la realización de dicha fase práctica, en la que se incluirán los oportunos cursos de formación, los profesores dispondrán de la mitad de su jornada lectiva durante dos cursos académicos.

Artículo 26. Formación permanente.

1. Las Administraciones educativas elaborarán planes de formación permanente para el profesorado con el fin de facilitar su actualización científica y didáctica, así como su promoción profesional. Para la elaboración de estos planes las Administraciones educativas tendrán en cuenta las recomendaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Evaluación.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colaborará, a través del Centro de Investigación y Cooperación Educativa, con las Comunidades Autónomas en el diseño y desarrollo de planes de formación permanente del profesorado.

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá, asimismo, organizar actividades de formación del profesorado en coordinación con las Administraciones educativas.

4. La Conferencia Sectorial de Educación, oídos los representantes del profesorado, determinará los efectos de la participación en las actividades de formación permanente en los concursos de traslados y en la promoción profesional.

5. Los planes de formación permanente prestarán una especial atención a los siguientes aspectos:

a) La colaboración con las familias para favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado y la convivencia en los centros.

b) Formación específica para que el profesorado pueda usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta útil en las clases de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas.

c) Los equipos directivos en un contexto de autonomía de los centros.

d) La tutoría como una de las líneas centrales de actuación en un sistema educativo que tiene como eje la atención a la diversidad del alumnado.

e) Atención educativa al alumnado inmigrante.

f) Estancias formativas en empresas, especialmente para el profesorado de Formación Profesional;.

g) El acceso de los profesores a las titulaciones que les permitan la promoción entre los distintos niveles educativos, incluidos los universitarios.

6. Las diferentes actuaciones en el ámbito de la formación permanente se realizarán en las modalidades que se consideren más adecuadas. En cualquier caso, se potenciarán, especialmente, los proyectos de formación en centros, el intercambio de experiencias como uno de los ejes de la formación, así como la constitución de equipos de investigación y experimentación educativa integrados por profesorado de los niveles anteriores a la Universidad y profesorado universitario.

7. Las Administraciones educativas arbitrarán las medidas necesarias para que el profesorado pueda participar en las actividades de formación, tanto en las que se realicen fuera del período lectivo como aquellas otras que, por sus características, se desarrollen dentro del mismo.

8. Los centros educativos, una vez aprobada por la Administración educativa la plantilla de profesores para cada curso académico, podrán eximir, total o parcialmente, a algún miembro de ésta con el fin de que pueda participar en determinadas actividades de formación o en la realización de proyectos de innovación e investigación educativa que puedan facilitar la mejora de los procesos educativos del propio centro.

Artículo 27. Nuevo complemento retributivo.

1. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y previa negociación con los representantes del profesorado, establecerá un nuevo complemento retributivo ligado a la evaluación de la práctica docente, cuya cuantía será similar a la percibida por los actuales sexenios de formación.
2. Esta evaluación tendrá carácter voluntario y se desarrollará, con carácter individual, cada seis años.
3. La evaluación se realizará siguiendo lo establecido en el artículo 68 de la presente Ley.

Artículo 28. Promoción profesional.

Las Administraciones educativas establecerán los mecanismos necesarios para facilitar la promoción profesional del profesorado tanto dentro de una misma etapa educativa como entre las distintas etapas. Para ello adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Un sistema que asegure la movilidad entre los distintos cuerpos docentes, incluidos los universitarios. En particular, se facilitará el acceso de profesores de los niveles educativos anteriores a la Universidad a las plazas universitarias correspondientes a titulaciones relacionadas con la educación, singularmente las de aquellos centros en los que se imparta el Título Profesional de Especialización Didáctica.
b) La catalogación de determinados puestos de trabajo de las Administraciones educativas o de otras instituciones relacionadas con la educación para funcionarios docentes.

Artículo 29. Período sabático.

El profesorado tendrá derecho a un período sabático en el transcurso de su vida profesional, con el fin de facilitar la actualización científica y didáctica de sus conocimientos mediante la participación en las diferentes actividades de formación permanente o en el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa.

Artículo 30. Puestos de difícil desempeño.

1. Las Administraciones educativas, previa negociación con los representantes del profesorado, establecerán un catálogo de puestos considerados de difícil desempeño por la zona en la que se encuentra ubicado un centro o por las características del alumnado. Entre estos puestos se incluirán, en todo caso, los correspondientes a los centros y zonas a que hace referencia el capítulo I del Título II de la presente Ley.
2. Las Administraciones educativas, previa negociación con los representantes del profesorado, determinarán los incentivos económicos y profesionales que se aplicarán al profesorado que ocupe estos puestos de trabajo.

Artículo 31. La tutoría en la Educación Secundaria Obligatoria.

El profesorado que ejerza la función de tutor en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá el mismo número de horas lectivas y el mismo complemento específico para el desarrollo de sus funciones que los jefes de los departamentos didácticos.

Artículo 32. Reducción de jornada y jubilación

1. Los profesores mayores de cincuenta y cinco años tendrán una reducción de un tercio de las horas lectivas de su jornada, sin merma de sus retribuciones. Realizarán, entre otras, durante ese tiempo, actividades de formación para el profesorado de nueva incorporación.
2. Se establecerá, con carácter general, la jubilación voluntaria a los sesenta años en las condiciones establecidas en la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 33. Asistencia jurídica y salud laboral.

1. Las Administraciones educativas establecerán un seguro para todo el profesorado de los centros públicos que les garantice la cobertura y la asistencia jurídica necesaria en relación con las actividades realizadas en su ejercicio profesional.
2. Las Administraciones educativas aplicarán todas las medidas derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y adoptarán las iniciativas que correspondan, tales como formación, elaboración de mapas de riesgo y aplicación de revisiones médicas.

Artículo 34. Estatuto de la Función Docente.

El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y previa negociación con los representantes del profesorado, establecerá un nuevo Estatuto de la Función Docente, en el que se recojan los derechos y deberes del profesorado de la educación pública. En todo caso, en dicho Estatuto se incorporarán las medidas recogidas en el presente Título.

Artículo 35. Homologación del profesorado de los centros privados concertados.

El Gobierno, previa consulta con los representantes del profesorado, presentará a la Conferencia Sectorial

de Educación, para su aprobación, un calendario que contemple la plena homologación del profesorado de los centros concertados con el de los centros públicos en lo que se refiere a aspectos como acceso, retribuciones, formación inicial y permanente, jornada y participación.

TÍTULO IV

De la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 36. Principios generales.

Los poderes públicos establecerán los mecanismos necesarios para incrementar la participación de las familias en el sistema educativo con el objetivo de mejorar el rendimiento de los alumnos, la convivencia en los centros y la educación en valores.

Artículo 37. Familia y Escuela.

Las Administraciones educativas promoverán:

a) Los mecanismos de diálogo y colaboración efectiva entre la familia y la escuela, en el marco de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y de los Consejos Escolares de centro, para conseguir una mayor implicación y corresponsabilidad en el funcionamiento de los centros.

b) La conexión de las familias con los centros educativos a través de Internet, facilitando, progresivamente, que todas las familias que tengan hijos en la educación obligatoria dispongan de un ordenador con conexión gratuita a Internet.

c) La ampliación del horario de apertura de los centros para cubrir las necesidades de las familias que lo necesiten a causa del horario laboral de los padres, organizar escuelas de padres y madres y las actividades educativas complementarias contempladas en el artículo 6 de la presente Ley.

d) La gratuidad de los libros de texto durante la educación obligatoria.

e) La dotación a los centros públicos que impartan educación obligatoria de comedor escolar.

Artículo 38. Formación y materiales de apoyo.

Las Administraciones educativas promoverán la realización de actividades de formación para los equipos directivos, los tutores y las familias y estimularán la existencia de contratos pedagógicos entre las familias y la escuela, en los que se consignen las actividades que, siempre en el estricto ámbito de sus respectivas responsabilidades, padres y profesores se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. Asimismo, fomentarán la elaboración de documentación de apoyo para mejorar la implicación de las familias en la educación de sus hijos.

Artículo 39. Programas específicos para facilitar el apoyo de las familias a sus hijos en el proceso de aprendizaje.

1. Los centros educativos podrán establecer programas específicos para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, siempre que estimen que dichos apoyos pueden mejorar el rendimiento académico de los mencionados alumnos. Estos programas incorporarán las actividades de información y formación necesarias para facilitar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, así como la participación de las mismas en el desarrollo de los programas definidos por el centro.

2. Los programas de apoyo serán propuestos por el profesor tutor del alumno correspondiente con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación y deberán obtener el visto bueno de la dirección del centro y de la inspección educativa.

3. Para la puesta en marcha de esos programas las Administraciones educativas facilitarán a los centros los recursos y medios personales y materiales necesarios. Con este fin, podrán, asimismo, recabar el apoyo de los correspondientes servicios municipales.

4. En el supuesto de que los padres hubieran de participar activamente en el desarrollo de los programas a que se refiere el presente artículo y alguno de ellos, o los dos, trabajaran a tiempo completo, el programa especificará la dedicación horaria a que se extiende el compromiso de participación de los mismos para que, dado el caso de que hubiera coincidencia entre esta dedicación y la jornada laboral, los padres que trabajen por cuenta ajena puedan ejercitar los correspondientes derechos laborales a permisos, reducciones o, en su caso, suspensiones, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, los funcionarios públicos tendrán derecho a los correspondientes permisos y reducciones, con el fin de que puedan participar en estos programas específicos, cuando hubiera coincidencia horaria entre la prestación del servicio y la dedicación a que se extiende el compromiso de participación.

TÍTULO V

De la organización y funcionamiento de los centros

CAPÍTULO I

De la autonomía de los centros

Artículo 40. Principios generales.

1. Los centros educativos dispondrán de la necesaria autonomía curricular, organizativa, de gestión económica y de personal para poder garantizar una educación de calidad a todo el alumnado escolarizado en los mismos.

2. Las Administraciones educativas elaborarán la normativa necesaria para garantizar el ejercicio de esta autonomía y dotarán a los centros del personal y de los recursos económicos necesarios para que éstos concreten en sus proyectos educativos, curriculares y en sus programaciones didácticas las decisiones que consideren más oportunas en función de sus características.

Artículo 41. Autonomía en la organización y desarrollo del currículo.

1. Los centros educativos, en el marco de su programación docente, completarán y desarrollarán el currículo establecido por las correspondientes Administraciones educativas para adaptarlo a las características y necesidades del alumnado que tienen escolarizado.

2. Las programaciones docentes deberán contemplar los diversos grados de adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y de las áreas, los contenidos básicos, complementarios, así como las actividades y las metodologías diferentes y, en coherencia con las mismas, los criterios y los instrumentos de evaluación más adecuados.

3. Los centros educativos podrán adoptar, en función de las necesidades educativas del alumnado que tienen escolarizado, entre otras, las siguientes decisiones:

a) Proponer la participación de determinados alumnos en las actividades formativas complementarias que se regulan en el artículo 6 de la presente Ley.

b) Agrupar la impartición de algunas áreas curriculares para el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, especialmente en los dos primeros cursos.

c) Concentrar el horario de determinadas áreas curriculares en alguno de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.

d) Organizar la impartición de las materias optativas con el fin de atender a las necesidades del conjunto del alumnado.

e) Impartir alguna área en una lengua extranjera en las condiciones que las Administraciones educativas determinen.

Artículo 42. Autonomía organizativa.

1. Los centros educativos podrán establecer los organismos de coordinación didáctica más adecuados a sus características, así como las estructuras de gestión y participación que mejor respondan a sus necesidades, dentro del marco general que se establezca.

2. Las Administraciones educativas facilitarán a los centros modelos y experiencias en este ámbito, así como orientaciones que pueden tener carácter de norma supletoria para aquellos centros que no hayan elaborado unas normas propias.

3. Los centros determinarán las actividades formativas complementarias contempladas en el artículo 6 de la presente Ley para incluirlas en la oferta educativa que realizan.

Artículo 43. Autonomía en la gestión de los recursos económicos.

1. Las Administraciones educativas desarrollarán la normativa necesaria para autorizar que los centros puedan incorporar al siguiente ejercicio económico los presupuestos no ejecutados del anterior, adquirir y reponer material y equipamiento didáctico y contratar servicios de mantenimiento y obras menores.

2. Las Administraciones educativas asignarán a los centros recursos económicos para que puedan gestionar de una forma directa y autónoma los gastos que origine la formación permanente del profesorado de los mismos.

Artículo 44. Autonomía en la gestión de personal.

1. Los equipos directivos de los centros organizarán el trabajo de la plantilla de profesores aprobada por la Administración educativa.

2. Las Administraciones educativas fomentarán el establecimiento de acuerdos con los centros para garantizar la estabilidad de las plantillas del profesorado en el marco de proyectos educativos plurianuales. En dichos acuerdos se podrá establecer la participación de los centros en la definición del perfil profesional de sus profesores y en los correspondientes procesos de selección.

CAPÍTULO II

De la Dirección de los centros educativos

Artículo 45. Principios generales.

Las Administraciones educativas dotarán al Director, que será elegido por el Consejo Escolar del centro, y al equipo directivo de los medios y las competencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo relativo a una formación adecuada y al establecimiento de incentivos económicos y profesionales. Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para incrementar su estabilidad.

Artículo 46. Duración del mandato y formación del equipo directivo.

1. La duración del mandato del Director será de cuatro años. Al finalizar su mandato, será evaluado por una comisión formada por representantes del Consejo Escolar del centro y de la inspección educativa. Si la evaluación es positiva, podrá ser renovado por dos períodos más de cuatro años cada uno, previo acuerdo del Consejo Escolar al final de cada período.

2. Las Administraciones educativas organizarán actividades de formación específicas para los equipos directivos en dos fases. La primera fase deberá realizarse antes del inicio de su mandato y versará sobre los contenidos teóricos y prácticos necesarios para el desempeño de sus cargos. La segunda fase constará de sesiones periódicas basadas fundamentalmente en el intercambio de experiencias con otros centros de características similares.

Artículo 47. La organización de las actividades educativas del centro.

1. En función de los criterios que establezcan las correspondientes Administraciones educativas, los equipos directivos presentarán un plan de actuación que figurará en la programación general anual, en el que constarán las actividades y las horas de profesorado, lectivas y no lectivas, necesarias para el desarrollo de las mismas.

2. Las Administraciones educativas aprobarán el plan de actuación una vez acordados con el centro los recursos necesarios para su puesta en práctica. Los equipos directivos, oído el claustro, asignarán las horas lectivas y no lectivas necesarias para su aplicación.

Artículo 48. Las normas de convivencia en los centros.

1. En el marco de la normativa establecida por las Administraciones educativas, el Consejo Escolar del centro elaborará el reglamento de régimen interior.

2. Los centros elaborarán un plan anual de mejora de la convivencia, garantizando el máximo grado de participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en su elaboración y cumplimiento.

3. El equipo directivo asumirá la aplicación de las medidas que, en materia de disciplina, se contemplen en el reglamento de régimen interior y en el plan de mejora de la convivencia, dando cuenta al Consejo Escolar de los casos más significativos que se produzcan.

Artículo 49. Incentivos económicos.

Los miembros de los equipos directivos seguirán percibiendo una parte del complemento retributivo asignado a los correspondientes cargos, con posterioridad al desempeño de los mismos, por el tiempo y a través del procedimiento establecido al efecto por las Administraciones educativas.

TÍTULO VI

De las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 50. Principios generales.

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para adaptar el sistema educativo a las demandas derivadas de la extensión en España de la sociedad de la información y la comunicación. En particular, actualizarán el currículo de las diferentes etapas educativas, fomentarán la formación permanente del profesorado, la informatización de los centros, la mejora de la enseñanza de los idiomas extranjeros y el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa.

Artículo 51. Actualización de los currículos.

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, de común acuerdo con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, revisará y actualizará los diferentes elementos del currículo de las distintas etapas educativas a la luz de las exigencias formativas generadas por la sociedad de la información y la comunicación, en lo que se refiere, en especial, a:

a) La adquisición de destrezas y habilidades relacionadas con la búsqueda, selección, análisis y organización de la información.

b) El dominio funcional de las tecnologías de la información y la comunicación.

c) La formación en valores en un mundo globalizado.

Artículo 52. Recursos y formación.

1. Las Administraciones educativas dotarán a los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de los ordenadores necesarios para la informatización progresiva de sus aulas.

2. Las Administraciones educativas desarrollarán un Programa de formación del profesorado específico para el uso de las nuevas tecnologías en la docencia de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas.

3. Las Administraciones educativas establecerán acuerdos de colaboración con las editoriales y otras entidades para facilitar el acceso del profesorado y del alumnado, a través de Internet, a materiales didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4. Las Administraciones educativas establecerán, asimismo, acuerdos de colaboración con empresas e instituciones para promover tanto la informatización de las aulas como la adquisición de ordenadores al profesorado y al alumnado de Secundaria.

Artículo 53. Las enseñanzas de idiomas extranjeros.

1. Las Administraciones educativas garantizarán la incorporación progresiva del idioma extranjero en el segundo ciclo de Educación Infantil.

2. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, establecerá el comienzo de la enseñanza del idioma extranjero en el primer ciclo de Educación Primaria.

3. Las Administraciones educativas establecerán el procedimiento por el que se autorice, a los centros que lo soliciten, la impartición de alguna área en un idioma extranjero a partir del segundo ciclo de Educación Primaria.

4. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, firmará convenios con otros países para reforzar la formación permanente del profesorado de idioma extranjero y la incorporación de profesores nativos de apoyo como lectores.

Artículo 54. Centros bilingües.

1. El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, adoptará las medidas necesarias para que determinados centros públicos puedan impartir sus enseñanzas utilizando como lenguas vehiculares la propia y una lengua oficial de otro país de la Unión Europea.

2. Las Administraciones educativas dotarán a estos centros del profesorado especialista que se requiera y facilitarán los materiales y recursos necesarios.

Artículo 55. Doble titulación.

1. El Gobierno establecerá convenios con otros países de la Unión Europea para que determinados centros públicos puedan impartir las enseñanzas de la educación obligatoria con un currículo integrado que permita al alumnado obtener la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y la titulación equivalente del país correspondiente.

2. Las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas determinarán los centros que participarán en este Programa y facilitarán a los centros los materiales y recursos necesarios para su desarrollo.

TÍTULO VII

Del servicio público de educación

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 56. Principios generales.

1. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con la participación de todos los sectores afectados tanto de la enseñanza pública como de la enseñanza privada concertada, que atienda adecuadamente las necesidades educativas y la creación de centros docentes.

2. La programación general de la enseñanza, que corresponderá a las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial, comprenderá, en todo caso, una programación específica de los puestos escolares en la que se determinarán las comarcas, municipios y zonas donde dichos puestos hayan de crearse. La programación específica de puestos escolares de nueva creación en los niveles obligatorios y gratuitos deberá tener en cuenta, en todo caso, la oferta existente de centros públicos y concertados.

Artículo 57. Régimen de conciertos.

1. Los centros privados, en las etapas de educación obligatoria, podrán solicitar incorporarse al régimen de conciertos, de acuerdo con lo establecido en el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

2. El concierto establecerá los derechos y las obligaciones recíprocas de los centros acogidos a este régimen y de las correspondientes Administraciones educativas.

Artículo 58. Derechos y deberes de los centros privados concertados.

1. Las Administraciones educativas dictarán la normativa necesaria para garantizar que todos los centros privados que se acojan al régimen de conciertos cumplan los siguientes requisitos:

a) Atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación explícita o implícita, de acuerdo con

una normativa de admisión del alumnado que evite la configuración de una doble red educativa.

b) Hacer efectivo el principio de gratuidad en todos los centros.

c) Llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.

2. Las Administraciones educativas, en función de las necesidades de escolarización, adoptarán las medidas necesarias para:

a) Proporcionar a los centros concertados una financiación suficiente para garantizar una educación de calidad a todo el alumnado.

b) Incorporar la oferta de los centros privados concertados a la programación general de la enseñanza para garantizar la estabilidad del sistema educativo.

e) Equiparar las condiciones de trabajo del profesorado y del personal de administración y servicios de los centros concertados con las de los profesores de los centros públicos y regular las condiciones de la oferta de actividades educativas complementarias.

Artículo 59. Comisiones de escolarización.

Las Administraciones educativas constituirán comisiones de escolarización con presencia y participación de los Ayuntamientos, a fin de proceder a la matrícula de todo el alumnado. Las comisiones de escolarización garantizarán que todos los centros sostenidos con fondos públicos escolarizan de forma solidaria al alumnado con necesidades educativas especiales y con dificultades de aprendizaje, así como a los alumnos inmigrantes o a los procedentes de minorías étnicas o culturales.

TÍTULO VIII

Del sistema educativo del Estado de las Autonomías

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 60. Principios generales.

1. El Gobierno, finalizado el proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, adaptará la Administración educativa del Estado redefiniendo el papel de las distintas instituciones dependientes de dicha Administración, para garantizar la coordinación y la cooperación en todo el sistema educativo y fomentar una mayor implicación de las Administraciones locales en la planificación y la gestión de la educación reglada y no reglada.

2. El Gobierno, al amparo de lo establecido en los apartados 1 y 30 del artículo 149.1 de la Constitución, y con el objetivo de garantizar tanto el ejercicio del derecho a la educación a que se refiere el artículo 56 de la presente Ley como una educación de calidad para todos los alumnos establecerá, cada cinco años, los objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo español, habilitando a tal fin las correspondientes partidas presupuestarias.

Artículo 61. Órganos estatales.

El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, procederá a:

a) Dotar a la Conferencia Sectorial de Educación de los medios necesarios para que se convierta en el órgano de debate, coordinación y evaluación de las líneas generales de la política educativa, que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración del Estado, serán objeto de consenso entre dicha Administración y las Comunidades Autónomas.

b) Actualizar la composición y las funciones del Consejo Escolar del Estado.

c) Redefinir las competencias y las funciones de la Alta Inspección.

Artículo 62. Órganos de cooperación, asesoramiento y evaluación del Sistema Educativo.

1. Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dependerá el Instituto Nacional de Evaluación, que tendrá como función la evaluación general del sistema educativo, así como el Centro de Investigación y Cooperación Educativa que colaborará con las Administraciones educativas en la formación permanente del profesorado, en el desarrollo de proyectos de experimentación, innovación e investigación educativa y en la elaboración de bancos de datos de buenas prácticas educativas.

2. Los organismos citados serán dirigidos por un Consejo Rector, compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo, que será elegido, total o parcialmente, por la Conferencia Sectorial de Educación por el procedimiento que reglamentariamente establezca el Gobierno.

Artículo 63. Las Administraciones locales.

1. El Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, establecerá las competencias educativas que corresponda asumir progresivamente a las administraciones locales, así como los mecanismos de coordinación que habrán de establecerse entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales para asegurar el mejor funcionamiento del sistema educativo.

2. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, pondrá en marcha programas para promover la asunción progresiva de competencias edu-

cativas de las Administraciones locales. En estos programas, que incorporarán los recursos económicos necesarios para su efectiva implantación, se desarrollarán, entre otras, las siguientes lineas de actuación:

a) La participación en la planificación y gestión de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

b) La coordinación y gestión, en colaboración con las Administraciones educativas y con otras organizaciones sociales, de la apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y la oferta de actividades para los alumnos del centro y para sus familias.

c) La coordinación de los programas de formación profesional y de formación continua, con la participación de los agentes sociales y económicos y de la comunidad educativa.

d) La coordinación de los diferentes organismos e instituciones implicados en la organización e impartición de los programas de garantía social para que la oferta sea complementaria y suficiente en todas las zonas educativas.

e) El impulso y la coordinación de programas de cooperación entre los centros educativos.

f) La coordinación de todos los recursos comunitarios, de los trabajadores sociales y mediadores culturales, así como de las instituciones de bienestar social, para la atención de los alumnos y sus familias.

3. Para el desarrollo de los diferentes programas señalados, el Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias promoverán la elaboración de Planes Educativos Municipales que ordenen, racionalicen y rentabilicen los recursos y las ofertas educativas, culturales y deportivas que se puedan ofrecer a los ciudadanos.

TÍTULO IX

De la evaluación del sistema educativo

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 64. Ámbito de la evaluación.

La evaluación se extenderá a todas las etapas educativas anteriores a la Universidad y se realizará sobre los aprendizajes de los alumnos, los procesos educativos, el profesorado, la inspección de educación, los centros docentes y la Administración educativa.

Artículo 65. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos.

1. Las Administraciones educativas facilitarán a los centros la formación y los instrumentos necesarios para mejorar los procesos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.

2. Las Juntas de evaluación, especialmente en la educación obligatoria, tendrán como misión fundamental garantizar la coordinación de todo el profesorado que imparte clase a un mismo grupo de alumnos, reflexionar y decidir colegiadamente sobre todos los componentes del proceso de evaluación y adoptar las medidas que se deriven del mismo.

3. Las Administraciones organizarán actividades de formación especificas para el profesorado dirigidas a mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes de los alumnos y fomentarán el intercambio de materiales y experiencias entre el profesorado.

Artículo 66. La evaluación de los centros.

1. Las Administraciones educativas evaluarán periódicamente a todos los centros educativos. La evaluación deberá tener en cuenta el contexto socioeconómico del centro y los recursos de los que dispone, y se efectuará sobre los procesos educativos del centro y del aula, los resultados de los alumnos y la valoración que la comunidad educativa realiza sobre el funcionamiento del centro. La comunidad educativa conocerá los procedimientos y criterios de evaluación que se utilicen, así como los resultados de la misma.

2. Las Administraciones educativas acordarán con los Consejos Escolares de centro las medidas previstas para mejorar, en su caso, los indicadores de calidad de cada centro, en función de los resultados obtenidos en los procesos de evaluación.

3. Los centros realizarán la evaluación de los programas específicos que estén desarrollando en virtud de su autonomía.

Artículo 67. La evaluación general del profesorado.

Las Administraciones educativas evaluarán periódicamente al profesorado de todos los centros públicos y privados concertados, con el fin de adoptar las medidas necesarias para la mejora permanente de su trabajo.

Artículo 68. La evaluación voluntaria del profesorado y su carrera profesional.

1. Los profesores que deseen percibir el complemento retributivo establecido en el artículo 27 de la presente Ley deberán participar, cada seis años, en un procedimiento de evaluación de su práctica docente.

2. A tal fin, las Administraciones educativas constituirán comisiones de evaluación que procederán a la valoración de la práctica profesional desarrollada durante ese período. En todo caso, se tendrán en cuenta las actividades desarrolladas en el centro, la participación en actividades de formación permanente, así como en proyectos de innovación, experimentación e investigación educativa.

3. Las comisiones de evaluación estarán formadas por profesores de reconocido prestigio e inspectores de educación. Tendrán en cuenta los informes emitidos por los órganos de gobierno de los centros y por el Consejo Escolar en aquellos aspectos que reglamentariamente se determinen.

4. Así mismo, las Administraciones educativas acordarán con los representantes del profesorado las repercusiones de esta evaluación voluntaria en los concursos de traslados y en el desarrollo de su carrera profesional.

Artículo 69. El Instituto Nacional de Evaluación.

1. La evaluación general del sistema educativo será realizada por el Instituto Nacional de Evaluación.

2. La Conferencia Sectorial de Educación aprobará sus planes de actuación y elegirá a las personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo que se integrarán en su Consejo Rector, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la presente Ley.

Artículo 70. Evaluaciones generales del sistema educativo.

1. El Instituto Nacional de Evaluación, siguiendo las directrices establecidas por la Conferencia Sectorial de Educación, elaborará planes periódicos de evaluación de:

a) Los aprendizajes de los alumnos.
b) El profesorado.
c) Los centros educativos.
d) La inspección de educación.
e) La Administración educativa.

2. El Instituto Nacional de Evaluación elaborará los informes correspondientes de las evaluaciones que realice. En dichos informes constarán, en todo caso, las recomendaciones pertinentes para corregir las deficiencias.

3. El Instituto Nacional de Evaluación elaborará un informe bianual sobre la situación general del sistema educativo que será presentado en el Consejo Escolar del Estado y en el Parlamento.

Disposición adicional primera. Del calendario de aplicación.

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma.

Disposición adicional segunda. Financiación.

1. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que, en el plazo de cinco años, el gasto público en educación crezca en España hasta alcanzar la media de la Unión Europea.

2. El Gobierno incluirá en las respectivas Leyes de Presupuestos las cantidades correspondientes a cada uno de los cinco años a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con la distribución recogida en la Memoria Económica que figura en el Anexo de la presente Ley, con el fin de que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos educativos que se recogen en la Disposición Adicional Tercera siguiente.

3. La distribución del presupuesto entre las diferentes Comunidades Autónomas se efectuará mediante los oportunos convenios entre el Estado y las distintas Comunidades.

4. Los gastos de carácter plurianual que se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos que no tengan la consideración de inversión nueva, se consolidarán en la financiación de cada Comunidad Autónoma.

Disposición adicional tercera. Objetivos educativos para el período 2003-2007.

Con objeto de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el artículo 60.2 de la presente Ley, se enumeran a continuación los objetivos a alcanzar en el sistema educativo español durante el período comprendido entre los años 2003 al 2007. Las Administraciones educativas adoptarán las previsiones oportunas para alcanzar estos objetivos en sus respectivos territorios.

A) Educación Infantil.

La escolarización de toda la población correspondiente al tramo de edad entre tres y seis años, y el incremento de plazas en el primer ciclo para cubrir las necesidades de escolarización de 300.000 familias. A tal fin, se organizarán actividades de información y sensibilización dirigidas a toda la población, especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos, sobre la importancia de la escolarización temprana como medida compensadora de las desigualdades sociales de origen.

B) Educación Primaria.

a) La generalización de la enseñanza del idioma extranjero en el primer ciclo de Educación Primaria a partir del curso 2003-2004.

b) La puesta en marcha del Plan de fomento de la lectura.

c) La oferta en todos los centros públicos de cinco horas a la semana de actividades complementarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje y para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.

d) La dotación a todos los centros del profesorado necesario para atender a la diversidad del alumnado.

C) Educación Secundaria Obligatoria.

a) La oferta en todos los centros públicos de tres horas a la semana de actividades complementarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje y para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.

b) La dotación a todos los centros del profesorado necesario para la organización de los desdoblamientos de grupos y del conjunto de las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado.

c) La puesta en marcha de los programas de diversificación curricular y de garantía social, para atender a la diversidad del alumnado.

D) Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

a) La dotación de ordenadores con conexión gratuita a Internet de banda ancha en las aulas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos de Formación Profesional.

b) La puesta en marcha de un Programa de formación específico para que el profesorado pueda usar las nuevas tecnologías como una herramienta útil en las clases de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas.

c) El establecimiento de acuerdos de colaboración con las editoriales y otras entidades para facilitar el acceso del profesorado y del alumnado, a través de Internet, a materiales didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje.

d) La firma de acuerdos de colaboración con las empresas y otras instituciones con el fin de facilitar la compra de ordenadores al profesorado y al alumnado de Educación Secundaria.

E) Programas de apoyo a las familias.

a) La gratuidad total de los libros de texto a partir del curso 2003-2004 en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.

b) El adelanto del horario de apertura de los centros para atender la demanda de las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres.

c) La dotación de comedor en los centros públicos que imparten la educación obligatoria.

d) La puesta en marcha con carácter experimental, a partir del curso 2003-2004, en todas las Comunidades Autónomas de la concesión de permisos temporales o reducciones de jornada para las familias con hijos en la educación obligatoria que requieran un apoyo específico en su proceso educativo.

F) Compensación de desigualdades.

a) La reducción de la ratio a 15 alumnos por aula y el incremento de los gastos de funcionamiento a todos los centros ubicados en zonas de atención educativa preferente.

b) La dotación de profesorado y de los recursos económicos necesarios para poner en marcha los programas de atención educativa específica al alumnado inmigrante.

G) Profesorado.

a) La aplicación del nuevo sexenio ligado a la evaluación voluntaria de la práctica docente a partir del curso 2004-2005.

b) La aplicación progresiva de la reducción de las horas de atención directa a alumnos de los profesores mayores de 55 años.

c) La jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la disposición transitoria novena de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

d) La modificación del sistema de acceso a los Cuerpos Docentes con el fin de incorporar las previsiones de formación contenidas en el artículo 25.5 de la presente Ley.

e) La aplicación progresiva de los períodos sabáticos previstos en el artículo 29 de la presente Ley.

f) La aplicación de la normativa correspondiente al profesorado en materia de salud laboral, en especial en lo referido a la tipificación de las enfermedades profesionales y la revisión periódica de la salud de los docentes.

Disposición adicional cuarta. Las enseñanzas de Religión.

1. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, incorporará en los currículos de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los aspectos de la historia de las religiones necesarios para entender nuestra cultura y el desarrollo de nuestra sociedad.

2. La enseñanza de la Religión Católica se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y sus normas de desarrollo. Así mismo, se impartirán enseñanzas de las confesiones religiosas que tengan suscritos acuerdos con el Estado Español para atender la demanda de los alumnos que lo soliciten.

3. Los profesores que impartan enseñanzas confesionales de religión en los centros públicos, lo harán en régimen de contratación laboral con los requisitos que el Gobierno determine y de acuerdo con la legislación laboral general.

Disposición adicional quinta. Plan de fomento de la lectura.

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, impulsará un Plan de fomento de la lectura que contemple la inclusión de una hora de lectura diaria en los centros, la dotación de bibliotecas escolares en todos los centros y el establecimiento de acuerdos con las familias para realizar actividades de lectura en casa. En este Plan, se contemplarán las diferentes actividades que se pueden realizar desde los medios de comunicación para fomentar la lectura entre los niños y los adolescentes.

Disposición adicional sexta. Carta de los Derechos del Telespectador Infantil.

El Gobierno promoverá, a través de un acuerdo entre las familias, los profesores, las administraciones educativas y los medios de comunicación, una Carta de los Derechos del Telespectador Infantil, en la que se recoja el compromiso colectivo de transmitir a los niños y niñas los valores contenidos en nuestra Constitución.

Disposición adicional séptima. De la aprobación de los libros de texto y otros materiales curriculares.

1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía, decidirán los libros de texto y los restantes materiales curriculares a utilizar en las diferentes etapas y niveles educativos.

2. Los libros de texto y, en general, los materiales curriculares no requerirán de la previa autorización de la Administración educativa.

3. Las Administraciones educativas asegurarán que los libros de texto y los restantes materiales curriculares se adecuan a los principios y valores constitucionales y a los planes de estudio oficiales.

Disposición adicional octava. Acceso a la Universidad.

1. El estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.

2. El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá los requisitos académicos y los procedimientos para el acceso a la Universidad. En todo caso, dichos procedimientos garantizarán la transparencia, objetividad y publicidad, respetarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, facultarán a los estudiantes para ingresar en la Universidad, centro y enseñanza que deseen y facilitarán la movilidad de los mismos en el sistema universitario español.

3. Con el fin de promover la incorporación a la enseñanza universitaria a lo largo de toda la vida y elevar así el nivel de formación de la sociedad española y para dar efectividad a lo recogido en el apartado 1 de esta Disposición, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará también los procedimientos para el acceso de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral, no dispongan de la titulación académica establecida con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier Universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Disposición adicional novena. Derechos laborales y de seguridad social de los padres que tengan hijos con dificultades significativas de aprendizaje.

1. Los padres que hubieran de participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, elaborado de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la presente Ley, fueran trabajadores por cuenta ajena y su jornada laboral coincida con el compromiso de dedicación horaria establecido en el citado programa, tendrán derecho a los siguientes derechos laborales y de seguridad social, en los términos que establezca la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social:

a) A que la prestación de su jornada de trabajo, si la misma se realiza bajo el régimen de turnos, se adapte al compromiso de dedicación horaria establecido en el programa de apoyo.

b) Un permiso de cinco días al año, con derecho a remuneración.

c) Una reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual, con la disminución proporcional del salario, que coincida con el compromiso de dedicación horaria establecido en el programa específico de apoyo. Este derecho irá acompañado de una prestación económica a la familia para compensar los menores ingresos que se hubieran podido producir como consecuencia del ejercicio del mismo, y siempre que los ingresos anuales de dicha familia no sobrepasen el límite de ingresos establecido por el artículo 181 bis de la Ley General de la Seguridad Social.

d) Una suspensión del contrato laboral, con reserva del puesto de trabajo, por un tiempo máximo de tres meses, cuando así se estipule necesario para cumplir con el compromiso de dedicación horaria establecido en el programa específico de apoyo. Este derecho irá acompañado de una prestación económica a la familia para compensar los menores ingresos que se hubieran podido producir como consecuencia del ejercicio del

mismo, y siempre que los ingresos anuales de dicha familia no sobrepasen el límite de ingresos establecido por el artículo 181 bis de la Ley General de la Seguridad Social. Asimismo, se considerará como período de cotización efectiva el tiempo de suspensión del contrato por este motivo.

El ejercicio de estos derechos por los trabajadores dará derecho al empresario que tuviera que contratar a un nuevo trabajador interino para sustituirlos, a una bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

2. Así mismo, los padres que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje durante la educación obligatoria, tendrán derecho a convertir su contrato de trabajo a tiempo completo por un contrato de trabajo a tiempo parcial, en los términos que establezca la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Los trabajadores con hijos en edad escolar también tendrán derecho a un permiso de tres días al año para atender sus necesidades educativas, siempre que trabajen ambos padres o se trate de familia monoparental.

3. Los trabajadores por cuenta propia que se vieran obligados a suspender su actividad por los motivos regulados en esta disposición, tendrán derecho a que le sea considerado el período de suspensión como de cotización efectiva. A su vez, tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 en la cuota empresarial de la Seguridad Social, si hubieran de contratar a un trabajador interino que le sustituya por su participación en el programa específico de apoyo.

4. Los funcionarios públicos también tendrán derecho a los correspondientes permisos y reducciones para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.

Disposición adicional décima. Modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Uno. Se añade un nuevo párrafo segundo, con el consiguiente desplazamiento del actual, en la letra e) del apartado 4 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

«Los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje durante la educación obligatoria, tendrán derecho a convertir su contrato de trabajo a tiempo completo por un contrato de trabajo a tiempo parcial. Una vez que soliciten el retorno a la situación anterior por haber superado los motivos que justificaron la conversión de su contrato, tendrán preferencia para el acceso a un puesto de trabajo vacante de dicha naturaleza que exista en la empresa, correspondiente a su mismo grupo profesional o categoría equivalente de acuerdo con los requisitos y procedimientos que se establezcan en los convenios colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo tercero con el consiguiente desplazamiento del actual, en el apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

«Así mismo, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta, prioritariamente, la situación del trabajador que, por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica de Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, deba prestar su actividad laboral, y por el período de tiempo que dure dicho programa, en un turno específico de trabajo, sin poder participar en la rotación de los mismos».

Tres. Se añaden dos nuevas letras g) y h) en el apartado 3, un nuevo apartado 5 bis y se modifica el apartado 6 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los cuales tendrán el siguiente contenido:

«3. g) Tres días al año para atender las necesidades educativas de los hijos en edad escolar, siempre que trabajen los dos padres o se trate de familia monoparental».

«3. h) Cinco días al año para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos».

«5 bis. Los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubieran de participar en un programa específico de apoyo al mismo para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrán derecho, además del permiso correspondiente establecido en el apartado 3 de este artículo, a la reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual, con la disminución proporcional del salario, que sea necesaria para la dedicación horaria que se hubiera establecido en el correspondiente programa aprobado por la dirección del centro educativo.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si el padre y la madre del alumno causante del derecho trabajaran en la misma empresa, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.»

«6. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4, 5 y 5 bis de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario, con quince días de antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre el empresario y el trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 5 bis de este artículo serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral.»

Cuatro. Se añade una nueva letra n) en el apartado 1 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

«n) Por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos».

Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 bis al artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

«4 bis. En el supuesto de que el trabajador tenga algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, la suspensión tendrá una duración máxima de tres meses a disfrutar tanto por el padre como por la madre, o por ambos, en el supuesto de que el compromiso de participación se extienda a ambos.

La suspensión contemplada en este apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si el padre o la madre del alumno causante del derecho trabajaran en la misma empresa, el empresario podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.»

Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 125 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cual tendrá el siguiente contenido:

«1. La situación de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será asimilada a la de alta. También será asimilada a la situación de alta la suspensión del contrato de trabajo establecida en el artículo 48, apartado 4 bis de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por participar el trabajador en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos».

Dos. Se añaden dos nuevas letras, a') y c), en el artículo 180 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cuales tendrán el siguiente contenido:

«a') Una prestación económica para compensar los menores ingresos que se hubieren podido producir como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo establecida en artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o reducciones de jornada derivadas de la participación del trabajador en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos. La cuantía de dicha prestación que, en ningún caso, será inferior al Salario Mínimo Interprofesional, será equivalente, mientras dure la suspensión, al ochenta por ciento de la media del salario cotizado por el trabajador durante los últimos seis meses o, en su caso, a la fracción proporcional del mismo en el supuesto de reducción de jornada».

«c') La consideración como período de cotización efectiva del tiempo de suspensión del contrato establecida en artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a que tienen derecho los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubieran de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos».

Tres. Se añade un nuevo artículo 181 bis en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cual tendrán el siguiente contenido:

«Artículo 181 bis. Beneficiarios de la prestación económica por participar en los programas específicos para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.—Tendrán derecho a la prestación económica a que se refiere la letra a') del artículo anterior los trabajadores que hubieran ejercitado el derecho a una reducción de jornada o suspensión de contrato previsto en el artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de acuerdo con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, reúnan la condición exigida en el apartado 1 del artículo 124, acrediten un período mínimo de cotización de ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al curso académico en el que sobreviniere su participación en dicho programa específico, y siempre que los ingresos anuales, de cualquier naturaleza, tras la reducción o suspensión del contrato, del conjunto de la unidad familiar, entendida conforme al apartado 2 del artículo 215 de esta Ley, divididos por el número de miembros que la componen, no supere el Salario Mínimo Interprofesional.»

Disposición adicional duodécima. Bonificaciones en los contratos de interinidad celebrados para sustituir a quienes hubieran ejercitado los derechos derivados de su participación en los programas específicos de apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.

En los supuestos en que, como consecuencia del ejercicio por los trabajadores de los derechos a reducciones, permisos, o, en su caso, suspensiones laborales regulados en la Ley del Estatuto de los Trabajadores para participar en los programas específicos de apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, el empresario contratare de forma interina a un nuevo trabajador para sustituirlo, las cotizaciones del trabajador interino tendrán una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Asimismo, en los supuestos en que un trabajador, incluido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, participara en uno de estos programas específicos de apoyo y, como consecuencia de ello, hubiera de contratar de forma interina a un trabajador que lo sustituyera en el tiempo marcado por el citado programa, las cotizaciones a la Seguridad Social por dicho trabajador obtendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial.

A su vez, en el caso de que el trabajador por cuenta propia se viera precisado a suspender su actividad, como consecuencia de su participación en uno de estos programas específicos y, por ello, su cotización a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el tiempo de suspensión se considerará como de cotización efectiva.»

Disposición adicional decimotercera. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Uno. Se añaden tres nuevas letras f'), g) y h) en el apartado 1 y un nuevo apartado 3 bis en el artículo 30 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los cuales tendrán el siguiente contenido:

«1. f') El funcionario que tenga algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrá derecho, además del permiso correspondiente establecido en la letra h) de este apartado, a la reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual que sea necesaria para la dedicación horaria que se hubiera establecido en el correspondiente programa aprobado por la dirección del centro educativo, con la disminución proporcional de sus retribuciones, sin perjuicio de lo establecido a estos efectos en el Capítulo IX del Título II de la Ley General de la Seguridad Social, que le será de aplicación.

La reducción de jornada contemplada en el párrafo anterior constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.»

«1. g) Para atender las necesidades educativas de los hijos en edad escolar, siempre que trabajen los dos padres o se trate de familia monoparental, tres días al año.»

«1. h) Para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, cinco días al año.»

«3 bis. En el supuesto de que el funcionario tuviera algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa especifico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrá derecho a un permiso cuya duración máxima será de tres meses a disfrutar tanto por el padre como por la madre o por ambos en el supuesto de que el compromiso de participación se extienda a ambos. Este permiso no será retribuido y el funcionario tendrá derecho, siempre que se reúnan las condiciones exigidas, a una prestación económica que, en ningún caso, será inferior al salario mínimo interprofesional y que será equivalente, mientras dure la suspensión, al ochenta por ciento de la media de la retribución cotizada durante los últimos seis meses o, en su caso, a la fracción proporcional de la misma en el supuesto de reducción de jornada.

El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.»

Disposición transitoria primera. Del título profesional de especialización didáctica

El profesorado que se incorpore a la docencia a partir del curso 2005-2006 deberá poseer el nuevo Título profesional de especialización didáctica a que se refiere el artículo 25 de la presente Ley.

Disposición transitoria segunda. Vigencia de normas reglamentarias

En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes.

Disposición final primera. Normas derogadas y normas en vigor.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final segunda. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de los apartados 1, 18 y 30 del artículo 149.1 de la Constitución Española.

Disposición final tercera. Desarrollo de la presente Ley.

Las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno o que, por su propia naturaleza, corresponden al Estado conforme lo establecido en la disposición adicional primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

MEMORIA ECONÓMICA DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS

I. PRESENTACIÓN

A lo largo de estos años de aplicación de la reforma educativa se ha manifestado la necesidad de plantear otras innovaciones para facilitar que los cambios propuestos se lleven a la práctica con plena garantía. Hoy se trata de poder aplicar y profundizar los cambios que la LOGSE propugnaba y no se han podido llevar adelante en su totalidad, de abordar los problemas educativos derivados de cambios en la sociedad española que no se pudieron prever en el momento de la discusión de la Ley y de modificar aquellos aspectos de la LOGSE que la experiencia acumulada en estos años de aplicación aconseja.

El cumplimiento de los objetivos contemplados en la LOGSE, junto con las innovaciones que surgen de la experiencia adquirida, necesitan un compromiso presupuestario que asegure la viabilidad de las propuestas establecidas. Es necesario, por tanto, establecer un amplio acuerdo parlamentario para los próximos cinco años en torno a la financiación de la educación que cree un clima de seguridad en el conjunto de la sociedad y en todos los miembros que forman la comunidad educativa y que genere una mayor confianza en la capacidad de las medidas propuestas para mejorar la calidad y la igualdad de la educación. Un acuerdo parlamentario sobre la financiación de la reforma que permitirá aportar a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema educativo y la permanente mejora de la calidad.

El incremento presupuestario para hacer frente a las transformaciones que se plantean es indispensable. De esta forma será posible ampliar la oferta de educación infantil, intervenir a tiempo de superar las dificultades del alumnado, mediante la adopción de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad en las distintas etapas educativas, establecer planes de

intervención para compensar las desigualdades, reforzar los sistemas de apoyo y orientación, ampliar la oferta de programas de garantía social, incrementar la autonomía de los centros y reforzar la función directiva, dar un impulso a la participación y corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de los centros, mejorar sus instalaciones, y establecer un nuevo estatuto de la función docente en el que se recojan los derechos y los deberes del profesorado, en el que se establezcan incentivos retributivos y profesionales vinculados al desarrollo de su práctica docente.

Junto con estas medidas es preciso reforzar aquellas otras que permitan el acceso de todos los alumnos a los diferentes niveles educativos en condiciones equitativas: la igualdad en el acceso de los alumnos a todos los centros sostenidos con fondos públicos, la necesidad de que todos ellos escolaricen por igual a los alumnos con necesidades educativas especiales o que pertenecen a minorías étnicas o culturales, el incremento de los programas de educación compensatoria y la especial atención a los centros que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales o que están situados en zonas socialmente desfavorecidas.

Todo ello, con el fin de que el Estado garantice el ejercicio del derecho fundamental a la educación, en cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, de tal forma que los beneficios que se deriven de la aplicación de las medidas contempladas en esta Ley alcancen a toda la población escolar.

II. RECURSOS (Financiación en año-horizonte=2007)

Tal y como se recoge en la disposición adicional segunda, de la presente Ley, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que, en el plazo de cinco años, el gasto público en educación crezca en España hasta alcanzar la media de la Unión Europea. Para ello, el Gobierno incluirá en las respectivas Leyes de Presupuestos las cantidades correspondientes a cada uno de los cinco años a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con la distribución recogida en esta memoria económica y con el fin de que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos educativos que se recogen en la Disposición Adicional Tercera.

La distribución del presupuesto entre las diferentes Comunidades Autónomas se efectuará mediante los oportunos convenios entre el Estado y las distintas Comunidades, teniendo en cuenta que los gastos de carácter plurianual que se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos que no tendrán la consideración de inversión nueva, se consolidarán en la financiación de cada Comunidad Autónoma.

Por todo ello, desde el año base (2002) hasta el año-horizonte (2007) los presupuestos de educación del conjunto de las administraciones españolas, deberán registrar un proceso gradual de aproximación a la media europea actual en términos de PIB (5,12 por ciento), hasta conseguir igualarla a final del quinquenio.

Por tanto, este objetivo de superar nuestro actual porcentaje del 4,50 por ciento y erradicar el diferencial negativo del 0,62 por ciento, permitirá financiar progresivamente los veinticuatro objetivos educativos enumerados en la Disposición Adicional Tercera del presente texto legal hasta alcanzar plenamente su consecución en el mencionado año-horizonte.

El cuadro adjunto permite visualizar el método de cálculo utilizado para obtener la financiación correspondiente al año-horizonte a precios constantes (en euros del año-base del 2002)

1) Multiplicar el PIB estimado para 2002 en millones de euros (687.755) por nuestro actual diferencial negativo con la media de la Unión Europea (0,62 por ciento)

2) Deducir la parte correspondiente a la Educación Universitaria (incluidas las becas) que representa en torno al 20 por ciento del Gasto público total en educación.

3) Obtener, para el 2007 y a precios constantes, la financiación adicional para la prevención del fracaso escolar y la mejora de la calidad de la enseñanza no universitaria.

Nº	Descripción objetivo	Método de cálculo	Millones €
1	Igualar la media europea del gasto público educativo total respecto al PIB	687.756 Millones € x 0,0062	4.264,1
2	A deducir la parte correspondiente a la educación universitaria	4.264,1 Millones € x 0,2	-852,8
3	Financiación adicional anual neta para gasto público educativo no universitario	4.264,1 – 852,8	3.411,3
		TOTAL RECURSOS 2007	**3.411,3**

III. EMPLEOS (Objetivos de gasto en año-horizonte=2007)

Nº	Bloque	Descripción objetivo	Método de cálculo	Millones €
1	Ed. Infantil (Ciclo 0-3)	Necesidades escolarización 300.000 familias	a) coef. niños/familias= 1,2 b) ratio niños/profesor= 12 c) coste año/profesor= 20.000 € d) financiación AAPP= 2/3 [(300.000 x a) / b] x (c x d)	400,0
2	Ed. Infantil (Ciclo 3-6)	Alcanzar tasa 100% escolarización niños 3 años	N) total niños 3 a. = 385.000 a) tasa No escolarizados= 5,3% b) ratio niños/profesor= 20 c) coste año/profesor= 27.000 € [(N x a) / b] x c	27,5
3	Ed. Primaria (1r. Ciclo)	Generalización enseñanza idioma extranjero Centros públicos. y concert.	*(2 y 3 líneas= 6 horas* *4 líneas= 10 horas* *>5 líneas= 15 horas)* *(Púb.: 20.076 h./25= 823 prof.* *Conc.: 9.448 h./25= 378 prof.)* *823+378= 1.201 x 27.000 €*	32,4
4	Ed. Primaria	Plan Fomento Lectura	*(Asignación anual fija)*	20,0
5	Ed. Primaria	..5 h. semana actividades complementarias Centros públicos	N) unidades= 85.000 a) horas semana= 5 b) cómputo= 25 h/profesor c) coef. corrector= 0,7 d) coste año/profesor= 27.000 € [(N x (a / b) x c] x d	321,3
6	ESO	..3 h. semana actividades complementarias Centros públicos	N) unidades= 50.000 a) horas semana= 3 b) cómputo= 18 h/profesor c) coef. corrector= 0,7 d) coste año/profesor= 31.000 € [(N x (a / b) x c] x d	180,8
7	ESO	..3 h. semana desdoblamiento grupos. Centros públicos	N) unidades= 50.000 a) horas semana= 3 b) cómputo= 18 h/profesor c) coste año/profesor= 31.000 € [N x (a / b)] x c	258,1

Nº	Bloque	Descripción objetivo	Método de cálculo	Millones €
8	ESO	Programas diversificación curricular y garantía social Centros públicos y concert.	*Div, curric.púb= 68,9 M € Div. curric. Conc= 10,0 M € Gar, Social: 20.000 alumnos, en 1.000 grupos a 30 h. sem., cómputo de 18 h. prof. y coste prof/año de 31.000 €= 25,8 M€*	104,7
9	ESO	Incentivar tutorías en ESO ..2 h. semana Centros públicos	N) unidades púb= 50.000 a) horas semana= 2 b) cómputo púb= 18 h/prof. c) coste medio año/prof=31.000 [N x (a / b)] x c	208,2
10	TIC	Ordenadores y conexión gratuita a Internet en todos los niveles educativos Centros públicos	*(Asignación anual fija)*	20,0
11	TIC	Formación TIC para docentes en todos los niveles educativos Profesores públicos y concert	*(Asignación anual fija)*	20,0
12	TIC	Colaboración con editoriales para acceso por Internet a Materiales didácticos Profesores y alumnos de centros públicos y concertados	*(Asignación anual fija)*	15,0
13	TIC	Colaboración con empresas para facilitar compra de ordenadores portátiles Profesores y alumnos de centros públicos	*(Asignación anual fija)*	15,0
14	Apoyo Familias	Gratuidad libros de texto en Primaria y ESO Centros públicos y concert.	*(Asignación anual fija)*	75,0
15	Apoyo Familias	Adelanto horario apertura centros para facilitar horario laboral familiar Centros públicos Inf. y Prim	N) total alumnos= 2,5 Millones a) % alumnos afectados= 20% b) ratio alumnos/cuidador= 25 c) horas semana= 5 d) cómputo= 25 horas cuidador e) coste año/cuidador= 15.000 € [(N x a) / b] x [(c/d) x e]	80,0
16	Apoyo Familias	Dotación comedor: Inversión Centros públicos con niveles obligatorios (Primaria y ESO)	N) unidades= 135.000 a) % uds. NO dotadas= 20% b) coste inversión/ud.= 3.000 € (N x a) x b	81,0
17	Apoyo Familias	Reducción jornada laboral para padres con hijos con dificultades escolares	*Constitución de un fondo social de ayuda familiar por esta contingencia temporal.*	135,2
18	Compensatoria	Ratio de 15 alumnos/aula en centros ZAEP + ..gastos de funcionamiento. Centros públicos	N) uds. EI+EP+ESO=178.000 a) % uds. ZAEP= 10% b) coef. corrector ratio= 25/15 c) coste año/profesor= 27.000 € d) ..coste adicional= 10% [(N x a) / b] x (c x 1,1)	297,2
19	Compensatoria	..profesores y recursos para atención de alumnos inmigrantes. Centros públicos y concert.	N) total inmigrantes= 1.500.000 a) tramo edad 0-16 años= 20% b) ratio alumnos/profesor= 25 c) horas semana refuerzo= 5 d) cómputo= 25 horas profesor e) coste año/profesor= 27.000 € f) ..coste adicional= 10% [(N x a) /b] x [(c x d)x (e x 1,1)]	71,3
20	Profesorado	Aplicación nuevo sexenio para evaluación voluntaria de práctica docente Prof público todos los niveles	N) total profesorado= 400.000 a) ratio profes. afectados=1/3 b) coste año/sexenio= 800 € [(N x a) x b]	105,6
21	Profesorado	Reducción 6 h. semana clase Profesorado público de 55 a 60 años de todos los niveles	N1) total maestros= 225.000 N2) total prof. Sec.= 175.000 a) profesorado afectado= 7,5% b) horas reducción semana= 6 c1) cómputo horas maestro=25 c2) cómputo h. prof. Sec.=18 d1) coste maestro= 27.000 € d2) coste prof.Sec.=31.000 € [(N x a) x (c x b)] x d	243,6
22	Profesorado	Jubilación voluntaria Profesorado público de 60 años de todos los niveles	N1) total maestros= 225.000 N2) total prof. Sec.= 175.000 a) profesorado afectado= 3% b1) coste maestro= 27.000 € b2) coste prof.Sec.=31.000 € [(N x a) x b]	345,0
23	Profesorado	Nuevo curso de especialización didáctica	*(Asignación correspondiente a 2007)*	25,8
24	Profesorado	Implantación progresiva año sabático profesorado público. Todos los niveles	N1) total maestros= 225.000 N2) total prof. Sec.= 175.000 a) años de rotación= 35 b1) coste maestro= 27.000 € b2) coste prof.Sec.=31.000 € [(N /a) x b]	328,6
			TOTAL EMPLEOS 2007	**3.411,3**

IV. ANEXO METODOLÓGICO

La metodología de cálculo utilizada en cada uno de los objetivos educativos para el período 2002-2007 es la siguiente.

Objetivo 1. El incremento de plazas en el primer ciclo de educación infantil para cubrir las necesidades de escolarización de 300.000 familias.

El proceso gradual de extensión del primer ciclo de Educación Infantil, permitirá alcanzar a final de quinquenio el objetivo señalado de alcanzar la cota de las 300.000 familias atendidas, que se corresponden con un total de 360.000 nuevas plazas de iniciativa pública.

El cálculo económico toma en cuenta tres hipótesis básicas:

a) La ratio media niños/educador en todo el ciclo se ha establecido en 12.

b) El coste medio año/educador se ha fijado en 20.000 euros, teniendo en cuenta la participación de maestros especialistas en educación infantil junto con otros profesionales.

c) La financiación conjunta de las Administraciones públicas será de 2/3.

La cantidad total obtenida asciende a 400 millones de euros.

Objetivo 2. La escolarización de toda la población correspondiente al tramo de edad entre tres y seis años.

Según los últimos datos publicados por la Oficina de Estadística del MECyD, este segundo ciclo de la Educación Infantil presenta ya tasas de escolarización del 100 por ciento en los tramos de 4 y 5 años y del 94,7 por ciento en el de 3 años.

Por tanto, se trata de continuar el proceso de aproximación continuada hasta alcanzar la tasa de escolarización del 100 por ciento dentro del período considerado.

Las hipótesis para el cálculo económico son básicamente:

a) Cifra estimada del tramo de edad de 3 años (según proyecciones del INE).

b) La ratio media niños/profesor se ha establecido en 20.

c) El coste medio año/profesor es de 27.000 euros.

La cantidad total obtenida asciende a 27,5 millones de euros.

Objetivo 3. Generalización de la enseñanza de una lengua extranjera en el primer ciclo de Educación Primaria.

La estimación del número de profesores especialistas necesarios para generalizar la enseñanza de una lengua extranjera en el primer ciclo de Educación Primaria se ha calculado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) En los centros de una línea los profesores que están impartiendo la lengua extranjera en el segundo y

tercer ciclo de Primaria cubrirían también las 4h necesarias para el primer ciclo.

b) En los centros de 2 y 3 líneas se incrementarían 6 horas a la semana para permitir que siguieran disponiendo de horas para poder atender al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje con las horas libres de atención directa a alumnos del tutor.

c) En los centros de 4 líneas se incrementarían 10 horas a la semana con el mismo objetivo enunciado en el apartado anterior.

d) En los centros de 5 o 6 más líneas se incrementarían 15 horas a la semana con el mismo objetivo enunciado en los apartados anteriores.

Realizando los cálculos correspondientes en función del número de líneas en los centros públicos y privados concertados se ha obtenido la cantidad global presupuestada para el cumplimiento de este objetivo, con el coste medio año/profesor de 27.000 euros que asciende a 32,4 millones de euros.

Objetivo 4. Plan de fomento de la lectura.

Desde el inicio del quinquenio, se pondrá en funcionamiento un programa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, de fomento de la lectura que contemple la inclusión de una hora de lectura diaria en los centros, la dotación de bibliotecas escolares en todos los centros y el establecimiento de acuerdos con las familias para realizar actividades de lectura en casa. En este plan, se contemplarán las diferentes actividades que se pueden realizar desde los medios de comunicación para fomentar la lectura entre los niños y los adolescentes.

En los sucesivos presupuestos anuales de las administraciones educativas se establecerán las correspondientes asignaciones para llevar a cabo este objetivo a lo largo del quinquenio, estableciéndose la dotación anual de 20 millones de euros con este fin.

Objetivo 5. Actividades formativas complementarias en Educación Primaria.

Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos de Educación Primaria ofrezcan una hora diaria de actividades educativas complementarias que estarán dirigidas a:

a) reforzar el dominio de los aprendizajes instrumentales básicos, tales como la lectura, la escritura y el cálculo;

b) adquirir las destrezas y las habilidades básicas de trabajo y estudio; y

c) realizar actividades relacionadas con las capacidades expresivas y creativas de los niños y niñas.

Para ello, se ha partido del número de:

a) unidades en la pública de Educación Primaria: 85.000.

b) incremento 5 horas a la semana.

c) participación del 70 por ciento del alumnado de Educación Primaria

d) 25 horas profesor.

e) el coste medio año/profesor es de 27.000 euros.

Con lo que se llega a una cantidad de 321,3 millones de euros.

Objetivo 6. Actividades formativas complementarias en Educación Secundaria Obligatoria.

Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos que imparten la Educación Secundaria Obligatoria ofrezcan tres horas semanales de clase complementarias con el fin de realizar actividades que faciliten, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, la superación de las mismas y, para el alumnado con mayor motivación y capacidad para aprender, la ampliación y profundización de sus conocimientos.

Para ello, se ha partido del número de:

a) unidades en la pública de Educación Secundaria Obligatoria: 50.000.

b) incremento 3 horas a la semana.

c) participación del 70 por ciento del alumnado de la ESO.

d) 18 horas profesor.

e) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.

Con lo que se llega a una cantidad de 180,8 millones de euros.

Objetivo 7. Desdoblamientos de grupos en la Educación Secundaria Obligatoria.

Las Administraciones educativas garantizarán el desdoblamiento de los grupos ordinarios en las áreas instrumentales, lenguas propias, idioma extranjero y matemáticas, con el objetivo de crear grupos de alumnos más reducidos que permitan una atención más individualizada.

Para ello, se ha partido del número de:

a) unidades en la pública de Educación Secundaria Obligatoria: 50.000.

b) incremento 3 horas a la semana para combinando los grupos poder realizar los desdoblamientos oportunos en las áreas mencionadas.

c) 18 horas profesor.

d) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.

Con lo que se llega a una cantidad de 258,1 millones de euros.

Objetivo 8. Incremento de la oferta de los programas de diversificación curricular y de garantía social.

En la definición de las enseñanzas mínimas, el Gobierno fijará las condiciones en que, para determinados alumnos al comienzo del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, previa su oportuna evaluación, puedan establecerse diversificaciones del currículo en los centros ordinarios. En este supuesto, los objetivos de esta etapa y, por tanto, el título de Graduado, se alcanzarán con una metodología específica, a través de contenidos e, incluso, de áreas diferentes a las establecidas con carácter general.

Todos los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria deberán ofrecer, al menos, un programa de diversificación curricular. El número de los programas impartidos se incrementará en función del número de alumnos y del contexto social en el que el centro esté situado. Los centros contarán con los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar tales programas.

Con este fin se ha previsto en los centros públicos:

a) aumentar la oferta de programas de diversificación curricular a 40.000 nuevos alumnos.
b) 15 alumnos por aula en las áreas específicas.
c) 18 horas profesor.
d) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.

Y en los centros privados concertados:

a) aumentar la oferta de programas de diversificación curricular a 7.000 nuevos alumnos.
b) 15 alumnos por aula en las áreas específicas.
c) 23 horas profesor.
d) el coste medio año/profesor es de 33.000 euros.

Con lo que se llega a una cantidad de 10 millones de euros.

Del mismo modo para los alumnos mayores de 16 años que no obtengan el título de graduado en Educación Secundaria ni a través del currículo ordinario ni cursando un programa de diversificación curricular, se organizarán programas específicos de garantía social, tal y como se regula en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo.

Para dar respuesta a este alumnado y facilitarles tanto la incorporación al mercado laboral se ha previsto:

a) aumentar la oferta de programas de garantía social a 10.000 nuevos alumnos.
b) 20 alumnos por aula.
c) 18 horas profesor.
d) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.

Con lo que se llega a una cantidad de 25,8 millones de euros. Por tanto la cantidad global para este objetivo asciende a 104,7 millones de euros.

Objetivo 9. La tutoría en la Educación Secundaria Obligatoria.

El profesorado que ejerza la función de tutor en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá el mismo número de horas lectivas y el mismo complemento específico para el desarrollo de sus funciones que los jefes de los departamentos didácticos.

Dado que los tutores de la ESO ya tienen contemplada una hora lectiva para el desarrollo de sus funciones se ha previsto:

a) 50.000 unidades de ESO en los centros públicos.
b) incrementar 2 horas lectivas a todos los tutores de la ESO de los centros públicos para el desarrollo de sus funciones de coordinación del grupo de profesores y de relación con las familias.
c) 18 horas profesor.
d) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.
e) igualar el complemento específico al de los jefes de los departamentos didácticos.

Con lo que se llega a una cantidad de 208,2 millones de euros.

Objetivo 10. Dotación de ordenadores en toda la red de centros públicos no universitarios y conexión gratuita a internet.

Desde el inicio del quinquenio, se pondrá en funcionamiento un programa continuado de puesta al día de equipamiento informático y de conexiones gratuitas a Internet, en toda la red de centros públicos no universitarios.

En los sucesivos presupuestos anuales de las administraciones educativas se establecerán las correspondientes asignaciones para llevar a cabo este objetivo a lo largo del quinquenio, estableciéndose la dotación anual de 20 millones de euros con este fin.

Objetivo 11. Formación en nuevas tecnologías para el profesorado de las distintas etapas educativas de centros públicos y concertados.

La puesta en marcha de un Programa de formación específico para que el profesorado pueda usar las nuevas tecnologías como una herramienta útil en las clases de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas. El Ministerio de Educación y Cultura transferirá a las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas la dotación anual de 20 millones de euros con este fin.

Estas ofertas formativas en materia de las TIC estarán orientadas indistintamente a los docentes del sector público y del concertado.

Objetivo 12. Acuerdos de colaboración con editoriales y otras entidades para el acceso, a través de internet, a materiales didácticos.

El Ministerio de Educación y Cultura, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con las editoriales y otras entidades para facilitar el acceso del profesorado y del alumnado, a través de Internet, a materiales didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, estableciéndose la dotación anual de 15 millones de euros con este fin.

Objetivo 13. Acuerdos de colaboración con empresas y otras instituciones para facilitar la compra de ordenadores portátiles.

El Ministerio de Educación y Cultura, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, promoverá la firma de acuerdos de colaboración con las empresas y otras instituciones con el fin de facilitar la compra de ordenadores portátiles al profesorado y al alumnado de Educación Secundaria estableciéndose la dotación anual de 15 millones de euros con este fin.

Objetivo 14. Gratuidad de libros de texto en Primaria y ESO para alumnos de centros públicos y concertados.

El Ministerio de Educación y Cultura transferirá a las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas la dotación anual de 75 millones de euros con el fin de disponer de los créditos presupuestarios suficientes, a lo largo del quinquenio, para hacer viable este objetivo.

Objetivo 15. El adelanto del horario de apertura de los centros públicos para atender la demanda de las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres

Con el fin de atender la demanda social, cada vez más amplia, de ampliar el horario de apertura de los centros para poder atender a las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres, se ha calculado una partida presupuestaria específica que será transferida a las Comunidades Autónomas utilizando los siguientes parámetros:

a) 2,5 millones de alumnos.
b) 30 por ciento de alumnos afectados.
c) una media de 5 horas semana en función de las necesidades de las familias con hijos escolarizados en Educación Infantil y Primaria.
d) ratio alumnos/cuidador = 25.
e) 25 horas/cuidador.
f) coste año/cuidador 15.000 euros.

Con lo que se llega a una cantidad de 80 millones de euros.

Objetivo 16. Dotación de equipamiento e instalación de cocinas y comedores en centros públicos de primaria y ESO que no disponen de dicho servicio.

Se incluirá en los presupuestos generales del Estado la dotación correspondiente para que, en la red de centros públicos con niveles obligatorios, las administraciones educativas establezcan programas de inversión priorizados con la finalidad de proveer del necesario equipamiento en cocinas y comedores escolares en aquellos que no disponen de dichos servicios o que deben ser objeto de reposición.

Las principales hipótesis consideradas para efectuar el correspondiente cálculo económico son las siguientes:

a) el porcentaje de unidades a dotar en estos 5 años es del orden del 20 por ciento.
b) El coste medio por unidad se ha estimado en 3.000 euros.

Objetivo 17. Programas específicos para facilitar el apoyo de las familias a sus hijos en el proceso de aprendizaje.

Los Centros educativos establecerán programas específicos para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, siempre que estimen que dichos apoyos pueden mejorar el rendimiento académico de los mencionados alumnos.

En el supuesto de que los padres hubieran de participar activamente en el desarrollo de estos programas, los padres que trabajen por cuenta ajena podrán ejercitar los correspondientes derechos laborales a permisos, reducciones, suspensiones o, en su caso, excedencias, de acuerdo con la legislación laboral o, en su caso, de funcionarios.

En las condiciones que se establecen en el articulado y en las disposiciones adicionales y transitorias de la presente Ley, se ha realizado una estimación del número de alumnos que pueden participar anualmente en estos programas.

Se han tomado como base del cálculo los siguientes parámetros:

a) 10.000 alumnos cada período de tres meses.
b) percepción por parte del padre o madre participante del 80 por ciento de la base de cotización a la Seguridad Social de los tres últimos meses de contrato.
c) ingresos máximos para poder percibir estas cantidades compensatorias.

A partir de estos parámetros y teniendo en cuenta los sueldos medios de los que pueden participar en estos programas se ha consignado la cantidad de 135,2 millones de euros.

Objetivo 18. Reducción a 15 en la ratio alumnos/aula en centros y zonas de atención educativa preferente y mejora en la dotación de gastos de funcionamiento.

Los centros públicos situados en Zonas de Atención Educativa Preferente (ZAEP) requieren medidas de apoyo inspiradas en el principio de discriminación positiva. En esta línea, el presente objetivo puede concretarse en reducir a 15 la ratio alumnos/aula (que obviamente requerirá un aumento importante de profesores adscritos) y en una mejora sustancial de los gastos de funcionamiento de dichos centros.

Las principales hipótesis para proceder al cálculo económico son:

a) Se considera que del total de centros públicos de Infantil, Primaria y ESO, un 10 por ciento de sus unidades deberían ser contemplados en este objetivo.

b) Bajar la ratio de 25 a 15, con el consiguiente incremento de profesorado.

c) La mejora en gastos de funcionamiento, supone un aumento equivalente al 10 por ciento del coste del profesorado adicional.

Con lo que se llega a una cantidad de 297,2 millones de euros.

Objetivo 19. Más profesores y recursos destinados a atender alumnos inmigrantes en centros públicos y concertados.

Según información reciente del INE, la cifra de población extranjera en España se sitúa ya en el millón y medio. Por otra parte, y con datos de EUROSTAT, el tramo de edades 0 a 16 años, de la población de países terceros residente en la Unión Europea, equivale al 20 por ciento del total. En consecuencia podemos cifrar en 300.000 el número de niños y jóvenes inmigrantes a atender por nuestro sistema educativo.

Estas medidas de atención se han concretado básicamente en los efectivos habituales de profesorado y gastos de funcionamiento para los centros públicos y concertados, que dicha cifra de población inmigrante requiere, y además un refuerzo semanal de 5 horas/profesor y un incremento semejante al del objetivo 18 en los gastos de funcionamiento de dichos centros.

Con estos parámetros y los cómputos y costes de profesores anuales utilizados en anteriores objetivos se obtiene la cantidad de 71,3 millones de euros.

Objetivo 20. Nuevo sexenio asociado a la evaluación voluntaria de la práctica docente.

El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y oídos los representantes del profesorado, establecerá un nuevo complemento retributivo ligado a la evaluación de la práctica docente, cuya cuantía será similar a la percibida por los actuales sexenios de formación. Esta evaluación tendrá carácter voluntario y se desarrollará, con carácter individual, cada seis años.

Para estimar el coste de esta medida se han utilizado los siguientes parámetros:

a) Número total de profesores de centros públicos de los distintos niveles educativos: 400.000.

b) Porcentaje de profesorado participante en este período: 33 por ciento.

c) Coste sexenio/año: 800 euros.

Con estos parámetros se obtiene la cantidad de 105,6 millones de euros.

Objetivo 21. Reducción de 6horas lectivas semanales al profesorado de los centros públicos de los distintos niveles educativos que tiene entre 55 y 60 años.

Este objetivo contempla esta reducción de 6 horas semanales de clase al profesorado público que pertenece a este tramo de edad para ser destinado a otras tareas pedagógicas y que se estima en un porcentaje en torno al 7,5 por ciento.

El coste alternativo, que es el que se cuantifica en esta memoria, es el coste de sustituciones de nuevo personal docente para cubrir las mencionadas reducciones horarias en la impartición directa de las clases.

Con estos parámetros se obtiene la cantidad de 243,6 millones de euros.

Objetivo 22. Jubilaciones voluntarias al profesorado de los centros públicos de los distintos niveles educativos que tiene 60 años.

Las jubilaciones voluntarias ofrecidas al profesorado público no universitario de 60 años de edad, se estima que puedan corresponder durante estos 5 años a un 3 por ciento del total de efectivos. Teniendo en cuenta el número de profesores de Primaria y Secundaria que se pueden acoger a esta medida el coste estimado para este período es de 345 millones de euros.

Objetivo 23. Implantación del nuevo curso de especialización didáctica.

El Gobierno, previa consulta a las comunidades Autónomas, establecerá las características de los estudios necesarios para obtener el título profesional de especialización didáctica. Dicho título, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se obtendrá tras la superación de un curso de cualificación pedagógica, cuyos contenidos, duración y organización se establecerán por el Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, este curso tendrá una duración mínima de un curso académico e incluirá materias teóricas y prácticas docentes.

Para la implantación de este nuevo curso de especialización didáctica para el profesorado de Secundaria se ha realizado una estimación del número de nuevos profesores que se incorporarán al cuerpo de Secundaria a partir del curso 2005-2006, consignándose para este objetivo una cantidad de 25,3 millones de euros.

Objetivo 24. Implantación progresiva del año sabático al profesorado de los centros públicos de los distintos niveles educativos.

Este programa de implantación progresiva del año sabático se ha calculado a partir de las cifras oficiales sobre plantilla de funcionarios docentes entre maestros y profesores de Secundaria.

El período de rotación completa de este programa se establece en 35 años, lo que supone que anualmente participarían del mismo un 2,8 por ciento del total de profesores.

Teniendo en cuenta los costes por año del profesorado de los distintos niveles educativos, se obtiene una cantidad de 328,6 millones de euros.

V. PRINCIPALES FUENTES ESTADÍSTICAS CONSULTADAS

Del Ministerio de Educación Cultura y Deporte:

«Datos y cifras. Curso escolar 2002/2003.»

«Estadística del gasto público en educación. Series e indicadores 1992 a 2000. Presupuesto liquidado.»

«Estadística de las enseñanzas no universitarias. Series e indicadores 1992-93 a 2001-02. Enseñanzas de Régimen General.»

«Estadísticas de la Educación en España. 1998 1999. Resultados detallados. Series e indicadores.»

Del Instituto Nacional de Estadística:

«INE base. Demografía y población. Proyecciones de población calculadas a partir del censo de 1991. Evaluación y revisión.»

«INE. Notas de prensa. 26 de julio de 2002. La población de España alcanza los 40.847.371 habitantes, más de millón y medio de nacionalidad extranjera.»

De EUROSTAT:

«Las cifras clave de la educación en Europa. 1999-2000.»

«Statistiques sociales européens. Migration.»

De la OCDE:

«Regards sur l'éducation. Les indicateurs de l'OCDE. Enseignement et compétences-2001.»

A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, Presenta una enmienda de totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.—**Xavier Trias i Vidal de Llobatera,** Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

ENMIENDA NÚM. 25

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Texto alternativo que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)

Exposición de motivos

La mejora de las políticas educativas se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos, en consonancia con el aumento de la voluntad de los ciudadanos por conseguir mayores niveles de calificación y participación.

Gracias a los esfuerzos de los ciudadanos y al continuo impulso del gobierno del Estado y de los gobiernos de las Comunidades Autónomas se ha universalizado el acceso a la educación, derecho fundamental de los ciudadanos.

La transferencia de las competencias en materia de educación a las diecisiete Comunidades Autónomas, que actualmente las están ejerciendo en todos los ámbitos de la educación, ha supuesto una nueva situación histórica en el panorama político y educativo del Estado, que ha originado una práctica enriquecedora a partir de las experiencias educativas de las diferentes nacionalidades y regiones.

Esta nueva situación conduce a estructurar un sistema educativo común, con la suficiente flexibilidad para completarlo con el desarrollo de las políticas educativas propias de cada Comunidad Autónoma.

La sociedad española ha afrontado una profunda transformación en los últimos decenios. Ha conseguido, a la vez, plantear positivamente la resolución de sus propios cambios internos y encarar los procesos de adaptación requeridos por la integración de España en la Unión Europea. En pocas décadas, las condiciones de desarrollo han mejorado considerablemente. La mejora sustancial del nivel educativo que ha experimentado España a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX ha constituido uno de los factores más importantes de aceleración del crecimiento económico y del bienestar social del país.

En ese esfuerzo común han desempeñado un papel importante las reformas previas de nuestro sistema educativo. La extensión y universalización de la educación básica no sólo ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades; también ha facilitado un incremento en los diferentes niveles de calificación de una buena parte de la juventud española. Mantener y aumentar el poder calificador del sistema educativo junto a la integración en éste del máximo número posible de alumnos, siguen siendo objetivos esenciales de toda ley educativa y también de ésta, en consecuencia.

Para acometer con posibilidades de éxito los retos del contexto social y económico, en cambio y evolución continuos, resulta conveniente modificar los marcos normativos hasta ahora en vigor, con el objetivo primordial de promover la mejora del rendimiento del sistema educativo mediante una adaptación a las nuevas circunstancias.

Un segundo objetivo de esta ley consiste en garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la educación que además debe ser gratuita desde los tres años hasta completar la educación básica. Y en este sentido, la Ley refuerza el carácter educativo de la educación preescolar y de la educación infantil, al tiempo que establece la etapa de los tres a los seis años como gratuita.

El tercero de los objetivos es, precisamente, mantener el carácter abierto de la ordenación curricular del sistema educativo, para evitar que el propio sistema produzca exclusiones no deseadas.

Como cuarto objetivo la presente Ley se propone elevar la consideración social del profesorado, reforzando el sistema de formación inicial, en consonancia con la doble dimensión científico-pedagógica de la tarea de enseñar y de la formación que ésta exige, y articulando una carrera profesional en la que evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado. Dentro de cada uno de los Cuerpos en los que se estructura la función pública docente, la promoción de la carrera profesional permitirá alcanzar, mediante los procedimientos que establecerá cada Administración educativa, una categoría profesional superior, sin necesidad de pasar a ocupar un destino diferente al actual: «categoría de catedrático» para los funcionarios de todos los cuerpos docentes que imparten enseñanzas en la educación secundaria y «categoría de magister» para los funcionarios del cuerpo de maestros.

También se prevé un procedimiento específico para que los funcionarios del Cuerpo de Maestros que están destinados, con carácter definitivo, a plazas correspondientes al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, puedan promocionar, por un turno restringido y especial al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, manteniendo la destinación que ocupan, y siempre que reúnan los requisitos de titulación previstos en esta Ley.

El quinto objetivo de la Ley está relacionado con el desarrollo de la autonomía de los Centros educativos, destacando el papel fundamental del Consejo Escolar en el gobierno y evaluación de los centros públicos y en el nombramiento de sus directores.

La Ley formula, en su Título preliminar, los principios básicos que fundamentan las medidas en ella contenidas para mejorar la educación en España, entendiendo que se sustentan en el reconocimiento de los derechos y deberes que asisten a todos los que conforman la comunidad educativa y en la garantía de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.

El Título I modifica la estructura del Sistema Educativo en sus diversos niveles y etapas, referidos a las enseñanzas escolares, garantizando la oferta de plazas suficientes de Educación Preescolar para satisfacer la demanda de las familias y atender a sus necesidades.

La Educación Infantil se constituye como etapa voluntaria y gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de dicha etapa en la formación personal y en la compensación de desigualdades.

La Educación Primaria facilita los aprendizajes de las materias instrumentales básicas, en especial el lenguaje, que permiten el desarrollo personal adecuado de acuerdo con la edad del alumno.

La Educación Secundaria Obligatoria completará la formación en las competencias básicas, organizándose de manera flexible que permita adaptarse a las diversas características del alumnado y satisfacer, al mismo tiempo, las necesidades de preparación para las expectativas de estudios o profesionalización posteriores.

Los Programas de Iniciación Profesional, establecidos en la Ley, se conciben como una opción en la Educación Secundaria Obligatoria que permitirá, en su caso, la obtención del título de Graduado y abrir a un mayor número de alumnos todas las oportunidades de formación y calificación que ofrece el sistema reglado y postobligatorio, así como el acceso, con mayores garantías, a la vida laboral.

La Ley no modifica la vigente ordenación general de la Formación Profesional específica, pero sí introduce una mayor flexibilidad en los procedimientos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, con el fin de ampliar las posibilidades de los alumnos para completar su formación a través de la vía que, en cada momento, mejor responda a sus intereses, expectativas o circunstancias personales.

La Ley, en el Capítulo VII del Título I, presta especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, estableciendo un marco general que permita a las Administraciones educativas garantizar, en todos los casos, una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren, contando con la participación de sus padres.

El Título II se refiere a las enseñanzas especializadas de idiomas, que se organizan en tres niveles, con el fin de adaptarlas a los grados de aprendizaje establecidos en los países de la Unión Europea.

Son objeto del Título III las enseñanzas destinadas a la formación permanente de las personas adultas como uno de los instrumentos esenciales para hacer efectivo el principio del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

En el Título IV, dedicado a la función docente, se establece el marco general que ha de regir uno de los factores determinantes de la calidad y mejora de la enseñanza: el profesorado. A tal fin, se sientan las bases para la formación inicial y permanente, así como la valoración del desempeño de la función docente.

Por otra parte, se articula la perspectiva de la promoción profesional de los docentes, mediante la configuración de una carrera profesional a desarrollar a lo largo de toda la vida docente.

Asimismo, se garantiza la debida protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros públicos en relación con los hechos derivados del ejercicio de su profesión.

El Título V trata de la organización y dirección de los centros docentes, incluyendo en el mismo el régimen y denominación de los centros, su autonomía pedagógica, organizativa y económica, el régimen de los centros privados concertados y los órganos de participación y de gobierno de los centros públicos, con la convicción que la calidad de la enseñanza requiere dotar a los centros no sólo de los medios materiales y personales necesarios, sino también de una amplia capacidad de iniciativa para promover actuaciones innovadoras en los aspectos pedagógicos y organizativos así como de una adecuada autonomía en la gestión de sus recursos.

La Ley establece, asimismo, en este Título por una parte, los órganos de gobierno, y por otra, los órganos de participación en el control y gestión de los centros, atribuyendo a cada uno de ellos las competencias y funciones que les son propias, de acuerdo con la naturaleza, composición y responsabilidades que corresponde a cada uno de ellos.

Asimismo, la Ley reconoce y consolida el servicio público de educación desarrollado por los centros de titularidad pública y por los centros de titularidad privada de iniciativa social acogidos al régimen de conciertos.

La figura del Director de los centros públicos, entendida como pieza clave para la buena organización y funcionamiento de los centros, es objeto de un tratamiento específico, especialmente en lo que se refiere al procedimiento para su selección y nombramiento. Ese procedimiento está presidido por el principio de participación de la comunidad escolar.

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

De los principios de la educación

Artículo 1. Principios.

1. Son principios directores del sistema educativo:

a) La equidad, que garantiza una verdadera igualdad de oportunidades, para el pleno desarrollo de la personalidad individual y colectiva, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, y la cohesión y el progreso de la sociedad, que superen cualquier tipo de discriminación.

c) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo los valores de la convivencia y estudio.

d) La concepción de la educación como un proceso de formación permanente, que se extiende a lo largo de toda la vida.

e) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del proceso educativo.

f) La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes e intereses de los alumnos.

g) El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de los docentes y a su promoción profesional.

h) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

i) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

j) La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de su autonomía pedagógica y organizativa y la potenciación de la función directiva de los centros.

CAPÍTULO II

De los derechos y deberes de padres y alumnos

Artículo 2. Alumnos.

1. Son derechos y deberes del alumno los que se establecen en este artículo y en el resto de las normas vigentes, considerando que:

a) todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando;

b) todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los elementos fundamentales de la Constitución Española y del respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España;

c) todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad, y a recibir orientación educativa y profesional;

d) todos los alumnos tienen el deber del aprovechamiento de las enseñanzas que se le ofrecen, lo cual implica el deber de participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo de los currículos; seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje; y participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación.

2. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos:

a) a recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad;

b) a que se respete, de acuerdo con la Constitución, su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales;

c) a que se respeten su integridad y dignidad personales;

d) a la protección contra toda agresión física o moral;

e) a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes;

f) a recibir las ayudas precisas para compensar las carencias de tipo familiar, económico, social y cultural que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo;

g) a recibir la atención educativa correspondiente en el caso de hospitalización o larga enfermedad domiciliaria, y

h) a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.

3. Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos:

a) respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales;

b) respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y

c) respetar las normas de organización y convivencia del centro educativo.

Artículo 3. Padres.

1. Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos:

a) a que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las Leyes educativas;

b) a la libre elección del centro;

c) a que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones;

d) a estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde:

a) adoptar los medios necesarios para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación;

b) estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden;

c) conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los centros;

d) respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro;

e) fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

CAPÍTULO III

De las becas y ayudas al estudio

Artículo 4. Becas y ayudas al estudio.

1. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes disfruten de las mismas oportunidades, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a superar los obstáculos de orden socioeconómico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el acceso a la enseñanza no obligatoria o la continuidad de los estudios a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento.

Asimismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, ayudas al estudio que compensen las condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles obligatorios.

A estos efectos, el Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, determinará con carácter básico las modalidades y cuantías mínimas de las becas y ayudas al estudio, las condiciones mínimas de carác-

ter académico y económico que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.

El Gobierno procederá a la distribución territorial de los fondos presupuestarios que correspondan entre las Comunidades Autónomas, garantizando en todo caso la suficiencia de aquellos para que el acceso a las becas y ayudas al estudio se produzca sin menoscabo de la garantía de igualdad en la obtención de éstas en todo el territorio del Estado.

2. A los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla para favorecer las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios.

3. La regulación, el desarrollo, ejecución y control de los sistemas de becas y ayudas al estudio previstos en los párrafos anteriores corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia.

4. Sobre la base de los principios de equidad y solidaridad, las Administraciones públicas cooperarán para articular sistemas eficaces de información, verificación y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos y para el mejor logro de los objetivos señalados en los apartados anteriores.

5. Para garantizar la igualdad de oportunidades en la enseñanza obligatoria, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerá la gratuidad progresiva de los libros de texto y, en su caso, de material escolar.

TÍTULO I

De la estructura del sistema educativo

CAPÍTULO I

De los principios generales

Artículo 5. Ámbito.

1. El sistema educativo comprende la educación preescolar, las enseñanzas escolares y la enseñanza universitaria.

2. La educación preescolar tendrá carácter educativo y dispondrá de una regulación específica.

3. Las enseñanzas escolares son de régimen general y de régimen especial. Las enseñanzas escolares de régimen general se organizan en los siguientes niveles:

Educación Infantil.
Educación Primaria.

Educación Secundaria, que comprende las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como la Formación Profesional de grado medio y de grado superior.

Las enseñanzas escolares de régimen especial son:

Enseñanzas Artísticas.
Enseñanzas de Idiomas.

4. Corresponde a las Comunidades Autónomas la adaptación de las distintas enseñanzas a las necesidades educativas especiales del alumnado; a la actualización, compleción o ampliación de la formación de las personas adultas; y a las modalidades de enseñanza a distancia o en régimen nocturno.

5. La enseñanza universitaria se regirá por sus normas específicas.

Artículo 6. Enseñanza básica.

1. La enseñanza básica comprende la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

2. La enseñanza básica incluye diez años de escolaridad. Se iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los dieciséis.

3. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, en las condiciones establecidas en la presente Ley.

CAPÍTULO II

De la educación preescolar

Artículo 7. Ámbito.

1. La educación preescolar, de carácter voluntario, tiene como finalidad la atención educativa a la primera infancia, hasta los tres años.

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la organización de esta etapa educativa y el establecimiento de las condiciones que habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste. Establecerán, asimismo, los procedimientos de supervisión y control que estimen adecuados.

3. La educación preescolar será impartida por maestros y por otros profesionales con la debida calificación para prestar una atención apropiada a los niños de esta edad, de acuerdo con lo que determinen las Comunidades Autónomas.

4. Las Administraciones públicas garantizarán la existencia de plazas suficientes para asegurar la atención de la población que la solicite y atenderán prioritariamente la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.

5. Las Administraciones educativas establecerán los mecanismos de flexibilidad horaria y de servicios para su adecuación a las necesidades nuevas de la familia y atenderán prioritariamente la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.

CAPÍTULO III

De la Educación Infantil

Artículo 8. Principios generales.

1. El nivel de Educación Infantil, que tiene carácter voluntario y gratuito, estará constituido por un ciclo de tres años académicos, que se cursará desde los tres a los seis años de edad. Será impartida por maestros con la especialidad correspondiente.
2. Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares gratuitos en centros sostenidos con fondos públicos para atender la demanda de las familias.
3. Las Administraciones educativas promoverán la escolarización en este nivel educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Artículo 9. Objetivo.

1. La finalidad de la Educación Infantil es el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Los centros escolares cooperarán estrechamente con los padres ayudándoles a ejercer su responsabilidad fundamental en la educación de sus hijos.
2. Las Administraciones educativas podrán incorporar una lengua extranjera en los aprendizajes de la Educación Infantil, y fomentar experiencias de iniciación temprana en las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Artículo 10. Organización.

Corresponde a las Comunidades Autónomas la organización de esta etapa educativa, la determinación de sus objetivos y la definición de la metodología.

CAPÍTULO IV

De la Educación Primaria

Artículo 11. Principios generales.

La Educación Primaria comprenderá seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años.

Artículo 12. Objetivo.

La finalidad de la Educación primaria es facilitar al alumnado los aprendizajes de la expresión y comprensión oral y escrita de la lengua; del cálculo y de los fundamentos de las matemáticas; de otras lenguas y otras formas de expresión de carácter técnico y artístico; y de las nociones básicas del conocimiento de la naturaleza y de la sociedad que le permitan desarrollarse intelectualmente de acuerdo con la edad y le preparen para cursar con aprovechamiento los estudios posteriores. Así mismo ha de facilitar al alumnado la adquisición de la madurez personal y de las conductas y los hábitos que promueven la convivencia social.

Artículo 13. Organización.

1. El nivel de Educación Primaria se organiza en tres ciclos de dos años académicos cada uno.
2. Las áreas que se cursarán en la Educación Primaria serán las siguientes:

a) Ciencias Sociales y Naturales.
b) Educación Artística.
c) Educación Física.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Lenguas extranjeras.
f) Matemáticas.
g) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, el área de Sociedad, Cultura y Religión.

3. Tendrán especial consideración en todas las áreas los aspectos de carácter instrumental para la adquisición de las competencias básicas. Los currículos deberán incluir actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura.

Artículo 14. Medidas de refuerzo.

Las Administraciones educativas podrán organizar actividades socioescolares en horario posescolar en centros docentes, dirigidas en especial a alumnos con déficits de aprendizaje o sociofamiliares. Al efecto, podrán suscribir convenios con otras Administraciones o Instituciones sin afán de lucro.

Artículo 15. Evaluación.

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua e integrará en un análisis global el progreso del alumno en las distintas áreas.
2. Los alumnos accederán al ciclo siguiente si han alcanzado los objetivos correspondientes establecidos en el currículo. Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo.

Artículo 16. Evaluación de diagnóstico.

Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 88 de esta Ley, realizarán evaluaciones, que tendrán como finalidad el diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias básicas de este nivel educativo. Estas evaluaciones carecerán de efectos académicos y tendrán carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias, los alumnos y las Administraciones educativas.

Artículo 17. Profesorado.

La Educación Primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia docente en todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen, serán impartidas por maestros con las especialidades correspondientes, entre las cuales se podrá incluir la de Educación Primaria.

CAPÍTULO V

De la Educación Secundaria

Artículo 18. Ámbito.

El nivel de Educación Secundaria comprenderá las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como de la Formación Profesional de grado medio y de grado superior.

Sección 1.ª De la Educación Secundaria Obligatoria

Artículo 19. Principios generales.

1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprenderá cuatro años académicos, que se cursarán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.
2. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad.

Artículo 20. Objetivo.

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es la de completar la formación básica de todas las personas preparándolas para la prosecución de estudios y la inserción laboral. Esta formación básica comprenderá:

a) La correcta utilización, en comprensión y expresión oral y escrita de la lengua castellana y, en su caso, también de la lengua propia de la Comunidad Autónoma;

b) El conocimiento, como mínimo, de una lengua extranjera y la capacidad de utilización de las nuevas tecnologías de la información;

c) Los conceptos fundamentales del conocimiento humano: ciencia, historia, arte, humanidades, cultura;

d) La construcción de la propia personalidad y en particular, el desarrollo de los hábitos de estudio y trabajo; y,

e) La adquisición de los valores y actitudes de convivencia social.

Artículo 21. Organización.

1. En la Educación Secundaria Obligatoria podrán impartirse las siguientes asignaturas:

a) Ciencias Experimentales.
b) Educación Física.
c) Educación Plástica y Visual.
d) Geografía e Historia.
e) Lengua Castellana y Literatura.
f) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.
g) Latín.
h) Lenguas extranjeras.
i) Matemáticas.
j) Música.
k) Tecnología.

Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.

2. Además de las asignaturas obligatorias, el currículo podrá incluir otras asignaturas y asignaturas optativas, de acuerdo con lo que determinen las Comunidades Autónomas.

3. Con el fin de alcanzar los objetivos de esta etapa, la organización de la docencia atenderá a la pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado.

4. En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria podrán organizarse las enseñanzas de determinadas áreas agrupándolas de manera que permitan una adecuación a las características personales del alumnado y una orientación para sus expectativas futuras, académicas y profesionales.

5. Las Administraciones educativas, en el ámbito de lo dispuesto por las leyes, favorecerán la autonomía de los centros en lo que respecta a la definición y programación de las materias optativas.

Artículo 22. Medidas de refuerzo.

En los distintos cursos de la etapa, y con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen los objetivos de esta etapa, las Administraciones educativas establecerán las medidas de atención individual de

carácter educativo que permitan la consecución de esos objetivos.

Asimismo, las Administraciones educativas podrán organizar actividades socioescolares en horario posescolar en centros docentes, dirigidas en especial a alumnos con déficits de aprendizaje o sociofamiliares. Al efecto, podrán suscribir convenios con otras Administraciones o Instituciones sin afán de lucro.

Artículo 23. Programas de Iniciación Profesional.

1. Los Programas de Iniciación Profesional estarán integrados por los contenidos curriculares esenciales de la formación básica y por módulos profesionales asociados, al menos, a una calificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Dicha formación, que tendrá una estructura flexible de carácter modular, se impartirá en dos cursos académicos.

2. La formación básica contribuirá, de acuerdo con las características de los alumnos, al desarrollo de las capacidades establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria.

3. Aquellos alumnos que, cumplidos los quince años, habiendo cursado los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, y tras la adecuada orientación educativa y profesional, opten voluntariamente por no cursar o completar ninguno de los itinerarios ofrecidos, permanecerán escolarizados en un Programa de Iniciación Profesional.

4. La superación de un Programa de Iniciación Profesional dará derecho a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

La superación total o parcial de los módulos de carácter profesional integrados en los Programas de Iniciación Profesional será acreditada conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. En el caso de la superación de la totalidad de los módulos, la certificación otorgada surtirá, además, los efectos académicos previstos en el artículo 37.3 a) de la presente Ley.

5. Las Administraciones públicas promoverán la participación de otras instituciones y entidades para el desarrollo de estos Programas.

Artículo 24. Evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria será continua e integradora de las distintas evaluaciones de las asignaturas que cursen.

2. El equipo de profesores evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas y su progreso global, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.

Artículo 25. Promoción.

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa los alumnos serán evaluados de cada una de las asignaturas del curso.

2. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas. Una vez realizada esta prueba, el profesorado efectuará la evaluación integrada y global, a partir de la cual decidirá sobre la promoción del alumno al curso siguiente, teniendo en cuenta la calificación media obtenida, además de su madurez y posibilidades de progreso en los cursos posteriores.

3. Cada curso podrá repetirse una sola vez. Si tras la repetición, el alumno no cumpliera los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación definirá las medidas de enseñanza personalizada que deberán adoptarse para dicho alumno.

4. El alumno que, cumplidos los dieciséis años, no haya alcanzado, a juicio del equipo de evaluación, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, después de haberla cursado, podrá continuar sus estudios mediante las enseñanzas de adultos o a distancia.

En todo caso, las Administraciones públicas garantizarán la existencia de programas de formación profesionalizadora, específicamente dirigidos a estos alumnos con el fin de facilitarles una adecuada inserción profesional.

Artículo 26. Evaluación de diagnóstico.

Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 88 de esta Ley, realizarán evaluaciones, que tendrán como finalidad el diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias básicas de este nivel educativo. Estas evaluaciones carecerán de efectos académicos y tendrán carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias, los alumnos y las Administraciones educativas.

Artículo 27. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

1. La evaluación positiva de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria conducirá al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional de grado medio y al mundo laboral. Junto con el título, los alumnos recibirán un informe de orientación escolar para su futuro académi-

co y profesional que tendrá carácter confidencial y que en ningún caso será prescriptiva.

3. Los alumnos que no obtengan el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirán un Certificado de Escolaridad en el que constarán los años cursados.

Artículo 28. Profesorado.

1. Para la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria se requerirá estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente a efectos de docencia. En aquellas asignaturas o módulos que se determinen en virtud de su especial relación con la Formación Profesional, se establecerán las equivalencias de los títulos de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y Diplomado universitario, a efectos de la función docente.

2. Para impartir las enseñanzas de esta etapa será necesario, además, estar en posesión del Título de Especialización Didáctica establecido en el artículo 51 de la presente Ley.

3. Excepcionalmente, para impartir los módulos profesionales de los Programas de Iniciación Profesional que prevé el artículo 23 de esta Ley, las Administraciones educativas podrán contratar personal laboral, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del Programa.

Sección 2.ª Del Bachillerato

Artículo 29. Principios generales.

1. El Bachillerato comprenderá dos cursos académicos. Se desarrollará en modalidades diferentes que permitirán a los alumnos una preparación especializada para su incorporación a estudios posteriores y para la inserción laboral.

2. Podrán acceder a los estudios del Bachillerato los alumnos que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

3. Los alumnos podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años.

Artículo 30. Objetivo.

La finalidad del Bachillerato es la de proporcionar una formación integral, intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales, así como proseguir estudios superiores. Para ello, el Bachillerato ampliará y profundizará en los aspectos de la educación básica y, en cada modalidad, en el campo de conocimientos propio de ella.

Artículo 31. Organización.

1. El Bachillerato se organizará en asignaturas comunes, en asignaturas específicas de cada modalidad y en asignaturas optativas.

2. Las asignaturas comunes del Bachillerato contribuirán a la formación general de los alumnos. Las específicas de cada modalidad y las optativas les proporcionarán una formación más especializada, preparándolos y orientándolos hacia estudios posteriores y hacia la actividad profesional. El currículo de las asignaturas optativas podrá incluir un complemento de formación práctica fuera del centro.

3. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:

a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.

4. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevas modalidades de Bachillerato o modificar las establecidas en esta Ley.

5. Las asignaturas comunes del Bachillerato serán las siguientes:

a) Educación Física.
b) Filosofía.
c) Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.
f) Lengua extranjera.

Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.

6. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, establecerá las asignaturas específicas mínimas de cada modalidad, adaptándolas a las necesidades de la sociedad y del sistema educativo. Además de las asignaturas comunes y obligatorias y de las específicas de cada modalidad, las Comunidades Autónomas podrán completar el currículo incluyendo otras asignaturas y asignaturas optativas.

Artículo 32. Evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en el Bachillerato será continua e integradora de las distintas evaluaciones de las asignaturas que cursen.

2. El equipo de profesores evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas y su progreso global, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.

3. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en

las fechas que determinen las Administraciones educativas.

Artículo 33. Profesorado.

Para impartir las enseñanzas del Bachillerato se exigirán las mismas titulaciones académicas que las requeridas para la Educación Secundaria Obligatoria. Será necesario además estar en posesión del Título de Especialización Didáctica establecido en el artículo 51 de la presente Ley.

Artículo 34. Título de Bachiller.

1. Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas.
2. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios universitarios.

CAPÍTULO VI

De la Formación Profesional

Artículo 35. Acceso.

1. Podrán cursar la Formación Profesional de grado medio quienes se hallen en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para el acceso a la formación profesional específica de grado superior será necesario estar en posesión del Título de Bachiller.
2. También podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado superior se requerirá tener veinte años de edad, cumplidos en el año de realización de la prueba.
3. La prueba a que se refiere el apartado anterior deberá acreditar:

a) Para la Formación Profesional de grado medio, los conocimientos suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y sus capacidades en relación con el campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales quedarán exentos quienes hayan superado la totalidad de los módulos de carácter profesional de un Programa de Iniciación Profesional o acrediten una experiencia laboral, en ambos casos relacionados con la enseñanza que pretendan cursar.

b) Para la Formación Profesional de grado superior, la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales que pretendan cursar.

4. Para quienes acrediten estar en posesión del Título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior relacionado con el mismo, el requisito de edad para la realización de la prueba será de dieciocho años cumplidos en el año natural. La prueba podrá sustituirse por la superación de las enseñanzas que determinen las Administraciones educativas para complementar la madurez y las capacidades profesionales acreditadas por la posesión del Título de Técnico.
5. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la relación entre los Títulos de Técnicos y su correspondiente de Técnico Superior a los efectos previstos en este artículo. Corresponde a las Comunidades Autónomas establecer el contenido y procedimiento de dichas pruebas.

CAPÍTULO VII

De la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas

Sección 1.ª De los alumnos extranjeros

Artículo 36. Incorporación al sistema educativo.

1. Las Administraciones educativas garantizarán el ejercicio del derecho a la educación de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que presenten graves carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.
2. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los alumnos, según su edad y padres reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español.
4. Las Administraciones educativas promoverán actuaciones de formación del profesorado para la atención educativa de los alumnos extranjeros.

Sección 2.ª De los alumnos superdotados intelectualmente

Artículo 37. Principios.

1. Las Administraciones educativas prestarán atención específica a la enseñanza del alumnado de

acuerdo con sus características personales y, en particular, del que presente superdotación intelectual.

2. Con el fin de dar una respuesta educativa adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades y establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley.

3. Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de formación específica para el profesorado que atienda a este alumnado. Igualmente adoptarán las medidas oportunas para que sus padres reciban el adecuado asesoramiento.

Sección 3.ª De los alumnos con necesidades educativas especiales

Artículo 38. Ámbito.

1. Las Administraciones educativas tendrán una atención especializada para las necesidades educativas especiales de aquellos alumnos que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta.

2. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del sistema educativo los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.

Artículo 39. Escolarización.

1. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar.

2. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales comenzará en la edad más precoz posible y, en todo caso, desde el momento de la detección de aquella necesidad. Y finalizará con las edades establecidas con carácter general para el nivel y la etapa correspondiente, aunque podrá autorizarse la flexibilización del período de escolarización en cada uno de los niveles y etapas. En cualquier caso, el límite de edad para poder permanecer escolarizado en un centro de educación especial será de veintiún años.

Artículo 40. Recursos de los centros.

Las Administraciones educativas dotarán a los centros sostenidos con fondos públicos del personal especializado y de los recursos necesarios para garantizar la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales y atenderlos adecuadamente. Los criterios para determinar esas dotaciones serán los mismos para todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Artículo 41. Integración social y laboral.

Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral de los alumnos, las Administraciones públicas promoverán ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los alumnos y promoverán su integración laboral, en su caso.

TÍTULO II

De las enseñanzas de idiomas

Artículo 42. Ámbito y estructura.

1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros que imparten enseñanzas especializadas de idiomas, que tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial a las que se refiere esta Ley.

2. La estructura básica de estas enseñanzas, se adecuará a los siguientes niveles:

— Nivel Básico.
— Nivel Intermedio.
— Nivel Avanzado.

En la legislación específica sobre las enseñanzas de idiomas se establecerán los efectos de los certificados correspondientes.

3. El profesorado que imparta estas enseñanzas deberá pertenecer al cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, podrán impartirlas profesores de otros cuerpos docentes del mismo grupo, en las condiciones que las Administraciones educativas establezcan.

Las Comunidades Autónomas podrán establecer los requisitos y condiciones de contratación de profesorado nativo de las distintas lenguas extranjeras en el caso que se requiera.

4. Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas se requerirá estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del Certificado de Escolaridad o de estudios primarios.

5. Los alumnos no escolarizados en estos centros podrán obtener los certificados correspondientes a los distintos niveles mediante la superación de las pruebas que organicen las Administraciones educativas.

6. Las Administraciones educativas fomentarán también la enseñanza de idiomas a distancia.

Artículo 43. Escuelas Oficiales de Idiomas.

En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, el de las len-

guas coofi ciales existentes en el Estado, así como la enseñanza del español como lengua extranjera.

Artículo 44. Realización de pruebas en el sistema escolar.

Las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas extranjeras cursadas por los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional.

TÍTULO III

Del aprendizaje permanente: Enseñanzas para las personas adultas

Artículo 45. Objetivo.

1. La educación permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal o profesional.

A tal fin, las Administraciones educativas colaborarán con otras Administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas y, en especial, con la Administración laboral.

2. Las enseñanzas para las personas adultas tendrán los siguientes objetivos:

a) Adquirir, completar y ampliar capacidades y conocimientos, actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles del sistema educativo.

b) Desarrollar programas y cursos para responder a determinadas necesidades educativas específicas de grupos sociales desfavorecidos.

c) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica.

3. Dentro del ámbito de las enseñanzas para las personas adultas, las Administraciones públicas atenderán preferentemente a aquellas personas que, por diferentes razones, no hayan podido completar la enseñanza básica o con dificultades para su inserción laboral. Asimismo, podrán seguir estas enseñanzas aquellos alumnos mayores de dieciséis años que por su trabajo u otras circunstancias especiales no puedan acudir a los centros educativos en régimen ordinario.

4. En los establecimientos penitenciarios y hospitales se garantizará a la población reclusa y hospitalizada la posibilidad de acceso a estas enseñanzas.

5. Las enseñanzas para las personas adultas se podrán impartir a través de las modalidades presencial y a distancia.

6. Las Administraciones educativas promoverán convenios de colaboración con las universidades, entes locales y otras instituciones o entidades, para desarrollar las enseñanzas para las personas adultas.

7. Las Administraciones educativas promoverán programas específicos de Lengua y Cultura Españolas y, en su caso, de la Lengua y Cultura propias de la Comunidad Autónoma, para facilitar la integración de las personas inmigrantes.

Artículo 46. Enseñanza básica.

1. Las personas adultas que pretendan adquirir los conocimientos correspondientes a la enseñanza básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Esta oferta deberá ajustarse a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación fijados en los currículos de las respectivas Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas velarán para que todas las personas adultas que tengan el Título de Graduado Escolar puedan acceder a programas o centros docentes que les ayuden a alcanzar la formación básica prevista en la presente ley para la Educación Secundaria Obligatoria.

3. La enseñanza básica para las personas adultas podrá impartirse en centros que impartan enseñanzas en régimen ordinario o en centros específicos debidamente autorizados por la Administración educativa competente.

4. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizarán periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años de edad puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En dichas pruebas se valorarán las capacidades generales propias de la educación básica.

Artículo 47. Enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional.

1. Las Administraciones educativas facilitarán a todos los ciudadanos el acceso a los niveles o grados de las enseñanzas no obligatorias.

2. Las personas adultas que estén en posesión de titulación requerida podrán cursar el Bachillerato y la Formación Profesional.

3. Las Administraciones educativas organizarán en estos niveles la oferta pública de enseñanza presencial o a distancia, con el fin de dar una respuesta adecuada a la demanda de formación permanente de las personas adultas.

4. Las Administraciones educativas organizarán pruebas a las que podrán presentarse las personas mayores de veintiún años, en la modalidad de Bachillerato que prefieran, para la obtención del Título de Bachiller.

5. Las Administraciones educativas organizarán pruebas para obtener los títulos de Formación Profesional.

Artículo 48. Profesorado.

1. Los profesores que impartan enseñanzas escolares a las personas adultas que conduzcan a la obtención de un título académico o profesional, deberán estar en posesión de la titulación establecida con carácter general para impartir las correspondientes enseñanzas.
2. Las Administraciones educativas facilitarán a estos profesores la formación especializada necesaria para responder a las características de las personas adultas.

TÍTULO IV

De la función docente

Artículo 49. Funciones del profesorado.

A los profesores de centros escolares les corresponden las siguientes funciones:

a) La enseñanza de las áreas, asignaturas, materias y módulos que tengan encomendados.
b) La transmisión de actitudes de tolerancia y respeto a los valores que rigen la convivencia.
c) La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar sus dificultades.
d) La cooperación con los servicios de orientación académica profesional.
e) La función de dirección y coordinación de las actividades docentes y de gestión que les sean encomendadas.
f) La participación en la actividad general del centro.
g) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

CAPÍTULO I

De la Formación del profesorado

Artículo 50. Principios.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la actualización y la mejora continua de la cualificación profesional de los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y de las didácticas específicas.
2. Los programas de formación permanente del profesorado deberán contemplar las necesidades especificas relacionadas con la organización y dirección de los centros, la coordinación didáctica, la orientación y tutoría, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.

Artículo 51. Formación inicial.

1. Para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria, de la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial, además de las titulaciones académicas correspondientes, será necesario estar en posesión del Título de Especialización Didáctica.
2. El Título de Especialización Didáctica se obtendrá tras la superación de un período académico y otro de prácticas docentes.
3. El Gobierno regulará los efectos del correspondiente Título de Especialización Didáctica, y las demás condiciones para su obtención, expedición y homologación.
4. Las Universidades podrán organizar las enseñanzas del Título de Especialización Didáctica, mediante los oportunos convenios con la correspondiente administración educativa. Las Universidades podrán incorporar a los planes de estudio de sus titulaciones oficiales las materias incluidas en el período académico de dichos cursos.
5. Finalizados los estudios universitarios correspondientes, los titulados podrán matricularse en el período académico del Título de Especialización Didáctica. Al efectuar la matrícula podrán solicitar la convalidación de aquellos créditos cursados con anterioridad. Las Universidades acreditarán la superación de dicho período académico.
6. En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional, Artísticas y de idiomas, los estudios requeridos para la obtención del Título de Especialización Didáctica se adaptarán a las características de estas enseñanzas.

Artículo 52. Formación permanente.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán periódicamente Planes Generales de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, garantizando una oferta diversificada y gratuita de estas actividades de formación permanente.
2. A los solos efectos de los concursos de traslados de ámbito estatal y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional séptima de esta Ley, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el territorio, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas convocatorias.

CAPÍTULO II

De la valoración de la función pública docente

Artículo 53. Planes de valoración.

1. Con el fin de mejorar la labor docente de los profesores, las Administraciones educativas, en el ámbito

de sus competencias, elaborarán planes para la valoración de la función pública docente, con la participación del profesorado.

2. Las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en la carrera profesional del profesorado, junto con las actividades de formación, investigación e innovación.

Asimismo, prestarán una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

Artículo 54. Evaluación.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la evaluación del profesorado. Los resultados de estas evaluaciones se podrán tener en cuenta a efectos de movilidad y de promoción dentro de la carrera docente.

2. Las certificaciones de evaluación, en lo que se refiere únicamente a los concursos de traslados de ámbito estatal y a la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional octava de esta Ley, surtirán sus efectos en todo el territorio, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas convocatorias.

Artículo 55. Medidas de apoyo al profesorado.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con su programación general de la enseñanza, podrán favorecer:

a) El reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos.

b) La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años que lo soliciten, con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

c) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales que se determinen.

d) La realización de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado en su ejercicio profesional.

e) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación educativas.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros escolares públicos, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

3. Las Administraciones educativas regularán, en el ámbito de su competencia, la carrera profesional de los funcionarios docentes con los efectos económicos y profesionales que determinen, así como para otros fines de promoción dentro de la carrera docente. Para la elaboración de estas normas específicas se tendrán en cuenta los criterios establecidos con carácter general en la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

TÍTULO V

De la organización y dirección de los centros docentes

CAPÍTULO I

De la tipología de los centros docentes y su organización

Sección 1.ª De los principios generales

Artículo 56. Régimen jurídico.

Los centros docentes que impartan las enseñanzas a que se refiere esta Ley se regirán por lo dispuesto en la misma y disposiciones que la desarrollen, así como por lo establecido en las demás normas vigentes que les sean de aplicación.

Artículo 57. Clasificación de centros.

1. Los centros docentes se clasifican en públicos y privados.

2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado. Se entiende por titular de un centro educativo la persona física o jurídica que conste como tal en el registro de centros de la correspondiente Administración educativa.

3. Los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros concertados.

Artículo 58. Tipología de centros.

1. Los centros docentes, en función de las enseñanzas que impartan, podrán ser de:

a) Educación Infantil.
b) Educación Primaria.
c) Educación Secundaria Obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Formación Profesional.

f) Enseñanzas Artísticas.
g) Enseñanza de Idiomas.
h) Educación Especial.

2. La adaptación de lo preceptuado en esta Ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el apartado anterior, así como a los centros que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo, se efectuará por las Administraciones educativas.

Artículo 59. Denominación de los centros.

1. Los centros públicos de Educación Infantil se denominarán Escuelas Infantiles; los de Educación Primaria, Colegios de Educación Primaria; los de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, Institutos de Educación Secundaria. Las Administraciones competentes podrán crear y autorizar Centros Integrados de Formación Profesional de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

2. Los centros no comprendidos en el apartado anterior se denominarán de acuerdo con lo que dispongan sus reglamentaciones especiales.

Artículo 60. Centros privados en el exterior.

Los centros privados que impartan enseñanzas del sistema educativo español en el exterior deberán cumplir los requisitos que establezca el Gobierno como condición para el reconocimiento de sus estudios y la expedición de los títulos correspondientes.

Artículo 61. Carácter propio de los centros privados.

1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos, respetando, en todo caso, los principios constitucionales y los derechos reconocidos a profesores, padres y alumnos.

2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa por el titular del centro. La elección del centro por las familias y alumnos comportará la aceptación del carácter propio de éste.

Artículo 62. Admisión de alumnos.

1. Las Administraciones educativas realizarán una adecuada programación de los puestos escolares gratuitos que garantice la efectividad del derecho a la educación y el derecho a la libre elección de centro. En todo caso, en dicha programación se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades educativas específicas, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas.

2. Los criterios para la admisión de alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el centro docente, de acuerdo con la regulación de la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: rentas per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro y condición legal de familia numerosa.

3. Los centros de especialización curricular a que se refiere el articulo 69 de esta Ley, podrán incluir, como criterios complementarios, otros que respondan a las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente.

4. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan varios niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del nivel inferior de las enseñanzas escolares que sean objeto de financiación, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo.

5. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, o nacimiento.

Sección 2.ª De los centros con enseñanzas concertadas

Artículo 63. Conciertos.

1. Los centros privados que, en orden a la prestación del servicio de interés público de la educación y a la libertad de elección de centro, impartan las enseñanzas declaradas gratuitas en la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos siempre que así lo soliciten y reúnan los requisitos previstos en las leyes educativas. A tal efecto, los citados centros deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el pertinente concierto.

2. El Gobierno establecerá las normas básicas a que deben someterse los conciertos.

3. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares y demás condiciones de impartición de la enseñanza con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.

4. Los conciertos podrán afectar a varios centros siempre que pertenezcan a un mismo titular.

5. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que impartan la enseñanza básica, satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales y económicas desfavorables o que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. Además, tendrán preferencia aquellos centros que en régimen de cooperativa cumplan con las finalidades anteriormente señaladas. Las Administraciones educa-

tivas tendrán en cuenta la demanda social de las plazas escolares en los centros.

Artículo 64. Módulos del concierto.

1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros con enseñanzas concertadas se establecerá en los Presupuestos de las Administraciones correspondientes. En todo caso, la cuantía del concierto satisfará el coste real de las enseñanzas concertadas.

2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas.

3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad, se diferenciarán:

a) Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente a los titulares de los centros.

b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal de administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento y conservación y las de reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la función directiva no docente. En ningún caso se computarán intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos.

c) Las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros con enseñanzas concertadas y consiguiente repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del profesorado y los derivados del ejercicio de la función directiva docente; pago de las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirán de forma individualizada entre el personal docente de aquellos centros, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de los centros públicos.

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, a que hace referencia el apartado anterior, harán posible que gradualmente la remuneración de aquél sea análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles.

5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones.

6. La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3 de este artículo.

7. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos.

Sección 3.ª De la autonomía de los centros

Artículo 65. Principios.

1. Los centros docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica para favorecer la mejora continua de la educación. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán esta autonomía y estimularán el trabajo en equipo de los profesores.

2. Los centros docentes estarán dotados del personal y de los recursos educativos y materiales necesarios para garantizar una enseñanza de calidad.

Artículo 66. Autonomía pedagógica.

1. La autonomía pedagógica, con carácter general, se concretará mediante las programaciones didácticas, planes de acción tutorial y planes de orientación académica y profesional y, en todo caso, mediante proyectos educativos.

2. Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las Administraciones educativas, elaborarán el proyecto educativo en el que se fijarán los objetivos y las prioridades educativas así como los procedimientos de actuación. Para la elaboración de dicho proyecto deberá tenerse en consideración las características del centro y de su entorno escolar, así como las necesidades educativas de los alumnos.

3. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro.

4. Los centros docentes harán público su proyecto educativo y facilitarán a los alumnos y a sus padres cuanta información favorezca una mayor participación de la comunidad educativa.

5. El proyecto educativo de los centros con enseñanzas concertadas deberá incorporar el carácter propio al que se refiere el artículo 61 de la presente Ley.

6. Los centros docentes completarán y desarrollarán los currículos establecidos por las Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas.

7. Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para cada

una de las áreas, asignaturas o módulos. Deberán ser elaboradas por los equipos de profesores que tengan encomendadas dichas enseñanzas.

8. En la elaboración de tales materiales didácticos se garantizará la superación de todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre los sexos.

9. Los centros docentes tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de usarse en cada ciclo o curso y en cada área asignatura o módulo, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.

10. Las Administraciones educativas impulsarán los procesos de innovación educativa en los centros y prestarán especial apoyo a los proyectos de investigación educativa encaminados a la mejora de la calidad de la enseñanza y en los que participen equipos de profesores de los distintos niveles educativos.

Artículo 67. Autonomía organizativa.

1. La autonomía organizativa se concretará en la programación general anual y en los reglamentos de régimen interior. La programación general anual será elaborada por el equipo directivo, oído el Claustro.

2. Las Administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y promover la relación entre la programación de los centros y el entorno en que éstos desarrollan su labor. Asimismo, prestarán su colaboración en el fomento de la convivencia en los centros y en el control del absentismo escolar.

Artículo 68. Autonomía de gestión económica.

1. Los centros docentes públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, con los límites que en la normativa correspondiente se establezcan. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a las disposiciones que regulan el proceso de contratación y de realización y justificación del gasto para las Administraciones educativas.

3. En cualquier caso, las Administraciones educativas prestarán especial apoyo a aquellos centros sostenidos con fondos públicos que escolaricen alumnos con necesidades educativas específicas o estén situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas.

4. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las competencias que éstas determinen, responsabilizando a los Directores de la gestión de los recursos materiales, puestos a disposición del centro.

Artículo 69. Centros docentes con especialización curricular.

1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica y de organización contemplada en la presente Ley, podrán ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Estos proyectos tendrán como finalidad conseguir la máxima calidad educativa en los ámbitos correspondientes y servir de referencia para promover programas de innovación.

2. Los centros podrán obtener la especialización a que se refiere el apartado anterior mediante el procedimiento que oportunamente establezcan las Administraciones educativas correspondientes.

3. Los centros docentes podrán añadir a su denominación específica la especialización para la que hayan sido autorizados. Deberán incluir en su proyecto educativo la información necesaria sobre la especialización correspondiente con el fin de orientar a los alumnos y a sus padres.

4. Las Administraciones educativas prestarán un especial apoyo a los centros sostenidos con fondos públicos que cuenten con alguna especialización curricular.

5. La autorización de una especialización curricular podrá ser revocada por la Administración educativa competente en el caso de que el resultado de la evaluación correspondiente ponga de manifiesto que no se cumplen los objetivos previstos.

Sección 4.ª De los órganos de gobierno, órganos de participación y órganos de coordinación de los centros docentes públicos

Artículo 70. Principios.

1. En los centros docentes públicos existirán órganos de gobierno y órganos de participación en el control y gestión de los mismos.

2. Los órganos de gobierno y de participación en el control y gestión de los centros velarán para que las actividades de éstos se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza.

3. Además garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros

de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.

Artículo 71. Tipos de órganos.

1. Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno y de participación en el control y gestión:

a) Órganos de gobierno: Director, Jefe de Estudios, Secretario y cuantos otros determinen las Administraciones educativas.
b) Órganos de participación en el control y gestión: Consejo Escolar, Claustro de profesores y cuantos otros determinen las Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas determinarán la periodicidad de las reuniones de estos órganos, así como su régimen de funcionamiento.
3. Los órganos de participación en el control y gestión del centro evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de éste y analizarán los resultados de las pruebas externas que se realicen en el mismo.
4. El Consejo Escolar y el Claustro de profesores, así como los órganos de gobierno y los distintos sectores de la comunidad educativa colaborarán en los planes de evaluación del centro que se les encomienden, en los términos que las Administraciones educativas establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que se realicen en el centro.

Artículo 72. Consejo Escolar.

1. El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.
2. El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director del centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo, y, asimismo, representante de las Asociaciones de padres y madres de alumnos del centro.
f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan aulas especializadas, se considerará incluido en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.
g) El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

3. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar, a partir del primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Los alumnos de Educación Primaria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas.
5. Las Administraciones educativas regularán las condiciones por las que los centros que impartan las enseñanzas de formación profesional específica o artes plásticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro.
6. Las Administraciones educativas determinarán el número total de miembros del Consejo Escolar y regularán el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores que lo integran.
7. En los centros específicos de Educación Infantil, en los incompletos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades, en centros de educación permanente de personas adultas y de Educación Especial, en los que se impartan enseñanzas de régimen especial, así como en aquellas unidades o centros de características singulares, la Administración educativa competente adaptará lo dispuesto en este artículo y en el artículo 71 de esta Ley a la singularidad de los mismos.

Artículo 73. Atribuciones del Consejo Escolar.

1. El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar la programación general anual del centro y establecer directrices para la elaboración del proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.
b) Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad del mismo.
c) Decidir sobre la admisión de alumnos y velar para que se realice con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación.

g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar.

h) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con otros centros, entidades y organismos.

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.

j) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.

k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

l) Elegir sus representantes en la Comisión de selección de Director prevista en el artículo 79 de esta Ley.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas podrán establecer una denominación específica para referirse al Consejo Escolar de los centros educativos.

3. Las Administraciones educativas podrán establecer, con carácter excepcional, la exigencia de mayoría cualificada en la toma de determinadas decisiones de especial importancia para el funcionamiento del centro y que afecten al conjunto de la comunidad educativa.

4. Las Administraciones educativas podrán regular la creación de comisiones dependientes del Consejo Escolar para los objetivos que se determinen.

5. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, sin perjuicio de que se cubran hasta entonces las vacantes que se produzcan. Las Administraciones educativas regularán el procedimiento de renovación parcial, que se realizará de modo equilibrado entre los distintos sectores de la comunidad educativa que lo integran.

Artículo 74. Claustro de profesores.

1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el control y gestión del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del centro, de acuerdo con sus atribuciones.

2. El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el centro.

Artículo 75. Atribuciones del Claustro de profesores.

El Claustro de profesores tendrá las siguientes atribuciones:

a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general anual, así como evaluar su aplicación.

b) Aprobar y evaluar el proyecto educativo y los proyectos curriculares.

c) Informar el proyecto de reglamento de régimen interior del centro.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y en la Comisión de selección de Director prevista en el artículo 79 de esta Ley.

f) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa, así como cualquier otro informe referente a la marcha del mismo.

h) Ser informado por el Director de la aplicación del régimen disciplinario del Centro.

i) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas.

Sección 5.ª De la dirección de los centros públicos

Artículo 76. Atribuciones del Director.

El Director es el representante de la Administración educativa en el centro y tiene atribuidas las siguientes competencias:

a) Garantizar el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones vigentes.

b) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar las resoluciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas aplicables.

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.

d) Ostentar la representación del centro, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas.

e) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos del centro.

f) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación

del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos.

h) Favorecer la convivencia en el centro, resolver los conflictos e imponer todas las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, de acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas y en cumplimiento de los criterios fijados en el reglamento de régimen interior del Centro. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.

k) Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos de innovación e investigación educativa.

l) Impulsar procesos de evaluación interna del centro y colaborar en las evaluaciones externas.

m) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.

Artículo 77. Equipo directivo.

1. El Director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de Jefe de Estudios y Secretario, y demás órganos de gobierno, de entre los profesores con destino definitivo en dicho centro.

2. Los órganos de gobierno constituirán el equipo directivo y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a las instrucciones del Director.

3. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca el cese del Director.

No obstante, la Administración educativa competente cesará o suspenderá a cualquiera de los miembros del equipo directivo designado por el Director, antes del término de dicho mandato, cuando incumplan gravemente sus funciones, previo informe razonado del Director, dando audiencia al interesado, y oído el Consejo Escolar.

Asimismo, la Administración educativa cesará a cualquiera de los miembros del equipo directivo designado por el Director, a propuesta de éste mediante escrito razonado, previa comunicación al Consejo Escolar del centro.

4. En los centros de nueva creación, el Jefe de Estudios y el Secretario serán nombrados directamente por la Administración educativa.

5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.

Sección 6.ª De la participación de los Directores de centros sostenidos con fondos públicos en otros órganos

Artículo 78. Participación de los Directores.

Las Administraciones educativas favorecerán la participación de los Directores de centros sostenidos con fondos públicos en órganos de carácter consultivo y participativo.

CAPÍTULO II

Del Director de los centros docentes públicos

Artículo 79. Principios generales.

1. La selección y nombramiento de Directores de los centros públicos corresponde a las Administraciones educativas y se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores, con una antigüedad de al menos cinco años en el ejercicio de la docencia como funcionarios.

2. La selección se realizará de conformidad con los principios de publicidad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias. En todo caso, se garantizará la participación del Consejo Escolar del centro.

Artículo 80. Requisitos.

Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo de la función pública docente desde el que se opta.

b) Haber impartido docencia directa en el aula como funcionario, durante un período de igual duración, en un centro público que imparta enseñanzas contempladas en la presente Ley.

c) Estar prestando servicios en un centro público, con una antigüedad en el mismo de al menos un curso completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la Administración educativa convocante.

Artículo 81. Nombramiento.

1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las

Administraciones educativas, consistente en un curso teórico de formación y en un período de prácticas. En cualquier caso, las Administraciones educativas podrán convalidar esta formación por la experiencia adquirida en cargos unipersonales directivos.

2. La Administración educativa nombrará Director del centro que corresponda, por un período de tres años, al aspirante que haya superado este programa.

3. Los Directores así nombrados serán evaluados a lo largo de los tres años. Los que obtuvieren evaluación positiva, adquirirán la categoría de Director. Dicha categoría surtirá efectos en el ámbito de todas las Administraciones educativas.

Artículo 82. Nombramiento con carácter extraordinario.

1. En ausencia de candidatos o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante, la Administración educativa nombrará Director, por un período de tres años, a un profesor funcionario que reúna, al menos, los siguientes requisitos:

a) Tener una antigüedad de al menos tres años en el cuerpo de la función pública docente de procedencia.

b) Haber sido profesor con docencia directa en el aula, durante un período de igual duración, en un centro público.

2. En el caso de centros de nueva creación, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. En estos centros, la duración del mandato de todos los órganos de gobierno será de tres años.

3. En los centros específicos de Educación Infantil, en los centros cíclicos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades y en los que impartan enseñanzas artísticas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, las Administraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 83. Apoyo al ejercicio de la función directiva.

1. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes dotando a los Directores de la necesaria autonomía de gestión para impulsar y desarrollar los proyectos educativos propios del centro.

2. Asimismo organizarán cursos de formación de cargos directivos que actualicen sus conocimientos técnicos y profesionales.

Artículo 84. Cese del Director.

1. El cese del Director se producirá en los siguientes supuestos:

a) Finalización del período para el que fue nombrado.

b) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.

c) Revocación motivada por la Administración educativa competente por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de Director, previo informe razonado del Consejo Escolar y previa audiencia al interesado.

2. El Director, finalizado el período de su mandato incluidas las posibles prórrogas, deberá participar de nuevo en un concurso de méritos para volver a desempeñar la función directiva.

Artículo 85. Reconocimiento de la función directiva.

1. El ejercicio de cargos directivos y, en especial, del cargo de Director, será retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos establecidos al efecto fijen las Administraciones educativas.

2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en todo caso, del cargo de Director será especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función pública docente, así como para el ejercicio de otras funciones, dentro del ámbito de la Administración educativa o general, que establezcan las Administraciones competentes.

3. Los Directores de los centros públicos que hayan ejercido su cargo con valoración positiva durante el período de tiempo que cada Administración educativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción del complemento retributivo correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos que determinen las Administraciones educativas. En todo caso, se tendrá en cuenta a estos efectos el número de años de ejercicio del cargo de Director.

TÍTULO VI

De la evaluación del sistema educativo

Artículo 86. Ámbito de la evaluación.

La evaluación se extenderá a todo el ámbito educativo regulado en esta ley, se orientará a la permanente adecuación del mismo a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, los procesos educativos, la actividad del profesorado, los centros docentes, la inspección de educación y la propia Administración educativa.

Artículo 87. Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.

1. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación que pasa a denominarse Instituto Nacional de Evalua-

ción y Calidad del Sistema Educativo, realizará la evaluación general del sistema educativo, sin perjuicio de la evaluación que las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas puedan realizar en sus ámbitos respectivos.

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la estructura y funciones de este Instituto, garantizando la participación de las Administraciones educativas en el mismo.

Artículo 88. Evaluaciones de diagnóstico general.

1. El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo elaborará evaluaciones de diagnóstico general del sistema educativo, mediante métodos estadísticos de carácter muestral.

2. Las Administraciones educativas participarán en las evaluaciones de diagnóstico del sistema educativo y en las evaluaciones internacionales en las que tome parte el Estado español, mediante las actuaciones que sean necesarias en sus respectivos centros.

3. Las Administraciones educativas desarrollarán, ejecutarán y controlarán las evaluaciones en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 89. Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

1. El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo elaborará periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

2. A los efectos de la elaboración de este sistema de indicadores, las Administraciones educativas colaborarán con el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.

Artículo 90. Plan de Evaluación General del Sistema.

El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, elaborará periódicamente un plan de evaluación general del sistema en el que se determinarán las prioridades y objetivos que el Instituto deberá desarrollar en sus evaluaciones. Este plan contendrá los criterios y procedimientos de evaluación, que se harán públicos con carácter previo.

Artículo 91. Publicación de los resultados de las evaluaciones.

El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema educativo efectuadas y dará a conocer los resultados de la aplicación del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

Artículo 92. Otros programas de evaluación.

1. La Administración educativa correspondiente podrá elaborar planes de evaluación que serán aplicados con periodicidad a los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

2. Los órganos de gobierno y los órganos de participación en el control y gestión así como los distintos sectores de la comunidad educativa colaborarán en la evaluación externa de los centros.

3. Las Administraciones educativas informarán a la comunidad educativa y harán públicos los criterios y procedimientos que se utilicen para la evaluación de los centros, así como las conclusiones generales que en dichas evaluaciones se obtengan.

4. Además de la evaluación externa, los centros evaluarán su propio funcionamiento, de acuerdo con lo preceptuado por la Administración educativa.

TÍTULO VII

De la inspección del sistema educativo

Artículo 93. Inspección del sistema educativo.

1. Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo.

2. Las Administraciones públicas competentes ejercerán la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial. El ejercicio de la función inspectora se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.

CAPÍTULO I

De la Alta Inspección

Artículo 94. Ámbito.

Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le están atribuidas en materia de educación en las Comunidades Autónomas, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución.

Artículo 95. Competencias.

En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, corresponde a la Alta Inspección:

a) Comprobar que los currículos así como los libros de texto y demás material didáctico se adecuan a las enseñanzas mínimas.

b) Comprobar que las enseñanzas mínimas se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre materias obligatorias básicas de los respectivos currículos.

c) Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo en cuanto a niveles, modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, así como en cuanto al número de cursos que en cada caso corresponda. Asimismo, la comprobación de la duración de la escolaridad obligatoria, de los requisitos de acceso de un nivel de enseñanza a otro, de las condiciones de obtención de los títulos correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de los mismos.

d) Verificar que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del Estado a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.

e) Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre las características de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico para cada nivel de enseñanza.

f) Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación así como de sus derechos lingüísticos y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado de acuerdo con las disposiciones aplicables.

g) Verificar la adecuación del otorgamiento de las subvenciones y becas a los criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado, así como elevar, en su caso, informes a los órganos competentes en relación con las inversiones en construcciones, instalaciones, equipos escolares y gastos corrientes en materia de dotaciones y retribuciones de personal.

h) Recabar la información necesaria para la elaboración de las estadísticas educativas para fines estatales, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los servicios estadísticos del Departamento, especialmente en la Ley de la Función Pública estadística.

i) Elevar a las autoridades del Estado una memoria anual sobre la enseñanza en las respectivas Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO II

De la inspección educativa

Artículo 96. Funciones.

Son funciones de la inspección educativa:

a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.

b) Supervisar la práctica docente y colaborar en su mejora continua y en la del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.

c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.

d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.

e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.

Artículo 97. Organización de la inspección educativa.

1. Las Administraciones educativas, de acuerdo con sus competencias, regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos territorios.

2. Las Administraciones educativas organizarán su inspección educativa y fijarán el cuadro de sus especialidades.

Artículo 98. Formación de los Inspectores de educación.

1. El perfeccionamiento y actualización en el ejercicio profesional es un derecho y un deber de los Inspectores de Educación y deberá contribuir a adecuar su capacitación profesional a las distintas áreas, materias, programas, enseñanzas y niveles en los que se ordena el sistema educativo con el fin de poder colaborar en los procesos de renovación pedagógica.

2. La formación de los Inspectores de Educación se llevará a cabo por las distintas Administraciones educativas, en colaboración, preferentemente, con las universidades e instituciones superiores de formación del profesorado.

3. A los solos efectos de los concursos de traslados de ámbito nacional y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan las respectivas convocatorias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Del calendario de aplicación de la Ley.

El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la extinción gradual del plan de estudios de las enseñanzas de idiomas en vigor, la implantación de los currículos correspondientes, así como las equivalencias a efectos académicos de los años cursados según el plan de estudios que se extingue. Asimismo, se regulará la implantación de las enseñanzas de régimen general y las equivalencias de los títulos afectados por esta Ley. Asimismo, se establecerá la progresiva aplicación de la gratuidad de los libros de texto.

Segunda. Del área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.

1. El área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos Acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas.

2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas.

3. Las Comunidades Autónomas establecerán el currículum de la opción no confesional. La determinación del currículo de la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas, de acuerdo con la Administración educativa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.

4. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza confesional de Religión en los centros públicos en los que se desarrollan las enseñanzas reguladas en la presente ley, lo harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial. Estos profesores percibirán las retribuciones que corresponda en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos.

Tercera. De los libros de texto y demás materiales curriculares.

1. Corresponde a la autonomía pedagógica de los centros educativos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.

2. Los libros de texto y demás materiales a que se refiere el apartado anterior deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.

3. Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuando la programación docente lo requiera, las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación del plazo anteriormente establecido.

Cuarta. Del calendario escolar.

El calendario escolar que fijarán las Administraciones educativas comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para la Educación Infantil y Primaria, y 170 días para el resto de las enseñanzas escolares.

Quinta. Sobre la admisión de alumnos en caso de no existir plazas suficientes.

1. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos que procedan de los centros de Educación Infantil o de Educación Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos, siempre que dichas enseñanzas estén sostenidas con fondos públicos.

2. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y condiciones para la adscripción de centros a que se refiere el apartado anterior.

3. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de grado superior de Formación Profesional, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato que en cada caso se determine o quienes accedan a estas enseñanzas a través de la prueba establecida en el artículo 35 de esta Ley.

4. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de Música o de Danza y enseñanzas de régimen general, tendrán prioridad para ser admitidos en los centros que impartan enseñanzas de régimen general que la Administración educativa determine.

Sexta. De los centros que estén autorizados para impartir el primer ciclo de Educación Infantil.

Los centros docentes privados que a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran autorizados para impartir el primer ciclo de la Educación Infantil, quedarán automáticamente autorizados para impartir la educación preescolar establecida en esta Ley.

Séptima. Bases del Régimen Estatutario de la Función Pública Docente.

1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y las establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, las reguladas por esta Ley y por las normas citadas para el ingreso, la movilidad entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuerpos y escalas, y la provisión de puestos mediante concurso de traslados de ámbito estatal. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, desarrollará reglamentariamente las bases reguladas por esta ley en aquellos aspectos expresamente previstos por ella.

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas contenidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario conforme se expresa en el apartado anterior.

3. El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, en su caso, de acuerdo con las áreas, materias, asignaturas y módulos que integran el currículo correspondiente. Para la selección de los aspirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes.

El número de aprobados no podrá superar el numero de plazas convocadas. Asimismo, existirá una fase de prácticas que podrá incluir cursos de formación y constituirá parte del proceso selectivo.

4. Los funcionarios del Cuerpo de Maestros que están destinados, con carácter definitivo, a plazas correspondientes al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, puedan promocionar, por un turno restringido y especial al Cuerpo de Profesores de enseñanza Secundaria, manteniendo el destino que ocupan, y siempre que reúnan los requisitos de titulación previstos en esta ley.

5. Periódicamente, las Administraciones educativas convocarán concursos de traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquellas. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Éstas se harán públicas a través del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un único baremo de méritos entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento superados, los méritos académicos y profesionales, la antigüedad y, en su caso, la condición de catedrático, así como la antigüedad en ella, y el ejercicio de cargos directivos.

6. No obstante, la provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de enseñanzas artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas.

Octava. De la categoría profesional de catedrático y de magister.

Dentro de cada uno de los cuerpos en los que se estructura la función pública docente, la promoción de la carrera profesional permitirá alcanzar, mediante los procedimientos que establecerá cada Administración educativa, una categoría profesional superior, sin necesidad de pasar a ocupar un destino diferente al actual: «categoría de catedrático» para los funcionarios de todos los cuerpos docentes que imparten enseñanzas en la educación secundaria y «categoría de magister» para los funcionarios del cuerpo de maestros

Novena. Del Título de Especialización Didáctica.

1. Las referencias al título profesional de especialización didáctica contenidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se entienden sustituidas por la denominación de Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 51 de esta ley.

2. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y diseño, se requerirá estar en posesión del Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 51 de

esta ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.

3. Para ejercer la docencia de las enseñanzas de régimen especial de música y danza, y de arte dramático, será necesario estar en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o titulación equivalente, a efectos de docencia, y del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 51 de esta ley.

Décima. Concertación de los Programas de Iniciación Profesional.

Los centros con enseñanzas concertadas de Educación Secundaria Obligatoria concertarán los Programas de Iniciación Profesional que, conforme a lo previsto en esta ley, impartan a sus alumnos.

Undécima. Centros Integrados de Formación Profesional.

El nombramiento de la dirección de los Centros Integrados de Formación Profesional se ajustará a lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Duodécima.

Se establece, con carácter indefinido, el régimen de jubilación voluntaria previsto en la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, para los funcionarios de los cuerpos docentes que reúnan lo siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos sesenta años de edad, y

b) Tener acreditados quince años de servicios efectivos al Estado.

Decimotercera.

El Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aportará los recursos necesarios para financiar el gasto público generado por las disposiciones previstas en esta ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. De la duración del mandato de los órganos de gobierno de los centros.

1. La duración del mandato del Director y demás miembros del equipo directivo de los centros públicos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será la que corresponda a la normativa vigente en el momento de su nombramiento.

2. El Director y demás miembros del equipo directivo de los centros públicos cuyo mandato finalice en el año de entrada en vigor de esta ley, seguirán en sus cargos hasta la finalización del curso siguiente al correspondiente a la entrada en vigor de la ley.

3. El Consejo Escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos constituido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley continuará su mandato hasta la finalización del mismo, como órgano de participación en el control y gestión del centro y con las atribuciones establecidas en esta ley y en las demás disposiciones que permanezcan vigentes. En todo caso, el Consejo Escolar concluirá los procedimientos iniciados en el ámbito de las competencias que tuviera atribuidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

Segunda. De la adaptación de los centros que imparten Educación Infantil.

1. Los centros docentes que a la entrada en vigor de la presente ley atienden a niños menores de tres años y que no estén autorizados como centros de Educación Infantil, deberán adaptarse a los requisitos que las Comunidades Autónomas establezcan para los centros de educación preescolar.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros privados de Educación Infantil que no tengan autorización, podrán obtenerla con sujeción a las normas específicas anteriores a esta ley hasta la aprobación por las Comunidades Autónomas de los requisitos correspondientes.

Tercera. Concertación de la Educación Infantil.

En relación con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la presente ley, las Administraciones educativas, en el régimen de conciertos a que se refiere el artículo 63 de la misma, atenderán las solicitudes formuladas por los centros privados.

Cuarta. Adquisición de la categoría de Director.

1. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que hayan ejercido, con posterioridad a dicha acreditación, el cargo de Director durante un mínimo de tres años con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, adquirirán la categoría de Director.

2. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que estén ejerciendo la dirección en el momento de entrada en vigor de esta ley, adquirirán la categoría de Director una vez transcurridos tres años de dicho ejercicio, tras la evaluación positiva de su labor.

3. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que no hayan ejercido como Directores o lo hubieran hecho

durante un período inferior al señalado en el apartado anterior, deberán seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título V de la presente ley para la selección y nombramiento de Director.

Quinta. Vigencia de normas reglamentarias.

En las materias cuya regulación remite la presente ley a ulteriores disposiciones reglamentarias y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes.

Sexta. Transformación de los conciertos.

1. Los centros privados que, a la entrada en vigor de la presente ley, tengan concertadas enseñanzas no obligatorias, mantendrán el concierto para las enseñanzas equivalentes. El concierto de estas enseñanzas tendrá el carácter de singular.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la transformación de los conciertos se realizará en función de las características siguientes:

Las subvenciones aplicables a los centros de primer ciclo de Educación Infantil se referirán a las enseñanzas de Educación Preescolar, una vez se implanten estas enseñanzas.

Las subvenciones aplicables a los centros de segundo ciclo de Educación Infantil se referirán a conciertos de Educación Infantil, una vez se implanten estas enseñanzas.

Los conciertos con centros de Formación Profesional Específica de Grado Medio, o Superior, se podrán transformar en conciertos de Formación Profesional de Grado Medio, de Grado Superior o, en su caso, de Bachillerato.

Los convenios o subvenciones de Programas de Garantía Social realizados en centros docentes se podrán transformar en conciertos de Programas de Iniciación Profesional o de Formación Profesional de Grado Medio.

Los conciertos con centros de Bachillerato se podrán transformar en conciertos de Bachillerato, de Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior.

3. La transformación de los conciertos conforme a lo señalado en el número anterior requerirá la autorización de las enseñanzas para las que el titular del centro solicite dicha transformación y se producirá, como máximo, por el número de unidades que el centro tuviera concertadas.

4. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir de las familias.

Séptima.

En cada una de las tres primeras convocatorias de ingreso en la función pública docente, que se produzcan después de la entrada en vigor de la presente ley, habrá un turno restringido para el personal interino de los distintos cuerpos, que se realizarán conforme a un sistema de selección en el que se valorarán conjuntamente los conocimientos sobre los contenidos curriculares que deberán impartir los aspirantes, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, así como los méritos de formación académica y la experiencia docente previa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.

1. Quedan derogados el artículo 10.1 y la Disposición adicional quinta de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa.

2. Quedan derogados los artículos 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 47, 48, 49, 52.1, 53 y 57 d) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

3. Quedan derogados los Capítulos I, II, III, V, del Título I; el Capítulo II del Título II; el Título III, los artículos 3, 5, 6, 31.1 y 2, 32, 39.3, 43.1, 2.° párrafo, 55, 57, 58, 62, 66 y las Disposiciones adicionales segunda, novena, décima, apartado segundo; decimoquinta, apartado primero, y decimosexta, apartado tercero, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

4. Quedan derogados el Capítulo II del Título I, Título II, Título III y los artículos 35, 36, 41 y 43 del Título IV y las Disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta, sexta y octava de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes.

5. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

1. El artículo 54.1 y 2 de Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

« 1. Los Centros Concertados tendrán, al menos, los siguientes órganos:

a) Director.
b) Consejo Escolar.
c) Claustro de Profesores.

2. Las facultades del Director serán:

a) Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del centro de acuerdo con las disposiciones vigen-

tes, sin perjuicio de las funciones del Consejo Escolar del centro.

b) Ejercer la jefatura del personal docente.

c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del centro.

d) Visar las certificaciones y documentos académicos del centro.

e) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades.

f) Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el centro en materia de disciplina de alumnos.

g) Cuantas otras facultades le atribuya el reglamento de régimen interior en el ámbito académico.»

2. El apartado primero del artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, en la redacción dada por el apartado 4 de la Disposición final primera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes, queda redactado de la siguiente manera:

«1. El Consejo Escolar de los centros concertados estará constituido por:

— El Director.
— Tres representantes del titular del centro.
— Cuatro representantes de los profesores.
— Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos.
— Dos representantes de los alumnos, a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
— Un representante del Personal de Administración y Servicios. En los centros específicos de educación especial se considerará incluidos en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.

Las Administraciones educativas regularán el procedimiento para que uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más representativa en el centro.

Asimismo, los centros concertados que impartan formación profesional específica podrán incorporar a su Consejo Escolar un representante del mundo de la empresa designado por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el procedimiento que las Administraciones educativas establezcan.»

3. El artículo 58 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

«Los alumnos participarán en las deliberaciones y decisiones del Consejo escolar del Centro.»

4. El artículo 59.1 de Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

«1. El Director de los centros concertados será designado, previo acuerdo entre el titular y el consejo Escolar. El acuerdo del Consejo Escolar del Centro será adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.

2. En caso de desacuerdo, el Director será designado por el Consejo Escolar del Centro de entre una terna de profesores propuesta por el titular. El acuerdo del Consejo Escolar del Centro será adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.

3. El mandato del Director tendrá una duración de tres años.

4. El cese del Director requerirá el acuerdo entre la titularidad y el Consejo Escolar del Centro.»

Segunda.

Se modifican los apartados 2, 4 y 7 de la Disposición adicional decimosexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedan redactados de la siguiente forma:

«2. En las convocatorias de ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, se reservará un porcentaje del cincuenta por ciento de las plazas que se convoquen para los funcionarios de los Cuerpos docentes clasificados en el grupo B a que se refiere la vigente legislación de la Función pública, que deberán estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los referidos cuerpos y haber permanecido en sus cuerpos de origen un mínimo de seis años como funcionarios de carrera.

En las convocatorias correspondientes para estos funcionarios se valorarán los méritos de los concursantes, entre los que se tendrán en cuenta el trabajo desarrollado y los cursos de formación y perfeccionamiento superados, así como los méritos académicos. Asimismo se realizará una prueba, consistente en la exposición y debate de un tema de la especialidad a la que se accede, para cuya superación se atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos didácticos y pedagógicos de los candidatos.

Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de prácticas y tendrán preferencia en la elección de los destinos vacantes sobre los aspirantes que ingresen por el turno libre de la correspondiente convocatoria.»

«4. Para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas será necesario estar en posesión del Título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente, a efectos de docencia. Será preciso, asimismo, superar las pruebas que al efecto establezcan las Administraciones educativas, en las que se tendrá en cuenta la experiencia docente y las que en su día se superaron, y pertenecer al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas como titular de la misma especialidad por la que se concursa, con una antigüe-

dad mínima en dicho cuerpo, como funcionario de carrera, de seis años. Podrán, asimismo, ingresar en este cuerpo, a través del correspondiente proceso selectivo, quienes, estando en posesión de la titulación referida anteriormente y del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 55 de la presente Ley, no pertenezcan al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. Con este fin, podrá reservarse un porcentaje de plazas en la convocatoria de acceso.»

«7. El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las Universidades que faciliten la incorporación a los Departamentos Universitarios de los profesores de los cuerpos docentes de niveles correspondientes a las enseñanzas escolares, en el marco de la Disposición adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.»

Tercera.

1. El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes queda redactado de la siguiente manera:

« La comunidad educativa participará en los centros a través del Consejo Escolar. Los profesores lo harán también a través del Claustro».

2. El artículo 38.1 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes queda redactado de la siguiente manera:

«Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario pertenecer a alguno de los Cuerpos que integran la función pública docente, con una experiencia mínima docente de seis años».

3. El artículo 39 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes queda redactado, de la siguiente manera:

«1. El sistema de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Educación será el de concurso-oposición, que atenderá, en todo caso, a las especialidades que establezcan las Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas convocarán el concurso-oposición con sujeción a los siguientes criterios:

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos específicos como docentes. Entre estos méritos, se tendrá especialmente en cuenta la preparación científica y didáctica en las áreas, asignaturas o módulos cuya enseñanza se ha impartido.

b) En la fase de oposición se valorarán en el aspirante sus conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa, así como los conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de las funciones inspectoras de control, evaluación y asesoramiento. Igualmente se valorará su actualización científica y didáctica en las áreas o asignaturas cuya enseñanza ha impartido, y el ejercicio de las actividades desarrolladas en el Centro.»

Cuarta. Vigencia de la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros Públicos y la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.

Continuará en vigor, con las modificaciones derivadas de la presente Ley, la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros Públicos y la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.

Quinta. De la Alta Inspección.

El Gobierno regulará la organización de la Alta Inspección así como su dependencia y procedimientos de actuación.

Sexta. Del Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1,18 y 30 de la Constitución, y, en consecuencia, las anteriores normas serán de aplicación para todas las Administraciones Públicas, a excepción de las contenidas en los preceptos siguientes: los apartados 3 y 4 del artículo 4, el apartado 2 del artículo 5, los apartados 2 y 5 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 9, el artículo 10, el apartado 3 del artículo 13, los artículos 14 y 16, los apartados 3 y 4 del artículo 21, el artículo 22, el apartado 5 del artículo 23, el apartado 2 del artículo 24, el artículo 26, el apartado 3 del artículo 29, el apartado 5 del artículo 35, los apartados 5 y 6 del artículo 42, el artículo 43, los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 45, los apartados 2 y 3 del artículo 46, los apartados 2 y 3 del artículo 47, el apartado 2 del artículo 48, el apartado 2 del artículo 50, los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 51, el apartado 1 del artículo 52, el artículo 53, el apartado 1 del artículo 54, el artículo 55, el apartado 3 del artículo 62, los artículos 65, 66, 67, 68 y 69, los apartados 2, 3, y 4 del artículo 71, los apartados 3 y 4 del artículo 72, los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 73, los artículos 77, 78, 83, 88 y 92, el apartado 2 del artículo 93, el apartado 2 del artículo 97, el artículo 98, las disposiciones adicionales tercera y cuarta, las disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta.

Séptima. Desarrollo de la presente Ley.

Las normas de esta ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno.

Octava. Del carácter de Ley Orgánica de la presente Ley.

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes preceptos: los apartados d) del artículo 1, el apartado 3 del artículo 2, y el apartado 6 del artículo 5 del Título Preliminar; los Capítulos II y III del Título I; los artículos 15, 16 y 17 del Capítulo IV del Título I; el apartado 3 del artículo 21 y los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, así como el apartado 1 del artículo 34 del Capítulo V del Título I; el artículo 35 del Capítulo VI del Título I; los artículos 37, 38, 39, y 41 del Capítulo VII del Título I. El Título II; III; IV; el apartado 3 del artículo 62 y los artículos 65, 66.1, 2, 6, 7 y 8, 67, 68, y 69 del Capítulo I del Título V así como el artículo 83 del Capítulo II del mismo Título. El Título VI y el Título VII. Disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, octava y novena; disposiciones transitorias segunda, quinta y sexta; y disposiciones finales segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y décima.

Novena.

Se modifican los apartados 1, primer párrafo, y 4 de la disposición adicional 15.ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que quedan redactados de la siguiente forma:

«1. No serán de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos o Escalas en que se ordena la Función Pública docente el apartado 1, a) del artículo 20, en lo que se refiere a la exigencia del grado personal; el artículo 21, excepto el apartado 2, b) y excepto los apartados 1 y 2 que se aplicarán al personal docente que ocupe puestos de trabajo en la Administración educativa con carácter definitivo; y el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 22 de esta Ley en lo que se refiere a la conservación del grado personal.

(…)

4. El personal docente podrá ocupar puestos de trabajo en la Administración educativa de acuerdo con lo que determinen las respectivas relaciones de puestos de trabajo, consolidando grado personal si ocupan el puesto con carácter definitivo.»

Décima. De la entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2002.—**María del Mar Julios Reyes,** Diputada.—**José Carlos Mauricio Rodríguez,** Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.

ENMIENDA NÚM. 26

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Genérica en referencia a la redacción del texto del proyecto

De modificación.

Sustituir:

«Administración Educativa» por «Administración Educativa de las Comunidades Autónomas».

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de adecuar la redacción del texto a la situación real de que todas las Comunidades Autónomas dirigen y gestionan la Educación (salvedades de Ceuta y Melilla en Disposición Adicional).

ENMIENDA NÚM. 27

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 1.b)

De modificación.

Se propone la inclusión de la frase «... y la igualdad de derechos entre los sexos...», quedando el apartado con la siguiente redacción:

«b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de la sociedad y la igualdad de dere-

chos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de mejorar el texto en lo que se refiere a la transmisión de valores del sistema educativo.

ENMIENDA NÚM. 28

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 1.c), (nuevo)

De adición.

Añadir un nuevo epígrafe c) con el texto siguiente, cambiando correlativamente la numeración de los apartados actuales:

«c) La capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y sociales.»

JUSTIFICACIÓN

La Ley prevé varias acciones en la línea antes enunciada. Así, el capítulo II, «De becas y ayudas al estudio», el capítulo VII «De la atención de los alumnos con necesidades educativas específicas», etc, y, por otra parte, entendemos que la compensación es un elemento de calidad incuestionable, debiendo incluirse este epígrafe entre los principios de calidad del sistema por constituir una obligación para los poderes públicos.

ENMIENDA NÚM. 29

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 2.3

De modificación.

Suprimir la frase: «... las siguientes obligaciones», quedando el enunciado del siguiente tenor:

«3. El estudio es un deber básico del alumno, que se concreta en:»

JUSTIFICACIÓN

La relación derecho-deber es una relación de Derecho público; el término «obligaciones» se reserva al ámbito del Derecho privado.

ENMIENDA NÚM. 30

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 2.4, letra d), (nueva)

De adición.

Añadir una letra d) del tenor siguiente:

«d) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 31

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 2.5 (nuevo)

De adición.

Añadir un nuevo apartado 5, que rece:

«5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos, así como la formación de federaciones y confederaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende con esta incorporación dar cauce a una acción bien fundamentada en la Constitución y en la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 32

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 3.1, letra e), (nueva)

De adición.

Añadir una letra e) del tenor siguiente:

«e) Participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.»

JUSTIFICACIÓN

Nos parece necesario introducir este apartado, que significa la traslación del artículo 27.7 de la Constitución por ser un elemento de corresponsabilidad necesaria para la garantía de calidad del sistema educativo.

_____

ENMIENDA NÚM. 33

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 3.1, letra f), (nueva)

De adición.

En el punto 1, añadir un nuevo epígrafe f), que rece:

«f) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata, al igual que en la enmienda anterior, y, por paralelismo, de lo establecido en este Proyecto de Ley para los alumnos, de reconocer un derecho bien conformado.

En el caso de esta enmienda se expresa un derecho que por otra parte se reconoce en diversos artículos de la Ley.

_____

ENMIENDA NÚM. 34

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 3.2, letra a),

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«a) Adoptar las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.»

JUSTIFICACIÓN

Mayor precisión en la responsabilidad de los padres frente al absentismo.

_____

ENMIENDA NÚM. 35

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 3.3 (nuevo)

De adición.

Añadir un nuevo apartado 3, que rece:

«3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los padres, así como la formación de federaciones y confederaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una acción bien fundamentada en la Constitución y en las Leyes.

_____

ENMIENDA NÚM. 36

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 4.2

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«2. A los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares y la distancia del territorio peninsular, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla ... (igual)...»

JUSTIFICACIÓN

Precisar las dificultades que la ultraperiferia territorial representa, tal como se hizo por el artículo 45.1 LOU.

ENMIENDA NÚM. 37

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 4.4

De modificación.

Añadir un nuevo adjetivo de manera que diga:

«4. Sobre la base de los principios de equidad, solidaridad y compensación, las Administraciones... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de poner de manifiesto el papel compensador de las acciones a las que se refiere este artículo.

ENMIENDA NÚM. 38

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al título del capítulo IV, del Título preliminar

De modificación.

Sustituir la rúbrica del capítulo por la siguiente:

«Capítulo IV: De la organización territorial de la Educación y de los programas de cooperación territorial».

JUSTIFICACIÓN

Denominación acorde con el contenido y sistemática (Título preliminar) del artículo.

ENMIENDA NÚM. 39

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 6.1 (nuevo)

De adición.

Añadir un apartado 1, pasando el actual a su numeración correlativa, del tenor siguiente:

«1. Corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de las normas básicas previstas en esta y otras leyes orgánicas de aplicación y la función ejecutiva en Educación.»

JUSTIFICACIÓN

El texto propuesto aclara el régimen jurídico de relaciones Estado-CC.AA. en materia de Educación, para poder tratar después de programas territoriales de cooperación.

ENMIENDA NÚM. 40

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 6

De modificación y supresión.

Se propone sustituir, en el punto 1, «desarrollará» por «promoverá», y suprimir el punto 2, quedando el texto del artículo del siguiente tenor:

«Artículo 6. Programas de Cooperación.

1. (2) El Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá Programas de Cooperación Territorial orientados a objetivos educativos de interés general. Estos Programas tendrán como finalidad, según sus diversas modalidades, favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de Espa-

ña por parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial.

2. (Suprimido.)

3. (3) Los Programas de Cooperación Territorial serán desarrollados y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban.»

JUSTIFICACIÓN

Tratándose de programas que afectan a la gestión educativa, se precisa de Convenio, tal como se deduce del apartado 3 de este artículo.

_____

ENMIENDA NÚM. 41

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 9.4

De modificación.

En la segunda línea, sustituir «Administraciones educativas» por «Administraciones competentes».

JUSTIFICACIÓN

Expresión acorde con el modelo de organización que adopte cada Comunidad Autónoma y con las competencias también de las Administraciones Locales.

_____

ENMIENDA NÚM. 42

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 14.2.j)

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«j) Iniciarse en la valoración y en la producción estética... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de darle un sentido más activo en el aprendizaje de la actividad artística.

_____

ENMIENDA NÚM. 43

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 15.2.a)

De modificación.

Sustituir el texto de la letra a) por el siguiente:

«a) Conocimiento del medio natural, social y cultural.»

JUSTIFICACIÓN

Mayor cohesión del área que agrupa Ciencia, Geografía e Historia y acuerdo unánime en la Comisión General de Educación con las Comunidades Autónomas.

_____

ENMIENDA NÚM. 44

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 16.1

De adición.

En la segunda línea, después de «continua», añadir «... y global».

JUSTIFICACIÓN

La evaluación educativa en este nivel debe reflejar el progreso general del niño y, por tanto, la evaluación debe ser realizada conjuntamente por todos sus profesores.

_____

ENMIENDA NÚM. 45

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 17

De modificación.

En la sexta línea sustituir la palabra «prueba» por «evaluación general».

JUSTIFICACIÓN

La Ley no debe cerrar cómo se realiza la evaluación puesto que el objetivo es orientador y no finalista.

ENMIENDA NÚM. 46

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 20.1

De modificación.

Se propone sustituir el texto por el siguiente:

«1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprenderá un primer ciclo de dos cursos académicos y otros dos cursos académicos más, que se cursarán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.»

JUSTIFICACIÓN

La ruptura de la unidad de ciclos en los doce/trece años no es acorde con la madurez; con la integración de maestros en este ciclo, y podría producir problemas organizativos en núcleos rurales en los que no ha sido posible integrar el primer ciclo en los IES.

ENMIENDA NÚM. 47

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 21.2.a)

De adición.

Añadir al final del apartado a) del punto 2, lo siguiente:

«... y ejercitarse en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática».

JUSTIFICACIÓN

La Educación Secundaria Obligatoria marca el final de la escolarización para un elevado número de alumnos. Se debe, por tanto, asegurar que los valores que recoge nuestra Constitución están convenientemente afianzados en los alumnos al terminar esta etapa.

ENMIENDA NÚM. 48

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 21.2.h)

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«h) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías fundamentalmente, mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a fin de usarlas, en el proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la información y el conocimiento adquiridos.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 49

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 22.3

De modificación.

A partir de la segunda línea, sustituir el texto que empieza «En todo caso …», por el siguiente:

«Corresponde a las Comunidades Autónomas, la ordenación de la oferta de estas asignaturas optativas,

entre las que se ofrecerá obligatoriamente una segunda lengua extranjera.»

JUSTIFICACIÓN

Al no formar parte de las enseñanzas básicas ordenadas por el Estado el conjunto de las asignaturas optativas precisa de que normativamente estén bajo la tutela de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 50

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 23.3 (nuevo)

De adición.

Añadir un apartado 3 del tenor siguiente:

«3. Asimismo, las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas podrán regular y aprobar otras medidas para propiciar la consecución de los objetivos establecidos en esta etapa y la obtención del título previsto en el artículo 30 de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Es indispensable establecer esta regulación para conseguir mejorar los índices de titulación que la Ley promueve.

ENMIENDA NÚM. 51

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 25.1

De adición.

Añadir al final del apartado 1:

«... formativos, de idéntico valor académico».

JUSTIFICACIÓN

Se precisa el mismo valor que tiene cada itinerario, que se conforma como optatividad de acuerdo con las preferencias de cada alumno/a.

ENMIENDA NÚM. 52

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 25.3

De modificación.

A partir de la quinta línea, modificar el texto del último punto y seguido del apartado 3, sustituyéndolo por el texto siguiente:

«La elección de itinerario realizada en un curso académico no condicionará la del siguiente.»

JUSTIFICACIÓN

Texto acorde con el sentido de optatividad de los itinerarios.

ENMIENDA NÚM. 53

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 25.5

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«5. El Gobierno, previo informe favorable de la Conferencia de Educación, podrá establecer nuevos itinerarios y modificar los establecidos en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Uno de los núcleos de la reforma proyectada es la creación de itinerarios. El apartado que se enmienda supone una deslegalización total, por lo que al menos sería exigible la voluntad concurrente del Gobierno y la mayoría de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 54

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 26.1

De modificación.

A partir de la línea octava, después de la referencia a la Ley Orgánica de FP, el texto sería sustituido por:

«... Dicha formación tendrá una estructura flexible de carácter modular. El Gobierno fijará las directrices básicas y duración de estos programas.»

JUSTIFICACIÓN

Dado el carácter modular de la FP, la Ley Orgánica no debe prescribir que la duración sea de dos cursos académicos. Debe quedar a criterio del Gobierno según las distintas familias profesionales.

ENMIENDA NÚM. 55

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 26.3

De adición.

Añadir, al final del apartado 3, el siguiente texto:

«Asimismo, podrán incorporarse a dichos programas los alumnos con dieciséis años cumplidos.»

JUSTIFICACIÓN

Es claro que si un alumno con quince años puede iniciar un programa profesional, pueda también hacerlo a los dieciseis años.

ENMIENDA NÚM. 56

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 28.2

De adición.

Añadir un segundo párrafo nuevo, que diga:

«No obstante, los alumnos que, tras haber cursado el cuarto curso, tuvieran un número de asignaturas no aprobadas inferior a cuatro podrán cursar únicamente estas asignaturas. Esto será también válido si el alumno decide acogerse a lo establecido en el apartado 4 de este mismo artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Al ser un curso terminal de etapa y siguiendo lo establecido anteriormente para el BUP, el COU y el segundo curso del Bachillerato LOGSE, parece lo razonable no hacer repetir íntegramente el curso a un alumno que tiene sólo tres, dos o una asignatura suspendidas.

ENMIENDA NÚM. 57

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 30.1

De adición.

Se propone el siguiente texto:

«l. Todos los itinerarios formativos, así como los Programas de Iniciación Profesional, conducirán al Título... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Tanto los itinerarios, como los programas de iniciación profesional se realizan dentro de la edad de escolarización obligatoria y tiene como objetivo conducir al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

ENMIENDA NÚM. 58

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 31.3 (nuevo)

De adición.

Añadir un nuevo apartado 3, con el siguiente texto:

«3. Asimismo, podrán realizar funciones docentes en esta etapa otros profesionales con la debida cualificación para tareas de apoyo, recuperación y atención a los alumnos con necesidades educativas específicas. Continuarán impartiendo los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria los funcionarios a los que se refiere la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo.

JUSTIFICACIÓN

A lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria, alumnos con necesidades educativas especiales son atendidos con apoyos de profesores del Cuerpo de Maestros con las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, y por otros profesionales expertos en atención a invidentes, etc.

Por el momento, no existen en el sistema profesores del Cuerpo de Secundaria que en los centros públicos puedan desempeñar estas tareas imprescindibles. El segundo párrafo que proponemos da acogida a los funcionarios del Cuerpo de Maestros que obtuvieron plaza en los Institutos de Educación Secundaria.

ENMIENDA NÚM. 59

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 33.2.a)

De modificación.

Al inicio del apartado a) del punto 2, sustituir «Alcanzar» por «Consolidar...».

JUSTIFICACIÓN

Se debe entender que en la educación básica ya se ha alcanzado esa sensibilidad a la que se refiere este apartado. Por tanto, lo que cabe hacer en el Bachillerato será el afirmarla.

ENMIENDA NÚM. 60

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 34.6 (nuevo)

De adición.

Introducir un nuevo punto 6, con el consiguiente desplazamiento en la numeración de los posteriores, que diga:

«6. Corresponde a las Comunidades Autónomas la ordenación de la oferta de las asignaturas optativas.»

JUSTIFICACIÓN

Al no formar parte de las enseñanzas básicas ordenadas por el Estado el conjunto de las asignaturas optativas precisa de que normativamente estén bajo la tutela de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 61

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 36.2

De modificación.

Modificar el texto a partir de la quinta línea, donde dice «La calificación final del Bachillerato vendrá determinada por...», por el texto siguiente:

«La calificación final del Bachillerato vendrá determinada por la ponderación entre la calificación obtenida en la Prueba General del Bachillerato, que representará un 40 por 100, y la media del expediente académico del alumno en el Bachillerato, que representará un 60 por 100.»

JUSTIFICACIÓN

Es más acorde con el reconocimiento del esfuerzo realizado. Responde al criterio que el Gobierno fijó por

Real Decreto de 2000 y sigue la recomendación del Consejo de Estado.

ENMIENDA NÚM. 62

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 36.4

De modificación.

Sustituir el texto propuesto por el siguiente:

«4. Las Universidades primarán la nota de Bachillerato como criterio de admisión de alumnos, en su caso. El Gobierno establecerá, oído el Consejo de Coordinación Universitaria, la normativa básica que regule la posibilidad de que las Universidades establezcan otros criterios adicionales en función de las distintas titulaciones.»

JUSTIFICACIÓN

En un panorama de descenso del número de universitarios, la PGB es una prueba idónea para permitir valorar su nota en caso de titulaciones con acceso limitado. Ello no vulnera las previsiones de la LOU respecto de la capacidad de las Universidades para establecer «otros» criterios, pero dentro de un marco normativo estatal vinculado a la especialidad de determinadas titulaciones, sin que suponga una carga adicional para los estudiantes.

ENMIENDA NÚM. 63

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 37.4

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior relacionado con el mismo, deberán acreditar únicamente la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato. Para estos alumnos, el requisito de edad para la realización de la prueba será de dieciocho años cumplidos en el año natural.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de reconocer la competencia profesional de quienes tienen el título de Técnico.

ENMIENDA NÚM. 64

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 39.6

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 6.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el texto que se propone para el artículo 56 en nuestra enmienda número 44, es necesario que se respeten las competencias de las Comunidades Autónomas en la formación de sus funcionarios docentes.

ENMIENDA NÚM. 65

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 44.2

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 2.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el texto que se propone para el artículo 56 en nuestra enmienda número 44, es necesario reconocer las competencias de las Comunidades Autónomas en la formación de sus funcionarios docentes.

ENMIENDA NÚM. 66

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 51.2

De modificación.

En la quinta línea del 2, donde dice: «en los centros ordinarios», debe decir:

«en los centros ordinarios que se determinen».

JUSTIFICACIÓN

El enunciado original puede suponer el derecho y la sistemática obligación de realizar una oferta general en contra de las normas de eficiencia y coordinación que deben regir en todas las actuaciones.

ENMIENDA NÚM. 67

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 53.b) (nuevo)

De adición.

Añadir, cambiando correlativamente los apartados siguientes, un nuevo apartado b), con el siguiente texto:

«b) La participación en las actividades extraescolares y complementarias programadas por el centro, dentro o fuera del recinto educativo.»

JUSTIFICACIÓN

El concepto de actividades extraescolares y complementarias es importante para el conocimiento y debe precisarse explícitamente como deber del profesorado.

ENMIENDA NÚM. 68

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 53

De modificación.

Modificar el apartado e), de forma que diga:

«e) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.»

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de cubrir los puestos del equipo directivo debe reflejarse entre las funciones de los profesores. Hay que señalar que ya el Consejo de Estado hizo una observación a este respecto.

ENMIENDA NÚM. 69

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 56

De sustitución.

Sustituir el texto del Proyecto de Ley por el siguiente:

«Artículo 56. Formación permanente.

1. Es competencia de las Comunidades Autónomas la realización de programas de perfeccionamiento del profesorado. No obstante, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá desarrollar programas de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, en todos los niveles y modalidades de enseñanza, de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas podrán colaborar en el establecimiento, desarrollo y ejecución de programas de formación del profesorado, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban.

3. A los efectos de los concursos de traslados de ámbito nacional y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la Disposición Adicional Octava de esta Ley, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas, surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos básicos que el Gobierno establezca, una vez consultadas las Comunidades Autónomas.

4. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos que permitan la participación del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos en los planes de formación, así como en los programas de investigación e innovación.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario que este proyecto reconozca las competencias de las Comunidades Autónomas en la formación de sus funcionarios docentes, lo que está recogido en los Estatutos de Autonomía y en los Reales Decretos de traspaso de competencias.

ENMIENDA NÚM. 70

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 59.2

De modificación.

Sustituir el texto del aparado 2, por el siguiente:

«2. Las Administraciones educativas serán responsables patrimoniales por las acciones y omisiones del profesorado de los centros escolares públicos en el ejercicio de sus funciones, dentro o fuera del recinto educativo. Asimismo, adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica al mismo, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Garantías para el profesorado en la realización de sus funciones.

ENMIENDA NÚM. 71

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 66

De modificación.

Se propone la siguiente redacción para el artículo 66.

«Artículo 66. Admisión de alumnos.

1. Las Administraciones educativas realizarán una adecuada programación de los puestos escolares gratuitos que garantice la efectividad del derecho a la educación y el derecho a la libre elección de centro. En todo caso, en dicha programación, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades educativas específicas, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas.

2. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan varios niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del nivel inferior de los que sean objeto de financiación.

3. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento.

4. Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los interesados aporten en el proceso de admisión de alumnos.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica en concordancia con la enmienda número 68 a la Disposición Adicional Quinta.

ENMIENDA NÚM. 72

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

Al artículo 67.5, segundo párrafo (nuevo)

De adición.

Añadir un nuevo párrafo al apartado 5 del tenor siguiente:

«Para satisfacer demandas de escolarización, las Administraciones educativas podrán programar, mediante concurso público con titulares privados, la concertación futura de un centro de nueva construcción.»

JUSTIFICACIÓN

Más allá de las convocatorias de conciertos para centros creados, es necesario prever la concertación convenida para el futuro, siempre que venga a satisfacer necesidades de escolarización y se haga por concurso público.

ENMIENDA NÚM. 73

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 70.8

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«8. Los equipos de profesores de los centros públicos tendrán autonomía para elegir, de entre los que se adapten al currículo normativamente establecido, los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de usarse en cada ciclo o curso y en cada área, asignatura o módulo.»

JUSTIFICACIÓN

El libro de texto, que no los libros de consulta o de lectura, debe adecuarse al currículo oficialmente establecido, ya que de otra manera no cumpliría la función para la que está diseñado.

ENMIENDA NÚM. 74

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 71.2

De modificación.

Modificar la redacción del punto 2, de forma que diga:

«2. Las Administraciones locales... en que éstos desarrollan su labor y en el fomento de la convivencia en los centros. Asimismo, tomarán las medidas oportunas para controlar el absentismo escolar.»

JUSTIFICACIÓN

Se busca darle más fuerza a la redacción en una obligación de los Ayuntamientos que tradicionalmente, y por mandato legal, éstos han venido ejerciendo.

ENMIENDA NÚM. 75

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 77.1.j)

De modificación.

Sustituir lo previsto en la letra j) por lo siguiente:

«j) Elevar una terna a la Administración educativa para el nombramiento del director del centro.»

JUSTIFICACIÓN

En relación con los artículos 84 y sucesivos que hacen referencia a la elección de directores, el Proyecto de Ley plantea un sistema complejo, poco ágil para la gestión del sistema público y sin participación del Consejo Escolar. Proponemos, en enmiendas posteriores, un sistema que incorpora la participación del Consejo Escolar y, a su vez, permite a la Administración educativa una gestión eficaz de los centros.

ENMIENDA NÚM. 76

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 80.1

De modificación.

Modificar el punto 1, de forma que diga:

«1. En los Institutos de Educación Secundaria, en las Escuelas Oficiales de Idiomas y en los centros que impartan enseñanzas artísticas existirán Departamentos de coordinación didáctica, que se encargarán de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las asignaturas o módulos que se les encomienden. Cada Departamento de coordinación didáctica estará constituido por los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas de las asignaturas o módulos asignados al mismo. En los Institutos de Educación Secundaría existirá, además, un Departamento de Orientación, encargado de la orientación académica y profesional de los alumnos.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de generalizar el modelo del Proyecto de Ley a otros centros que tradicionalmente también han contado con estos Departamentos.

Por otra parte, ésa parece la intención del legislador tras la lectura del segundo párrafo del punto 3.

ENMIENDA NÚM. 77

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 82.1

De modificación.

En la quinta y sexta líneas, sustituir:

«... de entre los profesores con destino definitivo en dicho centro».

Por:

«de entre los profesores de dicho centro».

JUSTIFICACIÓN

Exigir el «destino definitivo» puede complicar innecesariamente la gestión, piénsese en profesores en comisión de servicios o en expectativa de destino.

ENMIENDA NÚM. 78

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 82.1

De modificación.

A partir de la sexta línea del punto 1, añadir, intercalado, lo siguiente:

«La Jefatura de Estudios deberá recaer en un profesor de los cuerpos del nivel educativo y régimen correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de, por analogía con lo escrito en el artículo 84.1, que el Jefe de Estudios sea profesor del Cuerpo y no del Nivel Educativo, ya que de otra forma en los centros de Infantil Primaria, modelo extendido en todo el Estado, debería haber dos jefes de estudio: uno del nivel educativo de infantil y otro del nivel educativo de primaria.

ENMIENDA NÚM. 79

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 84.1

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«1. La selección y nombramiento de directores de centros públicos se efectuará por libre designación de la Administración Educativa de entre una terna propuesta por el Consejo Escolar, integrada por profesores funcionarios de carrera de los cuerpos de alguno de los niveles educativos que imparta el centro con, al menos, cinco años de experiencia docente.»

JUSTIFICACIÓN

El sistema propuesto en el Proyecto de Ley complica la selección de los directores, pues además de no intervenir el Consejo Escolar, se sustrae a la Administración Educativa la posibilidad de remoción de dichos cargos. Entendemos que esto supone un anquilosamiento de la gestión del Sistema Público, donde el ejercicio efectivo de las funciones encomendadas por la sociedad y, entre ellos, los criterios de calidad del sistema, deben primar como criterios de selección y permanencia en los puestos de responsabilidad.

ENMIENDA NÚM. 80

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 86

De supresión.

Se propone la supresión de este artículo.

JUSTIFICACIÓN

Ya expresada en la enmienda anterior.

_____

ENMIENDA NÚM. 81

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 89.1

De modificación.

A partir de la cuarta línea del punto 1 añadir, intercalado, lo siguiente:

«... en un profesor funcionario de alguno de los niveles educativos y régimen de los que imparta el centro de que se trate...»

JUSTIFICACIÓN

En un centro puede existir más de un nivel educativo.

_____

ENMIENDA NÚM. 82

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 89.1.b)

De modificación.

Modificar el apartado b) en los términos siguientes:

«b) Haber sido profesor, durante un período de cinco años, en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta innecesario hablar de «docencia directa en el aula».

_____

ENMIENDA NÚM. 83

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 91.1.d)

De sustitución.

Sustituir el texto propuesto en la letra d), por el siguiente:

«d) Cese motivado por la evaluación negativa de su trabajo, que se realizará en la forma que se determine por cada Administración educativa, garantizándose, en todo caso, la audiencia del interesado e informe al Consejo Escolar del centro.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el modelo mixto de designación del Director.

_____

ENMIENDA NÚM. 84

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 91.2

De sustitución.

Sustituir el texto proyectado por el siguiente:

2. El Director que hubiere cesado en sus funciones tendrá derecho a ocupar un puesto de trabajo de los reservados a su cuerpo de pertenencia, en un centro de la localidad donde ejercía sus funciones antes del nombramiento como Director, salvo que el cese hubiere sido por razones disciplinarias.

JUSTIFICACIÓN

Fomenta el interés por el cargo directivo.

_____

ENMIENDA NÚM. 85

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 94.2

De modificación.

Al final del apartado, añadir lo siguiente:

«... garantizando la participación de las Administraciones educativas en su órgano de gobierno.»

JUSTIFICACIÓN

Se trataría de mantener el *status quo.*

ENMIENDA NÚM. 86

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 96.1

De modificación.

Añadir, intercalado, en el punto 1, lo siguiente:

«1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, oídas las Comunidades Autónomas,...»

JUSTIFICACIÓN

El sistema Estatal de Indicadores exige la participación activa de las Comunidades Autónomas que, por tanto, deben ser capaces de formular aquellas cuestiones que entiendan oportunas para el mejor desempeño de su tarea.

ENMIENDA NÚM. 87

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 102.g)

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«g) Verificar la adecuación del otorgamiento de las subvenciones y becas a que hace referencia el artículo 4 de esta Ley a los criterios generales... (resto, igual).»

JUSTIFICACIÓN

Las Comunidades Autónomas tienen una política de ayudas, becas y subvenciones propias en la que no cabe la intervención de la Alta Inspección.

ENMIENDA NÚM. 88

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 103.g) (nuevo)

De adición.

Se propone que los apartados del artículo 103 se agrupen dentro de un punto 1. Son funciones de la Inspección Educativa: añadiendo un apartado g), que diga:

«g) Aquellas otras que les encomienden en sus respectivos reglamentos las Administraciones educativas.»

JUSTIFICACIÓN

Con la incorporación del apartado g) se trata que las Comunidades Autónomas puedan completar los planes de trabajo propios para la Inspección de Educación.

ENMIENDA NÚM. 89

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 103.2 (nuevo)

De adición.

Añadir un nuevo punto 2 (el texto del Proyecto de Ley pasaría a ser el punto 1), del siguiente tenor:

«2. Para el correcto ejercicio de las funciones anteriores, los Inspectores de Educación tendrán las siguientes atribuciones:

a) Conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre acceso.
b) Examinar y comprobar la documentación pedagógica y administrativa de los centros.

c) Recibir de los restantes funcionarios la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para las cuales el Inspector tendrá la consideración de autoridad pública.»

JUSTIFICACIÓN

Con la inclusión de este punto se pretende facilitar herramientas para cumplir adecuadamente lo que se les encomienda.

ENMIENDA NÚM. 90

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Al artículo 104

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Artículo 104. Organización de la inspección educativa.

1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las especialidades básicas de Inspección Educativa, teniendo en cuenta, en todo caso, los diferentes niveles educativos y especialidades docentes.

2. Las Administraciones educativas, de acuerdo con sus competencias, podrán desarrollar las especialidades a que se refiere el apartado anterior, y regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la Inspección Educativa en sus respectivos territorios.

3. El acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y la provisión de puestos de trabajo mediante concursos de traslados de ámbito nacional se desarrollarán a través de las especialidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Corresponde a las Administraciones Autonómicas fijar el sistema de Inspección que mejor se avenga a las necesidades de su territorio.

ENMIENDA NÚM. 91

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Disposición Adicional Segunda, 4

De modificación.

Sustituir el texto actual por:

«4. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad proponente, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en sus Presupuestos Generales. A tal fin, la entidad proponente, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones.

JUSTIFICACIÓN

Régimen idéntico al profesorado de la concertada. El actual sistema ha generado innumerables conflictos debido a la dualidad de quien propone y quien contrata. Con la fórmula que aquí se establece el contrato privado que se establece entre la entidad religiosa y el profesor.»

ENMIENDA NÚM. 92

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

A la Disposición Adicional Cuarta, 1

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

«1. El calendario escolar, que fijarán anualmente las Administraciones educativas comprenderá un mínimo de ciento setenta y cinco días lectivos para las enseñanzas obligatorias. El Gobierno establecerá el mínimo de días lectivos para el resto de las enseñanzas. En todo caso, en el cómputo no se incluirán los días dedicados a pruebas finales.»

JUSTIFICACIÓN

Por una parte es en la enseñanza obligatoria donde se debe garantizar el número de días de clase y, por otra, es imposible dar ciento setenta días en Bachillerato, teniendo en cuenta lo que se tarda en realizar una Prueba General como la propuesta.

ENMIENDA NÚM. 93

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

A la Disposición Adicional Quinta

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Sobre la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos en caso de no existir plazas suficientes.

1. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos que procedan de los centros de Educación Infantil o de Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos, siempre que dichas enseñanzas estén sostenidas con fondos públicos.

2. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y condiciones para la adscripción de centros a que se refiere el apartado anterior, respetando, en todo caso, el derecho a la libre elección de centro.

3. En la admisión inicial que establece el artículo 66.2 o en la debida al cambio de centro los criterios para la admisión de alumnos sostenidos con fondos públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el correspondiente equipo directivo y supervisado por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con la regulación de la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: renta per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro y condición legal de familia numerosa. Para las enseñanzas no obligatorias se podrá considerar, además, el expediente académico.

4. Los centros de especialización curricular a que se refiere el artículo 73 de esta Ley podrán incluir, como criterios complementarios, otros que respondan a las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente.

5. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de grado superior de Formación Profesional, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato que en cada caso se determine o quienes accedan a estas enseñanzas a través de la prueba establecida en el artículo 37 de esta Ley. Una vez aplicados los anteriores criterios, se atenderá al expediente académico de los alumnos.

6. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de grado medio de Formación Profesional, cuando no existan plazas suficientes, se aplicarán los criterios previstos en el punto 3 de esta Disposición Adicional Quinta. Una vez aplicados los anteriores criterios, se atenderá al expediente académico de los alumnos.

7. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de Música o Danza y enseñanzas de régimen general, tendrán prioridad para ser admitidos en los centros que impartan enseñanzas de régimen general que la Administración educativa determine.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con la nueva redacción del artículo 66, y dado que en la redacción anterior se trataba en dos apartados distintos, la admisión de alumnos en el caso de no haber plazas suficientes y se olvidaba la situación para el ingreso en los Ciclos Formativos de Grado Medio.

ENMIENDA NÚM. 94

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

A la Disposición Adicional Undécima, 4

De modificación.

Donde dice:

«Con carácter exclusivo, el ejercicio de la Jefatura de los Departamentos Didácticos, así como del Departamento de Orientación.»

Debe decir:

«Con carácter exclusivo, salvo lo previsto en el artículo 80.3 de esta Ley, el ejercicio de la Jefatura de los Departamentos Didácticos, así como del Departamento de Orientación.»

JUSTIFICACIÓN

En el artículo 80.3 se dice que pueden ser Jefes de Departamento, en ausencia de funcionarios del Cuerpo de Catedráticos, profesores del Cuerpo de Enseñanza Secundaria.

ENMIENDA NÚM. 95

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Disposición Adicional (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional del siguiente tenor:

«Todas las competencias atribuidas en esta Ley a la Administración Educativa de las Comunidades Autónomas se entienden referidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con nuestra enmienda número 1.

ENMIENDA NÚM. 96

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Disposición Adicional (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional, con el siguiente texto:

«El acceso de un centro al régimen de conciertos previsto en el artículo 67 de esta Ley podrá establecerse de forma progresiva desde las unidades de los cursos inferiores hasta completar el número de unidades autorizadas.»

JUSTIFICACIÓN

Se procura la concertación de forma progresiva, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

ENMIENDA NÚM. 97

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

A la Disposición Transitoria Tercera

De modificación.

A partir de la cuarta línea, intercalar lo siguiente:

«... de la misma, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 68.1, atenderán las solicitudes formuladas por los centros privados, dando preferencia, por este orden, a las unidades que se soliciten para primero, segundo y tercer curso de la Educación Infantil.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata, en la primera modificación, de justificar el calendario limitante y en la segunda corrección seguir el calendario de implantación de las nuevas enseñanzas y propiciar una selección de acuerdo con el compromiso que impone el concierto. Tal y como está redactado, esa selección no se cumpliría hasta cuatro años después, lo que supone una violación del espíritu del concierto.

ENMIENDA NÚM. 98

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

Disposición Final Cuarta.1 (nuevo)

De adición.

Añadir un nuevo punto 1 a la Disposición Final Cuarta, pasando los actuales a numerarse correlativamente.

Al artículo 31.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, añadir un nuevo epígrafe, que diga:

«j) Los presidentes o personas en quienes deleguen de los Consejos Escolares de ámbito de Comunidad Autónoma.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de coordinar los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas con el del Estado y hacerle llegar a éste la voz de los primeros.

ENMIENDA NÚM. 99

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria

A la Disposición Final Cuarta.3.2.a)

De modificación.

A partir de la penúltima línea se propone el siguiente texto:

«a) En la fase de... evaluación positiva, pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de Catedráticos de las Enseñanzas Escolares y tener adquirida la categoría de Director.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de concretar en el acceso a la Inspección el mérito de tener la condición de Director que en el artículo 92.2 como valor diferenciado de otros cargos directivos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2002.—**Marisa Castro Fonseca,** Diputada.—**Felipe Alcaraz Masats,** Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

ENMIENDA NÚM. 100

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 1

De adición.

Se añade un apartado d) bis del siguiente tenor:

«La consideración de la educación como derecho fundamental que el Estado garantiza, dotando a los centros públicos de los recursos humanos y materiales necesarios y estableciendo las medidas compensadoras, desde el inicio de la escolarización, para hacer real la igualdad de oportunidades en el acceso y en el proceso educativo.»

ENMIENDA NÚM. 101

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 1, apartado e),

De modificación.

Sustituir «esfuerzo» por «trabajo individual y en equipo».

ENMIENDA NÚM. 102

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 1, apartado f),

De supresión.

Suprimir a partir de «sociedad» hasta el final.

ENMIENDA NÚM. 103

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 1

De adición.

Añadir un nuevo apartado f) bis del siguiente tenor:

«La capacidad de dar respuesta adaptada a la pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado.»

ENMIENDA NÚM. 104

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 1

De adición.

Añadir un nuevo apartado g) bis del siguiente tenor:

«La revalorización social y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y demás trabajadores de los centros educativos.»

ENMIENDA NÚM. 105

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 1

De adición.

Se añade un nuevo principio de calidad k) del siguiente tenor.

«El acercamiento de la gestión educativa a los ciudadanos, culminando el proceso de descentralización administrativa y facilitando la presencia de los ayuntamientos y administraciones locales en la gestión y responsabilidades educativas, asegurando mecanismos que garanticen que este proceso de descentralización no sea una fuente de desigualdad.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 106

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.1.b)

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Todos los alumnos conocerán la Constitución a lo largo de su formación, así como los Tratados y Acuerdos internacionales de Derechos Humanos.»

ENMIENDA NÚM. 107

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.2

De adición.

Añadir: Después de a):

«... a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios de plena objetividad.»

ENMIENDA NÚM. 108

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.2, apartado b),

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones morales y, en su caso, religiosas, de acuerdo con la Constitución;»

ENMIENDA NÚM. 109

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.2.e)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«A participar en el funcionamiento del centro, así como a realizar todas las propuestas o sugerencias que considera pueda contribuir a mejorar el mismo.»

ENMIENDA NÚM. 110

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.3.b)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Atender las consideraciones del profesorado respecto a su educación y aprendizaje.»

ENMIENDA NÚM. 111

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.3.c)

De supresión.

Suprimir el siguiente inciso:

«... con puntualidad».

ENMIENDA NÚM. 112

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.3.d)

De supresión.

Suprimir el siguiente inciso:

«... respetando el derecho de sus compañeros a la educación».

ENMIENDA NÚM. 113

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.4, apartado a),

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«... convicciones morales y, en su caso, religiosas».

ENMIENDA NÚM. 114

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 2.4.c)

De supresión.

Suprimir el siguiente inciso:

«... y disciplina del centro educativo».

ENMIENDA NÚM. 115

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 3.1.b)

De modificación.

Modificar por:

«b) A la libre elección de centro, de acuerdo con los criterios de escolarización y con la planificación de la oferta educativa.»

MOTIVACIÓN

El derecho a la libre elección de centro debe ejercerse de modo que no entre en colisión con otros principios reguladores del ejercicio al derecho a la educación en condiciones de igualdad.

ENMIENDA NÚM. 116

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 3.1.c)

De modificación.

Suprimir el inciso «... religiosa y...».

MOTIVACIÓN

En un Estado laico el sistema educativo no ha de proporcionar formación religiosa. Ésta debe ser objeto de otras instancias ajenas.

ENMIENDA NÚM. 117

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 3.1, apartado c),

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«a que reciban la formación moral y, en su caso, religiosa que...».

ENMIENDA NÚM. 118

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 3.1.e)

De adición.

Añadir un nuevo apartado e) del siguiente tenor:

«e) Los padres podrán participar en el funcionamiento de los centros docentes de forma individual o a través de sus asociaciones.»

ENMIENDA NÚM. 119

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 3.2, apartado a),

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«adoptar los medios necesarios, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que...».

ENMIENDA NÚM. 120

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 4.1

De adición.

Añadir al final del párrafo tercero el siguiente inciso:

«Al considerar las condiciones económicas, se valorarán los ingresos reales del estudiante solicitante o, en su caso, de la unidad familiar a la que pertenezca, dejando otras circunstancias o características personales y/o familiares como datos complementarios pero nunca dándoles carácter de exigencia necesaria para la obtención de la beca o la ayuda al estudio.»

ENMIENDA NÚM. 121

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 4.4

De adición.

Añadir *in fine:*

«Dichos controles y cautelas serán realizados sin que provoquen un retraso en su concesión y libramiento que anule su finalidad, de modo que los fondos tenderán, en la medida de lo posible, a librarse anticipada o simultáneamente al período que cubre, para que no impliquen anticipación de los fondos por parte de los beneficiarios.»

MOTIVACIÓN

La finalidad que se propone con las becas queda desvirtuada, a menudo en la actualidad, por la tardanza en su libramiento que impiden que puedan beneficiarse de ellas quienes más lo necesitan.

ENMIENDA NÚM. 122

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 5

De modificación.

Sustituir la expresión: «... a premiar la excelencia y el especial esfuerzo y rendimiento académico de los alumnos», por el siguiente texto: «... programas destinados a premiar la excelencia en el rendimiento académico o en su actitud de los alumnos...»

ENMIENDA NÚM. 123

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 6.1

De modificación.

Sustituir la expresión: «... riqueza cultural de España,...», por «... riqueza cultural de las diferentes Comunidades Autónomas del Estado español...».

ENMIENDA NÚM.124

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 7, apartados 1, 2 y 3,

De modificación.

Sustituir los apartados 1, 2 y 3 por el siguiente texto:

«1. El sistema educativo comprenderá enseñanzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial.
2. Las enseñanzas de régimen general se ordenarán de la siguiente forma:

a) Educación infantil.
b) Educación primaria.
c) Educación secundaria, que comprenderá la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional de grado medio.
d) Formación profesional de grado superior.
e) Educación universitaria.

3. Son enseñanzas de régimen especial las siguientes:

a) Las enseñanzas artísticas.
b) Las enseñanzas de idiomas.»

MOTIVACIÓN

La educación hasta los seis años de edad debe mantenerse como una etapa educativa única, con objetivos propios y estructurada en dos ciclos.

ENMIENDA NÚM.125

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 8.3

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en los centros ordinarios, cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad.»

MOTIVACIÓN

Corremos el riesgo de que si no se contempla el derecho a permanecer hasta los 18 años, los alumnos que hayan repetido algún curso haciendo uso de su derecho a repetir, puedan ser excluidos del sistema sin haber cursado toda la enseñanza básica.

ENMIENDA NÚM.126

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 9

De supresión.

MOTIVACIÓN

La educación es, en primer lugar, un derecho de la persona, reconocido como tal en la Constitución. La educación infantil ha de ser reconocida como derecho que todos/as las niñas y niños tienen desde su nacimiento. Y este derecho, como otros de los que son sujetos los niños, ha de ser propiciado y defendido por los adultos y las instituciones. El Estado, y en este caso la Administración Educativa, han de ser garantes del derecho que los niños tienen a la educación desde los primeros años de la vida.

El niño es un ser global que desarrolla sus capacidades, que madura y evoluciona con ritmo propio e individualizado, que tiene necesidades específicas, de afecto, de un ambiente rico en estímulos, de relación con sus iguales y con los adultos, que realiza adquisiciones y aprendizajes únicos en estos primeros años que serán fundamentales a lo largo de su vida.

Las características evolutivas, las destrezas, las adquisiciones y aprendizajes que en el niño pequeño van desde la iniciación de la marcha al control del propio cuerpo, la iniciación del lenguaje a la capacidad expresiva, del conocimiento del entorno próximo a la exploración de espacios cada vez mayores, el mundo de las relaciones entre iguales y con los adultos de referencia, correctamente tratadas y orientadas teniendo como centralidad las necesidades de los niños, justifican sobradamente la atención educativa entre los cero y los seis años de vida, con la peculiaridad propia de cada año pero con el mismo nivel de importancia el primer año como el quinto.

Por tanto, la educación infantil ha de comprender los seis primeros años, tiene que ser considerada como etapa educativa con entidad propia, no estar en función de la primaria ni de ninguna otra, pero no cabe duda que si esta etapa cubre los objetivos que le son propios los niños/as estarán preparados para las siguientes. Sólo es necesario para conseguirlo: voluntad política (definir la etapa cero-seis como educativa, globalizadora), maestros/as bien preparados y recursos económicos suficientes para todos/as, sobre todo en el primer ciclo (cero-tres) de la Educación Infantil.

Por otra parte, las demandas de las familias en esta etapa son clarísimas; por la evolución que la sociedad española ha tenido los últimos veinticinco años, hoy la consideración que las familias tienen con relación a la educación de las niñas y niños pequeños es muy positiva y de mayor exigencia (sobre todo aquellos que han tenido la suerte de acceder con sus hijos a un centro de educación infantil desde los cero años). Así, la demanda es de aumento de plazas para niños de cero-tres años hasta cubrir toda la demanda, públicas de calidad. Se sigue demandando que la escuela cumpla con la función compensadora de desigualdades de origen y que esto lo haga desde los primeros años. Que en estas edades, cero-seis sobre todo (aunque también en la primaria), la organización de los centros horarios, vacaciones, etc., sean compatibles y facilitadoras de la vida laboral de los padres, aspecto éste que ha de tenerse en cuenta y organizar bien para que no vaya en detrimento de las necesidades de los niños.

ENMIENDA NÚM.127

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 10

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 10.

1. La educación infantil comprende hasta los seis años de edad. Tiene carácter voluntario y se estructura en dos ciclos. El primer ciclo se extenderá hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis años de edad.
2. Las Administraciones educativas coordinarán la oferta de puestos escolares de educación infantil de las distintas Administraciones públicas asegurando la relación entre equipos pedagógicos de los centros que imparten distintos ciclos, y de éstos con los centros de educación primaria.
3. Las Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas públicas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite.
4. La educación infantil será impartida por maestros con la especialización correspondiente. En el primer ciclo los centros dispondrán, asimismo, de otros profesionales con la debida especialización para la atención apropiada a los niños de esta edad.
5. Todos los centros docentes de educación infantil facilitarán la cooperación con las familias o tutores para atender conjuntamente esta etapa por la responsabilidad fundamental que tienen en estas edades.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM.128

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A los artículos 11 y 12

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Artículo 11.

La finalidad de la educación infantil será conseguir el desarrollo global del niño, satisfacer sus necesidades y respetar los intereses. La educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades:

a) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.
b) Relacionarse con los demás a través de las distintas formas de expresión y de comunicación.
c) Observar y explorar su entorno natural, familiar y social.
d) Adquirir progresivamente una autonomía en sus actividades habituales.

Artículo 12.

1. La educación infantil comprenderá dos ciclos. El primer ciclo se extenderá hasta los tres años, y el segundo, desde los tres hasta los seis años de edad.
2. En el primer ciclo de la educación infantil se atenderá al desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de la convivencia y relación social y al descubrimiento del entorno inmediato.
3. En el segundo ciclo se procurará que el niño aprende a hacer uso del lenguaje, descubra las características físicas y sociales del medio en que vive, elabore una imagen de sí mismo positiva y equilibrada y

adquiera los hábitos básicos de comportamiento que le permitan una elemental autonomía personal.

4. Los contenidos educativos se organizarán en áreas que se correspondan con ámbitos propios de la experiencia y desarrollo infantiles y se abordarán a través de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el niño.

5. La metodología educativa se basará en las experiencias, las actividades y el juego, en un ambiente de afecto y de confianza.

Artículo 12 bis.

La educación infantil será impartida por maestros con la especialización correspondiente. En el primer ciclo, los centros dispondrán, asimismo, de otros profesionales con la debida cualificación para la atención educativa apropiada a los niños de esta edad.

Artículo 12 ter.

1. Los centros de educación infantil podrán impartir el primer ciclo, el segundo o ambos.

2. Las Administraciones educativas desarrollarán la educación infantil.

3. Las Administraciones educativas promoverán la incorporación de una lengua extranjera en los aprendizajes de la Educación Infantil, por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el niño.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM.129

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 13

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«La educación primaria comprenderá seis cursos académicos, desde los seis a los doce años de edad. La finalidad de este nivel educativo será proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio.»

MOTIVACIÓN

La educación primaria debe mantener el carácter de educación común para todo el alumnado.

ENMIENDA NÚM.130

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 14.1

De supresión.

Suprimir el inciso: «con el fin de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.»

ENMIENDA NÚM.131

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 14.1

De modificación.

Sustituir por el texto:

«La finalidad de este nivel educativo será proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, los hábitos de convivencia, estudio y trabajo, con el fin de prepararlos para ser ciudadanos autónomos y para poder continuar con aprovechamiento su proceso educativo.»

ENMIENDA NÚM. 132

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 14.2, apartado g)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto: «Conocer su medio físico, cultural y social y las posibilidades de acción en el mismo.»

ENMIENDA NÚM. 133

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 15

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«1. La educación primaria comprenderá tres ciclos de dos cursos académicos cada uno y se organizará en áreas que serán obligatorias y tendrán un carácter global e integrador.

2. Las áreas de este nivel educativo serán las siguientes:

a) Conocimiento del medio natural, social y cultural.
b) Educación artística.
c) Educación física.
d) Lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma y literatura.
e) Lenguas extranjeras.
f) Matemáticas.

3. La metodología didáctica se orientará al desarrollo general del alumno, integrando sus distintas experiencias y aprendizajes. La enseñanza tendrá un carácter personal y se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje de cada niño.»

MOTIVACIÓN

La educación primaria no puede perder su carácter global e integrador. La Religión no debe ser un área o asignatura del currículum escolar. Las Comunidades Autónomas, según lo que determinen sus respectivos Estatutos, pueden tener su lengua propia que tendrá en su ámbito el carácter de oficial, junto con la lengua castellana (no cooficial) y por consiguiente deberá figurar como un área educativa (no es una posibilidad).

ENMIENDA NÚM. 134

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 15.2

De supresión.

Suprimir el siguiente inciso: «Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, el área de Sociedad, Cultura y Religión».

ENMIENDA NÚM. 135

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 15.4

De modificación.

Sustituir a partir de «se adaptará...» por el texto «se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje de cada niño».

ENMIENDA NÚM. 136

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 15

De adición.

Añadir un nuevo punto 5, con el siguiente texto:

«Para garantizar la continuidad del proceso de formación de los alumnos se establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 137

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 16.1

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

Sustituir 16.1 por: «La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua y global.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 138

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 16

De adición.

Añadir un nuevo punto 1. bis con el siguiente texto:

«En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no responda globalmente a los objetivos programados, los profesores adoptarán las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular.»

ENMIENDA NÚM. 139

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 16.2

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Al final de cada ciclo se decidirá si el alumno promociona, o no, al ciclo siguiente. La decisión irá acompañada, en su caso, de medidas educativas complementarias destinadas a contribuir a que el alumno alcance los objetivos programados. En todo caso, los alumnos que promocionen al ciclo siguiente con evaluación negativa en alguna de las áreas, recibirán los apoyos y refuerzos necesarios para su recuperación.»

ENMIENDA NÚM. 140

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 16.3

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Los alumnos que, al término de un ciclo, no hayan alcanzado los objetivos correspondientes establecidos en el currículo, podrán permanecer un año más en ese ciclo, siguiendo un plan específico de trabajo ajustado a sus necesidades. Esta decisión sólo podrá adoptarse una vez a lo largo de la Educación Primaria.»

ENMIENDA NÚM. 141

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 16.4

De modificación.

Sustituir: «como los procesos de enseñanza» por «como su progreso».

ENMIENDA NÚM. 142

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 16

De adición.

Añadir un nuevo punto 5 del siguiente tenor:

«En la Educación Primaria podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo,

dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales, a fin de que alcancen las capacidades generales de la Educación Primaria de acuerdo con sus posibilidades.»

ENMIENDA NÚM. 143

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 17

De modificación.

Sustitución del texto por el siguiente:

«Con objeto de comprobar el grado de adquisición por el alumnado de las competencias básicas a lo largo de la enseñanza obligatoria, las Administraciones educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, realizarán periódicamente pruebas diagnóstico a muestras significativas de alumnos escolarizados en el último curso de la Educación Primaria. Los resultados de tales pruebas proporcionarán información indispensable para analizar el funcionamiento del sistema y, en su caso, proponer los pertinentes ajustes o modificaciones curriculares.»

ENMIENDA NÚM. 144

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 18

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

Nueva redacción: «La Educación Primaria será impartida por maestros de Primaria, teniendo en cuenta lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales decimosexta y decimoséptima, que atenderán todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen, serán impartidas por maestros con la especialización correspondiente. El Departamento de Orientación estará dotado de, al menos, un profesional de la especialidad correspondiente».

ENMIENDA NÚM. 145

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 19

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«El nivel de... Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio.»

ENMIENDA NÚM. 146

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 20.1

De adición.

Añadir al final: «No obstante, los alumnos podrán permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad.»

ENMIENDA NÚM. 147

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 20.2

De supresión.

Suprimir el punto 2 del artículo 20.

ENMIENDA NÚM. 148

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 20.2

Enmienda de supresión.

Suprimir el resto del artículo:

«Siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Establecer claramente que es un derecho que no tiene ninguna limitación y especificar que es hasta el curso académico en que se cumplen los dieciocho años y no en el momento en que éstos se cumplan.

ENMIENDA NÚM. 149

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 20.2

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente: «No obstante, los alumnos podrán permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta el curso académico completo en que cumplan los dieciocho años de edad, siendo obligación del equipo de orientación del centro asesorarle y establecer los apoyos necesarios para que curse la totalidad de la educación básica».

BREVE MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA

Corremos el riesgo de que si no se contempla el derecho a permanecer hasta los dieciocho años, los alumnos que hayan repetido algún curso haciendo uso de su derecho a repetir, puedan ser excluidos del sistema sin haber cursado toda la enseñanza básica, incrementándose así los niveles de fracaso escolar que pretende atenuar esta Ley.

ENMIENDA NÚM. 150

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 21.2.a)

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente: «Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadano autónomo y practicar la participación en las tareas colectivas y en los asuntos públicos, dentro de un espíritu de solidaridad y diálogo».

BREVE MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA

La Educación Secundaria Obligatoria forma a los futuros ciudadanos, que están integrados en un sistema democrático promulgado en nuestra Constitución.

ENMIENDA NÚM. 151

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 21.2

De adición.

En el objetivo a)

Incluir al final: «respetando el principio de la no discriminación de las personas».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hacer explícito el principio de la no discriminación.

ENMIENDA NÚM. 152

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 21.2, apartado b),

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente: «Desarrollar y consolidar hábitos y métodos de estudio, como condición...»

ENMIENDA NÚM. 153

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 21.2

De adición.

En el objetivo c)

Incluir después de «fuentes de información» lo siguiente:

«y herramientas de interpretación del lenguaje de los medios de comunicación».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Completar el objetivo.

ENMIENDA NÚM. 154

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 21.2

De modificación.

En el objetivo c)

Sustituir «... e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.», por «... e iniciarse en la lectura y el estudio de la literatura.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corrección lingüística.

ENMIENDA NÚM. 155

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 21.2

De modificación.

En el objetivo i)

Sustituir «Conocer...» por «Analizar...»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Completar el objetivo.

ENMIENDA NÚM. 156

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 21.2

De modificación.

En el objetivo j)

Sustituir «Apreciar y disfrutar...» por «Apreciar, disfrutar y respetar».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Completar el objetivo.

ENMIENDA NÚM. 157

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 22.1

De adición.

Incluir al principio del apartado el siguiente texto:

«La Educación Secundaria Obligatoria constará de dos ciclos, de dos cursos cada uno, y se impartirá por áreas de conocimientos.»

MOTIVACIÓN

Introducción de dos ciclos; importantes para la promoción. Introducción de áreas que pueden originar materias más específicas en el segundo ciclo.

ENMIENDA NÚM. 158

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 22.1

De supresión.

Suprimir: «Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la eliminación de la religión y, por tanto, de sus alternativas.

ENMIENDA NÚM. 159

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 22.1

De modificación.

Modificar la redacción de este párrafo primero que queda de la siguiente forma:

«1. En la Educación Secundaria Obligatoria se impartirán las siguientes áreas comunes:

1. Ciencias de la Naturaleza.
2. Educación Física.
3. Educación Plástica y Visual.
4. Ética.
5. Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
6. Lengua castellana y literatura y lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma y literatura.
7. Lenguas extranjeras.
8. Matemáticas.
9. Música.
10. Tecnología.
11. Informática.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 160

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 22.1

De modificación.

Sustituir en:

«Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial.»

La palabra «nivel» por «etapa».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este apartado hace referencia a la etapa de la ESO.

ENMIENDA NÚM. 161

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 22.2

De sustitución.

Sustituir el apartado completo:

«Con el fin de garantizar un adecuado aprendizaje en los distintos ámbitos del conocimiento, al fijar las enseñanzas mínimas se determinarán las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos.»

Por:

«En la fijación de las enseñanzas mínimas del segundo ciclo podrá establecerse la optatividad de algunas de estas áreas, así como su organización en materias. En este sentido el área de Ciencias Naturales se podrá organizar en dos materias: Biología, Geología y Física y Química.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Coherencia con una organización en ciclos y áreas.

ENMIENDA NÚM. 162

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 22.3 y 22.4

De sustitución.

Sustituir ambos apartados completos:

22.3. «Además de las asignaturas mencionadas, el currículo incluirá asignaturas optativas. En todo caso, entre las asignaturas optativas, los centros ofrecerán obligatoriamente una segunda lengua extranjera.

22.4 En los cursos tercero y cuarto, las Administraciones educativas podrán también ofrecer como asignaturas optativas cualesquiera de las asignaturas específicas de los itinerarios a que se refiere el artículo 25.»

Por el siguiente texto:

«1. Con el fin de alcanzar los objetivos de esta etapa, la organización de la docencia atenderá a la pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado.

2. Además de las áreas mencionadas, el currículo comprenderá materias optativas que tendrán un peso creciente a lo largo de esta etapa. En todo caso, entre

dichas materias optativas se incluirán la cultura clásica y una segunda lengua extranjera.

3. Las Administraciones educativas, en el ámbito de lo dispuesto por las leyes, favorecerán la autonomía de los centros en lo que respecta a la definición y programación de las materias optativas.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Coherencia con la eliminación de los itinerarios que se tratará y explicará en la enmienda al artículo 25.

ENMIENDA NÚM. 163

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 22.3

De adición.

Añadir al final de este apartado, este texto: «... extranjera, Latín, Cultura Clásica y una materia de iniciación profesional».

ENMIENDA NÚM. 164

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 22.4

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 165

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 23.1

De sustitución.

Sustituir:

«Los métodos pedagógicos en la Educación Secundaria Obligatoria se adaptará a las características de los alumnos, favorecerá la capacidad por aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, e integrará los recursos de las...»

Por:

«Los métodos pedagógicos en la Educación Secundaria Obligatoria se adaptarán a las características de los alumnos, favorecerán la capacidad por aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, e integrarán los recursos de las...»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Coherencia lingüística entre sujeto y predicado.

ENMIENDA NÚM. 166

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 23.2

De modificación.

Sustituir «... asignaturas» por «... áreas y materias...».

ENMIENDA NÚM. 167

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 24.1

De sustitución.

Sustituir el apartado completo:

«En los cursos primero y segundo, y con la finalidad de facilitar que todos los alumnos que alcancen los objetivos de esta etapa, las Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo que permitan la consecución de esos objetivos.»

Por:

«A lo largo de toda la etapa, se podrán introducir actuaciones diversas, como grupos flexibles, refuerzos y apoyos, para responder a las necesidades concretas de los alumnos y alumnas, desde el momento en que se detecten, y complementadas, si es preciso, con medidas de ayuda al estudio fuera del horario escolar, con la finalidad de contribuir activamente a que toda la población escolar alcance los objetivos de la educa-

ción obligatoria. Estas medidas no implicarán en ningún caso la segregación del alumnado en grupos homogéneos.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La formulación de la LOCE puede dar lugar a un itinerario oculto y a la segregación del alumnado.

ENMIENDA NÚM. 168

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 24.2

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«24.2 Estas medidas serán promovidas, en el marco que establezcan las Administraciones educativas, por el equipo de educadores, asesorado por el de orientación y adoptadas, en su caso, por la dirección del centro de acuerdo con los padres o tutores del alumno. La aplicación individual de las medidas se realizará manteniendo al alumno en su grupo ordinario a través de actividades específicas de refuerzo en agrupaciones flexibles y temporales que en ningún caso podrán extenderse a lo largo de toda la jornada escolar. Para la realización de estas actividades se contará con recursos personales y materiales de refuerzo.»

MOTIVACIÓN

Las medidas de refuerzo no pueden comportar la segregación en grupos diferenciados. La atención a la diversidad debe realizarse dentro del grupo ordinario. La existencia de grupos específicos de alumnado según su rendimiento académico no garantiza la optimización de sus procesos educativos.

ENMIENDA NÚM. 169

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 25

Enmienda de supresión.

Suprimir el artículo completo con todos sus apartados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se suprime todo al artículo de los itinerarios porque anteriormente se ha recogido el artículo de optatividad de la LOGSE que es la forma adecuada, en nuestra opinión, de responder a las distintas capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, dándoles a todos la misma educación básica, sin sustraerles ninguna parte de la misma y sin segregarlos básicamente por su origen socioeconómico, que es lo que ocurrirá con los itinerarios. Además, se da opción a la enseñanza privada a ofrecer sólo determinados itinerarios, reforzando así dicha segregación.

Asimismo, llamar al cuarto Curso para la Orientación Académica y Profesional Postobligatoria contradice los objetivos generales de la etapa, olvidando la finalidad formativa de la misma y dándolo sólo un carácter propedéutico.

ENMIENDA NÚM. 170

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 25.1 y 25.2

De modificación.

Sustituir los puntos 1 y 2 del artículo 25 por el siguiente punto:

«La optatividad de algunas áreas y la existencia de materias optativas, que establece el artículo 22 de esta Ley, permite que las Administraciones educativas puedan concretar, para el cuarto curso de esta etapa, una propuesta de itinerarios educativos, de los cuales cada alumno elegirá voluntariamente uno. Todos los itinerarios tendrán una parte curricular común, para cuyo desarrollo se reservará al menos dos tercios del horario escolar. Los itinerarios permitirán perfilar, en su parte específica, el carácter propedéutico o terminal de esta etapa. Los centros educativos podrán completar, a través de materias propuestas por el propio centro, la oferta específica de los itinerarios y, en su caso, proponer nuevos itinerarios a la Administración educativa, y ofrecerlos, previa autorización.»

ENMIENDA NÚM. 171

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 25.3

De supresión.

Suprimir a partir del punto.

Sustituir por esta redacción: «Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios que, para el cuarto curso de esta etapa, pueda establecer la Administración educativa competente».

ENMIENDA NÚM. 172

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 25.4

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 173

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 25.5

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 174

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 25.4

De modificación.

ENMIENDA NÚM. 175

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 25

De adición.

Añadir un nuevo artículo 25 bis del siguiente tenor:

Art. 25 bis. Programas de Diversificación Curricular.

«1. Las Administraciones educativas garantizarán que en todos los centros que impartan enseñanza secundaria se ofrezcan los programas de diversificación curricular a que hace referencia el artículo 23, punto 1, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo, en las condiciones que establece el punto 2 de este artículo.

2. Para el alumnado con más de quince años que haya permanecido un año más en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y que, a juicio de su equipo educativo, no esté en condiciones de cursar con aprovechamiento los contenidos de la mayor parte de las áreas del siguiente curso, se podrán organizar programas específicos de diversificación curricular, de dos años de duración, orientados a que dicho alumnado pueda alcanzar los objetivos de la etapa y el Título correspondiente, mediante una atención más individualizada y una adaptación de los contenidos y métodos en las áreas comunes.»

ENMIENDA NÚM. 176

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 26.1

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«26.1 Los alumnos con más de dieciséis años, y con el fin de atender expectativas, podrán permanecer escolarizados en un Programa de Iniciación Profesional, orien-

tado fundamentalmente a completar la formación básica y profesional que les permitan incorporarse a la actividad laboral o proseguir sus estudios en otras enseñanzas.»

MOTIVACIÓN

Sería contrario a la Constitución que el sistema educativo escolarizara alumnos de quince años fuera de las etapas educativas de la educación básica. De aplicarse este artículo un porcentaje elevado de alumnado sería excluido de la Educación Secundaria y, por tanto, sin posibilidad de obtener el título de graduado en educación.

ENMIENDA NÚM. 177

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 26.6

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Los centros educativos sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer Programas de Iniciación Profesional. Las Administraciones Educativas, de acuerdo con su programación, podrán adecuar este principio a las necesidades generales y de la demanda y a las características de los centros. Asimismo, podrán promover la participación de otras instituciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de estos Programas.»

ENMIENDA NÚM. 178

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 27.1

De modificación.

Modificar este párrafo que queda como sigue:

«1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria será continua e integradora.»

ENMIENDA NÚM. 179

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 27.2

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Los profesores, al evaluar a los alumnos, tendrán en cuenta no sólo los objetivos específicos de cada área o materia, según los criterios de evaluación del currículo, sino también el objetivo y capacidades que, para esta etapa, establece el artículo 21 de esta Ley.»

ENMIENDA NÚM. 180

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 28

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Artículo 28. Promoción.

1. Al finalizar el primer ciclo o cada uno de los cursos de segundo ciclo, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo de profesores decidirá la promoción al ciclo o curso siguiente o la permanencia, un año más, en el mismo ciclo o curso, teniendo en cuenta su madurez y las posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores.

2. Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos del ciclo o curso dentro del período lectivo ordinario podrán realizar actividades de recuperación, antes del inicio del curso siguiente, de las áreas o materias que no hubiesen superado.

3. Los alumnos que permanezcan un año más en el mismo ciclo o curso y los alumnos que promocionen al siguiente sin haber alcanzado los objetivos establecidos realizarán, a propuesta del equipo de evaluación con el asesoramiento del de orientación, actividades específicas de refuerzo que permitan superar las dificultades detectadas.

4. Cada ciclo o curso podrá repetirse una sola vez. La decisión de repetir curso se podrá adoptar dos veces en la Educación Secundaria Obligatoria y una tercera vez, siempre y cuando el alumno no hubiese repetido ciclo en la Educación Primaria y se considerase que el alumno tiene posibilidades de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

_____

ENMIENDA NÚM. 181

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 28.2

De supresión.

_____

ENMIENDA NÚM. 182

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 28.4

De supresión.

_____

ENMIENDA NÚM. 183

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 29

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Con el objeto de comprobar el grado de adquisición por el alumnado de las competencias básicas a lo largo de la enseñanza obligatoria, las Administraciones educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, realizarán periódicamente pruebas diagnóstico a muestras significativas de alumnos escolarizados en el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Los resultados de tales pruebas proporcionarán información indispensable para analizar el funcionamiento del sistema y, en su caso, proponer los pertinentes ajustes o modificaciones curriculares.»

_____

ENMIENDA NÚM. 184

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 30.1

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«30.1: Los alumnos que al finalizar esta etapa hayan alcanzado los objetivos de la misma recibirán el Título de Graduado en Educación Secundaria. Esta titulación es única.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

_____

ENMIENDA NÚM. 185

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 30.2

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requerirá haber superado, a juicio de la Junta de Evaluación, los criterios de promoción y titulación, que vinculados a los objetivos de etapa, se incluyan, a propuesta del Claustro, en el Proyecto educativo del centro.»

_____

ENMIENDA NÚM. 186

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 30.2

De supresión.

_____

ENMIENDA NÚM. 187

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 30.3

De supresión.

Suprimir desde «... y al mundo laboral...» Hasta el final del párrafo.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 188

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 30.4

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Todos los alumnos, en cualquier caso, al terminar su período de escolarización obligatoria recibirán una acreditación del centro educativo, en la que consten los años cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias. Esta acreditación irá acompañada de un informe orientador sobre el futuro académico y profesional del alumno, que en ningún caso será prescriptivo y que tendrá carácter confidencial.»

ENMIENDA NÚM. 189

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 31.1

De modificación.

Sustituir «... asignaturas...» por «... áreas o materias...».

ENMIENDA NÚM. 190

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 33.2, apartados b)

De modificación.

Sustituir en el objetivo b) «... estudio y disciplina, ...» por «...y aprendizaje autónomo...».

ENMIENDA NÚM. 191

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.

Al artículo 33.2, apartados c)

De modificación.

Sustituir por el texto siguiente:

«Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No es necesario sólo conocer, sino analizar y valorar.

ENMIENDA NÚM. 192

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 33.2, apartados g)

De modificación.

Sustituir «..., así como la literatura y la lectura y el análisis de las obras más significativas» por «... así como analizar las obras más significativas de la literatura».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corrección lingüística.

ENMIENDA NÚM. 193

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 33.2, apartados l)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«l) conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología para el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No siempre la ciencia y la tecnología producen mejoras en las condiciones de vida.

ENMIENDA NÚM. 194

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 33.2, apartados l)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No se puede limitar el compromiso social de los alumnos al voluntariado.

ENMIENDA NÚM. 195

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 34

De modificación.

Modificación artículo 34.

Sustituir «...asignaturas...» por «...materias...» a lo largo de este artículo.

ENMIENDA NÚM. 196

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 34.2

Enmiendas de sustitución.

Sustituir:

«Las asignaturas comunes del Bachillerato contribuirán a la formación general de los alumnos. Las específicas de cada modalidad y las optativas les proporcionarán una formación más especializada...»

Por:

«Todas las materias de Bachillerato contribuirán a la formación general de los alumnos. Las específicas de cada modalidad y las optativas les proporcionarán, además, una formación más especializada...»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todas las materias de Bachillerato contribuyen a la formación general de los alumnos, especialmente algunas optativas.

ENMIENDA NÚM. 197

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 34.3

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Las modalidades del Bachillerato serán como mínimo las siguientes:

Artes.
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Humanidades y Ciencias Sociales.
Tecnología.»

ENMIENDA NÚM. 198

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 34.5

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Serán materias comunes del Bachillerato las siguientes:

a) Educación Física.
b) Filosofía.
c) Historia.
d) Historia de la Filosofía.
e) Lengua Castellana y, en su caso, lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma, y Literatura.
f) Lengua Extranjera.»

ENMIENDA NÚM. 199

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 34.7

De supresión.

Suprimir la palabra «pedagógicos» en la frase «... métodos pedagógicos apropiados de investigación...».

ENMIENDA NÚM. 200

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 34.9

De modificación.

Añadir al final: «Asimismo podrán establecer los procedimientos para evaluar de forma específica y global a aquellos alumnos que les quede una sola materia para concluir los estudios de Bachillerato».

ENMIENDA NÚM. 201

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Adición de un nuevo artículo artículo 34 bis

«Evaluación general de diagnóstico:

Con el objeto de comprobar el grado de adquisición por el alumnado de Bachillerato de las capacidades establecidas en el artículo 33.2 de esta Ley, las Administraciones educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, realizarán periódicamente pruebas diagnóstico a muestras significativas de alumnos escolarizados en el segundo curso de Bachillerato. Los resultados de tales pruebas proporcionarán información indispensable para analizar el funcionamiento del sistema y, en su caso, proponer los pertinentes ajustes o modificaciones curriculares.»

ENMIENDA NÚM. 202

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Sustituir el artículo 36 por esta nueva redacción:

«1. Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias.
2. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior, a los estudios universitarios, en los términos establecidos por el artículo 42.3 de la Ley Orgánica de Universidades, y será requisito para acceder a los grados superiores de la Música y de la Danza, y a las enseñanzas de Arte Dramático, en los términos establecidos, respectivamente, en los artículos 40 y 44 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.»

ENMIENDA NÚM. 203

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Sustituir el artículo 36 por esta nueva redacción

«1. Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias.
2. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior, a los estudios universitarios, en los términos establecidos por el artículo 42.3 de la Ley Orgánica de Universidades, y será requisito para acceder a los grados superiores de la Música y de la Danza, y a las enseñanzas de Arte Dramático, en los términos establecidos, respectivamente, en los artículos 40 y 44 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

3. La normativa básica, que establecerá el Gobierno como desarrollo del artículo 42.3 de la Ley Orgánica de Universidades, contemplará, en todo caso, que para la admisión de los nuevos estudiantes, y sin necesidad de realizar con carácter general ninguna otra prueba de conocimientos, en aquellas titulaciones y Universidades en que la demanda sea mayor que la oferta, se contemplará la calificación media de Bachillerato. A la hora de considerar la calificación media del expediente académico, globalmente o ponderado en función de los estudios a realizar, esa calificación será normalizada respecto al total de estudiantes que ha sido objeto de calificación en su centro de origen, en segundo de Bachillerato y en ese año académico.»

ENMIENDA NÚM. 204

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Sustituir el artículo 36 por esta nueva redacción:

«1. Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias.

2. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior, a los estudios universitarios, en los términos establecidos por el artículo 42.3 de la Ley Orgánica de Universidades, y será requisito para acceder a los grados superiores de la Música y de la Danza, y a las enseñanzas de Arte Dramático, en los términos establecidos, respectivamente, en los artículos 40 y 44 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

3. Las Administraciones educativas podrán establecer una Prueba General de Bachillerato cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas. La realización, en su caso, de dicha Prueba General de Bachillerato será de carácter voluntario para los alumnos que estén en posesión del Título de Bachiller. Su superación, que será certificada oficialmente, dará al alumno el carácter de preferente para la admisión, sin necesidad de realizar ninguna otra prueba de conocimientos, en los procedimientos que se establezcan para el acceso a los estudios universitarios, como desarrollo del artículo 42.3 de la Ley Orgánica de Universidades.»

ENMIENDA NÚM. 205

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 36.4

De supresión.

Suprimir este apartado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Coherencia con la propuesta de IU sobre el acceso a la Universidad.

ENMIENDA NÚM. 206

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 36.5

De supresión.

Suprimir este apartado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Coherencia con lo dicho anteriormente.

ENMIENDA NÚM. 207

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 37

De adición.

Se crea un nuevo artículo 37 pre, del siguiente tenor:

«1. La Formación Profesional comprenderá el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo y reguladas en esta Ley, capaciten para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. Incluirá también aquellas otras acciones que, dirigidas a la formación continua en las empresas y a la inserción y reinserción laboral de los trabajadores, se desarrollen en la Formación Profesional Ocupacional que se regulará por su normativa específica. Las Administraciones públicas garantizarán la coordinación de ambas ofertas de formación profesional.

2. La Formación profesional, en el ámbito del sistema educativo, tiene como finalidad la preparación de los alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida. Incluirá la Formación Profesional específica de grado medio y la de grado superior.

3. La Formación Profesional específica comprenderá un conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas en función de los diversos campos profesionales. Los ciclos formativos se corresponderán con el grado medio y grado superior a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

4. La Formación Profesional específica facilitará la incorporación de los jóvenes a la vida activa, contribuirá a la formación permanente de los ciudadanos y atenderá a las demandas de cualificación del sistema productivo.

MOTIVACIÓN

Presentar la finalidad y características de la FP, tal como se hace con otras etapas educativas, antes de plantear el acceso y otros requisitos. No decir nada al respecto pone de manifiesto el carácter secundario, o de vía paralela, que se le otorga a la FP.

ENMIENDA NÚM. 208

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 37.1

De adición.

Se crea un nuevo artículo 37.1 bis, del siguiente tenor:

«37.1 bis:

1. Para el acceso a la Formación Profesional específica de grado superior será necesario estar en posesión del título de Bachiller.

2. Además de la titulación establecida para el acceso a la Formación Profesional de grado superior, se podrá incorporar en los correspondientes currículos de este grado la obligación de haber cursado determinadas materias del Bachillerato en concordancia con los estudios profesionales a los que se quiere acceder.»

MOTIVACIÓN

Adecuar el acceso a la FP superior a las materias de Bachillerato cursadas.

ENMIENDA NÚM. 209

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 37.3.a)

De supresión.

Suprimir desde «y sus capacidades...» hasta el final del apartado.

MOTIVACIÓN

No tiene sentido plantear capacitación profesional previa para acceder a la FP de grado medio, que es donde se adquiere el primer nivel de formación profesional específica. En coherencia con ello, sobra el resto del apartado.

ENMIENDA NÚM. 210

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 37.3.c)

De supresión.

MOTIVACIÓN

Se infravalora la FP de grado superior, planteando un requisito distinto del exigido para otros estudios superiores. A saber: Estar en posesión del Título de Bachillerato.

ENMIENDA NÚM. 211

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 37.4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Evitar la devaluación de la FP de grado superior al introducir una vía de acceso desde la FP de grado medio que elimina el requisito del Bachillerato e introduce una prueba distinta de la planteada, con carácter general, en el artículo 37.2.

ENMIENDA NÚM. 212

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 37.5

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 213

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Se crea un nuevo artículo 38 pre, con el siguiente texto:

«1. En el diseño y planificación de la Formación Profesional específica se fomentará la participación de los agentes sociales. Su programación tendrá en cuenta el entorno socioeconómico de los centros docentes en que vayan a impartirse, así como las necesidades y posibilidades de desarrollo de éste.

2. El currículo de las enseñanzas de Formación Profesional específica incluirá una fase de formación práctica en los centros de trabajo, de la cual podrán quedar total o parcialmente exentos quienes hayan acreditado la experiencia profesional según se establece en el apartado b) del artículo 32.2 de esta Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Con este fin, las Administraciones educativas arbitrarán los medios necesarios para incorporar las empresas e instituciones al desarrollo de estas enseñanzas.

3. La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.

4. Los estudios profesionales regulados en la presente Ley podrán realizarse en los centros ordinarios y en centros docentes específicos, siempre que reúnan los requisitos mínimos que se establezcan, y que se referirán a titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profersor e instalaciones docentes.

5. Las Administraciones educativas garantizarán la suficiencia de plazas públicas para cubrir la demanda de estos estudios.»

MOTIVACIÓN

Fomentar la creación de plazas de FP específica en centros públicos evitando su privatización progresiva mediante «convenios» con centros privados.

ENMIENDA NÚM. 214

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 38

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 215

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al capítulo VII del Título I

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«CAPÍTULO VII

De la atención a la diversidad del alumnado y de las acciones de compensación educativa.

SECCIÓN 1.ª

De la atención a la diversidad del alumnado.

Artículo 39.

1. Las Administraciones educativas, al objeto de garantizar una educación común para todo el alumnado en condiciones de igualdad, proporcionarán recursos suficientes para que todo alumno, a lo largo de la enseñanza básica, reciba los apoyos necesarios y las adaptaciones curriculares pertinentes para progresar de acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje. A tal fin, dichas Administraciones establecerán las disposiciones y recursos para garantizar que el alumnado de la enseñanza básica reciba los refuerzos necesarios en las capacidades instrumentales de cara a su adecuado progreso, así como el apoyo específico a aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje.

2. Para la mejor atención educativa al alumnado de zonas o centros donde se constate una mayor incidencia de fracaso escolar o una mayor necesidad de compensación, las Administraciones educativas establecerán reducciones sobre el número máximo de alumnos por aula previsto en la Disposición Adicional Tercera, punto 3, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo. Esa reducción será, asimismo, aplicable a aquellos grupos de cualquier centro que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales.

3. Las Administraciones educativas garantizarán que en todos los centros que impartan enseñanza secundaria se ofrezcan programas de diversificación curricular, así como programas específicos de garantía social a que hace referencia el artículo 23, puntos 1 y 2, de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

4. Para el alumnado con más de quince años que haya permanecido un año más en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y que, a juicio de su equipo educativo, no esté en condiciones de cursar con aprovechamiento los contenidos de la mayor parte de las áreras del siguiente curso, se podrán organizar programas específicos de diversificación curricular, de dos años de duración, orientados a que dicho alumnado pueda alcanzar los objetivos de la etapa y el Título correspondiente, mediante una atención más individualizada y una adaptación de los contenidos y métodos en las áreas comunes. Excepcionalmente, se podrán beneficiar de estos programas otros alumnos con más de quince años, siempre que se formule la correspondiente propuesta por la mayoría del equipo educativo, asesorado por el Departamento de Orientación, y se cuente con el visto bueno de sus padres o tutores.

SECCIÓN 2.ª

De los alumnos con necesidades educativas especiales.

Artículo 40.

1. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales se realizará por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones, que establecerán en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas específicas de los alumnos.

3. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar.

4. Al final de cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos con necesidades educativas especiales, en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá variar el plan de actuación en función de sus resultados.

Artículo 41.

1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, el sistema educativo deberá disponer de profesores de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales didácticos precisos para la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos la consecución de los fines indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de los centros a las necesidades de estos alumnos.

2. La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se iniciará desde el momento de su detección. A tal fin, existirán los servicios educativos precisos para estimular y favorecer el mejor desarrollo de estos alumnos, y las Administraciones educativas competentes garantizarán su escolarización.

3. La escolarización en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha situación será revisada periódicamente, de modo que pueda favorecrse, siempre que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de mayor integración.

4. Las Administraciones educativas regularán y favorecerán la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.

SECCIÓN 3.ª

De las acciones de compensación educativa.

Artículo 42.

1. Las Administraciones educativas desarrollarán las acciones de carácter compensatorio, dirigidas a pesonas, colectivos o ámbitos territoriales, que se encuentren en situaciones desfavorables, de cara a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación.

2. Con el fin de atender a las nuevas demandas sociales de las familias y disponer del espacio y medios para ejercer la función compensadora, las Administraciones educativas establecerán disposiciones para garantizar la apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y asignarán los recursos necesarios para ofrecer un programa de servicios y actividades. Este programa, que concretará el Consejo Escolar de cada centro, comprenderá, al menos, servicio de biblioteca y aulas de estudio asistido, servicio de apertura temprana, servicio de comedor, actividades deportivas, lúdicas y de ocio, así como actividades formativas y culturales.

3. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios con los Ayuntamientos respectivos para la financiación, organización y puesta en marcha de tales servicios y actividades. Asimismo, dichas Administraciones podrán establecer convenios con las Universidades públicas de su ámbito competencial a fin de que su alumnado pueda colaborar en las actividades de estudio asistido, con el consiguiente reconocimiento de la dedicación horaria como créditos de libre configuración, además de la asignación de una beca para gastos derivados de la prestación del servicio.

4. Las Administraciones competentes establecerán planes de acogida e inmersión lingüística para atender al alumnado inmigrante que pueda presentar, previa evaluación de su competencia curricular, problemas de adaptación a nuestro sistema educativo, ya sea por desconocimiento o dificultades en el manejo de la lengua en que se desarrolle la actividad escolar o bien por presentar necesidades específicas de refuerzo en determinadas áreas del currículo. Tal atención se llevará a cabo en los propios centros de enseñanza, por profesorado con la formación adecuada y de manera simultánea a su escolarización en grupos ordinaros. Entre los recursos humanos destinados a estos planes podrá contarse además con trabajadores sociales que actúen como mediadores interculturales y, en su caso, con profesorado nativo de apoyo.

5. Para reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar en zonas con condiciones socieconómicas desfavorables, las Administraciones competentes las declararán áreas de atención educativa preferente, estableciendo planes específicos de compensación que incluirán mayor dotación de profesorado de apoyo, disminución de ratios, una mayor asignación de recursos materiales y un programa de colaboración con los servicios sociales de la zona.

6. Las Administraciones educativas elaborarán planes específicos de compensación para aquellos centros que escolaricen alumnado de minorías étnicas, estableciendo cauces de colaboración con las familias y los servicios de asistencia social. Asimismo, establecerán planes para garantizar la continuidad de la escolarización en la enseñanza básica de alumnos cuyas familias tengan trabajo con domicilio itinerante. Por último atenderán, mediante la apertura de aulas específicas hospitalarias y la dotación de profesores de apoyo domiciliario, a aquellos alumnos de la enseñanza básica que por procesos de larga enfermedad se vean o hayan visto privados de asistir a las aulas ordinarias.

7. Además de las acciones contempladas en los puntos anteriores, las Administraciones educativas establecerán un sistema de becas y ayudas al estudio que contribuya a compensar condiciones socioeconómicas desfavorables. El sistema deberá garantizar la extensión y suficiencia de recursos para que, en el período de la enseñanza obligatoria, toda la población escolar que cumpla los requisitos establecidos se beneficie de estas prestaciones. En las enseñanzas postobligatorias se seguirán percibiendo dichas becas y ayudas, siempre que se mantenga un rendimiento escolar satisfactorio.»

MOTIVACIÓN

Incluir un capítulo específico sobre distintas vías de atención a la diversidad, que incluya además un repertorio de actuaciones de compensación educativa para asegurar la igualdad en el proceso educativo y no sólo en el acceso a un puesto escolar. Incorporar medidas de atención a la diversidad dirigidas a todo el alumnado que presente dificultades a lo largo de su escolarización.

ENMIENDA NÚM. 216

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al capítulo VII, sección 1.ª

De modificación.

Sustituir el título de la Sección por el siguiente:

Sección primera: «De la Atención a alumnos extranjeros con necesidades de compensación educativa».

MOTIVACIÓN

Los alumnos extranjeros no son por definición «alumnos con necesidades educativas específicas». Dicho alumnado es aquel que requiere una atención específica en función de sus necesidades especiales, temporales o permanentes, asociadas a discapacidades (físicas, psíquicas o sensoriales), a trastornos de conducta o a estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.

ENMIENDA NÚM. 217

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 39.1

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Las autoridades promoverán la incorporación al sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, y la garantizarán para los de edad de escolarización obligatoria, en cualquier momento, y asegurando su distribución equitativa entre todos los centros sostenidos con fondos públicos de la localidad o zona, para lo cual exigirán a todos esos centros una reserva de plazas equivalente al número de solicitudes que se prevea se pueden producir a lo largo de todo el curso, al comienzo de éste.

Para los alumnos que desconozcan la lengua española, las Administraciones educativas desarrollarán programas intensivos de inmersión lingüística, con el fin de facilitar su integración al sistema educativo. Para los alumnos que presenten graves carencias en conocimientos básicos o presenten necesidades específicas de refuerzo en determinadas áreas del currículo, las Administraciones educativas desarrollarán programas específicos de aprendizaje o recuperación con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.»

MOTIVACIÓN

Entendemos que en muchas ocasiones el retraso que presentan los alumnos extranjeros es originado por su desconocimiento de la lengua, por lo que los programas deberán centrarse en resolver este problema de la manera más satisfactoria para los alumnos.

ENMIENDA NÚM. 218

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 39.2

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Los programas inttensivos de inmersión lingüística se podrán impartir, de acuerdo con la planificación de las Administraciones educativas. El desarrollo del resto de programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje. Entre los recursos humanos destinados a estos programas podrá contarse además con trabajadores sociales que actúen como mediadores interculturales y, en su caso, con profesorado nativo de apoyo.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 219

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 39.3

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Los alumnos inmigrantes que se incorporen al sistema con quince años cumplidos podrán incorporarse voluntariamente, previa evaluación de sus capacidades y tras la adecuada orientación educativa y profesional, a un Programa de Iniciación Profesional.»

ENMIENDA NÚM. 220

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 39.4

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y deberes que los alumnos españoles.»

ENMIENDA NÚM. 221

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 39.6

De adición.

Sustituir por el siguiente texto:

«Las Administraciones educativas promoverán actuaciones de formación del profesorado especialmente dirigidas a proporcionarle conocimientos y recursos didácticos que contribuyan a la integración del alumnado inmigrante en el aula y en el centro.»

ENMIENDA NÚM. 222

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 40.2

De adición.

Añadir al final:

«... sus necesidades, fijando los criterios para la creación de programas de intensificación del aprendizaje.»

ENMIENDA NÚM. 223

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 40, puntos 3 y 4

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 224

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 41.1

De modificación.

La redacción de este artículo queda como sigue:

«1. Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de desarrollo, tendrán una atención especializada. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar.»

ENMIENDA NÚM. 225

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 42.1

De supresión.

Suprimir el siguiente inciso:

«... en las aulas especializadas en centros ordinarios, ...»

Breve motivación de la Propuesta:

Como dice el artículo 41.1 requieren determinados apoyos y atenciones educativas específicas, pero las que se puedan dar en centros ordinarios no necesitan de aulas especializadas.

ENMIENDA NÚM. 226

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 43.1

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley, independientemente de la edad cronológica de estos alumnos.»

Breve motivación de la Propuesta:

Se tendrá que tener en cuenta el desarrollo de los alumnos para darles el tiempo necesario para que, en la medida de lo posible, éstos puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.

ENMIENDA NÚM. 227

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 44.1

De adición.

Añadir al final del párrafo:

«En cualquier caso las Administraciones educativas promoverán una distribución equitativa de las distintas tipologías del alumno con necesidades educativas especiales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos con la finalidad de garantizar la heterogeneidad de los centros y evitar la concentración de este alumnado en determinados centros.»

ENMIENDA NÚM. 228

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 46.4

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas será requisito imprescindible haber cursado el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o estar en posesión del título de Graduado Escolar, del certificado de escolaridad o de estudios primarios.»

MOTIVACIÓN

Permitir que el alumnado del segundo ciclo de ESO pueda acceder a las escuelas de idiomas como venía haciendo hasta ahora.

ENMIENDA NÚM. 229

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 49.3

De modificación.

Sustituir el segundo párrafo por el texto:

«Asimismo, podrán seguir estas enseñanzas aquellos alumnos mayores de dieciséis años en uno de los dos supuestos siguientes:

a) Que por su trabajo no puedan acudir a los centros educativos en régimen ordinario.
b) Que lo soliciten alegando especiales circunstancias personales, familiares o de otro tipo, y obtengan la debida autorización de la Administración educativa.»

ENMIENDA NÚM. 230

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 49.5

De modificación.

«Las enseñanzas para las personas adultas se impartirán preferentemente en la modalidad presencial. La oferta se completará con la modalidad a distancia para el alumnado que tenga dificultades para escolarizarse en modalidad presencial.»

ENMIENDA NÚM. 231

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 51.4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Por coherencia con las demás enmiendas sobre el Título de Bachiller y la Prueba General de Bachillerato.

ENMIENDA NÚM. 232

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 51.6

De modificación.

La redacción de este apartado queda como sigue:

«6. Los mayores de veinticinco años de edad podrán acceder a la universidad por dos vías: Mediante la superación de una prueba específica o mediante un procedimiento de acreditación de su experiencia laboral y formación previa, en el marco de lo regulado por la Ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones.»

ENMIENDA NÚM. 233

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 53

De modificación.

Sustituir por el siguiente:

Apartado c) sustituir: «dirigir» por «orientar».
Apartado g) reformularlo: «La cooperación en los programas de mejora de los procesos de enseñanza».

ENMIENDA NÚM. 234

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 54.1

De modificación.

Modificar el artículo 54.1.

«Las Administraciones... profesores en conocimientos y metodología de su especialidad.»

ENMIENDA NÚM. 235

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 54.2

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Asimismo, los programas de..., la orientación y tutoría, la atención a alumnos con necesidades especiales, con la finalidad...»

ENMIENDA NÚM. 236

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.

Al artículo 55

De modificación.

Añadir un nuevo punto 1) pre con el siguiente texto:

«Para impartir las enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria será necesario estar en posesión del título de Maestro, teniendo en cuenta lo establecido en las Disposiciones Adicionales Decimosexta y Decimoséptima.»

ENMIENDA NÚM. 237

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 55.4

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 238

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 55.6

De supresión.

Suprimir: «... con el fin de obtener la habilitación a que se refiere el apartado 4.»

ENMIENDA NÚM. 239

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 57.3

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la... (el resto igual hasta el final del párrafo).»

ENMIENDA NÚM. 240

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 58

De supresión.

Suprimir en todo el artículo el término «Voluntaria».

MOTIVACIÓN

Carece de toda justificación que dentro de un sistema educativo que debe ser evaluado en todos sus componentes se establezca el carácter voluntario de la evaluación del profesorado.

ENMIENDA NÚM. 241

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 59.1

De sustitución.

Sustituir todo el apartado 1 por:

«1. Las Administraciones educativas, previo acuerdo con los representantes sindicales del profesorado, regularán el marco de condiciones laborales de los docentes, que incluirá, al menos, un sistema de incentivos profesionales en función de las actividades desarrolladas; la limitación del número máximo de alumnos y grupos a los que un profesor puede impartir clases en cada curso académico; un sistema que establezca los mecanismos de promoción entre los cuerpos docentes de todos los niveles educativos, incluida la Universidad; el disfrute de períodos sabáticos de formación para todo el profesorado, a lo largo de su vida profesional, de una duración global no inferior a un curso académico; medidas para el rejuvenecimiento de las plantillas que contemplen la reducción horaria lectiva sin merma salarial para los mayores de 55 años y la jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la LOGSE.»

MOTIVACIÓN

Mejorar las condiciones laborales de los docentes que están directamente relacionadas con la mejora de la enseñanza, y asegurar que las medidas concretas que se adopten se han negociado con los representantes sindicales del profesorado.

ENMIENDA NÚM. 242

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 59.1.a)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«El reconocimiento de la complejidad de la función tutorial, incrementando el número de horas dedicadas a esa función y reconociéndolas como lectivas.»

ENMIENDA NÚM. 243

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 59.1.b)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«La reducción hasta un tercio de las horas lectivas al profesorado mayor de 55 años que lo solicite, manteniendo íntegras sus retribuciones. Las horas reducidas se sustituirán por un número igual de horas de dedicación al centro para las actividades curriculares de apoyo complementarias que se determinen con carácter indicativo y que se concretarán en cada Plan de Centro.»

ENMIENDA NÚM. 244

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 59.1.c)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«El reconocimiento... profesionales, y las reducciones de horario lectivo que se determinen.»

ENMIENDA NÚM. 245

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 59.1.d)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«La adecuada dedicación del profesorado a sus alumnos, estableciendo para ello los topes máximos de número de total de grupos y número total de alumnos que cada profesor puede atender. Asimismo, se establecerán las reducciones de ratios oportunas en grupos, centros o zonas que demanden especial atención educativa.»

ENMIENDA NÚM. 246

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 59.1.e)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«La concesión de licencias retribuidas con el fin de posibilitar la realización de actividades de formación, investigación e innovación educativa. Se garantizará, al menos, que todo el profesorado pueda disfrutar, a lo largo de su vida profesional, de licencias por un período global no inferior a un curso académico.»

ENMIENDA NÚM. 247

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 59.1.f)

De adición.

Añadir un nuevo apartado f).

«Un plan permanente de jubilación anticipada a los 60 años, que contemple unos incentivos económicos, a quienes se acojan al mismo, que no sean en ningún caso inferiores a los establecidos actualmente por las Administraciones educativas competentes como desarrollo de la Disposición Transitoria Novena de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.»

ENMIENDA NÚM. 248

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 59.1.g)

De adición.

Añadir un nuevo apartado g).

«El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito docente, con su adecuada financiación».

ENMIENDA NÚM. 249

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 61.3

De adición.

Añadir al final «Concertados, en tanto se mantenga la vigencia del concierto».

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 250

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 65.1

De adición.

Añadir «in fine»:

«El carácter propio en los centros privados sostenidos con fondos públicos no podrá en ningún caso comportar discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza, sexo o nacimiento.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 251

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 65

De adición.

Añadir un nuevo punto 1 bis del siguiente tenor:

«Los centros privados que hayan establecido su carácter propio no podrán acogerse al régimen de conciertos al que se refiere el artículo 67 de esta Ley.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 252

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 65.2

De adición.

Sustituir por el siguiente texto:

«El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa por el titular del centro. Asimismo, y con carácter previo, en el proceso de elección del centro por las familias y alumnos.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 253

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 66.2

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Los criterios para la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos serán aplicados por el Consejo Escolar, de acuerdo con la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: Rentas anuales de la unidad familiar, proximidad del domicilio y existencia de hermanos matriculados en el centro.»

Breve motivación de la propuesta:

Según se establece en el artículo 77.1.c), el Consejo Escolar del centro tiene la atribución de participar en el proceso de admisión de alumnos y velar por su correcta aplicación.

ENMIENDA NÚM. 254

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 66.3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No son admisibles los centros de especialización curricular por cuanto ello significaría una especialización que iría más allá de las distintas etapas educativas, diferenciando contenidos que deberían ser comunes. Por consiguiente, no son posibles criterios complementarios en la admisión de alumnos que se basen en una especialización distinta a la propia de la titulación que legalmente da acceso a una etapa educativa.

ENMIENDA NÚM. 255

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 66.4

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«En los centros.... del nivel inferior de enseñanza básica de los que...»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 256

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 66.5

De adición.

Añadir «sexo» entre las razones por las cuales no puede haber discriminación en la admisión de alumnos.

MOTIVACIÓN

La no discriminación por sexo está recogida en el artículo 14 de la Constitución.

ENMIENDA NÚM. 257

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 67.1 y 5

De modificación.

Sustituir los puntos 1 y 5 por el siguiente texto:

«Se podrán acoger al régimen de conciertos aquellos centros que impartan sus enseñanzas en los niveles declarados obligatorios y satisfagan necesidades de escolarización, entendiendo por tal tener al menos la misma "ratio" alumnado/unidad que la media del conjunto de centros sostenidos con fondos públicos de su misma zona o distrito escolar. Dentro de estos tendrán preferencia aquellos centros que atiendan a poblaciones de condiciones socioeconómicas desfavorables, o que realicen experiencias que las instituciones correspondientes hayan considerado de interés pedagógico para el sistema educativo. Además, tendrán preferencia aquellos centros que en régimen de cooperativa de reconocida labor social cumplan con las condiciones anteriormente señaladas. En todo caso, se considera que un centro no satisface necesidades de escolarización cuando por su ubicación se precise el uso del transporte para la mayoría del alumnado que acceda al mismo. Las Administraciones educativas en la renovación o nueva concesión de conciertos tendrá en cuenta la demanda de escolarización en la zona donde esté ubicado el centro, siendo prioritario el mantenimiento de las aulas públicas ya existentes.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 258

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 67.3

De adición.

Añadir texto en negrita:

«... régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares, jornada lectiva del alumnado y calendario escolar, plantillas de personal, acceso a los puestos de trabajo y demás condiciones de impartición de la enseñanza....»

ENMIENDA NÚM. 259

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 67

De adición.

Se añade un nuevo apartado del siguiente tenor:

«67.6: Los centros privados sostenidos con fondos públicos tendrán sistemas de control externos, objetivos y publicos.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 260

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 68

De modificación.

Sustituir el conjunto del articulado por:

«1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado y en los de las Comunidades Autónomas con transferencias educativas, no pudiendo en estos últimos ser inferior al que se establezca en los primeros, que tendrán carácter de mínimos de obligado cumplimiento, en ninguna de las cantidades en que se diferencia el citado módulo, a las que se hace referencia en el apartado 3 de este artículo.

2. a) A efectos de la determinación de dicha cuantía global y de su distribución entre los diversos componentes del módulo de los diferentes niveles educativos, se constituirán Mesas de Enseñanza Privada Concertada de ámbito estatal y de cada una de las Comunidades con transferencias educativas. Dichas Mesas se constituirán también cuando deban adoptarse medidas que afecten a la enseñanza Concertada en la correspondiente Comunidad y, en especial, si se dan las circunstancias a las que se refiere el apartado 6 de este artículo.

b) Dichas Mesas tendrán carácter tripartito y estarán constituidas por la Administración educativa correspondiente y las organizaciones patronales y sindicales representativas de la Enseñanza Privada Concertada del ámbito correspondiente.

c) Dichas Mesas tendrán carácter deliberativo y en ellas se analizará la evolución de costes de cada uno de los diversos componentes del módulo, la previsión del IPC y las repercusiones que puedan tener los posibles acuerdos de carácter laboral, o suscritos por la correspondiente Administración educativa, como las diferentes ratios profesorado/unidad aprobadas para cada nivel educativo..., a fin de orientar sobre el valor de cada uno de los distintos componentes del módulo que, para los distintos niveles, propongan las Administraciones educativas en sus correspondientes Presupuestos, y a los que se hace referencia en el apartado 3.

3. En los niveles obligatorios los conciertos serán de carácter pleno o total, los que existen en niveles no obligatorios podrán continuar con carácter singular, siempre que respondan a necesidades de escolarización. En los primeros no se podrá percibir de las familias más cantidades que las que las Administraciones educativas autoricen expresamente por los servicios complementarios que se ofrezcan y las actividades extraescolares que se realicen, que siempre tendrán carácter voluntario. La percepción de cualquier otra cantidad será considerada como grave incumplimiento de las obligaciones del concierto educativo. El Concierto singular cubrirá los gastos salariales y cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social del personal del centro, y las familias abonarán las cantidades que cada año determine la Administración educativa, oídas las Mesas a que hace referencia el apartado anterior. En el caso del concierto pleno o total, dentro del módulo correspondiente a cada nivel educativo, se diferenciará:

a) Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota

patronal a la Seguridad Social correspondiente a los titulares de los centros.

b) Las cantidades correspondientes a salarios del personal de administración y servicios, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondientes a los titulares de los centros.

c) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las ordinarias de mantenimiento, conservación y las de reposición de inversiones reales de los centros. En ningún caso podrán considerarse intereses de capital propio. Las citadas cantidades, al menos en los niveles correspondientes a la enseñanza secundaria, se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos del ámbito territorial correspondiente.

d) Una partida de "gastos variables", que será gestionada por la correspondiente Administración educativa, que contemplará todos los componentes salariales de carácter variable o unipersonal, tales como: Complementos derivados del ejercicio de la función directiva y de coordinación pedagógica, complementos de antigüedad, posibles complementos vinculados a la formación y al ejercicio profesional, complementos o pagas de carácter no periódico, sustituciones por bajas laborales, obligaciones derivadas del artículo 87 del vigente Convenio...

e) En las unidades de educación especial, tanto específicas como integradas, se diferenciará una partida del módulo para la atención del personal especializado en las atenciones complementarias que precise el alumnado en función de su discapacidad, de acuerdo con las "ratios" de personal para cada una de ellas establecidas al respecto.

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, personal especializado complementario de educación especial y de administración y servicios, a que hace referencia el apartado anterior y que se consignarán en la partida del módulo que corresponda, harán posible:

a) Su homologación retributiva con el profesorado estatal de los respectivos niveles educativos, que comprenderá dos aspectos: La equiparación salarial en términos anuales con los componentes generales (salario base, antigüedad, complemento de destino y complemento específico generalizado) del mismo nivel educativo; y la analogía de tratamiento con otros complementos específicos que, vinculados a la formación, antigüedad..., puedan existir en cada Comunidad.

b) La igualdad salarial entre el personal que trabaja en un mismo nivel educativo.

c) La gradual reducción horaria que permita su equiparación a la existente en el mismo nivel educativo para el profesorado estatal.

d) La valoración de las funciones directiva y de coordinación con criterios similares a los que se determinen para la enseñanza pública en cada Comunidad.

e) La homologación retributiva y de condiciones de trabajo del personal de administración y servicios con los del personal de centros públicos.

5. Los salarios del personal docente, del personal especializado que atiende unidades específicas o integradas de educación especial y del personal de administración y servicios serán abonados por la Administración como «pago delegado», y en nombre de la entidad titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones.

6. Las Administraciones educativas no podrán asumir alteraciones en los salarios del personal de los centros concertados, derivados de convenios colectivos, que superen las previsiones de las partidas del módulo con que deban ser atendidas a que hace referencia el apartado 3. En el caso de que una Administración educativa considere que tal situación se da, convocará, con carácter previo a la adopción de cualquier decisión, a las Mesas de Enseñanza Privada a que hace referencia el apartado 2, que tendrán carácter consultivo para estas cuestiones.

7. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos.»

ENMIENDA NÚM. 261

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 70.2

De modificación.

Sustituir la primera parte por la siguiente redacción:

«Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las Administraciones educativas, elaborarán el proyecto educativo, en colaboración con toda la comunidad educativa. En él se fijarán los objetivos y las prioridades educativas, así como los procedimientos de actuación. Será aprobado por el Consejo Escolar» (el resto igual).»

ENMIENDA NÚM. 262

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 70.2

De adición.

Añadir al final del punto el siguiente texto:

«Se garantizará un nivel de estabilidad del profesorado suficiente como para que el proyecto educativo pueda desarrollarse y alcanzar sus objetivos.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 263

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 70.3

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 264

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 70.4

De adición.

Añadir tras «cuanta información» el término «y recursos favorezcan...».

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 265

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 70, puntos 7 y 8

De modificación.

Sustituir «asignatura» por «materia».

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 266

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 71.1

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«... La programación general anual será elaborada por el equipo directivo, partiendo de la evaluación y propuestas formuladas por el Claustro y el Consejo Escolar.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 267

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 73

De supresión.

MOTIVACIÓN

Los centros de especialización curricular comportarían procesos educativos distintos y diferenciados a los que la propia legislación establece para el sistema educativo. En la práctica provocaría una discriminación de centros según su especialización curricular.

ENMIENDA NÚM. 268

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 73.1, segundo párrafo

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Estos proyectos tendrán como finalidad profundizar en los ámbitos correspondientes para conseguir la máxima calidad educativa y servir de referencia para promover programas de innovación.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 269

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 73.2

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Las Administraciones educativas podrán prestar especial apoyo, a través de medios y recursos humanos y autorizar las modificaciones horarias, a aquellos centros públicos que, ofreciendo proyectos educativos en las condiciones enunciadas del apartado anterior, resulten seleccionados por el procedimiento que se establezca al efecto.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 270

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 73.3

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Los centros docentes a que se refiere este artículo deberán hacer pública esta información con el fin de orientar a los alumnos y a sus familias.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 271

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 73.4

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 272

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 73.5

De modificación.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Los especiales apoyos y autorizaciones a que se refiere el punto segundo de este artículo podrán ser revocados por la Administración...»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 273

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 73.6

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 274

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al título de la Sección IV del Título V

De modificación.

Sustituir donde dice: «centros docentes públicos», debe decir: «centros sostenidos con fondos públicos».

MOTIVACIÓN

El contenido de algunos artículos es aplicable a todos los centros.

ENMIENDA NÚM. 275

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 74.1

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«En los centros docentes sostenidos con fondos públicos existirán órganos de gobierno y de participación en el control y gestión de los mismos.»

ENMIENDA NÚM. 276

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 75.1

De sustitución.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno y participación:

a) Órganos de gobierno colegiados: El Consejo Escolar de centro, Claustro de profesores y cuantos otros determinen reglamentariamente las Administraciones educativas.
b) Órganos de gobierno unipersonales: Director, Jefe de Estudios, Secretario y cuantos otros determinen reglamentariamente las Administraciones educativas.
c) Órganos de participación: Asociaciones de padres/madres, asociaciones de estudiantes y Junta de delegados y cuantos otros órganos determinen las Administraciones educativas.»

ENMIENDA NÚM. 277

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 75.3

De modificación.

Sustituir «... de participación en el control y gestión del centro...» por «... de gobierno colegiados y órganos de participación...».

ENMIENDA NÚM. 278

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 75.4

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Los órganos de gobierno y de participación colaborarán... (el resto igual).»

ENMIENDA NÚM. 279

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 75

De adición.

Añadir un nuevo punto 6 del siguiente tenor:

«Para los centros docentes concertados se estará a lo dispuesto en la Disposición Final Primera.»

ENMIENDA NÚM. 280

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 76.1

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 281

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 76.2

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Composición del Consejo Escolar del centro:

1. El Consejo Escolar de los centros estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director del centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo Escolar del centro.
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo Escolar del centro.
f) Un representante del personal de administración y servicios en el Consejo Escolar.

En los centros específicos de educación especial, se considerará incluido en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.

g) El Secretario o, en su caso, el Administrador del centro, que actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto.»

ENMIENDA NÚM. 282

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 76

De adición.

Se crea un nuevo punto 3 pre con el siguiente texto:

«La participación de los padres/madres en el Consejo Escolar será considerada como actividad de cumplimiento inexcusable, a efectos de obtención de permiso remunerado en empresas y centros de trabajo en general.»

ENMIENDA NÚM. 283

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 76.3

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Participación de los alumnos en el Consejo Escolar:

1. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar, con las atribuciones establecidas en el

artículo 77 de la presente Ley, a partir del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, los alumnos de este primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria no podrán participar en la elección o el cese del Director.

2. Los alumnos de Educación Primaria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos que se establezcan en los correspondientes reglamentos orgánicos de los centros.»

ENMIENDA NÚM. 284

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 77

De sustitución.

Cambiar el nombre del artículo por el de «Competencias del Consejo Escolar».

ENMIENDA NÚM. 285

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 77

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

Competencias del Consejo Escolar del centro.

1. El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

a. Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro, aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente.

b. Elegir al Director del centro y, en su caso y previo acuerdo de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director así elegido.

c. Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

d. Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.

e. Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, de acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas.

f. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo.

g. Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar su conservación.

h. Aprobar y evaluar la programación general del centro y de las actividades escolares complementarias.

i. Fijar las directrices para la colaboración, con fines culturales y educativos, con otros centros, entidades y organismos.

j. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.

k. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

l. Cualquier otra competencia que le se atribuida por las Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas determinarán la periodicidad de las reuniones del Consejo Escolar, así como su régimen de convocatoria.

3. Las Administraciones educativas podrán establecer, con carácter excepcional, la exigencia de mayoría cualificada en la toma de determinadas decisiones de especial importancia para el funcionamiento del centro y que afecten al conjunto de la comunidad educativa.

ENMIENDA NÚM. 286

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 78.1

De sustitución.

Sustituir el texto por el siguiente:

«El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de éstos en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los aspectos docentes del mismo.»

ENMIENDA NÚM. 287

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 79

De sustitución.

Sustituir el nombre del artículo por el siguiente:

El título del artículo quedaría: «Competencias del Claustro de Profesores».

ENMIENDA NÚM. 288

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 79.b)

De sustitución.

Sustituir por el siguiente texto:

«Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspectos docentes, conforme al proyecto educativo del centro, de la programación general del centro.»

ENMIENDA NÚM. 289

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 79.e)

De supresión.

Suprimir el siguiente inciso: «... y en la Comisión de selección de Director prevista en el artículo 86 de esta Ley».

ENMIENDA NÚM. 290

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 79, apartado i)

De modificación.

Sustituir el apartado 79.i) por:

Conocer las candidaturas a la dirección y los programas presentados por los candidatos.

ENMIENDA NÚM. 291

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 80.1

De sustitución.

Sustituir el texto por el siguiente:

«En los centros docentes existirán los órganos de coordinación del profesorado que establezcan los respectivos reglamentos orgánicos y las administraciones educativas.»

ENMIENDA NÚM. 292

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 80. Apartados 2, 3 y 4

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 293

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 81

De sustitución.

Sustituir el nombre del artículo por el siguiente:

El título del artículo quedaría «Competencias del Director».

ENMIENDA NÚM. 294

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 81

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«El Director tiene atribuidas las siguientes competencias:

a) Ostentar oficialmente la representación del centro.
b) [El texto de la letra a) del proyecto de Ley].
c) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
d) [el texto de la letra c) del proyecto de Ley].
e) f) y g) (El mismo texto que el proyecto de Ley).
h) Favorecer la convivencia en el centro y proponer las medidas disciplinarias... (el resto igual que el proyecto de Ley).
i), j), k), l), m) (El mismo texto del proyecto de Ley).

ENMIENDA NÚM. 295

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 82.1

De adición.

Añadir el término «unipersonales» tras «órganos de gobierno».

ENMIENDA NÚM. 296

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 82.2

De adición.

Añadir el término «unipersonales» tras «órganos de gobierno».

ENMIENDA NÚM. 297

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 84

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 298

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 85

De modificación.

«Procedimiento para la elección del director:

1. El director será elegido por el Consejo Escolar entre los profesores del centro y será nombrado por la Administración Educativa competente para un mandato cuya duración será de tres años.
2. La elección se producirá por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar del centro.
3. Cuando, concurriendo más de un candidato, ninguno de ellos obtuviera la mayoría absoluta se procederá a realizar una segunda votación en la que figurará como candidato únicamente el más votado en la primera. La elección con esta segunda votación requerirá también mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar del centro.
4. El Consejo Escolar del Centro deberá conocer el programa de dirección que debe incluir la propuesta de los órganos unipersonales de gobierno de la candidatura establecidos en esta Ley y los méritos de los candidatos.

ENMIENDA NÚM. 299

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 86

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Requisitos. Serán requisitos para ser director los siguientes:

1. Tener una antigüedad de al menos cinco años en la función pública docente.
2. Tener destino definitivo en el centro, con una antigüedad en el centro de al menos un curso completo.»

ENMIENDA NÚM. 300

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 87

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Nombramiento.

1. La Administración Educativa nombrará director del centro, por un período de tres años, al candidato que haya sido elegido por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar del centro.
2. El director y el equipo directivo deberán realizar una formación específica, antes de su toma de posesión, organizado por las Administraciones Educativas preferentemente en la modalidad de formación en centros.»

ENMIENDA NÚM. 301

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 88

De sustitución.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Los directores podrán optar por continuar desempeñando su mandato en el mismo centro por un máximo de tres períodos consecutivos.»

ENMIENDA NÚM. 302

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 89.1

De supresión.

Se suprime el siguiente inciso:

«... o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante,»

ENMIENDA NÚM. 303

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Artículo 90, apartado 1

De modificación.

Sustituir:

«... desarrollar los proyectos de mejora de la calidad.» por: «... desarrollar los proyectos educativos y la calidad de la educación.»

ENMIENDA NÚM. 304

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 90

De adición.

Añadir in fine:

1. Se asignarán los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto presentado y asumido por la comunidad educativa, garantizando el apoyo por parte de las Administraciones y del Servicio de Inspección.
2. Se dotarán a los centros de todos los niveles educativos del personal técnico necesario para asumir las tareas administrativas y económicas, a fin de que el equipo directivo desarrolle sus funciones propias en el ámbito pedagógico e institucional.
3. Se potenciará la corresponsabilidad y el funcionamiento colectivo como elementos básicos en la acción educativa.

ENMIENDA NÚM. 305

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 91.1 D)

De sustitución.

Sustituir el texto por el siguiente:

«Revocación motivada por la Administración educativa competente por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de Director, previo informe razonado del Consejo Escolar de centro, y audiencia al interesado».

ENMIENDA NÚM. 306

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 91.2

De supresión.

Queda suprimido el apartado.

ENMIENDA NÚM. 307

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 92.3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Las retribuciones complementarias por el ejercicio de la función directiva no tienen por qué extenderse a toda la vida laboral del docente. Sería probablemente una situación que no encontraríamos en ninguna otra actividad tanto pública como privada.

ENMIENDA NÚM. 308

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 93

De modificación.

La redacción de este apartado queda como sigue:

«La evaluación se extenderá a todo el ámbito educativo regulado en esta ley, y se aplicará sobre el conjunto de los indicadores de calidad: el contexto, con atención especial a la escolarización y admisión de alumnos; los recursos educativos; los procesos de aprendizaje de los alumnos, los procesos educativos, los resultados escolares; la actividad del profesorado, los centros docentes, la inspección de educación y la propia Administración educativa.»

ENMIENDA NÚM. 309

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 98

De modificación.

La redacción de este artículo queda como sigue:

«1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará públicas periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema educativo efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo y dará a conocer, anualmente, los resultados de la aplicación del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

2. Asimismo, en colaboración con las CC.AA., hará públicas, anualmente, las tasas de promoción y, en su caso, titulación de Primaria, ESO, FP y Bachillerato. Estas tasas se elaborarán sobre la base, de un lado, de los resultados por curso escolar y de otro, de los resultados individuales, a fin de poder conocer ciertamente el porcentaje de alumnos que abandonan el sistema educativo —en las enseñanzas de régimen general— sin el título de Graduado en Secundaria.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 310

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 99.3

De adición.

La redacción de la última frase de este apartado 99.3 queda como sigue: «... Las Administraciones educativas colaborarán con los centros para resolver los problemas que hubieran sido detectados en la evaluación realizada proporcionando los apoyos necesarios.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 311

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 101

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto: «Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Poderes públicos en materia de educación.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 312

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 102

De modificación.

Sustituir los apartados a), b), c) y f) por el texto siguiente:

«a) Velar porque las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, desarrollen la ordenación de su sistema educativo y los currículos correspondientes a los diferentes niveles y modalidades de enseñanza, atendiendo a los requisitos establecidos por el Estado en base a lo dispuesto por el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.»

ENMIENDA NÚM. 313

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 103

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«Los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a los centros docentes, al profesorado, y al alumnado y sus familias, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación. Asimismo ejercerán labores de supervisión y control de los centros educativos en sus diferentes ámbitos de actuación. Serán funciones específicas de la Inspección educativa:

a) ...»

ENMIENDA NÚM. 314

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Al artículo 103.b)

De modificación.

Sustituir por el siguiente texto:

«b) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.»

ENMIENDA NÚM. 315

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Artículo 104

De sustitución.

Sustituir por el siguiente texto:

«1. Las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, organizarán su Inspección educativa y desarrollarán su organización y funcionamiento.

2. Para el funcionamiento del Servicio de Inspección se podrá contar, además de con los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación, con funcionarios docentes adscritos temporalmente a la función inspectora, que accederán a ella previo concurso de méritos y superación de un curso específico de formación teórico-práctica.»

ENMIENDA NÚM. 316

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición adicional segunda

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 317

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición adicional tercera

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado 5) del siguiente tenor:

«En los centros públicos, los libros de texto y material didáctico de uso individual serán suministrados gratuitamente a todo el alumnado, haciendo de todo aquello que sea posible un uso colectivo a través de la dotación de «Biblioteca y recursos de aula», en cumplimiento, en cuanto a garantizar la gratuidad total de la enseñanza pública, del contenido del artículo 27 de la Constitución. Ello se asegurará desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de los Presupuestos Generales del Estado, en igualdad de condiciones para el alumnado de todas las Comunidades Autónomas.»

ENMIENDA NÚM. 318

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición adicional sexta

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 319

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición adicional séptima

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 320

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición adicional octava.

De supresión.

Punto 1. Suprimir «y la adquisición de la categoría de Director».

Punto 4. Suprimir «y, en su caso, estar en posesión de la categoría de Director».

ENMIENDA NÚM. 321

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición adicional novena

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 322

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición adicional décima

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 323

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición adicional undécima

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 324

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«Disposición adicional decimoquinta. Sistema de acceso a los puestos de trabajo de los centros concertados.

El sistema de acceso a los puestos de trabajo de los centros concertados será equiparable, previo acuerdo con las organizaciones sindicales, al de los centros públicos según las normas que fijen las respectivas Administraciones educativas.»

ENMIENDA NÚM. 325

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición adicional decimosexta con el siguiente texto:

«En el plazo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno encargará al Consejo de Coordinación Universitaria la elaboración de un Informe, según lo previsto en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Universidades, a los efectos de transformar las enseñanzas correspondientes a los diferentes títulos de Maestro en una titulación con nivel de licenciatura.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 326

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Se crea una nueva disposición adicional decimoséptima del siguiente tenor:

«Disposición adicional decimoséptima: Una vez que se haya procedido a la transformación a que se refiere la disposición adicional decimosexta, el Gobierno modificará en el plazo de un año, previa negociación y acuerdo con las organizaciones sindicales del profesorado, el régimen estatutario de la función pública docente, a fin de crear un Cuerpo Único de funcionarios docentes para las enseñanzas de régimen general no universitarias. Asimismo, regulará todas las situaciones de transitoriedad y de Cuerpos a extinguir, respetando, en todo caso, los derechos de acceso a la fun-

ción pública para los titulados con anterioridad a la transformación a que se refiere la disposición adicional decimosexta, y los derechos económicos que vinieran disfrutando los efectivos de los Cuerpos Docentes establecidos en la disposición adicional décima de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.»

MOTIVACIÓN

Crear las bases para una vez que el acceso al profesorado sea con título de licenciado se pueda constituir un Cuerpo Único.

ENMIENDA NÚM. 327

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Se crea una nueva disposición adicional, con el siguiente texto:

«1. Los Poderes públicos, en el marco de la programación general de la enseñanza, dotarán al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en ella previstos.

Al objeto de situar nuestro sistema educativo en el nivel que permita su plena homologación en el contexto europeo, respondiendo a las necesidades derivadas de la movilidad y el libre establecimiento, el gasto público al finalizar el proceso de aplicación de la reforma será equiparable al de los países comunitarios.

2. Los Poderes públicos establecerán las necesidades educativas, especialmente las financieras, derivadas de la aplicación de la reforma, de manera que se dé satisfacción a la demanda social, con la participación de los sectores afectados. Para ello se acompaña este texto de la correspondiente Memoria económica, con desagregación anual de los recursos.

3. Con el fin de asegurar la necesaria calidad de la enseñanza, las Administraciones educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la presente Ley, la consecución de los siguientes objetivos:

a) Un número máximo de alumnos por aula, que en la enseñanza obligatoria será de 20 para la educación primaria y de 25 para la educación secundaria obligatoria.

b) Una oferta de actividades de formación permanente para que todos los profesores puedan aplicar los cambios curriculares y las orientaciones pedagógicas y didácticas derivadas de la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

c) La incorporación a los centros completos de educación obligatoria de, al menos, un profesor de apoyo para atender a los alumnos que presenten problemas de aprendizaje y la creación de servicios para atender dichas necesidades en los centros incompletos.

d) La inclusión en los planes institucionales de formación permanente del profesorado de licencias por estudio u otras actividades para asegurar a todos los profesores a lo largo de su vida profesional la posibilidad de acceder a períodos formativos fuera del centro escolar.

e) La creación de servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros que impartan enseñanzas de régimen general de las reguladas en la presente Ley.

5. El Ministro de Educación, Cultura y Deportes presentará anualmente ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y ante la Comisión de Educación, Universidades, Investigación y Cultura del Senado un informe con el fin de que éstas conozcan, debatan y evalúen el proceso de desarrollo de la reforma educativa, así como la aplicación de los medios humanos y materiales precisos para la consecución de sus objetivos. De este Informe se dará cuenta, anualmente, al Consejo Escolar del Estado.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 328

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«En el plazo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno de cada Comunidad Autónoma presentará un Libro Blanco sobre la situación educativa en su ámbito competencial. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación deberá colaborar con las correspondientes administraciones educativas, a petición de éstas, para la elaboración de los respectivos Libros Blancos.»

ENMIENDA NÚM. 329

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«En cada Comunidad Autónoma, a partir de los datos y análisis de su Libro Blanco y del debate social que en torno al mismo se promueva, el Gobierno respectivo elevará a la Cámara Legislativa de su Comunidad un Proyecto de Ley de Calidad para su ámbito competencial.»

ENMIENDA NÚM. 330

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«La Ley a que se refiere la disposición adicional anterior deberá aprobarse en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Contendrá las actuaciones de calidad previstas, junto con un calendario de aplicación en cuatro años y una memoria económica que detalle el incremento de gasto educativo necesario para cada año de aplicación y la consolidación, en su caso, al final del proceso.»

ENMIENDA NÚM. 331

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«La financiación de las actuaciones contenidas en la Ley de Calidad de cada Comunidad Autónoma será asumida parcialmente desde los Presupuestos Generales del Estado con carácter finalista, en una cantidad comprendida entre uno y dos tercios del total. Para la determinación de la financiación exacta, desde los Presupuestos Generales del Estado, que corresponda a cada Comunidad Autónoma se estará a lo dispuesto en el Convenio que firmará el Gobierno de cada Comunidad con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo estudio en la Conferencia Sectorial de Educación y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, atendiendo con mayor proporción a aquellas Comunidades que presenten mayores déficit educativos en lo que se refiere a factores de calidad y mayores tasas de fracaso escolar.»

ENMIENDA NÚM. 332

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«La financiación acordada en cada Convenio se realizará en cuatro anualidades consecutivas, a partir de la aprobación de las respectivas Leyes de Calidad autonómicas, y quedará consolidada a excepción de las partidas que correspondan a inversión nueva. La cantidad que se destinará a estos fines desde los Presupuestos Generales del Estado supondrá un incremento anual en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cada uno de los cuatro ejercicios previstos, como máximo, de una décima del PIB correspondiente a ese año.»

ENMIENDA NÚM. 333

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluirá en sus Presupuestos las partidas necesarias para

llevar a cabo las actuaciones previstas en la presente Ley en Ceuta y Melilla y en los demás centros educativos que sigan bajo su dependencia administrativa.»

ENMIENDA NÚM. 334

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluirá un apartado específico sobre la aplicación de la presente Ley en el preceptivo informe anual ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y ante la Comisión de Educación, Universidades, Investigación y Cultura del Senado, según establece la disposición adicional tercera, punto cuatro, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo.»

ENMIENDA NÚM. 335

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición transitoria primera.3

De supresión.

Suprimir desde «... como órgano de participación...» hasta el final.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 336

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición transitoria segunda

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 337

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición transitoria tercera

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 338

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición transitoria cuarta

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 339

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición transitoria quinta

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 340

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición transitoria octava.1

De adición.

Añadir tras equivalentes el siguiente inciso: «... en función de las necesidades de escolarización.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 341

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición transitoria octava, puntos 2, 3 y 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 342

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Se añade una nueva disposición transitoria del siguiente tenor:

«El actual profesorado del Cuerpo de Maestros, que estén o pasen a prestar servicio en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dicho ciclo indefinidamente. En el supuesto de que éstos accedieran al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria conforme a lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la LOGSE, podrán permanecer en su mismo centro, siempre que haya vacante en plantilla y en los términos que se establezcan.

Los funcionarios del Cuerpo de Maestros que estén impartiendo el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria podrán continuar trasladándose a las plazas vacantes de los niveles de educación infantil y educación primaria. Para permitir la movilidad de estos profesores en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, así como el ejercicio de la docencia en este ciclo por los actuales maestros, ingresados en virtud del apartado 4.º de la disposición transitoria 4.ª de la LOGSE, se reservará un porcentaje suficiente de las vacantes que se produzcan en este ciclo.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 343

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

De adición.

Añadir una nueva disposición transitoria con el siguiente texto:

Disposición transitoria... De la enseñanza de las religiones de carácter confesional.

«En tanto se mantenga la vigencia del actual Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español, y los suscritos o que puedan suscribirse con otras confesiones religiosas, la enseñanza de la religión en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligada para los centros, tendrá carácter voluntario para los alumnos. Dichas enseñanzas se impartirán fuera del horario escolar asignado para el desarrollo del currículo oficial y, en salvaguarda del artículo 16, punto 2, de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas cursado o no.»

ENMIENDA NÚM. 344

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición final primera.2

Sustituir la composición del Consejo escolar de centros concertados por la redacción siguiente:

1. El Consejo Escolar de los centros concertados estará constituido por:

— El Director.
— Un representante de la entidad titular del centro.
— Un concejal o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
— Un número de profesores, elegidos por el claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
— Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
— Un representante del personal de administración y servicios del centro. En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan aulas especializadas, se considerará incluido en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.
— El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

ENMIENDA NÚM. 345

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición final primera

De adición.

Añadir un nuevo punto 5 del siguiente tenor:

5. Competencias del Consejo Escolar.

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro, aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente.
b) Elegir al Director del centro y, en su caso y previo acuerdo de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director así elegido.
c) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.
e) Contribuir a resolver los conflictos e imponer las sanciones que correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, de acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas.
f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo.
g) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar su conservación.
h) Aprobar y evaluar la programación general del centro y de las actividades escolares complementarias.
i) Fijar las directrices para la colaboración con fines culturales y educativos, con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.
k) Cualquier otra competencia que le sea atribuida en los correspondientes reglamentos orgánicos.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 346

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Modificación de la disposición final segunda.1

Nueva redacción párrafo 7:

«7. El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las Universidades públicas a fin de facilitar la incorporación a los Departamentos universitarios de los profesores de los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo»

ENMIENDA NÚM. 347

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Modificación de la disposición final segunda.3

Suprimir en el entrecomillado «y la correspondiente Prueba General de Bachillerato».

ENMIENDA NÚM. 348

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Supresión de la disposición final tercera

ENMIENDA NÚM. 349

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

A la disposición final cuarta

De supresión.

Suprimir los apartados 1 y 3.

ENMIENDA NÚM. 350

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida

Supresión de la disposición final séptima.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2002.—**Iñaki Anasagasti Olabeaga,** Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

ENMIENDA NÚM. 351

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

A la exposición de motivos

De adición de una nueva frase al párrafo quinto de la exposición de motivos, del siguiente tenor:

«La consecución de una educación de calidad únicamente se logrará respetando los niveles competenciales del Estado y de las CC.AA., y garantizando el carácter pluricultural y plurilingüe del Estado y de sus sistemas educativos. La capacitación plurilingüe de los alumnos se constituye en un factor de calidad fundamental del sistema educativo.»

De supresión de los párrafos referentes a los programas de iniciación profesional y a la prueba general de bachillerato.

JUSTIFICACIÓN

El respeto a la distribución territorial de las competencias, y el marcado carácter pluricultural y plurilingüe del sistema educativo es uno de los objetivos que debe tener esta Ley para garantizar los objetivos esenciales que la misma persigue.

Las supresiones obedecen a las enmiendas que se realizan a los artículos 26 y 36.1, respectivamente, del proyecto de ley orgánica.

ENMIENDA NÚM. 352

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

De adición al artículo 1 de tres nuevos apartados c), d) y e), y de modificación técnica de los actuales apartados c), d), e), f), h), i) y j) del proyecto, que pasan a denominarse f), g), h), i), j), k), l) y m), respectivamente

«Artículo 1. Principios.

Son principios de calidad del sistema educativo:

a) (Igual).
b) (Igual).
c) La capacidad de transmisión de conocimientos de forma rigurosa y académica.
d) La capacitación del alumno en hábitos de estudio personal y de trabajo en equipo.
e) El bilingüismo, la capacitación multilingüe del alumnado.
[Resto igual que los apartados c) y siguientes del proyecto, cambiando la letra].»

JUSTIFICACIÓN

Se persigue dotar al sistema educativo de unos principios que son básicos para alcanzar ese objetivo de calidad que el proyecto de ley proclama, y, entre ellos, el respeto, garantía, protección y fomento del pluralismo lingüístico.

ENMIENDA NÚM. 353

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación al artículo 2

«Artículo 2. Alumnos:

1. Son derechos y deberes del alumnado los que se establecen en este artículo y en el resto de normas vigentes, considerando que:

a) (Igual).
b) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de su Comunidad Autónoma, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en éstos y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados en España.
c) (Igual).

2. (Igual).

a) (Igual).
b) A ser educado en la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
[Resto igual que los apartados b) y siguientes actuales, que ahora pasan a ser los apartados c) y siguientes].»

JUSTIFICACIÓN

En un Estado plurinacional el marco normativo de referencia además de la CE lo constituyen los respectivos Estatutos de Autonomía, por lo que resulta necesario el conocimiento de ambas normas fundamentales.
Por otro lado, el derecho a ser educado en la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma es una medida necesaria para garantizar un bilingüismo efectivo en aquellas CC.AA., como Euskadi, que cuentan con más de una lengua oficial.

ENMIENDA NÚM. 354

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 3

De adición de un nuevo apartado 3.

«Artículo 3. Padres.

1. (Igual).
2. (Igual).
3. A participar en el gobierno y la gestión del centro.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley únicamente reserva a los padres derechos en relación con la educación de sus hijos. Se trata de que gocen también de otros derechos, entre ellos a participar en el gobierno y la gestión del centro, democratizando así el sistema educativo y, en definitiva, la escuela.

ENMIENDA NÚM. 355

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación del apartado 1 del artículo 4 en el siguiente sentido:

«Artículo 4. Becas y ayudas al estudio.

1. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, y sin perjuicio de las competencias de las CC.AA., establecerá (resto igual).
Asimismo, ... (igual).
A estos efectos, el Gobierno determinará con carácter básico las modalidades y cuantías mínimas de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos mínimos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.
2. (Igual).
3. (Igual).
4. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

No resulta discutible que el Estado, desde la competencia reconocida por la CE pueda destinar fondos para becas y otras ayudas al estudio en el ámbito de las CC.AA., pero siempre que dejen a éstas un margen para concretar con mayor detalle su afectación o destino y para desarrollar o complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las mismas y su tra-

mitación, y siempre que se respeten, también las competencias exclusivas de ejecución y gestión que corresponden a las CC.AA.

Sin embargo, la regulación proyectada desconoce el sistema de distribución de competencias constitucionalmente establecido, al concentrar en el Estado todas las facultades decisorias, privando de las mismas a las CC.AA., a las que se les atribuye meras facultades de gestión y pago, lo que supone una injerencia en las competencias de las CC.AA.

Entendemos, además, que lo que en ningún caso puede el Estado es tratar de condicionar las acciones que esta Comunidad Autónoma realiza con fondos propios, olvidando, que en Euskadi, a diferencia del resto de CC.AA., el Departamento de Educación, Universidades e Investigación ha venido regulando sus propias convocatorias anuales de becas y ayudas al estudio, financiadas exclusivamente con cargo a sus presupuestos y con un tratamiento normativo diferenciado del estatal, sin problema alguno, y con cobertura en el Real Decreto de transferencias 1015/1985, de 25 de mayo, según el cual se traspasan a las CAPV, entre otras funciones, «la regulación y gestión de becas para estudiantes de educación superior, con vecindad administrativa en el País Vasco. Dichas convocatorias se realizarán respetándose los criterios básicos que se establezcan para todo el Estado.»

ENMIENDA NÚM. 356

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación

Al artículo 5.

«Artículo 5. Premios y reconocimientos.

Las Administraciones Educativas podrán desarrollar programas destinados a premiar la excelencia y el especial esfuerzo y rendimiento académico de los alumnos, así como el de los profesores y los centros docentes por su labor y por la calidad de los servicios que presten.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto contempla el desarrollo por el Estado de programas destinados a premiar la excelencia y especial esfuerzo y rendimiento académico de los alumnos, así como el de los profesores y los centros docentes por su labor y por la calidad de sus servicios. Aún cuando la norma proyectada señala que dichos programas se realizarán sin perjuicio de las competencias de las CC.AA., entendemos que este tipo de actuaciones, tal y como se proyecta en la Ley, constituyen clara expresión del deseo centralizador y homogeneizador del Estado, que no encuentra acomodo en las competencias que la CE le reserva en materia de educación y función pública docente.

ENMIENDA NÚM. 357

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación del artículo 6

«Artículo 6. Programas de cooperación.

1. (Igual).
2. A tal efecto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Administraciones Educativas autonómicas podrán suscribir los correspondientes convenios, en los que se establecerá la finalidad y objetivos de cada programa, los elementos básicos del procedimiento que ha de seguirse para su desarrollo, y las actuaciones necesarias para asegurar el logro de los correspondientes objetivos.
3. Estos programas serán desarrollados y gestionados por las Administraciones Educativas competentes, de acuerdo con los términos del convenio que, en su caso, y a estos efectos, suscriban.»

JUSTIFICACIÓN

El Estado carece de competencia alguna para imponer a las CC.AA., estos programas, de modo que su participación en los mismos deberá ser voluntaria y pactada, nunca impuesta.

ENMIENDA NÚM. 358

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación del artículo 9, referido a la educación preescolar

«Artículo 9. Ámbito.

1. (Igual).

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la organización de la atención dirigida a los niños de esta etapa educativa y ... (resto igual).
3. (Igual).
4. (Igual).
5. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

La educación preescolar se desgaja del sistema educativo general, y se configura con un carácter educativo y asistencial. Esa doble naturaleza y su condición de etapa no obligatoria, imposibilita al Gobierno del Estado la regulación de la normativa básica, en los términos a que se refiere el proyecto, al entrar en juego otros títulos competenciales, como el de «asistencia social», sobre el que esta Comunidad Autónoma ostenta exclusiva, ex artículo 10.12 del EAPV.

ENMIENDA NÚM. 359

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 17

De modificación.

«Artículo 17. Evaluación general de diagnóstico.

Las Administraciones educativas podrán realizar una evaluación general de diagnóstico, que tendrá como ... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Declara expresamente este artículo, que la evaluación general de diagnóstico, denominada en el anteproyecto prueba general de evaluación, tendrá un carácter informativo y orientador para el centro, el profesorado, la familia y el alumno, pero carecerá de efectos académicos. Siendo ello, así, el Gobierno del Estado no es competente para aprobar la normativa básica para el desarrollo de dicha prueba, tal y como se contempla en el artículo 95 del proyecto, al que se remite este precepto, lo que constituye un exceso respecto de las competencias que confiere al Estado el 149.1.30 CE.

ENMIENDA NÚM. 360

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 20

De modificación.

«Artículo 20. Principios generales.

1. (Igual).
2. No obstante, los ..., puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.»

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda de supresión del artículo 26.

ENMIENDA NÚM. 361

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 24, apartado 3

De adición.

«Artículo 24. Medidas de refuerzo.

1. (Igual).
2. (Igual).
3. En ningún caso, estas medidas de refuerzo podrán consistir en establecer grupos especiales permanentes para el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de asegurar que las medidas de refuerzo educativo no tengan un carácter segregador, y, en consecuencia, discriminatorio para quienes les cueste más llegar a alcanzar los conocimientos básicos de esta etapa educativa.

ENMIENDA NÚM. 362

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De supresión del artículo 26

JUSTIFICACIÓN

Los llamados itinerarios formativos surgen en esta Ley para el alumnado del 2.º ciclo de la ESO, con la finalidad de que los alumnos puedan obtener del sistema educativo el máximo aprovechamiento, según sus intereses y aptitudes. Teniendo en cuenta que estamos ante una etapa educativa obligatoria, y que esa diversidad de oferta de educación flexible lleva a obtener el mismo título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, consideramos que lo más correcto sería incluir en los objetivos y contenidos de la etapa la orientación laboral y profesional, que posibilite a los alumnos que cursen los distintos itinerarios un conocimiento real del mundo laboral, evitando así todo sectarismo, y que los programas de iniciación profesional se conviertan en una vía para apartar a los más «torpes», reduciendo, en la práctica, el límite de la educación obligatoria a los 15 años.

ENMIENDA NÚM. 363

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 28.3

De modificación.

«Artículo 28. Promoción.

1. (Igual).
2. (Igual).
3. Cada curso podrá repetirse sólo una vez. Si tras la repetición, el alumno no cumpliera los requisitos para pasar el curso siguiente, el equipo de evaluación, asesorado por el de orientación, y previa consulta a los padres, podrá decidir su promoción al curso siguiente, en función de las necesidades educativas de los alumnos.
4. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

No se justifica la intervención del Gobierno cuando de lo que se trata es de valorar la situación de cada alumno y decidir su promoción o no. Cuestión distinta es que la ley, y no el Gobierno del Estado tenga que solucionar lo que ocurre cuando el alumno no promociona de curso.

ENMIENDA NÚM. 364

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 29

De modificación.

«Artículo 29. Evaluación general de diagnóstico.

Las Administraciones educativas podrán realizar una evaluación general de diagnóstico (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Su contenido ha quedado recogido en la enmienda al artículo 17, referida a la Educación Primaria.

ENMIENDA NÚM. 365

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 34

De modificación.

«Artículo 34. Organización.

1. (Igual).
2. (Igual).
3. (Igual).
4. El Gobierno, de acuerdo con las CC.AA., podrá establecer nuevas modalidades de Bachillerato o modificar las establecidas en la ley.
5. Las asignaturas comunes del Bachillerato serán las siguientes:

a) (Igual).
b) (Igual).
c) (Igual).
d) (Igual).
e) (Igual).

f) Lengua extranjera.
g) Matemática aplicada.

Asimismo, ... (resto del artículo igual).»

JUSTIFICACIÓN

Entre las asignaturas comunes del Bachillerato no figura ninguna asignatura de ciencias. Dado que se trata de una materia necesaria para el desenvolvimiento en la vida ordinaria, consideramos que, al menos, las matemáticas deben de figurar entre dichas asignaturas comunes.

ENMIENDA NÚM. 366

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 36

De modificación.

«Artículo 36. Título de Bachiller.

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas.
2. (El actual apartado 3).
3. (El actual apartado 4).»

JUSTIFICACIÓN

Una de las novedades de la ley orgánica proyectada es la Prueba General de Bachillerato, necesaria para obtener el título de Bachiller y cursar estudios universitarios y FP de grado superior.

Esta prueba general (la llamada reválida), cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno del Estado, y que incluirá un ejercicio oral de la lengua extranjera, no sustituye, al menos por ahora, a la selectividad, lo que demuestra el desmedido afán evaluador de la reforma educativa proyectada.

Además, el que esta prueba sea externa al centro implica que no valora a la persona en toda su amplitud, evoluación y desarrollo intelectual y afectivo, cuando, precisamente, lo que se trata es de dotar al alumnado de una educación integral. Por todo ello, nuestro grupo propone la supresión de esta prueba.

ENMIENDA NÚM. 367

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 37, apartado 3.c)

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda al artículo 36.

ENMIENDA NÚM. 368

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 39

De modificación.

«Artículo 39. Incorporación al sistema educativo.

1. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, se realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias.
2. La escolarización de estos alumnos se realizará en los grupos ordinarios. Únicamente serán escolarizados en aulas específicas en los supuestos de imposibilidad de atender las necesidades del alumno en el aula ordinaria. Esta situación deberá ser revisada periódicamente al objeto de posibilitar su mayor integración.
3. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás alumnos.
4. (Igual que el actual apartado 5 del proyecto).
5. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para lograr la capacitación lingüística de los alumnos extranjeros en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma en la que resida.
6. Corresponde a las Administraciones educativas promover actuaciones de formación del profesorado para la atención educativa de los mismos.»

JUSTIFICACIÓN

La respuesta «integradora» que se propone para los inmigrantes consiste en separarles en grupos especiales en la Educación Primaria, que ni siquiera tienen que estar en centros ordinarios, y en la Educación Secundaria Obligatoria se les prepara para que se inicien en el mundo laboral, de modo que el alumno extranjero con dificultades (casi todos), no parece ser destinatario del sistema educativo reglado, en cuanto a las etapas obligatorias. En el fondo, la ley lo considera como un obstáculo para conseguir esa óptima calidad del sistema educativo, y por ello se le separa y aparta del mismo, olvidando que el último recurso para el alumno debe ser el tratamiento fuera del aula, que debe ser en todo caso provisional y con objetivos concretos, y, que según proclama la CE, el derecho a la educación en de todos, sin discriminación alguna (art. 27.1); la Educación básica además de gratuita es obligatoria (art. 27.4); y los poderes públicos están obligados a garantizar ese derecho de todos a la educación (art. 27.5).

Si se persigue una ley de calidad, necesariamente debemos de pensar en una educación pluralista, respetuosa con las diferencias y a la vez integradora de las mismas, que asegure el derecho a la educación de todas y todos por igual.

Por otro lado, consideramos que la formación permanente del profesorado es un derecho y una obligación del profesor, y una responsabilidad de las Administraciones educativas. De ahí que en el caso de Euskadi, se ha dotado de unos servicios de apoyo a la Educación, los Berritzegunes, creados mediante Decreto 15/2001, de 6 de febrero, entre cuyas funciones figuran la de diseñar y elaborar planes zonales de formación del profesorado, colaborar en los planes de formaciónde la Comunidad, canalizar las demandas del profesorado en el campo de la formación, impartir la formación al profesorado y gestionar la formación derivada de las demandas de los proyectos de centros.

Entendemos que el Estado podrá destinar recursos para financiar la formación del profesorado, pero es a la Comunidad Autónoma a la que corresponde organizar dichas actividades. Cuestión bien distinta es que para que estos cursos de formación tengan validez en todo el territorio del Estado, a efectos de carrera docente, etc., el Gobierno del Estado fije, de acuerdo con las CC.AA., las condiciones y requisitos básicos de dichos cursos formativos, pero ir más allá sería, en todo caso, una injerencia en las competencias en materia de función pública docente de la CC.AA.

ENMIENDA NÚM. 369

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 40

De modificación.

«Artículo 40. Principios.

1. (Igual).
2. (Igual).
3. (Igual).
4. Las Administraciones Educativas adoptarán las medidas necesarias para facilitar, en la medida de lo posible, la escolarización de estos alumnos en centros ordinarios.
5. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

La Ley presta especial atención a estos alumnos, a los que se flexibilizará la duración de los niveles y etapas, y pretende que se les escolarice en centros especiales, lo que evidencia, una vez más, el carácter segregador de la reforma educativa proyectada.

ENMIENDA NÚM. 370

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 41

De modificación.

«Artículo 41. Ámbito.

1. Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, tendrán una atención especializada.
2. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

La inclusión entre este alumnado de aquellos estudiantes que manifiesten «graves trastornos de la personalidad o de conducta», podría resultar peligrosa si su alcance se ampliase a alumnos con comportamientos simplemente incorrectos.

ENMIENDA NÚM. 371

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 42

De modificación.

«Artículo 42. Valoración de necesidades.

1. Los alumnos con necesidades educativas especiales serán escolarizados en función de sus características, y siempre que sea posible en centros y aulas ordinarias.

La escolarización en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por el aula o centro ordinario.

2. (Igual).
3. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

Dos de los principios básicos del sistema educativo actual (LOGSE), es que se trata de un sistema educativo de normalización y de integración escolar. El sistema que se pretende implantar es, por el contrario, un sistema segregador, volviendo como antaño a la escolarización de estos alumnos en aulas especiales e incluso en centros especiales, en lugar de tratar de integrarlos en aulas ordinarias de centros también ordinarios.

ENMIENDA NÚM. 372

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 43

De modificación.

«Artículo 43. Escolarización.

1. La escolarización... En cualquier caso el límite de edad para poder permanecer escolarizado será de veintiún años.
2. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda al artículo 42.

ENMIENDA NÚM. 373

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 44

De modificación.

«Artículo 44. Recursos de los centros.

1. (Igual).
2. Corresponde a las Administraciones Educativas promover las actuaciones de formación del profesorado... (resto igual).
3. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

Su contenido ha quedado recogido en la enmienda al artículo 39.6 del proyecto de ley orgánica.

ENMIENDA NÚM. 374

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 47.1

De modificación.

«Artículo 47. Escuelas Oficiales de Idiomas.

1. En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, el de las lenguas cooficiales de las respectivas CC.AA., así como la educación del español como lengua extranjera.

(Resto del artículo igual).»

JUSTIFICACIÓN

Más acorde con el pluralismo lingüístico y régimen de cooficialidad.

ENMIENDA NÚM. 375

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 49.7

De modificación.

«Artículo 47. Escuelas Oficiales de Idiomas.

7. Las Administraciones Educativas promoverán programas específicos de lengua y cultura españolas y de lengua y cultura de las respectivas CC.AA., para facilitar la integración de la población inmigrante.»

JUSTIFICACIÓN

Difícilmente se conseguirá esa integración que la ley proclama si se olvida la realidad política, cultural y sociolingüística en la que estos inmigrantes viven.

ENMIENDA NÚM. 376

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 51

De supresión del apartado 4 y cambio correlativo de numeración de los apartados siguientes.

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda al artículo 36.1 del proyecto.

ENMIENDA NÚM. 377

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 56

De modificación.

«Artículo 56. Formación permanente.

1. Corresponde a las Administraciones Educativas organizar periódicamente actividades de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos.
2. (Igual).
3. A los efectos..., previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.
4. (Igual).

a) (Igual).
b) (Igual).
c) Programas específicos..., en los currículos escolares. Las Administraciones educativas podrán ofrecer a los centros y profesores apoyo y asesoramiento.
d) (Igual).
e) (Igual).
f) (Igual).
g) (Igual).

5. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

Más respetuoso con el orden de distribución competencial Estado-CC.AA.

ENMIENDA NÚM. 378

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 58

De modificación.

«Artículo 58. Evaluación voluntaria.

1. (Igual).
2. Las certificaciones..., previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno del Estado establezca, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de que la normativa básica que dicte el Estado se haga con el consenso de las CC.AA., y no sólo previo cumplimiento de un mero trámite formal de consulta.

ENMIENDA NÚM. 379

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 66

De modificación.

«Artículo 66. Admisión de alumnos

1. (Igual.)
2. Los criterios para la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con la regulación de la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: ... y condición legal de familia numerosa.
3. (Igual.)
4. (Igual.)
5. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza, sexo o nacimiento.
6. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 2 del artículo se introduce como órgano competente para aplicar los criterios de admisión al consejo escolar del centro, de conformidad con nuestra enmienda al artículo 77.

En el mismo apartado se suprime como criterio prioritario para la admisión en las educaciones no obligatorias el criterio del expediente académico, toda vez que su utilización puede suponer una forma de discriminación y de potenciación del elitismo fundamentalmente en centros concertados y para la fase del bachillerato y FP de grado medio.

En el apartado 5 se introduce como parámetro de no discriminación las razones en función del sexo, evitando cualquier tentación de separación del alumnado por este motivo.

ENMIENDA NÚM. 380

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 75

De modificación.

«Artículo 75. Tipos de órganos

1. Los centros docentes tendrán los siguientes órganos de gobierno:

a) Colegiados: Consejo escolar, claustro de profesores y cuantos otros determinen las Administraciones educativas.
b) Unipersonales: Director, Jefe de estudios, Secretario y cuantos otros determinen las Administraciones educativas.

2. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

Retomamos la organización fijada por la Ley orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, que formula una propuesta organizativa más participativa y democrática.

ENMIENDA NÚM. 381

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 76.1

De modificación.

«Artículo 76. Consejo Escolar

1. El consejo escolar es el órgano máximo de representación de los miembros de la comunidad escolar en el gobierno del centro.
2. (Igual.)
3. (Igual.)
4. (Igual.)
5. (Igual.)
6. (Igual.)
7. (Igual).»

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con nuestra enmienda al artículo 75, se mantiene la naturaleza de órgano de dirección del consejo escolar del centro, tal y como queda fijado en la Ley Orgánica 9/1995.

ENMIENDA NÚM. 382

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 77.1.c) y e)

De modificación.

«Artículo 77. Atribuciones del Consejo Escolar.

...

c) Aplicar los criterios establecidos para la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

...

e) Resolver los conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones.

(Resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Tal y como hemos propuesto en las enmiendas anteriores, constituyéndose el consejo escolar en órgano de dirección del centro, se reintegran las funciones directivas en relación con los criterios de admisión de alumnos y régimen disciplinario.

ENMIENDA NÚM. 383

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 81.h)

De modificación.

«Artículo 81. Atribuciones del Director.

...

h) Favorecer la convivencia en el centro y resolver los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, de acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas y en cumplimiento de los criterios fijados por el Consejo Escolar del centro.

(Resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda al artículo 77.

ENMIENDA NÚM. 384

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 85

De adición de un nuevo apartado.

«Artículo 85. Requisitos

Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:

a) (Igual).
b) (Igual).
c) (Igual).
d) Acreditar el conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma en la que esté radicado el centro.

JUSTIFICACIÓN

Es una medida necesaria para garantizar la cooficialidad lingüística en la educación.

ENMIENDA NÚM. 385

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 90

De modificación.

«Artículo 90. Apoyo al ejercicio de la función directiva.

1. (Igual).
2. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas organizar cursos de formación de directivos que actualicen sus conocimientos técnicos y profesionales, y que promuevan la calidad de la función directiva, a los que periódicamente deberá acudir el director y el resto del equipo directivo.
3. (Igual que el actual apartado 4 del proyecto de ley orgánica).»

JUSTIFICACIÓN

La contenida en la enmienda al artículo 39.6 del proyecto.

ENMIENDA NÚM. 386

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 95

De modificación.

«Artículo 95. Evaluaciones generales de diagnóstico.

De conformidad con el artículo 17 de la presente Ley las Administraciones educativas podrán elaborar y realizar evaluaciones generales de diagnóstico en el marco de la evaluación general del sistema educativo a la que se refiere el artículo precedente. Asimismo, podrán participar en las evaluaciones internacionales en las que tome parte el Estado español, mediante las actuaciones que sean necesarias en sus respectivos centros.»

JUSTIFICACIÓN

La misma que consta en nuestra enmienda al artículo 17.

ENMIENDA NÚM. 387

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 96

De adición de un nuevo apartado 3.

«Artículo 96. Sistema estatal de indicadores de la educación.

1. (Igual).
2. (Igual).
3. Del mismo modo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aportará a las Administraciones educativas toda aquella información que le sea requerida por éstas para el ejercicio de sus competencias en materia de evaluación educativa.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de articular un sistema de colaboración mutua, y no únicamente unilateral.

ENMIENDA NÚM. 388

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 100

De modificación del apartado 2.

«Artículo 100. Inspección del sistema educativo

1. (Igual).
2. Las Administraciones educativas, en el ejercicio de sus competencias, ejercerán la inspección educativa en su respectivo ámbito territorial. El ejercicio de la función inspectora se realizará... (resto igual).

JUSTIFICACIÓN

La competencia en materia de inspección técnica corresponde a las Comunidades Autónomas. El Estado únicamente se reserva facultades ejecutivas vinculadas a la Alta Inspección.

ENMIENDA NÚM. 389

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 101

De modificación.

«Artículo 101. Ámbito.

Corresponde al Estado la Alta Inspección, con la finalidad de supervisar la actuación autonómica en materia educativa, principalmente respecto al cumplimiento de la normativa básica dictada en desarrollo del artículo 27 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

A través de la competencia sobre Alta Inspección, el Estado puede supervisar la actuación autonómica en materia educativa, pero, en modo alguno, puede arrogarse nuevas competencias, como parece desprenderse del texto de la norma en su redacción actual (garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de educación en las CC.AA.).

ENMIENDA NÚM. 390

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 101

De modificación.

«Artículo 101. Ámbito.

Corresponde al Estado la Alta Inspección, con la finalidad de supervisar la actuación autonómica en materia educativa, principalmente respecto al cumplimiento de la normativa básica dictada en desarrollo del artículo 27 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

A través de la competencia sobre Alta Inspección, el Estado puede supervisar la actuación autonómica en materia educativa, pero, en modo alguno, puede arrogarse nuevas competencias, como parece desprenderse del texto de la norma en su redacción actual (garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de educación en las CC.AA.).

ENMIENDA NÚM. 391

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 102

De modificación de la letra a).

«Artículo 102. Competencias.

En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, corresponde a la Alta Inspección:

a) Comprobar que los currículos se adecuan a las educaciones mínimas (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

La labor de inspección de los libros de texto y resto de material didáctico o curricular para vigilar que se adecuen tanto a las educación mínimas como al resto de educaciones que determinan las Administraciones educativas es una tarea «ordinaria» de la inspección técnica; no se corresponde, por tanto con las finalidades y objetivos de la Alta Inspección. En este sentido el propio proyecto así lo expresa en su disposición adicional tercera cuando específica, en su apartado tercero, que «la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de la inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de los elementos que integran el proceso de educación y aprendizaje».

ENMIENDA NÚM. 392

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 102

De modificación de la letra a).

«Artículo 102. Competencias.

En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, corresponde a la Alta Inspección:

a) Comprobar que los currículos se adecuan a las educaciones mínimas (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

La labor de inspección de los libros de texto y resto de material didáctico o curricular para vigilar que se adecuen tanto a las educación mínimas como al resto de educaciones que determinan las Administraciones educativas es una tarea «ordinaria» de la inspección técnica; no se corresponde, por tanto con las finalidades y objetivos de la Alta Inspección. En este sentido el propio proyecto así lo expresa en su disposición adicional tercera cuando específica, en su apartado tercero, que «la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de la inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de los elementos que integran el proceso de educación y aprendizaje».

ENMIENDA NÚM. 393

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 103

De adición de una nueva letra.

«g) Supervisar los libros de texto y otros materiales curriculares.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con nuestra enmienda al artículo 102 y con el contenido de la DA tercera, apartado 3 del proyecto.

ENMIENDA NÚM. 394

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 103

De adición de una nueva letra.

«g) Supervisar los libros de texto y otros materiales curriculares.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con nuestra enmienda al artículo 102 y con el contenido de la DA tercera, apartado 3 del proyecto.

ENMIENDA NÚM. 395

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 105.3. Formación de los inspectores de educación

De modificación.

«3. A los efectos de los concursos de traslados... de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

JUSTIFICACIÓN

Como ya hemos reiterado en otras enmiendas, es necesario lograr el consenso y no cumplir un mero formalismo de consultas.

ENMIENDA NÚM. 396

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De supresión del apartado 5 de la disposición adicional novena. Creación de los Cuerpos de Catedráticos de EDUCACIÓN Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño

JUSTIFICACIÓN

La CAPV tiene creados Cuerpos propios, como consecuencia de la ordenación de su propia función pública docente no universitaria mediante la Ley 2/1993, de Cuerpos Docentes de la Educación no Universitaria de la CAPV. La previsión que se propone suprimir plantea una intervención del Gobierno estatal como si los Cuerpos, cuyo número de integrantes puede determinar, fueran Cuerpos del Estado, porque a la postre el apartado 5 de la DA novena trata de aprobar o modificar las plantillas de los Cuerpos de funcionarios, cuando, bien al contrario, tales Cuerpos integran la Función pública docente de las CC.AA.

ENMIENDA NÚM. 397

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación del apartado 1, párrafo segundo, de la disposición adicional décima. Requisitos para el acceso e ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Educación Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño

«1. Para el acceso a los Cuerpos... así como superar los correspondientes procesos selectivos.

En las convocatorias correspondientes se valorarán los méritos... Asimismo se realizará una prueba oral ante un tribunal que constará de dos ejercicios: el primero consistirá en la exposición y debate sobre un tema de su especialidad elegido por sorteo, de un temario previamente fijado por la Administración educativa, y el segundo, en la presentación y debate de una memoria elaborada por el consursante.»

JUSTIFICACIÓN

Como ha hemos dicho en nuestra enmienda anterior se trata de cuerpos docentes de las propias CC.AA., por lo que corresponde a éstas fijar los temarios para el acceso a su función pública docente.

ENMIENDA NÚM. 398

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De supresión de la disposición adicional decimotercera

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda al artículo 26 por la que se propone la supresión de los programas de iniciación profesional.

ENMIENDA NÚM. 399

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación del apartado 3 de la disposición transitoria primera

«3. El Consejo Escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos constituido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley continuará su mandato hasta la finalización del mismo.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con nuestra enmienda de modificación del artículo 76 por la que mantenemos el Consejo Escolar como órgano de gobierno del centro.

ENMIENDA NÚM. 400

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación de la disposición transitoria segunda. De la adaptación de los centros que imparten educación infantil

«1. Los centros que a la entrada en vigor de la presente Ley atienden a niños menores de tres años y que no estén autorizados como centros de educación infantil, deberán adaptarse a los requisitos que establezcan las Comunidades Autónomas. En la fijación de tales requisitos se establecerá el plazo de que dispondrán los centros para realizar la correspondiente adaptación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros privados de educación infantil que no tengan autorización, podrán obtener con sujeción a las normas específicas anteriores a esta Ley hasta la aprobación de los requisitos a los que se refiere el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Tal y como proponemos en nuestra enmienda al artículo 9, los centros de educación preescolar, al quedar desgajados del sistema educativo y al primar su carácter asistencial, deberían ser objeto de regulación por las CC.AA.

ENMIENDA NÚM. 401

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación del penúltimo párrafo del apartado segundo de la disposición transitoria octava. Transformación de los conciertos.

«Los conciertos de programas de garantía social se transformarán en conciertos de formación profesional de grado medio.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con nuestra enmienda de supresión del artículo 26.

ENMIENDA NÚM. 402

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De supresión del apartado 3 de la disposición final segunda.

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda de modificación del artículo 36.1 mediante la cual proponemos la supre-

sión de la prueba general de bachillerato, quedando en consecuencia el artículo 41.2 de la LOGSE en los términos actuales.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, a instancia del Diputado don Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya Verds.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2002.—**Joan Saura Laporta,** Diputado.—**Guillerme Vázquez Vázquez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 403

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Añadir, al final de artículo, los siguientes apartados:

«k) La consideración de la educación como una inversión, un servicio público establecido como derecho fundamental que el Estado debe garantizar, dotando a los centros públicos de los recursos humanos y materiales necesarios y estableciendo medidas compensadoras desde el inicio de la escolarización, para convertir en realidad la igualdad de oportunidades.

l) La revalorización social y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y de todos los trabajadores de los centros educativos.

m) El acercamiento de la gestión educativa a los ciudadanos, culminando el proceso de descentralización administrativa y facilitando la presencia de los Ayuntamientos y Administraciones Locales en la gestión y responsabilidades educativas, asegurando mecanismos que garanticen que este proceso de descentralización no sea una fuente de desigualdad.»

ENMIENDA NÚM. 404

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 4 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Al final del apartado 1 se añade el siguiente texto:

«El Gobierno impulsará y extenderá el principio de gratuidad de la enseñanza básica (Primaria y Secundaria Obligatoria), alcanzando a los libros de texto y al material curricular, al ser imprescindibles para el ejercicio del derecho constitucional a la educación.

A cargo de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá, en concepto de libros de texto y material curricular, una cuantía anual por alumno para cada una de las dos etapas educativas (Primaria y Secundaria Obligatoria), así como las partidas presupuestarias suficientes para financiar la dotación correspondiente.»

ENMIENDA NÚM. 405

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 7 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se suprime, en todo el artículo, «la enseñanza preescolar».

ENMIENDA NÚM. 406

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 9 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 407

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A los artículos 10, 11 y 12 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Sustituir el contenido de los artículos por el siguiente:

«Artículo 10. La educación infantil, que comprenderá hasta los seis años de edad, contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños y niñas. Los centros docentes de Educación Infantil cooperarán estrechamente con los padres tutores a fin de tener en cuenta la responsabilidad fundamental de éstos en dicha etapa educativa.

La educación infantil tendrá carácter voluntario. Las Administraciones Públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que la solicite.

Las Administraciones educativas coordinarán la oferta de puestos escolares de Educación Infantil de las distintas Administraciones Públicas asegurando la relación entre los equipos pedagógicos de los centros que imparten distintos ciclos.

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades:

- Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.
- Relacionarse con los demás y aprender las pautas elementales de convivencia.
- Observar y explorar su entorno natural, familiar y social.
- Adquirir progresivamente una autonomía en sus actividades habituales.

La educación infantil comprenderá dos ciclos. El primer ciclo se extenderá hasta los tres años de edad y el segundo desde los tres hasta los seis años de edad.

En el primer ciclo de Educación Infantil se atenderá al desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social y al descubrimiento del entorno inmediato.

En el segundo ciclo se procurará que el niño aprenda a hacer uso del lenguaje, descubra las características físicas y sociales del medio en que vive, elaborando una imagen de sí mismo positiva y equilibrada, y adquiera los hábitos básicos de comportamiento que le permitan una elemental autonomía personal.

Los contenidos educativos se organizarán en áreas que correspondan con ámbitos propios de la experiencia y desarrollos infantiles y se abordarán a través de actitudes globalizadas que tengan interés y significado para el niño. La metodología educativa se basará en las experiencias, las actividades y el juego, en un ambiente de afecto y confianza.

La educación infantil será impartida por maestros con la especialización correspondiente. En el primer ciclo los centros dispondrán asimismo de otros profesionales con la debida cualificación para la atención educativa apropiada a los niños de esta edad.

Las Administraciones educativas desarrollarán la educación infantil.»

ENMIENDA NÚM. 408

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 14 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se elimina, del párrafo primero, el texto «con el fin de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.»

ENMIENDA NÚM. 409

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 14 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Sustituir el contenido del apartado 2.g) por el siguiente:

«Conocer su medio físico, cultural y social, y las posibilidades de acción en el mismo.»

ENMIENDA NÚM. 410

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se elimina, en el apartado 2, «asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, el área de sociedad, cultura y religión.»

ENMIENDA NÚM. 411

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 3, al final, se añade el siguiente texto:

«Además, se establecerán mecanismos de coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria.»

ENMIENDA NÚM. 412

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 16 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

En el apartado 1, después de «continua», se añade la expresión:

«y global.»

ENMIENDA NÚM. 413

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 16 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

En el apartado 4, después de «por los alumnos», se añade la expresión:

«como su progreso.»

ENMIENDA NÚM. 414

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 17 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 415

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 18 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade, después de «maestros», el texto «de Primaria».

ENMIENDA NÚM. 416

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 18 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade un nuevo párrafo, con el contenido siguiente:

«El Departamento de Orientación del Colegio estará dotado de, al menos, un profesional de la especialidad correspondiente.»

ENMIENDA NÚM. 417

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 20 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se elimina, en el apartado 2, desde «, siempre que» hasta el final.

ENMIENDA NÚM. 418

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 21 del proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

En el apartado 2.f), se sustituye el texto «en distintas disciplinas, matemáticas y científicas;» por el siguiente:

«en distintas disciplinas y ciencias, tanto matemáticas como de la naturaleza y sociales;»

ENMIENDA NÚM. 419

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 21 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con el contenido siguiente:

«m) Entender la dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y adquirir una preparación básica en el campo de la tecnología.»

ENMIENDA NÚM. 420

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

El primer apartado se sustituye por el siguiente:

«1. En la Educación Secundaria Obligatoria se impartirán las siguientes áreas:

a) Biología y Geología.
b) Ciencias de la Naturaleza.
c) Educación Física.
d) Educación Plástica y Visual.
e) Ética.
f) Física y Química.
g) CC.SS., Geografía e Historia.
f) Lengua Castellana y Literatura y lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura.
g) Lenguas extranjeras.
h) Matemáticas.
i) Música.
j) Tecnología.
k) Informática.»

ENMIENDA NÚM. 421

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Añadir, al final del apartado 3, el texto siguiente:

«, Latín, Cultura Clásica y una materia de iniciación profesional.»

ENMIENDA NÚM. 422

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 23 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye, en el apartado 2, «asignaturas» por «áreas».

ENMIENDA NÚM. 423

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 24 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade, en el apartado 2, después de «Administraciones educativas», el siguiente texto:

«y el particular del claustro de profesores.»

ENMIENDA NÚM. 424

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 25 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 425

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 26 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se elimina el apartado 3.

ENMIENDA NÚM. 426

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 26 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 6 por el siguiente:

«Las Administraciones públicas promoverán la participación de otras instituciones de carácter público, y preferentemente de la Administración Local, para el desarrollo de estos programas.»

ENMIENDA NÚM. 427

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 27 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

En el apartado 1, se sustituye «y diferenciada según las distintas asignaturas del currículo» por el siguiente texto:

«e integradora.»

ENMIENDA NÚM. 428

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 28 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se eliminan los apartados 2 y 3.

ENMIENDA NÚM. 429

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 30 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 1 por el siguiente:

«Todos los itinerarios formativos conducirán al título de Graduado en Educación Secundaria. Este título será único.»

ENMIENDA NÚM. 430

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 30 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 2 por el siguiente:

«Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria se requerirá haber superado, a juicio de la junta de evaluación, los criterios de promoción y titulación que, vinculados a los objetivos de etapa, se incluyan, a propuesta de claustro, en el proyecto educativo del centro.»

ENMIENDA NÚM. 431

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye, en el apartado 3, el texto:

«b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.», por el siguiente:

«b) Ciencias.
c) Tecnología.
d) Humanidades y Ciencias Sociales.»

ENMIENDA NÚM. 432

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 5, se elimina desde «Asimismo...» hasta el final del párrafo.

ENMIENDA NÚM. 433

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 36 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 1 por el siguiente:

«Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas.»

ENMIENDA NÚM. 434

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 36 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se elimina el apartado 2.

ENMIENDA NÚM. 435

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 36 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se eliminan los apartados 4 y 5.

ENMIENDA NÚM. 436

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 37 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se elimina el apartado 3.c).

ENMIENDA NÚM. 437

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 37 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se crea un nuevo apartado, con el redactado siguiente:

«6. Las enseñanzas de la Formación Profesional Reglada, en sus diversos ciclos y grados, así como la de Inserción, podrán cursarse de forma modular.»

ENMIENDA NÚM. 438

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 38.7 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 439

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 3 por el siguiente:

«Los alumnos mayores de dieciséis años que presenten graves problemas de adaptación a la Educación Secundaria Obligatoria se podrán incorporar a los Programas de Iniciación Profesional establecidos en esta Ley. La identificación de esta situación de «grave problema de adaptación de la ESO» será valorada por el Departamento de Orientación del centro, con el preceptivo informe de la dirección del centro e inspección educativa.»

ENMIENDA NÚM. 440

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 4, se elimina desde «Su incorporación...» hasta el final.

ENMIENDA NÚM. 441

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 41 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade, al final de apartado 1, el siguiente texto:

«La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar.»

ENMIENDA NÚM. 442

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 42 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 1, se elimina desde «integrándolos en grupos» hasta «centros de educación especial o».

ENMIENDA NÚM. 443

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 49 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 1 por el siguiente:

«La educación permanente de personas adultas se inserta en el principio del aprendizaje permanente, que vertebra toda la educación. El aprendizaje permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos para su desarrollo personal y profesional.»

ENMIENDA NÚM. 444

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 49 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Su sustituye el contenido del apartado 3 por el siguiente:

«Dentro del ámbito de las enseñanzas para las personas adultas, las Administraciones públicas atenderán preferentemente a aquellas personas que, por diferentes razones, no hayan podido completar la enseñanza básica, así como a aquellos colectivos con necesidades específicas de compensación. Asimismo, podrán seguir estas enseñanzas aquellos alumnos mayores de dieciocho años que por su trabajo u otras circunstancias especiales no puedan acudir a los centros educativos en régimen ordinario.»

ENMIENDA NÚM. 445

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 49 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade, al final de apartado 5, el siguiente texto:

«Ésta tendrá un carácter supletorio o complementario y nunca sustituirá a la presencial, cuyo acceso se facilitará a todos los ciudadanos.»

ENMIENDA NÚM. 446

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 49 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 6 por el siguiente:

«Las Administraciones educativas promoverán convenios de colaboración con las universidades, entes locales y otras instituciones públicas o entidades públicas, para desarrollar las enseñanzas para las personas adultas.»

ENMIENDA NÚM. 447

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 50 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 2, se elimina desde «y de conformidad ...» hasta el final.

ENMIENDA NÚM. 448

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 50 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 3, se elimina «y de acuerdo con las condiciones básicas que establezca el Gobierno».

ENMIENDA NÚM. 449

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 51 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 4, se elimina «y de acuerdo con las condiciones básicas que establezca el Gobierno».

ENMIENDA NÚM. 450

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 51 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 5, se elimina «y de acuerdo con las condiciones básicas que el Gobierno establezca».

ENMIENDA NÚM. 451

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 51 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se sustituye el contenido del apartado 6 por el siguiente:

«Los mayores de veinticinco años de edad podrán acceder a la universidad por dos vías: mediante la superación de una prueba específica o mediante un procedimiento de acreditación de su experiencia laboral y formación previa, en el marco de lo regulado por la Ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones.»

ENMIENDA NÚM. 452

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 55 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade, en el apartado 3, después de «el Gobierno» el siguiente texto:

«, en coordinación con las Administraciones educativas».

ENMIENDA NÚM. 453

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 55 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Sustituir, en el apartado 3, las expresiones «podrán organizar» y «podrán incorporar» por «organizarán» e «incorporarán».

ENMIENDA NÚM. 454

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 57 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade, en el apartado 2, después de «los centros» el siguiente texto:

«y del profesorado».

ENMIENDA NÚM. 455

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 57 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 3, se elimina desde «dispondrán los procedimientos» hasta «Asimismo,».

ENMIENDA NÚM. 456

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 65 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 457

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 66 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

En el apartado 1, se elimina «y de derecho a la libre elección de centro».

ENMIENDA NÚM. 458

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 66 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

En el apartado 5, se añade, al final:

«o de sexo».

ENMIENDA NÚM. 459

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 67 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

En el apartado 3, después de «número de unidades escolares», se añade el texto siguiente:

«jornada lectiva del alumnado y calendario escolar, plantillas de personal, acceso a los puestos de trabajo».

ENMIENDA NÚM. 460

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 67 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 5 por el siguiente texto:

«Se podrán acoger al régimen de conciertos aquellos centros que impartan sus enseñanzas en los niveles declarados obligatorios y satisfagan necesidades de escolarización, entendiendo por tal tener, al menos, la misma «ratio» alumnado/unidad que la media del conjunto de centros sostenidos con fondos públicos de su misma zona o distrito escolar. Dentro de estos tendrán preferencia aquellos centros que atiendan a poblaciones de condiciones socioeconómicas desfavorables, o que realicen experiencias que las instituciones correspondientes hayan considerado de interés pedagógico para el sistema educativo. Además, tendrán preferencia aquellos centros que en régimen de cooperativa cumplan con las condiciones anteriormente señaladas. En todo caso, se considera que un centro no satisface necesidades de escolarización, cuando por su ubicación se precise el uso del transporte para la mayoría del alumnado que acceda al mismo.

En los niveles no obligatorios de la Enseñanza Secundaria las unidades a concertar en el futuro no podrán ser superiores a las existentes a la entrada en vigor de esta Ley. En la Educación Infantil se podrán concertar las unidades que, cumpliendo los requisitos anteriores, se ubiquen en zonas de atención educativa preferente, o que, sin tener esa declaración concreta, atiendan mayoritariamente poblaciones de condiciones socioeconómicas desfavorables, atiendan alumnado con necesidades educativas especiales o, manifiestamente, vengan a completar una oferta educativa insuficiente en los centros públicos de la misma zona.»

ENMIENDA NÚM. 461

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 68 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido por el siguiente texto:

«1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado y en los de las Comunidades Autónomas con transferencias educativas, no pudiendo en estos últimos ser inferior al que se establezca en los primeros, que tendrán carácter de mínimos de obligado cumplimiento, en ninguna de las cantidades en que se diferencia el citado módulo, a las que se hace referencia en el apartado 4 de este artículo.

2.a) A efectos de la determinación de dicha cuantía global y de su distribución entre los diversos componentes del módulo de los diferentes niveles educativos, se constituirán Mesas de Enseñanza Privada Concertada de ámbito estatal, y de cada una de las Comunidades con transferencias educativas. Dichas Mesas se constituirán también cuando deban adoptarse medidas que afecten a la enseñanza concertada en la correspondiente Comunidad y, en especial, si se dan las circunstancias a las que se refiere el apartado 6.º de este artículo.

b) Dichas Mesas tendrán carácter tripartito y estarán constituidas por la administración educativa correspondiente y las organizaciones patronales y sindicales representativas de la Enseñanza Privada Concertada del ámbito correspondiente.

c) Dichas Mesas tendrán carácter deliberativo y en ellas se analizará la evolución de costes de cada uno de los diversos componentes del módulo, la previsión del IPC y las repercusiones que puedan tener los posibles acuerdos de carácter laboral o suscritos por la correspondiente administración educativa como las diferentes ratios profesorado/unidad aprobadas para cada nivel educativo..., a fin de orientar sobre el valor de cada uno de los distintos componentes del módulo que, para los distintos niveles, propongan las administraciones educativas en sus correspondientes Presupuestos, y a los que se hace referencia en el apartado 3.

3. En los niveles obligatorios los conciertos serán de carácter pleno o total, los que puedan existir en niveles no obligatorios tendrán carácter singular. En los primeros no se podrá recibir de las familias más cantidades que las que las administraciones educativas autoricen expresamente por los servicios complementarios que se ofrezcan y las actividades extraescolares

que se realicen, que siempre tendrá carácter voluntario. La percepción de cualquier otra cantidad será considerada como grave incumplimiento de las obligaciones del concierto educativo. El Concierto singular cubrirá los gastos salariales y cotizaciones por cuota patronal a la seguridad social del personal del centro, y las familias abonarán las cantidades que cada año determine la administración educativa oídas las Mesas a que hace referencia el apartado anterior. En el caso del concierto pleno o total, dentro del módulo correspondiente a cada nivel educativo se diferenciará:

a) Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente a los titulares de los centros.

b) Las cantidades correspondientes a salarios del personal de administración y servicios, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondientes a los titulares de los centros.

c) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las ordinarias de mantenimiento, conservación y las de reposición de inversiones reales de los centros. En ningún caso podrán considerarse intereses de capital propio. Las citadas cantidades, al menos, en los niveles correspondientes a la enseñanza secundaria, se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos del ámbito territorial correspondiente.

d) Una partida de «gastos variables» que será gestionada por la correspondiente Administración educativa, que contemplará todos los componentes salariales de carácter variable o unipersonal, tales como: Complementos derivados del ejercicio de la función directiva y de coordinación pedagógica; complementos de antigüedad; posibles complementos vinculados a la formación y al ejercicio profesional; complementos o pagas de carácter no periódico; sustituciones por bajas laborales; obligaciones derivadas del artículo 87 del vigente Convenio...

e) En las unidades de educación especial, tanto específicas como integradas, se diferenciará una cuarta partida del módulo para la atención del personal especializado en las atenciones complementarias que precise el alumnado en función de su discapacidad, de acuerdo con las «ratios» de personal para cada una de ellas establecidas al respecto.

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente y de administración y servicios, a que hace referencia el apartado anterior y que se consignarán en la partida del módulo que corresponda, harán posible:

a) Su homologación retributiva con el profesorado estatal de los respectivos niveles educativos, que comprenderá dos aspectos: La equiparación salarial en términos anuales con los componentes generales (salario base, antigüedad, complemento de destino y complemento específico generalizado), del mismo nivel educativo, y la analogía de tratamiento con otros complementos específicos que vinculados a la formación, antigüedad... que puedan existir en cada Comunidad.

b) La igualdad salarial entre el personal que trabaja en un mismo nivel educativo.

c) La gradual reducción horaria que permita su equiparación a la existente en el mismo nivel educativo para el profesorado estatal.

d) La valoración de las funciones directiva y de coordinación con criterios similares a los que se determinen para la enseñanza pública en cada Comunidad.

e) La homologación retributiva y de condiciones de trabajo del personal de administración y servicios con los del personal de centros públicos.

5. Los salarios del personal docente, del personal especializado que atiende unidades específicas o integradas de educación especial y del personal de administración y servicios, serán abonados por la Administración como «pago delegado», y en nombre de la entidad titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones.

6. Las administraciones educativas no podrán asumir alteraciones en los salarios del personal de los centros concertados, derivados de convenios colectivos, que superen las previsiones de las partidas del módulo con que deban ser atendidas a que hace referencia el apartado 3. En el caso de que una administración educativa considere que tal situación se da, convocará, con carácter previo a la adopción de cualquier decisión, a las Mesas de Enseñanza Privada a que hace referencia el apartado 2, que tendrán carácter consultivo para estas cuestiones.

7. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos.»

ENMIENDA NÚM. 462

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 73 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 463

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 70 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Eliminar el apartado 5.

ENMIENDA NÚM. 464

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A los artículos 74 y 75 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Sustituir el contenido de los artículos por el siguiente:

«Artículo 74. Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno:

a) Unipersonales: Director, Jefe de Estudios, Secretario y cuantos otros se determinen en los reglamentos orgánicos correspondientes.
b) Colegiados: Consejo Escolar del Centro, Claustro de profesores y cuantos otros se determinen en los reglamentos a que se refiere el párrafo anterior.»

ENMIENDA NÚM. 465

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 76 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Sustituir «o instituciones laborales» por el siguiente texto:

«un representante propuesto por las organizaciones empresariales y un representante propuesto por las organizaciones sindicales representativas.»

ENMIENDA NÚM. 466

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Sustituir el contenido del artículo por el siguiente:

«El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo de centro, aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente.
b) Elegir el Director del centro y previo acuerdo de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director así elegido.
c) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.
e) Contribuir a la resolución de conflictos y ratificar la imposición de sanciones por aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro de acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas.
f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la liquidación del mismo.
g) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar su conservación.
h) Proponer las directrices para la colaboración con fines educativos y culturales con otros centros, entidades y organismos.
i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, el rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualquier otra competencia que le sea atribuida en los correspondientes reglamentos orgánicos.

2. Las Administraciones educativas determinarán la periodicidad de las reuniones del Consejo Escolar, así como su régimen de convocatoria.
3. Las Administraciones educativas podrán establecer, con carácter excepcional, la exigencia de mayoría cualificada en la toma de determinadas decisiones de especial importancia para el funcionamiento del centro y que afecten al conjunto de la comunidad educativa.»

ENMIENDA NÚM. 467

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 79 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado i) por el siguiente:

«Conocer las candidaturas a la dirección y los programas presentados por los candidatos.»

ENMIENDA NÚM. 468

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 86 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el artículo por el siguiente:

«Artículo 86. Procedimiento para la elección del director.

1. El director será elegido por el Consejo Escolar entre los profesores del centro y será nombrado por la Administración educativa competente para un mandato cuya duración será de tres años.
2. La elección se producirá por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar del centro.
3. Cuando, concurriendo más de un candidato, ninguno de ellos obtuviera la mayoría absoluta se procederá a realizar una segunda votación en la que figurará como candidato únicamente el más votado en la primera. La elección con esta segunda votación requerirá también mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar del centro.
4. El Consejo Escolar del centro deberá conocer el programa de dirección que debe incluir la propuesta de los órganos unipersonales de gobierno de la candidatura establecidos en esta Ley.»

ENMIENDA NÚM. 469

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 87 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el artículo por el siguiente:

«Artículo 87. Nombramiento.

1. La Administración educativa nombrará director del centro, por un período de tres años, al candidato que haya sido elegido por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar del centro.
2. El director y el equipo directivo deberán realizar una formación específica, antes de su toma de posesión, organizado por las Administraciones educativas preferentemente en la modalidad de formación en centros.»

ENMIENDA NÚM. 470

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 89 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

Se elimina, en el apartado 1, el texto «o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante.»

ENMIENDA NÚM. 471

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 90 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye, en el apartado 1, «desarrollar los proyectos de mejora de calidad», por:

«desarrollar los proyectos educativos y la calidad de la educación.»

ENMIENDA NÚM. 472

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 90 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Al final del artículo se añade el siguiente texto:

«5. Se asignarán los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto presentado y asumido por la comunidad educativa, garantizando el apoyo por parte de las Administraciones y del Servicio de Inspección.

6. Se dotarán a los centros de todos los niveles educativos del personal técnico necesario para asumir las tareas administrativas y económicas, a fin de que el equipo directivo desarrolle las funciones propias del liderazgo pedagógico e institucional.

7. Se potenciará la corresponsabilidad y el funcionamiento colectivo como elementos básicos en la acción educativa.»

ENMIENDA NÚM. 473

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 93 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del artículo por el siguiente:

«La evaluación se extenderá a todo el ámbito educativo regulado en esta Ley, y se aplicará sobre el conjunto de los indicadores de calidad: el contexto, con atención especial a la escolarización y admisión de alumnos; los recursos educativos; los procesos de aprendizaje de los alumnos; los procesos educativos; los resultados escolares; la actividad del profesorado; los centros docentes; la inspección de educación y la propia Administración educativa.»

ENMIENDA NÚM. 474

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 98 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del artículo por el siguiente:

«1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará públicas periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema educativo efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo y dará a conocer, anualmente, los resultados de la aplicación del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

2. Del mismo, en colaboración con las CC.AA., hará públicas, anualmente, las tasas de promoción y, en su caso, titulación de Primaria, ESO, FP y Bachillerato. Estas tasas se elaborarán sobre la base, de un lado, de los resultados por curso escolar y de otro, de los resultados individuales, a fin de poder conocer ciertamente el porcentaje de alumnos que abandonan el sistema educativo en las enseñanzas de régimen general sin el título de Graduado en Secundaria.»

ENMIENDA NÚM. 475

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 99 del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade, en el apartado 3, entre «Administraciones educativas» y «colaborarán con los centros» el texto:

«apoyarán y».

ENMIENDA NÚM. 476

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional segunda del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 477

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional cuarta del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade un nuevo apartado con el siguiente contenido:

«5. Con el objetivo de desarrollar lo dispuesto en el artículo 4.1 sobre la gratuidad de los libros de texto, las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa recibirán de la Administración Central del Estado, en las transferencias presupuestarias anuales, los créditos suficientes para dotar de libros de texto y material escolar al alumnado de los centros de enseñanza básica de su respectiva Comunidad Autónoma pudiendo complementar, a su cargo, dichos créditos en función de sus características propias.

Las Administraciones Públicas colaborarán en la implantación, gestión y financiación con estricto respeto de sus competencias y en ejercicio de su responsabilidad. Los poderes públicos efectuarán este trabajo, a su vez, con respeto a la autonomía de los centros y a la libertad de cátedra y de edición.»

ENMIENDA NÚM. 478

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional sexta del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye la disposición por la siguiente:

«Disposición adicional sexta. Recursos necesarios para el cumplimiento de la Ley.

1. Los poderes públicos, en el marco de la programación general de la enseñanza, dotarán al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en ella previstos.

Al objeto de situar nuestro sistema educativo en el nivel que permita su plena homologación en el contexto europeo, respondiendo a las necesidades derivadas de la movilidad y el libre establecimiento, el gasto público al finalizar el proceso de aplicación de la reforma será equiparable al de los países comunitarios.

2. Los poderes públicos establecerán las necesidades educativas, especialmente las financieras, derivadas de la aplicación de la reforma, de manera que se dé satisfacción a la demanda social, con la participación de los sectores afectados. Para ello se acompaña este texto de la correspondiente memoria económica, con desagregación anual de los recursos.

3. Con el fin de asegurar la necesaria calidad de la enseñanza, las administraciones educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la presente Ley, la consecución de los siguientes objetivos:

a) Un número máximo de alumnos por aula, que en la enseñanza obligatoria será de 20 para la Educación Primaria y de 25 para la Educación Secundaria Obligatoria.

b) Una oferta de actividades de formación permanente para que todos los profesores puedan aplicar los cambios curriculares y las orientaciones pedagógicas y didácticas derivadas de la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

c) La incorporación a los centros completos de educación obligatoria de, al menos, un profesor de apoyo para atender a los alumnos que presenten problemas de aprendizaje y la creación de servicios para atender dichas necesidades en los centros incompletos.

d) La inclusión en los planes institucionales de formación permanente del profesorado de licencias por estudio u otras actividades para asegurar a todos los profesores a lo largo de su vida profesional la posibilidad de acceder a períodos formativos fuera del centro escolar.

e) La creación de servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros que impartan enseñanzas de régimen general de las reguladas en la presente Ley.

4. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte presentará anualmente ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y ante la Comisión de Educación, Universidades, Investigación y Cultura del Senado un informe con el fin de que éstas conozcan, debatan y evalúen el proceso de desarrollo de la reforma educativa, así como la aplicación de los medios humanos y materiales precisos para la consecución de sus objetivos. De este informe se dará cuenta, anualmente, al Consejo Escolar del Estado.»

ENMIENDA NÚM. 479

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional novena del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 480

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional décima del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 481

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional undécima del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 482

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional decimoquinta. Sistema de acceso a los puestos de trabajo de los centros concertados.

El sistema de acceso a los puestos de trabajo de los centros concertados será similar al de los centros públicos según las normas que fijen las respectivas Administraciones educativas.»

ENMIENDA NÚM. 483

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria tercera del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De supresión.

ENMIENDA NÚM. 484

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria cuarta del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade, al final de la disposición, el siguiente texto:

«4. El actual profesorado del Cuerpo de Maestros, que estén o pasen a prestar servicio en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, podrán continuar en dicho ciclo indefinidamente. En el supuesto de que éstos accedieran al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria conforme a lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la LOGSE, podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se establezcan.

5. Los funcionarios del Cuerpo de Maestros que estén impartiendo el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria podrán continuar trasladándose a las plazas vacantes de los niveles de educación infantil y Educación Primaria. Para permitir la movilidad de estos profesores en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, así como el ejercicio de la docencia en este ciclo por los actuales Maestros, ingresados en virtud del apartado 4.º de la disposición transitoria cuarta de la LOGSE, se reservará un porcentaje suficiente de las vacantes que se produzcan en este ciclo.»

ENMIENDA NÚM. 485

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final primera del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De modificación.

Se sustituye el contenido del apartado 2 por el siguiente:

«El apartado primero del artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, en la redacción dada por el apartado 4 de la disposición final primera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros Docentes, queda redactado de la siguiente manera:

1. El Consejo Escolar de los centros concertados estará constituido por:

— El Director.
— Un representante de la entidad titular del centro.
— Un Concejal o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
— Un número de profesores, elegidos por el claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
— Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
— Un representante del personal de administración y servicios del centro. En los centros específicos de educación especial y en aquéllos que tengan aulas especializadas, se considerará incluido en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.
— El Secretario del centro, que actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto.

Las Administraciones educativas regularán el procedimiento para que uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más representativas en el centro.

Asimismo, los centros concertados que impartan formación profesional específica podrán incorporar a su Consejo Escolar un representante del mundo de la empresa designado por las organizaciones empresariales y otro del mundo sindical designado por las organizaciones más representativas, de acuerdo con el procedimiento que las Administraciones educativas establezcan.»

ENMIENDA NÚM. 486

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final primera del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación

De adición.

Se añade un nuevo apartado 2 bis, con el siguiente contenido:

«Se añade un nuevo apartado en el artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, con el texto siguiente:

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro, aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente.
b) Elegir al Director del centro y, en su caso, y previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director así elegido.
c) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.
e) Contribuir a resolver los conflictos e imponer las sanciones que correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, de acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas.
f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo.
g) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar su conservación.
h) Aprobar y evaluar la programación general del centro y de las actividades escolares complementarias.
i) Fijar las directrices para la colaboración con fines culturales y educativos, con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.
k) Cualquier otra competencia que le sea atribuida en los correspondientes reglamentos orgánicos.»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de calidad de la educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2002.—**Begoña Lasagabaster Olazábal,** Diputada.—**Guillerme Vázquez Vázquez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 487

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1, puntos 1 y 2 (nuevos)

Tipo de enmienda: De modificación de artículo y adición de un nuevo apartado.

Texto que se propone: Se propone modificar el artículo 1 para reordenarlo en dos puntos, de nueva creación, pero que engloban los apartados ya recogidos en ese artículo. El primero de ellos estaría destinado a enumerar las finalidades del sistema educativo (con la incorporación de un nuevo apartado además de los ya existentes). El segundo punto nuevo se referiría a los principios. De modo que la redacción definitiva del artículo 1 se dividiría de la siguiente manera:

«Artículo 1. Finalidades y principios.

1. Son finalidades del sistema educativo:

a) La equidad que garantiza una una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno desarrollo...

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social...

c) La eficacia de los centros escolares mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función directiva de los centros. [letra «j)» del Proyecto de Ley].

d) (Nuevo) El respeto a la diversidad personal, cultural y social del alumnado, la adaptación y atención a las necesidades educativas derivadas de esa diversidad, el rechazo a toda discriminación y la compensación de cualquier forma de desigualdad.

2. Son principios del sistema educativo:»

(El resto de los principios enumerados en el artículo 1 del proyecto).

JUSTIFICACIÓN

Conceptualmente, las finalidades, los objetivos, las metas... —a distintos niveles de concreción— apuntan hacia un punto ideal, se enmarcan en el «para qué» de la acción. Los principios son valores de especial relevancia que, en este caso —el orden educativo—, inspiran o iluminan el ámbito de los fines. «In omnibus, respice finem», pero es precisa una «conditio sine qua non»: «fiat lux».

Por lo que se refiere a la incorporación del nuevo apartado, en un contexto de escolarización universal y obligatoria, conseguir una educación de calidad implica una adecuada atención a la diversidad del alumnado, respetando la idiosincrasia emanante de sus características personales o de su contexto socio-cultural. Tal respeto demanda no sólo la adecuación y atención educativa a las necesidades derivadas de la diversidad, sino una actuación tendente a eliminar las condiciones de discriminación o de desigualdad. Más aún, al sistema educativo le corresponde reducir o barrer las causas de la desigualdad que pueda sufrir el alumno/a por razón de sus condiciones personales, familiares o sociales.

ENMIENDA NÚM. 488

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2, punto 1.a)

Tipo de enmienda: De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el apartado a) del punto 1 del artículo 2.

JUSTIFICACIÓN

La Constitución, en su artículo 149.1.1.ª, establece la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles. Según ha declarado el Tribunal Constitucional a la hora de interpretar el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, el que los españoles tengan «los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio», no quiere decir que no existan diferencias derivadas de la diferente normativización existente en las Comunidades Autónomas, diferente normativización consecuencia de la capacidad normativa propia de algunas Comunidades, entre ellas la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materias como la educación, de su competencia exclusiva.

En consecuencia, y según ha declarado el Tribunal Constitucional, este precepto 149.1.1.ª debe interpretarse en correlación con la diversidad de competencias autonómicas que también deriva de la Constitución, de lo cual se desprende la extralimitación que supone la redacción del artículo 2.1.a), tal y como aparece en el proyecto.

ENMIENDA NÚM. 489

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2, puntos 1.b) y 1.c)

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone modificar los actuales textos correspondientes a los apartados b) y c) del punto 1 del artículo 2 por los siguientes:

«b) Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho a una educación de calidad adaptada a sus capacidades y acorde con sus necesidades educativas, incluidas las asociadas a discapacidades o a una situación social, cultural o lingüística desfavorecida. Asimismo, tienen el derecho y el deber de formarse en los valores y principios democráticos y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos.

c) Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a que sus aprendizajes sean valorados con objetividad y ver reconocido su esfuerzo, así como a recibir orientación educativa y profesional.»

JUSTIFICACIÓN

El principal derecho del alumno/a es el derecho a recibir una educación de calidad, entendiendo por ello aquella enseñanza que es capaz de adaptarse al alumno, a sus capacidades, condiciones personales y familiares y, más explícitamente, a quienes presentan necesidades educativas asociadas a discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, y las asociadas a situaciones de desfavorecimiento social, cultural o lingüístico.

La redacción del apartado c) es inadecuada, lo que ha de valorarse objetivamente son los aprendizajes.

La dedicación y el esfuerzo son interesantes, pero no tanto a efectos de evaluación como a efectos de promover el aprendizaje, autoestima y desarrollo personal.

ENMIENDA NÚM. 490

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2, punto 2.h) (nuevo)

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone añadir un nuevo apartado, «h)», en el punto 2 del artículo 2, con el siguiente texto:

«h) A conocer los objetivos y criterios de evaluación de las enseñanzas que recibe, así como a reclamar las calificaciones, personalmente o a través de sus padres o representantes.»

JUSTIFICACIÓN

Tal como se recoge en el Decreto 160/1994, de 19 de abril, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y aunque se reconoce en el artículo 1.c) del anteproyecto el derecho del alumno a una evaluación objetiva, es importante hacer constar que este derecho está condicionado por un derecho previo, cual es el conocer los objetivos de la enseñanza y los criterios por los que se van a evaluar los aprendizajes, y por un derecho ulterior, cual es el derecho a reclamar las calificaciones que se asignen como consecuencia de la evaluación.

ENMIENDA NÚM. 491

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 3, punto 1.e) (nuevo)

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone añadir un nuevo apartado, «e)», al punto 1 del artículo 3 con el siguiente texto:

e) A participar en la gestión de la actividad educativa del centro, especialmente en la definición de su proyecto educativo, así como a asociarse tanto en defensa de sus intereses colectivos como para la cola-

boración en las actividades educativas o la formación de los padres y madres.

JUSTIFICACIÓN

El derecho de participación es uno de los principios expresamente reconocido y proclamado en el artículo 1, punto c), de la Constitución Española.

Por otro lado, este derecho postula el derecho de asociación, tanto de los padres/madres como de los alumnos/as, de forma que como tales asociaciones puedan participar en instancias o foros superiores (Consejo Escolar, por ejemplo). El citado Decreto 160/1994 así lo recoge en su artículo 17.

ENMIENDA NÚM. 492

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 4

Tipo de enmienda: De supresión.

Texto que se propone: Se propone la supresión de todo el artículo 4.

JUSTIFICACIÓN

De la redacción del artículo cuya supresión solicitamos, se infiere que dicho artículo se fundamenta en el título competencial del artículo 149.1.1.ª, aplicado a la educación, el cual atribuye al Estado la regulación de las «condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles...».

Es evidente que esas «condiciones básicas» son normas relativas al otorgamiento de las subvenciones, pero en el texto del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación no hay ninguna. En realidad, se limita a establecer una «afirmación» o «reserva» de la competencia del Estado sobre la materia, pero sin regulación material alguna, so pretexto de una habilitación al Gobierno.

El Tribunal Constitucional tiene establecido que las bases se establecen mediante norma con rango de ley, sin que quepan remisiones en blanco al Reglamento del Gobierno. No obstante, el artículo 4 supone en la práctica una remisión en blanco al Gobierno Central, pues le viene a decir que lo puede regular todo en el aspecto de las becas y ayudas, sin que el artículo 4 del proyecto establezca ninguna regla material sobre el otorgamiento de las referidas becas y ayudas.

Además, la reserva de toda la regulación en esta materia, que se deduce claramente al remitirse al Gobierno para la «determinación» de todos los aspectos que se señalan en el 4.1, párrafo final, supone eliminar el espacio o campo de regulación autonómica. Ha de recordarse que la regulación por el Estado de las «condiciones básicas que garanticen la igualdad» (149.1.1.ª de la Constitución) no entraña un igualitarismo, sino un «mínimo común denominador» aplicable en todo lugar, pero que permite que una Comunidad Autónoma con competencia pueda aumentar ese mínimo dentro de su ámbito competencial y territorial.

ENMIENDA NÚM. 493

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 7, punto 3

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone añadir una nueva referencia entre las enseñanzas escolares de régimen especial:

«Las enseñanzas escolares de régimen especial son:

Enseñanzas artísticas.
Enseñanzas de idiomas.
Enseñanzas conducentes al título de Técnicos deportivos.»

JUSTIFICACIÓN

Por Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 23 de enero de 1998), las enseñanzas conducentes a la obtención de titulaciones de Técnicos deportivos (Técnico deportivo y Técnico deportivo superior) quedaron subsumidas dentro de las enseñanzas de régimen especial (artículo 1).

ENMIENDA NÚM. 494

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 9, punto 2

Tipo de enmienda: De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 2 del artículo 9.

JUSTIFICACIÓN

El establecimiento de bases ha de realizarse normalmente mediante norma con rango de ley del Estado. Ello no impide que también puedan venir regulados los aspectos básicos mediante Reglamentos del Gobierno, pero siempre que se cumplan dos requisitos inexcusables: en primer lugar, que exista una habilitación de la Ley a la reglamentación por el Gobierno, sin cuya habilitación no es posible que éste entre a regular los aspectos básicos; en segundo lugar, es también requisito imprescindible que se concrete el ámbito específico de regulación por el Gobierno mediante sus Reglamentos, sin que quepan habilitaciones genéricas o indeterminadas, o meramente sustitutorias de la Ley por el Reglamento sin más.

El artículo cuya supresión se pide contiene una remisión en blanco al Gobierno del Estado para una posterior regulación de una materia o normativa que es básica, y supone, en todo caso, un desbordamiento de las atribuciones del Estado mediante la utilización del recurso a una habilitación genérica para un posterior desarrollo reglamentario.

ENMIENDA NÚM. 495

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 11, punto 2.e)

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir el texto del apartado e) del punto 2 del artículo 11 por el siguiente:

«e) Desarrollar la capacidad de expresión, comprensión y comunicación en diferentes lenguajes, especialmente en el lenguaje oral, e iniciar en el lenguaje simbólico —incluida, en los casos en los que se den las condiciones adecuadas—, la lectura y escritura.»

JUSTIFICACIÓN

Una de las metas principales de la Educación Infantil es desarrollar la capacidad de expresión, comprensión y comunicación de los niños/as. El lenguaje oral es el vehículo primero para la expresión y comunicación, trampolín obligado para poder avanzar en otros lenguajes más complejos, pero sin olvidar otros lenguajes naturales de los niños/as de estas edades: El lenguaje plástico, el lenguaje musical, la expresión corporal.

Piaget subrayaba que jugar debería ser la única asignatura del niño a estas edades. El inicio en la lectura y la escritura no es una función propia de esta etapa, si bien tampoco habría que excluirla en aquellos niños que hayan desarrollado suficientemente su capacidad de expresión y comprensión del lenguaje oral. Sin embargo, no es menos cierto que colocar como punto de mira el desarrollo de esta capacidad puede convertirse en un motivo de discriminación.

ENMIENDA NÚM. 496

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 14, puntos 2.a) y 2.b)

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir los textos correspondientes a los puntos 2.a) y 2.b) del artículo 14 por los siguientes:

a) Desarrollar de forma integral la persona, progresar en el conocimiento, estima y control de sí mismos y en la autonomía, mediante el ejercicio responsable de la libertad personal.

b) Aprender a convivir, asumir los valores de una sociedad democrática de respeto a los demás y de aceptación de la pluralidad, adquirir las habilidades sociales y respetar las normas decididas democráticamente, para contribuir a un clima escolar de convivencia.»

JUSTIFICACIÓN

El texto del proyecto no diferencia las capacidades intrapersonales de las capacidades interpersonales o sociales.

En principio, se trata de «aprender a ser», lo cual exige el conocimiento de sí mismo, la autoestima, el autocontrol y la autonomía, como bases sobre las que se asienta el aprendizaje de la convivencia, que no consiste únicamente en el respeto a las normas, sino que requiere además otros aprendizajes, especialmente los relacionados con los valores democráticos, las habilidades sociales para la comunicación y la colaboración. Un adecuado clima escolar es al mismo tiempo la mejor condición y el resultado de este aprendizaje.

ENMIENDA NÚM. 497

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 14, puntos 2.f) y 2.g)

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir los textos correspondientes a los puntos 2.f) y 2.g) del Proyecto de Ley por los siguientes:

«f) Conocer los aspectos fundamentales del medio natural, social y cultural, las relaciones entre ellos y el papel del ser humano en la conservación, mejora y uso del entorno natural, para hacer posible un desarrollo sostenible.

g) Conocer y valorar la diversidad de entornos naturales, de culturas y de lenguas del Estado, la riqueza de esta pluralidad y las posibilidades de mejora y apoyo entre las distintas Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la Educación Primaria no es el conocimiento de los saberes atesorados en libros de Ciencias de la Naturaleza, de Geografía o de Historia, sino acercarse al entorno en que viven y del que forman parte, para conocerlo, respetarlo, amarlo y mejorarlo, comprendiendo por qué es como es, a la luz de las aportaciones de esas ciencias.

Llama la atención la ausencia de cualquier mención a la pluralidad del Estado, como si de un plumazo hubieran desaparecido las Comunidades Autónomas; sin embargo, con ello se está privando a los alumnos/as de la posibilidad de tomar conciencia de la diversidad como una riqueza colectiva, dentro de la que es posible la intercomunicación y ayuda.

ENMIENDA NÚM. 498

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15, punto 2.a)

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir el texto correspondiente al punto 2.a) del artículo 15 por el siguiente:

«a) Conocimiento del medio natural y social.»

JUSTIFICACIÓN

Reafirmamos la razón «ut supra» expuesta.

ENMIENDA NÚM. 499

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15, punto 2 (último párrafo)

Tipo de enmienda: De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el último párrafo del punto 2 del artículo 15 de la siguiente manera:

«Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel, el área de su lengua cooficial.»

JUSTIFICACIÓN

No es suficiente decir «podrán incluir en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial», sino que deberá tener, al igual que la lengua castellana o la lengua extranjera, el rango o categoría de área, si así lo decide la Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 500

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 16, punto 1

Tipo de enmienda: De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el texto correspondiente al punto 1 del artículo 16 de la siguiente manera:

«1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas será individual, continua e integrada.

El tutor, teniendo en cuenta el progreso del alumno en las distintas áreas y el parecer de los maestros especialistas que intervienen en el grupo, valorará el logro de los objetivos generales de la etapa y del ciclo, así como las dificultades que hayan podido encontrar en su proceso de aprendizaje, proponiendo las oportunas medidas de refuerzo.»

JUSTIFICACIÓN

Es obvio que siendo el aprendizaje un proceso individual, la evaluación deberá ser también individual, pero conviene dejar constancia de ello.

Pero además es integrada, es decir, que se debe materializar desde una doble perspectiva: por un lado, los progresos en las distintas áreas y, por otro, el logro, entre todas ellas, de los objetivos generales de la etapa.

En la evaluación se ha de seguir el mismo criterio que el previsto en el artículo 15.4 del proyecto, con ocasión del tema metodológico:

«Los métodos se orientarán a la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos y se adaptará a sus características personales.»

También en la evaluación se ha de tener en cuenta la enseñanza y el aprendizaje con una visión global, no parcial, con unos objetivos que no se ciñen a un área determinada, porque el referente final han de ser los objetivos de la etapa o la concreción de los mismos en el proyecto curricular del centro.

La evaluación tiene como misión no sólo conocer el grado en que se han adquirido los aprendizajes propuestos, sino además detectar las posibles dificultades en los alumnos/as que no hayan conseguido en grado suficiente los objetivos, para adecuar los refuerzos pertinentes.

En Educación Primaria, el maestro tutor del grupo es el responsable del proceso global de aprendizaje del alumno, pero en la medida en que en esta etapa no sólo imparten enseñanzas maestros generalistas, sino también especialistas, es preciso que, en cumplimiento de esta función evaluadora, se tenga en cuenta el parecer de estos profesionales.

ENMIENDA NÚM. 501

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 16, punto 3

Tipo de enmienda: De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el texto correspondiente al punto 3 del artículo 16 de la siguiente manera y añadir un nuevo párrafo al final del punto 3 del artículo 16, con el siguiente texto:

«2. Los alumnos accederán al ciclo siguiente (...).

Esta medida será adoptada por el tutor o tutora del grupo, previa deliberación con el equipo de profesores del grupo y oídos los padres o representantes legales del alumno, siguiendo los criterios generales establecidos en el proyecto curricular.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de definir el sujeto de decisión en la aplicación de la medida de permanencia un año más en el mismo ciclo. Parece conveniente que en esta etapa, sea el tutor/a quien adopte esta decisión, si bien con determinadas cautelas: que se efectúe siguiendo unos criterios previamente establecidos por el claustro de profesores en el proyecto curricular de centro, que se haya deliberado sobre la cuestión con los demás profesionales que impartan enseñanzas al alumno, y una vez oídos los padres o representantes legales del mismo.

ENMIENDA NÚM. 502

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22, punto 1

Tipo de enmienda: De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el punto 1 del artículo 22, procediendo a la siguiente reordenación:

«1. En la Educación Secundaria Obligatoria se impartirán, con carácter común, las siguientes asignaturas:

a) Ciencias de la Naturaleza.
b) Educación Física.
c) Educación Plástica.
d) Ética.
e) Geografía e Historia.
f) Lengua Castellana y Literatura.
g) Lenguas Extranjeras.
h) Matemáticas.
i) Música.
j) Tecnología.

Dentro de los itinerarios, se cursarán, además, las siguientes asignaturas:

a) Biología y Geología.
b) Física y Química.
c) Cultura Clásica.
d) Latín.

Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, la asignatura de sociedad, cultura y religión.

Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel la asignatura de la lengua cooficial y su literatura.»

JUSTIFICACIÓN

En la medida en que se diversifica las enseñanzas —y esto ocurre en los itinerarios de la ESO o en las modalidades de Bachillerato—, se han de diferenciar las asignaturas comunes de las asignaturas que corresponden a los itinerarios.

Abundando en lo afirmado anteriormente, y al igual que sucede en Educación Primaria, no es suficiente decir que «se podrá incluir en el nivel el conocimiento de la lengua cooficial», sino que se le ha de reconocer, si así lo dispone la Comunidad Autónoma afectada, el mismo «status» que al resto, es decir, el «status» de asignatura.

ENMIENDA NÚM. 503

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22, punto 2

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone añadir una nueva frase en el punto 2 del artículo 22, con el siguiente texto:

«2. Todos los alumnos cursarán las asignaturas comunes con el mismo currículo.

Con el fin de garantizar un adecuado aprendizaje en los distintos ámbitos del conocimiento (...).»

JUSTIFICACIÓN

Si el artículo 30.1 del Proyecto de Ley dice que «todos los itinerarios formativos conducirán al título de Graduado en Educación Secundaria. Este título será único y en él constará la nota media de la etapa», se trata de garantizar que el currículum obligatorio sea único o el mismo para todos los alumnos, independientemente del itinerario que elijan.

ENMIENDA NÚM. 504

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22, punto 5 (nuevo)

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone añadir un nuevo punto al artículo 22, con el siguiente texto:

«5. Se podrán agrupar dos o más asignaturas en un mismo ámbito, impartido por un solo profesor o profesora, en el que se abordarán los contenidos curriculares de las asignaturas, tanto en sus aspectos específicos como en sus aspectos interdisciplinares.»

JUSTIFICACIÓN

Uno de los problemas detectados en los años de vida de la ESO es el que afecta a la organización del currículo. Se trata de un todo fragmentado en un notable número de asignaturas, con una enorme diversificación, que fuerza a la utilización de múltiples profesores/as, lo cual se traduce en una gran circulación de docentes por el aula.

Una medida paliativa puede ser la integración, en lo posible, de los aprendizajes de asignaturas afines, y sobre todo, que se reduzca el número de profesores que las impartan, lo cual correlaciona en alto grado, con la definición de especialidades.

ENMIENDA NÚM. 505

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 24, punto 1

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir el texto correspondiente al punto 1 del artículo 24 por el siguiente:

«1. Para los alumnos que presenten carencias en su aprendizaje a lo largo de la etapa, las Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, tanto de carácter general y preventivo como individualizadas, que puedan suponer una modificación de la organización de la etapa o una dotación extraordinaria de recursos. Los alumnos con graves carencias de conocimientos básicos serán atendidos, en todo lo posible, dentro del grupo ordinario, introduciendo mejoras en el mismo, y sólo de forma excepcional y con las limitaciones que se determinen podrán realizar actividades de refuerzo fuera del mismo.»

JUSTIFICACIÓN

Aunque los centros tienen competencias para establecer las medidas de refuerzo que estimen oportunas, precisarán contar con la autorización de la Administración educativa, si esas medidas suponen una modificación de la normativa general —bien en la organización del currículum o en el profesorado— o implican una sobredotación de profesorado. Son, pues, las Administraciones educativas quienes definirán el marco de las medidas de refuerzo viables y las condiciones en que tales medidas sean autorizadas.

El criterio general ha de ser que, en lo posible, las medidas de refuerzo deben ser preventivas más que correctivas, y que se apliquen con prioridad al grupo —para mejorar las condiciones bajo las que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje—, más que a los individuos.

Sólo en casos de alumnos con graves carencias en conocimientos básicos se demandarían medidas excepcionales, entre las cuales se contempla el refuerzo fuera del grupo ordinario, medida que se ha de aplicar con unos límites claros y estricto control de la Administración. Este artículo tiene su «locus» óptimo, a continuación del artículo 27, que trata de la evaluación, ya que una secuencia lógica situaría las medidas de refuerzo como consecuencia de la evaluación, ya sea evaluación inicial o dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

ENMIENDA NÚM. 506

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 25, puntos 1, 2 y 3

De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar los textos de los puntos 1, 2 y 3 del artículo 25, de la siguiente manera:

«1. En el cuarto curso las enseñanzas se organizarán en asignaturas comunes y en asignaturas específicas, que constituirán itinerarios formativos.

2. Se organizarán dos itinerarios: Itinerario Científico-Tecnológico e Itinerario Humanístico-Social.

En la fijación de las enseñanzas mínimas se determinarán las asignaturas específicas de los itinerarios y el horario mínimo de las mismas, así como el de las asignaturas comunes.

3. Al finalizar el tercer curso, con el fin de orientar a las familias (...).»

JUSTIFICACIÓN

Nuestra propuesta es triple:

1. Supresión de itinerarios en el tercer curso de la ESO.

Se trata de tomar decisiones que pueden condicionar la ulterior vida escolar y laboral, a la tierna edad de catorce años. Parece más adecuado posponer la decisión, continuando con un currículum de asignaturas comunes y básicas, aunque se facilite cierta opcionalidad, sin efectos académicos posteriores.

2. Implantación de dos itinerarios que no diferencien una vía hacia el Bachillerato y otra vía hacia los Ciclos Formativos, sino según la modalidad de Bachillerato o Familia profesional a la que se desee acceder posteriormente.

Se trata de que en la ESO adquieran algunos conocimientos que van a necesitar en los estudios posteriores, sean de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Medio. Al mismo tiempo, les servirá como orientación para reconocer si es eso lo que realmente quieren seguir estudiando.

3. Itinerarios más amplios, constituiría la condición inevitable de este planteamiento de modo que alguna asignatura fuera electiva, y se hiciera posible abarcar todo el espectro de saberes de interés para los estudios posteriores, tanto de Bachillerato como de Formación Profesional.

ENMIENDA NÚM. 507

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 25, punto 4

De adición.

Texto que se propone: Se propone añadir un nuevo párrafo al punto 4 del artículo 25, con el siguiente texto:

«4. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios establecidos en la presente Ley. Las Administraciones educativas, de acuerdo con su programación, podrán adecuar este principio a las necesidades generales y de la demanda, atendiendo a las características de los centros. La agrupación del alumnado para cursar asignaturas comunes no estará ligada a la elección de itinerario o de asignaturas optativas por parte del alumnado, sino que se realizará según los criterios educativos y organizativos de la normativa reguladora de la configuración de grupos.»

JUSTIFICACIÓN

La elección de un itinerario o de unas asignaturas optativas por parte del alumnado no debe llevar necesariamente a organizar los grupos didácticos según el criterio de esa elección.

Cada centro, en virtud de su autonomía, establecerá en su Proyecto Curricular los criterios educativos de formación de grupos, supeditados a la normativa de carácter organizativo, que sobre el tema dictan las Direcciones de Centros y Formación Profesional.

Las razones para no vincular elección de itinerario con agrupamiento de alumnado son:

a) De índole educativa: Las experiencias han demostrado que la agrupación del alumno por capacidades no beneficia a nadie y perjudica especialmente a los menos motivados y capacitados.

b) De índole legal: Los centros son autónomos para organizar el alumnado con los recursos asignados.

c) De índole económica: La agrupación del alumnado en itinerarios es altamente costoso, sobre todo en la Comunidad Autónoma, donde el alumnado se distribuye en tres modelos lingüísticos.

ENMIENDA NÚM. 508

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 25, punto 5

De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 5 del artículo 25.

JUSTIFICACIÓN

El artículo contiene una remisión en blanco al Gobierno del Estado para una posterior regulación de una materia o normativa que es básica. En este sentido, el Tribunal Constitucional viene a decir que las bases se establecen mediante normas con rango de Ley, sin que quepan remisiones en blanco a reglamentos posteriores. El texto cuya supresión se solicita supone, en todo caso, un desbordamiento de las atribuciones del Estado mediante la utilización del recurso a una habilitación genérica para un posterior desarrollo reglamentario.

ENMIENDA NÚM. 509

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 26, punto 1

De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 1 del artículo 26.

JUSTIFICACIÓN

Consideramos más apropiado incluir un artículo referido a la iniciación profesional en el Capítulo VI dedicado a la Formación Profesional.

ENMIENDA NÚM. 510

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 27, puntos 1, 2 y 3 (nuevo) y 4 (nuevo)

De modificación y de adición.

Texto que se propone: Se propone modificar los textos correspondientes a los puntos 1 y 2, así como crear dos puntos nuevos. De forma que la redacción definitiva del artículo 27 quedaría de la siguiente manera:

«1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria será individual, continua, diferenciada por asignaturas e integrada.

2. Los profesores de las diferentes asignaturas evaluarán los aprendizajes de cada alumno en su asignatura, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en cada asignatura.

3. El equipo de profesores que impartan sus enseñanzas en un grupo, analizarán las evaluaciones de las diferentes asignaturas, tomando como referencia los objetivos generales de la etapa, y adoptarán la decisión de promoción o de titulación, así como las medidas de refuerzo que consideren oportunas.

4. Los resultados de la evaluación de los alumnos servirán al profesorado para evaluar su propia actividad docente e introducir las modificaciones en la programación o en las actividades didácticas que sean convenientes.»

JUSTIFICACIÓN

La evaluación, si bien en esta etapa ya es diferenciada por asignaturas, también debe ser integrada, puesto que el referente general lo constituyen los objetivos de la etapa, al que contribuyen todas las asignaturas.

La función evaluadora, aunque corresponde a cada profesor o profesora de las materias, también es una función del equipo docente, de todo el equipo docente, sobre todo en la decisión de promoción de curso, de obtención del Título de Graduado o en la necesidad de unas medidas de refuerzo.

Justamente en otros artículos del anteproyecto se hace mención al equipo de evaluación como el encargado de determinar la promoción, elaborar informes de orientación, etc. Ello implica una evaluación integrada, protagonizada por el equipo docente del grupo.

ENMIENDA NÚM. 511

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 28, punto 2

De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir el texto del punto 2 del artículo 28 por el siguiente:

«2. Cuando el número de asignaturas no aprobadas sea superior a dos, el alumno deberá permanecer otro año en el mismo curso. Excepcionalmente, cuando el número de asignaturas no superadas sea de tres, el equipo de evaluación, por una mayoría cualificada, podrá decidir la promoción de un alumno o alumna con las medidas de refuerzo adecuadas.»

JUSTIFICACIÓN

Hay dos aportaciones en esta enmienda: Por un lado, se aboga por la supresión de la mención a una prueba extraordinaria de las asignaturas que no se hayan superado, porque en un proceso de evaluación continua, en la que se ha de valorar principalmente el grado de desarrollo de unas capacidades o de adquisición de unas habilidades y actitudes, no es coherente plantear la evaluación centrada en unas pruebas y menos aún, en unas pruebas extraordinarias para quienes a lo largo del curso han constatado la insuficiencia de una evaluación positiva.

Por otro lado, se abre una vía de excepción en la promoción, aunque se haya obtenido calificación negativa en más de dos asignaturas. Los equipos docentes deberán tener la capacidad de discernir cuándo y en qué condiciones el alumno debe promocionar y no vincular esta decisión a unas calificaciones, de forma inexorable.

Se reconoce que esta decisión en alumnos con tres asignaturas no superadas, debe ser fruto de un acuerdo ampliamente mayoritario del equipo, claramente justificado, y que sólo reductible a quienes han obtenido calificación negativa en un máximo de tres asignaturas.

ENMIENDA NÚM. 512

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 28, puntos 3 y 4

De modificación y de supresión.

Texto que se propone: Se propone modificar la redacción del punto 3 y suprimir el texto del punto 4.

«3. Cada curso podrá repetirse una sola vez. En el caso de que el alumno, tras la repetición, no hubiera alcanzado los aprendizajes necesarios, promocionará al curso siguiente, aplicándole las medidas de refuerzo que proponga el equipo de evaluación, asesorado por el equipo de orientación. Asimismo, en el paso a cuarto curso, orientará al alumno y a sus padres o representantes legales sobre el itinerario que sea más adecuado a sus capacidades e intereses.»

JUSTIFICACIÓN

Es normal que el alumno no pueda repetir curso más de una vez. Pero en la hipótesis de trabajo de un alumno/a que después de repetir curso, hubiera obtenido calificaciones negativas en más de dos asignaturas, no cabría la repetición, sino la promoción al curso siguiente.

El problema real radica, no en la promoción obligada, sino en la disponibilidad del centro de medidas de refuerzo para atender las necesidades de este alumnado, ya sea por incuria del propio centro, ya por inexistencia de cauces para aplicar las medidas precisas.

No parece, además, muy conforme a derecho que el alumno pierda en estos casos su derecho a elegir itinerario o que se vea obligado a cursar un Programa de Iniciación Profesional.

Por otra parte, el punto 4 de este artículo (28), además de inducir un carácter peyorativo a las Enseñanzas de Personas Adultas (EPA), —donde se encauza a aquellos alumnos que, cumplidos los diesiséis años, no han alcanzado los objetivos de la ESO— resulta superfluo, si tenemos en cuenta lo previsto por el artículo 49.3 del anteproyecto que nos ocupa:

«Podrán seguir estas enseñanzas (EPA), aquellos alumnos mayores de dieciséis años que, por su trabajo o por circunstancias especiales no puedan acudir a los centros educativos en régimen ordinario.»

ENMIENDA NÚM. 513

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 30, punto 2

De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 2 del artículo 30.

JUSTIFICACIÓN

El artículo contiene una remisión en blanco al Gobierno del Estado para una posterior regulación de una materia o normativa que es básica. En este sentido, el Tribunal Constitucional viene a decir que las bases se establecen mediante normas con rango de Ley, sin que quepan remisiones en blanco a reglamentos posteriores. El texto cuya supresión se solicita supone, en todo caso, un desbordamiento de las atribuciones del Estado mediante la utilización del recurso a una habilitación genérica para un posterior desarrollo reglamentario.

ENMIENDA NÚM. 514

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 31, punto 3 (nuevo)

De adición.

Texto que se propone: De adición de un nuevo punto con el siguiente texto.

«3. El profesorado estará facultado, a tenor de su especialización o su titulación, para impartir en la Educación Secundaria Obligatoria las asignaturas propias o afines, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno sobre esta cuestión.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 22 (enmienda 15), se propone que en la ESO el profesorado pueda impartir no sólo las asignaturas propias de su especialidad o titulación, sino también materias afines.

Sería el Gobierno quien debería dictar normativa sobre el tema, fijando las habilitaciones automáticas y las habilitaciones a obtener tras un proceso de formación y/o verificación de competencias.

No se nos escapa el argumento en contra, que solapando intereses corporativistas apela al principio de especialización. Sin embargo, con carácter general, se puede afirmar que en esta etapa educativa ninguno de los perfiles extremos de docente (profesor generalista-profesor especialista), supone un encaje ideal, siendo suficiente la formación dentro de un ámbito (científico, lingüístico o social), para impartir sus enseñanzas con garantías de calidad en esta etapa, al tiempo que se consigue al objetivo de reducir el número de profesores que transitan por cada grupo didáctico.

ENMIENDA NÚM. 515

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34, punto 4

De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 4 del artículo 34.

JUSTIFICACIÓN

El artículo contiene una remisión en blanco al Gobierno del Estado para una posterior regulación de una materia o normativa que es básica. En este sentido, el Tribunal Constitucional viene a decir que las bases se establecen mediante normas con rango de Ley, sin que quepan remisiones en blanco a reglamentos posteriores. El texto cuya supresión se solicita supone, en todo caso, un desbordamiento de las atribuciones del Estado mediante la utilización del recurso a una habilitación genérica para un posterior desarrollo reglamentario.

ENMIENDA NÚM. 516

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34, punto 5

Tipo de enmienda: De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el texto del último párrafo del punto 5 del artículo 34 de la siguiente manera:

«5. (...) Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel la asignatura de su lengua cooficial y su literatura.»

JUSTIFICACIÓN

Como en anteriores ocasiones se ha citado, no basta con hablar de «conocimientos de su lengua cooficial», sino que ha de tener, si así lo decide la Comunidad Autónoma correspondiente, la categoría de asignatura, en la que se incluyan los conocimientos lingüísticos y los relativos a su literatura.

ENMIENDA NÚM. 517

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34, punto 6

Tipo de enmienda: De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 6 del artículo 34.

JUSTIFICACIÓN

El artículo contiene una remisión en blanco al Gobierno del Estado para una posterior regulación de una materia o normativa que es básica. En este sentido, el Tribunal Constitucional viene a decir que las bases se establecen mediante normas con rango de Ley, sin que quepan remisiones en blanco a reglamentos posteriores. El texto cuya supresión se solicita supone, en todo caso, un desbordamiento de las atribuciones del Estado mediante la utilización del recurso a una habilitación genérica para un posterior desarrollo reglamentario.

ENMIENDA NÚM. 518

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 36, puntos 1 y 2

Tipo de enmienda: De modificación del punto 1 y supresión del punto 2.

Texto que se propone: Se propone modificar la redacción del punto 1, suprimiendo la frase «y la superación de una prueba general de Bachillerato cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas» y suprimir todo el punto 2.

JUSTIFICACIÓN

La Ley de Ordenación Universitaria ya ha establecido un sistema de selectividad del alumnado para el acceso a la Universidad, por lo que parece redundante que, además se imponga otra prueba como paso previo a la obtención del título de Bachiller.

Por otro lado, el título de Bachiller es pre-requisito para acceder a la Formación Profesional de Grado Superior (artículo 36.2), y al mismo tiempo, los mayores de veinte años (artículo 37.2), y los Técnicos mayores de dieciocho años (artículo 37.4), podrán acceder a la Formación Profesional de Grado Superior mediante una prueba en la que deberán acreditar «la madurez en la relación con los objetivos del Bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate».

O sea, se produce una discriminación, ya que no se exigirán los mismos requisitos a los alumnos, según su procedencia. Por un lado, se dificulta el acceso a la Formación Profesional de Grado Superior por la vía ordinaria, y por otro, se facilita la entrada a quienes accedan mediante una prueba.

Por consiguiente, será más fácil acceder al Grado Superior de Formación Profesional a través de la Formación Profesional de Grado Medio que a través del Bachillerato.

Hasta el momento, la vía ordinaria de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior, había sido el Bachillerato, que proporciona una preparación completa, y sumamente versátil para las diferentes salidas profesionales. Con el sistema que se arbitra, se puede producir, a no dudar, una degradación de las enseñanzas del Grado Superior de la Formación Profesional.

ENMIENDA NÚM. 519

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 37, punto 5

Tipo de enmienda: De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 5 del artículo 37.

JUSTIFICACIÓN

El artículo contiene una remisión en blanco al Gobierno del Estado para una posterior regulación de una materia o normativa que es básica. En este sentido, el Tribunal Constitucional viene a decir que las bases se establecen mediante normas con rango de ley, sin que quepan remisiones en blanco a reglamentos posteriores. El texto cuya supresión se solicita supone, en todo caso, un desbordamiento de las atribuciones del estado mediante la utilización del recurso a una habilitación genérica para un posterior desarrollo reglamentario.

ENMIENDA NÚM. 520

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 37 (bis) (nuevo)

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone crear un nuevo artículo referido a programas de iniciación profesional con el siguiente texto:

«Artículo 37 (bis). Los alumnos mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y no deseen continuar las enseñanzas básicas, podrán acceder a los Programas de Iniciación Profesional, orientados tanto a completar la formación básica como a capacitarles para el ejercicio profesional en el nivel inicial de las competencias específicas.»

JUSTIFICACIÓN

La implantación de los Programas de Iniciación Profesional desde los quince años es, en principio, contrario al derecho y deber de las personas menores de dieciséis años a seguir las enseñanzas básicas.

Recordemos que el artículo 6.2 de la LOGSE prevé que «los alumnos tendrán derecho a permanecer en los centros ordinarios, cursando la enseñanza básica, hasta los dieciocho años de edad».

Tal como el proyecto de Ley presenta estos Programas, se está perfilando un nuevo itinerario, sin nombrarlo, un itinerario para alumnado fracasado o con ausencia de motivación hacia el estudio, y con el único objetivo de facilitarle la salida del sistema educativo.

Es evidente que existe un colectivo de alumnos/as que no desean seguir las enseñanzas básicas, y si esta falta de interés va unida a la convicción de que los estudios no son necesarios para triunfar en la vida, por parte del interesado y a veces, por parte de las propias familias, deberán aplicarse medidas de sensibilización o de apremio para hacer entender a estos ciudadanos que en la sociedad del conocimiento es vital ampliar y profundizar en los estudios.

Bien es verdad que, a partir de los quince años e incluso antes, los intereses de aprendizaje de muchos alumnos van ligados a intereses profesionales, pero este hecho, aunque muy significativo a la hora de prever la metodología a utilizar con esta tipología de alumnado, no es razón suficiente para desviar a unos alumnos de las enseñanzas básicas a las enseñanzas de iniciación profesional.

ENMIENDA NÚM. 521

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39, punto 3

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir la redacción del punto 3 del artículo 39 por el siguiente texto:

«3. Los alumnos se incorporarán al nivel educativo que les corresponda según su edad, o a un nivel inferior en los casos en que se vea necesario. A los alumnos que, por su edad, sus diferencias lingüísticas y culturales y sus graves carencias en conocimientos propios del nivel correspondiente a su edad, presenten unas necesidades educativas específicas importantes, se les podrán aplicar las medidas de refuerzo, incluidas las extraordinarias, en las condiciones y en el marco de lo que se establece en el artículo 24 (según enmienda número 16).»

JUSTIFICACIÓN

Es importante establecer el nivel al que han de incorporarse los alumnos extranjeros que acceden a nuestro sistema educativo, siendo el criterio de edad el que debe prevalecer sobre otros, cifrando el margen de flexibilidad en un año.

Por otro lado, la incorporación tardía de alumnos presenta unos problemas específicos, de modo que los programas que se mencionan en este mismo artículo, deben articularse dentro de los mismos parámetros que el resto de las medidas de refuerzo que se plantean con alumnos con graves carencias en sus conocimientos básicos.

ENMIENDA NÚM. 522

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 42, punto 1

Tipo de enmienda: De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el punto 1 del artículo 42 de la siguiente manera:

«1. Los alumnos con necesidades educativas especiales serán escolarizados, con carácter general, en centros ordinarios dentro de grupos ordinarios. En función de sus características, podrán agruparse en aulas especializadas en centros ordinarios, y en los casos más graves y que requieran unos recursos más específicos, en centros de educación especial. Asimismo, los alumnos con necesidades educativas especiales seguirán el currículo ordinario con las adaptaciones curriculares individuales que sean precisas.»

JUSTIFICACIÓN

En la enmienda se establece una gradación en las formas de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Frente a la simple enumeración de posibles formas de escolarización, se propone como criterio preeminente que la escolarización se lleve a efecto de la forma más normalizada posible.

En el concepto de normalización, ha de incluirse además el ámbito curricular: la referencia ha de ser el currículum ordinario, con las adaptaciones individuales necesarias.

Es esta una estrategia ampliamente asumida por el profesorado, y que debe tener continuidad en el tiempo, más allá de la insuficiente alusión a «planes de actuación en relación con las necesidades educativas específicas de cada alumno».

ENMIENDA NÚM. 523

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 55, punto 3

Tipo de enmienda: De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 3 del artículo 55.

JUSTIFICACIÓN

La habilitación al Gobierno es sumamente amplia y deja en manos del Ejecutivo, casi en su totalidad, no sólo las condiciones de acceso, obtención, expedición y homologación, sino además también los «efectos del correspondiente título». Con ello se deja todo en manos del Gobierno. Dado que en materia de títulos la competencia del Estado es plena, nada que objetar. No obstante, también es cierto que, en la medida de que se

trata de un título que habilita para impartir enseñanzas en el ámbito de la educación, incide de modo directo en la competencia educativa autonómica y, desde esta perspectiva, se trata de una habilitación al Gobierno muy amplia y genérica, remitiéndonos a lo ya expresado en otros supuestos de habilitaciones genéricas o indeterminadas.

ENMIENDA NÚM. 524

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 56, punto 1

Tipo de enmienda: De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 1 del artículo 56.

JUSTIFICACIÓN

Tal y como está redactado, podría entenderse que el Ministerio de Educación es quien va a llevar a cabo la ejecución o aplicación de esos planes de formación permanente del profesorado. Esto entrañaría una clara actividad de ejecución o gestión que corresponde a las administraciones autonómicas con competencia en materia educativa, como es en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ello con independencia de que el plan se refiera a aspectos regulados o de competencia normativa estatal, dado que la CAPV es competente para toda la ejecución o aplicación de legislación, incluso la básica.

ENMIENDA NÚM. 525

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 70, punto 6

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone la sustitución del texto correspondiente al punto 6 del artículo 70 por el siguiente:

«6. Los Claustros de profesores desarrollarán los currículos establecidos por las Administraciones Educativas en el Proyecto Curricular de Centro, teniendo en cuenta el Proyecto Educativo. En el Proyecto Curricular se incluirán y coordinarán las programaciones generales de las áreas, asignaturas o módulos propuestas por los equipos de profesores que tengan encomendadas estas enseñanzas. Además, se recogerán otras decisiones de carácter didáctico general, entre las que, al menos figurarán, los programas y medidas de refuerzo aplicables al alumnado con necesidades educativas específicas o con carencias en el aprendizaje y las bases de los planes de acción tutorial y de orientación escolar y profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Un instrumento mediante el cual los centros ya ejercen su autonomía pedagógica y los profesores coordinan su labor docente es el Proyecto Curricular de Centro, que por obra de este anteproyecto desaparece del mapa de la autonomía pedagógica. Aunque inicialmente su concreción costó un notable esfuerzo, se ha ido afianzando entre el profesorado la cultura de un Proyecto Curricular, cuyas ventajas comienzan a percibirse.

En lugar del Proyecto Curricular, se establecen programaciones didácticas «para cada una de las áreas, asignaturas o módulos que deberán ser elaboradas por los equipos de profesores que tengan encomendadas dichas enseñanzas».

Por tanto, se desplaza la capacidad de decisión en materia curricular, del Claustro de profesores a los equipos, a pesar de que las leyes reconocen la autonomía a los centros y a los profesores, no a los equipos de profesores, que tienen la capacidad de propuesta.

El Proyecto Curricular debe, además, abarcar otras tareas básicas con criterios adoptados por todo el Claustro: programas de refuerzo, bases de los planes de acción tutorial y de orientación, y en nuestra CAPV, el planteamiento lingüístico.

ENMIENDA NÚM. 526

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 70, punto 7

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir el texto correspondiente al punto 7 del artículo 70 por el siguiente:

«7. Cada profesor/a, en virtud de su autonomía docente, decidirá la programación didáctica que dirija su actuación docente en el aula. Los centros favorecerán que los profesores que impartan la misma área, asignatura o módulo o quienes imparten sus enseñanzas en un mismo grupo, ciclo o curso, coordinen sus programaciones, estableciendo los cauces adecuados para dicha coordinación docente.

En la determinación de las programaciones didácticas se deberán tener en cuenta lo acordado en el Proyecto Curricular de Centro y las características y necesidades del alumnado al que dirige sus enseñanzas. El Claustro podrá analizar las programaciones a la luz del Proyecto Curricular. En caso de graves discrepancias, corresponde a la dirección buscar el acuerdo, o, si éste no fuera posible, decidir cual debe prevalecer.»

JUSTIFICACIÓN

La programación didáctica es el instrumento de planificación de cada profesor/a, en virtud de la autonomía que le reconoce la Constitución (libertad de cátedra). Se trata de un instrumento asociado a la práctica aular, siendo deseable establecer los cauces propicios para la coordinación docente y el trabajo en equipo.

Por otra parte, la programación didáctica, aunque responda a la autonomía de cada profesor, está vinculada a un Proyecto Educativo de Centro, y el Claustro, como responsable del Proyecto Curricular, ha de tener la competencia para analizar si una programación responde o no a lo acordado en el Proyecto Educativo común; y en caso de conflicto, la dirección deberá buscar el acuerdo o dirimir sobre la prevalencia de las partes.

ENMIENDA NÚM. 527

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 70, punto 9 (nuevo)

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone crear un nuevo punto en el artículo 70, «9», con el siguiente texto:

«9. En el Proyecto Curricular de Centro y en las programaciones didácticas se integrarán los aprendizajes necesarios para la educación en valores democráticos y la formación de actitudes cívicas, conforme a una planificación sistemática y progresiva de carácter interdisciplinar.»

JUSTIFICACIÓN

Mientras el artículo 1, que versa sobre los principios de calidad, proclama (apartado b) como uno de los ejes referentes de la actuación educativa, «la capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, y la cohesión y mejora de las sociedades...», no se ponen las condiciones que posibiliten la realidad de tal principio, ya que la ausencia de toda mención en el ámbito curricular a la educación en valores y a la formación de actitudes cívicas es clamorosa.

Da la impresión de que la educación en estos campos se logra por el ejercicio responsable de la libertad y el respeto, tolerancia y solidaridad con los otros, sin necesidad de asentar esa práctica sobre una base de conocimientos, de una capacidad crítica y ética, unas habilidades sociales y unos procedimientos, que nos ofrecen las ciencias, pero que se han de orientar expresamente hacia esos fines.

Por todo ello, vemos la necesidad de que estos ideales educativos sean objeto de una planificación específica, en el que se sistematicen los aprendizajes a alcanzar con un carácter progresivo e interdisciplinar.

ENMIENDA NÚM. 528

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 74, puntos 2 y 3

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir la redacción de los puntos 2 y 3 del artículo 74 por los siguientes textos:

«2. Corresponde a los órganos de participación, de acuerdo con sus respectivas competencias, la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento, la evaluación del funcionamiento del centro y del cumplimiento de los objetivos propuestos, el análisis de los resultados de las evaluaciones y de las pruebas externas y el control en el uso de los recursos humanos, económicos y materiales del centro.

3. Corresponde a los órganos de dirección, tras la propuesta y aprobación por los órganos de participación, la ejecución de los Proyectos Educativos y Curricular,

del Reglamento de Organización y Funcionamiento, y de la programación anual, la coordinación general de las actividades del centro y la organización de los recursos funcionales y la organización y gestión de los recursos.»

JUSTIFICACIÓN

Es cierto que en la normativa actual existe cierta confusión entre las competencias de unos y otros órganos, y que habría que deslindar funciones.

A los órganos de participación habrá de reconocérseles competencias en la aprobación de los objetivos, directrices, programas generales, y normas y criterios por los que se organiza el centro, diferenciando entre el tipo de órgano y ámbito de decisión.

Además han de tener competencias en el control y evaluación del funcionamiento, del logro de los objetivos de los proyectos y programas, de los aprendizajes y del uso de los recursos.

No han de tener funciones ejecutivas, como se les reconoce actualmente en algunos ámbitos: aprobación de proyectos de formación y de innovación, decisión de sanciones en casos de faltas graves de indisciplina, admisión de alumnos, etc. Todas estas funciones son competencia de los órganos de dirección que han de tener capacidad plena para la ejecución de los proyectos y programa aprobados, siendo el control y evaluación posterior un acto independiente de la propia ejecución.

ENMIENDA NÚM. 529

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 75

Tipo de enmienda: De sustitución del punto 1 y modificación del punto 3.

Texto que se propone: Se propone sustituir el punto 1 del artículo 75 por otra redacción y modificar el texto correspondiente al punto 3 suprimiendo de él la expresión «en el control y gestión del centro». Por tanto, los textos definitivos quedan de la siguiente manera:

«1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno:

a) Órganos de participación: Consejo Escolar, Claustro de Profesores y cuantos otros determinen las Administraciones Educativas.

b) Órganos de dirección: Director, Jefe de Estudios y cuantos otros determinen las Administraciones Educativas.»

«3. Los órganos de participación evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de éste y analizarán los resultados de las pruebas externas que se realicen en el mismo.»

JUSTIFICACIÓN

Se trasluce en todo el capítulo relativo a la participación una reducción en la misma, cuando en el gobierno de los Centros sostenidos con fondos públicos deben participar todos los colectivos implicados en la comunidad escolar, y tal como corresponde a una institución que presta un servicio público.

Ése es el sentido que la Constitución, y si ello no es así, se está vaciando de competencias a ciertos órganos, que de ser órganos de deliberación pasan a convertirse en órganos de consulta o propuesta.

ENMIENDA NÚM. 530

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 76, punto 2.h) (nuevo)

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone añadir un nuevo apartado al punto 2, «h)», con el siguiente texto:

«h) En los Centros concertados, tres representantes del titular del Centro.»

JUSTIFICACIÓN

Parece saludable que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan un Consejo Escolar con una composición similar, extendiéndose a esta tipología de centros, la flexibilidad que se da a los órganos máximos de representación de los centros públicos en cuanto al número de representantes. Por otro lado, parece necesario que en el Consejo Escolar de los centros concertados esté presente una representación del titular.

ENMIENDA NÚM. 531

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77, punto 1, apartados a), b) y j)

Tipo de enmienda: De sustitución de los apartados a) y b) y supresión del apartado j).

Texto que se propone: Se propone sustituir los apartados a) y b) por la siguiente redacción y suprimir el apartado j):

«a) Aprobar el Proyecto Educativo del Centro, revisar el Proyecto Curricular para analizar su coherencia con el Proyecto Educativo y formular propuestas para el Programa Anual de Centro.
b) Elegir al director del centro.»

JUSTIFICACIÓN

Se entiende que estas funciones corresponden al órgano de gobierno en el que están representados todos los colectivos de la comunidad educativa.
El cambio de lo que se propone en el párrafo j) del anteproyecto por la función b) de la enmienda se deriva del modelo de elección de director que proponemos.

ENMIENDA NÚM. 532

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 87, punto 3

Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: Se propone añadir un texto al punto 3 del artículo 87:

«3. Los directores así nombrados serán evaluados por la Administración educativa de las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de educación o, en su defecto, por la Administración educativa estatal, a lo largo de los tres años. Los que obtuvieren evaluación positiva, adquirirán la categoría de Director para los centros públicos de nivel educativo y régimen de que se trate. Dicha categoría surtirá efectos en el ámbito de todas las Administraciones educativas.»

JUSTIFICACIÓN

El texto, tal y como está en su redacción originaria, es oscuro y plantea interrogantes sobre la voluntad real del autor. No obstante, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de educación corresponde, en su ámbito territorial, a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y por tanto, es la CAPV la que tiene que realizar la evaluación y determinar el modo de su realización.

ENMIENDA NÚM. 533

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional segunda

Tipo de enmienda: De sustitución.

Texto que se propone: Se propone sustituir todo el texto de la Disposición Adicional Segunda por esta nueva redacción:

«Disposición Adicional Segunda. Del área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.

1. En cumplimiento del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español y, en su caso, con otros suscritos, o que hubieran de suscribirse con otras confesiones religiosas, se incluirá la enseñanza de la Religión.
2. Los centros impartirán las enseñanzas de una confesión religiosa, siempre que las soliciten un número de padres o representantes legales de alumnos del centro, en las condiciones que establezcan las Administraciones educativas. Las enseñanzas de Religión serán opcionales, y se impartirán fuera del horario lectivo ordinario.
3. El profesorado que no pertenezca a los Cuerpos de Funcionarios Docentes que imparta enseñanzas religiosas en los centros públicos, y lo hará en régimen de contratación laboral, en las mismas condiciones y con los mismos derechos que los profesores interinos del respectivo nivel educativo.»

JUSTIFICACIÓN

Las Sentencias del Tribunal Supremo determinaron que el derecho a recibir enseñanzas de Religión por parte de los alumnos que así los solicitaran, no implicaba un deber para el resto del alumnado.

Por consiguiente, las actividades alternativas en el tiempo lectivo destinado a las enseñanzas de Religión no pueden constituir un área o asignatura obligatoria.

La oferta de enseñanzas religiosas en cualquiera de las confesiones, implicará la obligación de impartirlas cuando haya un número de padres que lo soliciten, según establezcan las Administraciones educativas.

Los contenidos curriculares de un área o asignatura denominada «Sociedad, Cultura y Religión» deben formar parte del currículum obligatorio común. Es contradictorio afirmar que se trata de una asignatura con dos opciones, cuando las opciones confesionales quedan en manos de la autoridades religiosas, sin requisitos ni control por parte de las Administraciones educativas.

ENMIENDA NÚM. 534

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional tercera, punto 1

Tipo de enmienda: De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el texto del punto 1 de la Disposición adicional tercera de la siguiente forma:

«1. Corresponde a la autonomía pedagógica de los centros educativos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. Los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos elegirán los libros de texto y demás materiales curriculares, cuya edición y adopción requerirán la previa autorización de la Administración educativa. Las Administraciones educativas determinarán la intervención que, en el proceso interno de adopción de los libros y demás materiales curriculares, corresponde a otros órganos del centro.»

JUSTIFICACIÓN

Con esta Disposición Adicional se sustrae a la Comunidad Autónoma del País Vasco un servicio transferido por Real Decreto 3195/1980, de 30 de diciembre, cual es, «la aprobación de los libros de texto y demás material didáctico en que se concreten los planes, programas de estudio y orientaciones pedagógicas a que se refiere el apartado anterior, y que hayan de ser utilizados en el País Vasco.»

El artículo anterior cita las diferentes enseñanzas y niveles que constituyen el sistema educativo.

Por otro lado, el artículo 102, relativo a la Alta Inspección, le atribuye «comprobar que los currículos así como los libros de texto y demás material didáctico se adecuan a las enseñanzas mínimas».

Por consiguiente, de forma solapada, se despoja a la comunidad de la facultad de visar los libros de texto y material didáctico, que pasa a manos de la Alta Inspección.

ENMIENDA NÚM. 535

PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional cuarta, punto 2

Tipo de enmienda: De supresión.

Texto que se propone: Se propone suprimir el punto 2 de la disposición adicional cuarta.

JUSTIFICACIÓN

La fijación de unas fechas límite totalmente cerradas puede dar lugar a disfunciones en la organización de los diferentes cursos académicos y en la impartición de las enseñanzas, aspectos estos que exceden claramente de lo que debe considerarse como una regulación básica, y pertenecen más bien a un ámbito estrictamente ejecutivo o aplicativo.

A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2002.—**Francisco Rodríguez Sánchez,** Diputado.—**Guillerme Vázquez Vázquez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 536

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al Título de la Ley

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye el Título de la Ley por el siguiente:

«Ley Orgánica del sistema educativo.»

ENMIENDA NÚM. 537

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al Título del Capítulo I

De modificación.

Texto que se propone:

El Título del Capítulo I del Título Preliminar se sustituye por el siguiente:

«De los principios del sistema educativo.»

ENMIENDA NÚM. 538

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1

De supresión.

Texto que se propone:

En la primera línea del artículo 1, se suprime la expresión «de calidad».

ENMIENDA NÚM. 539

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1

De adición.

Texto que se propone:

Se añaden los siguientes apartados al artículo 1:

«k) La formación en el respeto y la promoción de la pluralidad lingüística y cultural del Estado español.

l) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

m) El impulso en el conocimiento y valoración positiva de la realidad inmediata, especialmente en el ámbito lingüístico y cultural.

n) Promover una formación orientada a la eliminación de la discriminación por razón de ideología, sexo o nacionalidad.

o) La formación para la paz, la cooperación, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos.

p) El fomento de la reflexión crítica y la creatividad.»

ENMIENDA NÚM. 540

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 2.1.b)

De modificación.

Texto que se propone:

La letra b) del apartado 1 del artículo 2 queda redactada como sigue:

«b) Todos los alumnos tienen el derecho de formarse en los valores y principios que se desprenden de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado español.»

ENMIENDA NÚM. 541

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 2.1.c)

De modificación.

Texto que se propone:

En la letra c) del apartado 1 del artículo 2 se sustituye la expresión «su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad» por «su rendimiento escolar sea valorado y reconocido con objetividad».

ENMIENDA NÚM. 542

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 2.3.c)

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime la letra c) del apartado 3 del artículo 2.

ENMIENDA NÚM. 543

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 2.3.d)

De supresión.

Texto que se propone:

En la letra d) del apartado 3 del artículo 2 se suprime el inciso final:

«..., respetando el derecho de sus compañeros a la educación.»

ENMIENDA NÚM. 544

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 3.1.c))

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime la letra c) del apartado 3 del artículo 3.

ENMIENDA NÚM. 545

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 4.1

De modificación.

Texto que se propone:

El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:

«A estos efectos, los Presupuestos Generales del Estado incluirán cada año las cantidades necesarias para que la dotación y número de estas ayudas tienda a garantizar la convergencia y equiparación con los estándares europeos y contemplarán las transferencias necesarias a las Comunidades Autónomas para que desarrollen y ejecuten el sistema de becas y ayudas al estudio, dictando la normativa de aplicación para su concesión en atención a criterios económicos y académicos de los estudiantes.»

ENMIENDA NÚM. 546

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 6.1

De modificación.

Texto que se propone:

En el apartado 1 del artículo 6, se sustituye el inciso final, desde «favorecer el conocimiento y aprecio...» por el siguiente texto:

«... favorecer el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural del Estado español por parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial y a fomentar el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado español.»

ENMIENDA NÚM. 547

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 7.2

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye la expresión «educativo-asistencial» por «educativo».

ENMIENDA NÚM. 548

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 7.4

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado 4 del artículo 7 queda redactado como sigue:

«4. Las Comunidades Autónomas podrán establecer nuevas enseñanzas de régimen especial, si la demanda social o las necesidades educativas así lo requiriesen.»

ENMIENDA NÚM. 549

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 9.1

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime la expresión «y asistencial».

ENMIENDA NÚM. 550

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 9.2

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime la expresión:

«..., de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, ...».

ENMIENDA NÚM. 551

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 10.3

De adición.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 10, que queda redactado como sigue:

«3. Se garantizará por parte de las Administraciones educativas la dotación de material didáctico gratuito a todos los alumnos en los centros públicos que impartan educación infantil.»

ENMIENDA NÚM. 552

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 11.2, e) y f)

De modificación.

Texto que se propone:

Las letras e) y f) del apartado 2 del artículo 11 quedan redactadas del siguiente modo:

«e) Desarrollar sus habilidades comunicativas.
f) Incorporar el aprendizaje de la lectura y la escritura, las habilidades numéricas, el inicio en una lengua extranjera y promover experiencias con las nuevas tecnologías de la información. En todo caso, la adquisición de estas capacidades en esta etapa estará en relación con el nivel de evolución y maduración de los alumnos, y serán objeto de atención prioritaria al inicio del primer ciclo de educación primaria.»

ENMIENDA NÚM. 553

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 11.3

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime este apartado.

ENMIENDA NÚM. 554

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 14.2.e)

De modificación.

Texto que se propone:

La letra e) del apartado 2 del artículo 14 queda redactada como sigue:

«e) Conocer y utilizar adecuadamente la Lengua española y la Lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, en sus manifestaciones oral y escrita, así como adquirir hábitos de lectura en ambos idiomas.»

ENMIENDA NÚM. 555

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15.2

De modificación.

El apartado 2 del artículo 15 queda redactado como sigue:

«2. Las áreas que se cursarán en educación primaria serán las siguientes:

a) Geografía e Historia.
b) Educación artística.
c) Educación Física.
d) Lengua española, Lengua oficial propia de la correspondiente Comuidad Autónoma.
e) Lengua extranjera.
f) Matemáticas.
g) Ciencia y conocimiento del medio.»

ENMIENDA NÚM. 556

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 16.1

De modificación.

El apartado 1 del artículo 16 queda redactado como sigue:

«1. La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua y global.»

ENMIENDA NÚM. 557

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 17

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el artículo 17.

ENMIENDA NÚM. 558

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 18

De adición.

Texto que se propone:

Se añade al final del artículo 18 el texto siguiente:

«..., garantizándose por parte de las Administraciones educativas la existencia de personal y demás recursos suficientes en los centros públicos para impartir estas enseñanzas.»

ENMIENDA NÚM. 559

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 18 bis (nuevo)

De adición.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo artículo en el Capítulo IV del Título I, redactado en los siguientes términos:

«Artículo 18 bis. Refuerzo escolar.

Se prestará especial atención en la etapa de educación primaria a la atención individualizada de los alumnos, la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para evitar el fracaso escolar en edades tempranas.»

ENMIENDA NÚM. 560

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 21.2.e)

De modificación.

Texto que se propone:

La letra e) del apartado 2 del artículo 21 queda redactada:

«e) Comprender y expresar correctamente, tanto de forma oral y escrita, la Lengua española y la Lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma correspondiente, e iniciarse en el estudio de la literatura en ambos idiomas.»

ENMIENDA NÚM. 561

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22.1

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado 1 del artículo 22 queda redactado:

«1. En la Educación Secundaria Obligatoria se impartirán las siguientes áreas:

a) Ciencias de la Naturaleza.
b) Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
c) Educación Plástica.
d) Educación Física.
e) Lengua española, Lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura.
f) Lengua extranjera.
g) Matemáticas.
h) Música.
i) Tecnología.»

ENMIENDA NÚM. 562

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 25

De modificación.

Texto que se propone:

El artículo 25 se sustituye en su integridad por el siguiente texto:

«Artículo 25. Carácter comprensivo de esta etapa.

1. La organización de la docencia en esta etapa atenderá a la pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado, y estará orientada a alcanzar el objetivo de que todos los alumnos puedan alcanzar el título escolar.

2. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades de cada alumno, promoviendo para ello los refuerzos, adaptaciones curriculares, agrupamientos flexibles, orientación y atención individualizada.

3. El currículo en esta etapa comprenderá además materias optativas, con un peso creciente a lo largo de la misma. Su diseño será fijado por las Comunidades Autónomas, que favorecerán la autonomía de los centros en la definición concreta de programación de las materias optativas.»

ENMIENDA NÚM. 563

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 26.3

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye la expresión «quince años» por «dieciséis años».

ENMIENDA NÚM. 564

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 27.1

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye la expresión «... continua y diferenciada...» por «... continua e integradora...».

ENMIENDA NÚM. 565

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 29

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el artículo 29.

ENMIENDA NÚM. 566

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 30.1

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el inciso final:

«Este título será único y en él constará la nota media de la etapa.»

ENMIENDA NÚM. 567

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34.4

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el apartado 4 del artículo 34.

ENMIENDA NÚM. 568

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34.5

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado 5 del artículo 34 queda redactado en los siguientes términos:

«5. Las materias comunes del Bachillerato serán las siguientes:

a) Educación Física.
b) Filosofía e Historia de la Filosofía.
c) Historia.
d) Lengua Extranjera.
e) Lengua Española, lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma, y Literatura.

ENMIENDA NÚM. 569

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 36

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el artículo 36.

ENMIENDA NÚM. 570

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39.2 y 3

De modificación.

Texto que se propone:

Los apartados 2 y 3 del artículo 39 quedan redactados en los siguientes términos:

«2. Las Administraciones educativas promoverán a través de los programas a que hace referencia el apartado anterior la integración total de los alumnos extranjeros en los centros docentes, con materiales curriculares adaptados y con profesorado con formación específica.
3. Será objetivo prioritario por parte de las Administraciones educativas fomentar que los alumnos extranjeros alcancen los objetivos de cada etapa, articulando para ello los medios y recursos necesarios.»

ENMIENDA NÚM. 571

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 44.2

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado 2 del artículo 44 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Las Comunidades Autónomas promoverán actuaciones de formación del profesorado y de otros profesionales de estos centros para la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales.»

ENMIENDA NÚM. 572

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 56

De modificación.

Texto que se propone:

El artículo 56 queda redactado como sigue:

«Artículo 56. Formación permanente.

Las Comunidades Autónomas establecerán en exclusiva para su respectivo ámbito territorial los planes y programas de formación permanente del profesorado de los centros públicos, sin perjuicio de la cooperación institucional entre las mismas para el intercambio de experiencias positivas.»

ENMIENDA NÚM. 573

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 58

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el artículo 58.

ENMIENDA NÚM. 574

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 66.2

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el siguiente inciso:

«Para las enseñanzas no obligatorias se podrá considerar además el expediente académico.»

ENMIENDA NÚM. 575

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 67.2

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado 2 del artículo 67 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Las Comunidades Autónomas establecerán las normas a que deben someterse los conciertos en su respectivo ámbito. En todo caso, será requisito imprescindible para establecer los conciertos educativos que la oferta de plazas en los centros públicos de una determinada área geográfica sea insuficiente para atender a la demanda. En las renovaciones de los conciertos se aplicará este criterio.»

ENMIENDA NÚM. 576

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 70.8

De adición.

Texto que se propone:

Se añade al final del apartado 8 del artículo 70 el siguiente texto:

«Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la necesidad de autorización previa de los libros de texto por parte de las Administraciones educativas.»

ENMIENDA NÚM. 577

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 71.1

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye la expresión: «... oído el Claustro» por «... y aprobada por el Claustro».

ENMIENDA NÚM. 578

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 72.4

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el apartado 4 del artículo 72.

ENMIENDA NÚM. 579

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 75.1

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado 1 del artículo 75 queda redactado como sigue:

«1. Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos básicos de gobierno y participación en el control y gestión, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas completen el diseño:

a) Órganos de gobierno: Director, Jefe de Estudios y Claustro de Profesores.
b) Órganos de participación en el control y gestión: Consejo Escolar.»

ENMIENDA NÚM. 580

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 78

De modificación.

Texto que se propone:

El artículo 78 queda redactado como sigue:

«Artículo 78. Claustro de Profesores.

1. El Claustro de Profesores es un órgano de gobierno integrado por todos los Profesores del centro docente, y tiene la responsabilidad de planificar, programar e informar sobre los aspectos docentes del centro.
2. El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de Profesores que presten servicio en el centro.»

ENMIENDA NÚM. 581

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 79.a)

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye la letra a) del artículo 79 por el siguiente texto:

«a) Aprobar la programación general anual, así como evaluar y fiscalizar su aplicación.»

ENMIENDA NÚM. 582

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 79.i)

De modificación.

Texto que se propone:

La letra i) del artículo 79 queda redactada en los siguientes términos:

«i) Elegir mediante sufragio de cada uno de sus miembros los órganos de gobierno unipersonales del centro docente.»

ENMIENDA NÚM. 583

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 84

De modificación.

Texto que se propone:

El artículo 84 queda redactado como sigue:

«La elección de los directores de los centros públicos se efectuará de forma preferente por los claustros de profesores mediante sufragio. Subsidiariamente, en caso de que no fuese posible elegir por ese método a los directores, su selección y nombramiento se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores funcionarios de carrera de los cuerpos del nivel educativo al que pertenezca el centro y que hayan obtenido destino en el mismo. En este caso, la selección se realizará atendiendo a los principios de publicidad, mérito y capacidad.»

ENMIENDA NÚM. 584

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 88

De adición.

Texto que se propone:

Se añade el texto que se indica a continuación:

«..., previa evaluación positiva del trabajo realizado por cada uno de los mismos por parte del claustro de profesores de centro y del Consejo Escolar...» (el resto continúa igual).

ENMIENDA NÚM. 585

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 94

De modificación.

Texto que se propone:

El artículo 94 queda redactado como sigue:

«Artículo 94. Evaluación del sistema educativo.

1. Las funciones de evaluación del sistema educativo corresponderán a los órganos de que a tal efecto constituyan y desarrollen las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales.

2. Para la coordinación de los órganos encargados de la evaluación se podrá constituir una conferencia estatal, donde estarán representados los directores o presidentes de las mismas, y el responsable del Ministerio de Educación, o personas en quien delegue.»

ENMIENDA NÚM. 586

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 95

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el artículo 95.

ENMIENDA NÚM. 587

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 97

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el artículo 97.

ENMIENDA NÚM. 588

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 98

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprime el artículo 98.

ENMIENDA NÚM. 589

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 102.1

De supresión.

Texto que se propone:

Se suprimen las letras a), f), g) e i) del apartado 1 del artículo 102.

ENMIENDA NÚM. 590

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional segunda

De modificación.

Texto que se propone:

La disposición adicional segunda queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda. Enseñanza de religión.

1. La enseñanza y formación religiosa será impartida dentro del ámbito interno de cada confesión religiosa.

2. A estos efectos, el Gobierno iniciará las negociaciones oportunas con la Iglesia Católica, así como con otras confesiones religiosas que hayan llegado a acuerdos con el Estado español sobre enseñanza religiosa para excluir del sistema educativo reglado la enseñanza de la religión.

3. Las relaciones de cooperación del Estado con las confesiones religiosas sobre enseñanza religiosa serán objeto de revisión y dotación de un nuevo marco de apoyo público para favorecer la libre obtención de formación religiosa por los ciudadanos dentro de las estructuras de la propia Iglesia.»

ENMIENDA NÚM. 591

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional tercera

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye el texto de la disposición adicional tercera por el siguiente:

«Disposición adicional tercera. De los libros de texto y demás materiales curriculares.

1. Corresponde a la autonomía pedagógica de los centros educativos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. Los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos elegirán los libros de texto y demás materiales curriculares. Las Administraciones educativas determinarán la intervención que, en el proceso interno de adopción de los libros y demás materiales curriculares, corresponde a otros órganos del centro.

2. Los libros de texto y demás materiales a que se refiere el apartado anterior deberán reflejar y fomentar el respeto a los valores y principios que se desprenden de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado español a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.

3. Los libros de texto requerirán la previa autorización de la Administración educativa, sin la cual no podrán ser seleccionados por los centros docentes. También se ejercerá la supervisión de los libros de texto

y otros materiales curriculares por parte de la inspección educativa.

4. Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de cuatro años.»

ENMIENDA NÚM. 592

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional cuarta

De modificación.

Texto que se propone:

La disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional cuarta. Del calendario escolar.

1. El calendario escolar será fijado anualmente por las Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas realizarán sus propias previsiones de inicio y final del curso escolar, sin que pueda en ningún caso el inicio del curso escolar producirse con anterioridad al 1 de septiembre ni establecerse el final de las actividades lectivas después del 30 de junio de cada año académico, salvo para la enseñanza de adultos y para el desarrollo de la formación en centros de trabajo, cuando por razones de estacionalidad de la actividad de las empresas así se exija.

3. Lo dispuesto en este artículo podrá ser objeto de modificación en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, oídas las asociaciones representativas de los padres y los sindicatos más representativos.»

ENMIENDA NÚM. 593

PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional decimoquinta (nueva)

De adición.

Texto que se propone:

Se añade una disposición adicional, redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional decimoquinta. Gratuidad progresiva de los libros de texto en la enseñanza obligatoria para los alumnos que cursen estudios en centros docentes públicos.

Los Presupuestos Generales del Estado incluirán en los próximos cuatro años las cantidades necesarias destinadas a garantizar la gratuidad de los libros de texto para los alumnos que cursen enseñanza obligatoria en los centros públicos.

A estos efectos, las cantidades consignadas serán objeto de territorialización por Comunidades Autónomas, que serán las encargadas de desarrollar y ejecutar en dicho plazo este programa.»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2002.—**Joan Puigcercós i Boixassa,** Diputado.—Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 594

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2.b)

De modificación.

Sustituir «conocer la Constitución española» por «conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos».

ENMIENDA NÚM. 595

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2.b)

De modificación.

Sustituir «de acuerdo con la Constitución» por «de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 16 de la Constitución de la Sección Primera del Capítulo Segundo «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» es el que regula la ideología, religión y culto, e independientemente de interpretaciones subjetivas de otras partes de la Constitución, en éste se especifica claramente en el artículo 16.2 que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

ENMIENDA NÚM. 596

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 3

De supresión.

Suprimir el apartado b).

JUSTIFICACIÓN

Si el artículo que pretendemos suprimir se aprueba, difícilmente la administración educativa podría dejar de concertar centros privados teniendo demanda de plazas, a pesar de las consecuencias de cierre de oferta pública que pudiese comportar.

ENMIENDA NÚM. 597

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 3.c)

De adición.

«c) ... aunque no necesariamente debe ser dentro del sistema educativo general.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 27.3 de la Constitución donde se basa dicho artículo en ningún momento especifica que la formación religiosa y moral tenga que ser dentro del marco del sistema educativo general, por lo cual añadimos esta especificación.

ENMIENDA NÚM. 598

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 3

De adición.

Añadir: «e) a participar en la gestión y gobierno del centro, teniendo voz y voto en los órganos necesarios para ello.»

ENMIENDA NÚM. 599

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6

De modificación.

Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar Programas de Cooperación Territorial con otras Comunidades con el objeto de desarrollar relaciones educativas y culturales coincidentes, en base a unas características históricas, geográficas, lingüísticas y/o culturales comunes.

ENMIENDA NÚM. 600

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 7.1

De supresión.

Suprimir «educación preescolar».

ENMIENDA NÚM. 601

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 7.2

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La educación preescolar no debe de tener una regulación específica, sino que debe estar integrada dentro de las enseñanzas escolares en el nivel de educación infantil, incluyendo específicamente la enseñanza opcional de cero-tres años.

ENMIENDA NÚM. 602

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 9

De supresión.

La educación preescolar no debe de tener una regulación específica, sino que debe estar integrada dentro de las enseñanzas escolares en el nivel de educación infantil, incluyendo específicamente la enseñanza opcional de cero-tres años.

ENMIENDA NÚM. 603

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 10.1

De modificación.

Sustituir: «un ciclo de tres años académicos que se cursará desde los tres a los seis años de edad» por «dos ciclos. El primer ciclo de cero-tres, que será impartido por maestros y TSED, y un segundo ciclo de tres-seis, impartido por maestros».

ENMIENDA NÚM. 604

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 10.2

De modificación.

Sustituir: «sostenidos con fondos públicos» por «públicos».

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar la existencia de puestos escolares en los centros públicos, no en los privados, ya que esto último debe correr a cargo de la propia iniciativa privada y las leyes del mercado. Contrariamente, la Administración debe atender con sus recursos el mantenimiento de una red de enseñanza pública gratuita suficiente y de calidad.

ENMIENDA NÚM. 605

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 14.2

De modificación.

Sustituir el apartado e) por: «e) Conocer y usar adecuadamente la lengua propia de la nacionalidad pertinente, y, en su caso, la lengua castellana, en sus manifestaciones oral y escrita, así como adquirir los hábitos de lectura.»

JUSTIFICACIÓN

La lengua propia de las nacionalidades —por usar una terminología constitucional— debe ser la lengua de cohesión social de éstas, por lo cual debe ser la lengua vehicular y vertebradora de la enseñanza en el territorio propio. En todo caso, y dada la cooficialidad de la lengua castellana como lengua vehicular en el Estado español y su implantación social en los últimos siglos en otras nacionalidades del Estado diferente de la castellana, será también obligatoria en estos territorios.

ENMIENDA NÚM. 606

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15.2

De modificación.

Sustituir «d) lengua castellana» por «d) lengua propia de la nacionalidad».

JUSTIFICACIÓN

La lengua propia de las nacionalidades —por usar una terminología constitucional— debe ser la lengua de cohesión social de éstas, por lo cual debe ser la lengua vehicular y vertebradora de la enseñanza en el territorio propio. En todo caso, y dada la cooficialidad de la lengua castellana como lengua vehicular en el Estado español y su implantación social en los últimos siglos en otras nacionalidades del Estado diferente de la castellana, será también obligatoria en estos territorios.

ENMIENDA NÚM. 607

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15.2

De modificación.

Sustituir «el área de Sociedad, Cultura y Religión» por «el área de conocimiento de las religiones, las ideas y las creencias».

ENMIENDA NÚM. 608

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15.2

De modificación.

Sustituir «Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de la lengua cooficial» por «Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de la lengua castellana».

ENMIENDA NÚM. 609

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 21.2

De modificación.

Sustituir el apartado e) por «e) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua propia de la nacionalidad y, en su caso, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura».

JUSTIFICACIÓN

La lengua propia de las nacionalidades —por usar una terminología constitucional— debe ser la lengua de cohesión social de éstas, por lo cual debe ser la lengua vehicular y vertebradora de la enseñanza en el territorio propio. En todo caso, y dada la cooficialidad de la lengua castellana como lengua vehicular en el Estado español y su implantación social en los últimos siglos en otras nacionalidades del Estado diferente de la castellana, será también obligatoria en estos territorios.

ENMIENDA NÚM. 610

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22.1

De modificación.

Sustituir «i) lengua castellana y literatura» por «i) lengua y literatura propia de la nacionalidad».

JUSTIFICACIÓN

La lengua propia de las nacionalidades —por usar una terminología constitucional— debe ser la lengua de cohesión social de éstas, por lo cual debe ser la lengua vehicular y vertebradora de la enseñanza en el territorio propio. En todo caso, y dada la cooficialidad de la lengua castellana como lengua vehicular en el Estado español y su implantación social en los últimos siglos en otras nacionalidades del Estado diferente de la castellana, será también obligatoria en estos territorios.

ENMIENDA NÚM. 611

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22.1

De modificación.

Sustituir «el área de Sociedad, Cultura y Religión» por «el área de conocimiento de las religiones, las ideas y las creencias».

ENMIENDA NÚM. 612

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22.1

De modificación.

Sustituir «Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de la lengua cooficial» por «Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de la lengua castellana».

ENMIENDA NÚM. 613

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 26.6

De modificación.

Sustituir por «6. Las administraciones educativas garantizarán el desarrollo de estos programas mediante la oferta suficiente de plazas públicas».

ENMIENDA NÚM. 614

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 33

De modificación.

Sustituir g) por «g) Conocer y saber usar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la riqueza y las posibilidades expresivas de la lengua propia de la nacionalidad y, en su caso, de la lengua castellana, así como la literatura y la lectura y el análisis de las obras literarias más significativas».

JUSTIFICACIÓN

La lengua propia de las nacionalidades —por usar una terminología constitucional— debe ser la lengua de cohesión social de éstas, por lo cual debe ser la lengua vehicular y vertebradora de la enseñanza en el territorio propio. En todo caso, y dada la cooficialidad de la lengua castellana como lengua vehicular en el Estado español y su implantación social en los últimos siglos en otras nacionalidades del Estado diferente de la castellana, será también obligatoria en estos territorios.

ENMIENDA NÚM. 615

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34.5

De modificación.

Sustituir c) por «c) Historia propia de la nacionalidad».

ENMIENDA NÚM. 616

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34.5

De modificación.

Sustituir «e) lengua castellana y literatura» por «lengua y literatura propia de la nacionalidad».

JUSTIFICACIÓN

La lengua propia de las nacionalidades —por usar una terminología constitucional— debe ser la lengua de cohesión social de éstas, por lo cual debe ser la lengua vehicular y vertebradora de la enseñanza en el territorio propio. En todo caso, y dada la cooficialidad de la lengua castellana como lengua vehicular en el Estado español y su implantación social en los últimos siglos en otras nacionalidades del Estado diferente de la castellana, será también obligatoria en estos territorios.

ENMIENDA NÚM. 617

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34.5

De modificación.

Sustituir «el área de Sociedad, Cultura y Religión» por «el área de conocimiento de las religiones, las ideas y las creencias».

ENMIENDA NÚM. 618

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34.5

De modificación.

Sustituir «Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de la lengua cooficial» por «Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de la lengua castellana».

ENMIENDA NÚM. 619

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 36.1

De modificación.

Sustituir por «1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas y la superación de una Prueba General de Bachillerato cuyas condiciones serán fijadas por la administración educativa autonómica, de acuerdo con lo que se establece en el punto 2 de este mismo artículo».

ENMIENDA NÚM. 620

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39.1

De modificación.

Sustituir «Para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas» por «Para el alumnado que desconozca la lengua y cultura propias de la nacionalidad correspondiente».

ENMIENDA NÚM. 621

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39.5

De supresión.

Supresión «(...) español».

ENMIENDA NÚM. 622

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39.6

De modificación.

Sustituir «El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá» por «Las autoridades educativas pertinentes, promoverán».

ENMIENDA NÚM. 623

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 49.6

De modificación.

Sustituir «Las Administraciones educativas promoverán convenios de colaboración» por «Las administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas públicas y promoverán convenios de colaboración».

ENMIENDA NÚM. 624

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 49.7

De modificación.

Sustituir «lengua y cultura españolas» por «lengua y cultura propia de la nacionalidad correspondiente».

ENMIENDA NÚM. 625

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 66.1

De supresión.

Suprimir «y el derecho a la libre elección».

ENMIENDA NÚM. 626

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 66.2

De modificación.

Sustituir «Los criterios para la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el correspondiente equipo directivo» por «Los criterios para la admisión y la tramitación para la admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos, serán aplicados por la correspondiente comisión de escolarización».

ENMIENDA NÚM. 627

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 66.4

De adición.

«Igualmente, en los centros públicos de titularidad pública, el procedimiento de admisión en los centros de educación infantil y primaria será válida a todos los efectos para continuar la escolarización en el centro de educación secundaria vinculado por itinerario establecido.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata que igual que en la escuela privada, los padres que matriculen su hijo o hija en P-3, no tengan que volver a hacer la matrícula para secundaria, a no ser que quieran cambio de centro.

ENMIENDA NÚM. 628

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 67.1

De supresión.

Suprimir «y a la libertad de elección del centro».

ENMIENDA NÚM. 629

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 67.5

De modificación.

Sustituir «(...) que impartan la enseñanza básica, satisfaga las necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales y económicas desfavorables o que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. Además (...)» por «(...) que impartan la enseñanza básica, atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales y económicas desfavorables o que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo, siempre que así lo soliciten, reúnan los requisitos previstos en las leyes educativas y satisfagan las necesidades de escolaridad complementarias a la oferta pública. Además, (...).»

ENMIENDA NÚM. 630

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 68.3

De modificación.

Sustituir en b): «En ningún caso, se computarán intereses del capital» por «En ningún caso, se computarán intereses ni amortizaciones de capital propio».

ENMIENDA NÚM. 631

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 72.3

De modificación.

Sustituir por «3. Las Administraciones públicas garantizarán a los centros docentes públicos que los recursos materiales y económicos suficientes para su funcionamiento y mantenimiento en condiciones de calidad».

ENMIENDA NÚM. 632

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós
i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.1

De adición.

Añadir: «m) Intervenir en la designación y cese del Director del centro».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 633

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.1

De adición.

Añadir: «n) Intervenir en la selección y despido del profesorado del centro».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 634

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.1

De adición.

Añadir: «o) Aprobar, en su caso, las aportaciones de las asociaciones de madres y padres del alumnado para la realización de actividades extraescolares y servicios escolares».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 635

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.1

De modificación.

Sustituir: «a) Formular al equipo directivo propuestas» por «a) Evaluar y aprobar, en su caso, propuestas».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 636

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.1

De modificación.

Sustituir: «c) Participar en el proceso de admisión de alumnos» por «Decidir la admisión del alumnado».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 637

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.1

De modificación.

Sustituir: «e) Conocer la resolución de conflictos» por «e) Resolver los conflictos».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 638

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.1

De modificación.

Sustituir: «h) Proponer las directrices» por «h) Fijar las directrices».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 639

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.1

De adición.

Añadir: «c) (...) y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad del mismo. En base a ellos, proponer directrices y, en su caso, aprobarlas».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 640

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 84.1

De modificación.

Sustituir: «1. La selección y nombramiento de los centros públicos se efectuará por elección del Consejo Escolar entre el profesorado del centro que acredite un mínimo de un año de permanencia en él».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Escolar debe ser un órgano que, más allá de ser simplemente consultivo, tenga capacidad de decisión.

ENMIENDA NÚM. 641

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 85

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo es improcedente porque es el Consejo Escolar quien debe elegir al Director del centro.

ENMIENDA NÚM. 642

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 86

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo es improcedente porque es el Consejo Escolar quien debe elegir al Director del centro.

ENMIENDA NÚM. 643

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 89

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo es improcedente porque es el Consejo Escolar quien debe elegir al Director del centro.

ENMIENDA NÚM. 644

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al Título VI

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Este título supone una invasión de competencias autonómicas.

ENMIENDA NÚM. 645

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al Título VII

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Este título supone una invasión de competencias autonómicas.

ENMIENDA NÚM. 646

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 102

De modificación.

Sustituir: «f) (...) en la lengua oficial del Estado» por «(...) en las lenguas oficiales del Estado».

ENMIENDA NÚM. 647

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 76.1

De modificación.

Sustituir: «1. El Consejo Escolar es el órgano de participación, con poder de decisión, en el control y la gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos, donde confluyen los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa».

ENMIENDA NÚM. 648

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 25.4

De modificación.

Sustituir: «4. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios establecidos en la presente Ley» por «4. Todos los centros deberán ofrecer todos los itinerarios establecidos en la presente Ley».

ENMIENDA NÚM. 649

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 44.1

De modificación.

Sustituir: «Las Administraciones educativas dotarán a los centros sostenidos con fondos públicos del personal especializado y de los recursos necesarios» por «Las administraciones garantizarán que todos los centros tengan personal especializado y recursos necesarios».

ENMIENDA NÚM. 650

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 75.1

De modificación.

Sustituir: «1. Los centros docentes públicos» por «1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos».

ENMIENDA NÚM. 651

PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Puigcercós i Boixassa
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Disposición Adicional Segunda

De modificación.

Sustituir por «Disposición Adicional Segunda. Del área o asignatura de Conocimiento de las religiones, las ideas y las creencias.

1. Conocimiento de las religiones, las ideas y las creencias es una asignatura de cultura religiosa de carácter obligatorio para todo el alumnado y donde se muestren la historia y características fundamentales de cada religión o de las creencias no religiosas sin ninguna pretensión apologética, poniendo especial atención en las aportaciones de cada religión o sistema de creencias al legado cultural de la humanidad y en aquellas que han tenido o tienen presencia en nuestra sociedad.

2. Es una asignatura de carácter obligatorio para todo el alumnado denominada "Conocimiento de las religiones, las ideas y las creencias" que incluya contenidos relativos a: 1) la historia de las religiones, las ideas y las creencias, 2) las aportaciones de las diversas religiones, ideas y creencias a la cultura de la humanidad, 3) las religiones en las sociedades actuales, 4) los sistemas de creencias, ritos y rituales, 5) aspectos religiosos de la sociedad laica, 6) las contribuciones de las religiones a la cultura de la paz, la libertad y la tolerancia.

3. La inclusión de la asignatura "Conocimiento de las religiones, las ideas y las creencias" en el currículo escolar, para las etapas de educación obligatoria, comporta un trabajo previo de desarrollo de los diversos tipos de contenidos para los diversos niveles de concreción adecuados a cada etapa y ciclo educativo. En esta fase se respetarán las competencias en materia educativa de las diversas nacionalidades y comunidades autónomas.

4.»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, el Diputado Andalucista, José Núñez Castaín adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2002.—**José Núñez Castaín,** Diputado.—**Guillerme Vázquez Vázquez,** Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 652

PRIMER FIRMANTE:
Don José Núñez Castaín
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional octava, apartado 3

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, en su caso, de acuerdo con las áreas, materias, asignaturas y módulos que integran el currículo correspondiente. Para la selección de los aspirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes y la formación en la Cultura de la Comunidad Autónoma correspondiente.

El número de aprobados no podrá superar el número de plazas convocadas. Asimismo, existirá una fase de prácticas que podrá incluir cursos de formación y constituirá parte del proceso selectivo.»

JUSTIFICACIÓN

Así todas aquellas Comunidades Autónomas que no tienen lengua propia podrán incluir, en las distintas convocatorias de empleo público, como mérito, el conocimiento de su propia realidad social, económica, histórica y cultural. De este modo se compensarían las exigencias que las Comunidades Autónomas con lengua propia imponen a los universitarios y licenciados de las otras que deciden opositar en alguna de aquéllas.

ENMIENDA NÚM. 653

PRIMER FIRMANTE:
Don José Núñez Castaín
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional novena, apartado 2

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Se integran en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que tengan reconocida la condición de Catedrático y que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y aquellos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de profesores de enseñanzas secundarias con una antigüedad en el Cuerpo de al menos quince años.

Estos funcionarios se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en la condición de Catedrático y se les respetará, en todo caso, los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva su integración en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.»

JUSTIFICACIÓN

Para paliar la no convocatoria de concurso para la adquisición de la condición de Catedrático. Todas las Comunidades Autónomas, incluido el territorio «Ministerio de Educación» han ofertado a su profesorado de secundaria distintas convocatorias (algunas ya llevan más de cinco) para poder acceder a la condición de Catedrático, tal y como se establece en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no le ha dado al profesorado andaluz las mismas posibilidades: sólo ha realizado dos convocatorias hasta la fecha, con lo que se está perjudicando al profesorado andaluz, negándole la posibilidad de pertenecer al Cuerpo de Catedráticos que este Proyecto de Ley recoge.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2002.—**María Teresa Fernández de la Vega Sanz,** Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

ENMIENDA NÚM. 654

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 1

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 1. Objetivos de la Ley y principios de calidad de la educación.

1. En la presente Ley se establecen un conjunto de medidas para aumentar el rendimiento escolar del

alumnado y mejorar la calidad de la educación en los distintos niveles y etapas educativas.

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y la mejora de la enseñanza y, en particular, adoptarán las medidas oportunas para:

a) Mejorar el rendimiento escolar del alumnado y prevenir el fracaso escolar mediante la corrección de los problemas y las dificultades de aprendizaje desde las edades más tempranas;

b) Incentivar el trabajo del profesorado prestando una especial atención a la valoración de su práctica docente, a la formación inicial y permanente y a su promoción profesional;

c) Facilitar la participación de padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos;

d) Asegurar una educación de calidad para todos los alumnos mediante la compensación de las desigualdades sociales, territoriales, económicas y culturales de origen;

e) Profundizar en la autonomía curricular, pedagógica y de gestión de los centros para facilitar una educación más personalizada;

f) Preparar el sistema educativo para adecuarlo a las demandas de la sociedad del conocimiento;

g) Garantizar la participación de los centros sostenidos con fondos públicos en la escolarización de todo el alumnado sin ningún tipo de discriminaciones;

h) Evaluar el sistema educativo e introducir las actuaciones de mejora que se deriven de sus resultados;

i) Adaptar la Administración educativa del Estado a la nueva realidad autonómica y profundizar en la descentralización municipal de las competencias educativas.»

MOTIVACIÓN

La Ley debe fijar claramente cuáles son los objetivos que persigue a través de las medidas que contiene y establecer los parámetros en virtud de los cuales los poderes públicos tienen que actuar para aumentar el rendimiento escolar del alumnado y mejorar la calidad del sistema educativo.

———

ENMIENDA NÚM. 655

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo II del Título preliminar

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 656

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 657

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 658

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo III del Título preliminar

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con el conjunto de enmiendas presentadas a este Capítulo.

———

ENMIENDA NÚM. 659

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 660

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

No tiene sentido la ubicación de este artículo junto con las becas y ayudas al estudio. Además se mezcla el premio a la excelencia con el especial esfuerzo cuando hay muchos alumnos que a pesar del esfuerzo realizado no obtienen buenos resultados académicos.

ENMIENDA NÚM. 661

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 6

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 6, con la siguiente redacción:

«Artículo 6. Programas de cooperación.

1. El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, establecerá convenios con otros países de la Unión Europea con el fin de desarrollar Programas de Cooperación orientados a favorecer el conocimiento de las tradiciones y patrimonio cultural de los diversos países.

2. El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, establecerá las finalidades específicas de los diferentes Programas de Cooperación que se vayan a desarrollar y regulará los criterios preferentes para la participación del alumnado en los mismos, entre los que figurará estar escolarizado en centros o zonas de atención educativa preferente.

3. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la consecución de las finalidades específicas de los diferentes Programas de Cooperación.»

MOTIVACIÓN

Ampliar el ámbito de los Programas de Cooperación propuestos en la redacción actual.

ENMIENDA NÚM. 662

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la rúbrica del Título I

De modificación.

Se propone la modificación del Título I, con la siguiente redacción:

«Título I. De la mejora del rendimiento escolar de los alumnos.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas a este Título.

ENMIENDA NÚM. 663

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 7, apartado 1

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del Artículo 7, con la siguiente redacción:

«1. El sistema educativo comprende las enseñanzas escolares, la enseñanza universitaria y la enseñanza superior artística.»

MOTIVACIÓN

Las enseñanzas artísticas superiores no pueden encuadrarse en ninguna de las propuestas en la redacción actual de este punto.

ENMIENDA NÚM. 664

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 7, apartado 1 bis

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado 1 bis, con la siguiente redacción:

«1 bis. La enseñanza artística superior se regirá por sus normas específicas que desarrollará el Gobierno de común acuerdo con las Comunidades Autónomas.»

MOTIVACIÓN

La necesidad de remitir a una posterior regulación de estas enseñanzas.

ENMIENDA NÚM. 665

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 7, apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Copia literal de la LOGSE.

ENMIENDA NÚM. 666

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 8

De supresión.

MOTIVACIÓN

Copia la LOGSE y cuando no lo hace la empeora.

ENMIENDA NÚM. 667

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo II del Título I

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas a este capítulo.

ENMIENDA NÚM. 668

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 9

De supresión.

MOTIVACIÓN

Supone un claro retroceso respecto a la LOGSE, al romper la etapa de educación infantil separando el primer ciclo, como educación preescolar, del segundo ciclo. En lugar de reforzar el carácter educativo de esta etapa fundamental, se prima su carácter asistencial.

ENMIENDA NÚM. 669

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 10

De supresión.

MOTIVACIÓN

La única novedad del apartado 1, respecto a la legislación vigente, es la ruptura de esta etapa educativa. En el apartado 2 se abre la vía para el establecimiento de conciertos generalizados en una etapa no obligatoria.

ENMIENDA NÚM. 670

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 11, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Es copia literal de la LOGSE.

ENMIENDA NÚM. 671

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 11, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 672

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 12

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 673

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 12 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo 12 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 12 bis. Oferta de Educación Infantil.

1. Con el fin de favorecer el desarrollo personal de todos los niños y niñas y sus posibilidades de aprendizaje en la educación obligatoria, se reforzará el carácter educativo del primer ciclo de educación infantil en el marco de los objetivos pedagógicos de esta etapa educativa.

2. Cuando la etapa de educación infantil se imparta en centros diferentes, las Administraciones educativas establecerán los mecanismos necesarios para facilitar la coordinación del trabajo del profesorado de ambos ciclos.

3. La educación infantil será de oferta obligada por parte de los poderes públicos y asistencia voluntaria para las familias.

4. Los poderes públicos garantizarán la oferta suficiente de plazas de educación infantil para asegurar la escolarización de todas las familias que lo soliciten y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la atención educativa a los sectores sociales más desfavorecidos.»

MOTIVACIÓN

Reforzar el carácter educativo de la educación infantil, mejorar la coordinación de los dos ciclos de esta etapa e incrementar la oferta para asegurar la escolarización de todas las familias que lo soliciten.

ENMIENDA NÚM. 674

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 12 ter

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo 12 ter, con el siguiente contenido:

«Artículo 12 ter. Atención educativa y otros servicios complementarios.

1. Las Administraciones educativas establecerán convenios con las Administraciones locales, así como con otras administraciones e instituciones públicas o privadas sin fines de lucro para asegurar una adecuada oferta de Educación Infantil en todos los municipios, en la que se garantice la atención educativa e higiénico-sanitaria del alumnado de estas edades.

2. Las Administraciones educativas promoverán la realización de programas, en colaboración con los Ayuntamientos, que faciliten la oferta de otros servicios educativos adecuados a los niños y niñas de estas edades, así como la ampliación del horario de apertura de los centros para cubrir las necesidades de las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres.»

MOTIVACIÓN

Responder a la demanda de las familias, tanto de una adecuada oferta de educación infantil como de servicios educativos complementarios.

_____

ENMIENDA NÚM. 675

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo IV del Título I

De supresión.

MOTIVACIÓN

Este capítulo no añade nada nuevo a la legislación vigente y cuando lo hace es para empeorarla.

_____

ENMIENDA NÚM. 676

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 13

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 677

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 14

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 678

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 15, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 679

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 15, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 680

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 15, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Las áreas de Educación Primaria deben ser impartidas en todos los ciclos. No tiene sentido dejar su determinación al decreto de enseñanzas mínimas.

ENMIENDA NÚM. 681

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 15, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 682

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 16, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 683

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 16, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 684

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 16, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 685

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 16, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 686

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 17

De supresión.

MOTIVACIÓN

A través de la evaluación continua y de los informes del Profesor al finalizar los ciclos de Primaria, ya hay datos suficientes para informar a los alumnos y sus familias sobre la evolución de su proceso de aprendizaje.

ENMIENDA NÚM. 687

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 18

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 688

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo V del Título I

De supresión.

MOTIVACIÓN

Este Capítulo no añade nada nuevo a la legislación vigente y cuando lo hace es para empeorarla. Por otra parte, las novedades que introduce suponen una clara segregación del alumnado que va a incrementar las tasas de fracaso escolar, entendido como el número de alumnos de nuestro país que no obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

ENMIENDA NÚM. 689

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 19

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 690

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 20

De supresión.

MOTIVACIÓN

Se restringe el derecho de los alumnos a permanecer en los centros ordinarios, cursando la enseñanza básica, hasta los dieciocho años de edad, regulado en la LOGSE.

ENMIENDA NÚM. 691

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 21

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 692

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 22

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 693

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 23, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 694

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 24

De supresión.

MOTIVACIÓN

Tal y como están formuladas las medidas de refuerzo, sólo en primero y segundo de ES, pueden dar lugar a un nuevo itinerario desde los doce años.

ENMIENDA NÚM. 695

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 25

De supresión.

MOTIVACIÓN

Es una medida segregadora, ya que obliga a los alumnos a una elección prematura de opciones que van a condicionar sus posibilidades de continuar sus estudios posteriores.

ENMIENDA NÚM. 696

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 26

De supresión.

MOTIVACIÓN

Antes de finalizar la edad obligatoria de escolarización se envía a los alumnos fuera de la escolaridad ordinaria.

ENMIENDA NÚM. 697

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 27

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 698

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 28, apartados 1 y 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la normativa vigente.

ENMIENDA NÚM. 699

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 28, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No aporta nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 700

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 28, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Supone la expulsión de la educación básica a los dieciséis años, sin respetar el derecho de los alumnos de permanecer escolarizados en la educación básica hasta los dieciocho años de edad.

_____

ENMIENDA NÚM. 701

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 29

De supresión.

MOTIVACIÓN

A través de la evaluación continua de todas las áreas y de los informes del tutor al finalizar cada sesión de evaluación, ya hay datos suficientes para informar a los alumnos y sus familias sobre la evolución de su proceso de aprendizaje.

_____

ENMIENDA NÚM. 702

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 30, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 703

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 30, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la normativa vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 704

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 30, apartados 3 y 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 705

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 706

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo V bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un Capítulo V bis con la siguiente rúbrica:

«De la educación obligatoria.»

MOTIVACIÓN

Se proponen un conjunto de medidas necesarias para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos a lo largo de la educación obligatoria. Todas las propuestas están orientadas tanto por el principio de intervenir a tiempo de superar las dificultades de aprendizaje como para poder ofrecer al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender determinadas actividades formativas complementarias.

ENMIENDA NÚM. 707

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 31 bis Actividades formativas complementarias.

1. Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos de Educación Primaria ofrezcan una hora diaria de actividades educativas complementarias que estarán dirigidas a:

a) Reforzar el dominio de los aprendizajes instrumentales básicos, tales como la lectura, la escritura y el cálculo.
b) Adquirir las destrezas y las habilidades básicas de trabajo y estudio.
c) Realizar actividades relacionadas con las capacidades expresivas y creativas de los niños y niñas.

2. Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos que imparten la Educación Secundaria Obligatoria ofrezcan tres horas semanales de clase complementarias con el fin de realizar actividades que faciliten, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, la superación de las mismas y, para el alumnado con mayor motivación y capacidad para aprender, la ampliación y profundización de sus conocimientos.»

MOTIVACIÓN

La importancia de ofrecer actividades educativas complementarias que faciliten, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, la superación de las mismas y, para el alumnado con mayor motivación y capacidad para aprender, la ampliación y profundización de sus conocimientos.

ENMIENDA NÚM. 708

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 ter (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31 ter con la siguiente redacción:

«Artículo 31 ter Medidas para el fomento de la lectura.

1. El Gobierno, en la definición de las enseñanzas mínimas, establecerá una hora diaria de lectura para todos los alumnos de la Educación Primaria.
2. Las Administraciones educativas elaborarán las orientaciones pedagógicas oportunas, facilitarán a los

centros los materiales de apoyo y dotarán a los centros públicos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria de las bibliotecas escolares necesarias para que los equipos docentes integren en sus programaciones las actividades relacionadas con la lectura.

3. Los centros incentivarán la colaboración con las familias de forma que los alumnos también realicen actividades de lectura en sus casas.»

MOTIVACIÓN

El fomento del interés y el hábito por la lectura no se consiguen mediante declaraciones genéricas, sino estableciendo compromisos concretos de actuación en los centros.

ENMIENDA NÚM. 709

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 quáter (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31.quáter, con la siguiente redacción:

«Artículo 31 quáter Objetivos de la permanencia un año más en el mismo ciclo o curso.

1. Cuando el profesorado de Educación Primaria, como resultado del proceso de evaluación continua, decida que un alumno debe permanecer un año más en el mismo ciclo, éste tendrá como objetivo preferente la adquisición de los conocimientos básicos de la lecto-escritura y del cálculo, así como el desarrollo de los hábitos de trabajo y de estudio.

2. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, cuando el Profesorado, como resultado del proceso de evaluación continua, decida que un alumno debe permanecer un año más en el mismo curso, se desarrollará un plan de actividades específicas en el que figurarán las áreas que éste debe cursar y las actividades de recuperación que tiene que desarrollar para superar las dificultades observadas en el curso anterior.»

MOTIVACIÓN

Se destaca que el objetivo de la permanencia de un año más en el mismo curso es recuperar las dificultades observadas el curso anterior, para lo que se indica que no se trata de repetir lo mismo que el año anterior, sino realizar las actividades que permitan superar esas dificultades.

ENMIENDA NÚM. 710

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 quinquies (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31 quinquies con la siguiente redacción:

«Artículo 31 (quinto). Desdoblamientos de grupos en la Educación Secundaria Obligatoria.

Las Administraciones educativas garantizarán el desdoblamiento de los grupos ordinarios en las áreas instrumentales, lenguas propias, idioma extranjero y matemáticas, con el objetivo de crear grupos de alumnos más reducidos que permitan una atención más individualizada.»

MOTIVACIÓN

El desdoblamiento de los grupos de alumnos en determinadas áreas es uno de los procedimientos más eficaces para conseguir una enseñanza más individualizada que permita atender a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado.

ENMIENDA NÚM. 711

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 sexies (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31 (sexto) con la siguiente redacción:

«Artículo 31 (sexto). La organización del currículo.

1. Las Administraciones educativas revisarán la organización del currículo de los dos primeros cursos

de la Educación Secundaria Obligatoria con el fin de reagrupar las áreas y concentrar los horarios para disminuir así el número de Profesores distintos que imparten clase a un mismo grupo de alumnos.

2. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, reorganizará el currículo de los cursos tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, incrementando el número de horas destinadas a materias optativas, para favorecer tanto la consolidación de los aprendizajes básicos de todo el alumnado como la elección de algunas áreas o materias que puedan responder a los diferentes intereses, motivaciones y capacidades del alumnado.

3. Las Administraciones educativas determinarán las materias optativas a cursar durante la Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, los centros tendrán autonomía para organizar esta oferta e informarán al alumnado y a sus familias sobre la elección que puede resultar más adecuada.»

MOTIVACIÓN

La reducción del número de áreas y Profesores distintos que imparten clase a un mismo grupo de alumnos y el incremento de las horas destinadas a materias optativas para poder atender a la diversidad del alumnado son demandas generalizadas del profesorado que imparte la Educación Secundaria Obligatoria.

ENMIENDA NÚM. 712

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 septies (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31.septies, con la siguiente redacción:

«Artículo 31 (séptimo). Los programas de diversificación curricular.

1. En la definición de las enseñanzas mínimas, el Gobierno fijará las condiciones en que, para determinados alumnos al comienzo del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, previa su oportuna evaluación, puedan establecerse diversificaciones del currículo en los centros ordinarios. En este supuesto, los objetivos de esta etapa y, por tanto, el Título de Graduado, se alcanzarán con una metodología específica, a través de contenidos e, incluso, de áreas diferentes a las establecidas con carácter general. En cualquier caso, las enseñanzas mínimas determinarán la parte común del currículo que los alumnos cursarán con su grupo ordinario, así como las actividades específicas de estos programas de diversificación.

2. La duración de los programas de diversificación curricular será de un curso para los alumnos que se incorporen en cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria y de dos cursos en los demás casos.

3. Todos los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria deberán ofrecer, al menos, un programa de diversificación curricular. El número de los programas impartidos se incrementará en función del número de alumnos y del contexto social en el que el centro esté situado. Los centros contarán con los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar tales programas.»

MOTIVACIÓN

El éxito de los programas de diversificación curricular en la Educación Secundaria Obligatoria aconsejan potenciar su oferta en todos los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria.

ENMIENDA NÚM. 713

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 octies (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31 octies, con la siguiente redacción:

«Artículo 31 (octavo). Los Programas de Garantía Social.

1. Para los alumnos mayores de dieciséis años que no obtengan el Título de Graduado en Educación Secundaria ni a través del currículo ordinario ni cursando un programa de diversificación curricular, se organizarán programas específicos de garantía social, tal y como se regula en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

2. Los alumnos, al finalizar los Programas de Garantía Social, podrán presentarse a las pruebas a que se refiere el artículo 52.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

3. En todo caso, los alumnos recibirán, al finalizar los Programas de Garantía Social, una acreditación en

la que consten los años, las áreas y las materias cursadas, así como una orientación sobre el futuro académico y profesional del alumno.»

MOTIVACIÓN

La oferta de Programas de Garantía Social para el alumnado que, a pesar de la aplicación de las medidas señaladas anteriormente, no consiga alcanzar el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria es una medida necesaria para facilitar la transición de este alumnado a la vida laboral y para facilitar que se presenten a las pruebas a las que se hace referencia en el punto 2 de este artículo.

ENMIENDA NÚM. 714

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 nonies (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31 nonies con la siguiente redacción:

«Artículo 31. Los Programas de servicio a la comunidad para alumnos.

Los alumnos a partir de los catorce años podrán realizar, con carácter voluntario, actividades de servicio a la comunidad con el fin de desarrollar sus valores sociales. Dichas actividades serán planificadas por los centros educativos y se orientarán al apoyo a grupos o personas necesitadas, al cuidado del medio ambiente y a la participación en programas de cooperación y solidaridad. El tiempo anual que cada alumno dedique a estas actividades se recogerá en su expediente académico. Las Administraciones educativas facilitarán la realización de este tipo de actividades de servicio a la comunidad y dotarán a los centros de los profesores y otros profesionales necesarios para asegurar su adecuada puesta en práctica.»

MOTIVACIÓN

Fomentar la participación del alumnado en actividades de servicio a la comunidad como forma de potenciar el desarrollo de valores básicos como la solidaridad.

ENMIENDA NÚM. 715

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo V ter (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un Capítulo V ter con la siguiente rúbrica: «Recursos»

MOTIVACIÓN

El conjunto de las medidas incorporadas en los artículos de los dos Capítulos nuevos propuestos en el Título I requieren la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para su desarrollo.

ENMIENDA NÚM. 716

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 31 decies (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 31 (décimo) con la siguiente redacción:

«Artículo 31 (décimo). Profesorado y materiales de apoyo.

1. Las Administraciones educativas, en la configuración de las plantillas de los centros, incorporarán el profesorado necesario para desarrollar las medidas de prevención del fracaso escolar recogidas en el presente Título; en particular, las que se refieren a las horas formativas complementarias, los desdoblamientos de grupos de alumnos, los programas de diversificación curricular y de garantía social, así como la ampliación de las materias optativas.

2. Así mismo, las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa y la elaboración de materiales de desarrollo curricular con el fin de facilitar al profesorado los recursos necesarios para atender a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado y, de esta forma, prevenir el fracaso escolar.»

MOTIVACIÓN

La necesidad de dotar a los centros del profesorado necesario para aplicar el conjunto de las medidas con-

templadas en el Título I, así como el fomento de proyectos de innovación e investigación educativa y la elaboración de materiales de desarrollo curricular con el fin de facilitar al profesorado los recursos necesarios para atender a la diversidad del alumnado.

ENMIENDA NÚM. 717

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Sección 2.ª del Capítulo V del Título I

De supresión.

MOTIVACIÓN

Por no compartir las novedades que incorporan a la regulación actual del Bachillerato. En particular, la supresión de la modalidad de Tecnología y la necesidad de superar una Prueba General de Bachillerato para obtener el Título de Bachiller. El resto es copia de la LOGSE.

ENMIENDA NÚM. 718

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 32, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 719

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 32, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 720

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 32, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 721

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 33, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 722

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 33, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 723

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 724

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 725

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 726

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 727

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 728

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 6

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 729

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 7

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 730

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 8

De supresión.

MOTIVACIÓN

Ya recogido en una enmienda anterior en la que se promuevan medidas específicas para el fomento de la lectura.

ENMIENDA NÚM. 731

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 34, apartado 9

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 732

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 35

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 733

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 36

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 734

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo VI del Título I

De supresión.

MOTIVACIÓN

Las pocas novedades que añade a la legislación vigente son para empeorarla.

ENMIENDA NÚM. 735

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 37, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 736

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 37, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 737

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 37, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 738

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 37, apartados 4 y 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 739

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 38

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 740

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Sección 1.ª del Capítulo VII del Título I

De supresión.

MOTIVACIÓN

Las novedades a la legislación vigente contenidas en esta Sección están mejor recogidas en el nuevo Título I bis «De la compensación de las desigualdades».

ENMIENDA NÚM. 741

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 39

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda de supresión de la Sección 1.ª

ENMIENDA NÚM. 742

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título I

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada sustancial a la legislación vigente y cuando se regula alguna novedad es para empeorarla.

ENMIENDA NÚM. 743

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 40, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Obviedad impropia de una Ley.

ENMIENDA NÚM. 744

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 40, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Otra obviedad impropia de una Ley que además ya están haciendo todas las Administraciones educativas.

ENMIENDA NÚM. 745

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 40, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Ya regulado en la actualidad en normativa de diferente rango y que además ya están haciendo todas las Administraciones educativas.

ENMIENDA NÚM. 746

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 40, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Es totalmente improcedente plantearse la posibilidad de especializar centros para escolarizar a alumnos superdotados.

ENMIENDA NÚM. 747

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 40, apartado 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

Otra obviedad impropia de una Ley que además ya están haciendo todas las Administraciones educativas.

ENMIENDA NÚM. 748

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Sección 3.ª del Capítulo VII del Título I

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada sustancial a la legislación vigente y cuando se regula alguna novedad es para empeorarla.

ENMIENDA NÚM. 749

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 41, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 750

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 41, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 751

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 42, apartados 1 y 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 752

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 42, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente, salvo un añadido que puede suponer la ruptura del principio de normalización y de integración escolar de este alumnado.

———

ENMIENDA NÚM. 753

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 43, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 754

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 43, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 755

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 44, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 756

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 44, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 757

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 44, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 758

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45

De supresión

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 759

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Título I bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un Título 1 bis con la siguiente rúbrica:

«Título I bis. De la compensación de las desigualdades»

MOTIVACIÓN

Desarrollar un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar la integración real del alumnado cuyas deficiencias educativas le impiden desarrollar un adecuado progreso escolar.

ENMIENDA NÚM. 760

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo VII bis (nuevo) del Título I bis

De adición

Se propone la adición de un Capítulo VII bis, con la siguiente rúbrica:

«Capítulo VII bis. Zonas y centros de atención preferente»

MOTIVACIÓN

Necesidad de desarrollar actuaciones específicas para prevenir el fracaso escolar en zonas y centros que escolarizan un número significativo de alumnos con dificultades.

ENMIENDA NÚM. 761

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 bis (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un artículo 45 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 45 bis. Principios generales.

Las Administraciones Educativas adoptarán medidas específicas, complementarias a las establecidas en el Título V de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en aquellos centros y zonas en las que exista una concentración importante de población cuyas condiciones socioeconómicas dificulten un adecuado progreso escolar de los alumnos. En particular, se dotarán a estos centros y zonas con medios materiales y apoyos específicos, facilitándose, asimismo, mediante los oportunos incentivos profesionales, la incorporación de profesores con la formación y experiencia necesaria para la atención a estos alumnos, así como la estabilidad de los correspondientes equipos pedagógicos.»

MOTIVACIÓN

Hacer énfasis en la necesidad de asegurar la calidad de la enseñanza en los centros y zonas que necesitan de una atención especial por parte de las Administraciones Educativas.

ENMIENDA NÚM. 762

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 ter (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un artículo 45 ter con la siguiente redacción:

«Artículo 45 ter. Programas integrales socio-comunitarios para reducir el fracaso escolar.

1. Los poderes públicos determinarán los centros y las zonas de atención preferente en los que resulte necesario ampliar los recursos materiales y humanos en los términos referidos en el artículo anterior.

2. Las Administraciones educativas establecerán un plan específico de actuación para apoyar a los centros y a las zonas de atención preferente en el que figurarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) La reducción de la ratio a 15 alumnos por aula;

b) El incremento de los recursos económicos para gastos de organización y funcionamiento de los centros;

c) La ampliación de la dotación de profesores y el establecimiento de acuerdos con los Ayuntamientos para que los trabajadores sociales, mediadores culturales y otros profesionales puedan trabajar tanto con el alumnado que lo requiera como con sus familias;

d) El fomento de la estabilidad de los equipos de profesores mediante el establecimiento de planes de actuación plurianuales. Dichos planes incluirán la garantía de estabilidad de los equipos docentes, así como los oportunos incentivos salariales y el reconocimiento de los méritos que procedan, a los efectos de facilitar la movilidad de aquellos profesores que lo deseen una vez finalizados los mencionados planes.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior, concretar el tipo de medidas que deben adoptar las Administraciones educativas en estos centros y zonas de atención educativa preferente.

ENMIENDA NÚM. 763

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo VII ter (nuevo) del Título I bis

De adición

Se propone la adición de un Capítulo VII ter con la siguiente rúbrica:

«Capítulo VII ter. De la atención educativa al alumnado inmigrante»

MOTIVACIÓN

La escolarización de los alumnos procedentes de familias inmigrantes no puede limitarse a la oferta de una plaza escolar. Las administraciones educativas deben tomar medidas para garantizar la integración real de estos alumnos en el sistema educativo español.

ENMIENDA NÚM. 764

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 quáter (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un artículo 45 quáter, con la siguiente redacción:

«Artículo 45 quáter. Principios generales.

Los poderes públicos desarrollarán las actuaciones precisas para garantizar la integración de los alumnos procedentes de familias inmigrantes en el sistema educativo español y la compensación, cuando fuera preciso, de sus deficiencias educativas.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 765

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 quinquies (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un artículo 45 quinquies, con la siguiente redacción:

«Artículo 45 (quinquies). Centros de recursos.

Las Administraciones educativas crearán centros de recursos y constituirán equipos de acogida para estudiar la situación educativa, personal, familiar y social del alumnado inmigrante y decidir las mejores condiciones de escolarización, el centro y el curso adecuados, así como los recursos precisos.»

MOTIVACIÓN

Con el fin de garantizar la eficacia pedagógica de las actuaciones y medidas a adoptar por las administraciones educativas.

ENMIENDA NÚM. 766

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 sexies (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un artículo 45 sexies, con la siguiente redacción:

«Artículo 45 (sexies). Programas de inmersión lingüística.

1. Las Administraciones educativas organizarán programas de inmersión lingüística para el alumnado que lo necesite. Estos programas se organizarán por zonas o por centros según el alumnado implicado.

2. En función de las características del alumnado, de los centros y de las zonas correspondientes, las Administraciones educativas, a partir del informe de los equipos de acogida señalados en el artículo anterior, determinarán las modalidades en las que se desarrollan estos programas.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior, el desarrollo de programas de inmersión lingüística para el alumnado que desconozca nuestras lenguas.

ENMIENDA NÚM. 767

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 septies (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un artículo 45 septies, con la siguiente redacción:

«Artículo 45 (septies). Programas de prevención del fracaso escolar.

Las Administraciones educativas dotarán a los centros que escolaricen alumnado inmigrante, cuya incorporación al sistema educativo español se haya producido con retraso, con los medios personales y económicos necesarios para que organicen las intervenciones específicas que les permitan recuperar dicho retraso y obtener el Título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.»

MOTIVACIÓN

Dotar a los centros de los recursos necesarios para atender al alumnado inmigrante cuya incorporación al sistema educativo se haya producido con retraso.

ENMIENDA NÚM. 768

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 octies (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 45 octies, con la siguiente redacción:

«Artículo 45 (octies). Escolarización.

Las Administraciones educativas impulsarán la elaboración de programas de integración del alumnado

inmigrante en los centros sostenidos con fondos públicos que lo necesiten y asegurarán que su escolarización se produce sin ningún tipo de discriminación en el centro al que deseen acudir. Las Comisiones de escolarización a las que se refiere el artículo 59 de la presente Ley velarán por que exista una distribución equitativa del alumnado inmigrante entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.»

MOTIVACIÓN

Garantizar una distribución equitativa del alumnado inmigrante entre todos los centros sostenidos con fondos públicos para evitar la concentración de este alumnado en determinados centros, lo que dificultaría la eficacia de la intervención educativa con todo el alumnado.

ENMIENDA NÚM. 769

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 nonies (nuevo)

De adición.

Se propone la creación de un artículo 45 nonies, con la siguiente redacción:

«Artículo 45 (nonies). Recursos y formación.

Las administraciones educativas fomentarán:

a) La elaboración de programas y diseños curriculares específicos que sirvan de guía y orientación, fundamentalmente para los casos de incorporación tardía al sistema escolar, de proyectos de acción tutorial específica y la distribución a los centros de las experiencias educativas desarrolladas en otros países y en las distintas Comunidades Autónomas;

b) El desarrollo de planes específicos de formación del profesorado que tengan en cuenta los contenidos de la educación intercultural, así como los aspectos curriculares, metodológicos y organizativos que se derivan de las dificultades educativas asociadas a la incorporación tardía del alumnado inmigrante;

c) La creación de un "banco de buenas prácticas", con la colaboración de otros paises con experiencia en este ámbito; y

d) La realización de proyectos de innovación e investigación educativa, en colaboración con las Universidades y la formación en éstas de los especialistas necesarios para educar a los alumnos procedentes de familias inmigrantes.»

MOTIVACIÓN

Garantizar la prevención del fracaso escolar y la calidad de la enseñanza impartida a este alumnado mediante la dotación a los centros de los recursos humanos y materiales necesarios.

ENMIENDA NÚM. 770

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 45 (decies) (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un artículo 45 (décimo), con la siguiente redacción:

«Artículo 45 (decies). Convenios.

1. El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, firmará convenios de colaboración con aquellos países de los que procede más comúnmente el alumnado inmigrante para, entre otras cuestiones, incorporar a los centros o zonas que se determine profesores nativos de apoyo.

2. Las Administraciones educativas podrán firmar convenios con las Administraciones locales y otras instituciones para garantizar la intervención de trabajadores sociales y mediadores culturales en las tareas de coordinación educativa del centro con las familias.»

MOTIVACIÓN

El intercambio de materiales de apoyo con otros países y la incorporación de profesores nativos son medidas contrastadas para mejorar la intervención educativa con este alumnado, que además requiere la intervención de otros profesionales para facilitar, entre otras cosas, las tareas de coordinación educativa del centro con las familias.

ENMIENDA NÚM. 771

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Título II

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada sustancial a la legislación vigente y cuando se regula alguna novedad es para empeorarla, en particular invadiendo competencias de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 772

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 46, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

La legislación específica sobre las Escuelas Oficiales de Idiomas ya está establecida por las diferentes Administraciones educativas.

ENMIENDA NÚM. 773

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 46, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

La estructura básica de estas enseñanzas ya está establecida en legislación específica sobre las Escuelas Oficiales de Idiomas.

ENMIENDA NÚM. 774

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 46, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 775

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 46, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 776

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 46, apartado 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 777

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 47, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 778

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 47, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 779

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 47, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 780

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 47, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 781

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 48

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente. Es una invasión de competencias de las Comunidades Autónomas establecer, por Ley, que estas pruebas deben ser realizadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

ENMIENDA NÚM. 782

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Título III

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada sustancial a la legislación vigente y cuando se regula alguna novedad es para empeorarla.

ENMIENDA NÚM. 783

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 49, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 784

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 49, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 785

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 49, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 786

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 49, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 787

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 49, apartado 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 788

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 49, apartado 6

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 789

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 50, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 790

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 50, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 791

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 50, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 792

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 51, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 793

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 51, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 794

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 51, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

———

ENMIENDA NÚM. 795

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 51, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 796

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 51, apartado 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 797

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 51, apartado 6

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 798

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 52

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 799

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la rúbrica del Título IV

De modificación

Se propone la modificación de la rúbrica del Título IV, con la siguiente redacción:

«Título IV. Del Profesorado».

MOTIVACIÓN

En coherencia con el contenido de los artículos de este Título.

ENMIENDA NÚM. 800

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo I

De modificación.

Se propone la modificación del Capítulo I del Título IV que pasará a constituir un «Capítulo Único».

MOTIVACIÓN

El conjunto de medidas que se regulan en este Título no se puede agrupar en los dos Capítulos propuestos.

ENMIENDA NÚM. 801

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 53, letra b)

De modificación

Se propone la modificación de la letra b) del artículo 53, con la siguiente redacción:

«b) Favorecer que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática.»

MOTIVACIÓN

Las actitudes no se transmiten, se practican y se reflexiona sobre ellas en todas las actividades del centro.

ENMIENDA NÚM. 802

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 53, letra c)

De modificación

Se propone la modificación de la letra c) del artículo 53, con la siguiente redacción:

«c) El seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, colaborando con el profesor tutor y con las familias en la adopción de las medidas necesarias para mejorar el aprendizaje del alumnado.»

MOTIVACIÓN

La importancia de remarcar la colaboración con las tareas de tutoría y con las familias para mejorar los resultados del aprendizaje del alumnado.

ENMIENDA NÚM. 803

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 53, letra d)

De modificación.

Se propone la modificación de la letra d) del artículo 53, con la siguiente redacción:

«d) La colaboración, con los servicios o departamentos especializados en orientación, en el proceso de orientación educativa, académica y profesional de los alumnos.»

MOTIVACIÓN

Se trata de definir el motivo de la cooperación con los servicios o departamentos de orientación.

ENMIENDA NÚM. 804

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 53, letra e)

De modificación

Se propone la modificación de la letra e) del artículo 53, con la siguiente redacción:

«e) La realización de las tareas docentes, de coordinación y de gestión del centro que les sean asignadas en el marco de la Programación General Anual.»

MOTIVACIÓN

La importancia de remarcar la necesidad de la distribución del conjunto de las tareas que realiza el profesorado en un centro en el marco de la Programación General Anual.

ENMIENDA NÚM. 805

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 53, letra f)

De supresión.

MOTIVACIÓN

Ya incluido en la redacción propuesta de la letra e).

ENMIENDA NÚM. 806

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 53, letra g)

De modificación.

Se propone la modificación de la letra g) del artículo 53, con la siguiente redacción:

«g) La participación en proyectos de innovación, experimentación e investigación educativa, así como en actividades de formación que faciliten su actualización científica y didáctica.»

MOTIVACIÓN

Hay que indicar mecanismos que pueden facilitar la mejora de los procesos de enseñanza, no indicar simplemente que se deben mejorar.

ENMIENDA NÚM. 807

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al número del Capítulo I del Título IV

De modificación.

El Capítulo I pasará a constituir un nuevo Capítulo Único.

MOTIVACIÓN

En coherencia con el conjunto de enmiendas presentadas a este Título.

ENMIENDA NÚM. 808

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 54

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 54, con la siguiente redacción:

«Artículo 54. Principios generales.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para mejorar las condiciones en las que los profesores desarrollan su trabajo, para incrementar su valoración social, así como para facilitar la incorporación de nuevos docentes, reformar la formación inicial y potenciar los programas de formación permanente.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con el resto de las enmiendas presentadas a este Título.

ENMIENDA NÚM. 809

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 55

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 55, con la siguiente redacción:

«Artículo 55. Formación inicial.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-

ción General del Sistema Educativo, para impartir la enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria, la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial, será necesario estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica.

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las características de los estudios necesarios para obtener el TítuloPprofesional de Especialización Didáctica. Dicho Título, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se obtendrá tras la superación de un curso de cualificación pedagógica, cuyos contenidos, duración y organización se establecerán por el Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, este curso tendrá una duración mínima de un curso académico e incluirá materias teóricas y prácticas docentes.

3. Las Comunidades Autónomas organizarán la impartición de los estudios conducentes a dicho Título, pudiendo establecer, a estos efectos, los oportunos convenios de colaboración con las Universidades. Las Comunidades Autónomas podrán, así mismo, establecer el número máximo de plazas existentes para la obtención del Título Profesional de Especialización Didáctica en función tanto de las necesidades del sistema educativo como de las posibilidades de impartición de las correspondientes enseñanzas.

4. El profesorado que imparta estas enseñanzas, tanto en su vertiente teórica como práctica, procederá, prioritariamente y, al menos, en un porcentaje del 50 por 100, del cuerpo de profesores de Secundaria. A tal fin, se establecerán los oportunos mecanismos de promoción interna dentro de la carrera profesional.

5. El profesorado que ingrese en los cuerpos docentes a que se refiere la adicional novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo deberá realizar una fase práctica antes de adquirir la condición definitiva de funcionario. Para la realización de dicha fase práctica, en la que se incluirán los oportunos cursos de formación, los profesores dispondrán de la mitad de su jornada lectiva durante dos cursos académicos.»

MOTIVACIÓN

Propuesta de nueva regulación del Título Profesional de Especialización Didáctica adecuado a las actuales necesidades del profesorado de Secundaria.

ENMIENDA NÚM. 810

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 56

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 56, con la siguiente redacción:

«Artículo 56. Formación Permanente.

1. Las Administraciones educativas elaborarán planes de formación permanente para el profesorado con el fin de facilitar su actualización científica y didáctica, así como su promoción profesional. Para la elaboración de estos planes, las Administraciones educativas tendrán en cuenta las recomendaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Evaluación.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colaborará, a través del Centro de Investigación y Cooperación Educativa, con las Comunidades Autónomas en el diseño y desarrollo de planes de formación permanente del profesorado.

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá, así mismo, organizar actividades de formación del profesorado en coordinación con las Administraciones educativas.

4. La Conferencia Sectorial de Educación, oídos los representantes del profesorado, determinará los efectos de la participación en las actividades de formación permanente en los concursos de traslados y en la promoción profesional.

5. Los planes de formación permanente prestarán una especial atención a los siguientes aspectos:

a) La colaboración con las familias para favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado y la convivencia en los centros;

b) Formación específica para que el profesorado pueda usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como una herramienta útil en las clases de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas;

c) Los equipos directivos en un contexto de autonomía de los centros;

d) La tutoría como una de las líneas centrales de actuación en un sistema educativo que tiene como eje la atención a la diversidad del alumnado;

e) Atención educativa al alumnado inmigrante;

f) Estancias formativas en empresas, especialmente para el profesorado de formación profesional;

g) El acceso de los profesores a las titulaciones que les permitan la promoción entre los distintos niveles educativos, incluidos los universitarios.

6. Las diferentes actuaciones en el ámbito de la formación permanente se realizarán en las modalidades que se consideren más adecuadas. En cualquier caso, se potenciarán, especialmente, los proyectos de formación en centros, el intercambio de experiencias como uno de los ejes de la formación, así como la constitución de equipos de investigación y experimentación educativa integrados por profesorado de los niveles anteriores a la Universidad y profesorado universitario.

7. Las Administraciones educativas arbitrarán las medidas necesarias para que el profesorado pueda participar en las actividades de formación, tanto en las que se realicen fuera del período lectivo como aquellas otras que, por sus características, se desarrollen dentro del mismo.

8. Los Centros educativos, una vez aprobada por la Administración educativa la plantilla de profesores para cada curso académico, podrán eximir, total o parcialmente, a algún miembro de ésta con el fin de que pueda participar en determinadas actividades de formación o en la realización de proyectos de innovación e investigación educativa que puedan facilitar la mejora de los procesos educativos del propio centro.»

MOTIVACIÓN

Remarcar la importancia de tener en cuenta las recomendaciones del Instituto Nacional de Evaluación, las líneas fundamentales de formación, el papel de la Conferencia Sectorial en este ámbito y la autonomía de los centros en la organización del trabajo de la plantilla de profesores para participar en este tipo de actividades.

ENMIENDA NÚM. 811

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 56 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 56 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 56 bis. Nuevo complemento retributivo.

1. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y previa negociación con los representantes del profesorado, establecerá un nuevo complemento retributivo ligado a la evaluación de la práctica docente, cuya cuantía será similar a la percibida por los actuales sexenios de formación.

2. Esta evaluación tendrá carácter voluntario y se desarrollará, con carácter individual, cada seis años.

3. La evaluación se realizará siguiendo lo establecido en el artículo 68 de la presente Ley.»

MOTIVACIÓN

Establecer un nuevo complemento retributivo ligado a la evaluación voluntaria de la práctica docente como incentivo al profesorado.

ENMIENDA NÚM. 812

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 56 ter (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un nuevo artículo 56 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 56 ter. Promoción profesional.

Las Administraciones educativas establecerán los mecanismos necesarios para facilitar la promoción profesional del profesorado, tanto dentro de una misma etapa educativa como entre las distintas etapas. Para ello adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Un sistema que asegure la movilidad entre los distintos cuerpos docentes, incluidos los universitarios. En particular, se facilitará el acceso de profesores de los niveles educativos anteriores a la Universidad a las plazas universitarias correspondientes a titulaciones relacionadas con la educación, singularmente las de aquellos centros en los que se imparta el Título Profesional de Especialización Didáctica;

b) La catalogación de determinados puestos de trabajo de las Administraciones educativas o de otras instituciones relacionadas con la educación, para funcionarios docentes.»

MOTIVACIÓN

La importancia de establecer mecanismos que faciliten la promoción profesional del profesorado.

ENMIENDA NÚM. 813

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Capítulo II del Título IV

De supresión.

MOTIVACIÓN

No tiene sentido denominar «De la valoración de la función pública docente» a unas declaraciones generales sobre planes de valoración del profesorado, a la evaluación voluntaria de la práctica docente y a un conjunto de medidas dispersas de apoyo al profesorado.

ENMIENDA NÚM. 814

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 57, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Copia del artículo 30, apartado 1, de la LOPEGCEDCED.

ENMIENDA NÚM. 815

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 57, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Copia del artículo 30, apartado 2, de la LOPEGCEDCED.

ENMIENDA NÚM. 816

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 57, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Copia del artículo 30, apartado 3, de la LOPEGCEDCED al que se añade una declaración genérica al final de un mayor reconocimiento social de la función docente.

ENMIENDA NÚM. 817

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 58

De supresión.

MOTIVACIÓN

Se propone la modificación del contenido de este artículo ubicado en el Título de la evaluación del sistema educativo, sin desligarlo del resto de los procesos de evaluación.

ENMIENDA NÚM. 818

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 58 bis (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un nuevo artículo 58 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 58 bis. Período sabático.

El profesorado tendrá derecho a un período sabático en el transcurso de su vida profesional, con el fin de facilitar la actualización científica y didáctica de sus conocimientos mediante la participación en las diferentes actividades de formación permanente o en el desa-

rrollo de proyectos de innovación e investigación educativa.»

MOTIVACIÓN

Regular un período sabático para facilitar la actualización científica y didáctica del profesorado.

ENMIENDA NÚM. 819

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 58 ter (nuevo)

De adición

Se propone la adición de un nuevo artículo 58 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 58 ter. Puestos de difícil desempeño.

1. Las Administraciones educativas, previa negociación con los representantes del profesorado, establecerán un catálogo de puestos considerados de difícil desempeño por la zona en la que se encuentra ubicado un centro o por las características del alumnado. Entre estos puestos se incluirán, en todo caso, los correspondientes a los centros y zonas de atención educativa preferente.

2. Las Administraciones educativas, previa negociación con los representantes del profesorado, determinarán los incentivos económicos y profesionales que se aplicarán al profesorado que ocupe estos puestos de trabajo.»

MOTIVACIÓN

Establecer incentivos económicos y profesionales en determinados puestos para incrementar la estabilidad del profesorado en los mismos.

ENMIENDA NÚM. 820

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 58 quáter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 58 quáter, con la siguiente redacción:

«Artículo 58 (quáter). La tutoría en la Educación Secundaria Obligatoria.

El profesorado que ejerza la función de tutor en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá el mismo número de horas lectivas y el mismo complemento específico para el desarrollo de sus funciones que los jefes de los departamentos didácticos.»

MOTIVACIÓN

Concretar las declaraciones genéricas de incentivos a los tutores con una medida que iguala la importancia de la coordinación horizontal en la Educación Secundaria Obligatoria con la coordinación vertical que se realiza a través de los departamentos didácticos.

ENMIENDA NÚM. 821

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 58 quinquies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 58 quinquies, con la siguiente redacción:

«Artículo 58 (quinquies). Reducción de jornada y jubilación.

1. Los profesores mayores de 55 años tendrán una reducción de un tercio de las horas lectivas de su jornada, sin merma de sus retribuciones. Realizarán, entre otras, durante ese tiempo, actividades de formación para el profesorado de nueva incorporación.

2. Se establecerá, con carácter general, la jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.»

MOTIVACIÓN

Mejorar las condiciones de trabajo del profesorado de más de 55 años y utilizar su experiencia en el desarrollo de otras actividades en el centro, así como exten-

der el modelo de jubilación voluntaria que se ha llevado a cabo durante los últimos años.

ENMIENDA NÚM. 822

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 58 sexies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 58 sexies con la siguiente redacción:

«Artículo 58 sexies. Asistencia jurídica y salud laboral.

1. Las Administraciones educativas establecerán un seguro para todo el profesorado de los centros públicos que les garantice la cobertura y la asistencia jurídica necesaria en relación con las actividades realizadas en su ejercicio profesional.
2. Las Administraciones educativas aplicarán todas las medidas derivadas de la Ley de prevención de riesgos laborales y adoptarán las iniciativas que correspondan, tales como formación, elaboración de mapas de riesgo y aplicación de revisiones médicas.»

MOTIVACIÓN

Garantizar la asistencia jurídica y mejorar la salud laboral.

ENMIENDA NÚM. 823

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 58 septies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 58 septies, con la siguiente redacción:

«Artículo 58 septies. Estatuto de la Función Docente.

El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y previa negociación con los representantes del profesorado, establecerá un nuevo Estatuto de la Función Docente, en el que se recojan los derechos y deberes del profesorado de la educación pública. En todo caso, en dicho Estatuto, se incorporarán las medidas recogidas en el presente Título.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de establecer un nuevo Estatuto de la Función Docente para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y establecer sus deberes profesionales.

ENMIENDA NÚM. 824

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 58 octies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 58 octies, con la siguiente redacción:

«Artículo 58 octies. Homologación del profesorado de los centros privados concertados.

El Gobierno, previa consulta con los representantes del profesorado, presentará a la Conferencia Sectorial de Educación, para su aprobación, un calendario que contemple la plena homologación del profesorado de los centros concertados con el de los centros públicos en lo que se refiere a aspectos como acceso, retribuciones, formación inicial y permanente, jornada y participación».

MOTIVACIÓN

Establecer un procedimiento que permita avanzar en la homologación del profesorado de los centros privados concertados con el profesorado de los centros públicos.

ENMIENDA NÚM. 825

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59, apartado 1, letra a)

De supresión.

MOTIVACIÓN

Declaración genérica ya concretada en el nuevo artículo propuesto sobre la tutoría en la Educación Secundaria Obligatoria.

ENMIENDA NÚM. 826

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59, apartado 1, letra b)

De supresión.

MOTIVACIÓN

Ya recogido en el nuevo artículo 58 quinquies, propuesto de adición.

ENMIENDA NÚM. 827

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59, apartado 1, letra c)

De supresión.

MOTIVACIÓN

Declaración genérica ya concretada en los diferentes nuevos artículos propuestos en este Título.

ENMIENDA NÚM. 828

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59, apartado 1, letra d)

De supresión.

MOTIVACIÓN

Declaración genérica ya concretada en los diferentes nuevos artículos propuestos en este Título.

ENMIENDA NÚM. 829

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59, apartado 1, letra e)

De supresión.

MOTIVACIÓN

Declaración genérica ya concretada en el nuevo artículo sobre el año sabático propuesto en este Título.

ENMIENDA NÚM. 830

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Ya recogido en el nuevo artículo 58 sexies propuesto en este Título.

ENMIENDA NÚM. 831

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Título IV bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo Título IV bis con la siguiente rúbrica:

«TÍTULO IV Bis. De la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos.»

MOTIVACIÓN

La importancia que deben tener las familias en la mejora del rendimiento académico de sus hijos requiere un Título específico en una Ley que pretende mejorar el sistema educativo.

ENMIENDA NÚM. 832

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 59 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 59 bis. Principios generales.

Los poderes públicos establecerán los mecanismos necesarios para incrementar la participación de las familias en el sistema educativo con el objetivo de mejorar el rendimiento de los alumnos, la convivencia en los centros y la educación en valores.»

MOTIVACIÓN

Destacar la necesidad de incrementar la participación de las familias en aspectos básicos para el mejor funcionamiento del sistema educativo.

ENMIENDA NÚM. 833

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59 ter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 59 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 59 ter. Familia y Escuela.

Las Administraciones educativas promoverán:

a) Los mecanismos de diálogo y colaboración efectiva entre la familia y la escuela, en el marco de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y de los Consejos Escolares de centro, para conseguir una mayor implicación y corresponsabilidad en el funcionamiento de los centros;

b) La conexión de las familias con los centros educativos a través de Internet, facilitando, progresivamente, que todas las familias que tengan hijos en la educación obligatoria dispongan de un ordenador con conexión gratuita a Internet;

c) La ampliación del horario de apertura de los centros para cubrir las necesidades de las familias que lo necesiten a causa del horario laboral de los padres, organizar escuelas de padres y madres y las actividades educativas complementarias contempladas en el artículo 6 de la presente Ley;

d) La gratuidad de los libros de texto durante la educación obligatoria;

e) La dotación a los centros públicos que impartan educación obligatoria de comedor escolar.»

MOTIVACIÓN

La obligación de responder a las nuevas demandas de la sociedad y la necesidad de adoptar medidas de apoyo a las familias.

ENMIENDA NÚM. 834

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59 quáter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 59 quáter, con la siguiente redacción:

«Artículo 59 quáter. Formación y materiales de apoyo.

Las Administraciones educativas promoverán la realización de actividades de formación para los equipos directivos, los tutores y las familias y estimularán la existencia de contratos pedagógicos entre las familias y la escuela, en los que se consignen las actividades que, siempre en el estricto ámbito de sus respectivas responsabilidades, padres y profesores se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. Así mismo, fomentarán la elaboración de documentación de apoyo para mejorar la implicación de las familias en la educación de sus hijos.»

MOTIVACIÓN

Adoptar medidas relacionadas con la formación y la elaboración de materiales de apoyo para incrementar las relaciones entre la familia y los centros.

ENMIENDA NÚM. 835

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 59 quinquies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 59 quinquies, con la siguiente redacción:

«Artículo 59 quinquies. Programas específicos para facilitar el apoyo de las familias a sus hijos en el proceso de aprendizaje.

1. Los centros educativos podrán establecer programas específicos para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, siempre que estimen que dichos apoyos pueden mejorar el rendimiento académico de los mencionados alumnos. Estos programas incorporarán las actividades de información y formación necesarias para facilitar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, así como la participación de las mismas en el desarrollo de los programas definidos por el centro.

2. Los programas de apoyo serán propuestos por el profesor tutor del alumno correspondiente con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación y deberán obtener el visto bueno de la dirección del centro y de la inspección educativa.

3. Para la puesta en marcha de esos programas, las Administraciones educativas facilitarán a los centros los recursos y medios personales y materiales necesarios. Con este fin, podrán, asimismo, recabar el apoyo de los correspondientes servicios municipales.

4. En el supuesto de que los padres hubieran de participar activamente en el desarrollo de los programas a que se refiere el presente artículo y alguno de ellos, o los dos, trabajaran a tiempo completo, el programa especificará la dedicación horaria a que se extiende el compromiso de participación de los mismos para que, dado el caso de que hubiera coincidencia entre esta dedicación y la jornada laboral, los padres que trabajen por cuenta ajena puedan ejercitar los correspondientes derechos laborales a permisos, reducciones o, en su caso, suspensiones, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, los funcionarios públicos tendrán derecho a los correspondientes permisos y reducciones, con el fin de que puedan participar en estos programas específicos, cuando hubiera coincidencia horaria entre la prestación del servicio y la dedicación a que se extiende el compromiso de participación.»

MOTIVACIÓN

Establecer programas específicos de colaboración entre las familias y los centros para mejorar el aprendizaje de sus hijos con diferentes modalidades y tiempos de participación.

ENMIENDA NÚM. 836

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Título V

De modificación.

Se propone la modificación de la rúbrica del Título y, con la siguiente redacción:

«Título V. De la Organización y Funcionamiento de los Centros.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas al articulado de este Título.

ENMIENDA NÚM. 837

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la rúbrica del Capítulo I de Título V

De modificación.

Se propone la modificación de la rúbrica del Capítulo I del Título V, con la siguiente redacción:

«Capítulo I. De la organización de los Centros.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas a este Capítulo.

ENMIENDA NÚM. 838

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Sección 1.ª del Capítulo 1 del Título V

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas a esta sección.

ENMIENDA NÚM. 839

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 61, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Este apartado no añade nada nuevo a la normativa vigente, al estar ya establecida la clasificación de los centros.

ENMIENDA NÚM. 840

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 61, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Este apartado no añade nada nuevo a la normativa vigente.

ENMIENDA NÚM. 841

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 61, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Este apartado no añade nada nuevo a la normativa vigente.

ENMIENDA NÚM. 842

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la rúbrica del artículo 62

De supresión.

MOTIVACIÓN

El contenido de este artículo ya está reglado en la legislación educativa vigente y sólo añade confusión a la misma.

ENMIENDA NÚM. 843

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 62, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 844

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 62, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 845

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 63

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 846

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 64

De supresión.

MOTIVACIÓN

Este artículo no añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 847

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 65, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 848

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 65, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 849

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 66, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

_____

ENMIENDA NÚM. 850

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 66, apartado 1 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado 1 bis del artículo 66, con la siguiente redacción:

«1 bis. Las Administraciones educativas constituirán comisiones de escolarización con presencia y participación de los Ayuntamientos, a fin de proceder a la matrícula de todo el alumnado. Las comisiones de escolarización garantizarán que todos los centros sostenidos con fondos públicos escolarizan de forma solidaria al alumnado con necesidades educativas especiales y con dificultades de aprendizaje, así como a los alumnos inmigrantes o a los procedentes de minorías étnicas o culturales.»

MOTIVACIÓN

La redacción propuesta resalta la importancia de las comisiones de escolarización para garantizar el cumplimiento de las normas de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

ENMIENDA NÚM. 851

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 66, apartado 2

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 66, con la siguiente redacción:

«2. Los criterios para la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el Consejo escolar del centro de acuerdo con la regulación de la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: renta per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro y condición legal de familia numerosa.»

MOTIVACIÓN

Debe ser el Consejo escolar del centro y no el equipo directivo quien aplique los criterios de admisión.

ENMIENDA NÚM. 852

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 66, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

La existencia de centros con especialización curricular, tal y como está regulada, va a suponer el incremento de la concentración del alumnado con dificultades en determinados centros, fundamentalmente públicos.

ENMIENDA NÚM. 853

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 66, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 854

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 66, apartado 5

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 66, con la siguiente redacción:

Donde dice: «… sociales…»
Debe decir: «… sociales, de sexo…»

MOTIVACIÓN

No se puede admitir que un centro sostenido con fondos públicos pueda discriminar en la admisión del alumnado por razón de sexo.

ENMIENDA NÚM. 855

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 66, apartado 6

De supresión.

MOTIVACIÓN

Obviedad impropia de una Ley que además transmite la idea de desconfianza hacia las familias que presentan los datos.

ENMIENDA NÚM. 856

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 67, apartado 1

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 7, con la siguiente redacción:

«Los centros privados, en las etapas de educación obligatoria, podrán solicitar incorporarse al régimen de conciertos, de acuerdo con lo establecido en el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.»

MOTIVACIÓN

La redacción establecida en el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación incorpora la generalización de los conciertos a etapas no obligatorias, lo que rompe el consenso básico que ha existido hasta ahora en esta materia.

ENMIENDA NÚM. 857

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 67, apartado 2

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 67, con la siguiente redacción:

«El concierto establecerá los derechos y las obligaciones recíprocas de los centros acogidos a este régimen y de las correspondientes Administraciones educativas.»

MOTIVACIÓN

La redacción actual es copia literal de la LODE y la propuesta destaca que los conciertos suponen derechos y obligaciones recíprocas para ambas partes.

ENMIENDA NÚM. 858

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 67, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Es copia literal de la LODE.

ENMIENDA NÚM. 859

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 67, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Copia literal de la LODE.

ENMIENDA NÚM. 860

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 67, apartado 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente. Es copia casi literal de la LODE introduciendo dos cambios que atentan contra la filosofía básica de los conciertos.

ENMIENDA NÚM. 861

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Copia de la LODE.

ENMIENDA NÚM. 862

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Copia literal de la LOPEGCEDCED.

ENMIENDA NÚM. 863

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 3, letra a)

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 864

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 3, letra b)

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 865

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 3, letra c)

De supresión.

MOTIVACIÓN

En los salarios del personal docente ya están incluidos los conceptos de antigüedad. No tiene ningún sen-

tido mezclarlo con las cantidades para cubrir las sustituciones.

ENMIENDA NÚM. 866

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 867

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 868

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 6

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 869

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68, apartado 7

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 870

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 68 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 68 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 68 bis. Derechos y deberes de los centros privados concertados.

1. Las Administraciones educativas dictarán la normativa necesaria para garantizar que todos los centros privados que se acojan al régimen de conciertos cumplan los siguientes requisitos:

a) Atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación explícita o implícita, de acuerdo con una normativa de admisión del alumnado que evite la configuración de una doble red educativa;
b) Hacer efectivo el principio de gratuidad en todos los centros;
c) Llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.

2. Las Administraciones educativas, en función de las necesidades de escolarización, adoptarán las medidas necesarias para:

a) Proporcionar a los centros concertados una financiación suficiente para garantizar una educación de calidad a todo el alumnado;
b) Incorporar la oferta de los centros privados concertados a la programación general de la enseñanza para garantizar la estabilidad del sistema educativo;

c) Equiparar las condiciones de trabajo del profesorado y del personal de administración y servicios de los centros concertados con las de los profesores de los centros públicos y regular las condiciones de la oferta de actividades educativas complementarias.»

MOTIVACIÓN

Clarificar los derechos y deberes de los centros concertados y de la Administración educativa.

ENMIENDA NÚM. 871

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 69, apartado 1

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 69, con la siguiente redacción:

«1. Los centros educativos dispondrán de la necesaria autonomía curricular, organizativa, de gestión económica y de personal para poder garantizar una educación de calidad a todo el alumnado escolarizado en los mismos.»

MOTIVACIÓN

Esta redacción está más en consonancia con la legislación educativa vigente y con lo que debe ser la autonomía de los centros, que es uno de los mejores instrumentos para obtener la mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos.

ENMIENDA NÚM. 872

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 69, apartado 2

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 69, con la siguiente redacción:

«2. Las Administraciones educativas elaborarán la normativa necesaria para garantizar el ejercicio de esta autonomía y dotarán a los centros del personal y de los recursos económicos necesarios para que éstos concreten en sus proyectos educativos, curriculares y en sus programaciones didácticas las decisiones que consideren más oportunas en función de sus características.»

MOTIVACIÓN

Esta redacción destaca no sólo los recursos, sino también la normativa necesaria y donde deben concretar los centros las decisiones que tomen en virtud de su autonomía.

ENMIENDA NÚM. 873

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 70

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 70, con la siguiente redacción:

«Artículo 70. Autonomía en la organización y desarrollo del currículo.

1. Los centros educativos, en el marco de su programación docente, completarán y desarrollarán el currículo establecido por las correspondientes Administraciones educativas, para adaptarlo a las características y necesidades del alumnado que tienen escolarizado.

2. Las programaciones docentes deberán contemplar los diversos grados de adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y de las áreas, los contenidos básicos complementarios, así como las actividades y las metodologías diferentes y, en coherencia con las mismas, los criterios y los instrumentos de evaluación más adecuados.

3. Los centros educativos podrán adoptar, en función de las necesidades educativas del alumnado que tienen escolarizado, entre otras, las siguientes decisiones:

a) Proponer la participación de determinados alumnos en las actividades formativas complementarias que se impartirán en todos los centros públicos;

b) Agrupar la impartición de algunas áreas curriculares para el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, especialmente en los dos primeros cursos;

c) Concentrar el horario de determinadas áreas curriculares en alguno de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria;

d) Organizar la impartición de las materias optativas con el fin de atender a las necesidades del conjunto del alumnado;

e) Impartir alguna área en una lengua extranjera en las condiciones que las Administraciones educativas determinen.»

MOTIVACIÓN

Esta redacción está más en consonancia con las medidas que deben adoptarse para conseguir una educación más personalizada y, por tanto, dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado. A su vez, la redacción actual recorta la autonomía de los centros.

ENMIENDA NÚM. 874

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 71

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 71, con la siguiente redacción:

«Artículo 71. Autonomía organizativa.

1. Los centros educativos podrán establecer los organismos de coordinación didáctica más adecuados a sus características, así como las estructuras de gestión y participación que mejor respondan a sus necesidades, dentro del marco general que se establezca.

2. Las Administraciones educativas facilitarán a los centros modelos y experiencias en este ámbito, así como orientaciones que pueden tener carácter de norma supletoria para aquellos centros que no hayan elaborado unas normas propias.

3. Los centros determinarán las actividades formativas complementarias para incluirlas en la oferta educativa que realizan.»

MOTIVACIÓN

La redacción propuesta avanza en aspectos que faciliten una mayor autonomía organizativa de los centros, así como el compromiso de la Administración educativa de facilitarles apoyo en este ámbito.

ENMIENDA NÚM. 875

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 72

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 72, con la siguiente redacción:

«Artículo 72. Autonomía en la gestión de los recursos económicos.

1. Las Administraciones educativas desarrollarán la normativa necesaria para autorizar que los centros puedan incorporar al siguiente ejercicio económico los presupuestos no ejecutados del anterior, adquirir y reponer material y equipamiento didáctico y contratar servicios de mantenimiento y obras menores.

2. Las Administraciones educativas asignarán a los centros recursos económicos para que puedan gestionar de una forma directa y autónoma los gastos que origine la formación permanente del profesorado de los mismos.»

MOTIVACIÓN

La redacción propuesta avanza en aspectos que faciliten una mayor autonomía en la gestión de los recursos económicos. La redacción actual de este artículo recorta la autonomía regulada en la LOPEGCED.

ENMIENDA NÚM. 876

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 72 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 72 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 72 bis. Autonomía en la gestión de personal.

1. Los equipos directivos de los centros organizarán el trabajo de la plantilla de profesores aprobada por la Administración educativa.

2. Las Administraciones educativas fomentarán el establecimiento de acuerdos con los centros para garantizar la estabilidad de las plantillas del profesorado en el marco de proyectos educativos plurianuales. En dichos acuerdos se podrá establecer la participación de los centros en la definición del perfil profesional de sus profesores y en los correspondientes procesos de selección.»

MOTIVACIÓN

Para avanzar hacia una mayor autonomía de los centros es necesario que dispongan también de autonomía en la organización del trabajo de la plantilla de profesores, así como en la adopción de medidas que permitan fomentar la estabilidad de las plantillas.

ENMIENDA NÚM. 877

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 73

De supresión.

MOTIVACIÓN

Este artículo supone la introducción de un factor de discriminación fundamental en los procesos de admisión del alumnado y en el tipo de oferta educativa que se realiza en la educación obligatoria.

ENMIENDA NÚM. 878

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Sección 4.ª del Capítulo I, Título V

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 879

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 74

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 880

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 75

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente. Recorta la capacidad de decisión del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores que dejan ser órganos de gobierno de los centros y pasan a ser de participación. Recorta la autonomía de los centros.

ENMIENDA NÚM. 881

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 76

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 882

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 77

De supresión.

MOTIVACIÓN

Se recortan las competencias del Consejo Escolar en la aprobación del proyecto educativo, en la elección del director, en los procesos de admisión del alumnado y en la aprobación y evaluación de la programación general anual.

ENMIENDA NÚM. 883

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 78

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 884

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 79

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente. Recorta la participación del profesorado en la elección de director y en la aprobación de los aspectos docentes. Elimina el proyecto curricular en el que se deben concretar las intenciones educativas que figuren en el proyecto educativo y en cambio aprueba el proyecto educativo, privando a los demás representantes de la comunidad educativa participar en la definición de las líneas generales del centro.

ENMIENDA NÚM. 885

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 80

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 886

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Sección 5.ª del Capítulo I del Título V

De modificación.

Se propone la modificación de la Sección 5.ª del Capítulo I del Título V, con el siguiente texto

«Sección 5.ª De la dirección de los centros educativos.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas a esta sección.

ENMIENDA NÚM. 887

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 81

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 81, con la siguiente redacción:

«1. Se incorpora a las competencias de los directores de los centros públicos reguladas en el artículo 21 de la Ley Orgánica 9/1995, de la participación, evaluación y el gobierno de los centros docentes la siguiente:

Aplicar las medidas que, en materia de disciplina, se contemplen en el reglamento de régimen interior y en el plan de mejora de la convivencia, dando cuenta al Consejo Escolar de los casos más significativos que se produzcan.»

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 888

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 82

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 889

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 83

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 83, con la siguiente redacción:

«Artículo 83. Participación de los Directores.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la participación de los directores de los centros docentes en los Consejos Escolares de los diferentes ámbitos territoriales, así como en otros órganos de carácter consultivo.

2. Los directores de los centros docentes serán consultados, entre otros temas, para la elaboración de las normas correspondientes a la organización y funcionamiento de los centros con el fin de armonizar las regulaciones de carácter general en este ámbito con el fomento de la autonomía de los centros.»

MOTIVACIÓN

Concretar la declaración genérica de participación que se hace en la actual redacción de este artículo.

ENMIENDA NÚM. 890

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 84

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 84, con la siguiente redacción:

«Artículo 84. Principios generales.

Las Administraciones educativas dotarán al director, que será elegido por el Consejo Escolar del centro, y al equipo directivo de los medios y las competencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo relativo a una formación adecuada y al establecimiento de incentivos económicos y profesionales. Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para incrementar su estabilidad.»

MOTIVACIÓN

Esta enmienda plantea las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del director y del equipo directivo, al recomendar las actuaciones que deben llevar a cabo las administraciones públicas para mejorar las funciones directivas.

ENMIENDA NÚM. 891

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 85

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 892

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 86

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente. Merma el principio de participación de la comunidad educativa en el proceso de selección del director.

ENMIENDA NÚM. 893

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 87

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 894

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la rúbrica del artículo 88

De modificación.

Se propone la modificación de la rúbrica del artículo 88, con la siguiente redacción:

«Artículo 88. Duración del mandato y formación del equipo directivo.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al texto del artículo.

ENMIENDA NÚM. 895

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 88

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 88, con la siguiente redacción:

«1. La duración del mandato del director será de cuatro años. Al finalizar su mandato, será evaluado por una comisión formada por representantes del Consejo Escolar del centro y de la inspección educativa. Si la evaluación es positiva, podrá ser renovado por dos períodos más de cuatro años cada uno, previo acuerdo del Consejo Escolar al final de cada período.

2. Las Administraciones educativas organizarán actividades de formación específicas para los equipos directivos en dos fases. La primera fase deberá realizarse antes del inicio de su mandato y versará sobre los contenidos teóricos y prácticos necesarios para el desempeño de sus cargos. La segunda fase constará de sesiones periódicas basadas fundamentalmente en el intercambio de experiencias con otros centros de características similares.»

MOTIVACIÓN

Esta enmienda tiene como objetivo mostrar la importancia que tiene para la mejora del sistema edu-

cativo y del rendimiento escolar del alumnado la potenciación de la dirección de los centros, así como la buena formación de los equipos directivos.

ENMIENDA NÚM. 896

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 89

De supresión.

MOTIVACIÓN

No aporta nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 897

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 90

De supresión.

MOTIVACIÓN

No aporta nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 898

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 91

De supresión.

MOTIVACIÓN

No aporta nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 899

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 92, con la siguiente redacción:

«Los miembros de los equipos directivos seguirán percibiendo una parte del complemento retributivo asignado a los correspondientes cargos, con posterioridad al desempeño de los mismos, por el tiempo y a través del procedimiento establecido al efecto por las Administraciones educativas.»

MOTIVACIÓN

Razones de equidad aconsejan el mantenimiento del complemento retributivo.

ENMIENDA NÚM. 900

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 92 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 bis. La organización de las actividades educativas del centro.

1. En función de los criterios que establezcan las correspondientes Administraciones educativas, los equipos directivos presentarán un Plan de Actuación que figurará en la Programación General anual, en el que constarán las actividades y las horas de profesorado, lectivas y no lectivas, necesarias para el desarrollo de las mismas.

2. Las Administraciones educativas aprobarán el Plan de Actuación una vez acordados con el centro los recursos necesarios para su puesta en práctica. Los equipos directivos, oído el claustro, asigna-

rán las horas lectivas y no lectivas necesarias para su aplicación.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la filosofía de incrementar las competencias de los equipos directivos y la autonomía de los centros.

ENMIENDA NÚM. 901

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92 ter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 92 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 ter. Las normas de convivencia en los centros.

1. En el marco de la normativa establecida por las Administraciones educativas, el Consejo Escolar del centro elaborará el reglamento de régimen interior.
2. Los centros elaborarán un plan anual de mejora de la convivencia, garantizando el máximo grado de participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en su elaboración y cumplimiento.
3. El equipo directivo asumirá la aplicación de las medidas que, en materia de disciplina, se contemplen en el reglamento de régimen interior y en el plan de mejora de la convivencia, dando cuenta al Consejo Escolar de los casos más significativos que se produzcan.»

MOTIVACIÓN

Las medidas disciplinarias deben contemplarse en el marco de las normas de convivencia del centro, fomentando la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en su elaboración y cumplimiento y agilizando la aplicación de las mismas a través del equipo directivo.

ENMIENDA NÚM. 902

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Título V bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo Título V bis, con la siguiente rúbrica:

«De las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento.»

MOTIVACIÓN

La importancia de adoptar las medidas necesarias para adaptar el sistema educativo a las demandas derivadas de la extensión en España de la sociedad de la información y la comunicación.

ENMIENDA NÚM. 903

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92 quáter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 92 quáter, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 quáter. Principios generales.

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para adaptar el sistema educativo a las demandas derivadas de la extensión en España de la sociedad de la información y la comunicación. En particular, actualizarán el currículo de las diferentes etapas educativas, fomentarán la formación permanente del profesorado, la informatización de los centros, la mejora de la enseñanza de los idiomas extranjeros y el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa.»

MOTIVACIÓN

Introducir los aspectos generales que se van a tratar en este nuevo Título.

ENMIENDA NÚM. 904

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92 quinquies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 92 quinquies, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 quinquies. Actualización de los currículos.

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, de común acuerdo con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, revisará y actualizará los diferentes elementos del currículo de las distintas etapas educativas a la luz de las exigencias formativas generadas por la sociedad de la información y la comunicación, en lo que se refiere, en especial, a:

a) La adquisición de destrezas y habilidades relacionadas con la búsqueda, selección, análisis y organización de la información;
b) El dominio funcional de las tecnologías de la información y la comunicación;
c) La formación en valores en un mundo globalizado.»

MOTIVACIÓN

Establecer las líneas generales que se deben contemplar en la actualización de los currículos por este motivo.

_____

ENMIENDA NÚM. 905

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92 sexies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 92 sexies, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 sexies. Recursos y formación.

1. Las Administraciones educativas dotarán a los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de los ordenadores necesarios para la informatización progresiva de sus aulas.
2. Las Administraciones educativas desarrollarán un Programa de formación del profesorado específico para el uso de las nuevas tecnologías en la docencia de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas.
3. Las Administraciones educativas establecerán acuerdos de colaboración con las editoriales y otras entidades para facilitar el acceso del profesorado y del alumnado, a través de Internet, a materiales didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje.
4. Las Administraciones educativas establecerán, asimismo, acuerdos de colaboración con empresas e instituciones para promover tanto la informatización de las aulas como la adquisición de ordenadores al profesorado y al alumnado de Secundaria.»

MOTIVACIÓN

La respuesta a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento tiene que ir acompañada de la informatización de los centros, de la mejora de recursos materiales y de la formación del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías.

_____

ENMIENDA NÚM. 906

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92 septies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 92 septies, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 septies. Las enseñanzas de idiomas extranjeros.

1. Las Administraciones educativas garantizarán la incorporación progresiva del idioma extranjero en el segundo ciclo de Educación Infantil.
2. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, establecerá el comienzo de la enseñanza del idioma extranjero en el primer ciclo de Educación Primaria.
3. Las Administraciones educativas establecerán el procedimiento por el que se autorice, a los centros

que lo soliciten, la impartición de alguna área en un idioma extranjero a partir del segundo ciclo de Educación Primaria.

4. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, firmará convenios con otros países para reforzar la formación permanente del profesorado de idioma extranjero y la incorporación de profesores nativos de apoyo como lectores.»

MOTIVACIÓN

Para potenciar la mejora de la enseñanza de los idiomas extranjeros no basta con generalizar su inicio al primer ciclo de Primaria, que por lo demás ya se está haciendo en varias Comunidades Autónomas, sino también adoptar otras medidas como las que se proponen en este artículo.

ENMIENDA NÚM. 907

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92 octies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 92 octies, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 octies. Centros bilingües.

1. El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, adoptará las medidas necesarias para que determinados centros públicos puedan impartir sus enseñanzas utilizando como lenguas vehiculares la propia y una lengua oficial de otro país de la Unión Europea.

2. Las Administraciones educativas dotarán a estos centros del profesorado especialista que se requiera y facilitarán los materiales y recursos necesarios.»

MOTIVACIÓN

La misma que la formulada en la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 908

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 92 nonies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 92 nonies, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 nonies. Doble titulación.

1. El Gobierno establecerá convenios con otros países de la Unión Europea para que determinados centros públicos puedan impartir las enseñanzas de la educación obligatoria con un currículo integrado que permita al alumnado obtener la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y la titulación equivalente del país correspondiente.

2. Las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas determinarán los centros que participarán en este Programa y facilitarán a los centros los materiales y recursos necesarios para su desarrollo.»

MOTIVACIÓN

Fomentar una mayor relación y conocimiento de los demás países de la Unión Europea y ofrecer a nuestros alumnos de los centros públicos las posibilidades que ofrecen otros centros ubicados en España.

ENMIENDA NÚM. 909

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 93

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 93, con la siguiente redacción:

«La evaluación se extenderá a todas las etapas educativas anteriores a la Universidad y se realizará sobre los aprendizajes de los alumnos, los procesos educativos, el profesorado, la inspección de educación, los centros docentes y la Administración educativa.»

MOTIVACIÓN

Con este texto se mejora la redacción y se garantiza mejor desde un apartado de vista técnico el objetivo que se pretende.

ENMIENDA NÚM. 910

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 93 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 93 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 93 bis. Evaluación de los aprendizajes de los alumnos.

1. Las Administraciones Educativas facilitarán a los centros la formación y los instrumentos necesarios para mejorar los procesos de evaluación de aprendizajes del alumnado.
2. Las juntas de evaluación, especialmente en educación obligatoria, tendrán como misión fundamental garantizar la coordinación de todo el profesorado que imparte clase a un mismo grupo de alumnos, reflexionar y decidir colegiadamente sobre todos los componentes del proceso de evaluación y adoptar las medidas que se deriven del mismo.
3. Las Administraciones organizarán actividades de formación específicas para el profesorado dirigidas a mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes de los alumnos y fomentarán el intercambio de materiales y experiencias entre el profesorado.»

MOTIVACIÓN

Precisar este objetivo, al que hace referencia la enmienda anterior propuesta.

ENMIENDA NÚM. 911

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 93 ter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 93 ter, con la siguiente redacción

«Artículo 93 ter. La evaluación de los centros.

1. Las Administraciones educativas evaluarán periódicamente a todos los centros educativos. La evaluación deberá tener en cuenta el contexto socioeconómico del centro y los recursos de los que dispone, y se efectuará sobre los procesos educativos del centro y del aula, los resultados de los alumnos y la valoración que la comunidad educativa realiza sobre el funcionamiento del centro. La comunidad educativa conocerá los procedimientos y criterios de evaluación que se utilicen, así como los resultados de la misma.
2. Las Administraciones educativas acordarán, con los Consejos Escolares de centro, las medidas previstas para mejorar, en su caso, los indicadores de calidad de cada centro, en función de los resultados obtenidos en los procesos de evaluación.
3. Los centros realizarán la evaluación de los programas específicos que estén desarrollando en virtud de su autonomía.»

MOTIVACIÓN

Precisar este objetivo al que hace referencia en la nueva redacción propuesta en el artículo 93.

ENMIENDA NÚM. 912

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 93 quáter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 93 quáter, con la siguiente redacción:

«Artículo 93 quáter. La evaluación general del profesorado.

Las Administraciones públicas evaluarán periódicamente al profesorado de todos los centros públicos y privados concertados, con el fin de adoptar las medidas necesarias para la mejora permanente de su trabajo.»

MOTIVACIÓN

Precisar este objetivo al que hace referencia en la nueva redacción propuesta en el artículo 93.

ENMIENDA NÚM. 913

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 94

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 94, con la siguiente redacción:

«Artículo 94. El Instituto Nacional de Evaluación.

1. La evaluación general del sistema educativo será realizada por el Instituto Nacional de Evaluación.
2. La Conferencia Sectorial de Educación aprobará sus planes de actuación y elegirá a las personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo que se integrarán en su Consejo Rector.»

MOTIVACIÓN

La credibilidad institucional de este Instituto residirá en la autoridad que le da la Conferencia Sectorial de Educación, en los términos mencionados y en su composición.

ENMIENDA NÚM. 914

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 94 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 94 bis, con la siguiente redacción

«Artículo 94 bis. Evaluación voluntaria del profesorado y carrera profesional.

1. Los profesores recibirán un complemento retributivo cada seis por evaluación positiva de su trabajo, a petición propia.
2. Para ello, las Administraciones educativas constituirán las comisiones de evaluación correspondientes, que estarán integradas por inspectores de educación y otros profesionales de reconocido prestigio en el área de evaluación.
3. Las comisiones de evaluación tendrán en cuenta las actividades desarrolladas en el centro, la participación en actividades de formación permanente, así como los proyectos de innovación, experimentación e innovación educativa.
4. Las comisiones de evaluación tendrán en consideración los informes emitidos por los órganos de gobierno y por el Consejo Escolar, que serán preceptivos en los aspectos que reglamentariamente se determinen.
5. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta los resultados de esta evaluación voluntaria en los concursos de traslados y en el desarrollo de la carrera profesional.»

MOTIVACIÓN

Las evaluaciones deben tener consecuencias, para que sean objeto de prestigio en su vinculación a la carrera profesional.

ENMIENDA NÚM. 915

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 95

De supresión.

MOTIVACIÓN

Las evaluaciones generales de diagnóstico deben estar recogidas en los planes generales de evaluación del sistema educativo, tal y como se recoge en la nueva redacción que proponemos del artículo 97. Además no tiene sentido, salvo que se pretendan otros fines no explicitados, pasarlas a toda la población escolar, sino a una muestra representativa.

ENMIENDA NÚM. 916

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 96, apartado 1

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 96, con la siguiente redacción:

«1. El Instituto Nacional de Evaluación, siguiendo las directrices de la Conferencia Sectorial de Educación, elaborará periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.»

MOTIVACIÓN

La Conferencia Sectorial de Educación debe ser el órgano encargado de marcar las líneas de actuación del INCE.

ENMIENDA NÚM. 917

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 96, apartado 2

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 96, con la siguiente redacción:

«2. Las Administraciones educativas colaborarán con el Instituto Nacional de Evaluación en la elaboración de este sistema de indicadores.»

MOTIVACIÓN

La colaboración de las Comunidades Autónomas debe establecerse directamente con el INCE.

ENMIENDA NÚM. 918

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 97

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 97, con la siguiente redacción:

«Artículo 97. Evaluaciones generales del sistema educativo.

1. El Instituto Nacional de Evaluación, siguiendo las directrices establecidas por la Conferencia Sectorial de Educación, elaborará planes periódicos de evaluación de:

a) Los aprendizajes de los alumnos;
b) El profesorado;
c) Los centros educativos;
d) La inspección de educación;
e) La Administración educativa.

2. El Instituto Nacional de Evaluación elaborará los informes correspondientes de las evaluaciones que realice. En dichos informes constarán, en todo caso, las recomendaciones pertinentes para corregir las deficiencias.

3. El Instituto Nacional de Evaluación elaborará un informe bianual sobre la situación general del sistema educativo que será presentado en el Consejo Escolar del Estado y en el Parlamento.»

MOTIVACIÓN

Recoger, con carácter general, las diferentes evaluaciones que se deben desarrollar por parte del Instituto Nacional de Evaluación, los informes con las recomendaciones necesarias y la necesidad de presentar un informe bianual en el Consejo Escolar del Estado como máximo órgano de representación de los distintos sectores de la comunidad educativa y en el Parlamento.

ENMIENDA NÚM. 919

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 98

De supresión.

MOTIVACIÓN

Ya contemplado en la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 920

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 99, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 921

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 99, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 922

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 99, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 923

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 99, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 924

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 100

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 925

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 103

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 926

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 104

De supresión.

MOTIVACIÓN

La redacción de este artículo abre la posibilidad de la especialización de la Inspección por asignaturas, lo que daría lugar a una innumerable cantidad de especialidades. Esta dispersión perjudicaría el adecuado desarrollo de las funciones que tienen encomendadas.

ENMIENDA NÚM. 927

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 105, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 928

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 105, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 929

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al Título VII bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo Título VII bis, con la siguiente rúbrica:

«Del sistema educativo del estado de las autonomías.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de clarificar el papel de las distintas Administraciones educativas en el marco de las transferencias completas en educación a las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 930

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 105 bis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 105 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 105 bis. Principios generales.

1. El Gobierno, finalizado el proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, adaptará la Administración educativa del Estado redefiniendo el papel de las distintas instituciones dependientes de dicha Administración, para garantizar la coordinación y la cooperación en todo el sistema educativo y fomentar una mayor implicación de las Administraciones locales en la planificación y la gestión de la educación reglada y no reglada.

2. El Gobierno, al amparo de lo establecido en los apartados 1 y 30 del artículo 149.1 de la Constitución, y con el objetivo de garantizar tanto el ejercicio del derecho a la educación a que se refiere el artículo 56 de la presente Ley como una educación de calidad para todos los alumnos establecerá, cada cinco años, los objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo español, habilitando, a tal fin, las correspondientes partidas presupuestarias.

3. Los objetivos educativos a los que hace referencia el apartado anterior serán establecidos de común acuerdo con las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación.»

MOTIVACIÓN

Fomentar la coordinación y la cooperación de las distintas Administraciones educativas y establecer de común acuerdo los objetivos educativos que garanticen la permanente mejora del sistema educativo.

ENMIENDA NÚM. 931

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 105 ter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 105 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 105 ter. Órganos estatales.

El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, procederá a:

a) Dotar a la Conferencia Sectorial de Educación de los medios necesarios para que se convierta en el órgano de debate, coordinación y evaluación de las líneas generales de la política educativa, que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración del Estado, serán objeto de consenso entre dicha Administración y las Comunidades Autónomas.

b) Actualizar la composición y las funciones del Consejo Escolar del Estado.

c) Redefinir las competencias y las funciones de la Alta Inspección.»

MOTIVACIÓN

Impulsar el papel de la Conferencia Sectorial de Educación y actualizar el Consejo Escolar del Estado y la Alta Inspección son objetivos ineludibles en estos momentos.

ENMIENDA NÚM. 932

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 105 quáter (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 105 quáter, con la siguiente redacción:

«Artículo 105 quáter. Órganos de cooperación, asesoramiento y evaluación del Sistema Educativo.

1. Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dependerá el Instituto Nacional de Evaluación, que tendrá como función la evaluación general del sistema educativo, así como el Centro de Investigación y Cooperación Educativa que colaborará con las Administraciones educativas en la formación permanente del profesorado, en el desarrollo de proyectos de experimentación, innovación e investigación educativa y en la elaboración de bancos de datos de buenas prácticas educativas.

2. Los organismos citados serán dirigidos por un Consejo Rector, compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo, que será elegido, total o parcialmente, por la Conferencia Sectorial de Educación por el procedimiento que reglamentariamente establezca el Gobierno.»

MOTIVACIÓN

La importancia de contar con dos organismos compuestos por personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo y con una fuerte vinculación con la Conferencia Sectorial de Educación.

ENMIENDA NÚM. 933

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 105 quinquies (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 105 quinquies, con la siguiente redacción:

«Artículo 105 quinquies. Las Administraciones locales.

1. El Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, establecerá las competencias educativas que corresponda asumir progresivamente a las administraciones locales, así como los mecanismos de coordinación que habrán de establecerse entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales para asegurar el mejor funcionamiento del sistema educativo.

2. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, pondrá en marcha programas para promover la asunción progresiva de competencias educativas de las Administraciones locales. En estos programas, que incorporarán los recursos económicos necesarios para su efectiva implantación, se desarrollarán, entre otras, las siguientes líneas de actuación:

a) La participación en la planificación y gestión de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria;

b) La coordinación y gestión, en colaboración con las Administraciones educativas y con otras organizaciones sociales, de la apertura de los centros públicos

fuera del horario escolar y la oferta de actividades para los alumnos del centro y para sus familias;

c) La coordinación de los programas de formación profesional y de formación continua, con la participación de los agentes sociales y económicos y de la comunidad educativa;

d) La coordinación de los diferentes organismos e instituciones implicados en la organización e impartición de los programas de garantía social para que la oferta sea complementaria y suficiente en todas las zonas educativas;

e) El impulso y la coordinación de programas de cooperación entre los centros educativos;

f) La coordinación de todos los recursos comunitarios, de los trabajadores sociales y mediadores culturales, así como de las instituciones de bienestar social, para la atención de los alumnos y sus familias.

3. Para el desarrollo de los diferentes programas señalados, el Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias promoverán la elaboración de Planes Educativos Municipales que ordenen, racionalicen y rentabilicen los recursos y las ofertas educativas, culturales y deportivas que se puedan ofrecer a los ciudadanos.»

MOTIVACIÓN

España es uno de los países de la Unión Europea que tiene transferidas más competencias en educación a las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y el que menos a las Administraciones locales. Es absolutamente necesario para mejorar nuestro sistema educativo avanzar programas que supongan la asunción progresiva de competencias en educación por parte de las Administraciones locales.

ENMIENDA NÚM. 934

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Primera

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición adicional primera, con la siguiente redacción:

«El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma.»

MOTIVACIÓN

Los contenidos concretos de ese calendario se acordarán con las Comunidades Autónomas que son las que tienen la responsabilidad de aplicar las medidas contenidas en esta Ley.

ENMIENDA NÚM. 935

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Primera bis (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional primera bis, con la siguiente redacción:

«Disposición Adicional Primera bis. Financiación.

1. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que, en el plazo de cinco años, el gasto público en educación crezca en España hasta alcanzar la media de la Unión Europea.

2. El Gobierno incluirá en las respectivas Leyes de Presupuestos las cantidades correspondientes a cada uno de los cinco años a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con la distribución recogida en la Memoria Económica que figura en el documento anexo, con el fin de que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos educativos que se recogen en la Disposición Adicional Primera ter.

3. La distribución del presupuesto entre las diferentes Comunidades Autónomas se efectuará mediante los oportunos convenios entre el Estado y las distintas Comunidades.

4. Los gastos de carácter plurianual que se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos que no tengan la consideración de inversión nueva, se consolidarán en la financiación de cada Comunidad Autónoma.»

MOTIVACIÓN

No puede aprobarse una Ley Orgánica sin una referencia concreta a cómo se va a financiar, por respeto al Reglamento de la Cámara y a la vigente Ley de Gobierno de 1997.

ENMIENDA NÚM. 936

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Primera ter

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional primera bis, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional primera ter. Objetivos educativos para el período 2003-2007.

Con objeto de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la presente Ley, se enumeran a continuación los objetivos a alcanzar en el sistema educativo español durante el período comprendido entre los años 2003 al 2007. Las Administraciones educativas adoptarán las previsiones oportunas para alcanzar estos objetivos en sus respectivos territorios.

A) Educación Infantil.

La escolarización de toda la población correspondiente al tramo de edad entre tres y seis años, y el incremento de plazas en el primer ciclo para cubrir las necesidades de escolarización de 300.000 familias. A tal fin, se organizarán actividades de información y sensibilización dirigidas a toda la población, especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos, sobre la importancia de la escolarización temprana como medida compensadora de las desigualdades sociales de origen.

B) Educación Primaria.

a) La generalización de la enseñanza del idioma extranjero en el primer ciclo de Educación Primaria a partir del curso 2003-2004;
b) La puesta en marcha del Plan de fomento de la lectura;
c) La oferta en todos los centros públicos de cinco horas a la semana de actividades complementarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje y para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender;
d) La dotación a todos los centros del profesorado necesario para atender a la diversidad del alumnado.

C) Educación Secundaria Obligatoria.

a) La oferta en todos los centros públicos de tres horas a la semana de actividades complementarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje y para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender;
b) La dotación a todos los centros del profesorado necesario para la organización de los desdoblamientos de grupos y del conjunto de las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado;
c) La puesta en marcha de los programas de diversificación curricular y de garantía social, para atender a la diversidad del alumnado.

D) Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

a) La dotación de ordenadores con conexión gratuita a Internet de banda ancha en las aulas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos de Formación Profesional;
b) La puesta en marcha de un Programa de formación específico para que el profesorado pueda usar las nuevas tecnologías como una herramienta útil en las clases de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas;
c) El establecimiento de acuerdos de colaboración con las editoriales y otras entidades para facilitar el acceso del profesorado y del alumnado, a través de Internet, a materiales didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje;
d) La firma de acuerdos de colaboración con las empresas y otras instituciones con el fin de facilitar la compra de ordenadores al profesorado y al alumnado de Educación Secundaria.

E) Programas de apoyo a las familias.

a) La gratuidad total de los libros de texto a partir del curso 2003-2004 en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria;
b) El adelanto del horario de apertura de los centros para atender la demanda de las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres;
c) La dotación de comedor en los centros públicos que imparten la educación obligatoria;
d) La puesta en marcha con carácter experimental, a partir del curso 2003-2004, en todas las Comunidades Autónomas de la concesión de permisos temporales o reducciones de jornada para las familias con hijos en la educación obligatoria que requieran un apoyo específico en su proceso educativo.

F) Compensación de desigualdades.

a) La reducción de la ratio a 15 alumnos por aula y el incremento de los gastos de funcionamiento a todos los centros ubicados en zonas de atención educativa preferente;
b) La dotación de profesorado y de los recursos económicos necesarios para poner en marcha los pro-

gramas de atención educativa específica al alumnado inmigrante.

G) Profesorado.

a) La aplicación del nuevo sexenio ligado a la evaluación voluntaria de la práctica docente a partir del curso 2004-2005;
b) La aplicación progresiva de la reducción de las horas de atención directa a alumnos de los profesores mayores de 55 años;
c) La jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la disposición transitoria novena de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo;
d) La modificación del sistema de acceso a los Cuerpos Docentes con el fin de incorporar las previsiones de formación contenidas en la presente Ley;
e) La aplicación progresiva de los períodos sabáticos previstos en la presente Ley;
f) La aplicación de la normativa correspondiente al profesorado en materia de salud laboral, en especial en lo referido a la tipificación de las enfermedades profesionales y la revisión periódica de la salud de los docentes.»

MOTIVACIÓN

Cualquier cambio legislativo que pretenda mejorar el sistema educativo y el rendimiento escolar de los alumnos debe concretar los objetivos educativos que se proponen en los diferentes ámbitos y su plazo de aplicación.

ENMIENDA NÚM. 937

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Segunda

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Las enseñanzas de Religión.

1. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, incorporará en los currículos de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los aspectos de la historia de las religiones necesarios para entender nuestra cultura y el desarrollo de nuestra sociedad.
2. La enseñanza de la Religión Católica se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y sus normas de desarrollo. Así mismo, se impartirán enseñanzas de las confesiones religiosas que tengan suscritos acuerdos con el Estado Español para atender la demanda de los alumnos que lo soliciten.
3. Los profesores que impartan enseñanzas confesionales de religión en los centros públicos, lo harán en régimen de contratación laboral con los requisitos que el Gobierno determine y de acuerdo con la legislación laboral general.»

MOTIVACIÓN

Evita la obligatoriedad que plantea el Proyecto de cursar una asignatura curricular y evaluable a los alumnos que no opten voluntariamente por la Religión. El derecho de los padres a que sus hijos reciban voluntariamente una determinada formación religiosa no debe tener contrapartidas de obligatoriedad para quien no desee recibir este tipo de formación confesional. Sin embargo, la importancia de conocer aspectos fundamentales de la historia de las Religiones exige la oportunidad de que dichos aspectos formen parte de las enseñanzas mínimas comunes a todos los alumnos.

ENMIENDA NÚM. 938

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Segunda bis (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional segunda bis, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda bis. Plan de fomento de la lectura.

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, de común acuerdo con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, impulsará un Plan de fomento de la lectura que contemple la inclusión de una hora de lectura diaria en los centros, la dotación de bibliotecas escolares en todos los centros y el

establecimiento de acuerdos con las familias para realizar actividades de lectura en casa. En este Plan, se contemplarán las diferentes actividades que se pueden realizar desde los medios de comunicación para fomentar la lectura entre los niños y los adolescentes.»

MOTIVACIÓN

Los aprendizajes tienen un soporte muy importante sobre los hábitos de lectura de los alumnos y la motivación hacia el aprendizaje está muy relacionada con el descubrimiento del placer de la lectura como medio de conocimiento.

ENMIENDA NÚM. 939

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional segunda ter

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional segunda ter, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda ter. Carta de los Derechos del Telespectador Infantil.

El Gobierno promoverá, a través de un acuerdo entre las familias, los profesores, las administraciones educativas y los medios de comunicación, una Carta de los Derechos del Telespectador Infantil, en la que se recoja el compromiso colectivo de transmitir a los niños y niñas los valores contenidos en nuestra Constitución.»

MOTIVACIÓN

Es esfuerzo por una educación en valores en la escuela a veces es contrarrestado por los valores poco educativos que transmiten los medios televisivos, en una línea a veces contradictoria orientada hacia la superficialidad y el consumismo acrítico, cuando no a la exaltación directa de la violencia. Es necesario intervenir en este ámbito en la misma línea y de forma complementaria a la formación en valores de las instituciones educativas.

ENMIENDA NÚM. 940

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional tercera

De modificación.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera. De la aprobación de los libros de texto y otros materiales curriculares.

1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía, decidirán los libros de texto y los restantes materiales curriculares a utilizar en las diferentes etapas y niveles educativos.
2. Los libros de texto y, en general, los materiales curriculares no requerirán de la previa autorización de la Administración educativa.
3. Las Administraciones educativas asegurarán que los libros de texto y los restantes materiales curriculares se adecuan a los principios y valores constitucionales y a los planes de estudio oficiales.»

MOTIVACIÓN

Esta redacción es más precisa que la que propone el texto del Gobierno y es coherente con nuestras enmiendas en favor de una mayor autonomía de los centros.

ENMIENDA NÚM. 941

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional tercera bis (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional tercera bis, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera bis. Acceso a la Universidad.

1. El estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.

2. El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá los requisitos académicos y los procedimientos para el acceso a la Universidad. En todo caso, dichos procedimientos garantizarán la transparencia, objetividad y publicidad, respetarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, facultarán a los estudiantes para ingresar en la Universidad, centro y enseñanza que deseen y facilitarán la movilidad de los mismos en el sistema universitario español.

3. Con el fin de promover la incorporación a la enseñanza universitaria a lo largo de toda la vida y elevar así el nivel de formación de la sociedad española y para dar efectividad a lo recogido en el apartado 1 de esta Disposición, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará también los procedimientos para el acceso de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral, no dispongan de la titulación académica establecida con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier Universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad.»

MOTIVACIÓN

Se trata de garantizar la transparencia y objetividad en los procedimientos para acceder a la universidad, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y de que los alumnos tengan que hacer una única prueba para acceder a la Universidad.

ENMIENDA NÚM. 942

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional cuarta

De supresión.

MOTIVACIÓN

Invade las competencias de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 943

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional quinta, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 944

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional quinta, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente. Contenido obvio que ya vienen haciendo las Administraciones educativas y con un añadido contradictorio al final.

ENMIENDA NÚM. 945

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional quinta, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 946

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional quinta, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 947

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional quinta bis (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional quinta bis, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta bis. Derechos laborales y de seguridad social de los padres que tengan hijos con dificultades significativas de aprendizaje.

1. Los padres que hubieran de participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, elaborado de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la presente Ley, fueran trabajadores por cuenta ajena y su jornada laboral coincida con el compromiso de dedicación horaria establecido en el citado programa, tendrán derecho a los siguientes derechos laborales y de seguridad social, en los términos que establezca la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social:

a) A que la prestación de su jornada de trabajo, si la misma se realiza bajo el régimen de turnos, se adapte al compromiso de dedicación horaria establecido en el programa de apoyo.

b) Un permiso de cinco días al año, con derecho a remuneración;

c) Una reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual, con la disminución proporcional del salario, que coincida con el compromiso de dedicación horaria establecido en el programa específico de apoyo. Este derecho irá acompañado de una prestación económica a la familia para compensar los menores ingresos que se hubieran podido producir como consecuencia del ejercicio del mismo, y siempre que los ingresos anuales de dicha familia no sobrepasen el límite de ingresos establecido por el artículo 181 bis de la Ley General de la Seguridad Social;

d) Una suspensión del contrato laboral, con reserva del puesto de trabajo, por un tiempo máximo de tres meses, cuando así se estipule necesario para cumplir con el compromiso de dedicación horaria establecido en el programa específico de apoyo. Este derecho irá acompañado de una prestación económica a la familia para compensar los menores ingresos que se hubieran podido producir como consecuencia del ejercicio del mismo, y siempre que los ingresos anuales de dicha familia no sobrepasen el límite de ingresos establecido por el artículo 181 bis de la Ley General de la Seguridad Social. Asimismo, se considerará como período de cotización efectiva el tiempo de suspensión del contrato por este motivo.

El ejercicio de estos derechos por los trabajadores dará derecho al empresario que tuviera que contratar a un nuevo trabajador interino para sustituirlos a una bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

2. Asimismo, los padres que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje durante la educación obligatoria tendrán derecho a convertir su contrato de trabajo a tiempo completo por un contrato de trabajo a tiempo parcial, en los términos que establezca la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Los trabajadores con hijos en edad escolar también tendrán derecho a un permiso de tres días al año para atender sus necesidades educativas, siempre que trabajen ambos padres o se trate de familia monoparental.

3. Los trabajadores por cuenta propia que se vieran obligados a suspender su actividad por los motivos regulados en esta disposición, tendrán derecho a que le sea considerado el período de suspensión como de cotización efectiva. A su vez tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 en la cuota empresarial de la Seguridad Social, si hubieran de contratar a un trabajador interino que le sustituya por su participación en el programa específico de apoyo.

4. Los funcionarios públicos también tendrán derecho a los correspondientes permisos y reducciones para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.»

MOTIVACIÓN

Se trata de apoyar con medidas y programas concretos a las familias que tienen hijos con problemas signi-

ficativos de aprendizaje. Y a la colaboración de éstas con el centro educativo.

ENMIENDA NÚM. 948

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Quinta ter (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional quinta ter, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta ter. Modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Uno. Se añade un nuevo párrafo segundo, con el consiguiente desplazamiento del actual, en la letra e) del apartado 4 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

"Los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje durante la educación obligatoria, tendrán derecho a convertir su contrato de trabajo a tiempo completo por un contrato de trabajo a tiempo parcial. Una vez que soliciten el retorno a la situación anterior por haber superado los motivos que justificaron la conversión de su contrato, tendrán preferencia para el acceso a un puesto de trabajo vacante de dicha naturaleza que exista en la empresa, correspondiente a su mismo grupo profesional o categoría equivalente de acuerdo con los requisitos y procedimientos que se establezcan en los convenios colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior."

Dos. Se añade un nuevo párrafo tercero con el consiguiente desplazamiento del actual, en el apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

"Asimismo, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta, prioritariamente, la situación del trabajador que, por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica de Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, deba prestar su actividad laboral, y por el período de tiempo que dure dicho programa, en un turno específico de trabajo, sin poder participar en la rotación de los mismos."

Tres. Se añaden dos nuevas letras g) y h) en el apartado 3, un nuevo apartado 5 bis y se modifica el apartado 6 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los cuales tendrán el siguiente contenido:

"3. g) Tres días al año para atender las necesidades educativas de los hijos en edad escolar, siempre que trabajen los dos padres o se trate de familia monoparental."

"3. h) Cinco días al año para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos."

"5 bis. Los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubieran de participar en un programa específico de apoyo al mismo para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrán derecho, además del permiso correspondiente establecido en el apartado 3 de este artículo, a la reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual, con la disminución proporcional del salario, que sea necesaria para la dedicación horaria que se hubiera establecido en el correspondiente programa aprobado por la dirección del centro educativo.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si el padre y la madre del alumno causante del derecho trabajaran en la misma empresa, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa."

"6. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4, 5 y 5 bis de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario, con quince días de antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre el empresario y el trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 5 bis de este artículo serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral."

Cuatro. Se añade una nueva letra n) en el apartado 1 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

"n) Por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos."

Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 bis al artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

"4 bis. En el supuesto de que el trabajador tenga algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, la suspensión tendrá una duración máxima de tres meses a disfrutar tanto por el padre como por la madre, o por ambos, en el supuesto de que el compromiso de participación se extienda a ambos.

La suspensión contemplada en este apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si el padre o la madre del alumno causante del derecho trabajaran en la misma empresa, el empresario podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa."»

MOTIVACIÓN

Es el desarrollo necesario al que obliga la Disposición adicional quinta bis propuesta con anterioridad.

ENMIENDA NÚM. 949

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición adicional quinta quáter (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional quinta quáter, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta quáter. Modificación de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 125 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cual tendrá el siguiente contenido:

"1. La situación de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será asimilada a la de alta. También será asimilada a la situación de alta la suspensión del contrato de trabajo establecida en el artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por participar el trabajador en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos."

Dos. Se añaden dos nuevas letras, a') y c), en el artículo 180 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cuales tendrán el siguiente contenido:

"a') Una prestación económica para compensar los menores ingresos que se hubieren podido producir como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo establecida en artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o reducciones de jornada derivadas de la participación del trabajador en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos. La cuantía de dicha prestación que, en ningún caso, será inferior al Salario Mínimo Interprofesional, será equivalente, mientras dure la suspensión, al ochenta por ciento de la media del salario cotizado por el trabajador durante los últimos seis meses o, en su caso, a la fracción proporcional del mismo en el supuesto de reducción de jornada."

"c) La consideración como período de cotización efectiva del tiempo de suspensión del contrato establecida en artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a que tienen derecho los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubieran de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos."

Tres. Se añade un nuevo artículo 181 bis en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cual tendrán el siguiente contenido:

"Artículo 181 bis. Beneficiarios de la prestación económica por participar en los programas específicos

para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.—Tendrán derecho a la prestación económica a que se refiere la letra a') del artículo anterior los trabajadores que hubieran ejercitado el derecho a una reducción de jornada o suspensión de contrato previsto en el artículo 48, apartado 4 bis de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de acuerdo con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, reúnan la condición exigida en el apartado 1 del artículo 124, acrediten un período mínimo de cotización de ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al curso académico en el que sobreviniere su participación en dicho programa específico, y siempre que los ingresos anuales, de cualquier naturaleza, tras la reducción o suspensión del contrato, del conjunto de la unidad familiar, entendida conforme al apartado 2 del artículo 215 de esta Ley, divididos por el número de miembros que la componen, no supere el Salario Mínimo Interprofesional."»

MOTIVACIÓN

Las dos Adicionales, propuestas con anterioridad, exigen esta modificación normativa.

ENMIENDA NÚM. 950

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Quinta quinquies (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional quinta quinquies, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta quinquies. Bonificaciones en los contratos de interinidad celebrados para sustituir a quienes hubieran ejercitado los derechos derivados de su participación en los programas específicos de apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.

En los supuestos en que, como consecuencia del ejercicio por los trabajadores de los derechos a reducciones, permisos, o, en su caso, suspensiones laborales regulados en la Ley del Estatuto de los Trabajadores para participar en los programas específicos de apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, el empresario contratare de forma interina a un nuevo trabajador para sustituirlo, las cotizaciones del trabajador interino tendrán una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Asimismo, en los supuestos en que un trabajador, incluido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, participara en uno de estos programas específicos de apoyo y, como consecuencia de ello, hubiera de contratar de forma interina a un trabajador que lo sustituyera en el tiempo marcado por el citado programa, las cotizaciones a la Seguridad Social por dicho trabajador obtendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial.

A su vez, en el caso de que el trabajador por cuenta propia se viera precisado a suspender su actividad, como consecuencia de su participación en uno de estos programas específicos y, por ello, su cotización a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el tiempo de suspensión se considerara como de cotización efectiva.»

MOTIVACIÓN

Es la contraprestación necesaria para que las modificaciones normativas tengan un planteamiento económicamente viable, políticamente equilibrado y coherente con las propuestas que se hacen en las anteriores adicionales para los programas específicos de apoyo a las familias con hijos que tienen dificultades significativas de aprendizaje.

ENMIENDA NÚM. 951

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Quinta sexies (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional quinta sexies, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta sexies. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Uno. Se añaden tres nuevas letras f') g) y h) en el apartado 1 y un nuevo apartado 3 bis en el artículo 30

de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los cuales tendrán el siguiente contenido:

"1.f') El funcionario que tenga algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrá derecho, además del permiso correspondiente establecido en la letra h) de este apartado, a la reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual que sea necesaria para la dedicación horaria que se hubiera establecido en el correspondiente programa aprobado por la dirección del centro educativo, con la disminución proporcional de sus retribuciones, sin perjuicio de lo establecido a estos efectos en el Capítulo IX del Título II de la Ley General de la Seguridad Social, que le será de aplicación.

La reducción de jornada contemplada en el párrafo anterior constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios."

"1.g) Para atender las necesidades educativas de los hijos en edad escolar, siempre que trabajen los dos padres o se trate de familia monoparental, tres días al año."

"1.h) Para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, cinco días al año."

"3 bis. En el supuesto de que el funcionario tuviera algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrá derecho a un permiso cuya duración máxima será de tres meses a disfrutar tanto por el padre como por la madre o por ambos en el supuesto de que el compromiso de participación se extienda a ambos. Este permiso no será retribuido y el funcionario tendrá derecho, siempre que se reúnan las condiciones exigidas, a una prestación económica que, en ningún caso, será inferior al salario mínimo interprofesional y que será equivalente, mientras dure la suspensión, al ochenta por ciento de la media de la retribución cotizada durante los últimos seis meses o, en su caso, a la fracción proporcional de la misma en el supuesto de reducción de jornada.

El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios."»

MOTIVACIÓN

Es la adecuación a los funcionarios que tienen hijos con dificultades significativas de aprendizaje de las propuestas hechas para los demás trabajadores en las adicionales anteriores.

ENMIENDA NÚM. 952

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Sexta

De supresión.

MOTIVACIÓN

No compartimos la propuesta del Gobierno de Educación Preescolar como ya hemos manifestado en enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 953

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Séptima

De supresión.

MOTIVACIÓN

Por no compartir la supresión de la modalidad de Tecnología en el Bachillerato.

ENMIENDA NÚM. 954

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Octava, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 955

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Octava, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 956

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Octava, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 957

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Octava, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 958

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Octava, apartado 5

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 959

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Novena

De supresión.

MOTIVACIÓN

Por no compartir todo lo referente a la Creación de los Cuerpos de Catedráticos que figura en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 960

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Décima

De supresión.

MOTIVACIÓN

Por no compartir todo lo referente a la Creación de los Cuerpos de Catedráticos que figura en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 961

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Undécima

De supresión.

MOTIVACIÓN

Abunda en los principios de las Adicionales anteriores y plasma aquí de un modo explícito una injusta jerarquización de los claustros, concediendo privilegios injustificables a los Catedráticos, a costa de intereses legítimos del resto de profesores de Secundaria.

ENMIENDA NÚM. 962

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Duodécima

De supresión.

MOTIVACIÓN

No aporta nada a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 963

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Decimotercera

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 964

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Adicional Decimocuarta

De supresión.

MOTIVACIÓN

No aporta nada a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 965

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición transitoria primera

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente y parte de una elección del director que no cuenta con la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa.

ENMIENDA NÚM. 966

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición transitoria segunda

De supresión.

MOTIVACIÓN

Abunda en la idea de disminuir la exigencia de los requisitos mínimos de los Centros que impartan el primer ciclo de Educación Infantil.

ENMIENDA NÚM. 967

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Transitoria Tercera.

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 968

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Transitoria Cuarta

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 969

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Transitoria Quinta

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 970

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Transitoria Sexta

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 971

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Transitoria Séptima

De supresión.

MOTIVACIÓN

Obviedad innecesaria.

ENMIENDA NÚM. 972

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Transitoria Octava

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 973

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Transitoria Octava bis

De adición.

Se propone la siguiente redacción:

«Disposición transitoria octava bis. Integración de los funcionarios de los Equipos Psicopedagógicos en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía.

1. En enero del año 2002 se integrarán en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Psicología y Pedagogía los funcionarios procedentes del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados en Psicología y/o Pedagogía, obtuvieron plazas por concurso público de méritos en los equipos psicopedagógicos de la Administración Educativa, que ocupan dichas plazas de Grupo "A" de forma definitiva después de haber renunciado a sus plazas de maestro de Grupo "B", siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que ocupen plaza del Grupo A en un equipo psicopedagógico de la Administración Educativa de forma definitiva.
b) Que en su momento hayan renunciado a su plaza de maestro del Grupo B.
c) Que obtuvieron plaza en los equipos psicopedagógicos de la administración educativa por concurso público de méritos con el requisito de estar en posesión del título de licenciado en Psicología y/o Pedagogía.

2. Los funcionarios a que se refiere esta Ley continuarán desempeñando los destinos que tengan asignados en el momento de su integración y quedarán en lo sucesivo sujetos a la normativa sobre provisión de puestos de trabajo docentes.
3. A efectos de determinar su antigüedad en el nuevo cuerpo en el que se integran se les reconocerá la fecha de su acceso con carácter definitivo en los equipos psicopedagógicos de la administración educativa.
4. La administración educativa competente elaborará la relación nominal de los funcionarios a los que se refiere este precepto y cuya integración se propone, a efectos de la expedición del correspondiente título administrativo.
5. A efectos de movilidad territorial de estos funcionarios, los servicios prestados por los mismos con anterioridad a su nombramiento como funcionarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, serán valorados de acuerdo con lo que se establezca en las convocatorias específicas que a tal fin se aprueben por la administración educativa competente.
6. Este artículo tiene su base en lo dispuesto en los artículos 103.3 y 149.1, 18.º de la Constitución, así como en las disposiciones adicionales primera, uno y decimoquinta, dos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.»

MOTIVACIÓN

Regularizar la situación administrativa de estos funcionarios, cuya necesidad de normalización ya ha sido puesta de manifiesto por distintas resoluciones jurídicas y aprobada por unanimidad, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, a través de las pertinentes resoluciones políticas.

ENMIENDA NÚM. 974

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Derogatoria Única

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 975

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición Final Primera, apartado 1

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 de la Disposición final primera, con la siguiente redacción:

«1. Se incorpora a las facultades de los directores de los centros concertados reguladas en el artículo 54,

punto 2 de la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación, la siguiente:

f) Aplicar las medidas que, en materia de disciplina, se contemplen en el reglamento de régimen interior y en el plan de mejora de la convivencia, dando cuenta al Consejo Escolar de los casos más significativos que se produzcan.»

MOTIVACIÓN

En la redacción actual sólo se introduce esta nueva facultad, pues las demás son copia literal de la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 976

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final primera, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 977

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final primera, apartado 4

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 978

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final segunda

De supresión.

MOTIVACIÓN

Hace referencia de nuevo a la creación de los nuevos Cuerpos de Catedráticos que ya hemos enmendado y en el resto de la disposición empeora la legislación vigente añadiendo, entre otras cosas, la superación de la Prueba General de Bachillerato para obtener el título de Bachiller a los alumnos que han superado el tercer ciclo de grado medio de las enseñanzas de música y danza.

ENMIENDA NÚM. 979

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final tercera

De supresión.

MOTIVACIÓN

Deja sin efecto la condición de Catedrático creada en la LOGSE.

ENMIENDA NÚM. 980

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final cuarta, apartado 1

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 981

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final cuarta, apartado 2

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 982

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final cuarta, apartado 3

De supresión.

MOTIVACIÓN

Empeora la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 983

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final quinta

De supresión.

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 984

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final sexta

De supresión.

MOTIVACIÓN

No añade nada nuevo a la legislación vigente.

ENMIENDA NÚM. 985

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final séptima

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 986

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final décima

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con el conjunto de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley.

———

ENMIENDA NÚM. 987

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la Disposición final undécima

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición final undécima que tendrá la siguiente redacción:

«La presente Ley entrará en vigor una vez se haya establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera la financiación necesaria para la aplicación de las medidas en ella contenidas, así como el compromiso presupuestario del Estado en relación a dicha financiación.»

MOTIVACIÓN

Garantizar los recursos materiales y personales necesarios para aplicar la presente Ley.

———

ENMIENDA NÚM. 988

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista

A la exposición de motivos

De modificación.

Se propone la modificación de la exposición de motivos, con la siguiente redacción:

Conseguir que el conjunto de la población pudiera acceder a la escuela ha sido, durante muchos años, el objetivo prioritario de amplios sectores de nuestra sociedad. Lo que hace tan sólo cincuenta años era una ilusión comenzó a hacerse realidad con la Ley General de Educación (LGE) de 1970. Más tarde, con la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, se amplió a diez cursos la escolarización básica y obligatoria. Hoy, en los inicios del siglo XXI, se puede afirmar que la vieja aspiración se ha hecho realidad: el conjunto de la población en edad escolar accede a la escuela desde una edad temprana; la mayoría, además, prosigue su formación durante, al menos, diez cursos.

La Constitución de 1978 incorporó, en su artículo 27, un conjunto de principios referidos al sistema educativo que los distintos Gobiernos democráticos han desarrollado desde entonces. En particular, se regularon el derecho a la educación, la participación de padres, profesores y alumnos en nuestro sistema educativo y el régimen de conciertos para los centros privados. En esos años se llevó a cabo la expansión más importante de la educación en nuestro país, que alcanzó tasas de escolarización desconocidas hasta entonces en el Bachillerato, la Formación Profesional y la Universidad, de la mano de una ambiciosa política de creación de puestos escolares y de.un creciente número de becas. Esta política ha permitido el acceso a los niveles post-obligatorios de la educación de sectores sociales tradicionalmente marginados de ellos.

No podemos, sin embargo, considerar el acceso a la educación y la extensión de la educación básica como un fin en sí mismo. No podemos declararnos satisfechos con que la práctica totalidad de los niños y niñas y de los jóvenes de nuestro país estén escolarizados al menos durante diez cursos. Alcanzado este objetivo, es preciso avanzar en la dirección de ofrecerles una educación de mayor calidad, una educación que ayude a todos los alumnos y a todas las alumnas, sin restricciones ni discriminaciones de ningún tipo, a aprender y desarrollarse, a formarse como personas y como ciudadanos, a construir y desplegar su propio proyecto de vida en el marco de una sociedad democrática. Más educación, pero también mejor educación para todos y todas sin excepciones; porque, en lo que concierne a la educación básica, podremos decir que el sistema educativo ofrece una educación de calidad sólo si ésta se garantiza a todo el alumnado.

Pero, hoy, cuando hablamos de garantizar una educación de calidad, debemos ser conscientes de la transformación que ha sufrido nuestra sociedad, cuya fisonomía pero también cuyas demandas y expectativas se ven sometidas a continuos cambios. Es por ello por lo que debemos revisar las directrices que, tradicionalmente, han guiado nuestro sistema educativo, que ha estado dirigido, fundamentalmente, hacia el aprender a hacer, al desarrollo de conocimientos, aptitudes y habilidades útiles para el ámbito profesional. Con ser importante esta dimensión, una apuesta de futuro pasa por ampliar el concepto y comenzar a hablar de aprender a conocer. Superando, pues, los límites de la enseñanza para toda la vida, nuestro sistema educativo debe propiciar, desde las edades más tempranas, una enseñanza durante toda la vida. La tercera dimensión de la educación, aprender a ser, también exige una revisión.

Nuestros niños y jóvenes viven, porque así lo ha querido nuestra Constitución, en diferentes Comunidades Autónomas, dentro de un Estado común, que es España, que forma parte de la Unión Europea. Su formación integral no puede olvidar esos tres ámbitos, ni los valores de tolerancia y respeto mutuo que permiten la convivencia en la sociedad plural en la que crecen.

Los ciudadanos han de ser educados para el cambio. Debemos pensar en la formación para crear ciudadanos activos y no meros espectadores. Así estaremos anticipando los desequilibrios con los que a menudo nos sorprende el mercado y la sociedad en su conjunto. Si no estamos preparados para el cambio, si no tenemos la capacidad previa para adaptarnos a él, el sistema educativo estará siempre instalado en una crisis permanente y las respuestas que pueda ofrecer serán tardías cuando no anacrónicas. Por ello, habrá que formar individuos creativos, capaces de crear su propio empleo y desarrollar su propia carrera profesional. Ciudadanos cuya aportación suponga siempre un valor añadido. Se trata de educar no sólo para aprender, sino también para aprender a emprender. Esta es la mejor educación que hoy podemos y debemos facilitar a nuestros niños y niñas, la educación de calidad para todos que espera la sociedad española.

Los nuevos problemas que se detectan en los centros, derivados de una situación educativa cada vez más compleja y cambiante requieren un análisis profundo para acertar en el tipo de soluciones más adecuadas. Estamos ante un debate acerca de la justicia social de las políticas educativas, sobre los límites de la igualdad de oportunidades, sobre la distribución de los recursos y, en definitiva, sobre las mayores o menores posibilidades de una gran parte de la población de acceder a más y mejor educación.

Dadas las condiciones en que actualmente se desarrolla la vida de la mayoría de los ciudadanos, la educación en general y los centros educativos en particular cubren un campo cada vez más amplio de necesidades que las familias, o bien no pueden o bien no saben atender. La existencia de estas necesidades es percibida por casi todos, independientemente de cuál sea nuestra posición política, religión, raza, sexo, nivel cultural, económico o social. Son necesidades que vienen inducidas, en buena medida, por el desarrollo en nuestro país de la denominada sociedad del conocimiento y son mayores cuanto menores son las capacidades económicas o culturales de los ciudadanos. Por eso, la sociedad tiene puestas muchas esperanzas en la educación.

Precisamente porque las necesidades son mayores, mayor es la exigencia hacia la escuela que encuentra dificultades para adaptarse a esta nueva situación. Es por ello por lo que cuando el acceso universal a la educación es un hecho en nuestra sociedad, cuando más niños y niñas, cuando más jóvenes que en ninguna otra época van a las escuelas y a los institutos y durante más tiempo permanecen en ellos, se detecta en algunos sectores sociales, y, especialmente, entre el profesorado, una seria y fundamentada preocupación por la salud de nuestro sistema educativo y por su capacidad para garantizar una educación de calidad. Varias son las razones que explican esta situación.

A la escuela de hoy acude todo tipo de alumnos y alumnas, de muy distinta cultura y condición social, con actitudes y aptitudes diferentes, con intereses diversos. Nunca como hoy habían coincidido en las aulas colectivos tan diversos. Y todo eso es así porque esas diferencias existen también fuera de la escuela y la escuela es sólo una parte de la vida del alumnado. Los inconvenientes de atender a un alumnado tan plural, tan diverso, de procedencia tan dispar, con vivencias tan distintas, son evidentes. Sobre todo, si se trata de descartar medidas segregadoras y de favorecer la adaptación e integración de todos.

Pero ese alumnado no lo crean las leyes ni las escuelas. Ese es el alumnado propio de una sociedad como la nuestra. El mismo que tiene el derecho a ser educado y el deber de educarse. Ese es el alumnado que, más allá de sus ricas y múltiples diferencias, debe aprender aquello que en esta sociedad nos es común, nos incluye a todos y nos afecta a todos. Y no cabe duda de que tal pretensión provoca resistencias, conflictos y desinterés. Por ello, debemos ser conscientes de que estamos ante un problema que va más allá de las relaciones entre profesores y alumnos, un problema social y no solamente escolar.

Los alumnos pasan en los centros escolares sólo una parte de su tiempo. En la escuela reciben sólo una parte de la formación y desarrollan sólo una parte del aprendizaje. Aunque, en parte, siempre ha sido así, lo novedoso es la enorme influencia que ejerce la televisión o la información a la que se accede a través de Internet, que son también instrumentos educadores que escapan absolutamente al control de la escuela. En muchos casos, los alumnos pasan gran número de horas con estos otros educadores y les dan más importancia que a la propia escuela. Los valores e ideales que transmite la escuela no coinciden, a menudo, con esas otras experiencias de nuestros jóvenes. Por eso, muchos alumnos se sitúan ante la educación escolar como si se tratara de una actividad ajena a sus intereses y preocupaciones mostrando, en consecuencia, falta de motivación por aprender e, incluso, en ocasiones, una actitud de abierto rechazo.

Para comprender esta situación en toda su amplitud y complejidad no basta con pensar sólo en lo que ocurre en el tiempo escolar. Es necesario un mayor compromiso social con la educación que se debe extender a todos los agentes e instituciones que, de una u otra forma, intervienen en la formación de nuestros jóvenes. La educación es, cada vez más, una tarea compartida y su mejora requiere el esfuerzo de todos.

Es importante recordar, por otra parte, que hace treinta años estudiaba en este país la tercera parte de

quienes lo hacen ahora. Según los datos de la OCDE, los alumnos más brillantes de hoy saben mucho más que los mejores de entonces y la formación recibida por los alumnos que hoy tienen más dificultades es muy superior a la que recibieron sus homólogos hace treinta años, entre otras cosas porque a los diez o doce años dejaban de estudiar. Por último resulta evidente que el nivel de formación medio de la población es sensiblemente mejor que el de hace varias décadas.

También es importante tener en cuenta que el clima de los centros escolares ha cambiado mucho en los últimos años. En demasiados casos se sufren situaciones de tensión y de dificultades de convivencia notables y aunque los factores que aminoren o eliminen estas situaciones conflictivas puedan ser diversos, la eficacia de una u otras medidas dependerá más de la legitimidad que consigan los miembros de la comunidad escolar, en su conjunto, que de cualquier otra posibilidad. En cualquier caso hay que poner los medios para el alumnado sea formado para convivir en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad. La corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la puesta en marcha de un modelo de dirección escolar apoyado por todos los miembros del centro, reconocido e incentivado, la ampliación decidida de los márgenes de autonomía de los centros, el desarrollo de programas de mediación de conflictos, parecen algunas de las líneas más adecuadas de avance en este sentido.

No cabe duda de que en este contexto social y educativo se incrementan de un modo significativo las tareas y nuevas responsabilidades del profesorado. Las administraciones educativas deben reconocer las dificultades a las que han de enfrentarse día a día, contribuyendo a identificar adecuadamente los problemas y las nuevas situaciones y proporcionando los recursos y apoyos necesarios para resolverlos, consiguiendo, de este modo, una mejor motivación de los principales agentes de una buena educación.

Asimismo, es necesario evitar la concentración excesiva del alumnado con mayores dificultades para aprender en unos determinados centros, ya que esta concentración hace más compleja la acción educativa. Hay que avanzar en la consecución del objetivo de que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan iguales derechos e iguales obligaciones, superando viejos debates entre distintos tipos de centros, en la perspectiva de que todos aquellos que sean sostenidos con fondos públicos cooperen y contribuyan al objetivo de educar a todos entre todos.

Como ya se ha señalado, el reto que se nos plantea, similar por lo demás al que afrontan todos los países de nuestro entorno, es cómo garantizar una educación de calidad para todos los alumnos sin excepción, que fomente el desarrollo y la adquisición de las capacidades básicas, que permita a los alumnos progresar de acuerdo con sus aptitudes y sus intereses, y que les ayude a formarse como personas y como ciudadanos en el marco de una sociedad democrática, plural y compleja como la nuestra.

Pero la mejora de la calidad de la enseñanza exige el compromiso y apoyo de los poderes públicos con el cambio educativo, especialmente en la enseñanza pública. La consideración de ésta como eje vertebrador del sistema educativo y, al mismo tiempo, responsable de hacer efectiva la universalización del derecho a la educación exige que las administraciones educativas le otorguen una atención prioritaria que le permita ofrecer una enseñanza de calidad contrastada.

El incremento presupuestario para hacer frente a las transformaciones que se plantean es indispensable. De esta forma, será posible ampliar la oferta de educación infantil, intervenir a tiempo de superar las dificultades de aprendizaje, mediante la adopción de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad en las distintas etapas educativas, establecer planes de intervención para compensar las desigualdades, reforzar los sistemas de apoyo y orientación, ampliar la oferta de formación profesional y los programas de garantía social, extender la oferta educativa a todas las personas adultas, incrementar la autonomía de los centros y reforzar la función directiva, dar un impulso a la participación y corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de los centros, mejorar sus instalaciones, y establecer un nuevo estatuto de la función docente en el que se recojan los derechos y los deberes del profesorado, en el que se establezcan incentivos retributivos y profesionales vinculados al desarrollo de su práctica docente.

Junto con estas medidas es preciso reforzar aquellas otras que permitan el acceso de todos los alumnos a los diferentes niveles educativos en condiciones equitativas: la igualdad en el acceso de los alumnos a todos los centros sostenidos con fondos públicos, la necesidad de que todos ellos escolaricen por igual a los alumnos con necesidades educativas especiales o que pertenecen a minorías étnicas o culturales, el incremento de los programas de educación compensatoria y la especial atención a los centros que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales o que están situados en zonas socialmente desfavorecidas.

A lo largo de estos años de aplicación de la reforma educativa se ha manifestado la necesidad de plantear otras innovaciones para facilitar que los cambios propuestos se lleven a la práctica con plena garantía. Hoy se trata de poder aplicar y profundizar los cambios que la LOGSE propugnaba y no se han podido llevar adelante en su totalidad, de abordar los problemas educativos derivados de cambios en la sociedad española que no se pudieron prever en el momento de la discusión de la Ley y de modificar aquellos aspectos de la LOGSE que la experiencia acumulada en estos años de aplicación aconseja.

Como se ha señalado, el cumplimiento de los objetivos contemplados en la LOGSE, junto con las innovaciones que surgen de la experiencia adquirida, necesitan un compromiso presupuestario que asegure la viabilidad de las propuestas establecidas. Es necesario, por tanto, establecer un amplio acuerdo parlamentario para los próximos cinco años en torno a la financiación de la educación que cree un clima de seguridad en el conjunto de la sociedad y en todos los miembros que forman la comunidad educativa y que genere una mayor confianza en la capacidad de las medidas propuestas para mejorar la calidad y la igualdad de la educación. Un acuerdo parlamentario sobre la financiación de la reforma que permitirá aportar a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema educativo y la permanente mejora de la calidad.

Todo ello para seguir avanzando en la configuración de un modelo que permita dar satisfacción a las demandas de los profesores y a las exigencias de calidad de los alumnos y sus familias, basado en la cooperación entre centros, entre padres y profesores, entre escuela pública, concertada y privada. Un modelo que apueste por la prevención de los problemas y, en consecuencia; por el apoyo a la educación infantil y primaria, por la autonomía de los centros, especialmente en la educación secundaria, para adaptar las escuelas e institutos a la diversidad del alumnado. Un modelo que, tal y como se acaba de aprobar recientemente en la Cumbre de Barcelona, se incline por hacer más atractiva la enseñanza y por la cohesión social, que, de acuerdo con lo que se está decidiendo en otros países de la Unión Europea, aspire a alcanzar tasas de escolarización del 80% en el Bachillerato y del 50% en la Universidad. Un modelo que refuerce la educación en valores, la tolerancia y la solidaridad, con un profundo compromiso humanista. Un modelo que suponga un incremento del profesorado y de los recursos de nuestro sistema educativo, para alcanzar la media europea de gasto público en educación. Un modelo, en fin, que busque el consenso, la participación, el diálogo y el trabajo conjunto de todos los sectores de la comunidad educativa.

Sólo así será posible seguir avanzando en la mejora de la calidad de la educación, que cuente con el mayor apoyo posible, que respete y que, por tanto, comprometa a las Administraciones Educativas y otras instancias y agentes sociales, y que pueda devolver la ilusión y la motivación a los profesores, a los alumnos y a sus familias.

Desde estos principios y orientaciones se formula el texto articulado de la Ley.

En su Título Preliminar, se establecen los principios generales que debe contemplar el conjunto del sistema educativo para prevenir el fracaso escolar y mejorar la calidad de nuestra educación.

En el Título 1, «De la mejora del rendimiento escolar de los alumnos», se establecen una serie de medidas que se deben desarrollar en las diferentes etapas educativas para intervenir a tiempo de superar las dificultades. Hay que actuar para prevenir las dificultades de aprendizaje del alumnado, para resolverlas cuando se presentan y para desarrollar al máximo posible las capacidades potenciales de todo el alumnado.

En el Título II, «De la compensación de desigualdades», se recogen una serie de medidas de discriminación positiva que se tienen que desarrollar para aminorar las tasas de fracaso escolar en aquellas zonas con una elevada concentración de alumnado con dificultades, las zonas de atención preferente, así como en las zonas rurales que requieren una serie de medidas específicas por parte de las Administraciones educativas. En este Título se contempla también la atención educativa al alumnado inmigrante. La educación de los alumnos procedentes de familias inmigrantes no puede limitarse a la oferta de una plaza escolar en un centro sostenido con fondos públicos. Es preciso desarrollar un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar la integración real de estos alumnos en el sistema educativo español y a compensar sus deficiencias educativas que no permiten, en muchos casos, una escolarización en función exclusivamente de su edad.

En el Título III, el relativo al profesorado, se establecen una serie de medidas relativas a la formación inicial y permanente del profesorado y en torno a alguno de los aspectos que deben configurar un nuevo estatuto de la función docente. Las nuevas exigencias y expectativas de la sociedad española en relación con su sistema educativo han incrementado las tareas y responsabilidades del profesorado. Es preciso, por tanto, mejorar las condiciones en las que los profesores desarrollan su trabajo, revisar su estatus profesional, ampliar las plantillas docentes y reformar la formación inicial de maestros y profesores de secundaria. Todo ello, bajo la premisa de que el éxito de la educación personalizada exige autonomía pedagógica y, consecuentemente, confianza en nuestros docentes. Una confianza que debe traducirse en una alta valoración social de la importante tarea que desarrollan en una sociedad como la nuestra.

En el Título IV, «De la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos», se señala fundamentalmente la necesidad de alcanzar un compromiso con las familias para mejorar la calidad de la educación. El sistema educativo diseñado en la Constitución es, ante todo, un sistema participativo. La educación ha pasado a ser en nuestro país una tarea compartida que afecta a las diferentes Administraciones, a los profesores, a las familias y a los propios estudiantes. El papel que en la sociedad del conocimiento tiene reservado la educación enfatiza este carácter compartido de la tarea educativa: la convivencia en los centros y la educación en valores son temas que afectan a los alumnos, a los profesores y a las madres y padres. Para ello, se establecen una serie de medidas que debe-

rán adoptar los poderes públicos para avanzar de una forma decidida en la colaboración entre familia y escuela, con especial mención a los programas específicos cuyo objetivo es que las familias con hijos con dificultades significativas de aprendizaje puedan colaborar con los centros en la mejora del proceso educativo de sus hijos.

En el Título V, «De la organización y funcionamiento de los centros», se establecen una serie de medidas bajo el principio de avanzar hacia una mayor autonomía para conseguir una educación más personalizada. En la educación obligatoria, los centros no deben tener ninguna autonomía para seleccionar a su alumnado en función de su rendimiento escolar, pero sí tienen que disponer de más autonomía para organizar la mejor respuesta educativa al alumnado que tienen escolarizado. Autonomía curricular, organizativa y en la gestión económica y de personal. Todo ello requiere potenciar la dirección de los centros y disponer de equipos directivos bien formados, con mayor capacidad de decisión y un apoyo más decidido por parte de la administración.

En el Título VI, «De las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento», se indican las medidas que deben adoptar las diferentes Administraciones para que el sistema educativo sea capaz de dar respuesta a los nuevos retos derivados de la revolución de las comunicaciones y de las propias tecnologías de la información, así como a la necesidad de conocer con mayor profundidad idiomas extranjeros, cada vez más necesarios en el mundo actual. Para ello, se recogen en este título medidas como la revisión y actualización de los contenidos básicos de las distintas etapas educativas, la informatización de los centros, el desarrollo de planes específicos de formación del profesorado, la experimentación de modelos de centros vinculados total o parcialmente con la enseñanza de los idiomas extranjeros y el establecimiento de convenios con otros países para que determinados centros puedan ofrecer enseñanzas que conduzcan a la obtención de la titulación básica en los países participantes.

En el Título VII, «Del servicio público de educación», se recogen los principios necesarios para avanzar hacia un nuevo modelo de servicio público educativo, basado en el principio de corresponsabilidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos a la hora de educar a todo tipo de alumnado. Si este principio, recogido en la LODE, la LOGSE y la LOPEGCEDCED, se fundamenta por sí mismo, cabe reseñarlo con mayor énfasis en un momento en el que la incorporación al sistema educativo de nuevos alumnos procedentes de la inmigración obliga a un mayor control y exigencia de los servicios públicos ante el fenomenal reto educativo y social que esta realidad implica.

En el Título VIII, «Del sistema educativo del Estado de las Autonomías», se parte de que, una vez finalizado el proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, es necesario redefinir el papel de las distintas instituciones educativas de ámbito estatal para garantizar la coordinación y la cooperación en el sistema educativo español. En ese sentido, se fortalece la Conferencia Sectorial, se dota de mayor contenido a dos institutos dependientes del Ministerio de Educación, al tiempo que se apuesta con claridad por un mayor compromiso y unas mayores competencias de los municipios en el ámbito de la educación y, todo ello, desdé el enfoque de que una adecuada articulación y cooperación entre las diferentes administraciones públicas favorece una mejora de la calidad y la equidad en la educación.

En el Título IX, «De la evaluación del sistema educativo», se establece la necesidad de evaluar los aprendizajes del alumnado, los procesos educativos, la tarea del profesorado, la inspección de educación y la propia Administración educativa. Una evaluación científica e independiente que será desarrollada por el Instituto Nacional de Evaluación, cuyos planes de actuación serán aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. A partir de los resultados de la evaluación se deberán introducir las medidas necesarias para la mejora permanente de los indicadores de calidad de los centros.

Por último, en las disposiciones adicionales, además de otros importantes aspectos, se aborda la financiación del sistema educativo. Se establece la necesidad de que el gasto público destinado a la educación no universitaria de nuestro país alcance la inversión media del PIB de la Unión Europea. Los estudios publicados por diferentes organismos internacionales siguen destacando la fuerte correlación existente entre el nivel socio-cultural y económico de las familias y los resultados educativos de sus hijos. Asimismo, se definen los objetivos para el sistema educativo español durante el periodo comprendido entre los años 2003 al 2007, señalando que las Administraciones educativas adoptarán las previsiones oportunas para alcanzar estos objetivos en sus respectivos territorios. Especial mención requiere la disposición adicional que recoge los derechos laborales y de seguridad social de los padres que tengan hijos con dificultades significativas de aprendizaje, como forma de concretar una apuesta decidida por poner los medios necesarios para facilitar la colaboración de las familias en la mejora del proceso de aprendizaje de sus hijos.

En suma, con la presente Ley, se pretende dar un nuevo impulso al desarrollo de aquellos factores que más pueden contribuir en este momento a prevenir el fracaso escolar y a mejorar la calidad de la educación en nuestro sistema educativo de modo que nuestro país afronte los retos de este nuevo siglo en buenas condiciones. Lograr una educación de calidad para todos requiere el esfuerzo del alumnado, de las familias, del profesorado, de las administraciones públicas y de otros agentes educativos; en definitiva, un esfuerzo de la sociedad que se debe plasmar en una mayor y mejor

inversión en educación, es decir, en la formación del conjunto de la población.

MOTIVACIÓN

En coherencia con el conjunto de enmiendas presentadas al Proyecto de Ley.

A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 134 enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2002.—**Xavier Trias i Vidal de Llobatera,** Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

ENMIENDA NÚM. 989

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la exposición de motivos

Redacción que se propone:

«Exposición de motivos

La mejora de las políticas educativas se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos, en consonancia con el aumento de la voluntad de los ciudadanos por conseguir mayores niveles de cualificación y participación.

Gracias a los esfuerzos de los ciudadanos y al continuo impulso del gobierno del Estado y de los gobiernos de las Comunidades Autónomas se ha universalizado el acceso a la educación, derecho fundamental de los ciudadanos.

La trasferencia de las competencias en materia de educación a las diecisiete Comunidades Autónomas, que actualmente las están ejerciendo en todos los ámbitos de la educación, ha supuesto una nueva situación histórica en el panorama político y educativo del Estado, que ha originado una práctica enriquecedora a partir de las experiencias educativas de las diferentes nacionalidades y regiones.

Esta nueva situación conduce a estructurar un sistema educativo común, con la suficiente flexibilidad para completarlo con el desarrollo de las políticas educativas propias de cada Comunidad Autónoma.

La sociedad española ha afrontado una profunda transformación en los últimos decenios. Ha conseguido, a la vez, plantear positivamente la resolución de sus propios cambios internos y encarar los procesos de adaptación requeridos por la integración de España en la Unión Europea. En pocas décadas, las condiciones de desarrollo han mejorado considerablemente. La mejora sustancial del nivel educativo que ha experimentado España a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX ha constituido uno de los factores más importantes de aceleración del crecimiento económico y del bienestar social del país.

En ese esfuerzo común han desempeñado un papel importante las reformas previas de nuestro sistema educativo. La extensión y universalización de la educación básica no sólo ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades; también ha facilitado un incremento en los diferentes niveles de cualificación de una buena parte de la juventud española. Mantener y aumentar el poder cualificador del sistema educativo junto a la integración en éste del máximo número posible de alumnos, siguen siendo objetivos esenciales de toda ley educativa y también de ésta, en consecuencia.

Para acometer con posibilidades de éxito los retos del contexto social y económico, en cambio y evolución continuos, resulta conveniente modificar los marcos normativos hasta ahora en vigor, con el objetivo primordial de promover la mejora del rendimiento del sistema educativo mediante una adaptación a las nuevas circunstancias.

Un segundo objetivo de esta ley consiste en garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la educación que además debe ser gratuita desde los tres años hasta completar la educación básica. Y en este sentido, la Ley refuerza el carácter educativo de la educación preescolar y de la educación infantil, al tiempo que establece la etapa de los tres a los seis años como gratuita.

El tercero de los objetivos es, precisamente, mantener el carácter abierto de la ordenación curricular del sistema educativo, para evitar que el propio sistema produzca exclusiones no deseadas.

Como cuarto objetivo la presente Ley se propone elevar la consideración social del profesorado, reforzando el sistema de formación inicial, en consonancia con la doble dimensión científico-pedagógica de la tarea de enseñar y de la formación que ésta exige, y articulando una carrera profesional en la que evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado. Dentro de cada uno de los Cuerpos en los que se estructura la función pública docente, la promoción de la carrera profesional permitirá alcanzar,

mediante los procedimientos que establecerá cada Administración educativa, una categoría profesional superior, sin necesidad de pasar a ocupar un destino diferente al actual: «categoría de catedrático» para los funcionarios de todos los cuerpos docentes que imparten enseñanzas en la educación secundaria y «categoría de magister» para los funcionarios del cuerpo de maestros.

También se prevé un procedimiento específico para que los funcionarios del Cuerpo de Maestros que están destinados, con carácter definitivo, a plazas correspondientes al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, puedan promocionar, por un turno restringido y especial al Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, manteniendo la destinación que ocupan, y siempre que reúnan los requisitos de titulación previstos en esta Ley.

El quinto objetivo de la Ley está relacionado con el desarrollo de la autonomía de los Centros educativos, destacando el papel fundamental del Consejo Escolar en el gobierno y evaluación de los centros públicos y en el nombramiento de sus directores.

La Ley formula, en su Título preliminar, los principios básicos que fundamentan las medidas en ella contenidas para mejorar la educación en España, entendiendo que se sustentan en el reconocimiento de los derechos y deberes que asisten a todos los que conforman la comunidad educativa y en la garantía de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.

El Título 1 modifica la estructura del Sistema Educativo en sus diversos niveles y etapas, referidos a las enseñanzas escolares, garantizando la oferta de plazas suficientes de Educación Preescolar para satisfacer la demanda de las familias y atender a sus necesidades.

La Educación Infantil se constituye como etapa voluntaria y gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de dicha etapa en la formación personal y en la compensación de desigualdades.

La Educación Primaria facilita los aprendizajes de las materias instrumentales básicas, en especial el lenguaje, que permiten el desarrollo personal adecuado de acuerdo con la edad del alumno.

La Educación Secundaria Obligatoria completará la formación en las competencias básicas, organizándose de manera flexible que permita adaptarse a las diversas características del alumnado y satisfacer, al mismo tiempo, las necesidades de preparación para las expectativas de estudios o profesionalización posteriores.

Los Programas de Iniciación Profesional, establecidos en la Ley, se conciben como una opción en la Educación Secundaria Obligatoria que permitirá, en su caso, la obtención del título de Graduado y abrir a un mayor número de alumnos todas las oportunidades de formación y cualificación que ofrece el sistema reglado y postobligatorio, así como el acceso, con mayores garantías, a la vida laboral..

La Ley no modifica la vigente ordenación general de la Formación Profesional específica, pero sí introduce una mayor flexibilidad en los procedimientos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, con el fin de ampliar las posibilidades de los alumnos para completar su formación a través de la vía que, en cada momento, mejor responda a sus intereses, expectativas o circunstancias personales.

La Ley, en el Capítulo VII del Título 1, presta especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, estableciendo un marco general que permita a las Administraciones educativas garantizar, en todos los casos, una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren, contando con la participación de sus padres.

El Título II se refiere a las enseñanzas especializadas de idiomas, que se organizan en tres niveles, con el fin de adaptarlas a los grados de aprendizaje establecidos en los países de la Unión Europea.

Son objeto del Título III las enseñanzas destinadas a la formación permanente de las personas adultas como uno de los instrumentos esenciales para hacer efectivo el principio del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

En el Título IV, dedicado a la función docente, se establece el marco general que ha de regir uno de los factores determinantes de la calidad y mejora de la enseñanza: el profesorado. A tal fin, se sientan las bases para la formación inicial y permanente, así como la valoración del desempeño de la función docente.

Por otra parte, se articula la perspectiva de la promoción profesional de los docentes, mediante la configuración de una carrera profesional a desarrollar a lo largo de toda la vida docente.

Asimismo, se garantiza la debida protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros públicos en relación con los hechos derivados del ejercicio de su profesión.

El Título V trata de la organización y dirección de los centros docentes incluyendo en el mismo el régimen y denominación de los centros, su autonomía pedagógica, organizativa y económica, el régimen de los centros privados concertados y los órganos de participación y de gobierno de los centros públicos, con la convicción que la calidad de la enseñanza requiere dotar a los centros no sólo de los medios materiales y personales necesarios, sino también de una amplia capacidad de iniciativa para promover actuaciones innovadoras en los aspectos pedagógicos y organizativos así como de una adecuada autonomía en la gestión de sus recursos.

La Ley establece, asimismo, en este Título por una parte, los órganos de gobierno, y por otra, los órganos de participación en el control y gestión de los centros, atribuyendo a cada uno de ellos las competencias y funciones que les son propias, de acuerdo con la naturaleza, composición y responsabilidades que corresponde a cada uno de ellos.

Asimismo, la Ley reconoce y consolida el servicio público de educación desarrollado por los centros de titularidad pública y por los centros de titularidad privada de iniciativa social acogidos al régimen de conciertos.

La figura del Director de los centros públicos, entendida como pieza clave para la buena organización y funcionamiento de los centros, es objeto de un tratamiento específico, especialmente en lo que se refiere al procedimiento para su selección y nombramiento. Ese procedimiento está presidido por el principio de participación de la comunidad escolar.»

JUSTIFICACIÓN

Para adecuar la exposición de motivos de la Ley a las propuestas de enmiendas que se acompañan.

ENMIENDA NÚM. 990

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la rúbrica del Capítulo 1

Redacción que se propone:

Capítulo 1. De los principios de la educación.

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda propuesta para la modificación del artículo siguiente.

ENMIENDA NÚM. 991

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 1

Redacción que se propone:

«Artículo 1. Principios.

1. Son principios directores del sistema educativo:

a) La equidad, que garantiza una verdadera igualdad de oportunidades, para el pleno desarrollo de la personalidad individual y colectiva, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, y la cohesión y el progreso de la sociedad, que superen cualquier tipo de discriminación.

c) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo los valores de la convivencia y estudio.

d) La concepción de la educación como un proceso de formación permanente, que se extiende a lo largo de toda la vida.

e) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del proceso educativo.

f) La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes e intereses de los alumnos.

g) El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de los docentes y a su promoción profesional.

h) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa

i) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

j) La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de su autonomía pedagógica y organizativa y la potenciación de la función directiva de los centros.

JUSTIFICACIÓN

Del contenido de este artículo 1 se desprende, con claridad, que incluye otros muchos temas que no pueden identificarse con «principios de calidad».

La equidad no tiene nada que ver con las oportunidades de calidad.

La solidaridad de los alumnos no puede limitarse a las actividades de voluntariado.

No hace falta resaltar «especialmente» el clima de convivencia y estudio. Por otro lado, es mucho más oportuno referirse a los valores de la convivencia y estudio, que al clima.

La educación no es un proceso permanente, es un proceso de formación permanente.

No parece apropiado referirse a la personalidad y expectativas de los alumnos.

No es necesario acompañar el concepto «evaluación» del de «inspección». En este contexto, la evalua-

ción del sistema educativo incluye la inspección y otras funciones propias de la evaluación educativa. No es necesario resaltar entre ellas la de inspección.

Se propone precisar el campo de la autonomía de los centros con la inclusión de «pedagógica y organizativa.

ENMIENDA NÚM. 992

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una nueva letra al apartado 1 del artículo 1

Redacción que se propone:

«Artículo 1. Principios.

1. (nueva letra). La atención, mediante la garantía de la no discriminación y la adopción de medidas de acción positiva, a la diversidad y a lasa necesidades educativas específicas asociadas a circunstancias personales o sociales de los alumnos como su condición de extranjeros o superdotados, la presencia de una o varas discapacidades u otros factores de analogos efectos a los anteriores.

JUSTIFICACIÓN

La atención a la diversidad, a través de la garantía de no discriminación y la adopción de medidas de acción positiva por parte de las Administraciones educativas debe ser uno de los principios de calidad del sistema educativo.

ENMIENDA NÚM. 993

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 2

Redacción que se propone:

Arículo 2. Alumnos.

1. Son derechos y deberes del alumno los que se establecen en este artículo y en el resto de las normas vigentes, considerando que:

a) todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando;

b) todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los elementos fundamentales de la Constitución Española y del respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España;

c) todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad, y a recibir orientación educativa y profesional.

d) todos los alumnos tienen el deber del aprovechamiento de las enseñanzas que se le ofrecen, lo cual implica el deber de participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo de los currículos; seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje; y participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación.

2. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos:

a) a recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad;

b) a que se respete, de acuerdo con la Constitución, su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales;

c) a que se respeten su integridad y dignidad personales

d) a la protección contra toda agresión física o moral;

e) a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes;

f) a recibir las ayudas precisas para compensar las carencias de tipo familiar, económico, social y cultural que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo y,

g) a recibir la atención educativa correspondiente en el caso de hospitalización o larga enfermedad domiciliaria, y

h) a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.

3. Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos:

a) respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales;

b) respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y

c) respetar las normas de organización y convivencia del centro educativo.»

JUSTIFICACIÓN

El Estatuto de Autonomía de cada Comunidad Autónoma forma con la Constitución el conjunto de textos básicos fundamentales para la convivencia de sus ciudadanos.

No es lógico que el punto 3 (obligaciones del estudio) del artículo 2 del Proyecto vaya delante del contenido del punto 4 (deberes básicos de los alumnos). Por ello se propone recoger los apartados del punto 3 en este nuevo apartado d) del punto 1, de relación de los deberes básicos que incluyen el aprovechamiento de las enseñanzas que se le ofrecen, porque se aprende no sólo estudiando, también se aprende escuchando, haciendo, buscando, discutiendo.

Cambio de orden en la redacción para dejar claro que lo que debe ser de acuerdo con la Constitución es el «respeto», evitando la posible confusión de que se entendiera que son las convicciones religiosas y morales las que deben estar de acuerdo con la Constitución.

La Ley debe reconocer el derecho de los alumnos a la educación en caso de hospitalización o larga enfermedad domiciliaria.

En el apartado 3 a), por entender que el derecho del alumnado consiste en la participación en la enseñanza programada dentro del sistema educativo y, por lo tanto, las actividades orientadas al desarrollo de los currículos constituyen el objetivo principal de este derecho; no una parte, aunque sea especial, de un conjunto de actividades formativas genéricas

La redacción propuesta del apartado 3 d), en tanto que establece el derecho a participar en la «mejora» de la convivencia escolar presupone en cierta forma que ésta es mala o deficiente en todos los casos y que siempre lo será. La redacción propuesta admite la existencia de casos de buena convivencia

Dentro de las normas de organización y convivencia están incluidas, evidentemente, las normas de disciplina, que no requieren ser mencionadas explícitamente.

ENMIENDA NÚM. 994

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la letra f) del apartado 2 del artículo 2

Redacción que se propone:

«Artículo 2. Alumnos.

2. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos:

f) a recibir las ayudas precisas para compensar las carencias y desventaias de de tipo personal, familiar, económico, social y cultural especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo y,

(…)

JUSTIFICACIÓN

Con esta redacción, se recogen más adecuadamente los efectos de todo tipo que, en eL ámbito educativo, pueden surtir las presencia de la discapacidad en el alumno, determinando unas necesidades especiales que se han de tratar de compensar mediante un sistema integral de apoyos, asistencias y ayudas.

ENMIENDA NÚM. 994

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 1 del artículo 3

Redacción que se propone:

«Artículo 3. Padres.

1. Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos:

a) a que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las Leyes educativas;

b) a la libre elección del centro;

c) a que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones;

d) a estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.»

JUSTIFICACIÓN

Porque el Estatuto de cada Comunidad Autónoma forma parte del bloque constitucional.

Se ha de recoger el concepto mucho más amplio y preciso de «progreso de aprendizaje» en lugar del «rendimiento académico y la marcha del proceso educativo de los hijos», que forma parte del primero. Por otro lado, no se ha de olvidar el derecho de los padres a estar

informados de la «integración socio-educativa» de sus hijos.

ENMIENDA NÚM. 995

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 4

Redacción que se propone:

«Artículo 4. Becas y ayudas al estudio.

1. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, disfruten de las mismas oportunidades, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a superar los obstáculos de orden socioeconómico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el acceso a la enseñanza no obligatoria o la continuidad de los estudios a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento.

Asimismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, ayudas al estudio que compensen las condiciones socioeconómica desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles obligatorios.

A estos efectos, el Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, determinará con carácter básico las modalidades y cuantías mínimas de las becas y ayudas al estudio, las condiciones mínimas de carácter académico y económico que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.

El Gobierno procederá a la distribución territorial de los fondos presupuestarios que correspondan entre las Comunidades Autónomas, garantizando en todo caso la suficiencia de aquellos para que el acceso a las becas y ayudas al estudio se produzca sin menoscabo de la garantía de igualdad en la obtención de éstas en todo el territorio del Estado.

2. A los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla para favorecer las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios.

3. La regulación, el desarrollo, ejecución y control de los sistemas de becas y ayudas al estudio previstos en los párrafos anteriores corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia.

4. Sobre la base de los principios de equidad y solidaridad, las Administraciones públicas cooperarán para articular sistemas eficaces de información, verificación y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos y para el mejor logro de los objetivos señalados en los apartados anteriores.

5. Para garantizar la igualdad de oportunidades en la enseñanza obligatoria, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerá la gratuidad progresiva de los libros de texto y, en su caso, de material escolar.»

JUSTIFICACIÓN

No es desarrollo directo del artículo 27 CE, y por lo tanto, no ha de tener carácter de norma orgánica. Tampoco es una materia prevista en el artículo 149.1.30 CE, por lo que el Estado no puede asumir de manera exclusiva esta competencia.

La referencia en el texto a la garantía de las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho sólo puede tener cabida por aplicación del artículo 149.1.1 CE, que puede conferir a este apartado la consideración de norma básica, pero este carácter no impide la intervención de las Comunidades Autónomas en el proceso de aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley, desde el momento en que son ellas las que han de desarrollar y aplicar el sistema de becas y ayudas al estudio.

El Estado debe garantizar la suficiencia de los fondos presupuestarios para que el acceso a las becas y ayudas al estudio se lleve a cabo con garantías de igualdad en todas las Comunidades Autónomas.

Por las razones indicadas en la justificación de la modificación del apartado 1 de este mismo artículo corresponde a las Comunidades Autónomas la regulación, desarrollo, ejecución y control de la concesión de becas sobre la base de las condiciones mínimas establecidas por el Estado con carácter básico.

Estas condiciones son las que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación por lo que no es necesario establecer mecanismos de coordinación; si alguna Comunidad Autónoma no cumpliera adecuadamente con las condiciones básicas deberían aplicarse los procedimientos jurídicos correspondientes

La Ley deber recoger la garantía de igualdad de oportunidades, estableciendo la gratuidad progresiva de los libros de texto y, en su caso, el material escolar.

ENMIENDA NÚM. 996

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 5

JUSTIFICACIÓN

El Estado no puede atribuirse una competencia no prevista en la Constitución Española. El establecer premios y reconocimientos corresponde a quien gestiona la educación.

ENMIENDA NÚM. 997

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 6

JUSTIFICACIÓN

El Estado no puede atribuirse una competencia que no esté prevista en la CE, como estos Programas previstos en este artículo del Proyecto.

Es evidente que este artículo atribuye al Estado competencias de gestión que no tiene, y que están atribuidas a la Generalitat de Catalunya y otras CCAA.

El Estado no puede «aprobar» ni establecer las finalidades y objetivos de estos programas, dejando a las CCAA sólo la gestión, y no la capacidad de regular y planificar estas actuaciones.

Según el TC, el interés general no tiene la consideración de título competencial autónomo que posibilite la invasión de competencias autonómicas (STC 146/1986).

Son las CCAA las que pueden establecer sus programas de cooperación territorial con las diversas partes del territorio, no el Estado.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no está en el mismo plano jurídico que las Comunidades Autónomas. Es el Gobierno el que puede citarse junto a éstas, o si lo que se pretende es que actúe directamente el MECD, hay que englobarlo dentro de la expresión «Administraciones educativas».

Ni en la LODE, ni en la LOGSE ni en la LOPEGCD aparece ninguna remisión al Ministerio de Educación.

ENMIENDA NÚM. 998

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 7

Redacción que se propone:

«Artículo 7. Ámbito.

1. El sistema educativo comprende la educación preescolar, las enseñanzas escolares y la enseñanza universitaria.
2. La educación preescolar tendrá carácter educativo y dispondrá de una regulación específica.
3. Las enseñanzas escolares son de régimen general y de régimen especial.

Las enseñanzas escolares de régimen general se organizan en los siguientes niveles:

Educación Infantil.
Educación Primaria.
Educación Secundaria, que comprende las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como la Formación Profesional de grado medio y de grado superior.

Las enseñanzas escolares de régimen especial son:

Enseñanzas Artísticas.
Enseñanzas de Idiomas.

4. Corresponde a las Comunidades Autónomas la adaptación de las distintas enseñanzas a las necesidades educativas especiales del alumnado; a la actualización, compleción o ampliación de la formación de las personas adultas, y a las modalidades de enseñanza a distancia o en régimen nocturno.
5. La enseñanza universitaria se regirá por sus normas específicas.»

JUSTIFICACIÓN

En una Ley educativa no corresponde atribuir finalidades asistenciales a un tramo del sistema educativo.

La formación profesional de grado superior no ha de constituir un nivel educativo diferenciado del de la Educación Secundaria, y separado de la de grado medio.

La creación de nuevas enseñanzas de régimen especial se tendría que hacer por Ley, no atribuyendo la facultad una vez más al Gobierno del Estado.

Los puntos 5, 6 y 7 de este artículo 7 se pueden resumir en uno solo, ya que anuncian de hecho posibilida-

des de adaptación que corresponden a las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 999

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 3 del artículo 8

Redacción que se propone:

«Artículo 8. Enseñanza básica.

3. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, en las condiciones establecidas en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se produce en el artículo 8.3 del Proyecto una reducción, no justificada, de un derecho expresamente reconocido a los alumnos en la normativa actual (LOGSE, art. 6.2, que quedará derogado por la LOCE). Se propone mantener el «derecho de escolaridad» hasta los dieciocho años, en lugar de difuminarlo con una expresión tan poco precisa como «podrán permanecer… en las condiciones establecidas en la presente Ley».

ENMIENDA NÚM. 1000

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 9

Redacción que se propone:

«Artículo 9. Ámbito.

1. La educación preescolar, de carácter voluntario, tiene como finalidad la atención educativa a la primera infancia, hasta los tres años.

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la organización de esta etapa educativa y el establecimiento de las condiciones que habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste. Establecerán, asimismo, los procedimientos de supervisión y control que estimen adecuados.

3. La educación preescolar será impartida por maestros y por otros profesionales con la debida cualificación para prestar una atención apropiada a los niños de esta edad, de acuerdo con lo que determinen las Comunidades Autónomas.

4. Las Administraciones públicas garantizarán la existencia de plazas suficientes para asegurar la atención de la población que la solicite y atenderán prioritariamente la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.

5. Las Administraciones educativas establecerán los mecanismos de flexibilidad horaria y de servicios para su adecuación a las necesidades nuevas de la familia y atenderán prioritariamente la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.»

JUSTIFICACIÓN

La normativa básica ya queda establecida en esta Ley, no es necesaria una remisión al desarrollo básico por parte del Gobierno.

Se refuerza el carácter educativo de esta etapa.

Además debe considerarse que esta etapa no conduce a la obtención de ningún título, por lo que la competencia del Estado en este campo debe limitarse a la regulación de condiciones básicas del ejercicio del derecho a la educación.

Los contenidos y objetivos de esta etapa de educación preescolar corresponde establecerlos a las Comunidades Autónomas, por lo que se propone la supresión del punto.

La Ley ha de introducir mejoras sociales, como la que se propone, sobre la flexibilidad horaria y de servicios, para adecuarlos a las nuevas necesidades de la familia, atendiendo prioritariamente la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.

ENMIENDA NÚM. 1001

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar un apartado 3 al artículo 10

Redacción que se propone:

«Artículo 10. Principos generales.

Apartado 3 (nuevo)

Las Administraciones educativas promoverán la escolarización en este nivel educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales.

JUSTIFICACIÓN

Se propone mantener la normativa actual sobre la atención prioritaria, en el nivel de la educación infantil, a los alumnos con necesidades educativas especiales (LOPEGCD, disposición adicional 2, punto 3, derogado por la LOCE).

ENMIENDA NÚM. 1002

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 12

Redacción que se propone:

«Artículo 12. Organización.

Corresponde a las Comunidades Autónomas la organización de esta etapa educativa, la determinación de sus objetivos y la definición de la metodología.»

JUSTIFICACIÓN

No corresponde al Estado determinar la organización de la educación infantil en áreas de conocimiento, ni tampoco regular las actividades que se realizarán en la etapa, como tampoco le corresponde determinar la metodología de la educación infantil, ni la organización curricular de los contenidos y objetivos.

ENMIENDA NÚM. 1003

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 14

Redacción que se propone:

«Artículo 14. Objetivo.

La finalidad de la Educación primaria es facilitar al alumnado los aprendizajes de la expresión y comprensión oral y escrita de la lengua; del cálculo y de los fundamentos de las matemáticas; de otras lenguas y otras formas de expresión de carácter técnico y artístico; y de las nociones básicas del conocimiento de la naturaleza y de la sociedad que le permitan desarrollarse intelectualmente de acuerdo con la edad y le preparen para cursar con aprovechamiento los estudios posteriores. Así mismo ha de facilitar al alumnado la adquisición de la madurez personal y de las conductas y los hábitos que promueven la convivencia social, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos.

JUSTIFICACIÓN

En el último inciso se incorpora el principio de calidad y el primero de sus derechos: «recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad», como finalidad general de todo el sistema educativo, destacando en este marco la finalidad específica de la Educación Primaria.

La Educación primaria tiene contenido en sí misma. La finalidad de la Educación Primaria queda así suficientemente determinada.

Todas las etapas educativas sirven para preparar a los alumnos para los estudios siguientes, sin que sea preciso explicitarlo.

En un solo párrafo se resume el contenido del conjunto de los dos apartados del texto original cuya concreción y detalle no se corresponde con una ley sino con el desarrollo de los currículos correspondientes, lo cual es competencia de la correspondiente Comunidad Autónoma con la condición de respetar los aspectos básicos definidos por el estado.

El artículo 14.2 es más propio, por su detalle, de un decreto de enseñanzas mínimas que no de una Ley que habría de limitarse a recoger los principios básicos del currículo. Por ello, se propone suprimir este punto.

ENMIENDA NÚM. 1004

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 15

Redacción que se propone:

«Artículo 15. Organización.

1. El nivel de Educación Primaria se organiza en tres ciclos de dos años académicos cada uno.

2. Las áreas que se cursarán en la Educación Primaria serán las siguientes:

a) Ciencias sociales y naturales.
b) Educación Artística.
c) Educación Física.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Lenguas extranjeras.
f) Matemáticas.
g) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, el área de Sociedad, Cultura y Religión.

3. Tendrán especial consideración en todas las áreas los aspectos de carácter instrumental para la adquisición de las competencias básicas. Los currículos deberán incluir actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura.»

JUSTIFICACIÓN

Estrictamente, el tema de las áreas en que se organiza la enseñanza es un tema de organización del que puede discutirse que sea básico. Incluso en el caso que lo sea, sería mejor que pasase a formar parte de la definición de las enseñanzas mínimas, en lugar de quedar definidas en la propia Ley.

En cualquier caso, se propone mejorar la clasificación de las áreas de esta etapa.

Lo que no se puede rechazar es que, de mantenerse en la Ley la determinación de las áreas de la etapa, el conocimiento de la lengua oficial propia de una Comunidad Autónoma, cuando la tenga, debe tener el mismo rango que cualquier otra área de la Educación Primaria.

Dentro de las enseñanzas mínimas que el artículo 4.2 de la LOGSE atribuye al Estado (no modificado por el Proyecto de LOCE), sólo caben los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de cada etapa educativa, no la distribución de las áreas que se impartirán en cada uno de los ciclos.

Esta distribución de áreas dentro de la etapa de educación primaria es competencia autonómica, según el artículo 4.3 de la LOGSE (no modificado tampoco por el Proyecto de LOCE): «Las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas.»

Los métodos no forman parte de las enseñanzas mínimas que ha de regular el Estado, según el artículo 4.2 de la LOGSE (no derogado por el Proyecto de Ley). Por ello, se propone suprimir el punto, para permitir que cada Comunidad Autónoma fije los métodos más apropiados.

ENMIENDA NÚM. 1005

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar un nuevo artículo 15 bis

Redacción que se propone:

«Artículo 15 bis (nuevo). Medidas de refuerzo.

Las Administraciones educativas podrán organizar actividades socioescolares en horario postescolar en centros docentes, dirigidas en especial a alumnos con déficits de aprendizaje o sociofamiliares. Al efecto, podrán subscribir convenios con otras Administraciones o Instituciones sin afán de lucro.»

JUSTIFICACIÓN

Como medidas de refuerzo de la actividad lectiva se propone añadir un nuevo artículo que permita organizar actividades socioescolares en horario postescolar en centros docentes.

ENMIENDA NÚM. 1006

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 16

Redacción que se propone:

«Artículo 16. Evaluación.

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua e integrará en un análisis global el progreso del alumno en las distintas áreas.

2. Los alumnos accederán al ciclo siguiente si han alcanzado los objetivos correspondientes establecidos en el currículo. Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo.»

JUSTIFICACIÓN

La división por áreas es una estrategia de organización de las enseñanzas, pero el crecimiento intelectual del alumnado trasciende esta división, por lo que para evaluar sus progresos es necesario integrar en un análisis global las informaciones recibidas de cada área. De lo contrario se obtiene una visión fragmentada que no se corresponde con el conjunto de la personalidad de cada alumno que se obtiene de múltiples relaciones entre conocimientos, procesos y habilidades

La propuesta de supresión de los textos del resto de los apartados deriva de su carácter de organización, de método y de definición del currículum que no corresponde a las competencias estatales.

Es excesivo que la Ley limite, tan drásticamente, y sin prever ninguna excepción que puedan valorar las Administraciones educativas, las posibilidades de permanecer un curso más en el mismo ciclo cuando el alumno no haya alcanzado los objetivos previstos en el currículo.

La Ley debería ser lo suficientemente flexible como para que su aplicación la puedan modular las Administraciones educativas competentes.

Los apoyos necesarios no sólo los han de recibir los alumnos que acceden al ciclo siguiente con evaluación negativa de alguna de las áreas. De cualquier manera, este tema es materia propia de la competencia autonómica, que son las que han de regular los procedimientos de recuperación de los alumnos, no la Ley del estado.

La novedad legislativa que prevé el apartado 4 del artículo 16 del Proyecto no es competencia del Estado. Son las Comunidades Autónomas las que han de regular el procedimiento de evaluación de los alumnos y de los procesos de enseñanza. Y con mayor razón, son también las CCAA las que deben evaluar la actividad docente del profesorado, de sus propios funcionarios docentes.

ENMIENDA NÚM. 1007

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 17

Redacción que se propone:

«Artículo 17. Evaluación de diagnóstico.

Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 95 de esta Ley, realizarán evaluaciones, que tendrán como finalidad el diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias básicas de este nivel educativo. Estas evaluaciones carecerán de efectos académicos y tendrán carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias, los alumnos y las Administraciones educativas.»

JUSTIFICACIÓN

Las evaluaciones de diagnóstico no tienen por qué ser generales.

En cualquier caso, no se trata de prescribir que las evaluaciones que efectúe cada administración educativa deban consistir en la realización de «una prueba» a todo el alumnado; y, con menor justificación puede entenderse que una evaluación de diagnóstico general del sistema realizada por la administración del Estado se fundamente en una prueba general a aplicar a todo el alumnado del Estado; una prueba de estas características incidiría de manera muy directa en el currículum impartido en los centros y sería, por ello, una intromisión inaceptable en las competencias propias de cada Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 1008

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 18

Redacción que se propone:

«Artículo 18. Profesorado.

La Educación Primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia docente en todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen, serán impartidas por maestros con las especialidades correspondientes, entre las cuales se podrá incluir la de educación primaria.»

JUSTIFICACIÓN

No tiene el mismo significado «atenderán todas las áreas» que «tendrán competencia docente en todas las áreas».

El concepto técnico correcto es «especialidad», no el abstracto «especialización»: Ver la disposición adi-

cional 10.8 de la LOGSE, no derogada por el Proyecto:

«8. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará las especialidades (…)».

También la disposición adicional 12.2 de la LOGSE, al referirse a las nuevas titulaciones de maestros, prevé:

«(…) En dichas directrices generales se establecerán las especialidades previstas en esta ley o que al amparo de la misma pudieran crearse.»

La normativa que ha desarrollado esta última disposición adicional citada ha incluido como especialidad de las titulaciones oficiales de Maestro, la de Educación Primaria, que incluye aquellas áreas de educación primaria diferentes de la educación física, música e idiomas extranjeros.

ENMIENDA NÚM. 1009

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar al final del artículo 19 la expresión «y de grado superior»

Redacción que se propone:

«Artículo 19. Ámbito.

El nivel de Educación Secundaria comprenderá las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como de la Formación Profesional de grado medio y de grado superior.»

JUSTIFICACIÓN

No hay razón objetiva que justifique la clasificación independiente de los ciclos de grado superior como un nivel educativo diferenciado de la Educación Secundaria. Es muy peligroso introducir divisiones entre las enseñanzas de formación profesional, que pudieran dar lugar a clasificaciones no deseadas en otros ámbitos, como, por ejemplo, en la competencia docente del profesorado, que hasta este momento abarca toda la Educación Secundaria, sin fisuras.

ENMIENDA NÚM. 1010

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 2 del artículo 20

Redacción que se propone:

«Artículo 20. Principios generales.

2. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone mantener el derecho actual de los alumnos a permanecer escolarizados hasta los dieciocho años (LOGSE art. 6.2, que quedará derogado por el Proyecto de LOCE), en lugar del «podrán permanecer escolarizados» del texto.

Por otro lado, no es preciso exigir que pueda obtener la titulación, basta que pueda seguir con aprovechamiento los estudios. No hace falta precisar en este punto ningún condicionamiento para permanecer escolarizado hasta los dieciocho años, ya que los artículos posteriores marcan las posibilidades que dan la evaluación y la orientación.

ENMIENDA NÚM. 1011

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 21

Redacción que se propone:

«Artículo 21. Objetivo.

Con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es la de completar la formación básica de todas las personas preparándolas para la prosecución de estudios y la inserción laboral. Esta formación básica comprenderá:

a) La correcta utilización, en comprensión y expresión oral y escrita de la lengua castellana, y en su

caso también de la lengua propia de la Comunidad Autónoma;

b) El conocimiento, como mínimo, de una lengua extranjera y la capacidad de utilización de las nuevas tecnologías de la información;

c) Los conceptos fundamentales del conocimiento humano: ciencia, historia, arte, humanidades, cultura;

d) La construcción de la propia personalidad y, en particular, el desarrollo de los hábitos de estudio y trabajo; y,

e) La adquisición de los valores y actitudes de convivencia social.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario incorporar el principio de calidad y el primero de sus derechos: «recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad», como finalidad general de todo el sistema educativo, destacando en este marco la finalidad específica de la Educación Secundaria Obligatoria.

Asimismo, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es ayudar a los alumnos en el aprendizaje de los elementos básicos de la cultura, y no sólo su mera transmisión.

En un solo párrafo se resume el contenido del conjunto de los dos apartados del texto original cuya concreción y detalle no se corresponde con una ley sino con el desarrollo de los currículos correspondientes, lo cual es competencia de la correspondiente Comunidad Autónoma, con la condición de respetar los aspectos básicos definidos por el Estado.

Igual que en la Educación Primaria, el punto 2 de este artículo es demasiado detallado para una Ley. Es un redactado más propio del decreto de enseñanzas mínimas. Por ello se propone suprimirlo, y modificar la redacción del punto 1 con un redactado alternativo del conjunto de los apartados.

ENMIENDA NÚM. 1012

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 22

Redacción que se propone:

«Artículo 22. Organización.

1. En la Educación Secundaria Obligatoria podrán impartirse las siguientes asignaturas:

a) Ciencias Experimentales.
b) Educación Física.
c) Educación Plástica y Visual.
d) Geografía e Historia.
e) Lengua Castellana y Literatura.
f) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.
g) Latín.
h) Lenguas extranjeras.
i) Matemáticas.
j) Música.
k) Tecnología.

Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.

2. Además de las asignaturas obligatorias, el currículo podrá incluir otras asignaturas y asignaturas optativas, de acuerdo con lo que determinen las Comunidades Autónomas.

3. Con el fin de alcanzar los objetivos de esta etapa, la organización de la docencia atenderá a la pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado.

4. En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria podrán organizarse las enseñanzas de determinadas áreas agrupándolas de manera que permitan una adecuación a las características personales del alumnado y una orientación para sus expectativas futuras, académicas y profesionales.

5. Las Administraciones educativas, en el ámbito de lo dispuesto por las leyes, favorecerán la autonomía de los centros en lo que respecta a la definición y programación de las materias optativas.»

JUSTIFICACIÓN

El conocimiento de la lengua oficial propia de una Comunidad Autónoma, cuando la tenga, debe tener el mismo rango que cualquier otra asignatura de la ESO.

Dentro de las enseñanzas mínimas que el artículo 4.2 de la LOGSE atribuye al Estado (no modificado por el Proyecto de LOCE), sólo caben los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de cada etapa educativa, no la distribución de las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos.

Esta distribución de asignaturas dentro de la etapa de la educación secundaria obligatoria es competencia autonómica, según el artículo 4.3 de la LOGSE (no modificado tampoco por el Proyecto de LOCE): «Las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas.»

Según el reparto de competencias establecido por el artículo 4 de la LOGSE, no derogado por la presente Ley, al Estado compete la definición de los aspectos

básicos del currículum, el cual es definido en su totalidad, respetando estos aspectos básicos, por la Comunidad Autónoma correspondiente. La competencia estatal con relación a los aspectos básicos del currículum deriva de la potestad de definir las condiciones de obtención de títulos que sean homologables en todo el territorio del Estado; mediante el ejercicio de esta competencia, el Estado garantiza la formación básica común de todos los aspirantes a cada título.

Las asignaturas optativas son cursadas potestativamente por el alumnado; una asignatura optativa no es cursada por todo el alumnado; luego una asignatura optativa no puede formar parte de la formación común de todos los que aspiran a obtener un determinado título y, en el caso de la enseñanza obligatoria, de la formación común de todos los españoles; las decisiones sobre optativas no pueden formar parte de la competencia del Estado.

Adviértase que no se trata de discutir la bondad de determinada medida, por ejemplo la posibilidad de estudiar una segunda lengua extranjera. Lo que aquí se cuestiona es la inclusión de esta medida dentro de las competencias del Estado derivadas del texto constitucional.

Para mantener la vigencia de la normativa actual en esta materia de organización de la docencia que ha de atender el principio de diversidad de los alumnos, tal como está hoy recogido en el artículo 21.1 de la LOGSE, derogado por la LOCE.

En lugar de los itinerarios del segundo ciclo de la ESO, previstos en el artículo 25 de la LOCE, se propone organizar las enseñanzas de determinadas áreas agrupándolas de manera que permitan una adecuación a las características de los alumnos y una orientación para sus expectativas.

Se propone el apartado 5 para mantener la vigencia de la normativa actual en relación con la capacidad que tienen los centros de definir y programar las materias optativas del currículo, según el artículo 21.3 de la LOGSE, derogado por la LOCE.

ENMIENDA NÚM. 1013

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 23

JUSTIFICACIÓN

Los métodos, como elementos del currículum, están explícitamente excluidos de las competencias estatales a la hora de definir sus aspectos básicos, porque no forman parte de las enseñanzas mínimas que ha de regular el Estado, según el artículo 4.2 de la LOGSE (no derogado por el Proyecto de Ley). Por ello, se propone suprimir el punto, para permitir que cada Comunidad Autónoma fije los métodos más apropiados.

ENMIENDA NÚM. 1014

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 24

Relación que se propone:

«Artículo 24. Medidas de refuerzo.

En los distintos cursos de la etapa, y con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen los objetivos de esta etapa, las Administraciones educativas establecerán las medidas de atención individual de carácter educativo que permitan la consecución de esos objetivos.

Asimismo, las Administraciones educativas podrán organizar actividades socioescolares en horario postescolar en centros docentes, dirigidas en especial a alumnos con déficits de aprendizaje o sociofamiliares. Al efecto, podrán subscribir convenios con otras Administraciones o Instituciones sin afán de lucro.»

JUSTIFICACIÓN

Las medidas no tienen por qué limitarse al refuerzo educativo ni a los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.

El artículo 24.2 del Proyecto establece medidas organizativas, que corresponde determinar a las Comunidades Autónomas, con un detalle impropio de una Ley.

Como medidas de refuerzo de la actividad lectiva se proponen actividades socioescolares en horario postescolar en centros docentes.

ENMIENDA NÚM. 1015

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 25

JUSTIFICACIÓN

Los distintos apartados de este artículo corresponden a aspectos de organización de las enseñanzas que no competen al Estado. Dentro de las enseñanzas mínimas que el artículo 4.2 de la LOGSE atribuye al Estado (no modificado por el proyecto de LOCE), sólo caben los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de cada etapa educativa, no la distribución de las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos.

La distribución de asignaturas dentro de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es competencia autonómica, según el artículo 4.3 de la LOGSE (no modificado por el proyecto de LOCE): «Las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas».

ENMIENDA NÚM. 1016

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 26

Redacción que se propone:

«Artículo 26. Programas de Iniciación Profesional.

1. Los Programas de Iniciación Profesional estarán integrados por los contenidos curriculares esenciales de la formación básica y por módulos profesionales asociados, al menos, a una cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Dicha formación, que tendrá una estructura flexible de carácter modular, se impartirá en dos cursos académicos.

2. La formación básica contribuirá, de acuerdo con las características de los alumnos, al desarrollo de las capacidades establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria.

3. Aquellos alumnos que, cumplidos los quince años, habiendo cursado los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, y tras la adecuada orientación educativa y profesional, opten voluntariamente por no cursar o completar ninguno de los itinerarios ofrecidos, permanecerán escolarizados en un Programa de Iniciación Profesional.

4. La superación de un Programa de Iniciación Profesional dará derecho a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

La superación total o parcial de los módulos de carácter profesional integrados en los Programas de Iniciación Profesional será acreditada conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. En el caso de la superación de la totalidad de los módulos, la certificación otorgada surtirá, además, los efectos académicos previstos en el artículo 37.3.a) de la presente Ley.

5. Las Administraciones públicas promoverán la participación de otras instituciones y entidades para el desarrollo de estos Programas.»

JUSTIFICACIÓN

No es competencia del Gobierno fijar las «directrices básicas» de los Programas de Iniciación Profesional.

Con la propuesta de redacción al apartado 3 se garantiza en mayor medida que puedan seguir con aprovechamiento estos Programas y que también los puedan cursar quienes hayan iniciado uno de los itinerarios de la Educación Secundaria Obligatoria.

Como se ha dicho en la justificación a otras enmiendas, los métodos no forman parte de las enseñanzas mínimas que ha de regular el Gobierno con carácter básico, según el artículo 4.2 de la LOGSE, no derogado por la LOCE. Por ello se ha evitado el contenido del punto 4 del artículo 26 del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 1017

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 27

Redacción que se propone:

«Artículo 27. Evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria será continua e integradora de las distintas evaluaciones de las asignaturas que cursen.

2. El equipo de profesores evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas y su progreso global, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.»

JUSTIFICACIÓN

La división por áreaas es una estrategia de organización de las enseñanzas pero el crecimiento intelectual del alumnado trasciende esta división, por lo que para evaluar sus progresos es necesario integrar en un análisis global las evaluaciones efectuadas en cada asignatura. De lo contrario se obtiene una visión fragmentada que no se corresponde con el conjunto de la personalidad de cada alumno que se obtiene de múltiples relaciones entre conocimientos, procesos y habilidades de los distintos campos del saber.

Quienes deciden sobre la promoción del alumnado (artículo 28.1) son quienes deben evaluarlos: el equipo de profesores que imparte enseñanzas a un mismo alumno o alumna.

ENMIENDA NÚM. 1018

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 28

Redacción que se propone:

«Artículo 28. Promoción.

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa los alumnos serán evaluados de cada una de las asignaturas del curso.

2. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas. Una vez realizada esta prueba, el profesorado efectuará la evaluación integrada y global, a partir de la cual decidirá sobre la promoción del alumno al curso siguiente, teniendo en cuenta la calificación media obtenida, además de su madurez y posibilidades de progreso en los cursos posteriores.

3. Cada curso podrá repetirse una sola vez. Si tras la repetición, el alumno no cumpliera los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación definirá las medidas de enseñanza personalizada que deberán adoptarse para dicho alumno.

4. El alumno que, cumplidos los dieciséis años, no haya alcanzado, a juicio del equipo de evaluación, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, después de haberla cursado, podrá continuar sus estudios mediante las enseñanzas de adultos o a distancia.

En todo caso, las Administraciones públicas garantizarán la existencia de programas de formación profesionalizadora, específicamente dirigidos a estos alumnos con el fin de facilitarles una adecuada inserción profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Las posibilidades de progreso incluyen las de recuperación.

No procede negar lo que se fija en el 28.1. Será el equipo de evaluación quien decida.

No parece razonable, en la ESO, permitir seguir el mismo curso tres o más veces. En todo caso el detalle no corresponde a un texto con rango de Ley.

La situación actual, regulada en los artículos 22.1 y 15.2 de la LOGSE, prevé que el Gobierno establezca las condiciones de promoción de los alumnos de la ESO, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

El proyecto de LOCE no puede facultar al Gobierno para establecer las condiciones de promoción de curso. La definición del currículo compete a la Administración autonómica, por lo que ella debe ser la que fije las condiciones de actuación de los equipos de profesores con relación a la promoción de curso.

Para poder alcanzar los objetivos debe haberse cursado la ESO. El texto del apartado 4 no hace otra cosa que concretar este extremo, con la inclusión del segundo párrafo.

ENMIENDA NÚM. 1019

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 29

Redacción que se propone:

«Artículo 29. Evaluación de diagnóstico.

Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 95 de esta Ley, realizarán evaluaciones, que tendrán como finalidad el diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias básicas de este nivel educativo. Estas evaluaciones carecerán de efectos académicos y tendrán carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias, los alumnos y las Administraciones educativas.»

JUSTIFICACIÓN

Las evaluaciones de diagnóstico no tienen por qué ser generales.

En cualquier caso, no se trata de prescribir que las evaluaciones que efectúe cada administración educativa deban consistir en la realización de «una prueba» a todo el alumnado; y con menor justificación puede entenderse que una evaluación de diagnóstico general del sistema realizada por la Administración del Estado se fundamente en una prueba general a aplicar a todo el alumnado del Estado; una prueba de estas características incidiría de manera muy directa en el currículum impartido en los centros y sería, por ello, una intromisión inaceptable en las competencias propias de cada Comunidad Autónoma

---

ENMIENDA NÚM. 1020

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 30

Redacción que se propone:

«Artículo 30. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

1. La evaluación positiva de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria conducirá al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional de grado medio y al mundo laboral. Junto con el título, los alumnos recibirán un informe de orientación escolar para su futuro académico y profesional que tendrá carácter confidencial y que en ningún caso será prescriptiva.

3. Los alumnos que no obtengan el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirán un Certificado de Escolaridad en el que constarán los años cursados.»

JUSTIFICACIÓN

No es necesario que en el título conste la nota media de la etapa. Lo que importa es la obtención del título, no la nota media del expediente académico.

La situación actual, regulada en los artículos 22.1 y 15.2 de la LOGSE, prevé que el Gobierno establezca las condiciones de promoción de los alumnos de la ESO, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

El proyecto de LOCE no puede facultar al Gobierno para establecer las condiciones excepcionales de obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, ya que en todo caso deberán residir en la adquisición de las enseñanzas establecidas en el currículo. La definición del currículo compete a la Administración autonómica, por lo que ella debe ser la que fije las condiciones excepcionales de actuación de los equipos de profesores con relación a la obtención del título.

El objetivo de la propuesta de modificación al punto 3 es subrayar el carácter orientador y evitar que la orientación substituya o modifique las condiciones y opciones legales establecidas para el título

La orientación escolar que acompaña al título de graduado no puede ser prescriptiva, como tampoco lo es ahora (LOGSE, art. 22.2, que quedará derogado por la LOCE).

ENMIENDA NÚM. 1021

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 31

Redacción que se propone:

«Artículo 31. Profesorado

1. Para la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria se requerirá estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente a efectos de docencia. En aquellas asignaturas o módulos que se determinen en virtud de su especial relación con la Formación Profesional, se establecerán las equivalencias de los títulos de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y Diplomado universitario, a efectos de la función docente.

2. Para impartir las enseñanzas de esta etapa será necesario, además, estar en posesión del Título de Especialización Didáctica establecido en el artículo 55 de la presente Ley.

3. Excepcionalmente, para impartir los módulos profesionales de los Programas de Iniciación Profesional que prevé el artículo 26 de esta Ley, las Administraciones educativas podrán contratar personal laboral, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del Programa.»

JUSTIFICACIÓN

Si no se añade a las asignaturas que se determinen, los módulos de los ciclos de formación profesional, resultará que no podrá impartir los módulos profesionales de los Programas de Iniciación Profesional el profesorado con la titulación declarada equivalente. A efectos de docencia.

Para impartir algunos módulos profesionales de los Programas de Iniciación Profesional previstos por el Proyecto de Ley para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, parece aconsejable que la Ley autorice la contratación laboral de personal especialista, en aquellas profesiones en las que no será posible atribuir la docencia a personal funcionario.

ENMIENDA NÚM. 1022

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 33

Redacción que se propone:

«Artículo 33. Objetivo.

La finalidad del Bachillerato es la de proporcionar una formación integral, intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales, así como proseguir estudios superiores. Para ello, el Bachillerato ampliará y profundizará en los aspectos de la educación básica y, en cada modalidad, en el campo de conocimientos propio de ella.»

JUSTIFICACIÓN

Como en otras etapas educativas, se propone un artículo único que refunda los dos puntos, excesivamente minuciosos, del artículo 33, con un redactado más general y apropiado a una Ley.

En un solo párrafo se resume el contenido del conjunto de los dos apartados del texto original cuya concreción y detalle no se corresponde con una ley sino con el desarrollo de los currículos correspondientes, lo cual es competencia de la correspondiente Comunidad Autónoma, con la condición de respetar los aspectos básicos definidos por el Estado

---

ENMIENDA NÚM. 1023

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 34

Redacción que se propone:

«Artículo 34. Organización.

1. El Bachillerato se organizará en asignaturas comunes, en asignaturas específicas de cada modalidad y en asignaturas optativas.

2. Las asignaturas comunes del Bachillerato contribuirán a la formación general de los alumnos. Las específicas de cada modalidad y las optativas les proporcionarán una formación más especializada, preparándolos y orientándolos hacia estudios posteriores y hacia la actividad profesional. El currículo de las asignaturas optativas podrá incluir un complemento de formación práctica fuera del centro.

3. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:

a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.

4. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevas modalidades de Bachillerato o modificar las establecidas en esta Ley.

5. Las asignaturas comunes del Bachillerato serán las siguientes:

a) Educación Física.
b) Filosofía.
c) Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.
f) Lengua extranjera.

Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.

6. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, establecerá las asignaturas específicas mínimas de cada modalidad, adaptándolas a las necesidades de la sociedad y del sistema educativo. Además de las asignaturas comunes y obligatorias y de las específicas de cada modalidad, las Comunidades Autónomas podrán completar el currículo incluyendo otras asignaturas y asignaturas optativas.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 27.7 de la LOGSE, sobre esta misma materia, prevé el acuerdo de las Comunidades Autónomas para que el Gobierno pueda modificar las modalidades de Bachillerato definidas en la Ley.

No hay motivo suficientemente justificado para que el Proyecto de LOCE rebaje los requisitos actualmente previstos para que el Gobierno pueda introducir, por

vía reglamentaria, modificaciones en las previsiones de la Ley, convirtiendo el trámite de acuerdo con las CCAA en un simple informe previo de éstas.

El conocimiento de la lengua oficial propia de una Comunidad Autónoma, cuando la tenga, debe tener el mismo rango que cualquier otra asignatura del Bachillerato.

La supresión de la determinación «de España» en la asignatura de Historia no impide que la determinación de las enseñanzas mínimas fije contenidos de historia de España y, en cambio, la denominación genérica de la asignatura permite, en el margen de determinación del currículum que tiene cada Comunidad, incluir los contenidos de historia propia en la misma asignatura.

La supresión de la asignatura «Historia de la Filosofía» se efectúa porque en definitiva la historia de la Filosofía es un contenido de la asignatura de Filosofía que puede determinarse mediante la fijación de las enseñanzas mínimas de esta materia. Es lo mismo que la historia de la literatura que no constituye una asignatura aparte sino que está incluida en la asignatura de «Lengua Castellana y Literatura»; al fijar los contenidos de ésta se determinarán los que sean propios de la historia de su literatura.

Dentro de las enseñanzas mínimas que el artículo 4.2 de la LOGSE atribuye al Estado (no modificado por el Proyecto de LOCE), sólo caben los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de cada etapa educativa, no la distribución de las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos.

Esta distribución de asignaturas dentro del Bachillerato es competencia autonómica, según el artículo 4.3 de la LOGSE (no modificado tampoco por el Proyecto de LOCE): «Las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas.»

Además, la potestad de determinar la totalidad del currículo que tiene cada Comunidad Autónoma, siempre que respete los aspectos básicos fijados por el Estado, el cual no puede condicionar más allá del 55 por 100 del tiempo escolar en las Comunidades con lengua propia, motiva que las decisiones de la Comunidad Autónoma no puedan limitarse a las asignaturas optativas; si esto fuera así éstas llegarían a ocupar el 45 por 100 del tiempo escolar que es, evidentemente, excesivo.

Ya se ha indicado varias veces que la metodología no forma parte de las enseñanzas mínimas que ha de fijar el Gobierno, y por ello no parece apropiado que se incluyan indicaciones metodológicas en una Ley del Estado.

Las previsiones de este artículo no pueden considerarse incluidas dentro de las enseñanzas mínimas, son más propias de las orientaciones que acompañan a cualquier materia del currículo, y por ello deben ser las Comunidades Autónomas las que se encarguen de su regulación.

ENMIENDA NÚM. 1024

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar un nuevo artículo 34 bis

Redacción que se propone:

«Artículo 34 bis. Evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en el Bachillerato será continua e integradora de las distintas evaluaciones de las asignaturas que cursen.

2. El equipo de profesores evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas y su progreso global, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.

3. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de LOCE ha olvidado dedicar un artículo a la evaluación del Bachillerato, a pesar de que en el artículo 34.9 hay una referencia a pruebas extraordinarias de las asignaturas que no se han superado, que se propone recoger aquí como punto 3, dentro del ámbito general de la evaluación.

ENMIENDA NÚM. 1025

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 36

Redacción que se propone:

«Artículo 36. Título de Bachiller.

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas.

2. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios universitarios.»

JUSTIFICACIÓN

La evaluación positiva en todas las materias acredita suficientemente la adquisición de los conocimientos del Bachillerato; no es necesaria una prueba posterior; el hecho de que un alumno o alumna no supere una prueba general después de haber cursado con aprovechamiento el Bachillerato y haber superado todas sus asignaturas tiene mayor probabilidad de deberse a una mala formulación de la prueba, a una mala evaluación previa del profesorado del alumno, a unas circunstancias personales adversas en el día de la prueba, etc. que a una demostración clara de formación deficiente en el alumno o alumna.

El punto 4 del artículo 36 del Proyecto está regulado por el artículo 42.3 de la LOU, no parece necesario repetir aquí su contenido, sin añadir ninguna novedad. De todas formas es un tema que corresponde a las enseñanzas universitarias, no a la LOCE. No es un texto propio de esta ley. Forma parte del desarrollo de la Ley de Universidades.

Si no hay Prueba General de Bachillarato, el apartado 5 del artículo 36 del Proyecto no es necesario, porque la evaluación positiva de todas las asignaturas conduce a la expedición del título oficial.

ENMIENDA NÚM. 1026

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 37

Redacción que se propone:

«Artículo 37. Acceso.

1. Podrán cursar la Formación Profesional de grado medio quienes se hallen en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para el acceso a la formación profesional específica de grado superior será necesario estar en posesión del título de Bachiller.

2. También podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado superior se requerirá tener veinte años de edad, cumplidos en el año de realización de la prueba.

3. La prueba a que se refiere el apartado anterior deberá acreditar:

a) Para la Formación Profesional de grado medio, los conocimientos suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y sus capacidades en relación con el campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales quedarán exentos quienes hayan superado la totalidad de los módulos de carácter profesional de un Programa de Iniciación Profesional o acrediten una experiencia laboral, en ambos casos relacionados con la enseñanza que pretendan cursar.

b) Para la Formación Profesional de grado superior, la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales que pretendan cursar.

4. Para quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior relacionado con el mismo, el requisito de edad para la realización de la prueba será de dieciocho años cumplidos en el año natural. La prueba podrá sustituirse por la superación de las enseñanzas que determinen las Administraciones educativas para complementar la madurez y las capacidades profesionales acreditadas por la posesión del título de Técnico.

5. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la relación entre los títulos de Técnicos y su correspondiente de Técnico Superior a los efectos previstos en este artículo. Corresponde a las Comunidades Autónomas establecer el contenido y procedimiento de dichas pruebas.»

JUSTIFICACIÓN

Parece mejor referirse a los Programas de Iniciación Profesional que a un programa de inserción profesional.

De forma coherente con la propuesta de supresión de la Prueba General de Bachillerato, se ha de suprimir lo previsto en el apartado 3.c) del Proyecto, porque la superación de todas las asignaturas de cualquier modalidad del Bachillerato conduce al título y no habrán de superar ninguna prueba para acceder a la formación profesional de grado superior.

Mantener la vigencia del curso substitutorio de la prueba de acceso al ciclo formativo de grado superior, tal como está hoy recogida en el artículo 32.3 de la LOGSE, añadido por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, y que quedará derogado por la LOCE.

La legislación vigente atribuye a las Administraciones educativas la competencia para regular la prueba de acceso a los ciclos formativos (LOGSE, artículo 32.1),

por lo que no hay justificación suficiente para que el Proyecto de LOCE convierta en «básicas» las «características» de estas pruebas, que, como hemos visto en la propuesta de enmienda al artículo 36.1, no pueden tener la consideración de básicas, desde el momento en que no son un desarrollo esencial del derecho a la educación, tal como está recogido en el artículo 27 CE.

Tampoco se han de confundir «la regulación de las condiciones de homologación de títulos» del artículo 149.1.30 CE, con la «relación entre los títulos de Técnico y su correspondiente de Técnico Superior a los efectos previstos en este artículo» que se atribuye injustificadamente al Gobierno, sin intervención alguna de las Comunidades Autónomas. La relación entre títulos de grado medio y superior, prevista en este artículo, no es más que un requisito de acceso, en función de la relación que pueda determinarse entre unos ciclos formativos y otros. No es, evidentemente, la homologación de la que trata el artículo 149.1.30 CE.

ENMIENDA NÚM. 1027

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 37

Redacción que se propone:

«Artículo 37. Acceso.

2. También podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado superior se requerirá tener veinte años de edad, cumplidos en el año de realización de la prueba.

La prueba a que hace referencia este apartado deberá adaptarse a las circunstancias personales de los alumnos con necesidades educativas especiales.»

JUSTIFICACIÓN

Con carácter general, todas las pruebas académicas, en caso que sea necesario, han de adaptarse a las circunstancias de los alumnos con discapacidad que no pueden seguir siempre el régimen general establecido para todos los alumnos.

ENMIENDA NÚM. 1028

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 38

JUSTIFICACIÓN

La novedad legislativa prevista en este artículo no es necesario que se recoja en esta Ley. Las Administraciones educativas tienen la capacidad de establecer convenios con otras entidades jurídicas, sin que lo prevea una ley educativa, y además, desde el momento en que la programación general de la enseñanza es competencia de las CCAA, son ellas las encargadas de regular sus relaciones con otras entidades.

ENMIENDA NÚM. 1029

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 39

Redacción que se propone:

«Artículo 39. Incorporación al sistema educativo.

1. Las Administraciones educativas garantizarán el ejercicio del derecho a la educación de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que presenten graves carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.

2. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles.

3. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los alumnos, según su edad, y padres reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español.

4. Las Administraciones educativas promoverán actuaciones de formación del profesorado para la atención educativa de los alumnos extranjeros.»

JUSTIFICACIÓN

Las graves carencias en conocimientos básicos ya incluyen el desconocimiento de las lenguas oficiales.

Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar dónde y cómo se imparten los programas específicos previstos en el apartado 2 del artículo 39 del Proyecto.

Una vez establecido que tienen los mismos derechos, también tienen el de cursar el Programa de Iniciación Profesional y aceptar las normas establecidas con carácter general.

El asesoramiento lo han de recibir, no sólo los padres de los alumnos, sino también los propios alumnos, según su edad.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no puede ser el sujeto jurídico principal del verbo «promoverá actuaciones en colaboración con las Comunidades Autónomas», ya que son éstas últimas las que tienen la competencia para «actuar» dentro del ámbito de la formación permanente.

ENMIENDA NÚM. 1030

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 40

Redacción que se propone:

«Artículo 40. Principios.

1. Las Administraciones educativas prestarán atención específica a la enseñanza del alumnado de acuerdo con sus características personales y, en particular, del que presente superdotación intelectual.

2. Con el fin de dar una respuesta educativa adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades y establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley.

3. Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de formación específica para el profesorado que atienda a este alumnado. Igualmente adoptarán las medidas oportunas para que sus padres reciban el adecuado asesoramiento.

JUSTIFICACIÓN

La calificación de «superdotación intelectual» es un término no legal sino de carácter técnico-pedagógico que se utiliza para designar determinadas características personales; la escolarización del alumnado que recibe esta calificación requiere de atenciones específicas, pero en ningún caso parece que entre dentro de las competencias estatales establecer cómo deben ser éstas; en realidad dichas atenciones constituyen elementos de organización de las enseñanzas que en su mayor parte corresponden a los centros y profesionales docentes.

Las actuaciones previstas en el apartado 3 del artículo 40 del Proyecto son, evidentemente, una competencia de gestión, que no puede asumir el Estado estableciendo normas y fijando criterios de programas educativos, que forman parte de la planificación educativa de cada Comunidad Autónoma.

El Estado no tiene la competencia de fijar los criterios para este tipo de actuaciones educativas específicas, que pueden ser reguladas por cada Comunidad Autónoma, en tanto no forman parte de los contenidos básicos del currículum, que están reservados al Estado, según el artículo 4.2 de la LOGSE.

En el artículo 43.1 del Proyecto se prevé, para los alumnos de educación especial, que «excepcionalmente, podrá autorizarse la flexibilización del período de escolarización en la enseñanza obligatoria», materia muy parecida a la que regula este artículo 40.3, pero sin remitir al Gobierno la potestad de regular esta flexibilización.

Y en una misma línea, el artículo 45 del Proyecto prevé, en relación con los alumnos con necesidades educativas especiales, que «las Administraciones educativas promoverán ofertas formativas adaptadas a las necesidades educativas de los alumnos», también sin ninguna alusión a que el Gobierno deba fijar los criterios de estas adaptaciones.

Es una competencia de las Comunidades Autónomas determinar cómo y dónde se escolarizan todos los alumnos, no sólo los que son intelectualmente superdotados, por lo que no puede aceptarse el redactado del punto 4 del artículo 40 del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 1031

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 41

Redacción que se propone:

«Artículo 41. Ámbito.

1. Las Administraciones educativas tendrán una atención especializada para las necesidades educativas especiales de aquellos alumnos que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta.

2. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del sistema educativo los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de poner la atención educativa en la necesidad específica y evitar, que por esta necesidad un alumno o alumna reciba una calificación global como alumno especial

Los alumnos han de alcanzar los objetivos educativos dentro del propio sistema, tal como prevé el artículo 36.1 de la LOGSE, que quedará derogado por la LOCE.

ENMIENDA NÚM. 1032

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar un nuevo apartado al artículo 41

Redacción que se propone:

«Artículo 41. Ámbito.

Apartado 3 (nuevo).

La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, que se iniciará en el mismo momento de su detección, se regirá por los principios de normalización e integración educativa.»

JUSTIFICACIÓN

Es importante que la nueva legislación recoja un principio básico que inspira toda la política general sobre discapacidad, desarrollada por lo países avanzados, que es el principio de normalización e integración, que ha de ser el eje del sistema en cuanto a discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 1033

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 42

JUSTIFICACIÓN

Es un tema de organización de las enseñanzas para un colectivo particular del alumnado que no tiene nada que ver con la regularización del ejercicio del derecho a la educación ni con las condiciones básicas para la obtención de un título; no debe, pues, formar parte de una ley estatal.

La determinación de las condiciones que han de reunir los planes de actuación de los equipos de profesionales, y los requisitos de participación de los equipos directivos y los padres de los alumnos, es una tarea meramente de gestión y de organización de las actividades docentes que no puede considerarse incluida dentro de la competencia estatal de fijar los aspectos básicos del derecho a la educación. Por ello no merece este artículo ser incluido dentro de la normativa estatal. En cualquier caso, no puede tener la consideración de básico.

ENMIENDA NÚM. 1034

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 43

Redacción que se propone:

«Artículo 43. Escolarización.

1. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar.

2. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales comenzará en la edad más precoz posible, y en todo caso desde el momento de la detección de aquella necesidad. Y finalizará con las

edades establecidas, con carácter general, para el nivel y la etapa correspondiente, aunque podrá autorizarse la flexibilización del periodo de escolarización en cada uno de los niveles y etapas. En cualquier caso, el límite de edad para poder permanecer escolarizado en un centro de educación especial será de veintiún años.»

JUSTIFICACIÓN

Es importante mantener la vigencia de los principios de normalización y de integración escolar del alumnado con necesidades educativas especiales, tal como lo recoge hoy el artículo 36.3 de la LOGSE, que quedará derogado por la LOCE y que el Proyecto de Ley omite, a pesar de que son principios fundamentales.

Admitir que la flexibilización del período de escolarización para este tipo de necesidades educativas no es excepcional

Son las CCAA las competentes para regular la cooperación entre la escuela y la familia.

ENMIENDA NÚM. 1035

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 44

Redacción que se propone:

«Artículo 44. Recursos y condiciones de los Centros.

Las Administraciones educativas dotarán a los centros sostenidos con fondos públicos del personal especializado y de los recursos necesarios para garantizar la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales y atenderlos adecuadamente. Los criterios para determinar esas dotaciones serán los mismos para todos los centros sostenidos con fondos públicos.»

JUSTIFICACIÓN

La supresión del segundo punto del párrafo primero responde a los principios de normalización y de integración invocados anteriormente, por los cuales debe tenderse a escolarizar el alumnado en el centro escolar que le correspondería normalmente, reservando la escolarización en centros específicos para los casos en que aquello no sea posible.

La formación del profesorado es competencia de las Comunidades Autónomas por lo que procede suprimir el segundo párrafo del artículo, tal como aparece en el Proyecto.

Por la misma razón de competencias debe suprimirse el tercer párrafo.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no puede ser el sujeto jurídico principal del verbo «promoverá actuaciones en colaboración con las Comunidades Autónomas», ya que son estas últimas las que tienen la competencia para «actuar» dentro del ámbito de la formación permanente.

Las Administraciones educativas no necesitan cobertura legal para, en el marco de sus competencias, «establecer acuerdos de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas o privadas». Cada ente autonómico puede actuar, por sí mismo, para acordar convenios con otras entidades públicas o privadas.

ENMIENDA NÚM. 1036

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar un nuevo apartado al artículo 44

Redacción que se propone:

«Artículo 44. Recursos de los Centros.

4. Los centros escolares de nueva creación sostenidos con fondos públicos deberán cumplir con las disposiciones normativas vigentes en materia de promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras de todo tipo que les sean de aplicación. Las Administraciones educativas promoverán programas para eliminar las barreras de los centros escolares sostenidos con fondos públicos que por razón de su antigüedad u otros motivos presenten obstáculos para los alumnos con problemas de movilidad o comunicación.»

JUSTIFICACIÓN

La existencia en los centros escolares de barreras de todo tipo y la falta o las deficiencias en cuanto a accesibilidad son factores discriminadores que inciden negativamente en el proceso de normalización e integración de las personas con discapacidad, impidiendo el pleno desarrollo de los alumnos.

ENMIENDA NÚM. 1037

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 45

Redacción que se propone:

«Artículo 45. Integración social y laboral.

Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral de los alumnos, las Administraciones públicas promoverán ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los alumnos y promoverán su integración laboral, en su caso.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de facilitar la integración social y laboral aconseja extender al conjunto de las Administraciones públicas, y no sólo a las educativas, la promoción de ofertas adaptadas.

ENMIENDA NÚM. 1038

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar un nuevo artículo 45 bis, dentro de la Sección 3.ª del Capítulo VII del Título I

Redacción que se propone:

«Artículo 45 bis. (Nuevo.)

En relación con los alumnos que presenten deficiencias auditivas, se adoptarán las medidas oportunas tendentes a:

a) Impulsar el estudio y la definición de los perfiles de los profesionales necesarios para la atención educativa al alumnado sordo.

b) Fomentar la formación permanente del profesorado en el aprendizaje de la lengua de Signos y los aspectos pedagógicos, psicológicos y socioculturales de la sordera.»

JUSTIFICACIÓN

En la línea de la mejora de la calidad de la educación, es necesario que la atención al alumnado sordo por el profesorado vaya más allá de los conocimientos clínicos y patológicos sobre la sordera, la rehabilitación funcional del habla y la atención oral en el aula. El profesorado del alumnado sordo debe además tener conocimientos acerca de la dimensión pedagógica, psicológica y socio-cultural de la sordera.

ENMIENDA NÚM. 1039

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 46

Redacción que se propone:

«Artículo 46. Ámbito y estructura.

1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros que imparten enseñanzas especializadas de idiomas, que tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial a las que se refiere esta Ley.

2. La estructura básica de estas enseñanzas, se adecuará a los siguientes niveles:

— Nivel Básico.
— Nivel Intermedio.
— Nivel Avanzado.

En la legislación específica sobre las enseñanzas de idiomas se establecerán los efectos de los certificados correspondientes.

3. El profesorado que imparta estas enseñanzas deberá pertenecer al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, podrán impartirlas profesores de otros Cuerpos docentes del mismo grupo, en las condiciones que las Administraciones educativas establezcan.

Las Comunidades Autónomas podrán establecer los requisitos y condiciones de contratación de profesorado nativo de las distintas lenguas extranjeras en el caso que se requiera.

4. Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas se requerirá estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del Certificado de Escolaridad o de estudios primarios.

5. Los alumnos no escolarizados en estos centros podrán obtener los certificados correspondien-

tes a los distintos niveles mediante la superación de las pruebas que organicen las Administraciones educativas.

6. Las Administraciones educativas fomentarán también la enseñanza de idiomas a distancia.»

JUSTÍFICACIÓN

No está justificada esta novedad de atribuir al Gobierno la regulación de los requisitos mínimos de los centros donde se imparten enseñanzas de idiomas.

No son enseñanzas obligatorias, ni se les puede aplicar el artículo 149.1.30 CE ni tampoco se trata de un desarrollo esencial del artículo 27 CE, que pueda corresponder al Gobierno.

En estos momentos, y de acuerdo con el artículo 50.1 de la LOGSE, que no quedará derogado por la LOCE, la regulación de las EOI es una competencia de las CCAA: «Las enseñanzas de idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas tendrán la consideración de enseñanzas de régimen especial a que se refiere esta Ley», sin ninguna referencia a una regulación básica por el Gobierno de los requisitos mínimos de las Escuelas.

Los certificados de las EOI no son títulos académicos ni profesionales.

No cabe dentro de la determinación de las enseñanzas mínimas, tal como las define el artículo 4.2 de la LOGSE, no modificado por el Proyecto de Ley, incluir también los efectos académicos o profesionales de las enseñanzas correspondientes. Este tema corresponde a la Ley, no al Gobierno del Estado.

Los efectos académicos de este tipo de enseñanzas de régimen especial pueden ser determinados por las Administraciones educativas, en la legislación correspondiente. No hay nada en la CE que permita atribuir al Gobierno del Estado esta competencia.

El artículo 50.2 de la LOGSE (no derogado por el Proyecto de LOCE) no prevé en absoluto ninguna referencia a regulación de enseñanzas mínimas: «La estructura de las enseñanzas de idiomas, sus efectos académicos y las titulaciones a que den lugar serán las establecidas en la legislación específica sobre dichas enseñanzas».

La disposición adicional 14.3 de la LOGSE, no derogada por el Proyecto establece: «en las condiciones que las Administraciones educativas establezcan».

No existe el concepto «nivel» dentro de la organización de los Cuerpos de la función pública docente; en todo caso, se ha de substituir por «grupo», concepto fijado en la normativa general de Función Pública (Ley 30/1984, artículo 25).

Si con «nivel» quiere referirse a «nivel de destino», este último no puede atribuirse a los Cuerpos, sino a los funcionarios docentes o a los puestos de trabajo.

Finalmente, si con «nivel» se pretende aludir a los niveles educativos, se ha de tener en cuenta que los diferentes Cuerpos docentes no se pueden clasificar según la estructura del sistema educativo, ya que un mismo nivel educativo está asignado a más de un Cuerpo docente.

En el apartado 5, las pruebas de unas enseñanzas no obligatorias, que hasta ahora las ha regulado cada Administración educativa, no pueden convertirse de repente, y sin ningún motivo jurídico, en competencia del Estado, al que se le atribuye en este apartado «fijar los requisitos básicos» de unas simples pruebas, por las que se expiden unos certificados de conocimientos de idiomas, no unos títulos académicos o profesionales, que según el artículo 149.1.30 CE le corresponde al Estado la «regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales».

En las EOI no se expiden títulos académicos o profesionales, sino como indica este mismo apartado del Proyecto, «certificados correspondientes a los distintos niveles» de las diferentes lenguas.

Con el redactado del punto 6 de esta enmienda se pretende ubicar en su lugar oportuno este artículo que trata del ámbito y la estructura de las enseñanzas de idiomas, lo que en el proyecto de ley aparece como punto 3 del artículo 47, dedicado a las Escuelas Oficiales de Idiomas. La enseñanza a distancia de idiomas no debe quedar reducida a la actividad de las Escuelas Oficiales.

ENMIENDA NÚM. 1040

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir los apartados 2, 3 y 4 del artículo 47

JUSTIFICACIÓN

Corresponde a cada Administración educativa decidir sobre las atribuciones y funciones de los centros oficiales de idiomas que estén bajo su gobierno y no es propio de la Ley estatal definir actividades y planes de dichos centros.

ENMIENDA NÚM. 1041

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 48

Redacción que se propone:

«Artículo 48. Realización de pruebas en el sistema escolar.

Las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas extranjeras cursadas por los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Si sólo debe facilitarse la realización es superfluo subrayar su carácter voluntario.

La decisión sobre quién realiza las pruebas compete a la Administración educativa; no puede ser una atribución de unos centros concretos.

ENMIENDA NÚM. 1042

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 49

Redacción que se propone:

«Artículo 49. Objetivo.

1. La educación permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal o profesional.

A tal fin, las Administraciones educativas colaborarán con otras Administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas y, en especial, con la Administración laboral.

2. Las enseñanzas para las personas adultas tendrán los siguientes objetivos:

a) Adquirir, completar o ampliar capacidades y conocimientos, actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles del sistema educativo.

b) Desarrollar programas y cursos para responder a determinadas necesidades educativas específicas de grupos sociales desfavorecidos.

c) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica.

3. Dentro del ámbito de las enseñanzas para las personas adultas, las Administraciones públicas atenderán preferentemente a aquellas personas que, por diferentes razones, no hayan podido completar la enseñanza básica o con dificultades para su inserción laboral. Asimismo, podrán seguir estas enseñanzas aquellos alumnos mayores de dieciséis años que por su trabajo u otras circunstancias especiales no puedan acudir a los centros educativos en régimen ordinario.

4. En los establecimientos penitenciarios y hospitales se garantizará a la población reclusa y hospitalizada la posibilidad de acceso a estas enseñanzas.

5. Las enseñanzas para las personas adultas se podrán impartir a través de las modalidades presencial y a distancia.

6. Las Administraciones educativas promoverán convenios de colaboración con las universidades, entes locales y otras instituciones o entidades, para desarrollar las enseñanzas para las personas adultas.

7. Las Administraciones educativas promoverán programas específicos de Lengua y Cultura Españolas y, en su caso, de la Lengua y Cultura propias de la Comunidad Autónoma, para facilitar la integración de las personas inmigrantes.»

JUSTIFICACIÓN

El segundo párrafo del punto 1 pretende mantener la vigencia de la normativa actual en esta materia, tal como la recoge hoy el artículo 51.1 de la LOGSE, que quedará derogado por la LOCE.

El apartado d) del punto 2 incluye un objetivo actualmente previsto para la educación de las personas adultas, en el artículo 51.2.c) de la LOGSE, derogado por la LOCE.

En el punto 3, el criterio de las dificultades para la inserción laboral está actualmente previsto en el artículo 51.3 de la LOGSE, que quedará derogado por la LOCE.

Finalmente, en el punto 7, se pretende facilitar la integración; debe promoverse el conocimiento de las lenguas de la comunidad a la que se pretende integrar, no sólo una de ellas.

ENMIENDA NÚM. 1043

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 50

Redacción que se propone:

«Artículo 50. Enseñanza básica.

1. Las personas adultas que pretendan adquirir los conocimientos correspondientes a la enseñanza básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Esta oferta deberá ajustarse a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación fijados en los currículos de las respectivas Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas velarán para que todas las personas adultas que tengan el Título de Graduado Escolar puedan acceder a programas o centros docentes que les ayuden a alcanzar la formación básica prevista en la presente Ley para la Educación Secundaria Obligatoria.

3. La enseñanza básica para las personas adultas podrá impartirse en centros que impartan enseñanzas en régimen ordinario o en centros específicos debidamente autorizados por la Administración educativa competente.

4. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizarán periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años de edad puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En dichas pruebas se valorarán las capacidades generales propias de la educación básica.»

JUSTIFICACIÓN

El derecho de las personas adultas, que se propone en el apartado 2, está actualmente recogido en el artículo 52.2 de la LOGSE, expresamente derogado por la LOCE, sin incluir ninguna previsión al respecto.

Se ha de rechazar también la novedad legislativa del punto 2 del Proyecto, que pretende atribuir competencias al Estado sobre el establecimiento de requisitos mínimos a los centros específicos que impartan enseñanza básica para las personas adultas. Por más que se trate de enseñanza básica, no nos encontramos ante niveles educativos obligatorios, por tratarse de educación de adultos, y por ello, son las Administraciones educativas las que tienen la competencia para regular este tipo de centros.

En este sentido, el artículo 54.1 de la LOGSE no prevé, en absoluto, la intervención del Gobierno: «La educación de las personas adultas podrá impartirse en centros docentes ordinarios o específicos. Estos últimos estarán abiertos al entorno y disponibles para las actividades de animación sociocultural de la comunidad».

La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria deriva del currículo propio de la etapa que establece cada Comunidad Autónoma. Las condiciones para que los títulos sean válidos en el conjunto del Estado se establecen a través de las enseñanzas mínimas. No hace falta remitirse a unas nuevas condiciones básicas para poder organizar procedimientos de evaluación del grado de consecución de los objetivos del currículo; procedimientos que aplican, por otra parte, continuamente todos los profesores de la etapa sin ninguna condición de carácter básico.

ENMIENDA NÚM. 1044

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 51

Redacción que se propone:

«Artículo 51. Enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional.

1. Las Administraciones educativas facilitarán a todos los ciudadanos el acceso a los niveles o grados de las enseñanzas no obligatorias.

2. Las personas adultas que estén en posesión de la titulación requerida podrán cursar el Bachillerato y la Formación Profesional.

3. Las Administraciones educativas organizarán en estos niveles la oferta pública de enseñanza presencial o a distancia, con el fin de dar una respuesta adecuada a la demanda de formación permanente de las personas adultas.

4. Las Administraciones educativas organizarán pruebas a las que podrán presentarse las personas mayores de veintiún años, en la modalidad de Bachillerato que prefieran, para la obtención del Título de Bachiller.

5. Las Administraciones educativas organizarán pruebas para obtener los títulos de Formación Profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Resume en el párrafo 3 el contenido del final del 2 y del mismo 3 y atribuye la organización a las Administraciones educativas que son las competentes.

Por la misma razón aducida en la justificación del artículo anterior no procede que el Gobierno establezca nuevas condiciones básicas para unas pruebas que deben evaluar unos currículos a los cuales ya se les ha incorporado el carácter básico mediante la inclusión de las enseñanzas mínimas.

El párrafo 6 no pertenece al ámbito de esta Ley.

ENMIENDA NÚM. 1045

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el primer párrafo y los apartados e) y g) del artículo 53

Redacción que se propone:

«Artículo 53. Funciones del profesorado.

A los profesores de los centros escolares les corresponde la promoción del pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y, en particular, las siguientes funciones:

e) La función de dirección y coordinación de las actividades docentes y de gestión que les sean encomendadas.

g) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

Entre las funciones del profesorado, además de la coordinación de las actividades docentes, también se ha de considerar la de dirección.

El artículo 59.1 de la LOGSE, no derogado, establece que: «Las Administraciones educativas fomentarán la investigación y favorecerán la elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas y de organización de los centros docentes».

Por otro lado, el artículo 1.h) del Proyecto de LOCE establece el siguiente principio de calidad educativa: «El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa».

Las funciones que se enumeran de la a) a la g) son funciones relacionadas con la docencia y que constituyen aspectos parciales de lo que debe ser la función global del docente. Esta función global no es otra que la de promover, orientar, impulsar (…) el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, como función global compartida por todos los profesores.

ENMIENDA NÚM. 1046

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 1 del artículo 54

Redacción que se propone:

«Artículo 54. Principios.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán…/… (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones educativas sólo pueden actuar en el ámbito de sus competencias.

ENMIENDA NÚM. 1047

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 55

Redacción que se propone:

«Artículo 55. Formación inicial.

1. Para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria, de la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial, además de las titulaciones académicas correspondientes, será necesario estar en posesión del Título de Especialización Didáctica.

2. El Título de Especialización Didáctica se obtendrá tras la superación de un período académico y otro de prácticas docentes.

3. El Gobierno regulará los efectos del correspondiente Título de Especialización Didáctica, y las demás condiciones para su obtención, expedición y homologación.

4. Las Universidades podrán organizar las enseñanzas del Título de Especialización Didáctica, mediante los oportunos convenios con la correspon-

diente administración educativa. Las Universidades podrán incorporar a los planes de estudio de sus titulaciones oficiales las materias incluidas en el período académico de dichos cursos.

5. Finalizados los estudios universitarios correspondientes, los titulados podrán matricularse en el período académico del Título de Especialización Didáctica. Al efectuar la matrícula podrán solicitar la convalidación de aquellos créditos cursados con anterioridad. Las Universidades acreditarán la superación de dicho período académico.

6. En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional, Artísticas y de Idiomas, los estudios requeridos para la obtención del Título de Especialización Didáctica se adaptarán a las características de estas enseñanzas.»

JUSTIFICACIÓN

No parece oportuno que el Proyecto permita presentarse al procedimiento selectivo a aspirantes que no reúnen el requisito de tener el Título previsto en la propia Ley para poder impartir docencia al nivel educativo correspondiente.

Hay un error de transcripción. En el Proyecto de LOCE ya no se habla de un curso, con fases teórica y práctica, del Título de Especialización Didáctica, como aparecía en el Anteproyecto. El apartado 2 de este artículo 55 define el contenido previo a la expedición del Título, evitando la palabra «curso», con la frase «tras la superación de un período académico y otro de prácticas docentes».

Una cosa es que el Estado regule las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales (artículo 149.1.30 CE), y otra muy diferente es que para obtener este Título de Especialización Didáctica (que ha perdido en el Proyecto de Ley la consideración de «profesional» que tiene en la LOGSE, 24.2) el Gobierno pretenda regular todas las condiciones de acceso al curso en sus períodos teórico y práctico, e incluso las adaptaciones específicas para las enseñanzas de Formación Profesional, Artísticas y de Idiomas. El Estado se habría de limitar a las condiciones básicas, para dejar que las CCAA posteriormente las desplieguen normativamente.

El artículo 33.1 de la LOGSE no prevé en esta materia una intervención básica del Gobierno: «Para el profesorado de tales áreas o materias podrá adaptarse en duración y contenidos el curso a que se refiere el artículo 24.2 de esta ley.»

ENMIENDA NÚM. 1048

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 56

Redacción que se propone:

«Artículo 56. Formación permanente.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán periódicamente Planes Generales de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, garantizando una oferta diversificada y gratuita de estas actividades de formacion permanente.

2. A los solos efectos de los concursos de traslados de ámbito estatal y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional séptima de esta Ley, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas, surtirán sus efectos en todo el territorio, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas convocatorias.»

JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no puede ser el sujeto jurídico principal del verbo «establecerá periódicamente Planes Generales de Formación Permanente en colaboración con las Comunidades Autónomas», ya que son éstas últimas las que tienen la competencia para «actuar» dentro del ámbito de la formación permanente.

Por otro lado, el artículo 56.3 de la LOGSE, que no quedará derogado por la LOCE en el redactado del Proyecto de Ley, atribuye a las Administraciones educativas la planificación de la formación permanente:

«Las Administraciones educativas planificarán las actividades necesarias de formación permanente del profesorado y garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades.»

Atendiendo a la justificación del párrafo anterior, no estando legitimado el Ministerio para organizar actividades formativas para el profesorado no procede estipular que las Administraciones educativas deban facilitar la asistencia de su profesorado.

De acuerdo con el artículo 149.1.30 CE, el Estado sólo puede regular «las condiciones de obtención, expedición y homologación de título académicos y profesionales», y evidentemente la formación permanente de los funcionarios docentes no permite obtener «títulos académicos y profesionales», sino simples certifi-

cados de asistencia o superación de los correspondientes cursos.

Por lo tanto, la regulación de la formación permanente, en tanto no permite la expedición de un título académico ni profesional, no puede ser considerada básica de acuerdo con el artículo 149.1.30 CE, y no se puede aceptar que sea el Gobierno el que establezca las condiciones y los requisitos básicos de los cursos de formación.

Cada Administración educativa, en relación con su propia organización y de acuerdo con su política educativa, ha de regular las características, condiciones de acceso y requisitos de los cursos que organice.

Otro tema diferente es si todos los cursos organizados por las CCAA podrán ser valorados en los concursos de méritos de ámbito estatal. Para ello, evidentemente, habrán de reunir las condiciones y requisitos que prevean las propias convocatorias o que se establezcan en una norma de carácter general, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

Resulta sorprendente que el Proyecto de Ley incluya en este artículo una remisión básica al Gobierno, en una materia que hasta ahora sólo estaba recogida en una Orden del Ministerio de Educación y Ciencia del 26 de noviembre de 1992, que atribuye «un reconocimiento oficial» a las actividades de formación que cumplan los requisitos establecidos en la mencionada Orden: «Tendrán validez, a efectos de su reconocimiento oficial, por el Ministerio de Educación y Ciencia, las actividades de formación permanente convocadas por (…)».

No se puede aceptar que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrezca a profesores y a los centros que no dependen de él «apoyo y asesoramiento», aunque el texto del proyecto matice con la expresión «en colaboración con las Comunidades Autónomas».

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no puede ser el sujeto jurídico principal del verbo «podrá ofrecer a los centros y profesores apoyo y asesoramiento» en temas de Formación Permanente, ya que son las Administraciones educativas las que tienen la competencia para «actuar» dentro de este ámbito. El Ministerio, dentro de su ámbito directo de gestión, es decir, Ceuta y Melilla, también puede llevar a cabo actuaciones de formación, pero no en todo el Estado. Por ello la expresión «Administraciones educativas» incluye tanto a las Comunidades Autónomas como al Ministerio de Educación.

Ni en la LODE, LOGSE ni LOPEGCD aparece ninguna remisión al Ministerio de Educación.

ENMIENDA NÚM. 1049

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 57

Redacción que se propone:

«Artículo 57. Planes de valoración.

1. Con el fin de mejorar la labor docente de los profesores, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán planes para la valoración de la función pública docente, con la participación del profesorado.

2. Las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en la carrera profesional del profesorado, junto con las actividades de formación, investigación e innovación.

Asimismo, prestarán una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.»

JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones educativas deben actuar en el ámbito de sus competencias.

Añadida la participación del profesorado en la elaboración de los planes de valoración en el párrafo 1, el resto del párrafo 2 inicial debe suprimirse puesto que incide en aspectos, papel de la inspección e intervención del equipo directivo y del resto de sectores, que deben ser de decisión libre por parte de la Administración educativa competente.

ENMIENDA NÚM. 1050

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 58

Redacción que se propone:

«Artículo 58. Evaluación.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la evaluación del pro-

fesorado. Los resultados de estas evaluaciones se podrán tener en cuenta a efectos de movilidad y de promoción dentro de la carrera docente.

2. Las certificaciones de evaluación, en lo que se refiere únicamente a los concursos de traslados de ámbito estatal y a la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional novena de esta Ley, surtirán sus efectos en todo el territorio, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas convocatorias.»

JUSTIFICACIÓN

La evaluación voluntaria del profesorado, tal como ha quedado recogida en el apartado 1 de este mismo artículo, no es un deber que pueda considerarse incluido en el régimen estatutario de los funcionarios, desde el momento en que es voluntaria, por lo que no puede tener carácter básico la regulación de las condiciones y requisitos, y no se le puede aplicar lo previsto en el artículo 149.1.18 CE.

Cada Administración educativa, en relación con su propia organización y de acuerdo con su política educativa, ha de regular las características, condiciones y requisitos del procedimiento de evaluación de su profesorado.

El Estado no tiene tampoco competencias para regular las condiciones de expedición de «certificados» emitidos por las Comunidades Autónomas, ya que el artículo 149.1.30 CE sólo le atribuye competencia en «títulos académicos y profesionales».

Otro tema diferente es si todos los certificados de evaluación voluntaria emitidos por las CCAA podrán ser valorados en los concursos de méritos de ámbito estatal. Para ello, evidentemente, habrán de reunir las condiciones y requisitos que prevean las propias convocatorias, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

ENMIENDA NÚM. 1051

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 59

Redacción que se propone:

«Artículo 59. Medidas de apoyo al profesorado.

1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con su programación general de la enseñanza, podrán favorecer:

a) El reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos.

b) La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años que lo soliciten, con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

c) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales que se determinen.

d) La realización de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado en su ejercicio profesional.

e) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación educativas.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica del profesorado de los Centros escolares públicos, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

3. Las Administraciones educativas regularán, en el ámbito de su competencia, la carrera profesional de los funcionarios docentes con los efectos económicos y profesionales que determinen, así como para otros fines de promoción dentro de la carrera docente. Para la elaboración de estas normas específicas se tendrán en cuenta los criterios establecidos con carácter general en la Ley 30/1984, de 2 de agosto.»

JUSTIFICACIÓN

No es propio del ámbito de una Ley introducir expresiones de valoración de una función docente calificándola de «compleja».

Tampoco es procedente que la Ley establezca lo que deben hacer las Administraciones educativas en el campo de sus competencias.

No se puede aceptar que la Ley estatal incluya una medida de carácter propiamente organizativo, como es la regulación de la jornada lectiva del profesorado, cuya competencia corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.

Es, también, poco oportuno que el Proyecto pretenda incidir en la clasificación de las actividades docentes, competencia también de las Comunidades Autónomas, mencionando unas «actividades de otra naturaleza» que no están reguladas en ninguna norma legal de ámbito estatal.

Finalmente, es inadecuado que el Estado se atreva a entrar también en este artículo en el procedimiento de «substitución» de las actividades lectivas de los docentes «sin reducción de sus retribuciones», con carácter básico, invadiendo las competencias autonómicas en temas de gestión de personal, de organización de las tareas escolares, retribuciones correspondientes a la jornada laboral, de clasificación y definición de las actividades docentes, y de distribución de las disponibilidades presupuestarias en materia de personal docente, según los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma, que pueden verse afectados por esta medida de «condiciones laborales de los funcionarios docentes», que cada Administración educativa ha de regular en su ámbito de gestión.

Por último, se propone un nuevo apartado 3, ya que a lo largo de todo el texto del Proyecto de LOCE se acumulan las referencias a la «promoción profesional» de los docentes [art. 1, g)], la «carrera profesional» del profesorado (art. 57.3), la «promoción dentro de la carrera docente» (art. 58.1), los «oportunos incentivos profesionales» [art. 59.a y c)], «otros fines de carácter profesional, dentro del ámbito docente» y, finalmente, la «trayectoria profesional» (disposición final 4.3), sin que en ningún apartado de ningún artículo se articule una definición del concepto jurídico ni tampoco un desarrollo de lo que, desde el año 1988, en que se modificó la Ley 30/1984, está pendiente de regular.

ENMIENDA NÚM. 1052

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 3 del artículo 61

Redacción que se propone:

«Artículo 61. Clasificación de centros.

3. Los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros con enseñanzas concertadas.»

JUSTIFICACIÓN

Evitar la confusión provocada por el hecho de denominar «centros concertados» y también «centros privados sostenidos con fondos públicos», a todos aquellos centros privados que imparten varios niveles o etapas educativas y en el que sólo alguno de ellos ha accedido al régimen de conciertos.

Por otra parte, el uso (y abuso) de la expresión genérica «centros sostenidos con fondos públicos», aplicada indistintamente a centros públicos y privados con algún nivel o etapa en régimen de conciertos origina continuas confusiones que se deben evitar. Los centros docentes públicos y los centros privados tienen una naturaleza jurídica diferente, aunque estos últimos hayan accedido, en todo o en parte, al régimen de conciertos. Cabe señalar igualmente que en muchos centros privados no todas las enseñanzas son concertadas, por lo que no se les puede aplicar la expresión de «centros concertados».

ENMIENDA NÚM. 1053

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 66

Redacción que se propone:

«Artículo 66. Admisión de alumnos.

1. Las Administraciones educativas realizarán una adecuada programación de los puestos escolares gratuitos que garantice la efectividad del derecho a la educación y el derecho a la libre elección de centro. En todo caso, en dicha programación se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades educativas específicas, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas.

2. Los criterios para la admisión de alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el centro docente, de acuerdo con la regulación de la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: rentas per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro y condición legal de familia numerosa.

3. Los centros de especialización curricular a que se refiere el artículo 73 de esta Ley, podrán incluir, como criterios complementarios, otros que respondan a las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente.

4. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan varios niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del nivel inferior de las enseñanzas escolares que sean objeto de financiación, de acuerdo con

los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo.

5. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales o nacimiento.»

JUSTIFICACIÓN

La decisión de que el centro actúe por medio de su equipo directivo es una cuestión de organización que corresponde a la Administración educativa competente.

Siendo una cuestión no obligatoria la intervención del expediente académico como criterio, su inclusión en la Ley condiciona y limita la capacidad de actuación de la Administración competente.

Por ello, no es aceptable que el Proyecto prevea como criterio para la admisión de alumnos en los centros públicos el expediente académico, ni siquiera en niveles no obligatorios.

No parece necesario mencionar explícitamente las «razones de raza», cuando este concepto está ya incluido en «razones de nacimiento».

No es necesario el apartado 6 del Proyecto. Es evidente que las Administraciones educativas pueden solicitar colaboración a otras administraciones en este y en otros muchos temas. No corresponde a la Ley decir lo que puede hacer una Administración educativa en el ámbito de sus competencias.

ENMIENDA NÚM. 1054

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 66, apartado 2

Redacción que se propone:

«Artículo 66. Admisión de alumnos.

2. Los criterios para la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el correspondiente equipo directivo, de acuerdo con la regulación de la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: renta per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro, concurrencia de discapacidad en el alumno y condición legal de familia numerosa.»

JUSTIFICACIÓN

La presencia de discapacidad en el alumno es un elemento que ha de ser tenido en cuenta en lo referido a los criterios de admisión.

ENMIENDA NÚM. 1055

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 5 del artículo 66

Redacción que se propone:

«Artículo 66. Admisión de alumnos.

5. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza, existencia de discapacidad o nacimiento.»

JUSTIFICACIÓN

La normativa comunitaria prevé que cuando se haga mención a supuestos concretos de discriminación, se haga una referencia expresa a la discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 1056

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la rúbrica de la Sección 2.ª del Capítulo I del Título V

Redacción que se propone:

Sección 2.ª De los centros con enseñanzas concertadas

JUSTIFICACIÓN

Precisión técnica.

ENMIENDA NÚM. 1057

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar los apartados 1 y 2 del artículo 68

Redacción que se propone:

«Artículo 68. Módulos del concierto.

1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros con enseñanzas concertadas se establecerá en los Presupuestos de las Administraciones correspondientes. En todo caso la cuantía del concierto satisfará el coste real de las enseñanzas concertadas.

2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir la exigencia de que los componentes económicos del módulo del concierto educativo, fijado por las Comunidades Autónomas, respete escrupulosamente los mismos conceptos que los que se han fijado en los Presupuestos Generales del Estado. No se entiende la finalidad de que intervengan las Administraciones autonómicas con sus Presupuestos, si éstos han de reproducir miméticamente lo que ya han publicado los del Estado.

ENMIENDA NÚM. 1058

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 1 del artículo 69

Redacción que se propone:

«Artículo 69. Principios.

1. Los centros docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica para favorecer la mejora continua de la educación. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán esta autonomía y estimularán el trabajo en equipo de los profesores.»

JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones educativas actúan en el ámbito de sus competencias.

ENMIENDA NÚM. 1059

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 70

Redacción que se propone:

«Artículo 70. Autonomía pedagógica.

1. La autonomía pedagógica, con carácter general, se concretará mediante las programaciones didácticas, planes de acción tutorial y planes de orientación académica y profesional y, en todo caso, mediante proyectos educativos.

2. Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las Administraciones educativas, elaborarán el proyecto educativo en el que se fijarán los objetivos y las prioridades educativas, así como los procedimientos de actuación. Para la elaboración de dicho proyecto deberá tenerse en consideración las características del centro y de su entorno escolar, así como las necesidades educativas de los alumnos.

3. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro.

4. Los centros docentes harán público su proyecto educativo y facilitarán a los alumnos y a sus padres cuanta información favorezca una mayor participación de la comunidad educativa.

5. El proyecto educativo de los centros con enseñanzas concertadas deberá incorporar el carácter propio al que se refiere el artículo 65 de la presente Ley.

6. Los centros docentes completarán y desarrollarán los currículos establecidos por las Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas.

7. Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para cada una de las áreas, asignaturas o módulos. Deberán ser elaboradas por los equipos de profesores que tengan encomendadas dichas enseñanzas.

8. En la elaboración de tales materiales didácticos se garantizará la superación de todo tipo de estereoti-

pos discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre los sexos.

9. Los centros docentes tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de usarse en cada ciclo o curso y en cada área, asignatura o módulo, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.

10. Las Administraciones educativas impulsarán los procesos de innovación educativa en los centros y prestarán especial apoyo a los proyectos de investigación educativa encaminados a la mejora de la calidad de la enseñanza y en los que participen equipos de profesores de los distintos niveles educativos.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone mantener la situación actual de la autonomía pedagógica de los centros educativos: pueden completar y desarrollar los currículos oficiales.

En el punto 8 se propone mantener la vigencia de la situación normativa actual (LOGSE, artículo 57.3, derogado por la LOCE).

No conviene establecer distinciones en esta materia entre centros sostenidos con fondos públicos, ni que, por Ley, se determine quién debe elegir los libros de texto. El principio de libertad de cátedra, consagrado en la CE, también es de aplicación al profesorado de los centros privados, a los que no debería negárseles la participación en el proceso de elección de los libros de texto y demás materiales curriculares.

En el punto 10 se propone mantener la situación normativa actual, regulada por los apartados 1 y 2 del artículo 33 de la LOPEGCD, derogados por la LOCE. No tiene mucho sentido que el apartado h) del artículo 1 del Proyecto de LOCE proclame como principio de calidad del sistema educativo «el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa», para derogar, a continuación, la aplicación del principio de innovación educativa y mejora de la calidad de la enseñanza, vigente actualmente en el artículo 33 de la LOPEGCD.

ENMIENDA NÚM. 1060

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 72

Redacción que se propone:

«Artículo 72. Autonomía de gestión económica.

1. Los centros docentes públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, con los límites que en la normativa correspondiente se establezcan. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a las disposiciones que regulan el proceso de contratación y de realización y justificación del gasto para las Administraciones educativas.

3. En cualquier caso, las Administraciones educativas prestarán especial apoyo a aquellos centros sostenidos con fondos públicos que escolaricen alumnos con necesidades educativas específicas o estén situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas.

4. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las competencias que éstas determinen, responsabilizando a los Directores de la gestión de los recursos materiales, puestos a disposición del centro.»

JUSTIFICACIÓN

El punto 2 del artículo 72 del Proyecto, totalmente críptico en su significado, no parece merecer que se mantenga en su redactado actual, muy impreciso, en lo que se refiere a las actividades que cita y, también, a la clase de personal cualificado a la que se refiere, que no sabemos si se trata de profesorado o personal no docente. Si se refiere a la figura que aparecía en el «Documento de Bases» inicial, la redacción de aquel documento era más clara, aunque también rechazable.

Además, se produce una intromisión en las competencias de las Administraciones educativas con la introducción de una expresión imprecisa: «actividades que lo requieran». El Gobierno del Estado no sólo interviene con ello en un ámbito que no le pertenece, sino que además provoca que se culpabilice a la Administración autonómica de las posibles frustraciones por expectativas, fundamentadas o no, de personal cualificado que no puedan ser atendidas.

No es aceptable la redacción actual del punto 3 del Proyecto de LOCE en este apartado, desde el momento en que supone mantener una situación ya existente en la normativa actual (LOPEGCD, art. 7.3, derogado por la LOCE) con dos graves amputaciones: una, la eliminación de la frase «sin perjuicio de que todos los centros reciban los recursos económicos necesarios para cumplir sus objetivos con criterios de calidad» (sic. Sorprende que el proyecto de Ley de Calidad elimine de la normativa actual una referencia directa al criterio de calidad educativa en los centros docentes), y otra, y no menos importante, la previa aprobación del Consejo

Escolar de los recursos complementarios (en el texto del Proyecto no se hace ninguna referencia al órgano que aprobará estas partidas, ni tampoco que se habrán de aplicar a los gastos de funcionamiento de los centros).

En el punto 2 se propone mantener en la normativa la situación actual de la posibilidad de delegación de las Administraciones educativas en los órganos de gobierno de los centros públicos, prevista en el artículo 7.2 de la LOPEGCD, derogado por la LOCE.

En el punto 4 se propone mantener en la normativa la situación actual de la posibilidad de delegación de las Administraciones educativas en los órganos de gobierno de los centros públicos, prevista en el artículo 7.4 de la LOPEGCD, derogado por la LOCE.

ENMIENDA NÚM. 1061

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el apartado 6 del artículo 73

JUSTIFICACIÓN

No parece razonable que los centros con especialización curricular puedan ampliar los horarios, con la finalidad que prevé el texto: «para desarrollar los correspondientes proyectos de especialización». La carga lectiva de los alumnos no puede verse incrementada por un objetivo de especialización curricular; los alumnos no han de hacer horas extraordinarias en aras del proyecto educativo.

ENMIENDA NÚM. 1062

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 4 y suprimir el apartado 5 del artículo 75

Redacción que se propone:

«Artículo 75. Tipos de órganos.

4. El Consejo Escolar y el Claustro de profesores, así como los órganos de gobierno y los distintos sectores de la comunidad educativa, colaborarán en los planes de evaluación del centro que se les encomienden, en los términos que las Administraciones educativas establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que se realicen en el centro.»

JUSTIFICACIÓN

Es evidente que, además del Consejo Escolar y del Claustro, también han de intervenir en los procesos de evaluación del centro docente los órganos de gobierno y los distintos sectores de la comunidad educativa. El texto del punto 4 del artículo 75 del Proyecto de LOCE reproduce literalmente el apartado 2 del artículo 16 de la LOPEGCD, que deroga, pero también deroga el apartado 2 del artículo 29 de la misma Ley, que incluye la participación de los órganos unipersonales de gobierno y de los distintos sectores de la comunidad educativa, en la evaluación externa del centro, sin recoger esta colaboración importante en ningún apartado del Proyecto.

La inspección de educación es un organismo transferido, por lo que las decisiones sobre lo que le debe ejecutar corresponden a la Administración educativa competente.

Eliminación de atribuciones de competencias que no corresponde definir al Estado porque nada tienen que ver con el ejercicio del derecho a la educación ni con las condiciones para la obtención de títulos.

ENMIENDA NÚM. 1062

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 76

Redacción que se propone:

«Artículo 76. Consejo Escolar.

1. El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.

2. El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director del centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.

d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.

e) Un número de padres y de alumnos, elegidos, respectivamente, por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo, y, asimismo, representante de las Asociaciones de padres y madres de alumnos del centro.

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan aulas especializadas, se considerará incluido en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.

g) El Secretario del centro, que actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto.

3. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar, a partir del primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

4. Los alumnos de Educación Primaria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas.

5. Las Administraciones educativas regularán las condiciones por las que los centros que impartan las enseñanzas de formación profesional específica o artes plásticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar, un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro.

6. Las Administraciones educativas determinarán el número total de miembros del Consejo Escolar y regularán el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores que lo integran.

7. En los centros específicos de Educación Infantil, en los incompletos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades, en centros de educación permanente de personas adultas y de Educación Especial, en los que se impartan enseñanzas de régimen especial, así como en aquellas unidades o centros de características singulares, la Administración educativa competente adaptará lo dispuesto en este artículo y en el artículo 75 de esta Ley a la singularidad de los mismos.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone mejorar la participación de los padres y madres de alumnos en el Consejo Escolar.

No hay motivo para limitar la participación de los alumnos de la ESO a partir del tercer curso. Se propone, por ello, la supresión de una injustificable distinción entre los alumnos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y el resto de los alumnos del mismo centro que se arrastra incomprensiblemente desde la anterior división por niveles en la cual este grupo de alumnos pertenecía al nivel de la EGB.

Por otro lado, no tiene justificación alguna limitar los derechos de participación de los alumnos en el Consejo Escolar por motivo de sanción disciplinaria, que puede haber caducado en el momento del proceso de elección.

En definitiva, si las Administraciones educativas son las competentes para establecer los términos de participación de los alumnos en el Consejo Escolar, no parece razonable que la Ley estatal condicione la edad de estos alumnos aludiendo directamente al ciclo y a los cursos de sus estudios.

ENMIENDA NÚM. 1063

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 77

Redacción que se propone:

«Artículo 77. Atribuciones del Consejo Escolar.

1. El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar la programación general anual del centro y establecer directrices para la elaboración del proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.

b) Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad del mismo.

c) Decidir sobre la admisión de alumnos y velar para que se realice con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.

f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación.

g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar.

h) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con otros centros, entidades y organismos.

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los

resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.

j) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.

k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

l) Elegir sus representantes en la Comisión de selección de Director prevista en el artículo 84 de esta Ley.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas podrán establecer una denominación específica para referirse al Consejo Escolar de los centros educativos.

3. Las Administraciones educativas podrán establecer, con carácter excepcional, la exigencia de mayoría cualificada en la toma de determinadas decisiones de especial importancia para el funcionamiento del centro y que afecten al conjunto de la comunidad educativa.

4. Las Administraciones educativas podrán regular la creación de comisiones dependientes del Consejo Escolar para los objetivos que se determinen.

5. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, sin perjuicio de que se cubran hasta entonces las vacantes que se produzcan. Las Administraciones educativas regularán el procedimiento de renovación parcial, que se realizará de modo equilibrado entre los distintos sectores de la comunidad educativa que lo integran.»

JUSTIFICACIÓN

El texto del Proyecto de LOCE ha olvidado atribuir a ningún órgano del centro docente la aprobación de la programación general anual del centro, función que actualmente tiene atribuida el Consejo Escolar [apartado h) del artículo 11.1 de la LOPEGCD, derogado por la LOCE].

Tampoco es aceptable reducir la participación del Consejo Escolar en relación con el proyecto educativo, a un simple informe, cuando actualmente establece las directrices para la elaboración del mismo [LOPEGCD, art. 11.1.a), derogado por la LOCE].

Es demasiado impreciso el verbo utilizado en este apartado, «participar», sin que se precise la forma de la participación, que puede convertir al Consejo Escolar en mero espectador del procedimiento, cuando la normativa vigente le atribuye la decisión sobre la admisión de alumnos [LOPEGCD, art. 11.1.c), derogado por la LOCE], decisión que el Proyecto no atribuye a ningún otro órgano del centro.

Una vez más, se han reducido las competencias del Consejo Escolar, rebajando la expresión «fijar las directrices para la colaboración» [LOPEGCD, art. 11.1.i), derogado por la LOCE] a «proponer las directrices para la colaboración», sin que se precise a qué órgano ha de hacer las propuestas oportunas, y qué órgano del centro tomará la decisión sobre un tema tan importante como el de la colaboración con otros centros, entidades y organismos.

Igual que el Claustro tiene atribuida la función de elegir sus representantes en la Comisión de selección de Director [art. 79, apartado e), del Proyecto de LOCE], está justificado prever esta misma atribución al Consejo Escolar, desde el momento en que la composición de la citada Comisión permite la participación de miembros del Consejo Escolar, que habrán de ser elegidos por el propio Consejo.

En el punto 3 se propone mantener la situación normativa actual (LOPEGCD, art. 11.3, derogado por la LOCE).

En el punto 4 se propone mantener la situación normativa actual (LOPEGCD, art. 13, derogado por la LOCE).

En el punto 5 se propone mantener la situación normativa actual (LOPEGCD, art. 24.3, derogado por la LOCE).

ENMIENDA NÚM. 1064

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una expresión al final del apartado 1 del artículo 78

Redacción que se propone:

«Artículo 78. Claustro de profesores.

1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el control y gestión del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del centro, de acuerdo con sus atribuciones.»

JUSTIFICACIÓN

Habría que limitar la contundencia de la afirmación del texto del Proyecto. Es evidente que el Claustro no puede decidir sobre todos los aspectos docentes del centro, ya que está limitado a las atribuciones que le confiere la Ley.

ENMIENDA NÚM. 1065

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartados b), e) y k) del artículo 79

Redacción que se propone:

«Artículo 79. Atribuciones del Claustro de profesores.

El Claustro de profesores tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

b) Aprobar y evaluar el proyecto educativo y los proyectos curriculares.

(…)

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y en la Comisión de selección de Director prevista en el artículo 84 de esta Ley.

(…)

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas.

…/… (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Se propone mantener la situación legal actual, en la que además de aprobar el proyecto educativo, el Claustro también lo evalúa [LOPEGCD, art. 15, apartado b), derogado por la LOCE].

Por otro lado, del texto del Proyecto de LOCE han desaparecido todas las referencias a los proyectos curriculares de los centros docentes. No hay en todo el texto del Proyecto de LOCE ni una sola referencia a los «proyectos curriculares». En su lugar, aparecen las programaciones didácticas, que elaboran los equipos de profesores de cada área o asignatura (art. 70.7: «Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para cada una de las áreas, asignaturas o módulos. Deberán ser elaboradas por los equipos de profesores que tengan encomendadas dichas enseñanzas».)

_____

ENMIENDA NÚM. 1066

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 80

JUSTIFICACIÓN

Se ha de rechazar que dentro del contenido de normas básicas estatales se especifiquen los órganos de coordinación de los centros, en la medida en que éstos no son esenciales, como el Director o el Consejo Escolar, y por lo tanto no pueden ser materia básica. Son las Comunidades Autónomas las que han de determinar estos órganos y sus funciones, por lo cual se ha de proponer que se suprima este artículo.

La previsión de enumerar los órganos que han de existir en un Instituto de Enseñanza Secundaria, estableciendo algunos de sus aspectos organizativos no puede considerarse incluida dentro de los derechos participativos previstos en el artículo 27.7 de la Constitución, ni tampoco un aspecto que suponga establecer líneas fundamentales del sistema de gobierno escolar, sino que es una cuestión interna y organizativa de los centros, que corresponde regular a las Comunidades Autónomas, como una materia de ejecución y organizativa. La Ley estatal podría llegar a establecer que han de existir órganos de coordinación docente, pero no imponer cuáles son estos órganos ni regular aspectos de su organización.

El FJ 24 de la STC 5/1981, de 13 de febrero, atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para regular los seminarios o departamentos previstos en el artículo 29 de la LOCE.

_____

ENMIENDA NÚM. 1067

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 82

Redacción que se propone:

«Artículo 82. Equipo directivo.

1. El Director, previa comunicación al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de Jefe de Estudios y Secretario, y demás

órganos de gobierno, de entre los profesores con destino definitivo en dicho centro.

2. Los órganos de gobierno constituirán el equipo directivo y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a las instrucciones del Director.

3. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca el cese del Director.

No obstante, la Administración educativa competente cesará o suspenderá a cualquiera de los miembros del equipo directivo designado por el Director, antes del término de dicho mandato, cuando incumplan gravemente sus funciones, previo informe razonado del Director, dando audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar.

Asimismo, la Administración educativa cesará a cualquiera de los miembros del equipo directivo designado por el Director, a propuesta de éste mediante escrito razonado, previa comunicación al Consejo Escolar del centro.

4. En los centros de nueva creación, el Jefe de Estudios y el Secretario serán nombrados directamente por la Administración educativa.

5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.»

JUSTIFICACIÓN

No hay justificación objetiva que pueda impedir que un profesor no pueda ser Jefe de Estudios si no es «del nivel educativo correspondiente», a pesar de formar parte del Claustro de Profesores. Parece que esta limitación pretenda evitar que un maestro pueda convertirse en Jefe de Estudios de un Instituo de Enseñanza Secundaria, a pesar de estar destinado en el centro. Es muy poco justificable esta condición que se pretende introducir en el procedimiento de nombramiento de los equipos directivos, y muy poco afortunada la expresión «profesor del nivel educativo correspondiente», realmente añeja y atribuible a la Ley de 1970, ya que desde la LOGSE, y el Proyecto de LOCE no lo modifica, los cuerpos de los profesores no están directamente relacionados con un solo nivel educativo; tanto los maestros, que tienen atribuidos los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria, como el profesorado de secundaria, que pueden impartir docencia en más de un nivel educativo.

Se propone mantener la vigencia de la situación legal actual sobre el cese de los equipos directivos (LOPEGCD, art. 23. 3 y 4, derogados por la LOCE).

ENMIENDA NÚM. 1068

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 84

Redacción que se propone:

«Artículo 84. Principios generales.

1. La selección y nombramiento de directores de los centros públicos corresponde a las Administraciones educativas y se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores, con una antigüedad de al menos cinco años en el ejercicio de la docencia como funcionarios.

2. La selección se realizará de conformidad con los principios de publicidad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias. En todo caso, se garantizará la participación del Consejo Escolar del centro.»

JUSTIFICACIÓN

Admitir la antiguedad de docente en general y no limitada al mismo cuerpo y nivel educativo.

También en este apartado se encuentra una clasificación de los cuerpos docentes ligada a los niveles educativos y «régimen a que pertenezca el centro», que pretende limitar la participación de los funcionarios en los concursos de méritos con unos criterios que, según la normativa vigente, no se utilizan para ordenar la función pública docente. Desde la reordenación de los Cuerpos docentes por la LOGSE, no hay un criterio clasificador de los cuerpos que coincida con los niveles educativos (como pasaba con la Ley de 1970) ni con el régimen de los centros.

Junto con el Claustro, se ha de garantizar también la participación del Consejo Escolar en la composición de las Comisiones de selección de los directores.

ENMIENDA NÚM. 1069

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 85

Redacción que se propone:

«Artículo 85. Requisitos.

Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo de la función pública docente desde el que se opta.

b) Haber impartido docencia directa en el aula como funcionario, durante un periodo de igual duración, en un centro público que imparta enseñanzas contempladas en la presente Ley.

c) Estar prestando servicios en un centro público, con una antigüedad en el mismo de al menos un curso completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la Administración educativa convocante.»

JUSTIFICACIÓN

Véase la justificación a la enmienda al artículo 84.1. Se propone suprimir las limitaciones de antigüedad en el mismo nivel y cuerpo.

Los funcionarios de carrera no tienen, por su pertenencia a los cuerpos docentes, los «mismos» niveles y régimen que los centros educativos. Por lo tanto, se ha de suprimir el final del apartado, tal como se ha propuesto.

No hay «correspondencia» entre los servicios prestados y el nivel y régimen de los centros públicos.

ENMIENDA NÚM. 1070

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 86

JUSTIFICACIÓN

Este artículo 86 regula con todo tipo de detalle el procedimiento de selección del director, procedimiento que no es más que un concurso de méritos del que no deben ser reguladas con carácter básico sus normas procedimentales.

ENMIENDA NÚM. 1071

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 87

Redacción que se propone:

«Artículo 87. Nombramiento.

1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las Administraciones educativas, consistente en un curso teórico de formación y en un período de prácticas. En cualquier caso, las Administraciones educativas podrán convalidar esta formación por la experiencia adquirida en cargos unipersonales directivos.

2. La Administración educativa nombrará director del centro que corresponda, por un período de tres años, al aspirante que haya superado este programa.

3. Los directores así nombrados serán evaluados a lo largo de los tres años. Los que obtuvieren evaluación positiva, adquirirán la categoría de Director. Dicha categoría surtirá efectos en el ámbito de todas las Administraciones educativas.»

JUSTIFICACIÓN

El detalle con el que se regula este apartado 1 del artículo 87 no deja margen al desarrollo autonómico, al prever incluso el contenido del curso, como si se tratara de una Orden ministerial.

Se propone ampliar las posibilidades de convalidación.

Si ya se ha previsto que el programa de formación será organizado por las Administraciones educativas, e incluso se ha añadido que el programa tendrá dos partes diferenciadas, un curso teórico de formación y un período de prácticas, el contenido del curso ha de quedar para la regulación por las Comunidades Autónomas, y es ocioso que la Ley básica les recuerde el contenido del curso (aspectos del sistema educativo, organización y funcionamiento de los centros, organización y gestión de recursos humanos y materiales, y otros contenidos de la función directiva) ni tampoco es aceptable que esta norma prevea la determinación de los que hay que considerar exentos.

ENMIENDA NÚM. 1072

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir el artículo 88

JUSTIFICACIÓN

La duración del mandato de un director no tiene nada que ver con el ejercicio del derecho a la educación ni con las condiciones de obtención de títulos, fuentes de competencia del Estado.

ENMIENDA NÚM. 1073

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 89

Redacción que se propone:

«Artículo 89. Nombramiento con carácter extraordinario.

1. En ausencia de candidatos o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante, la Administración educativa nombrará director, por un periodo de tres años, a un profesor funcionario que reúna, al menos, los siguientes requisitos:

a) Tener una antigüedad de al menos tres años en el cuerpo de la función pública docente de procedencia.
b) Haber sido profesor con docencia directa en el aula, durante un período de igual duración, en un centro público.

2. En el caso de centros de nueva creación, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. En estos centros, la duración del mandato de todos los órganos de gobierno será de tres años.
3. En los centros específicos de Educación Infantil, en los centros cíclicos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades y en los que impartan Enseñanzas Artísticas, de Idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, las Administraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

La ausencia de candidatos puede ser por la falta de la antigüedad necesaria, por lo que parece procedente rebajar la exigencia de los cinco años.

La supresión de las referencias al mismo nivel y régimen se corresponde con propuestas de modificación de los artículos anteriores.

Es excesivo el requisito de un mínimo de cinco años de servicios, del apartado a).

No es muy afortunada la expresión «centros incompletos», por su contenido negativo, por lo que se propone substituirla por la más apropiada «centros cíclicos» de Educación Primaria.

ENMIENDA NÚM. 1074

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 90

Redacción que se propone:

«Artículo 90. Apoyo al ejercicio de la función directiva.

1. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes dotando a los directores de la necesaria autonomía de gestión para impulsar y desarrollar los proyectos educativos propios del centro.
2. Asimismo, organizarán cursos de formación de cargos directivos que actualicen sus conocimientos técnicos y profesionales.»

JUSTIFICACIÓN

La autonomía de gestión de los centros no puede limitarse a «impulsar y desarrollar los proyectos de mejora de la calidad», en todo centro educativo hay otros muchos proyectos educativos que merecen el impulso necesario para llevarlos a término.

La frecuencia y la obligatoriedad de asistencia de los equipos directivos a los cursos de formación es una competencia de las Comunidades Autónomas, que no puede quedar consagrada en la Ley como si se tratara de una materia básica. Ya se ha dicho reiteradamente que la formación permanente del profesorado no es una competencia estatal.

Lo que pretende el apartado 3 del Proyecto es totalmente rechazable, ya que el Ministerio de Educación no tiene competencia para llevar a cabo una «oferta

periódica de planes de formación que promuevan la calidad de la función directiva», dirigidos estos planes al profesorado de todo el Estado. No es el momento de que el MECD asuma una competencia que ha sido transferida a las Comunidades Autónomas.

No puede aceptarse que, una vez más, el Proyecto de LOCE pretenda entrar en la regulación de los horarios de los profesores, como ha sucedido en el artículo 59.b), cuando es un tema organizativo propio de la competencia de las Comunidades Autónomas, que son las que han de asignar y distribuir el horario lectivo, y no lectivo, de los equipos directivos «en función de las características de los centros» o según los criterios que determine cada Administración, como está sucediendo en estos momentos.

El Estado no debe regular «los procedimientos para eximir, total o parcialmente, al equipo directivo y, especialmente, al director de la docencia directa», cuando se trata de una competencia propia de las Comunidades Autónomas, que están ejerciendo desde la aprobación de cada Estatuto de Autonomía.

ENMIENDA NÚM. 1075

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 91

Redacción que se propone:

«Artículo 91. Cese del director.

1. El cese del Director se producirá en los siguientes supuestos:

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado.
b) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.
c) Revocación motivada por la Administración educativa competente por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de director, previo informe razonado del Consejo Escolar y previa audiencia al interesado.»

JUSTIFICACIÓN

No hace falta diferenciar entre nombramiento y prórroga, porque esta última también está incluida en el concepto de nombramiento, no es más que un tipo de nombramiento.

La novedad legislativa de motivo de cese de un Director «por incapacidad física o psíquica sobrevenida» no precisa si la incapacidad física o psíquica es temporal o permanente, ni tampoco si procede o no la jubilación. Es evidente que no se ha pretendido regular el cese del Director por una baja temporal, que lo que requiere es una licencia por enfermedad, pero en ningún caso el cese en el cargo. Finalmente, al no precisarse que la incapacidad por enfermedad ha de impedir el ejercicio de las funciones propias del Director, y por tanto también de la docencia, puede este apartado incurrir en una posible discriminación no justificada.

Sólo en el caso que el incumplimiento grave de las funciones hubiera dado lugar a un expediente disciplinario y a una sanción que implicara esta circunstancia, podría aceptarse la imposibilidad de que un Director sancionado viera limitado sus derechos de participación en un concurso de méritos.

ENMIENDA NÚM. 1076

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 2 del artículo 92

Redacción que se propone:

«Artículo 92. Reconocimiento de la función directiva.

2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en todo caso, del cargo de Director será especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función pública docente, así como para el eiercicio de otras funciones, dentro del ámbito de la administración educativa o general, que establezcan las Administraciones competentes.»

JUSTIFICACIÓN

No hay motivo para limitar la valoración del ejercicio de cargos directivos al ámbito docente, cuando la disposición adicional 15 de la Ley 30/1984 permite a los docentes ocupar puestos de trabajo en la Administración y, por ello, que se valoren todos sus méritos profesionales.

ENMIENDA NÚM. 1077

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una expresión al artículo 93

Redacción que se propone:

«Artículo 93. Ámbito de la evaluación.

La evaluación se extenderá a todo el ámbito educativo regulado en esta ley, se orientará a la permanente adecuación del mismo a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, los procesos educativos, la actividad del profesorado, los centros docentes, la inspección de educación y la propia Administración educativa.»

JUSTIFICACIÓN

La evaluación ha de tener, entre sus objetivos, el de buscar la adecuación del ámbito educativo a las demandas sociales y a las necesidades educativas.

ENMIENDA NÚM. 1078

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 1 del artículo 94

Redacción que se propone:

«Artículo 94. Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.

1. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación que pasa a denominarse Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, realizará la evaluación general del sistema educativo, sin perjuicio de la evaluación que las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas puedan realizar en sus ámbitos respectivos.»

JUSTIFICACIÓN

No puede aceptarse que el Proyecto de Ley atribuya directamente al MECD la evaluación general del sistema educativo de todo el Estado, en lugar de una Institución como el INCE, en cuyo gobierno y funcionamiento participan actualmente todas las Administraciones educativas, y entre ellas el MECD (art. 62.4 de la LOGSE).

Ni en la LODE, LOGSE ni LOPEGCD aparece ninguna remisión al Ministerio de Educación.

ENMIENDA NÚM. 1079

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 95

Redacción que se propone:

«Artículo 95. Evaluaciones de diagnóstico general.

1. El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo elaborará evaluaciones de diagnóstico general del sistema educativo, mediante métodos estadísticos de carácter muestral.

2. Las Administraciones educativas participarán en las evaluaciones de diagnóstico del sistema educativo y en las evaluaciones internacionales en las que tome parte el Estado español, mediante las actuaciones que sean necesarias en sus respectivos centros.

3. Las Administraciones educativas desarrollarán, ejecutarán y controlarán las evaluaciones en el ámbito de sus respectivas competencias.»

JUSTIFICACIÓN

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no le compete, como prevé el Proyecto, la evaluación general del sistema educativo. No hay ninguna previsión al respecto en la CE. Son las Administraciones educativas, en el ámbito de su competencia, las que pueden evaluar el sistema educativo, y no el Estado, que carece de competencias de gestión y ejecución.

Ni en la LODE, LOGSE ni LOPEGCD aparece ninguna remisión al Ministerio de Educación.

Se trata de acotar los métodos de evaluación para que en el caso general se apliquen métodos estadísticos de carácter muestral. De lo contrario podrían diseñarse evaluaciones de carácter general que consistieran en la aplicación generalizada de una prueba a todo el alumnado del Estado. Con ello se superaría la finalidad estricta de evaluación general del sistema y se entraría en una evaluación de centros y de alumnos; una prueba de este tipo condiciona en gran manera la actividad diaria del profesorado el cual actúa en función del conte-

nido de la prueba; con ello se consigue, de hecho, una muy fuerte disminución de la capacidad de gestión del currículum de cada Comunidad Autónoma.

Ni el apartado 30 del artículo 149.1 de la CE, ni tampoco el artículo 27 CE incluyen entre las competencias del Estado la regulación básica del desarrollo de la evaluación del sistema educativo, ni mucho menos puede considerarse un desarrollo esencial del derecho fundamental a la educación (por lo que el Proyecto de Ley no le confiere a este artículo el carácter de orgánico).

Por lo tanto, no puede incluirse esta materia dentro de la «regulación de normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia» (artículo 149.1.30 CE), ni la invocación del principio de «homogeneidad» del proceso le confiere al Gobierno regularlo con carácter básico.

La evaluación del sistema educativo es una competencia de ejecución y control de las Administraciones educativas, que no puede asumir el Estado.

De aprobarse el texto en su redactado actual, el Estado asumiría una competencia que en la actualidad ejercen las Administraciones educativas, de acuerdo con los puntos 2 y 4 del artículo 62 de la LOGSE.

ENMIENDA NÚM. 1080

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 96

Redacción que se propone:

«Artículo 96. Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

1. El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo elaborará periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

2. A los efectos de la elaboración de este sistema de indicadores, las Administraciones educativas colaborarán con el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.»

JUSTIFICACIÓN

No puede aceptarse que el Proyecto de Ley atribuya directamente al MECD la evaluación general del sistema educativo y la elaboración periódica del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, en lugar de una Institución como el INCE, en cuyo gobierno y funcionamiento participan actualmente todas las Administraciones educativas, y entre ellas el MECD (art. 62.4 de la LOGSE).

Ni en la LODE, LOGSE ni LOPEGCD aparece ninguna remisión al Ministerio de Educación.

ENMIENDA NÚM. 1081

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la primera frase del artículo 97, que pasa a ser el artículo 90

Redacción que se propone:

«Artículo 97. Plan de Evaluación General del Sistema.

El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, elaborará periódicamente un plan de evaluación general del sistema en el que se determinarán las prioridades y objetivos que el Instituto deberá desarrollar en sus evaluaciones. Este plan contendrá los criterios y procedimientos de evaluación, que se harán públicos con carácter previo.»

JUSTIFICACIÓN

No puede aceptarse que el Proyecto de Ley atribuya directamente al MECD la evaluación general del sistema educativo y la elaboración periódica del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, en lugar de una Institucion como el INCE, en cuyo gobierno y funcionamiento participan actualmente todas las Administraciones educativas, y entre ellas el MECD (art. 62.4 de la LOGSE).

Ni en la LODE, LOGSE ni LOPEGCD aparece ninguna remisión al Ministerio de Educación.

ENMIENDA NÚM. 1082

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 98

Redacción que se propone:

«Artículo 98. Publicación de los resultados de las evaluaciones.

El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema educativo efectuadas y dará a conocer los resultados de la aplicación del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.»

JUSTIFICACIÓN

No puede aceptarse que el Proyecto de Ley atribuya directamente al MECD la evaluación general del sistema educativo y la elaboración periódica del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, en lugar de una Institución como el INCE, en cuyo gobierno y funcionamiento participan actualmente todas las Administraciones educativas, y entre ellas el MECD (art. 62.4 de la LOGSE).

Con mayor motivo, una actuación como es la publicación de los resultados, no puede tener carácter básico, ni ser atribuida al Ministerio de Educación, ni al Gobierno, como aparece en el artículo 28.3 de la LOPAGCD, sino a las Administraciones educativas.

Ni en la LODE, LOGSE ni LOPEGCD aparece ninguna remisión al Ministerio de Educación.

ENMIENDA NÚM. 1083

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 99

Redacción que se propone:

«Artículo 99. Otros programas de evaluación.

1. La Administración educativa correspondiente podrá elaborar planes de evaluación que serán aplicados con periodicidad a los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

2. Los órganos de gobierno y los órganos de participación en el control y gestión así como los distintos sectores de la comunidad educativa colaborarán en la evaluación externa de los centros.

3. Las Administraciones educativas informarán a la comunidad educativa y harán públicos los criterios y procedimientos que se utilicen para la evaluación de los centros, así como las conclusiones generales que en dichas evaluaciones se obtengan.

4. Además de la evaluación externa, los centros evaluarán su propio funcionamiento, de acuerdo con lo preceptuado por la Administración educativa.»

JUSTIFICACIÓN

En el ámbito de la competencia de las Comunidades Autónomas, como es la evaluación de los centros de su territorio de cuya organización y funcionamiento son responsables, no puede el Estado por medio de la ley imponer cuál debe ser la actuación.

La intervención de la inspección educativa, organismo transferido, es una cuestión a decidir por cada Comunidad Autónoma.

Tampoco procede establecer variables a analizar, ni procedimientos de comunicación de resultados, ni precisión de actuaciones de los centros a final de curso en unos planes de evaluación que competen a cada Comunidad Autónoma.

El procedimiento de comunicación de resultados de la evaluación, contenido concreto de la misma y otras previsiones de la segunda parte de este apartado son meramente organizativas y propias de la regulación de cada Administración educativa, sin que hayan de ser reguladas por el Estado, por no tener el carácter de materia básica.

La determinación del momento en que los centros llevarán a cabo su evaluación interna es un tema competencial de cada Administración educativa, por lo que no debe recoger la Ley que estas evaluaciones internas se harán «al final de cada curso».

ENMIENDA NÚM. 1084

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 2 del artículo 100

Redacción que se propone:

«Artículo 100. Inspección del Sistema Educativo.

2. Las Administraciones públicas competentes ejercerán la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial. El ejercicio de la función inspectora se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de

enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.»

JUSTIFICACIÓN

La inspección educativa es una función propia de cada Comunidad Autónoma, que ha de llevar a cabo en aplicación de su propia política educativa, por lo que es ociosa la referencia a que deberá ejercerse «de conformidad con las normas básicas que regulan esta materia». Es evidente que la legislación de las CCAA ha de respetar la normativa básica fijada por el Estado, pero la inspección educativa no está regulada sólo por la normativa del Gobierno. Al contrario, es una competencia propia de cada Comunidad Autónoma realizar las tareas de inspección y control del sistema educativo. Al Estado, la CE sólo le ha reservado la Alta Inspección.

ENMIENDA NÚM. 1085

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 101

Redacción que se propone:

«Artículo 101. Ámbito

Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le están atribuidas en materia de educación en las Comunidades Autónomas, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Precisión técnica.

ENMIENDA NÚM. 1086

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar los apartados e) e i) del artículo 102

Redacción que se propone:

«Artículo 102. Competencias.

En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, corresponde a la Alta Inspección:

(…)

e) Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre las características de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico para cada nivel de ensenanza.

(…)

i) Elevar a las autoridades del Estado una memoria anual sobre la enseñanza en las respectivas Comunidades Autónomas.

…/… (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no tiene competencia para «establecer con carácter básico las características de la documentación administrativa para cada nivel de enseñanza», en todo caso ha de ser el Gobierno el que establezca las condiciones básicas de esta documentacion.

Ni en la LODE, LOGSE ni LOPEGCD aparece ninguna remisión al Ministerio de Educación.

En el apartado i) se propone mantener el texto del R.D. 480/1981, que regula hoy esta materia. La Alta Inspección lo es del Estado, no del Ministerio de Educación.

ENMIENDA NÚM. 1087

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 104

Redacción que se propone:

«Artículo 104. Organización de la Inspección Educativa.

1. Las Administraciones educativas, de acuerdo con sus competencias, regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos territorios.

2. Las Administraciones educativas organizarán su Inspección Educativa y fijarán el cuadro de sus especialidades.»

JUSTIFICACIÓN

Es un tema de organización que ha de regular cada Administración educativa, no puede pretenderse que el Estado, con carácter básico, regule las especialidades de la inspección educativa, que actualmente ha determinado cada CA, y mucho menos que el Estado pueda incluso determinar los criterios que ha de seguir la Inspección para atender «actuaciones específicas», cuando no haya personal inspector con la especialidad adecuada. Evidentemente, esto último es un tema de gestión y organización de cada Administración, en el que no puede entrar el Estado.

El Gobierno no puede asumir la potestad de regular las especialidades de la Inspección Educativa, porque es un tema de organización, como indica el propio título del artículo y, por tanto, se trata de una competencia de las Administraciones educativas.

También es totalmente inadecuado que el Gobierno pueda fijar los criterios que ha de seguir la Inspección Educativa para atender actuaciones específicas, cuando no haya personal inspector con la especialidad adecuada. La organización de la inspección es competencia de las Comunidades Autónomas, como materia propiamente organizativa del servicio transferido de la educación, que ahora no puede pretender el Estado asumir invadiendo directamente las competencias autonómicas.

El artículo pretende, con un redactado muy similar a la disposición adicional 9.8 de la LOGSE, que regula las especialidades de los cuerpos docentes, atribuir al Gobierno la potestad de fijar las «especialidades» de los inspectores, sin tener en cuenta que la especialidad docente es competencia y obligación de impartir los contenidos curriculares asignados a la especialidad, mientras que los inspectores ya tienen adquirida una especialidad correspondiente al cuerpo docente del que proceden, y las que ahora se regulan no son más que estructuras organizativas propias de cada Administración educativa (según recoge, con claridad, el redactado de este artículo: «teniendo en cuenta, en todo caso, los diferentes niveles, asignaturas, módulos y programas educativos», es decir, teniendo en cuenta la organización de la inspección y no el sistema general educativo).

Los sistemas de provisión de puestos han de atender, según prevé la Ley 30/1984, a las características de los puestos de trabajo, entre las cuales, evidentemente, se incluyen las especialidades, en su caso. Todo ello, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas relaciones de puestos de trabajo y las propias convocatorias.

Se propone la supresión de este punto, por innecesario, ya que esta previsión está recogida en la normativa general de provisión de puestos, aplicable a todos los funcionarios. Además, esta afirmación no la ha previsto el Proyecto para los demás cuerpos docentes, porque es supéerflua y evidente.

ENMIENDA NÚM. 1088

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el artículo 105

Redacción que se propone:

«Artículo 105. Formación de los inspectores de Educación.

1. El perfeccionamiento y actualización en el ejercicio profesional es un derecho y un deber de los inspectores de Educación y deberá contribuir a adecuar su capacitación profesional a las distintas áreas, materias, programas, enseñanzas y niveles en los que se ordena el sistema educativo con el fin de poder colaborar en los procesos de renovación pedagógica.

2. La formación de los inspectores de Educación se llevará a cabo por las distintas Administraciones educativas, en colaboración, preferentemente, con las universidades e instituciones superiores de formación del profesorado.

3. A los solos efectos de los concursos de traslados de ámbito nacional y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas, surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan las respectivas convocatorias.»

JUSTIFICACIÓN

En el punto 1 se propone especificar los objetivos de la formación de los inspectores de Educación.

De acuerdo con el artículo 149.1.30 CE, el Estado sólo puede regular «las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales», y evidentemente la formación permanente de los funcionarios docentes no permite obtener «títulos académicos y profesionales», sino simples certificados de asistencia o superación de los correspondientes cursos.

Por lo tanto, la regulación de la formación permanente, en tanto no permite la expedición de un título académico ni profesional, no puede ser considerada básica de acuerdo con el artículo 149.1.30 CE, y no se puede aceptar que sea el Gobierno el que establezca las condiciones y los requisitos básicos de los cursos de formación.

Cada Administración educativa, en relación con su propia organización y de acuerdo con su política educativa, ha de regular las características, condiciones de acceso y requisitos de los cursos que organice.

Otro tema diferente es si todos los cursos organizados por las CCAA podrán ser valorados en los concursos de méritos de ámbito estatal. Para ello, evidentemente, habrán de reunir las condiciones y requisitos que prevean las propias convocatorias, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

Resulta sorprendente que el Proyecto de Ley incluya en este artículo una remisión básica al Gobierno, en una materia que hasta ahora sólo estaba recogida en una Orden del Ministerio de Educación y Ciencia del 26 de noviembre de 1992, que atribuye «un reconocimiento oficial» a las actividades de formación que cumplan los requisitos establecidos en la mencionada Orden: «Tendrán validez, a efectos de su reconocimiento oficial, por el Ministerio de Educación y Ciencia, las actividades de formación permanente convocadas por (…) ».

Tampoco puede considerarse básico este apartado 3 del artículo 105 del Proyecto, por aplicación del artículo 149.1.18 CE, ya que la formación permanente de los funcionarios no está incluida en el «régimen estatutario de los funcionarios»:

1.º No aparece en la disposición adicional novena, apartado 1, de la LOGSE (que quedará sustituida por la disposición adicional octava, apartado 1, del Proyecto de LOCE, que tampoco incluye la formación permanente entre las Bases de la función pública docente);

2.º Tampoco aparece recogida la formación permanente de los funcionarios como integrante del Estatuto de la Función Pública en la doctrina del Tribunal Constitucional.

ENMIENDA NÚM. 1089

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una frase al final de la Disposición Adicional Primera

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Primera. Del calendario de aplicación de la Ley.

El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la extinción gradual del plan de estudios de las enseñanzas de Idiomas en vigor, la implantación de los currículos correspondientes, así como las equivalencias a efectos académicos de los años cursados según el plan de estudios que se extingue. Asimismo, se regulará la implantación de las enseñanzas de régimen general y las equivalencias de los títulos afectados por esta Ley. Asimismo, se establecerá la rrogresiva aplicación de la gratuidad de los libros de texto.»

JUSTIFICACIÓN

Las implicaciones que tiene el calendario de aplicación de la Ley, en la planificación de las Comunidades Autónomas, que son las que de hecho habrán de aplicar lo previsto en la nueva normativa, en función de sus disponibilidades y entorno social, exigen un grado mayor de participación de éstas en la aprobación del calendario de aplicación, a través del acuerdo de todas las CCAA y el Gobierno del Estado.

ENMIENDA NÚM. 1090

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 3 de la Disposición Adicional Segunda

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Segunda. Del área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.

(…)

3. Las Comunidades Autónomas establecerán el currículum de la opción no confesional. La determinación del currículo de la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas, de acuerdo con la Administración educativa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.

…/… (resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Es competencia de las Comunidades Autónomas establecer el currícuíum de la opción no confesional.

ENMIENDA NÚM. 1091

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Adicional Tercera

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Tercera. De los libros de texto y demás materiales curriculares.

1. Corresponde a la autonomía pedagógica de los centros educativos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
2. Los libros de texto y demás materiales a que se refiere el apartado anterior deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
3. Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un periodo mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuando la programación docente lo requiera, las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación del plazo anteriormente establecido.»

JUSTIFICACIÓN

Como se ha dicho en la justificación a la enmienda al artículo 80, la regulación de los órganos de coordinación didáctica no es materia básica, por lo que la Ley no puede establecer que serán estos órganos los que elegirán los libros de texto. Corresponde a cada Comunidad Autónoma regular todo el procedimiento interno para la elección del material curricular, la Ley estatal no puede establecer que a las Administraciones educativas sólo les corresponde «determinar la intervención en este proceso de otros órganos del centro», por lo que de hecho se convierte en básica la intervención de los órganos de coordinación.

No es competencia del Estado el atribuir a la inspección la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares. Determinar las condiciones por las que se podrán retirar los materiales curriculares es una competencia de las Comunidades Autónomas, no del Estado.

ENMIENDA NÚM. 1092

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Adicional Cuarta

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Cuarta. Del calendario escolar.

El calendario escolar que fijarán las Administraciones educativas comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para la educación Infantil y Primaria, y 170 días para el resto de las enseñanzas escolares.»

JUSTIFICACIÓN

Las pruebas finales son, evidentemente, actividades lectivas.

La fijación de los días de inicio y final de las actividades lectivas de las enseñanzas escolares es un tema organizativo y, por ello, de plena competencia de las Comunidades Autónomas. Sorprende, por otro lado, que el Estado pretenda regular, por Ley, únicamente las excepciones del calendario escolar de las enseñanzas de personas adultas y de la formación en centros de trabajo, materias propias de las competencias autonómicas.

ENMIENDA NÚM. 1093

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 2 y el apartado 3 de la Disposición Adicional Quinta

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Quinta. Sobre la admisión de alumnos en caso de no existir plazas suficientes.

(…)

2. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y condiciones para la adscripción de centros a que se refiere el apartado anterior.

3. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de grado superior de Formación Profesional, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato que en cada caso se determine o quienes accedan a estas enseñanzas a través de la prueba establecida en el artículo 37 de esta Ley.

(…)

JUSTIFICACIÓN

El final del punto 2 es de imposible cumplimiento para las Administraciones educativas: «respetando, en todo caso, el derecho de libre elección de centro», derecho que puede colisionar con otros principios que obligan a la Administración: limitación de las disponibilidades presupuestarias, eficacia en la gestión de los recursos disponibles, etc.

No se puede aceptar como criterio para la admisión de alumnos el expediente académico, ni siquiera para niveles no obligatorios.

ENMIENDA NÚM. 1094

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir la Disposición Adicional Séptima

JUSTIFICACIÓN

No parece oportuna esta autorización automática de centros privados, llevada a cabo por la propia Ley.

ENMIENDA NÚM. 1095

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Adicional Octava

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Octava. Bases del régimen estatutario de la función pública docente.

1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas en la Ley 30/1 984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y las establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, las reguladas por esta Ley y por las normas citadas para el ingreso, la movilidad entre los Cuerpos docentes, la reordenación de los Cuerpos y Escalas, y la provisión de puestos mediante concurso de traslados de ámbito estatal. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, desarrollará reglamentariamente las bases reguladas por esta Ley en aquellos aspectos expresamente previstos por ella.

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas contenidas en esta Ley y en su desarrollo reglamentario conforme se expresa en el apartado anterior.

3. El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, en su caso, de acuerdo con las áreas, materias, asignaturas y módulos que integran el currículo correspondiente. Para la selección de los aspirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes.

El número de aprobados no podrá superar el numero de plazas convocadas. Asimismo, existirá una fase de prácticas que podrá incluir cursos de formación y constituirá parte del proceso selectivo.

4. Los funcionarios del Cuerpo de Maestros que están destinados, con carácter definitivo, a plazas correspondientes al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, puedan promocionar, por un turno restringido y especial al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, manteniendo el destino que ocupan, y siempre que reúnan los requisitos de titulación previstos en esta Ley.

5. Periódicamente, las Administraciones educativas convocarán concursos de traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquellas. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Éstas se harán públicas a través del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un único baremo de méritos entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento superados, los méritos académicos y profesionales, la antigüedad y, en su caso, la condición de catedrático, así como la antigüedad en ella, y el ejercicio de cargos directivos.

6. No obstante, la provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de Enseñanzas Artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas.

JUSTIFICACIÓN

Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que las remisiones de la Ley al desarrollo reglamentario por el Gobierno no puede ser un cheque en blanco, que le permita al Estado regular, con carácter básico, cualquier aspecto no previsto en la propia Ley.

En este sentido la STC 99/1987 de 11-6-1987, FJ 2 a): «Incluso con relación a los ámbitos reservados por la Constitución a la regulación por Ley no es, pues, imposible una intervención auxiliar o complementaria del reglamento, pero siempre que estas remisiones «sean tales que restrinjan, efectivamente, el ejercicio de esa potestad (reglamentaria) a un complemento de la regulación legal, que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley», de tal modo que no se llegue a «una total abdicación por parte del legislador de su facultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los fines u objetivos que la reglamentación ha de seguir» (cfr. STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4).

Con la finalidad de reforzar el sistema de promoción profesional de los maestros que han pasado a ocupar, con carácter definitivo, una plaza correspondiente al primer ciclo de la ESO en los Institutos de Enseñanza Secundaria, y siguiendo el modelo que la normativa general de función pública ha aplicado para el procedimiento de funcionarizar el personal laboral, se propone un procedimiento de turno restringido para este colectivo, siempre que reúnan el requisito de titulación exigido para ingresar en el cuerpo de secundaria.

En los concursos de traslados no se ha de valorar únicamente la categoría de Director, sino el ejercicio de cualquier cargo directivo.

ENMIENDA NÚM. 1096

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una nueva Disposición Adicional Octava bis

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Octava bis (nueva). De la Categoría profesional de Catedrático y de Magister.

Dentro de cada uno de los Cuerpos en los que se estructura la función pública docente, la promoción de la carrera profesional permitirá alcanzar, mediante los procedimientos que establecerá cada Administración educativa, una categoría profesional superior, sin necesidad de pasar a ocupar un destino diferente al actual: "categoría de catedrático" para los funcionarios de todos los Cuerpos docentes que imparten enseñanzas en la educación secundaria y "categoría de magister" para los funcionarios del cuerpo de maestros.»

JUSTIFICACIÓN

En lugar de la creación de los Cuerpos de catedráticos, se propone establecer la posibilidad de una categoría profesional superior dentro de cada Cuerpo docente, incluido el de Maestros, que permita a los funcionarios una mejora profesional sin necesidad de que abandonen el cuerpo al que pertenecen.

ENMIENDA NÚM. 1097

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir la Disposición Adicional Novena

JUSTIFICACION

No está suficientemente justificada de manera objetiva la creación de los Cuerpos de Catedráticos, por los siguientes motivos:

a) La normativa general de la función pública prevé que la ordenación de los funcionarios en Cuerpos responde a criterios de clasificación según las titulaciones que se exijan para el ingreso, así como las funciones que tienen atribuidas los diferentes Cuerpos, para

evitar que haya Cuerpos de funcionarios a los que corresponden idénticas tareas.

b) No hay diferencias en las funciones docentes, ni en los niveles educativos atribuidos, ni en las especialidades docentes en que se clasifican los miembros de los Cuerpos docentes, ni en los niveles de titulación exigidos para el ingreso, ni en las responsabilidades que pueden ejercer, ni tampoco las plazas docentes que podrán ocupar.

c) La clasificación actual entre el Cuerpo de Maestros y los otros Cuerpos se basa en la atribución de docencia según los niveles educativos: Maestros tiene asignado el nivel de educación infantil y primaria, los demás Cuerpos el nivel de secundaria. La justificación de los diferentes Cuerpos de secundaria estriba en las diferentes especialidades docentes (Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional tienen atribuidas las enseñanzas de régimen general, pero no los mismos contenidos del currículo) o en la diferenciación enseñanzas generales-especiales (Profesores de EOI y de Artes Plásticas y Diseño, etc.). Dentro de esta clasificación, que el Proyecto de LOCE no modifica en absoluta, se superponen sin diferenciación clara de las funciones docentes los catedráticos.

d) La atribución «con carácter exclusivo» de la jefatura del departamento didáctico no justifica la diferenciación de los nuevos Cuerpos, porque no tiene, de hecho, tal carácter exclusivo: cualquier funcionario de otro Cuerpo podrá ejercer la jefatura «en ausencia de catedrático», como prevé el articulado. La atribución de funciones «preferentes» no puede justificar la creación de los nuevos Cuerpos.

Como conclusión, es muy dudosa la constitucionalidad de la medida de creación de nuevos Cuerpos, cuando la norma no cumple los criterios de la normativa general de función pública (Texto articulado de la Ley de Funcionarios y Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la función pública), normativa que debe respetar la legislación especial.

ENMIENDA NÚM. 1098

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir la Disposición Adicional Décima

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con lo dispuesto para la disposición adicional novena.

ENMIENDA NÚM. 1099

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir la Disposición Adicional Undécima

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con lo dispuesto para la disposición adicional novena.

ENMIENDA NÚM. 1100

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar los apartados 2 y 3 de la Disposición Adicional Duodécima

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Duodécima. Del Título de Especialización Didáctica.

2. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se requerirá estar en posesión del Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 55 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.

3. Para ejercer la docencia de las enseñanzas de régimen especial de música y danza, y de arte dramático, será necesario estar en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o titulación equivalente, a efectos de docencia, y del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 55 de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

La frase «así como superar el correspondiente proceso selectivo» sólo tiene sentido en el apartado 2, referido al ingreso en los Cuerpos, no en el 3, que regula con carácter general los requisitos de titulación para impartir docencia en estas enseñanzas, tanto en los centros públicos como privados.

ENMIENDA NÚM. 1101

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar una expresión de la Disposición Adicional Decimotercera

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Decimotercera. Concertación de los Programas de Iniciación Profesional.

Los centros con enseñanzas concertadas de Educación Secundaria Obligatoria concertarán los Programas de Iniciación Profesional que, conforme a lo previsto en esta Ley, impartan a sus alumnos.

JUSTIFICACIÓN

No todas las enseñanzas de los centros «concertados» están concertadas; además, lo que se conciertan son las enseñanzas, no el centro.

ENMIENDA NÚM. 1102

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una Disposición Adicional nueva

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional (nueva).

Se establece, con carácter indefinido, el régimen de jubilación voluntaria previsto en la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, para los funcionarios de los Cuerpos docentes que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos sesenta años de edad y
b) Tener acreditados quince años de servicios efectivos al Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone mantener una medida que ha mejorado la situación de los colectivos docentes desde su implantación, con carácter transitorio, por la LOGSE.

ENMIENDA NÚM. 1103

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una Disposición Adicional nueva

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional (nueva).

El Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aportará los recursos necesarios para financiar el gasto público generado por las disposiciones previstas en esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de LOCE no puede obviar un tema tan importante para su aplicación, como es el de la financiación económica necesaria de las novedades introducidas por la nueva norma.

ENMIENDA NÚM. 1104

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una Disposición Adicional nueva

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional (nueva).

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que las previsiones contenidas en los artículos 59, 90 y 92 se extiendan a los centros privados concertados.»

JUSTIFICACIÓN

Prever de manera explícita dicha eventualidad en la ley.

ENMIENDA NÚM. 1105

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Transitoria Segunda

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria Segunda. De la adaptación de los centros que imparten Educación Infantil.

1. Los centros docentes que a la entrada en vigor de la presente Ley atienden a niños menores de tres años y que no estén autorizados como centros de Educación Infantil, deberán adaptarse a los requisitos que las Comunidades Autónomas establezcan para los centros de educación preescolar.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros privados de Educación Infantil que no tengan autorización, podrán obtenerla con sujeción a las normas específicas anteriores a esta Ley hasta la aprobación por las Comunidades Autónomas de los requisitos correspondientes.»

JUSTIFICACIÓN

El establecimiento de requisitos para los centros que atiendan a niños menores de tres años no puede ser básico ni puede asumirlo el Gobierno del Estado, desde el momento que se trata de unas enseñanzas no obligatorias y a las que, en consecuencia, no se les puede aplicar el desarrollo básico del derecho fundamental a la educación, previsto en el artículo 149.1.30 CE. Por ello, no puede aceptarse que los requisitos mínimos de los centros de preescolar se determinen por el Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 1106

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Transitoria Tercera

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria Tercera. Concertación de la Educación Infantil.

En relación con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la presente Ley, las Administraciones educativas, en el régimen de conciertos a que se refiere el artículo 67 de la misma, atenderán las solicitudes formuladas por los centros privados.»

JUSTIFICACIÓN

No puede ser básico, ni merece ser recogido en una norma con rango de Ley dictada por el Estado, el criterio de ordenación de las solicitudes de concierto de educación infantil según los cursos: tercero, segundo y primero. Un criterio de este tipo lo han de fijar las Comunidades Autónomas, no la Ley estatal, ya que no tienen cobertura en el principio de garantizar la igualdad en todo el Estado.

ENMIENDA NÚM. 1107

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar el apartado 3 de la Disposición Transitoria Cuarta

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria Cuarta. Adquisición de la categoría de director.

3. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que no hayan ejercido como directores o lo hubieran hecho durante un periodo inferior al señalado en el apartado anterior, deberán seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título V de la presente Ley para la selección y nombramiento de director.»

JUSTIFICACIÓN

No parece razonable ni conveniente fijar la exención de la fase teórica de la formación inicial prevista por el Proyecto de LOCE al colectivo aludido en esta disposición transitoria.

ENMIENDA NÚM. 1108

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir la Disposición Transitoria Quinta

JUSTIFICACIÓN

Se ha de suprimir esta Disposición Transitoria Quinta porque el hecho de no reconocer los derechos profe-

sionales a profesores de formación profesional que han accedido a la condición de catedrático, sin ser licenciados, ingenieros o arquitectos, pero que pertenecen a un Cuerpo del grupo A por tener una titulación declarada equivalente, a efectos de docencia, a las titulaciones superiores de acuerdo con la normativa vigente, puede generar una discriminación no justificada entre profesores que pertenecen a un mismo Cuerpo y que tienen la competencia docente para impartir, de pleno derecho, las enseñanzas correspondientes a titulados superiores.

No hay que olvidar que el Proyecto de Ley mantiene en el articulado (art. 31.1, para impartir la ESO, y art. 35, para el Bachillerato) la equivalencia de titulaciones a efectos de docencia:

Artículo 31.1: «Para la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria se requerirá estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente a efectos de docencia. En aquellas asignaturas que se determinen en virtud de su especial relación con la Formación Profesional, se establecerán las equivalencias de los títulos de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y Diplomado universitario, a efectos de la función docente».

Resulta difícil poder justificar esta discriminación de trato a quienes poseen una titulación declarada por el Gobierno, con carácter básico, equivalente a efectos de la función docente a una licenciatura o ingeniería superior, y por ello válida, a todos los efectos, para impartir docencia en la educación secundaria obligatoria, en el bachillerato y en la formación profesional de grado medio y superior. Válida también para continuar disfrutando de los derechos económicos y profesionales durante un plazo transitorio de diez años, pero no lo suficientemente válida para ingresar en un Cuerpo que crea el Proyecto de Ley, y en el cual integra a todos los funcionarios de los cuerpos de secundaria, excepto a los que tienen una titulación declarada equivalente.

Es injustificable que, terminado el período transitorio fijado para que puedan obtener el título universitario superior, mantengan los derechos económicos pero no los profesionales y, sobre todo, lo más grave es que no se les integre en los nuevos Cuerpos a todos los que actualmente tienen adquirida la condición de catedrático.

Se está produciendo una discriminación y un trato desigual a funcionarios que en el momento de aprobarse la Ley serán miembros de un mismo Cuerpo y tendrán una misma categoría, la condición de catedrático, en función de si la titulación que poseen corresponde a una titulación universitaria superior o a una titulación declarada por el Estado equivalente, a efectos de la función docente, a las anteriores. Pero ahora parece que se rompe esta equivalencia, que les procurará un trato desigual, que les impedirá ingresar en el Cuerpo de Catedráticos, al tiempo que pierden la condición de catedráticos (no hay que olvidar que la disposición final tercera del Proyecto de Ley declara que «quedan sin efecto todas las referencias relativas a la condición de Catedrático incluidas en la LOGSE».

Por lo tanto, el mismo día que entre en vigor la LOCE, estos funcionarios dejarán de poseer la condición de Catedrático y no podrán ingresar en los nuevos Cuerpos, por no tener titulación superior, exigida por la Ley, a pesar de que su título continuará siendo considerado equivalente, a efectos de docencia, a una titulación superior.

ENMIENDA NÚM. 1109

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir la Disposición Transitoria Sexta.

JUSTIFICACIÓN

La misma que a la Disposición Adicional Novena. Por coherencia con la propuesta de supresión de las disposiciones relativas a los Cuerpos de Catedráticos.

ENMIENDA NÚM. 1110

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Transitoria Octava

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria Octava. Transformación de los conciertos.

1. Los Centros privados que, a la entrada en vigor de la presente Ley, tengan concertadas enseñanzas no obligatorias, mantendrán el concierto para las enseñanzas equivalentes. El concierto de estas enseñanzas tendrá el carácter de singular.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la transformación de los conciertos se realizará en función de las características siguientes:

Las subvenciones aplicables a los Centros de primer ciclo de Educación Infantil se referirán a las enseñanzas de Educación Preescolar, una vez se implanten estas enseñanzas.

Las subvenciones aplicables a los Centros de segundo ciclo de Educación Infantil se referirán a conciertos de Educación Infantil, una vez se implanten estas enseñanzas.

Los conciertos con Centros de Formación Profesional Específica de Grado Medio, o Superior, se podrán transformar en conciertos de Formación Profesional de Grado Medio, de Grado Superior o en su caso de Bachillerato.

Los convenios o subvenciones de Programas de Garantía Social realizados en centros docentes se podrán transformar en conciertos de Programas de Iniciación Profesional o de Formación Profesional de Grado Medio.

Los conciertos con Centros de Bachillerato se podrán transformar en conciertos de Bachillerato, de Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior.

3. La transformación de los conciertos conforme a lo señalado en el número anterior requerirá la autorización de las enseñanzas para las que el titular del Centro solicite dicha transformación y se producirá, como máximo, por el número de unidades que el centro tuviera concertadas.

4. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir de las familias.»

JUSTIFICACIÓN

Para evitar la confusión entre conciertos y subvenciones.

ENMIENDA NÚM. 1111

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una Disposición Transitoria nueva

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria (nueva).

En cada una de las tres primeras convocatorias de ingreso en la función pública docente, que se produzcan después de la entrada en vigor de la presente Ley, habrá un turno restringido para el personal interino de los distintos Cuerpos, que se realizarán conforme a un sistema de selección en el que se valorarán conjuntamente los conocimientos sobre los contenidos curriculares que deberán impartir los aspirantes, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, así como los méritos de formación académica y la experiencia docente previa.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario regular un procedimiento extraordinario y transitorio, parecido al establecido en su día por la Disposición Transitoria Quinta, apartado 2, de la LOGSE, declarado constitucional por el Tribunal Constitucional, para facilitar el acceso a la función pública docente del elevado número de interinos que han nombrado las Administraciones educativas durante el período de aplicación de la Reforma Educativa, que ha transformado profundamente el sistema educativo anterior.

ENMIENDA NÚM. 1112

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una Disposición Transitoria nueva

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria (nueva).

Los requisitos de titulación que establece la presente Ley para la impartición de los distintos niveles educativos no afectará al profesorado que esté prestando sus servicios en centros docentes, antes de la entrada en vigor de la misma, de acuerdo con lo estipulado en la legislación actual.»

JUSTIFICACIÓN

Prever el mantenimiento de la garantía de los requisitos de titulación en los casos de profesorado que esté prestando sus servicios en centros docentes.

ENMIENDA NÚM. 1113

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Final Segunda

Redacción que se propone:

«Disposicion Final Segunda.

Se modifican los apartados 2, 4 y 7 de la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedan redactados de la siguiente forma:

«2. En las convocatorias de ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, se reservará un porcentaje del cincuenta por ciento de las plazas que se convoquen para los funcionarios de los Cuerpos docentes clasificados en el grupo B a que se refiere la vigente legislación de la Función pública, que deberán estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los referidos cuerpos y haber permanecido en sus cuerpos de origen un mínimo de seis años como funcionarios de carrera.

En las convocatorias correspondientes para estos funcionarios se valorarán los méritos de los concursantes, entre los que se tendrán en cuenta el trabajo desarrollado y los cursos de formación y perfeccionamiento superados, así como los méritos académicos. Asimismo se realizará una prueba, consistente en la exposición y debate de un tema de la especialidad a la que se accede, para cuya superación se atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos didácticos y pedagógicos de los candidatos.

Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de prácticas y tendrán preferencia en la elección de los destinos vacantes sobre los aspirantes que ingresen por el turno libre de la correspondiente convocatoria.»

«4. Para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas será necesario estar en posesión del título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente, a efectos de docencia. Será preciso, asimismo, superar las pruebas que al efecto establezcan las Administraciones educativas, en las que se tendrá en cuenta la experiencia docente y las que en su día se superaron, y pertenecer al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas como titular de la misma especialidad por la que se concursa, con una antigüedad mínima en dicho cuerpo, como funcionario de carrera, de seis años. Podrán, asimismo, ingresar en este cuerpo, a través del correspondiente proceso selectivo, quienes, estando en posesión de la titulación referida anteriormente y del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 55 de la presente Ley, no pertenezcan al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. Con este fin, podrá reservarse un porcentaje de plazas en la convocatoria de acceso.»

«7. El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las Universidades que faciliten la incorporación a los Departamentos Universitarios de los profesores de los cuerpos docentes de niveles correspondientes a las enseñanzas escolares, en el marco de la Disposición adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone añadir los dos párrafos que regulan el procedimiento especial de promoción interna de los funcionarios del grupo B a cuerpos del grupo A, tal como actualmente está recogido en la disposición adicional 16.2 de la LOGSE, modificada por esta disposición final segunda.

ENMIENDA NÚM. 1114

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir la Disposición Final Tercera

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena.

ENMIENDA NÚM. 1115

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Final Cuarta

Redacción que se propone:

«Disposición Final Cuarta.

1. El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes queda redactado de la siguiente manera:

«La comunidad educativa participará en los centros a través del Consejo Escolar. Los profesores lo harán también a través del Claustro.»

2. El artículo 38.1 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes queda redactado de la siguiente manera:

«Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario pertenecer a alguno de los Cuerpos que integran la función pública docente, con una experiencia mínima docente de seis años.»

3. El artículo 39 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno

de los centros docentes queda redactado de la siguiente manera:

«1. El sistema de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Educación será el de concurso-oposición, que atenderá, en todo caso, a las especialidades que establezcan las Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas convocarán el concurso-oposición con sujeción a los siguientes criterios:

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos específicos como docentes. Entre estos méritos, se tendrá especialmente en cuenta la preparación científica y didáctica en las áreas, asignaturas o módulos cuya enseñanza se ha impartido.

b) En la fase de oposición se valorarán en el aspirante sus conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa, así como los conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de las funciones inspectoras de control, evaluación y asesoramiento. Igualmente se valorará su actualización científica y didáctica en las áreas o asignaturas cuya enseñanza ha impartido, y el ejercicio de las actividades desarrolladas en el Centro.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir el hecho de que sólo se valore el desempeño de los cargos directivos que hayan sido evaluados positivamente, porque la mayoría de estos méritos actualmente no han sido objeto de evaluación y produciría un grave perjuicio a gran número de profesores.

También se propone suprimir la referencia a los Cuerpos de catedráticos, por coherencia con la propuesta a la disposición adicional novena.

ENMIENDA NÚM. 1116

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Suprimir la Disposición Final Séptima

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno no puede asumir la potestad ejecutiva de adscribir a los inspectores de educación a las especialidades, que son, como hemos visto en la enmienda al artículo 104.2, estructuras organizativas propias de cada Administración educativa.

La organización de la inspección es competencia de las Comunidades Autónomas, como materia propiamente organizativa del servicio transferido de la educación, que ahora no puede pretender el Estado asumir invadiendo directamente las competencias autonómicas.

Como ya hemos visto en la enmienda al artículo 104.2, la competencia para determinar las especialidades de la Inspección educativa pertenece a las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 1117

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Final Octava

Redacción que se propone:

«Disposición Final Octava. Del Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1,18 y 30 de la Constitución, y, en consecuencia, las anteriores normas serán de aplicación para todas las Administraciones Públicas a excepción de las contenidas en los preceptos siguientes: los apartados 3 y 4 del artículo 4, el apartado 2 del artículo 5, los apartados 2 y 5 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 9, el artículo 10, el apartado 3 del artículo 13, los artículos 14 y 16, los apartados 3 y 4 del artículo 21, el artículo 22, el apartado 5 del artículo 23, el apartado 2 del artículo 24, el artículo 26, el apartado 3 del artículo 29, el apartado 5 del artículo 35, los apartados 5 y 6 del artículo 42, el artículo 43, los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 45, los apartados 2 y 3 del artículo 46, los apartados 2 y 3 del artículo 47, el apartado 2 del artículo 48, el apartado 2 del artículo 50, los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 51, el apartado 1 del artículo 52, el artículo 53, el apartado 1 del artículo 54, el artículo 55, el apartado 3 del artículo 62, los artículos 65, 66, 67, 68 y 69, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 71, los apartados 3 y 4 del artículo 72, los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 73, los artículos 77, 78, 83, 88 y 92, el apartado 2 del artículo 93, el apartado 2 del artículo 97, el artículo 98, las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta, las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Cuarta.»

JUSTIFICACIÓN

Hay que tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de delimitar las normas básicas dentro de una Ley Orgánica que desarrolle

el derecho fundamental a la educación, porque sólo son ellas «las que marcan el límite infranqueable para las disposiciones autonómicas», no los preceptos orgánicos, que pueden ser desarrollados por las CCAA:

«Por todo ello, la delimitación de competencias que establece el artículo 149.1.30 entre el Estado y las Comunidades cuyos Estatutos hayan operado a partir de este precepto, no podrá establecerse, sin más, tomando como parámetro el texto formalmente aprobado en "desarrollo" de los derechos enunciados en el artículo 27 de la Constitución. Para alcanzar el deslinde competencial es necesario una indagación material que permita identificar cuáles, de entre las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica, encierran "normas básicas para el desarrollo del artículo 27", porque sólo son ellas, respecto de estas Comunidades, las que marcan el límite infranqueable para las disposiciones autonómicas. No toda divergencia, pues, entre Ley Orgánica y territorial será causa de vicio de inconstitucionalidad en esta última y sí sólo su eventual apartamiento del contenido de aquellas "normas básicas", cuya identificación corresponde, en última instancia, a este Tribunal Constitucional.» (FJ 3.° de la STC 137/1986, de 6 de noviembre.)

Artículo 4:

El procedimiento de gestión de las becas y ayudas no puede ser básico, según doctrina del TC:

STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 11: «En suma, la regulación de todos estos aspectos no constituyen normas básicas para el desarrollo del artículo 27 CE, sino normas reguladoras del procedimiento de gestión de las ayudas que se inscribe en el ámbito de la competencia de la Generalidad en materia de enseñanza, y ya hemos declarado con reiteración que las normas procedimentales "ratione materiae" deben ser dictadas por las Comunidades Autónomas competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común (por todas, STC 98/2001, de 5 de abril, F. 8, con cita de la STC 227/1998, de 26 de noviembre, F. 32). Por tanto, debe ser la Generalidad de Cataluña quien establezca el procedimiento de gestión, control y resolución de las solicitudes de beca que se presenten y determine los órganos competentes para ello».

STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 13: «Así, de un lado, extravasan el ámbito propio del art. 149.1.1.ª CE los preceptos de dichas Órdenes que atribuyen a los órganos centrales del Estado competencias de carácter ejecutivo, (...). En este sentido, no puede ser considerado contenido primario del derecho a la educación ninguno de los elementos sustantivos que delimitan el acceso a las becas en las normas impugnadas. Ni los estudios objeto de beca, ni tampoco las clases y cuantía de las ayudas pueden estimarse integrantes de ese contenido primario del mencionado derecho fundamental, pues debe distinguirse, de un lado, entre los elementos generales conformadores del derecho a obtener una beca, amparables en el art. 149.1.1.ª CE y alcanzados por la legislación orgánica y, cumpliendo determinadas exigencias, por la reglamentaria general, y, de otro, los criterios de política educativa que instrumentan coyunturalmente su acceso al mismo.»

Tampoco puede ser básico lo previsto en el apartado 3 de este artículo 4, mediante el cual el Estado se reserva la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación.

Según el Tribunal Constitucional, la coordinación implica «un cierto poder de dirección consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado» (STC 214/1989) y además, «esas facultades de coordinación sólo se tienen cuando el Estado ostenta un concreto título que justifique su intervención» porque la propia Constitución le atribuye al Estado las competencias de coordinación o porque el Estado tiene competencias plenas en la materia (STC 40/1998).

En consecuencia, en lugar de coordinación, este apartado habría de prever fórmulas de cooperación, basadas en la participación voluntaria, que permitan que se arbitren mecanismos de colaboración mutua para evitar interferencias y la dispersión de esfuerzos e iniciativas (STC 13/1988).

Artículo 5:

El establecimiento de estos programas no puede considerarse incluido dentro del desarrollo directo del derecho fundamental a la educación (el Proyecto no lo considera orgánico), pero tampoco se puede incluir dentro de las competencias básicas del Estado. El desarrollo de programas destinados a premiar alumnos y centros es una competencia de gestión, en la que no puede entrar el Estado, ni matizando «sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas...».

Artículo 6:

El Estado no puede atribuirse una competencia no prevista en la Constitución, como la «aprobación de programas de cooperación territorial». Son, más bien, competencias de gestión, como las «actuaciones necesarias para asegurar el logro de los correspondientes objetivos».

Artículo 7.2:

El carácter asistencial de la educación preescolar no puede ser básico. Es una competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

Artículo 9.2:

El Estado tiene competencia para establecer la normativa básica en materia educativa, pero en materia asistencial, la competencia es exclusiva de la Generali-

tat de Catalunya, de acuerdo con el artículo 9.25 del Estatuto de Autonomía.

Artículo 11.3:

La promoción y el fomento de contenidos y experiencias en la educación infantil, que no conduce a titulación alguna, no tienen carácter básico.

Artículo 12:

No tienen carácter básico la organización y metodología de la educación infantil, no obligatoria, que no conduce a título alguno.

Artículo 15.3:

No deja ningún margen de actuación a las Comunidades Autónomas, al prever que la fijación de las enseñanzas mínimas también incluirá la determinación de las áreas por ciclos. Esta medida pretende un aprendizaje uniforme e idéntico en todo el Estado. El Estado sólo puede fijar los aspectos básicos del currículo, es decir las enseñanzas mínimas, pero no la distribución de las áreas por cursos o ciclos.

Artículo 15.4:

La metodología, como componente del currículum según el apartado 1 del artículo 4 de la LOGSE, no puede ser considerada básica, ya que no aparece citada en el apartado 2 del mismo artículo 4 LOGSE, cuando se establecen los elementos del currículum que constituyen las enseñanzas básicas a fijar por el Gobierno.

Artículo 16.3 y 4:

No pueden considerarse básicos los apoyos necesarios para que los alumnos recuperen las áreas cuya evaluación no han superado. Tampoco es básica la evaluación por parte de los profesores de los procesos de enseñanza.

Artículo 17:

Desde el momento en que la prueba no tiene efectos académicos, no puede ser básica, ni obligar a las Comunidades Autónomas.

Artículo 22.2:

No deja ningún margen de actuación a las Comunidades Autónomas, al prever que la fijación de las enseñanzas mínimas también incluirá la determinación de las asignaturas por cursos. Esta medida pretende un aprendizaje uniforme e idéntico en todo el Estado. El Estado sólo puede fijar los aspectos básicos del currículo, es decir las enseñanzas mínimas, pero no la distribución de las áreas por cursos o ciclos.

Artículo 22.3:

Las asignaturas optativas no forman parte del currículo básico.

Artículo 22.4:

Es doctrina del Tribunal Constitucional que no es básica una norma que faculte a las Comunidades a hacer, o no, una determinada actuación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

Artículo 23:

La metodología, como componente del currículum según el apartado 1 del artículo 4 de la LOGSE, no puede ser considerada básica, ya que no aparece citada en el apartado 2 del mismo artículo 4 LOGSE, cuando se establecen los elementos del currículum que constituyen las enseñanzas básicas a fijar por el Gobierno.

Artículo 24:

Establece medidas meramente organizativas, que sobrepasan, especialmente el apartado 2, lo que han de ser unas bases, porque fija con detalle los órganos que intervienen (promovidas por el equipo de evaluación, con el asesoramiento del equipo de orientación y adoptadas por el equipo de dirección) y los período del curso en que se han de hacer.

Artículo 25.2, 3, 4 y 5:

La regulación de los itinerarios no puede tener carácter básico: 1.° no tienen incidencia en la obtención de una titulación; 2.° no constituyen, de hecho, un itinerario, desde el momento en que el alumno puede cambiar de opción entre tercero y cuarto cursos, sin ninguna consecuencia (no tienen la naturaleza de las modalidades del Bachillerato); 3.° cada Comunidad Autónoma puede regular estos itinerarios, dentro de su competencia organizativa; 4.° la naturaleza de los itinerarios, tal como queda recogida en este artículo, no justifica el carácter de norma básica, ni orgánica, ya que no puede considerarse un desarrollo directo del derecho a la educación, ni tiene tampoco un carácter esencial del derecho a la educación.

En el apartado 2 no se deja ningún margen de actuación a las Comunidades Autónomas, ya que el Gobierno se reserva la determinación de las asignaturas comunes y específicas. A las Comunidades Autónomas sólo les queda regular las optativas.

Artículo 26.4 y 5:

La metodología no forma parte del currículum básico.

Tampoco puede ser básico el hecho de que las Administraciones promuevan la participación de otras Instituciones para el desarrollo de estos Programas.

Artículo 27.2:

No pueden ser básicos todos los criterios de evaluación, sólo aquellos que formen parte de los aspectos básicos del currículo, que según el artículo 4.2 de la LOGSE, forman las enseñanzas mínimas a fijar por el Gobierno.

Artículo 29:

La evaluación general de diagnóstico no puede ser básica, porque no tiene efectos académicos. Se trata de una competencia de gestión.

Artículo 32.3:

Al ser un nivel postobligatorio, no requiere tener limitaciones de duración básicas. Los límites los impondrán, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias, en relación a las plazas vacantes de los alumnos.

Artículo 34.7, 8 y 9:

34.7 La metodología, como componente del currículum según el apartado 1 del artículo 4 de la LOGSE, no puede ser considerada básica, ya que no aparece citada en el apartado 2 del mismo artículo 4 LOGSE, cuando se establecen los elementos del currículum que constituyen las enseñanzas básicas a fijar por el Gobierno.

34.8 Las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, no forman parte del currículo básico, según el artículo 4.2 de la LOGSE.

34.9 Tampoco puede ser básico determinar un período para que las Administraciones fijen las pruebas extraordinarias. Y mucho menos, la relación de los aspectos teóricos y aplicaciones prácticas de las diferenes asignaturas.

Artículo 37.5:

Las pruebas actuales no tienen la consideración de básicas (el artículo 32.1 de la LOGSE atribuye a las Administraciones educativas la regulación de estas pruebas). No está justificado que la materia haya cambiado de carácter en estos 12 años, sin que se haya modificado la Constitución. No puede considerarse un desarrollo esencial del derecho a la educación.

Artículo 38:

No puede ser básico este artículo que permite la posibilidad, no determina la obligación establecer convenios (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

Capítulo VII, en su totalidad:

Por la materia que se regula (no constituye organización general del sistema, ni regulación del derecho de la educación, diferente de la establecida con carácter general). Se significan, sin embargo, dos aspectos esenciales:

Artículo 39.1, 2, 5 y 6:

39.1 Los Programas específicos de aprendizaje no pueden considerarse materia básica.

39.2 Prevé una discrecionalidad de las Comunidades Autónomas, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

39.5 El asesoramiento a padres de alumnos sobre el sistema educativo español, no puede ser considerado básico.

39.6 La formación permanente del profesorado es una competencia de las CCAA respecto a sus propios funcionarios. Esta materia no forma parte del Estatuto de la función pública.

La formación del profesorado forma parte del terreno de ejecución mediante un aspecto de la educación. Al Estado le corresponde las bases del régimen estatutario de los funcionarios docentes y a las Comunidades Autónomas el desarrollo de este régimen estatutario (STC 6/1982), sin que el Estado pueda reservarse ninguna actuación de gestión del personal docente (STC 89/1990).

A diferencia de este apartado, en el 40.5 y en el 52.2 el Proyecto atribuye la competencia de formación directamente a las Administraciones educativas, sin intervención del Estado.

Artículo 40:

Los cinco apartados de este artículo 40, referente a alumnos superdotados intelectualmente, no pueden considerarse materia básica.

40.2 No es básica la identificación y evaluación temprana de las necesidades de los superdotados.

40.3 Los programas de intensificación del aprendizaje son una competencia de gestión, propia de las Comunidades Autónomas. La creación de programas educativos específicos no se puede considerar materia básica.

A diferencia de este apartado, el 43.1 del Proyecto regula también «una flexibilización del período de escolarización», sin remitir al Gobierno las normas y los criterios, y también en el artículo 45 se atribuye a las Administraciones educativas «ofertas formativas adaptadas» sin que el Gobierno tenga que fijar los criterios de estas adaptaciones.

40.4 Los criterios de la gestión y organización de la escolarización de alumnos superdotados es una com-

petencia autonómica, en cuanto actuación administrativa de ejecución.

40.5 La formación permanente del profesorado es una competencia de las CCAA respecto a sus propios funcionarios. Esta materia no forma parte del Estatuto de la función pública.

Artículo 41.1:

La determinación de los apoyos y atenciones educativas específicas de los alumnos de educación especial es una materia propia de las Comunidades Autónomas.

Artículo 42:

Se llega a concretar el tipo de escolarización (grupos ordinarios, aulas especializadas en centros ordinarios o centros específicos de educación especial), la composición de los equipos que identificarán y valorarán estas necesidades educativas, su manera de actuar (elaboración de planes), los períodos en los que se hace la evaluación, etc. Todos estos detalles habrían de ser recogidos en la normativa de desarrollo de las Comunidades Autónomas.

Artículo 43.2:

La orientación a los padres para la «necesaria cooperación entre la escuela y la familia» no puede considerarse materia básica.

Artículo 44.1, 2 y 3:

44.1 La programación de la oferta de puestos escolares gratuitos es un tema propio de las competencias de las Comunidades Autonomas, dentro de las actuaciones de la planificación de la educación.

44.2 La formación del profesorado forma parte del terreno de ejecución mediante un aspecto de la educación. Al Estado le corresponde las bases del régimen estatutario de los funcionarios docentes y a las Comunidades Autónomas el desarrollo de este régimen estatutario (STC 6/1982), sin que el Estado pueda reservarse ninguna actuación de gestión del personal docente (STC 89/1990).

A diferencia de este apartado, en el 40.5 y en el 52.2 el Proyecto atribuye la competencia de formación directamente a las Administraciones educativas, sin intervención del Estado.

44.3 Es doctrina del Tribunal Constitucional que no es básica una norma que faculte a las Comunidades a hacer, o no, una determinada actuación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

Artículo 45:

Las ofertas formativas adaptadas a las necesidades de los alumnos no puede considerarse norma básica.

Artículo 46.5:

No pueden ser básicas unas pruebas de unas enseñanzas no obligatorias, que hasta este momento las están regulando las Comunidades Autónomas.

Artículo 47.2, 3 y 4:

47.2 y 3 Corresponde a las Comunidades Autónomas decidir sobre las obligaciones que atribuyen a sus Escuelas Oficiales de Idiomas.

47.4 El Tribunal Constitucional ya ha considerado que no es básica la experimentación de enseñanzas (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 24: « No afectan estrictamente al desarrollo o a las condiciones básicas del ejercicio de ningún derecho fundamental, sino que constituyen tan sólo una materia conexa con el temario central de esta ley orgánica. Por consiguiente no es inconstitucional declarar la modificabilidad del artículo 21 por leyes de las Comunidades Autónomas).

Artículo 48:

Ni determinar que las CCAA facilitarán la realización de pruebas de carácter voluntario, ni fijar el lugar donde deben realizarse corresponde al Estado.

Artículo 49.3, 5, 6 y 7

49.3 No puede ser básico este criterio preferente de actuación respecto a las personas adultas que no hayan podido completar la enseñanza básica.

49.5 La modalidad no presencial de enseñanza no puede ser básica. Corresponde a las CCAA establecer las modalidades de impartición de las enseñanzas.

49.6 Tampoco pueden considerarse básicos los convenios de las Administraciones educativas y las Universidades u otras Instituciones, desde el momento en que en un convenio prima la voluntad de ambas partes y de las cláusulas que incluyan de común acuerdo.

No corresponde al Estado establecer la obligación de promover convenios de colaboración. La LOGSE, en este punto, había dispuesto la posibilidad de promover tales convenios, en otro orden de cosas.

49.7 La integración de las personas inmigrantes no es materia reservada al Estado. Los programas específicos de Lengua y Cultura Españolas no forman parte del currículo de ningún nivel educativo, y por lo tanto no pueden considerarse básicos. La creación de programas educativos específicos no se puede considerar materia básica.

Artículo 50.2:

La determinación de la tipología de centros docentes, ordinarios o específicos, en que se impartirán las enseñanzas de adultos, no puede ser considerado norma básica, desde el momento en que no es un desarrollo

esencial del derecho a la educación, tal como se recoge en el artículo 27 CE.

Artículo 50.3:

El Gobierno ya fijará las condiciones básicas del Título de Graduado en ESO. Corresponde a las CCAA, si preciso fuere, adaptar la realización de las pruebas por parte de las personas adultas.

El artículo 52.3 de la LOGSE no fijaba condiciones básicas.

Artículo 51.2 y 3:

La determinación de la modalidad de oferta educativa para las personas adultas, en centros docentes o a distancia, no puede considerarse básica.

Artículo 52.2:

La formación del profesorado es competencia de las CCAA.

Artículo 54.2:

La formación del profesorado es competencia de las CCAA.

Artículo 55.3, 5, 6 y 7:

55.3 Una cosa es que el Gobierno del Estado regule las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales (art. 149.1.30 CE) y otra, muy diferente, es que para la obtención del título de especialización didáctica, que no es ni profesional ni académico, el Estado regule todas las condiciones de acceso a los períodos teórico y práctico. El Estado se habría de limitar a las condiciones básicas, y dejar que las Comunidades Autónomas las desplieguen normativamente.

55.5 y 6 Prevé una discrecionalidad, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

55.7 La adaptación puede hacerse por las CCAA sin precisar normativa de carácter básico. El artículo 33 de la LOGSE, no derogado, no hacía remisión alguna a norma básica.

Artículo 56:

La formación del profesorado forma parte del terreno de ejecución mediante un aspecto de la educación. Al Estado le corresponde las bases del régimen estatutario de los funcionarios docentes y a las Comunidades Autónomas el desarrollo de este régimen estatutario (STC 6/1982), sin que el Estado pueda reservarse ninguna actuación de gestión del personal docente (STC 89/1990).

A diferencia de lo que se establece en el apartado 1, en el 40.5 y en el 52.2 el Proyecto atribuye la competencia de formación directamente a las Administraciones educativas, sin intervención del Estado.

La formación permanente no conduce a la expedición de un título, sino de un certificado de superación o de asistencia, por lo que es excesivo que el Estado pretenda regular las condiciones y requisitos básicos de los cursos. Asimismo, no corresponde al Estado establecer Planes Generales de formación permanente, ni regular la participación del personal docente.

Artículo 57:

La delimitación de aspectos sobre los planes de valoración de la función pública docente sobrepasa el contenido de las bases en materia educativa, en especial porque se delimitan cuestiones como quién hace la valoración (preferentemente la inspección educativa, con la colaboración de los equipos directivos de los centros) o los efectos de la valoración.

Artículo 58:

El carácter voluntario de la evaluación, junto al hecho que «podrá» ser tomada en consideración a efectos de movilidad y promoción, le confiere un carácter no básico al artículo.

Artículo 59:

Por lo que se refiere a las medidas de apoyo al profesorado, corresponde delimitarlas a las Comunidades Autónomas, desde el momento en que se trata de una materia de gestión de personal, que depende de ellas. Supera lo que podemos calificar como norma básica.

Artículo 66.2, 3 y 6:

66.2 «Para las enseñanzas no obligatorias se podrá considerar además el expediente académico»: Prevé una discrecionalidad, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

66.3 No pueden ser básicos los criterios complementarios de los centros de especialización curricular, ya que tampoco tiene este carácter de básico el artículo 73, que regula tales centros.

66.6 Prevé una discrecionalidad, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

Artículo 69.1:

No son básicas la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros reguladas por los artículos 70, 71 y 72, y por tanto, tampoco la alusión a estos conceptos en este apartado.

Artículos 70 y 71:

No puede ser básica la concreción de la forma de llevar a cabo la autonomía pedagógica y organizativa.

No se puede aceptar que el Estado concrete la manera de organizar la autonomía pedagógica (programaciones didácticas, planes de acción tutorial, planes de orientación académica y profesional, y proyectos educativos) o que se concrete con todo detalle algunos de los aspectos de esta autonomía, como el que se refiere a quién puede escoger los libros de texto o el material curricular. Tampoco se han de concretar en normativa básica los instrumentos para definir la autonomía organizativa (programación general anual y reglamento de régimen interior) ni quién interviene (elaboración por el equipo directivo).

Artículo 72:

Según el FJ 27, e), de la STC 5/1981, de 13 de febrero, la regulación de la autonomía de gestión autonómica no puede ser básica, porque es una «materia simple y débilmente conexa con los derechos fundamentales en el campo educativo. Sobre tal precepto podrán legislar, modificándolo, las Comunidades Autónomas».

Artículo 73:

No son básicas la determinación de los aspectos del currículo que pueden ser objeto de especialización, la previsión sobre la obligación de las Administraciones educativas de dar apoyo a los centros con especialización curricular o que los centros puedan ampliar horarios. Son todas ellas materias propias del desarrollo de las Comunidades Autónomas. No puede ser básico el hecho de que existan centros con determinadas especializaciones, ya que no se trata ni de desarrollo directo de un derecho fundamental ni de una opción básica del sistema educativo.

Artículo 75.2, 3, 4 y 5:

El detalle con el que se regulan algunos aspectos de los órganos de gobierno (jefatura de estudios, periodicidad de reuniones, posibilidad de hacer llegar informes a las Administraciones competentes) conlleva que no todo el artículo puede tener el carácter de básico.

75.2 Ni la periodicidad de las reuniones de los órganos de gobierno y de participación y control, ni su régimen de funcionamiento pueden incluirse dentro de la categoría de normativa básica. Es un mero tema organizativo, propio de cada Administración educativa.

75.3 y 4 Tampoco la evaluación por parte de los órganos citados del funcionamiento del centro puede considerarse aspectos básicos esenciales del derecho a la educación.

75.5 «(...) podrán enviar informes sobre el funcionamiento» prevé una discrecionalidad, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

Artículo 76.3 y 4:

76.3 «Los alumnos podrán ser elegidos (...)» prevé una discrecionalidad, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

76.4 «Los alumnos (...) podrán participar en...» prevé una discrecionalidad, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

Artículo 77.2:

«Las Administraciones educativas podrán establecer una denominación (...)» prevé una discrecionalidad, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

Artículo 80:

La regulación de los órganos de coordinación (de carácter interno y organizativo de los centros docentes) no puede ser norma básica. Ya en el año 1981, el Tribunal Constitucional declaró «constitucional la declaración de modificabilidad» por las Comunidades Autónomas de los seminarios y departamentos de los institutos públicos, regulados entonces en el artículo 29 de la LOECE (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 24).

Artículo 82:

Sólo el procedimiento de selección del Director tiene carácter básico, según el TC, no el de la propuesta de nombramiento y cese del equipo directivo, que sólo es un tema de gestión y ejecución, competencia de las CCAA.

El establecimiento de otros órganos de gobierno corresponde a las Comunidades Autónomas, en todo caso. Corresponde también a ellas determinar las condiciones y requisitos que han de reunir los candidatos, y todas aquellas cuestiones de procedimiento.

82.2 La naturaleza del órgano y sus funciones manifiestan su carácter no básico.

Artículo 83:

Los órganos de carácter consultivo y participativo son establecidos por las CCAA. No corresponde al Estado determinar que debe favorecerse que los Directores formen parte de dichos órganos. Ninguna Ley educativa anterior ha establecido tal principio.

La previsión de que los directores puedan participar en órganos de carácter consultivo y participativo no puede tener carácter básico.

Artículo 86.2, 3, 4 y 5:

86.2 La designación y ámbito de actuación territorial de las comisiones de selección en el concurso de méritos siempre ha sido una competencia de gestión,

ejercida hasta el momento por las Administraciones educativas.

86.3 Lo mismo se puede decir de la composición de las citadas comisiones, que han quedado establecidas en las respectivas convocatorias, no en norma con rango de Ley de carácter básico.

Este apartado determina con todo detalle, sin dejar margen alguno a las Comunidades Autónomas, el procedimiento de selección de los Directores: composición de las comisiones de selección, etc. Hasta ahora, y como ejemplo, el Estado no había considerado básica la composición de las comisiones de baremación de los méritos, ni en los concursos de traslados ni en los concursos-oposición.

86.4 No incluye novedad ninguna respecto a cualquier baremo de un concurso de méritos, regulado en la normativa general de la función pública, que justifique su inclusión como norma básica docente.

86.5 El número de vocales de las comisiones, y la remisión a la aplicación de criterios objetivos y del procedimiento general del sistema de concurso de méritos, no pueden ser considerados aspectos básicos del procedimiento de selección.

Artículo 87.1:

No deja margen al desarrollo autonómico, al determinar con todo detalle los contenidos del curso.

Artículo 90:

No se puede aceptar que el Estado se reserve las previsiones sobre el apoyo y el reconocimiento al ejercicio de la función directiva.

90.2 No es básica la formación permanente, como ya se ha reiterado.

90.3 No se puede aceptar que el Ministerio de Educación participe en la oferta periódica de los planes de formación de directores. Es un tema de gestión y de ejecución de un aspecto de la educación, la formación permanente.

90.4 Es inadmisible que la regulación de la jornada lectiva del director y de los cargos directivos pueda incluirse en una Ley estatal con carácter básico.

Artículo 95:

El desarrollo de la evaluación es normativa de ejecución, que corresponde a las Comunidades Autónomas.

Artículo 99:

No puede ser básico ni determinar que las Administraciones educativas deben elaborar planes de evaluación (es una competencia propia) ni determinar los aspectos organizativos de la evaluación que llevan a cabo las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial.

Artículo 100.2:

Las Administraciones educativas tienen competencias de supervisión del sistema educativo. No corresponde que su ejercicio se haya de realizar «de conformidadcon las normas básicas que regulan esta materia».

La regulación de la función inspectora, dentro del ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, es una competencia organizativa, de gestión y de control de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, que ha de ser regulada por cada Administración educativa.

Artículo 104.2 y 3:

Es un tema de organización, propio de las Comunidades Autónomas.

Artículo 105.1, 2 y 3:

La formación permanente de los funcionarios no es materia básica, por no formar parte del estatuto de la función pública, tal como lo ha delimitado el Tribunal Constitucional.

Disposición adicional tercera, 1, 3 y 4:

1. La Ley no puede regular, con carácter básico, que los órganos de coordinación didáctica (cuya regulación no es básica) son los encargados de elegir los libros de texto y el material curricular.

3 y 4. Tampoco puede ser básica la regulación de la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares, que ha de quedar dentro de las competencias de cada Comunidad Autónoma.

Disposición adicional cuarta, 2:

El Estado establece la duración de los cursos académicos al fijar el tiempo curricular. Corresponde a las Comunidades Autónomas establecer el currículum y determinar los períodos lectivos, al ser ésta una competencia meramente organizativa.

Por ello, es competencia autonómica fijar el inicio y final del calendario escolar de los centros docentes. No puede el Estado entrar a regularlo, estableciendo excepciones en la enseñanza de personas adultas, materia no básica, y en la formación en centros de trabajo, tema curricular propio de las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional octava, 1:

No puede considerarse básica la categoría de Director, que no forma parte de las estructuras de los cuerpos docentes estatales, sino que es un mero reconocimiento profesional y económico a la prestación de unos determinados servicios, pero no se le puede incluir dentro de los conceptos jurídicos de ámbito estatal, y por ello básicos.

Disposición adicional novena, 5:

«El Gobierno podrá determinar (...)» prevé una discrecionalidad, no una obligación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 10).

Disposición adicional undécima, 4:

No pueden ser básicos los apartados del a) al e) por tratarse de materia organizativa.

Disposición transitoria primera:

La regulación transitoria de la duración del mandato de los órganos de gobierno de los centros es un tema organizativo que ha de desarrollar cada Comunidad Autónoma.

Disposición transitoria segunda:

De mantenerse el carácter educativo-asistencial, la Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas en esta materia.

Disposición transitoria tercera:

No puede aceptarse el carácter de básico al inciso final de esta transitoria: «(...) dando preferencia, por este orden, a las unidades que se soliciten para tercero, segundo y primer curso de la Educación Infantil».

Disposición transitoria cuarta:

No puede considerarse básica la categoría de Director, que no forma parte de las estructuras de los cuerpos docentes estatales, sino que es un mero reconocimiento profesional y económico a la prestación de unos determinados servicios, pero no se le puede incluir dentro de los conceptos jurídicos de ámbito estatal, y por ello básicos.

Por lo tanto, tampoco puede ser básico el procedimiento transitorio de adquisición de la categoría de Director, que ha de ser regulado por cada Autonomía, sin intervención del Estado, ya que sólo tiene consecuencias profesionales y económicas.

Disposición final séptima:

La determinación de las especialidades de la inspección educativa se trata de un tema organizativo, propio de cada Comunidad Autónoma, como se ha repetido varias veces.

ENMIENDA NÚM. 1118

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Final Novena

Redacción que se propone:

«Disposición Final Novena. Desarrollo de la presente Ley.

Las normas de esta ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno.»

JUSTIFICACIÓN

La remisión a aquellas disposiciones que por su naturaleza corresponden al Estado de acuerdo con lo que dice la disposición adicional primera, número 2, de la LODE (ordenación general del sistema educativo, programación de la enseñanza, fijación de enseñanzas mínimas y regulación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válida en todo el territorio español y la alta inspección) significa establecer una especie de «cajón de sastre» en materia de remisiones al Gobierno del Estado, que va mucho más allá de lo aceptado como razonable por el Tribunal Constitucional.

Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que las remisiones de la Ley al desarrollo reglamentario por el Gobierno no pueden ser un cheque en blanco, que le permita al Estado regular, con carácter básico, cualquier aspecto no previsto en la propia Ley.

En este sentido, la STC 99/1987 de 11 de junio de 1987, FJ 2.a): «Incluso con relación a los ámbitos reservados por la Constitución a la regulación por Ley no es, pues, imposible una intervención auxiliar o complementaria del reglamento, pero siempre que estas remisiones "sean tales que restrinjan, efectivamente, el ejercicio de esa potestad (reglamentaria) a un complemento de la regulación legal, que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley", de tal modo que no se llegue a "una total abdicación por parte del legislador de su facultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los fines u objetivos que la reglamentación ha de seguir"» (cfr. STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4).

Finalmente, si «la propia naturaleza de las materias» determina su carácter básico, ha de quedar perfectamente delimitado en la ley, sin remisiones genéricas e

indeterminadas al desarrollo posterior del Gobierno de temas que no han sido recogidos por la propia ley.

ENMIENDA NÚM. 1119

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Modificar la Disposición Final Décima.

Redacción que se propone:

«Disposición Final Décima. Del carácter de Ley Orgánica de la presente Ley.

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes preceptos: el apartado d) del artículo 1, el apartado 3 del artículo 2 y el apartado 6 del artículo 5 del Título Preliminar; los Capítulos II y III del Título I; los artículos 15, 16 y 17 del Capítulo IV del Título I; el apartado 3 del artículo 21 y los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, así como el apartado 1 del artículo 34 del Capítulo V del Título I; el artículo 35 del Capítulo VI del Título I; los artículos 37, 38, 39, y 41 del Capítulo VII del Título I. Los Títulos II, III y IV; el apartado 3 del artículo 62 y los artículos 65, 66.1, 2, 6, 7 y 8, 67, 68, y 69 del Capítulo I del Título V, así como el artículo 83 del Capítulo II del mismo Título. El Título VI y el Título VII. Disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, octava y novena; Disposiciones transitorias segunda, quinta y sexta, y Disposiciones finales segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y décima.»

JUSTIFICACIÓN

Artículo 2, apartados 3 y 4:

La regulación de los deberes de los alumnos no es materia orgánica, según el Tribunal Constitucional, por no ser desarrollo directo del derecho a la educación:

«La conexión de los deberes de los alumnos con materia de derechos fundamentales es muy débil. No hay inconveniente en el hecho que las Comunidades Autónomas puedan modificarlos por ley». [STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 24, d)].

Artículo 7, apartado 6:

La educación de adultos no ha tenido nunca el carácter de orgánica (véase el artículo 51.1 de la LOGSE). Debe tratarse de un error, porque el propio Proyecto de LOCE, en su artículo 49.1 reproduce casi literalmente el apartado 6 del artículo 7, y no es considerado orgánico.

ENMIENDA NÚM. 1120

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Adicionar una Disposición Final nueva, que será la novena

Redacción que se propone:

«Disposición final (nueva).

Se modifican los apartados 1, primer párrafo, y 4 de la Disposición Adicional 15.ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que quedan redactados de la siguiente forma:

"1. No serán de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos o Escalas en que se ordena la Función Pública docente el apartado 1.a) del artículo 20, en lo que se refiere a la exigencia del grado personal; el artículo 21, excepto el apartado 2.b) y excepto los apartados 1 y 2 que se aplicarán al personal docente que ocupe puestos de trabajo en la Administración educativa con carácter definitivo, y el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 22 de esta Ley en lo que se refiere a la conservación del grado personal.

(…)

4. El personal docente podrá ocupar puestos de trabajo en la Administración educativa de acuerdo con lo que determinen las respectivas relaciones de puestos de trabajo, consolidando grado personal si ocupan el puesto con carácter definitivo."»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de una nueva disposición adicional de modificación de la normativa docente de la disposición adicional 15.1 y 4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pretende dar el mismo trato a los funcionarios docentes que han pasado a ocupar puestos de trabajo de la Administración educativa, en relación con la promoción profesional que los demás funcionarios.

Desde el año 1984, en que se aprobó la reforma de la función pública, a este colectivo no se les están aplicando las normas de promoción profesional previstas en el artículo 21 de la Ley 30/1984, por el hecho de ser docentes, pero tampoco se les aplican las mejoras de promoción que se han establecido para los funcionarios docentes, precisamente porque no están ocupando puestos de trabajo de carácter docente.

El Proyecto de LOCE recoge en su articulado muchas referencias a la promoción profesional de los funcionarios docentes, relacionadas con el ejercicio de las actividades docentes (responsabilidad del Director y de los equipos directivos, con la creación de la nueva categoría de Director, creación de los Cuerpos de Catedráticos, y redefinición de las funciones de la Inspección Educativa, desarrollada por funcionarios docentes). Cuando se desarrollen todas estas previsiones ligadas a la promoción profesional, aquellos funcionarios docentes que ocupen puestos de trabajo de la Administración educativa no recibirán un trato igual ni equivalente a los demás docentes, ya que la disposición adicional 15 de la Ley 30/1984 impide que se les aplique la promoción profesional prevista con carácter general para todos los funcionarios por la Ley.

A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Madrid, 11 de octubre de 2002.—**Luis de Grandes Pascual,** Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 1121

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la exposición de motivos

De modificación.

El párrafo cuadragésimo tercero: «Con la denominación de necesidades educativas específicas, la Ley, en el Capítulo VII del Título I, presta especial atención a los alumnos extranjeros, a los alumnos superdotados intelectualmente y a los alumnos con necesidades educativas especiales, estableciendo un marco general que permita a las Administraciones educativas garantizar, en todos los casos, una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren.»

Debe decir:

«Con la denominación de necesidades educativas específicas, la Ley, en el Capítulo VII del Título I, presta especial atención a los alumnos extranjeros, a los alumnos superdotados intelectualmente y a los alumnos con necesidades educativas especiales —bien por la presencia de una o varias discapacidades o por otros factores de análogos efectos—, estableciendo un marco general que permita a las Administraciones educativas garantizar, en todos los casos, una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de recoger de manera específica en un texto de rango legal el reconocimiento a toda clase de minusvalías que puedan afectar al normal discurrir de los alumnos con necesidades educativas especiales en el proceso educativo.

ENMIENDA NÚM. 1122

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 2.2

De modificación.

Se propone la modificación del apartado f) de este artículo, con la siguiente redacción:

«f) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo, y,»

JUSTIFICACIÓN

Con esta redacción inspirada en el artículo 49 de la Constitución, se recogen más adecuadamente los efectos de todo tipo que en el ámbito educativo pueden surtir la presencia de la discapacidad del alumno, determinando unas necesidades especiales que el sistema ha de tratar de compensar mediante un sistema integral de apoyos, asistencias y ayudas.

ENMIENDA NÚM. 1123

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 6

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«1. El Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá Programas de Cooperación Territorial orientados a objetivos educativos de interés general. Estos Programas tendrán como finalidad, según sus diversas modalidades, favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial.

2. Los Programas de Cooperación Territorial serán desarrollados y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1124

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 8. Currículo

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 8, entre los actuales 7 y 8 del texto presentado, con la siguiente redacción:

«1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo.

2. En relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, el Gobierno fijará las enseñanzas comunes, que constituyen los elementos básicos del currículo, con el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde en todo caso el 55 por ciento de los horarios escolares en las Comunidades Autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial y el 65 por ciento en el caso de aquellas que no la tengan.

3. Las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que deberá incluir las enseñanzas comunes en sus propios términos.

4. Los títulos académicos y profesionales serán homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en las condiciones previstas por la presente Ley y por las normas básicas que al efecto se dicten.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1125

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 9

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del actual artículo 9, con la siguiente redacción:

«2. Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa básica que sobre los aspectos educativos de esta etapa establezca el Gobierno, la organización de la atención dirigida a los niños de esta etapa educativa y el establecimiento de las condiciones que habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste. Establecerán, asimismo, los procedimientos de supervisión y control que estimen adecuados.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se trata de aclarar los ámbitos de la normativa básica a que hace referencia el artículo.

ENMIENDA NÚM. 1126

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 9

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del actual artículo 9, con la siguiente redacción:

«4. La educación preescolar tiene carácter voluntario para los padres. Las Administraciones competen-

tes atenderán las necesidades que concurran en las familias y coordinarán la oferta de plazas suficientes para satisfacer la demanda.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una clarificación competencial sobre este ámbito del sistema educativo.

ENMIENDA NÚM. 1127

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 2 del artículo 10

De modificación.

«2. Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares gratuitos en centros públicos y en centros privados concertados para atender la demanda de las familias.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1128

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 3 del artículo 15

De modificación.

Se propone la siguiente modificación:

«Con el fin… en la determinación de las enseñanzas comunes se establecerán...»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1129

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 4 del artículo 16

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«4. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de separar la evaluación de los alumnos de la del profesorado.

ENMIENDA NÚM. 1130

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 18

De modificación.

Se propone añadir, al final del primer inciso, la expresión «... y la tutoría de los alumnos.». Quedaría por tanto redactado de la forma siguiente:

«La Educación Primaria será impartida por maestros, que atenderán todas las áreas de este nivel y la tutoría de los alumnos.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera propio de las funciones de los maestros la tutoría de los alumnos de este nivel.

ENMIENDA NÚM. 1131

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 2 del artículo 20

De modificación.

Se propone la siguiente modificación:

«2. No obstante, los alumnos podrán permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta el curso académico completo en que cumplan los dieciocho años de edad, siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1132

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 2 del artículo 22

De modificación.

Se propone la siguiente modificación:

«2. Con el fin… al fijar las enseñanzas comunes…»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1133

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 24, apartado 2

De modificación.

«2. Estas medidas serán promovidas, en el marco que establezcan las Administraciones educativas, por el equipo de evaluación, asesorado por el de orientación, y adoptadas, en su caso, por la dirección del centro. La aplicación individual de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1134

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 25, apartado 4

De modificación.

Se propone la siguiente modificación:

«4. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios establecidos en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán adecuar este principio a las demandas de los alumnos y a las características y recursos de los centros.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1135

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 2 del artículo 25, párrafo 3.°

De modificación.

Se propone la siguiente modificación:

«En la determinación de las enseñanzas comunes…»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1136

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 4 del artículo 28

De supresión.

Se suprime íntegramente el apartado 4 del artículo 28.

JUSTIFICACIÓN

Las posibilidades de continuar estudios para los alumnos que hayan cumplido los dieciseis años ya se encuentran contempladas en los artículos que regulan las enseñanzas correspondientes. Este apartado supone una reiteración innecesaria, que puede inducir a confusión.

ENMIENDA NÚM. 1137

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 1 del artículo 29

De supresión.

Se suprime el numeral 1 de este apartado.

JUSTIFICACIÓN

Corrección de un error.

ENMIENDA NÚM. 1138

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 30, apartado 2

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«2. Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requerirá haber superado todas las asignaturas de la etapa. Excepcionalmente, se podrá obtener este título sin haber superado todas las asignaturas de la etapa, en las condiciones que el Gobierno establezca.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción anterior no permitía la obtención del título a un alumno que haya superado todo cuarto y tenga alguna asignatura de tercero pendiente. Esta redacción permitirá en su desarrollo esa posibilidad.

ENMIENDA NÚM. 1139

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 31

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado 2 al artículo 31. El actual apartado 2 pasaría a ser el 3. La redacción del nuevo apartado sería:

«Para la impartición de los módulos profesionales integrados en los Programas de Iniciación Profesional se podrá contratar, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema, a profesores que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. En los centros públicos, las Administraciones educativas podrán establecer, con estos profesionales, contratos de carácter temporal y en régimen de derecho administrativo. A estos profesores no se les requerirá estar en posesión del título establecido en el artículo 55 de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una mejora. Las enseñanzas de los PIP, dado el carácter laboral que tienen los módulos, deben contar también con personas que estén en el mercado utilizando las técnicas que se enseñan. A estas personas no se les debe exigir el Título de Especialización Didáctica, dado que no son miembros de la carrera docente.

ENMIENDA NÚM. 1140

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 6 del artículo 34

De modificación.

Se propone la siguiente modificación

«.... en la determinación de las enseñanzas comunes se establecerán las asignaturas...»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1141

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 5 del artículo 36

De modificación.

Se propone la siguiente redacción para este apartado:

«5. La evaluación positiva en todas las asignaturas del Bachillerato da derecho a un certificado que surtirá efectos laborales y los académicos previstos en el artículo 37.3, letra c), de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de hacer coherente los efectos que se reconocen en uno y otro artículos a la superación de las asignaturas del Bachillerato.

ENMIENDA NÚM. 1142

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 38

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Las Administraciones educativas podrán establecer convenios educativos con centros que impartan ciclos formativos de Formación Profesional, de acuerdo con la programación general de la enseñanza.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1143

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 39.6

De supresión.

Se suprime dicho apartado.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 1144

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al Capitulo VII del Título I

De adición.

Se propone incluir una nueva sección 1.ª en el Capítulo VII del Título I, con el siguiente contenido:

«CAPÍTULO VII

De la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas

Sección 1.ª De la igualdad de oportunidades para una educación de calidad.

Artículo 39. Principios.

1. Con el fin de asegurar el derecho individual a una educación de calidad, los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y aportarán los recursos y los apoyos precisos que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y de formación previstos para cada uno de los del sistema educativo.

2. El Estado podrá impulsar, mediante Convenios con las Comunidades Autónomas, actuaciones preferentes orientadas al logro efectivo de sus metas y objetivos en materia de igualdad de oportunidades y de compensación en educación.

Artículo 40. Recursos.

1. Las Administraciones educativas adoptarán procedimientos singulares en aquellos centros escolares o zonas geográficas en las cuales, por las características socioeconómicas y socioculturales de la población correspondiente, resulte necesaria una intervención educativa diferenciada, con especial atención a la garantía de la igualdad de oportunidades en el mundo rural. En tales casos, se aportarán los recursos materiales y de profesorado necesarios y se proporcionará el apoyo técnico y humano preciso para el logro de la compensación educativa.

2. Los poderes públicos organizarán y desarrollarán de manera integrada acciones de compensación educativa con el fin de que las actuaciones que correspondan a sus respectivos ámbitos de competencia consigan el uso más efectivo posible de los recursos empleados.

3. Excepcionalmente, en aquellos casos en que, para garantizar la calidad de la enseñanza, los alumnos de enseñanza obligatoria hayan de estar escolarizados en un municipio próximo al de su residencia o a una distancia que lo justifique de acuerdo con la normativa al efecto, las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte, comedor, y, en su caso, internado.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1145

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la numeración de las Secciones del Capítulo VII del Título I.

De modificación.

Se propone la siguiente modificación:

La actual Sección 1.ª, «De los alumnos extranjeros», pasa a ser Sección 2.ª con el mismo título y contenido.

La actual Sección 2.ª, «De los alumnos superdotados intelectualmente», pasa a ser Sección 3.ª con el mismo título y contenido.

La actual Sección 3.ª, «De los alumnos con necesidades educativas especiales», pasa a ser Sección 4.ª con el mismo título y contenido.

JUSTIFICACIÓN

Coherencia con la enmienda de adición de una nueva Sección 1.ª

ENMIENDA NÚM. 1146

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 3 del artículo 40

De modificación.

Se propone la modificación de la expresión «… independientemente de la edad cronológica de estos alumnos …» por «… independientemente de la edad de estos alumnos ….».

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción.

ENMIENDA NÚM. 1147

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 1 del artículo 41

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

De adición.

«Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas, específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad de conducta, tendrán una atención especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y normalización educativa, y con la finalidad de conseguir su integración. A tal efecto, las Administraciones competentes dotarán a estos alumnos del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de garantizar la adecuada y debida atención a unos alumnos cuyas necesidades pueden surgir en cualquier momento de su escolarización.

ENMIENDA NÚM. 1148

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 2 del artículo 44

De supresión.

Se suprime dicho apartado.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1149

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 2 del artículo 46

De modificación.

Se propone la siguiente modificación:

«En la determinación de las enseñanzas comunes correspondientes a los niveles…»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1150

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 47

De modificación.

Se propone:

«2. De acuerdo con lo que establezcan las administraciones educativas, las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán impartir cursos para la actualización de conocimientos de idiomas y para la formación de las personas adultas y del profesorado.

3. Las Administraciones educativas fomentarán también la enseñanza de idiomas a distancia. Esta oferta podrá integrarse en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

4. Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán desarrollar planes de investigación e innovación en relación con las enseñanzas que impartan, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1151

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 50.1

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«1. Las personas adultas... y criterios de evaluación fijados en los currículos de las enseñanzas obligatorias de las respectivas Administraciones educativas.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1152

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 56

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 56. Formación permanente.

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, podrá desarrollar programas de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, en todos los niveles y modalidades de enseñanza.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas podrán colaborar en el establecimiento, desarrollo y ejecución de programas de formación del profesorado, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban.

3. A los efectos de los concursos de traslados de ámbito nacional y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional octava de esta Ley, las actividades de formación organizadas por cualquiera de las Administraciones educativas, surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos básicos que el Gobierno establezca, una vez consultadas las Comunidades Autónomas.

4. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos que permitan la participación del profesorado de los centros, sostenidos con fondos públicos en los planes de formación, así como en los programas de investigación e innovación.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1153

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 59.2

De modificación.

«2. Las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros escolares públicos, adoptarán las medidas oportunas para garantizar su debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de buscar una solución a los problemas planteados ante la ausencia de cobertura jurídica y de responsabilidad de los docentes en el ejercicio de sus funciones. Un correcto funcionamiento de los centros y de las actividades que constituyen sus programaciones nos llevan a considerar la necesidad y la importancia de esta cobertura.

ENMIENDA NÚM. 1154

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al Título V

De modificación.

Se propone la modificación del orden de los artículos de este Título, sin que esta modificación afecte a sus epígrafes ni a su contenido, que se mantienen.

«Título V. De los centros docentes.

Capítulo I. De los principios generales.
Artículo 60. Régimen Jurídico.
Artículo 61. Clasificación de centros.
Artículo 62. Tipología de centros.
Artículo 63. Centros docentes con especialización curricular.
Artículo 64. Autonomía de los centros.
Artículo 65. Autonomía pedagógica.
Artículo 66. Autonomía organizativa.
Artículo 67. Autonomía de gestión económica.

Capítulo II. De los centros públicos.

Artículo 68. Denominación de los centros públicos.
Artículo 69. Admisión de alumnos en centros públicos.

Capítulo III. De los centros privados.

Artículo 70. Carácter propio de los centros.
Artículo 71. Centros privados en el exterior

Capítulo IV. De los centros concertados.

Artículo 72. Conciertos.
Artículo 73. Módulos del concierto.

Capítulo V. De los órganos de gobiemo, órganos de participación en el control y gestión y órganos de coordinación de los centros docentes públicos.

Sección 1.ª Principios generales.

Artículo 74. Principios.
Articulo 75. Tipos de órganos.

Sección 2.ª Órganos de gobierno.

Artículo 76. Director.
Artículo 77. Equipo directivo

Sección 3.ª Órganos de participación en el centro y gestión.

Artículo 78. Consejo Escolar.
Artículo 79. Atribuciones del Consejo Escolar.
Artículo 80. Claustro de profesores.
Artículo 81. Atribuciones del Claustro de profesores.

Sección 4.ª Órganos de coordinación

Artículo 82. Órganos de coordinación docente.

Capítulo VI. De la selección y nombramiento del Director de los centros docentes públicos.

Artículo 83. Principios generales.
Artículo 84. Requisitos.
Artículo 85. Procedimientos de selección.
Artículo 86. Nombramientos.
Artículo 87. Duración del mandato.

Artículo 88. Nombramiento con carácter extraordinario.
Artículo 89. Apoyo al ejercicio de la función directiva.
Artículo 90. Cese del Director
Artículo 91. Reconocimiento de la función directiva.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1155

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 67.3

De modificación.

El artículo 67.3 debe decir:

«3. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares concertadas y demás condiciones de impartición de la enseñanza con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos y del procedimiento administrativo.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1156

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 69

De adición

Se propone la inclusión de dos nuevos apartados en este artículo:

«3. El ejercicio de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros irá acompañada del desarrollo de mecanismos de responsabilidad y, en particular, de procedimientos de evaluación, tanto externa como interna, en el marco de lo dispuesto en el Título VI de la presente Ley, que sirvan de estímulo y permitan orientar convenientemente los procesos de mejora.

4. Las Administraciones educativas promoverán acuerdos o compromisos con los centros para el desarrollo de planes y de actuaciones que comporten una mejora continua tanto de los procesos educativos como de los resultados.»

JUSTIFICACIÓN

El tratamiento que de la autonomía de los centros se efectúa en el proyecto de texto legal debería beneficiarse de una exposición más completa de los principios que han de orientar el desarrollo de la autonomía pedagógica, administrativa y de gestión económica que contempla dicho proyecto de Ley.

La enmienda que se propone comporta un avance claro con respecto a lo dispuesto sobre la autonomía de los centros en el Título I Capítulo II de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, de Evaluación y de Gobiemo de los Centros Docentes, actualmente en vigor, concuerda con lo descrito al respecto en la exposición de motivos del referido Proyecto de Ley y conecta mejor con las orientaciones que están inspirando las reformas educativas en los países más avanzados.

ENMIENDA NÚM. 1157

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 73

De modificación.

Se propone:

«1. Los centros docentes, en virtud de autonomía pedagógica y de organización establecidas en la presente Ley, y de acuerdo con el procedimiento que establezcan las Administraciones educativas, podrán ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

2. La autorización de una especialización curricular podrá incorporar, en su caso, la ampliación de los

horarios para desarrollar los correspondientes procesos de especialización.

3. Los centros docentes podrán añadir a su denominación específica la especialización para la que hayan sido autorizados. Deberán incluir en su proyecto educativo la información necesaria sobre la especialización correspondiente con el fin de orientar a los alumnos y a sus padres.

4. La autorización de una especialización curricular podrá ser revocada por la Administración educativa competente en el caso de que el resultado de la evaluación correspondiente ponga de manifiesto que no se cumplen los objetivos previstos.

5. Las Administraciones educativas prestarán un especial apoyo a los centros sostenidos con fondos públicos que cuenten con alguna especialización curricular.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1158

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 80

De modificación.

Se propone:

«1. En los Institutos de Educación Secundaria existirán Departamentos de coordinación didáctica, que se encargarán de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las asignaturas o módulos que se les encomienden. Cada Departamento de coordinación didáctica estará constituido por los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas de las asignaturas o módulos asignados al mismo.

2. Las Administraciones educativas podrán establecer otros órganos de coordinación además de los señalados, con carácter general, en el apartado anterior.

3. La Jefatura de cada Departamento será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria titular de alguna de las especialidades integradas en los respectivos Departamentos.

En ausencia, en los respectivos centros, de funcionarios del Cuerpo de Catedráticos mencionado en el párrafo anterior, la Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica podrá atribuirse a un profesor funcionario perteneciente al Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

4. En los Departamentos de los centros públicos en los que se impartan enseñanzas de régimen especial, se adaptará lo establecido anteriormente a sus características específicas.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1159

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 86

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«1. Para la designación de los directores en los centros públicos, las Administraciones educativas convocarán concurso de méritos.

2. La selección será realizada por una Comisión constituida por representantes de las Administraciones educativas y, al menos, en un treinta por ciento por representantes del centro correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de profesores de dicho centro.

3. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y en la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor docente realizada como profesor. Se valorará de forma especial la experiencia previa en el ejercicio de la dirección.

4. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las comisiones y la proporción entre los representantes de la Administración y de los centros. Asimismo, establecerán los criterios objetivos y el procedimiento aplicables a la correspondiente selección.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1160

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado 1 del artículo 87

De modificación.

Se propone:

«Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las Administraciones educativas, consistente en un curso teórico de formación relacionado con las tareas atribuidas a la función directiva y en un período de prácticas. Los aspirantes seleccionados que tengan adquirida la categoría de Director a que se refiere el apartado tres de este artículo, estarán exentos de la realización del programa de formación inicial.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1161

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado a) del artículo 102

De modificación.

Se propone la siguiente modificación

«a) Comprobar que los currículos, así como los libros de texto y demás material didáctico se adecuan a las enseñanzas comunes.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1162

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al apartado b) del artículo 102

De modificación.

Se propone la siguiente modificación

«b) Comprobar que las enseñanzas comunes se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre estas materias obligatorias básicas de los respectivos currículos.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1163

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 104

De modificación.

Se propone:

«Artículo 104. Organización de la inspección educativa.

1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las especialidades básicas de Inspección Educativa, teniendo en cuenta, en todo caso, los diferentes niveles educativos y especialidades docentes.

2. Las Administraciones Educativas, de acuerdo con sus competencias, podrán desarrollar las especialidades a que se refiere el apartado anterior, y regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos territorios.

3. El acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y la provisión de puestos de trabajo mediante concursos de traslados de ámbito nacional se desarrollarán

a través de las especialidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera que el artículo así redactado obedece mejor a las diferentes necesidades que puedan tener las Comunidades Autónomas. Ello sin perjuicio de que exista una organización mínima de la Inspección que garantice la posibilidad de movilidad a nivel estatal de los integrantes de este cuerpo.

ENMIENDA NÚM. 1164

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Disposición Adicional Segunda 3

De modificación.

Se propone la siguiente modificación

«El Gobierno fijará las enseñanzas comunes correspondientes...»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1165

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Disposición Adicional Tercera

De modificación.

Se propone sustituir el inciso final del apartado 3 por «La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas que, en desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las Administraciones educativas establezcan, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el Código Penal».

JUSTIFICACIÓN

Adecuación a la competencia propia de cada uno de los Poderes del Estado.

ENMIENDA NÚM. 1166

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Disposición Adicional Octava, Novena, Décima, Undécima, Duodécima, Disposición Final Segunda, Cuarta y Derogatoria.

De modificación.

Se propone la sustitución del texto actual por el siguiente:

«Disposición adicional octava. Bases del Régimen Estatutario de la Función Pública Docente.

1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y las establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, las reguladas por esta Ley y por las normas citadas, para el ingreso, la movilidad entre los Cuerpos docentes, la reordenación de los Cuerpos y Escalas, la provisión de puestos mediante concurso de traslados de ámbito nacional y la adquisición de la categoría de Director. El Gobierno desarrollará reglamentariamente dichas bases en aquellos aspectos que sean necesarios para garantizar el marco común básico de la función pública docente.

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas a que se hace referencia en el apartado anterior.

3. Periódicamente, las Administraciones educativas convocarán concursos de traslado de ámbito nacional, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquéllas. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Éstas se harán públicas a través del «Boletín Oficial del Estado» y de los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un único baremo de méritos entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento superados, los méritos académicos y profesionales, la antigüedad y, en su caso, estar en posesión de la categoría de Director.

4. No obstante, la provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de Enseñanzas Artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas.

Disposición adicional novena. Creación de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

1. Se crean el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y el Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, que quedarán clasificados en el Grupo A de los que establece el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Los Cuerpos de Catedráticos se rigen, además de por lo dispuesto en la presente Ley, por las normas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y por las demás que, junto a las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, constituyen las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes.

2. Se integran en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que tengan reconocida la condición de Catedrático y que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Estos funcionarios se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en la condición de Catedrático y se les respetarán los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva su integración en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, incluidos los derechos económicos que el punto 5 de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo reconoce a los funcionarios provenientes del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato.

3. Se integran en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas que tengan reconocida la condición de Catedrático y que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Estos funcionarios se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en la condición de Catedrático y se les respetarán, en todo caso, los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva su integración en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.

4. Se integran en el Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tengan reconocida la condición de Catedrático y que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Estos funcionarios se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en la condición de Catedrático y se les respetarán, en todo caso, los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva su integración en el Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

5. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, podrá determinar, en función de las necesidades de la planificación educativa, el número total de integrantes de cada uno de los Cuerpos creados por esta Ley.

Disposición adicional décima. Funciones de los Cuerpos de Catedráticos.

1. El Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria desempeñará sus funciones en la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

2. El Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas desempeñará sus funciones en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

3. El Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño desempeñará sus funciones en las Escuelas de Artes Plásticas y de Diseño.

4. Los Catedráticos de Enseñanza Secundaria, los de Escuelas Oficiales de Idiomas y los de Artes Plásticas y Diseño realizarán las funciones que se les encomiendan en la presente Ley y las que reglamentariamente se determinen. En todo caso, específicamente se atribuyen a los Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño, así como a los Catedráticos de Música y Artes Escénicas las siguientes funciones:

— Con carácter exclusivo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.3 de la presente Ley, el ejercicio de la Jefatura de los Departamentos Didácticos así como, en su caso, del Departamento de Orientación.

— Con carácter preferente:

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se realicen en el centro.

b) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que se incorporen al Departamento.

c) La coordinación de los programas de formación continua de los profesores que se desarrollen dentro del Departamento.

d) La presidencia, en su caso, de los tribunales de la Prueba General de Bachillerato.

e) La presidencia de los tribunales de ingreso y acceso a los respectivos Cuerpos de Catedráticos.

5. La habilitación prevista en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, se extenderá a los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha Ley.

Disposición adicional undécima. Carrera docente

1. El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, de acuerdo con las áreas, materias, asignaturas y módulos que integran el currículo correspondiente. Para la selección de los aspirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes.

El número de aprobados no podrá superar el numero de plazas convocadas. Asimismo, existirá una fase de prácticas que podrá incluir cursos de formación y constituirá parte del proceso selectivo.

Para el ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño será necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, además del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, y superar el correspondiente proceso selectivo.

El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones para permitir el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, mediante concurso de méritos, a personalidades de reconocido prestigio en sus respectivos campos profesionales.

2. En las convocatorias de ingreso en los Cuerpos docentes que a continuación se indican se reservará un porcentaje de las plazas que se convoquen para el acceso de funcionarios docentes, que deberán estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los correspondientes Cuerpos y haber permanecido en sus Cuerpos de origen un mínimo de seis años como funcionarios de carrera.

Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de prácticas y tendrán preferencia en la elección de los destinos vacantes sobre los aspirantes que ingresen por el turno libre de la correspondiente convocatoria.

Los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo B a que se refiere la vigente legislación de la función pública, podrán acceder a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño. En las convocatorias correspondientes para estos funcionarios se valorarán los méritos de los concursantes, entre los que se tendrán en cuenta el trabajo desarrollado y los cursos de formación y perfeccionamiento superados, así como los méritos académicos. Asimismo se realizará una prueba, consistente en la exposición y debate de un tema de la especialidad a la que se accede, para cuya superación se atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos didácticos y pedagógicos de los candidatos.

Asimismo, los funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, podrán acceder a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, respectivamente.

En las convocatorias correspondientes se valorarán los méritos relacionados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos educativos y la labor docente de los candidatos. La evaluación de la función docente será realizada por la Inspección Educativa. Asimismo, se realizará una prueba oral ante un tribunal que constará de dos ejercicios: el primero consistirá en la exposición y debate sobre un tema de su especialidad, elegido por sorteo, de un temario previamente fijado por el Gobierno, y el segundo, en la presentación y debate de una memoria elaborada por el candidato.

3. Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario pertenecer a alguno de los Cuerpos que integran la función pública docente, con una experiencia mínima docente de seis años.

El sistema de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Educación será el de concurso-oposición, que atenderá, en todo caso, a las especialidades que se establezcan.

Las Administraciones educativas convocarán el concurso-oposición con sujeción a los siguientes criterios:

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos específicos como docentes. Entre estos méritos, se tendrá especialmente en cuenta la preparación científica y didáctica en las áreas, asignaturas o módulos cuya enseñanza se ha impartido; el desempeño de cargos directivos, con evaluación positiva, y, pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de Catedráticos de las Enseñanzas Escolares.

b) En la fase de oposición se valorarán en el aspirante sus conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa, así como los conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de las funciones inspectoras de control, evaluación y asesoramiento. Igualmente se valorará su actualización científica y didáctica en las áreas o asignaturas cuya enseñanza ha impartido, así como el ejercicio de las actividades desarrolladas en el Centro.

Los candidatos seleccionados mediante el concurso-oposición deberán realizar para su adecuada preparación un período de prácticas, al finalizar el cual serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación. La organización de las citadas prácticas corresponderá, en cada caso, a la administración convocante.

4. Los funcionarios docentes a que se refiere esta Ley y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, podrán, asimismo, acceder a un cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino sin limitación de antigüedad siempre que posean la titulación exigida y superen el correspondiente proceso selectivo. A este efecto se tendrá en cuenta su experiencia docente y las pruebas que en su día se superaron, quedando exentos de la realización de la fase de prácticas.

Estos funcionarios, cuando accedan a un cuerpo —al tiempo que otros funcionarios por el turno libre o por alguno de los turnos previstos en esta disposición— tendrán prioridad para la elección de destino.

5. El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las Universidades que faciliten la incorporación a los Departamentos Universitarios de los profesores de los cuerpos docentes de niveles correspondientes a las enseñanzas escolares, en el marco de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia de Educación, impulsarán el estudio y la implantación, en su caso, de medidas destinadas al desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios docentes.

Disposición adicional duodécima. Del Título de Especialización Didáctica.

1. Las referencias al título profesional de especialización didáctica contenidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se entienden sustituidas por la denominación de Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 55 de esta Ley.

2. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se requerirá estar en posesión del Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 55 de esta Ley.

3. Para ejercer la docencia de las enseñanzas de régimen especial de música y danza, y de arte dramático, será necesario estar en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o titulación equivalente, a efectos de docencia, y del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de contemplar de una manera expresa toda la evolución de la carrera docente y las múltiples posibilidades de progreso en la misma. Asimismo se abren futuras vías de mejora de esta carrera.

ENMIENDA NÚM. 1167

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición adicional decimoquinta

De adición.

Disposición adicional decimoquinta. De la información de carácter tributario.

«La información de carácter tributario que se precisa para la acreditación de las condiciones económicas a las que se refieren los artículos 4.1 y 66.2 será suminis-

trada directamente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la Administración educativa, por medios informáticos o telemáticos, en el marco de colaboración que se establezca en los términos y con los requisitos a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y las disposiciones que la desarrollan.

En la medida en que a través del indicado marco de colaboración se pueda disponer de dicha información, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias. En estos supuestos el certificado será sustituido por declaración responsable del interesado de que cumple las obligaciones señaladas, así como autorización expresa del mismo para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria suministre la información a la Administración educativa.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de facilitar al máximo al ciudadano sus trámites con la Administración educativa, eximiendo de la presentación de unos documentos que ya obran en poder de la Administración General del Estado.

ENMIENDA NÚM. 1168

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición adicional Decimosexta

De adición.

Disposición adicional decimosexta. Participación de los Directores.

Las Administraciones educativas favorecerán la participación de los directores de centros sostenidos con fondos públicos en órganos de carácter consultivo y participativo.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 1169

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Disposición derogatoria única

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

1. Quedan derogados el artículo 10.1 y la disposición adicional quinta de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa.

2. Quedan derogados los artículos 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 47, 48, 49, 52.1, 53 y 57 d) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

3. Queda derogado el artículo 4, los capítulos I, II, III, V, del Título primero; el capítulo II del Título II; el Título III, los artículos 3, 5, 6, 31.1 y 2, 32, 39.3, 43.1,2° párrafo, 55, 57, 58, 62, 66 y las disposiciones adicionales segunda, novena, décima, apartado segundo; decimoquinta, apartado primero y decimosexta, apartados segundo, tercero, cuarto y séptimo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

4. Quedan derogados el Capítulo II del Título I, Título II, Título III y los artículos 35, 36, 38.1, 39, 41 y 43 del Título IV y las disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta, sexta y octava de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes.

5. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

ENMIENDA NÚM. 1170

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición final primera

De adición.

Se propone la adición de un apartado 1 con la siguiente redacción:

«1. El artículo 27.3,2° párrafo de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

La programación específica de puestos escolares de nueva creación en los niveles gratuitos deberá tener en cuenta en todo caso la oferta existente de centros públicos y concertados.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1171

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición final primera

De adición.

Se propone la adición de un apartado 2 con la siguiente redacción:

2. El artículo 31.1.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

«Los titulares de los centros privados, cuya designación se producirá a través de las organizaciones de titulares y empresariales de la enseñanza más representativas.»

Los siguientes apartados deberán numerarse correlativamente.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1172

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición final primera

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado con la siguiente redacción:

«7. Al artículo 47 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se le añaden tres nuevos apartados con la siguiente redacción:

2. Los alumnos que superen los ciclos formativos de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior recibirán, respectivamente, el título de Técnico y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.

3. El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso directo a la modalidad de artes del Bachillerato.

4. El Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso directo a los estudios universitarios que se determinen, teniendo en cuenta su relación con los estudios de artes plásticas y diseño correspondientes»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1173

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición final primera

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado con la siguiente redacción:

«8. El artículo 48.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, queda redactado de la siguiente manera:

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, será posible acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas sin cumplir los requisitos académicos establecidos, siempre que el aspirante demuestre tener tanto los conocimientos y aptitudes propios de la etapa educativa anterior como las habilidades específicas necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. Para acceder por esta vía a los ciclos formativos de grado

superior se requerirá tener cumplidos los veinte años de edad. Asimismo será de aplicación para estas enseñanzas lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 37 de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 1174

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición final segunda

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 1.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 1175

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición final tercera apartado nuevo

De adición.

Nuevo apartado de la disposición final tercera con el texto siguiente:

«2. Todas las referencias realizadas en las disposiciones vigentes al término "enseñanzas mínimas" quedan sustituidas por el término "enseñanzas comunes".»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

De esta manera se establece la identidad de las ahora denominadas enseñanzas comunes con las llamadas en la LODE enseñanzas mínimas, con lo cual asimismo, se asegura que esas enseñanzas comunes quedan cubiertas y amparadas por la jurisprudencia constitucional sobre las enseñanzas mínimas y, en concreto, por la doctrina establecida en las SSTC 87/1983 y 88/1983, ambas de 27 de octubre, sobre el concepto, finalidad y alcance de esas enseñanzas.

ENMIENDA NÚM. 1176

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición final cuarta

De supresión.

Se propone la supresión de los apartados 2 y 4 de la disposición final cuarta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

Al Título

— Enmienda núm. 536 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).

Exposición de motivos

— Enmienda núm. 989 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 988 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1121 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 351 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), párrafo 5.º (nuevo).

Genérica

— Enmienda núm. 26 del G.P. Coalición Canaria.

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

— Enmienda núm. 537 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al título.
— Enmienda núm. 990 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 1

— Enmienda núm. 654 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 991 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 538 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 487 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1 (nuevo).
— Enmienda núm. 992 del G.P. Catalán (CiU) (nueva letra).
— Enmienda núm. 487 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2 (nuevo).
— Enmienda núm. 539 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 27 del G.P. Coalición Canaria, a la letra b).
— Enmienda núm. 28 del G.P. Coalición Canaria, a la letra c) (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra c) (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra d) (nueva).
— Enmienda núm. 100 del G.P. Izquierda Unida, a la letra d) bis (nueva).
— Enmienda núm. 101 del G.P. Izquierda Unida, a la letra e).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra e) (nueva).
— Enmienda núm. 102 del G.P. Izquierda Unida, a la letra f).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra f) (nueva).
— Enmienda núm. 103 del G.P. Izquierda Unida, a la letra f) bis (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra g) (nueva).
— Enmienda núm. 104 del G.P. Izquierda Unida, a la letra g) bis (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra h) (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra i) (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra j) (nueva).
— Enmienda núm. 105 del G.P. Izquierda Unida, a la letra k) (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra k) (nueva).
— Enmienda núm. 403 del Sr. Saura Laporta (GMx), a la letra k) (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra l) (nueva).
— Enmienda núm. 403 del Sr. Saura Laporta (GMx), a la letra l) (nueva).
— Enmienda núm. 352 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra m) (nueva).
— Enmienda núm. 403 del Sr. Saura Laporta (GMx), a la letra m) (nueva).

CAPÍTULO II

Título.
— Enmienda núm. 655 del G.P. Socialista (supresión).

Artículo 2

— Enmienda núm. 656 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 353 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
— Enmienda núm. 993 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 488 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1, a) (de supresión).
— Enmienda núm. 106 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, b).
— Enmienda núm. 489 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1, b).
— Enmienda núm. 540 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1, b).
— Enmienda núm. 594 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, b).
— Enmienda núm. 489 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1, c).
— Enmienda núm. 541 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1, c).
— Enmienda núm. 107 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 108 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, b).
— Enmienda núm. 595 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2, b).
— Enmienda núm. 109 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, e).
— Enmienda núm. 994 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2, f).
— Enmienda núm. 1122 del G.P. Popular, al apartado 2, f).
— Enmienda núm. 490 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2, h) (letra nueva).
— Enmienda núm. 29 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 3.
— Enmienda núm. 110 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3, b).
— Enmienda núm. 111 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3, c).
— Enmienda núm. 542 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 3, c).
— Enmienda núm. 112 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3, d).
— Enmienda núm. 543 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 3, d).
— Enmienda núm. 113 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4, a).
— Enmienda núm. 114 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4, c).
— Enmienda núm. 30 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 4, d) (letra nueva).
— Enmienda núm. 31 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 5 (nuevo).

Artículo 3

— Enmienda núm. 657 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 994 bis del G.P. Catalán (CiU), al apartado 1.
— Enmienda núm. 115 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, b).
— Enmienda núm. 596 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, b) (de supresión).
— Enmienda núm. 3 del Sr. Labordeta Subías (GMx) al apartado 1 c).
— Enmienda núm. 116 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, c).
— Enmienda núm. 117 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, c).
— Enmienda núm. 597 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, c) .
— Enmienda núm. 544 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1, c).
— Enmienda núm. 32 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1 e) (letra nueva).
— Enmienda núm. 118 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, e) (letra nueva).
— Enmienda núm. 491 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1, e) (letra nueva).
— Enmienda núm. 598 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, e) (letra nueva).
— Enmienda núm. 33 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1, f) (letra nueva).
— Enmienda núm. 34 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 119 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 35 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 3 (nuevo).
— Enmienda núm. 354 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3 (nuevo).

CAPÍTULO III

Título

— Enmienda núm. 658 del G.P. Socialista (supresión).

Artículo 4

— Enmienda núm. 659 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 492 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 995 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 355 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1.
— Enmienda núm. 545 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1, párrafo 3.º.
— Enmienda núm. 120 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, párrafo 3.º.
— Enmienda núm. 404, del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1 (párrafos nuevos).
— Enmienda núm. 36 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2.
— Enmienda núm. 37 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 4 .
— Enmienda núm. 121 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.

Artículo 5

— Enmienda núm. 660 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 122 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 356 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
— Enmienda núm. 996 del G.P. Catalán (CiU) (supresión).

CAPÍTULO IV

— Enmienda núm. 38 del G.P. Coalición Canaria, al título.

Artículo 6

— Enmienda núm. 40 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 599 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx).
— Enmienda núm. 661 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 997 del G.P. Catalán (CiU) (supresión).
— Enmienda núm. 1123 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 39 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 123 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 546 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 357 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a los apartados 2 y 3.

TÍTULO I

— Enmienda núm. 662 del G.P. Socialista.

CAPÍTULO I

Artículo 7

— Enmienda núm. 405 del Sr. Saura Laporta (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 998 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 124 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 600 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 663 del G.P. Socialista, al apartado 1.
— Enmienda núm. 664 del G.P. Socialista, al apartado 1 bis (nuevo).
— Enmienda núm. 124 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.

— Enmienda núm. 547 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 601 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 665 del G.P. Socialista, al apartado 2 (supresión).
— Enmienda núm. 124 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 493 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 665 del G.P. Socialista, al apartado 3 (supresión).
— Enmienda núm. 548 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 4.
— Enmienda núm. 665 del G.P. Socialista, al apartado 4 (supresión).
— Enmienda núm. 665 del G.P. Socialista, al apartado 5 (supresión).
— Enmienda núm. 665 del G.P. Socialista, al apartado 6 (supresión).
— Enmienda núm. 665 del G.P. Socialista, al apartado 7 (supresión).
— Enmienda núm. 665 del G.P. Socialista, al apartado 8 (supresión).

Artículo 8 (nuevo)

— Enmienda núm. 1124 del G.P. Popular.

Artículo 8

— Enmienda núm. 666 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 125 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 999 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 3.

CAPÍTULO II

Título

— Enmienda núm. 667 del G.P. Socialista (supresión).

Artículo 9

— Enmienda núm. 406 del Sr. Saura Laporta (GMx) (supresión).
— Enmienda núm. 668 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 126 del G.P. Izquierda Unida, (supresión).
— Enmienda núm. 602 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx) (supresión).
— Enmienda núm. 1000 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 549 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 358 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 2.
— Enmienda núm. 494 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2 (supresión).
— Enmienda núm. 550 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1125 del G.P. Popular, al apartado 2.
— Enmienda núm. 41 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 4.
— Enmienda núm. 1126 del G.P. Popular, al apartado 4.

Artículo 10

— Enmienda núm. 407 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 669 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 127 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 603 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 604 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1127 del G.P. Popular, al apartado 2.
— Enmienda núm. 4 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 2 (párrafo nuevo).
— Enmienda núm. 551 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 3 (nuevo).
— Enmienda núm. 1001 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 3 (nuevo).

Artículo 11

— Enmienda núm. 128 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 407 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 670 del G.P. Socialista, al apartado 1 (supresión).
— Enmienda núm. 671 del G.P. Socialista, al apartado 2 (supresión).
— Enmienda núm. 495 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2, e).
— Enmienda núm. 552 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2, e).
— Enmienda núm. 552 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2, f).
— Enmienda núm. 553 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 3.

Artículo 12

— Enmienda núm. 407 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 672 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 128 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1002 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 12 bis (nuevo).

— Enmienda núm. 128 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 673 del G.P. Socialista.

Artículo 12 ter (nuevo)

— Enmienda núm. 128 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 674 del G.P. Socialista.

CAPÍTULO IV

— Enmienda núm. 675 del G.P. Socialista (supresión).

Artículo 13

— Enmienda núm. 129 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 676 del G.P. Socialista (supresión).

Artículo 14

— Enmienda núm. 408 del Sr. Saura Laporta (GMx) (supresión).
— Enmienda núm. 677 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 1003 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 130 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 131 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 496 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 496 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2, b).
— Enmienda núm. 554 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2, e).
— Enmienda núm. 605 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2, e).
— Enmienda núm. 497 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2, f).
— Enmienda núm. 497 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2, g).
— Enmienda núm. 132 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, g).
— Enmienda núm. 409 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2, g).
— Enmienda núm. 42 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2, j) .
— Enmienda núm. 5 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 2, l).

Artículo 15.

— Enmienda núm. 133 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1004 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 678 del G.P. Socialista, al apartado 1 (supresión).
— Enmienda núm. 134 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 410, del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 555 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 607 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 608 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 679 del G.P. Socialista, al apartado 2 (supresión).
— Enmienda núm. 43 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 498 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 606 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2, d).
— Enmienda núm. 499 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2 (último párrafo).
— Enmienda núm. 411 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 680 del G.P. Socialista, al apartado 3 (supresión).
— Enmienda núm. 1128 del G.P. Popular, al apartado 3.
— Enmienda núm. 135 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 681 del G.P. Socialista, al apartado 4 (supresión).
— Enmienda núm. 136 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5 (nuevo).

Artículo 15 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 1005 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 16

— Enmienda núm. 1006 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 44 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 137 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 412 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 500 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 556 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 682 del G.P. Socialista, al apartado 1 (supresión).
— Enmienda núm. 138 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, bis) (nuevo).
— Enmienda núm. 139 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 683 del G.P. Socialista, al apartado 2 (supresión).
— Enmienda núm. 140 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 501 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 684 del G.P. Socialista, al apartado 3 (supresión).
— Enmienda núm. 141 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 413 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 4.
— Enmienda núm. 685 del G.P. Socialista, al apartado 4 (supresión).
— Enmienda núm. 1129 del G.P. Popular, al apartado 4.

— Enmienda núm. 142 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5 (nuevo).

Artículo 17

— Enmienda núm. 45 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 143 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 414 del Sr. Saura Laporta (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 359 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
— Enmienda núm. 557 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 686 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 1007 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 18

— Enmienda núm. 144 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 558 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 415 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 687 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 1008 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1130 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 416 del Sr. Saura Laporta (GMx), segundo párrafo (nuevo).

Artículo 18 (bis) (nuevo)

— Enmienda núm. 559 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).

CAPÍTULO V

— Enmienda núm. 688 del G.P. Socialista (supresión).

Artículo 19

— Enmienda núm. 145 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 689 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 1009 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 20

— Enmienda núm. 690 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 46 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 146 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 147 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 148 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 149 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 360 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 2.
— Enmienda núm. 417 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1010 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1131 del G.P. Popular, al apartado 2.

Artículo 21

— Enmienda núm. 691 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 1011 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 47 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 150 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 151 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 152 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, b).
— Enmienda núm. 153 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, c).
— Enmienda núm. 154 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, e).
— Enmienda núm. 560 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2, e).
— Enmienda núm. 609 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2, e).
— Enmienda núm. 418 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2, f).
— Enmienda núm. 48 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2, h).
— Enmienda núm. 155 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, i).
— Enmienda núm. 156 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, j).
— Enmienda núm. 419 del Sr. Saura Laporta (GMx), a la letra m) (nueva).

Artículo 22

— Enmienda núm. 692 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 1012 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 157 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 158 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 159 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 160 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 420 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 502 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 561 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 610 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 611 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.

— Enmienda núm. 612 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 161 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 503 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1132 del G.P. Popular, al apartado 2.
— Enmienda núm. 49 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 3.
— Enmienda núm. 163 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 421 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 162 del G.P. Izquierda Unida, a los apartados 3 y 4.
— Enmienda núm. 164 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 504 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 5 (nuevo).

Artículo 23

— Enmienda núm. 1013 del G.P. Catalán (CiU) (supresión).
— Enmienda núm. 165 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 693 del G.P. Socialista, al apartado 1 (supresión).
— Enmienda núm. 166 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 422 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 50 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 3 (nuevo).

Artículo 24

— Enmienda núm. 694 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 1014 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 6 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 167 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 505 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 168 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 423 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1133 del G.P. Popular, al apartado 2.
— Enmienda núm. 361 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3.

Artículo 25

— Enmienda núm. 169 del G.P. Izquierda Unida (supresión).
— Enmienda núm. 424 del Sr. Saura Laporta (GMx) (supresión).
— Enmienda núm. 562 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 695 del G.P. Socialista (supresión).
— Enmienda núm. 1015 del G.P. Catalán (CiU) (supresión).
— Enmienda núm. 7 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 1 (supresión).
— Enmienda núm. 51 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 170 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 506 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 8 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 2 (supresión).
— Enmienda núm. 170 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 506 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1135 del G.P. Popular, al apartado 2, párrafo 3.º
— Enmienda núm. 9 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 3 (supresión).
— Enmienda núm. 52 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 3.
— Enmienda núm. 171 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 506 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 172 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 174 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 507 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 4.
— Enmienda núm. 648 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 4.
— Enmienda núm. 1134 del G.P. Popular, al apartado 4.
— Enmienda núm. 173 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 53 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 5.
— Enmienda núm. 508 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 5.

Artículo 25 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 175 del G.P. Izquierda Unida.

Artículo 26

— Enmienda núm. 362 del G.P. Vasco (EAJ-PNV) (de supresión).
— Enmienda núm. 696 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1016 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 509 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1 (de supresión).

— Enmienda núm. 54 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 176 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 425 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 55 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 3.
— Enmienda núm. 563 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 177 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 6.
— Enmienda núm. 426 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 6.
— Enmienda núm. 613 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 6.

Artículo 27

— Enmiena núm. 697 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1017 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 178 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 427 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 510 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 564 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 179 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 510 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 510 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3 (nuevo).
— Enmienda núm. 510 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 4 (nuevo).

Artículo 28

— Enmienda núm. 180 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1018 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 698 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 181 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 428 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 698 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 511 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 56 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2 (párrafo nuevo).
— Enmienda núm. 428 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 699 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 363 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3.
— Enmienda núm. 512 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 182 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 512 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 700 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 1136 del G.P. Popular, al apartado 4 (de supresión).

Artículo 29

— Enmienda núm. 565 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 701 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 183 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 364 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
— Enmienda núm. 1019 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1137 del G.P. Popular.

Artículo 30

— Enmienda núm. 1020 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 702 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 57 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 184 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 429 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 566 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 185 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 186 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 513 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 703 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 430 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1138 del G.P. Popular, al apartado 2.
— Enmienda núm. 187 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 704 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 188 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 704 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).

Artículo 31

— Enmienda núm. 1021 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 705 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 189 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 1139 del G.P. Popular, al apartado 2.
— Enmienda núm. 58 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 3 (nuevo).
— Enmienda núm. 514 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3 (nuevo).

Capítulo V bis (nuevo)

— Enmienda núm. 706 del G.P. Socialista.

Artículo 31 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 707 del G.P. Socialista.

Artículo 31 ter (nuevo)

— Enmienda núm. 708 del G.P. Socialista.

Artículo 31 quáter (nuevo)

— Enmienda núm. 709 del G.P. Socialista.

Artículo 31 quinquies (nuevo)

— Enmienda núm. 710 del G.P. Socialista.

Artículo 31 sexies (nuevo)

— Enmienda núm. 711 del G.P. Socialista.

Artículo 31 septies (nuevo)

— Enmienda núm. 712 del G.P. Socialista.

Artículo 31 octies (nuevo)

— Enmienda núm. 713 del G.P. Socialista.

Artículo 31 nonies (nuevo)

— Enmienda núm. 714 del G.P. Socialista.

Capítulo V ter (nuevo)

— Enmienda núm. 715 del G.P. Socialista.

Artículo 31 decies (nuevo)

— Enmienda núm. 716 del G.P. Socialista.

Sección 2.ª del Capítulo V del Título I

— Enmienda núm. 717 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 32

— Enmienda núm. 718 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 719 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 720 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).

Artículo 33

— Enmienda núm. 1022 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 721 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 722 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 59 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2, a).
— Enmienda núm. 190 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, b).
— Enmienda núm. 191 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, c).
— Enmienda núm. 192 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, g).
— Enmienda núm. 614 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2, g).
— Enmienda núm. 10 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 2, l).
— Enmienda núm. 193 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, l).
— Enmienda núm. 194 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2, m).

Artículo 34

— Enmienda núm. 195 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1023 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 723 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 724 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 196 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 725 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 197 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 431 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 515 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 567 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 726 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 198 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5.

— Enmienda núm. 365 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a los apartados 4, 5, 5.f) y 5.g).
— Enmienda núm. 727 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 432 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 516 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 568 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 617 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 618 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 615 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 5.c).
— Enmienda núm. 616 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 5.e).
— Enmienda núm. 517 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 6 (de supresión).
— Enmienda núm. 728 del G.P. Socialista, al apartado 6 (de supresión).
— Enmienda núm. 1140 del G.P. Popular, al apartado 6.
— Enmienda núm. 60 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 6 (nuevo).
— Enmienda núm. 729 del G.P. Socialista, al apartado 7 (de supresión).
— Enmienda núm. 199 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 7.
— Enmienda núm. 730 del G.P. Socialista, al apartado 8 (de supresión).
— Enmienda núm. 731 del G.P. Socialista, al apartado 9 (de supresión).
— Enmienda núm. 200 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 9.

Artículo 34 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 201 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1024 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 35

— Enmienda núm. 732 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 36

— Enmienda núm. 569 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 733 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 202 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 203 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 204 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1025 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 366 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1.
— Enmienda núm. 433 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 518 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 619 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 434 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 518 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 61 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2.
— Enmienda núm. 366 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3.
— Enmienda núm. 205 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 435 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 62 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 4.
— Enmienda núm. 366 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 4.
— Enmienda núm. 206 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 435 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 1141 del G.P. Popular, al apartado 5.

Capítulo VI

— Enmienda núm. 734 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 37 -pre- (nuevo)

— Enmienda núm. 207 del G.P. Izquierda Unida.

Artículo 37

— Enmienda núm. 1026 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 208 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 735 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 208 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 736 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1027 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2.
— Enmienda núm. 737 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 209 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.a).
— Enmienda núm. 210 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.c) (de supresión).
— Enmienda núm. 436 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.c) (de supresión).

— Enmienda núm. 367 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3.c).
— Enmienda núm. 211 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 738 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 63 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 4.
— Enmienda núm. 212 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 519 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 5(de supresión).
— Enmienda núm. 738 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 437 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 6 (nuevo).

Artículo 37.1 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 520 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx).

Artículo 38 -pre- (nuevo)

— Enmienda núm. 213 del G.P. Izquierda Unida.

Artículo 38

— Enmienda núm. 214 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 438 del Sr. Saura Laporta (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 739 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1028 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 1142 del G.P. Popular.

Capítulo VII del Título I

— Enmienda núm. 215 del G.P. Izquierda Unida.

Capítulo VII

Sección 1.ª

— Enmienda núm. 216 del G.P. Izquierda Unida, al título.
— Enmienda núm. 740 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1145 del G.P. Popular.

Sección 1.ª (nueva)

— Enmienda núm. 1144 del G.P. Popular.

Artículo 39

— Enmienda núm. 741 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1029 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 368 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
— Enmienda núm. 1144 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 217 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 620 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 218 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 570 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 11 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 219 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 439 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 521 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 570 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 220 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 440 del Sr. Saura Laporta (GMx), apartado 4.
— Enmienda núm. 621 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 64 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 6 (de supresión).
— Enmienda núm. 1143 del G.P. Popular, al apartado 6 (de supresión).
— Enmienda núm. 221 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 6.
— Enmienda núm. 622 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 6.

Sección 2.ª

— Enmienda núm. 742 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1145 del G.P. Popular.

Artículo 40

— Enmienda núm. 1030 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1144 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 743 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 744 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 222 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 223 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 745 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 1146 del G.P. Popular, al apartado 3.

— Enmienda núm. 223 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 369 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 4.
— Enmienda núm. 746 del G.P. Socialista, al apartado 4.
— Enmienda núm. 747 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).

Sección 3.ª, Capítulo VII, Título I

— Enmienda núm. 748 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1145 del G.P. Popular.

Artículo 41

— Enmienda núm. 1031 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 749 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 224 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 370 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1.
— Enmienda núm. 441 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 1147 del G.P. Popular, al apartado 1.
— Enmienda núm. 750 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1032 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 3 (nuevo).

Artículo 42

— Enmienda núm. 751 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 1033 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 225 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 371 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1.
— Enmienda núm. 442 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 522 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 751 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 12 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 13 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 752 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).

Artículo 43

— Enmienda núm. 753 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 1034 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 226 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 372 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1.
— Enmienda núm. 754 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).

Artículo 44

— Enmienda núm. 755 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 1035 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 14 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 1 (párrafo nuevo).
— Enmienda núm. 227 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 649 del Sr. Puigcercós i Boixassa, al apartado 1.
— Enmienda núm. 65 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 756 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1148 del G.P. Popular, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 373 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 2.
— Enmienda núm. 571 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 757 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 1036 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 4 (nuevo).

Artículo 45

— Enmienda núm. 758 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1037 del G.P. Catalán (CiU).

Título I bis (nuevo)

— Enmienda núm. 759 del G.P. Socialista.

Capítulo VII bis (nuevo)

— Enmienda núm. 760 del G.P. Socialista.

Artículo 45 bis (nuevo).

— Enmienda núm. 761 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1038 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 45 ter (nuevo)

— Enmienda núm. 762 del G.P. Socialista.

Capítulo VII ter (nuevo)

— Enmienda núm. 763 del G.P. Socialista.

Artículo 45 quater (nuevo)

— Enmienda núm. 764 del G.P. Socialista.

Artículo 45 quinquies (nuevo)

— Enmienda núm. 765 del G.P. Socialista.

Artículo 45 sexies (nuevo).

— Enmienda núm. 766 del G.P. Socialista.

Artículo 45 septies (nuevo)

— Enmienda núm. 767 del G.P. Socialista.

Artículo 45 octies (nuevo)

— Enmienda núm. 768 del G.P. Socialista.

Artículo 45 nonies (nuevo)

— Enmienda núm. 769 del G.P. Socialista.

Artículo 45 decies (nuevo)

— Enmienda núm. 770 del G.P. Socialista.

Título II

— Enmienda núm. 771 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 46

— Enmienda núm. 1039 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 772 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 773 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1149 del G.P. Popular, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 774 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 775 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 228 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 776 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).

Artículo 47

— Enmienda núm. 777 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 374 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1.
— Enmienda núm. 778 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1040 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1150 del G.P. Popular, al apartado 2.
— Enmienda núm. 779 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 1040 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 1150 del G.P. Popular, al apartado 3.
— Enmienda núm. 780 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 1040 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 1150 del G.P. Popular, al apartado 4.

Artículo 48

— Enmienda núm. 781 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1041 del G.P. Catalán (CiU).

Título III

— Enmienda núm. 782 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 49

— Enmienda núm. 1042 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 783 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 443 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 784 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 785 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 229 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 444 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 786 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 787 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 230 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5.
— Enmienda núm. 445 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 788 del G.P. Socialista, al apartado 6 (de supresión).
— Enmienda núm. 446 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 6.
— Enmienda núm. 623 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 6.
— Enmienda núm. 375 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 7.
— Enmienda núm. 624 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 7.

Artículo 50

— Enmienda núm. 1043 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 789 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 1151 del G.P. Popular, al apartado 1.
— Enmienda núm. 790 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 447 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 791 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 448 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.

Artículo 51

— Enmienda núm. 1044 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 792 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 793 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 66 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2.
— Enmienda núm. 794 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 231 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 376 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 795 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 449 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 4.
— Enmienda núm. 796 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 450 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 797 del G.P. Socialista, al apartado 6 (de supresión).
— Enmienda núm. 232 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 6.
— Enmienda núm. 451 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 6.

Artículo 52

— Enmienda núm. 798 del G.P. Socialista (de supresión).

Título IV

— Enmienda núm. 799 del G.P. Socialista, a la rúbrica.

Artículo 53

— Enmienda núm. 1045 del G.P. Catalán (CiU), párrafo 1.º
— Enmienda núm. 67 del G.P. Coalición Canaria, a la letra b) (nueva).
— Enmienda núm. 801 del G.P. Socialista, a la letra b).
— Enmienda núm. 233 del G.P. Izquierda Unida, a la letra c).
— Enmienda núm. 802 del G.P. Socialista, a la letra c).
— Enmienda núm. 803 del G.P. Socialista, a la letra d).
— Enmienda núm. 68 del G.P. Coalición Canaria, a la letra e).
— Enmienda núm. 804 del G.P. Socialista, a la letra e).
— Enmienda núm. 1045 del G.P. Catalán (CiU), a la letra e).
— Enmienda núm. 805 del G.P. Socialista, a la letra f).
— Enmienda núm. 233 del G.P. Izquierda Unida, a la letra g).
— Enmienda núm. 806 del G.P. Socialista, a la letra g).
— Enmienda núm. 1045 del G.P. Catalán (CiU), a la letra g).

Capítulo I

— Enmienda núm. 800 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 807 del G.P. Socialista.

Artículo 54

— Enmienda núm. 808 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 234 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 1046 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 1.
— Enmienda núm. 235 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.

Artículo 55

— Enmienda núm. 809 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1047 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 236 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1 (nuevo).
— Enmienda núm. 66 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2.
— Enmienda núm. 523 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 452 y 453 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 237 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 238 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 6.

Artículo 56

— Enmienda núm. 69 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 572 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).

— Enmienda núm. 810 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1048 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1152 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 524 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 377 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a los apartados 1, 3 y 4, c).

Artículo 56 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 811 del G.P. Socialista.

Artículo 56 ter (nuevo)

— Enmienda núm. 812 del G.P. Socialista.

Capítulo II, Título IV

— Enmienda núm. 813 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 57

— Enmienda núm. 814 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 815 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1049 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 454 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 816 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 239 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 455 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.

Artículo 58

— Enmienda núm. 573 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 817 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 240 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1050 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 378 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 2.

Artículo 58 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 818 del G.P. Socialista.

Artículo 58 ter (nuevo)

— Enmienda núm. 819 del G.P. Socialista.

Artículo 58 quater (nuevo)

— Enmienda núm. 820 del G.P. Socialista.

Artículo 58 quinquies (nuevo).

— Enmienda núm. 821 del G.P. Socialista.

Artículo 58 sexies (nuevo)

— Enmienda núm. 822 del G.P. Socialista.

Artículo 58 septies (nuevo)

— Enmienda núm. 823 del G.P. Socialista.

Artículo 58 octies (nuevo)

— Enmienda núm. 824 del G.P. Socialista.

Artículo 59

— Enmienda núm. 1051 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 241 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 242 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, a).
— Enmienda núm. 825 del G.P. Socialista, al apartado 1, a).
— Enmienda núm. 243 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, b).
— Enmienda núm. 826 del G.P. Socialista, al apartado 1, b).
— Enmienda núm. 244 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, c).
— Enmienda núm. 827 del G.P. Socialista, al apartado 1, c).
— Enmienda núm. 245 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, d).
— Enmienda núm. 828 del G.P. Socialista, al apartado 1, d).
— Enmienda núm. 246 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, e).
— Enmienda núm. 829 del G.P. Socialista, al apartado 1, e).
— Enmienda núm. 247 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, f) (nueva).
— Enmienda núm. 248 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, g) (nueva).
— Enmienda núm. 830 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 70 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2.
— Enmienda núm. 1153 del G.P. Popular, al apartado 2.

Título IV bis (nuevo)

— Enmienda núm. 831 del G.P. Socialista.

Artículo 59 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 832 del G.P. Socialista.

Artículo 59 ter (nuevo)

— Enmienda núm. 833 del G.P. Socialista.

Artículo 59 quater (nuevo)

— Enmienda núm. 834 del G.P. Socialista.

Artículo 59 quinquies (nuevo)

— Enmienda núm. 835 del G.P. Socialista.

Título V

— Enmienda núm. 836 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1154 del G.P. Popular.

Capítulo I

— Enmienda núm. 837 del G.P. Socialista, a la rúbrica.

Sección 1.ª

— Enmienda núm. 838 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 60

— Sin enmiendas.

Artículo 61

— Enmienda núm. 839 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 840 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 841 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 249 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 1052 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 3.

Artículo 62

— Enmienda núm. 842 del G.P. Socialista, a la rúbrica (de supresión).
— Enmienda núm. 843 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 844 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).

Artículo 63

— Enmienda núm. 845 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 64

— Enmienda núm. 846 del G.P. Socialista (de supresión).

Artículo 65

— Enmienda núm. 456 del Sr. Saura Laporta (GMx), (de supresión).
— Enmienda núm. 847 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 250 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 251 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1 bis (nuevo).
— Enmienda núm. 848 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 252 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.

Artículo 66

— Enmienda núm. 71 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 1053 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 849 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 457 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 625 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 850 del G.P. Socialista, al apartado 1 bis (nuevo).
— Enmienda núm. 253 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 379 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 2.
— Enmienda núm. 574 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 626 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 851 del G.P. Socialista, al apartado 2.
— Enmienda núm. 1054 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2.
— Enmienda núm. 254 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 852 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 853 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 255 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 627 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 4.
— Enmienda núm. 256 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5.
— Enmienda núm. 379 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 5.
— Enmienda núm. 458 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5.

— Enmienda núm. 854 del G.P. Socialista, al apartado 5.
— Enmienda núm. 1055 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 5.
— Enmienda núm. 855 del G.P. Socialista, al apartado 6 (de supresión).

Sección 2.ª del Capítulo I del Título V

— Enmienda núm. 1056 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 67

— Enmienda núm. 257 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 628 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 856 del G.P. Socialista, al apartado 1.
— Enmienda núm. 575 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 857 del G.P. Socialista, al apartado 2.
— Enmienda núm. 858 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 258 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 459 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 1155 del G.P. Popular, al apartado 3.
— Enmienda núm. 859 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 860 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 257 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5.
— Enmienda núm. 460 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 629 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 5.
— Enmienda núm. 72 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 5, segundo párrafo (nuevo).
— Enmienda núm. 259 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 6 (nuevo).

Artículo 68

— Enmienda núm. 260 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 461 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 861 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 15 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 1 (párrafo nuevo).
— Enmienda núm. 1057 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 1.
— Enmienda núm. 862 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1057 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2.
— Enmienda núm. 630 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 863 del G.P. Socialista, al apartado 3, a) (de supresión).
— Enmienda núm. 864 del G.P. Socialista, al apartado 3, b) (de supresión).
— Enmienda núm. 865 del G.P. Socialista, al apartado 3, c) (de supresión).
— Enmienda núm. 866 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 867 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 868 del G.P. Socialista, al apartado 6 (de supresión).
— Enmienda núm. 869 del G.P. Socialista, al apartado 7 (de supresión).

Artículo 68 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 870 del G.P. Socialista.

Artículo 69

— Enmienda núm. 871 del G.P. Socialista, al apartado 1.
— Enmienda núm. 1058 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 1.
— Enmienda núm. 872 del G.P. Socialista, al apartado 2.
— Enmienda núm. 1156 del G.P. Popular, a los apartados 3 y 4 (nuevos).

Artículo 70

— Enmienda núm. 873 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1059 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 261 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 262 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 263 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 264 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 463 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 525 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 6.
— Enmienda núm. 265 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 7.
— Enmienda núm. 526 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 7.
— Enmienda núm. 73 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 8.
— Enmienda núm. 265 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 8.
— Enmienda núm. 576 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 8.
— Enmienda núm. 527 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 9 (nuevo).

Artículo 71

— Enmienda núm. 874 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 266 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 577 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 74 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2.

Artículo 72

— Enmienda núm. 875 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1060 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 631 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 578 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 4 (de supresión).

Artículo 72 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 876 del G.P. Socialista.

Artículo 73

— Enmienda núm. 267 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 462 del Sr. Saura Laporta (GMx), (de supresión).
— Enmienda núm. 877 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1157 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 268 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, párrafo 2.º.
— Enmienda núm. 269 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 270 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 271 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 272 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5.
— Enmienda núm. 1061 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 6 (de supresión).
— Enmienda núm. 273 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 6.

Sección 4.ª, Capítulo I, Título.

— Enmienda núm. 878 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 274 del G.P. Izquierda Unida, al título.

Artículo 74

— Enmienda núm. 879 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 464 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 275 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 528 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), a los apartados 2 y 3.

Artículo 75

— Enmienda núm. 880 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 464 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 276 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 380 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1.
— Enmienda núm. 529 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 579 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 650 del Sr. Puigcercós i Boixassa, al apartado 1.
— Enmienda núm. 277 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 529 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 278 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 1062 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 4.
— Enmienda núm. 1062 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 5 (de supresión).
— Enmienda núm. 279 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 6 (nuevo).

Artículo 76

— Enmienda núm. 1062 bis del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 280 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 881 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 381 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1.
— Enmienda núm. 647 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 281 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.
— Enmienda núm. 530 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2, h) (nueva).
— Enmienda núm. 282 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3 (nuevo).
— Enmienda núm. 283 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 465 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5.

Artículo 77

— Enmienda núm. 882 del G.P. Socialista (de supresión).

— Enmienda núm. 1063 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 284 del G.P. Izquierda Unida, al título.
— Enmienda núm. 285 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 466 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 531 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1, a).
— Enmienda núm. 635 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, a) .
— Enmienda núm. 531 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1, b).
— Enmienda núm. 382 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1, c).
— Enmienda núm. 636 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, c) .
— Enmienda núm. 639 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, c) .
— Enmienda núm. 382 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1, e).
— Enmienda núm. 637 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, e) .
— Enmienda núm. 638 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, h) .
— Enmienda núm. 75 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1, j).
— Enmienda núm. 531 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1, j).
— Enmienda núm. 632 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, m) (nueva).
— Enmienda núm. 633 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, n) (nueva).
— Enmienda núm. 634 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1, o) (nueva).

Artículo 78

— Enmienda núm. 883 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 580 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 286 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 1064 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 1.

Artículo 79

— Enmienda núm. 884 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 287 del G.P. Izquierda Unida, al título.
— Enmienda núm. 581 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), a la letra a).
— Enmienda núm. 288 del G.P. Izquierda Unida, a la letra b).
— Enmienda núm. 1065 del G.P. Catalán (CiU), a la letra b).
— Enmienda núm. 289 del G.P. Izquierda Unida, a la letra e).
— Enmienda núm. 1065 del G.P. Catalán (CiU), a la letra e).
— Enmienda núm. 290 del G.P. Izquierda Unida, a la letra i).
— Enmienda núm. 467 del Sr. Saura Laporta (GMx), a la letra i).
— Enmienda núm. 582 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), a la letra i).
— Enmienda núm. 1065 del G.P. Catalán (CiU), a la letra k).

Artículo 80

— Enmienda núm. 885 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1066 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 76 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 291 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 292 del G.P. Izquierda Unida, a los apartados 2, 3 y 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 1158 del G.P. Popular.

Sección 5.ª, Capítulo I, Título.

— Enmienda núm. 886 del G.P. Socialista (a la rúbrica).

Artículo 81

— Enmienda núm. 293 del G.P. Izquierda Unida, al título.
— Enmienda núm. 294 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 887 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 383 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra h).

Artículo 82

— Enmienda núm. 888 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1067 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 77 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 78 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 295 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 296 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2.

Artículo 83

— Enmienda núm. 889 del G.P. Socialista.

Artículo 84

— Enmienda núm. 297 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 583 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 890 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1068 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 16 del Sr. Labordeta Subías (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 79 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 640 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), al apartado 1.

Artículo 85

— Enmienda núm. 641 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx) (supresión) .
— Enmienda núm. 891 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 298 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1069 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 384 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra d) (nueva).

Artículo 86.

— Enmiena núm. 17 del Sr. Labordeta Subías (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 80 del G.P. Coalición Canaria (de supresión).
— Enmienda núm. 642 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx) (de supresión) .
— Enmienda núm. 892 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1070 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 299 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 468 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 1159 del G.P. Popular.

Artículo 87

— Enmienda núm. 893 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 300 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 469 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 1071 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1160 del G.P. Popular, al apartado 1.
— Enmienda núm. 532 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 3.

Artículo 88

— Enmienda núm. 894 del G.P. Socialista (a la rúbrica).
— Enmienda núm. 1072 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 301 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 584 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 895 del G.P. Socialista.

Artículo 89

— Enmienda núm. 643 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx) (de supresión) .
— Enmienda núm. 896 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1073 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 81 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 302 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 470 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 82 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1, b).

Artículo 90

— Enmienda núm. 897 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 304 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1074 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 303 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 471 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 385 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 2.
— Enmienda núm. 472 del Sr. Saura Laporta (GMx), a los apartados 5, 6 y 7 (nuevos)..

Artículo 91

— Enmienda núm. 898 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1075 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 1.
— Enmienda núm. 83 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1, d).
— Enmienda núm. 305 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1, d).
— Enmienda núm. 306 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 84 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2.

Artículo 92

— Enmienda núm. 1076 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2.
— Enmienda núm. 307 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 899 del G.P. Socialista.

Artículo 92 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 900 del G.P. Socialista.

Artículo 92 ter (nuevo)

— Enmienda núm. 901 del G.P. Socialista.

Título V bis (nuevo)

— Enmienda núm. 902 del G.P. Socialista.

Artículo 92 quater (nuevo)

— Enmienda núm. 903 del G.P. Socialista.

Artículo 92 quinquies (nuevo)

— Enmienda núm. 904 del G.P. Socialista.

Artículo 92 sexies (nuevo)

— Enmienda núm. 905 del G.P. Socialista.

Artículo 92 septies (nuevo)

— Enmienda núm. 906 del G.P. Socialista.

Artículo 92 octies (nuevo)

— Enmienda núm. 907 del G.P. Socialista.

Artículo 92 nonies (nuevo)

— Enmienda núm. 908 del G.P. Socialista.

Título VI

— Enmienda núm. 644 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx) (de supresión).

Artículo 93

— Enmienda núm. 881 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 308 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 473 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 909 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1077 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 93 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 910 del G.P. Socialista.

Artículo 93 ter (nuevo)

— Enmienda núm. 911 del G.P. Socialista.

Artículo 93 quater (nuevo)

— Enmienda núm. 912 del G.P. Socialista.

Artículo 94

— Enmienda núm. 585 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 913 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1078 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 1.
— Enmienda núm. 85 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2.

Artículo 94 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 914 del G.P. Socialista.

Artículo 95

— Enmienda núm. 586 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 915 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 386 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
— Enmienda núm. 1079 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 96

— Enmienda núm. 86 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 916 del G.P. Socialista, al apartado 1.
— Enmienda núm. 1080 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 917 del G.P. Socialista, al apartado 2.
— Enmienda núm. 387 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3.

Artículo 97

— Enmienda núm. 587 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 918 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1081 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 98

— Enmienda núm. 588 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 919 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 309 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 474 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 1082 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 99

— Enmienda núm. 1083 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 920 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 921 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 922 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).

— Enmienda núm. 310 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 475 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 923 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).

Título VII

— Enmienda núm. 645 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx) (de supresión).

Artículo 100

— Enmienda núm. 924 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 388 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 2.
— Enmienda núm. 1084 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2.

Artículo 101

— Enmienda núm. 311 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 389 y 390 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
— Enmienda núm. 1085 del G.P. Catalán (CiU).

Artículo 102

— Enmienda núm. 589 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx), a las letras a), f), g) e i) (de supresión).
— Enmienda núm. 391 y 392 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra a).
— Enmienda núm. 312 del G.P. Izquierda Unida, a la letra a).
— Enmienda núm. 1161 del G.P. Popular, a la letra a).
— Enmienda núm. 312 del G.P. Izquierda Unida, a la letra b).
— Enmienda núm. 1162 del G.P. Popular, a la letra b).
— Enmienda núm. 312 del G.P. Izquierda Unida, a la letra c).
— Enmienda núm. 1086 del G.P. Catalán (CiU), a la letra e).
— Enmienda núm. 312 del G.P. Izquierda Unida, a la letra f).
— Enmienda núm. 646 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx), a la letra f).
— Enmienda núm. 87 del G.P. Coalición Canaria, a la letra g).
— Enmienda núm. 1086 del G.P. Catalán (CiU), a la letra i).

Artículo 103

— Enmienda núm. 925 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 313 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 314 del G.P. Izquierda Unida, a la letra b).
— Enmienda núm. 88 del G.P. Coalición Canaria, a la letra g) (nueva).
— Enmienda núm. 393 y 394 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), a la letra g) (nueva).
— Enmienda núm. 89 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 2 (nuevo).

Artículo 104

— Enmienda núm. 926 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 90 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 315 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1087 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1163 del G.P. Popular.

Artículo 105

— Enmienda núm. 1088 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 927 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 928 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 395 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3.

Título VII bis (nuevo)

— Enmienda núm. 929 del G.P. Socialista.

Artículo 105 bis (nuevo)

— Enmienda núm. 930 del G.P. Socialista.

Artículo 105 ter (nuevo).

— Enmienda núm. 931 del G.P. Socialista.

Artículo 105 quater (nuevo)

— Enmienda núm. 932 del G.P. Socialista.

Artículo 105 quinquies (nuevo)

— Enmienda núm. 933 del G.P. Socialista.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

— Enmienda núm. 934 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1089 del G.P. Catalán (CiU).

Primera bis (nueva)

— Enmienda núm. 935 del G.P. Socialista.

Primera ter (nueva)

— Enmienda núm. 936 del G.P. Socialista.

Segunda

— Enmienda núm. 316 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 476 del Sr. Saura Laporta (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 937 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 533 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx).
— Enmienda núm. 590 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 651 del Sr. Puigcercós i Boixassa (GMx).
— Enmienda núm. 1090 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 3.
— Enmienda núm. 1164 del G.P. Popular, al apartado 3.
— Enmienda núm. 91 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 4.

Segunda bis (nueva)

— Enmienda núm. 938 del G.P. Socialista.

Segunda ter (nueva)

— Enmienda núm. 939 del G.P. Socialista.

Tercera

— Enmienda núm. 591 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 940 del G.P. Socialista.
— Enmienda núm. 1091 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 534 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 1.
— Enmienda núm. 1165 del G.P. Popular, al apartado 3.
— Enmienda núm. 317 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5 (nuevo).

Tercera bis (nueva)

— Enmienda núm. 941 del G.P. Socialista.

Cuarta

— Enmienda núm. 942 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 592 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 92 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1.
— Enmienda núm. 1092 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 1.
— Enmienda núm. 477 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 5 (nuevo).
— Enmienda núm. 535 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx), al apartado 2.

Quinta

— Enmienda núm. 93 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 943 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 944 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1093 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 2.
— Enmienda núm. 945 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 1093 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 3.
— Enmienda núm. 946 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).

Quinta bis (nueva)

— Enmienda núm. 947 del G.P. Socialista.

Quinta ter (nueva)

— Enmienda núm. 948 del G.P. Socialista.

Quinta quater (nueva)

— Enmienda núm. 949 del G.P. Socialista.

Quinta quinquies (nueva)

— Enmienda núm. 950 del G.P. Socialista.

Quinta sexies (nueva)

— Enmienda núm. 951 del G.P. Socialista.

Sexta

— Enmienda núm. 318 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 952 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 478 del Sr. Saura Laporta (GMx).

Séptima

— Enmienda núm. 319 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 953 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1094 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).

Octava

— Enmienda núm. 1095 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1166 del G.P. Popular .

— Enmienda núm. 954 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 320 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 955 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 956 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 652 del Sr. Núñez Castain (GMx), al apartado 3.
— Enmienda núm. 957 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 320 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 4.
— Enmienda núm. 958 del G.P. Socialista, al apartado 5 (de supresión).

Octava bis (nueva)

— Enmienda núm. 1096 del G.P. Catalán (CiU).

Novena

— Enmienda núm. 321 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 479 del Sr. Saura Laporta (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 959 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1097 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 1166 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 653 del Sr. Núñez Castain (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 396 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 5.

Décima

— Enmienda núm. 322 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 960 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1098 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 1166 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 397 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 1, párrafo 2.º.
— Enmienda núm. 480 del Sr. Saura Laporta (GMx).

Undécima

— Enmienda núm. 323 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 481 del Sr. Saura Laporta (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 961 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1099 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 1166 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 94 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 4.

Duodécima

— Enmienda núm. 962 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1166 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 1100 del G.P. Catalán (CiU), a los apartados 2 y 3.

Decimotercera

— Enmienda núm. 398 del G.P. Vasco (EAJ-PNV) (de supresión).
— Enmienda núm. 963 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1101 del G.P. Catalán (CiU).

Decimocuarta

— Enmienda núm. 964 del G.P. Socialista (de supresión).

Decimoquinta (nueva)

— Enmienda núm. 95 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 324 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 482 del Sr. Saura Laporta (GMx).
— Enmienda núm. 593 del Sr. Rodríguez Sánchez (GMx).
— Enmienda núm. 1167 del G.P. Popular.

Decimosexta (nueva)

— Enmienda núm. 96 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 325 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1168 del G.P. Popular.

Decimoséptima (nueva)

— Enmienda núm. 326 del G.P. Izquierda Unida.

(Nuevas)

— Enmienda núm. 327 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 328 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 329 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 330 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 331 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 332 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 333 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 334 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1102 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1103 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1104 del G.P. Catalán (CiU).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

— Enmienda núm. 965 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 335 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 399 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3.

Segunda

— Enmienda núm. 966 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 336 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 400 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
— Enmienda núm. 1105 del G.P. Catalán (CiU).

Tercera

— Enmienda núm. 337 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 967 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 483 del Sr. Saura Laporta (GMx) (de supresión).
— Enmienda núm. 97 del G.P. Coalición Canaria.
— Enmienda núm. 1106 del G.P. Catalán (CiU).

Cuarta

— Enmienda núm. 338 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 968 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1107 del G.P. Catalán (CiU), al apartado 3.
— Enmienda núm. 484 del Sr. Saura Laporta (GMx), a los apartados 4 y 5 (nuevos).

Quinta

— Enmienda núm. 339 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 969 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1108 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).

Sexta

— Enmienda núm. 970 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1109 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).

Séptima

— Enmienda núm. 971 del G.P. Socialista (de supresión).

Octava

— Enmienda núm. 972 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1110 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 340 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.
— Enmienda núm. 401 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 2 párrafo penúltimo.
— Enmienda núm. 341 del G.P. Izquierda Unida, a los apartados 2, 3 y 4 (de supresión).

Octava bis (nueva)

— Enmienda núm. 973 del G.P. Socialista.

(Nuevas)

— Enmienda núm. 342 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 343 del G.P. Izquierda Unida.
— Enmienda núm. 1111 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1112 del G.P. Catalán (CiU).

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Única

— Enmienda núm. 974 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1166 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 1169 del G.P. Popular.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

— Enmienda núm. 975 del G.P. Socialista, al apartado 1.
— Enmienda núm. 1170 del G.P. Popular, al apartado 1 (nuevo).
— Enmienda núm. 976 del G.P. Socialista, al apartado 2.
— Enmienda núm. 344 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 2 .
— Enmienda núm. 485 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2.
— Enmienda núm. 486 del Sr. Saura Laporta (GMx), al apartado 2 bis (nuevo).
— Enmienda núm. 1171 del G.P. Popular, al apartado 2 (nuevo).
— Enmienda núm. 977 del G.P. Socialista, al apartado 4 (de supresión).
— Enmienda núm. 345 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 5 (nuevo).

— Enmienda núm. 1172 del G.P. Popular, al apartado 7 (nuevo).
— Enmienda núm. 1173 del G.P. Popular, al apartado 8 (nuevo).

Segunda

— Enmienda núm. 978 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1166 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 1113 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 1174 del G.P. Popular, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 346 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1.7.
— Enmienda núm. 347 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3.
— Enmienda núm. 402 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al apartado 3.

Tercera

— Enmienda núm. 979 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 348 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 1114 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).
— Enmienda núm. 1175 del G.P. Popular, al apartado 2 (nuevo).

Cuarta

— Enmienda núm. 1166 del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 349 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 980 del G.P. Socialista, al apartado 1 (de supresión).
— Enmienda núm. 98 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 1 (nuevo).
— Enmienda núm. 981 del G.P. Socialista, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 1176 del G.P. Popular, al apartado 2 (de supresión).
— Enmienda núm. 349 del G.P. Izquierda Unida, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 982 del G.P. Socialista, al apartado 3 (de supresión).
— Enmienda núm. 1115 del G.P. Catalán (CiU).
— Enmienda núm. 99 del G.P. Coalición Canaria, al apartado 3, punto 2, a).
— Enmienda núm. 1176 del G.P. Popular, al apartado 4 (de supresión).

Quinta

— Enmienda núm. 983 del G.P. Socialista (de supresión).

Sexta

— Enmienda núm. 984 del G.P. Socialista (de supresión).

Séptima

— Enmienda núm. 350 del G.P. Izquierda Unida (de supresión).
— Enmienda núm. 985 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1116 del G.P. Catalán (CiU) (de supresión).

Octava

— Enmienda núm. 1117 del G.P. Catalán (CiU).

Novena

— Enmienda núm. 1118 del G.P. Catalán (CiU).

Novena (nueva)

— Enmienda núm. 1120 del G.P. Catalán (CiU).

Décima

— Enmienda núm. 986 del G.P. Socialista (de supresión).
— Enmienda núm. 1119 del G.P. Catalán (CiU).

Undécima

— Enmienda núm. 987 del G.P. Socialista.

Edita: **Congreso de los Diputados**
Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. *http://www.congreso.es*

Imprime y distribuye: **Imprenta Nacional BOE**
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid
Teléf.: 91 384 15 00. Fax: 91 384 18 24

Depósito legal: **M. 12.580 - 1961**